

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**



**TESIS DOCTORAL**

**La política del libro durante el primer franquismo**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Ana María Rodrigo Echalecu**

Director

**Jesús Antonio Martínez Martín**

**Madrid, 2016**



## ***La política del libro durante el primer franquismo***

Autora: ANA MARÍA RODRIGO ECHALECU

Director: JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍN

**FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**



## AGRADECIMIENTOS

A Don Enrique Molina Merchán, mi profesor de Historia cuando cursé 3º de BUP, quién despertó en mí el interés por la Historia e indirectamente a frecuentar las Bibliotecas Públicas donde comenzó a nacer mi vocación de bibliotecaria.

Igualmente quisiera agradecer a mi director de tesis, Jesús A. Martínez, su confianza en mí, pese a mis muchas limitaciones, a Ana Martínez Rus por sugerirme el tema de la misma, y a Marta Torres por ponerme en conocimiento del archivo de Javier Lasso de la Vega de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

Y, por último, a nivel humano, a Javier por su paciencia, a mis compañeros de la Biblioteca Regional por su comprensión, a mis amigos, bibliotecarios y no bibliotecarios, por su interés, y a mi extensa familia por los ánimos recibidos.



**ÍNDICES:**

**Siglas.....pág. 4**

**Tablas.....pág. 5**

**Mapas.....pág. 5**

**Ilustraciones.....pág. 5**

**RESUMEN /ABSTRACT.....pág. 6**

**ÍNDICE CAPÍTULOS.....pág. 8**

**CONCLUSIONES.....pág. 354**

**BIBLIOGRAFÍA.....pág. 358**

**ANEXOS.....pág. 369**

## Siglas

<b>ABBE</b>	Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España
<b>ACD</b>	Archivo Congreso de los Diputados
<b>ACE</b>	Acción Católica de España
<b>ACM</b>	Acción Católica de Mujeres
<b>AGA</b>	Archivo General de la Administración
<b>ANABA</b>	Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
<b>AVM</b>	Archivo de la Villa de Madrid
<b>BUC</b>	Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid
<b>CECEL</b>	Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro
<b>CIPLE</b>	Comisión Interministerial para la Protección del Libro Español
<b>DGAB</b>	Dirección General de Archivos y Bibliotecas
<b>DGPP</b>	Delegación Nacional de Prensa y Propaganda
<b>DGRC</b>	Dirección General de Relaciones Culturales
<b>DNP</b>	Delegación Nacional de Propaganda
<b>ILE</b>	Instituto del Libro Español
<b>INLE</b>	Instituto Nacional del Libro Español
<b>JIAL</b>	Junta de Intercambio y Adquisición de Libros
<b>JRC</b>	Junta de Relaciones Culturales
<b>LPI</b>	Ley de Propiedad Intelectual
<b>MEN</b>	Ministerio de Educación Nacional
<b>OO.JJ.</b>	Organizaciones Juveniles de Falange
<b>ORCE</b>	Oficina de Relaciones Culturales Españolas
<b>SEP</b>	Secretaría de Educación Popular
<b>SF</b>	Sección Femenina
<b>SNL</b>	Servicio Nacional de Lectura
<b>SNP</b>	Servicio Nacional de Propaganda
<b>SRC</b>	Sección de Relaciones Culturales
<b>VEP</b>	Vicesecretaría de Educación Popular

## Tablas y gráficos

- Gráfico 1 Bibliotecas OO.JJ. Barcelona.....p. 63
- Gráfico 2 Bibliotecas del FJ según el INE.....p. 64
- Gráfico 3.Organigrama Proyecto Consejo Nacional de Libro de Javier Lasso. .... p. 140
- Gráfico 4. Presupuesto del INLE.....p. 147
- Gráfico 5. Estadísticas de las Ferias del Libro (1944-1951).....p. 187
- Gráfico 6 Listado exposiciones del libro.....p. 189
- Gráfico 7. Porcentajes de materias de los lotes de libros de la JIAL.....p. 205
- Gráfico 8. Títulos de revistas .....p. 208
- Gráfico 9. Gasto en lotes de libros.....p. 209
- Gráfico 10. Entidades beneficiadas en la asignación de lotes.....p. 209
- Gráfico 11. Presupuestos de la JIAL.....p. 211
- Gráfico 12. Presupuestos Centros Coordinadores de Bibliotecas.....p. 224
- Gráfico 13.Tabla bibliotecas creadas por la JIAL.....p. 266
- Gráfico 14.Gráfico con las bibliotecas creadas por la JIAL.....p. 266
- Gráfico 15. Número de Bibliotecas por provincias.....p. 267
- Gráfico 16.Organigrama del Servicio Nacional de Lectura del Marino.....p. 279

## Mapas:

- Mapa de 1950 con fondos existentes en las Bibliotecas Provinciales.....p. 240
- Mapa con las bibliotecas creadas por la II República.....p. 262
- Mapa con el total de bibliotecas que existían en 1951.....p. 267
- Mapa bibliotecario del SNL de 1950.....p. 268
- Mapa con las bibliotecas creadas por la II República y su situación en 1951..... p. 270
- Mapa con todas las bibliotecas públicas existentes en 1951.....p. 270
- Mapa bibliotecario de Cataluña y Baleares.....p. 271
- Mapa temático: Número de bibliotecas por cada 100.00 habitantes en 1951.....p. 271
- Mapa % alfabetizados que utilizaban la biblioteca en 1951.....p. 272
- Mapa con los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas en 1951..... p. 272

## Ilustraciones:

- Cartel Curso de Biblioteconomía para Flechas.....p. 68
- Revistas de la SF.....p. 74
- Anuncios de crédito y venta a plazos de libros.....p. 184
- Carteles de la Feria del Libro.....p. 186
- Armario-Biblioteca del Servicio de Lecturas para el Marino.....p. 276
- Fotografía con marineros leyendo.....p. 278
- Fotografías de varias bibliotecas.....p. 314-315
- Folletos de préstamo de la Biblioteca de Cabra.....p. 326-327

## RESUMEN

Tras hacer un breve recorrido histórico por la política del libro en España desde comienzos del siglo XX hasta la llegada del franquismo, en esta investigación, se expone el concepto de libro y de política del libro que tuvo el Régimen, entre 1939 y 1951, y cómo se desplegó, primero a través de la censura editorial y la propaganda, en segundo lugar en el ámbito del libro escolar y, por último, desde la política cultural exterior. De entre todas las instituciones implicadas en la gestión y ejecución de la política del libro, destacó el INLE, por ello se le dedica todo un capítulo para conocer su entramado y sus actuaciones, especialmente a sus mayores logros como fueron la convocatoria de la Asamblea del Libro de 1944, La Ley de Protección del Libro de diciembre de 1946 y la reanudación de la Feria del Libro a partir de 1944.

Como complemento a la política oficial del libro se muestra, la menos conocida, política del libro que practicaron dos organizaciones que sustentaron el régimen: Falange y Acción Católica de España. Las dos utilizaron el libro y la lectura para adoctrinar, hacer apostolado o proselitismo a la vez que para formar dirigentes y mandos y ambas utilizaron los mismos instrumentos: la censura, la actividad editorial y la organización e bibliotecas, desplegando su actividad por toda la geografía española utilizando sus entramados organizativos.

A continuación se analiza cómo afectó la política económica autárquica e intervencionista al libro en su dimensión económica a través de medidas como el racionamiento del papel y su sistema de cupos; el control de los cambios; la concesión de licencias para exportar o una reforma tributaria que gravaba los factores productivos, para después pasar revista a los distintos sectores económicos que terciaban en la producción del libro: la industria del papel, las industrias gráficas y la industria editorial. Todo ello con el objeto de conocer la problemática específica de cada sector, sus reivindicaciones ante el Estado y los conflictos de interés de los mismos.

Toda la segunda parte de la investigación se centra en conocer la realidad de las bibliotecas públicas en España entre 1939 y 1952. Se ha indagado en el marco jurídico, el concepto y atribuciones que se asignaban a las bibliotecas públicas en la época, su tipología y origen y, en la medida de lo que han permitido las fuentes consultadas, saber qué documentos albergaban y qué criterios de selección presidían su adquisición, qué servicios ofrecían, en qué edificios se instalaban, qué personal las gestionaban, con qué financiación contaban y qué índice de uso tuvieron. Saber quiénes leían y qué se leía y qué técnicas bibliotecarias se utilizaban en los diferentes tipos de bibliotecas. Planteándose, al final, qué hubo de continuidad y ruptura con la anterior política bibliotecaria, si hubo o no una política bibliotecaria y si la biblioteca pública fue realmente un medio de adoctrinamiento del Régimen.

## ABSTRACT

After a brief historical review of the book policy in Spain since the beginning of the 20th century until the arrival of Franco's regime, this research deals with the concept of book and the policy surrounding it, during Franco's years (1939-1951). That policy was shown, in the first place, through censorship and propaganda, in a second term, through school books and finally regarding the foreign cultural policy. Among all the institutions involved in the management of such policy, the INLE stands out, and that's the reason why a whole chapter is dedicated to it, in order to know how it worked out and specially its main achievements: the summoning of the Book Assembly in 1944, the Book Protection Law in December, 1946 and restarting the Book Fair since 1944.

As a complement of the official book policy of those years, it is shown, as a not well known issue, how two organizations which supported the regime, Falange and Acción Católica, dealt with the book policy. Both used book and reading to indoctrinate and training future leaders, using either censorship, as well as publishers and libraries organization, spreading all their activities throughout the country by using their organization frameworks.

Afterwards it is analyzed how the autocratic economic policy affected book, in the way of paper shortage and the quota system, controlling changes, the concession of licenses to export or a tax reform to levy production. Later on, it is reviewed the economic factor affecting book industry: paper and graphic industries and publishing. All of it, in order to know the problems of each sector, their demands for better living and the conflicts among them.

The whole second part of the research focuses on knowing the reality of public libraries in Spain from 1939 to 1952. We have inquired into the legal framework and the assignment the libraries were supposed to have in those years, the kinds and origin of them, and as far as the sources has permitted, knowing the documents they held and the criteria for purchasing new documents, the services they offered, the building where they were housed, the staff they counted on, their budget and how often they were used. We try to answer to the question regarding their customers, what they read, and what librarian techniques were in use in the different types of libraries. Finally we consider whether the new book policy continued the former one, or if it broke apart from it, as well as, if there was a real library policy or not, and how it was used as a means of indoctrination.

## INDICE

<b>0. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>12</b>
Objetivos de la investigación .....	12
Estado de la cuestión .....	13
Reflexión teórica y metodológica .....	18
Fuentes documentales .....	20
<b>1. LA POLÍTICA DEL LIBRO ANTES DEL FRANQUISMO .....</b>	<b>23</b>
1.1 LAS CÁMARAS DEL LIBRO Y EL COMITÉ OFICIAL DEL LIBRO .....	23
1.2 LA POLÍTICA REPUBLICANA. EL INSTITUTO DEL LIBRO ESPAÑOL .....	32
<b>2. LA POLÍTICA DEL LIBRO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1951) .....</b>	<b>35</b>
2.1 EL LIBRO ESPIRITUAL, IMPERIAL Y CATÓLICO .....	35
2.2 LA CENSURA EDITORIAL Y LA PROPAGANDA A TRAVÉS DEL LIBRO .....	41
2.2.1. El marco jurídico .....	42
2.2.2. Organismos que gestionaron la política intervencionista del libro .....	44
2.2.3. La censura editorial.....	50
2.2.4. Las ediciones oficiales.....	54
2.3. LA POLITICA DEL LIBRO DE FALANGE Y ACCIÓN CATÓLICA .....	58
2.3.1. FALANGE. Libros azules al servicio del Estado totalitario .....	58
2.3.2. ACCIÓN CATÓLICA. El apostolado de libros y lecturas .....	76
2.3.3. UNA POLÍTICA EN COMÚN: adoctrinar con el libro.....	88
2.4. LA POLÍTICA DEL LIBRO ESCOLAR .....	89
2.5. LA POLÍTICA EXTERIOR DEL LIBRO. IMPERIO DE PAPEL .....	95
<b>3. EL LIBRO AUTÁRQUICO E INTERVENIDO .....</b>	<b>101</b>
3.1. EL PAPEL Y LA GESTIÓN DE LOS CUPOS .....	104
3.2. LA INDUSTRIA PAPELERA .....	118
3.3. LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS.....	122
3.4. LA INDUSTRIA EDITORIAL .....	126

<b>4. EL INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL .....</b>	<b>136</b>
4.1. LOS ANTECEDENTES DEL INLE .....	136
4.2. EL INLE (1939-1957) .....	144
4.2.1. Sección de Política cultural .....	148
4.2.2. Sección de Ordenación Bibliográfica .....	150
4.2.3. Sección de Política comercial del Libro.....	151
4.3. DELEGACIÓN DEL INLE DE BARCELONA.....	153
4.4. CONFLICTOS CON EL SINDICATO NACIONAL DEL PAPEL .....	154
4.5. LA ASAMBLEA DEL LIBRO DE 1944 .....	157
4.6. LA LEY DE PROTECCIÓN DEL LIBRO ESPAÑOL DE 1946.....	169
4.7. LA FERIA DEL LIBRO .....	180
4.8. LAS EXPOSICIONES .....	189
<b>5. LA POLÍTICA BIBLIOTECARIA DE POSGUERRA .....</b>	<b>194</b>
5. 1. LOS FUNDAMENTOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA.....	194
5. 2. LA ORGANIZACIÓN BIBLIOTECARIA: LA DGAB Y LA JIAL .....	197
5.3. LOS PATRONATOS PROVINCIALES.....	213
5.4. LOS CENTROS COORDINADORES DE BIBLIOTECAS .....	221
5.4.1. Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias .....	226
5.4.2. Centro Coordinador de Bibliotecas de León .....	230
5.4.3. Centro Coordinador de Soria .....	232
5.4.4. Centro Coordinador de Huelva.....	233
5.4.5. Centro Coordinador de Zaragoza .....	234
<b>6. TIPOLOGIA BIBLIOTECARIA.....</b>	<b>237</b>
6.1. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PROVINCIALES.....	237
6.2. LAS BIBLIOTECAS POPULARES.....	241
6.2.1. Las bibliotecas populares de Cataluña.....	243
6.6.2. Las bibliotecas de las Cajas de Ahorros de Cataluña y Baleares .....	246

6.2.3. Las Bibliotecas Populares en Asturias.....	248
6.2.4. Las Bibliotecas Populares de Madrid .....	250
6.2.5. Otras localidades .....	257
6.3. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.....	258
6.3.1. Marco jurídico .....	258
6.3.2. Situación de las bibliotecas municipales tras la guerra civil .....	261
6.3.3. Cuántas y dónde se crean .....	263
6.4. SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA .....	274
6.4.1. Lecturas para el soldado .....	274
6.4.2. Servicio de Lecturas para el Marino .....	275
6.4.3. Servicios de lectura en hospitales .....	280
6.4.5. Lectura y bibliotecas en prisiones. ....	283
6.4.6. Las bibliotecas viajeras .....	288
6.5. LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y RESTO DE BIBLIOTECAS DE TITULARIDAD PÚBLICA .....	291
6.5.1. Bibliotecas escolares.....	291
6.5.2. Resto de bibliotecas.....	295
6.6 .OTRAS FORMAS DE ACCEDER A LA LECTURA: BIBLIOTECAS CIRCULANTES DE PAGO Y PUESTOS CALLEJEROS .....	300
<b>7. EL SERVICIO DE BIBLIOTECA .....</b>	<b>302</b>
7.1. EL PERSONAL.....	302
7.2. INSTALACIONES.....	310
7. 3. PROCESOS TÉCNICOS.....	316
7.3.1. Selección y adquisición .....	316
7.3.1. Catalogación, clasificación, ordenación .....	320
7.4. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS .....	324
7.4.1. Lectura en sala y préstamo a domicilio .....	324
7.4.2. Información bibliográfica y referencia.....	331
7.4.3. La Sección local.....	332



7.4.4. La Sección Infantil y Juvenil.....	332
7.4.5. Actividades.....	342
<b>8. LECTURAS y LECTORES: un horizonte de investigación .....</b>	<b>346</b>
<b>9. CONCLUSIONES .....</b>	<b>354</b>
<b>10. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>358</b>
<b>11. ANEXOS .....</b>	<b>369</b>

## 0. INTRODUCCIÓN

### *Objetivos de la investigación*

Vocación bibliotecaria y formación histórica son los dos factores que me han llevado a acometer esta investigación en el campo del libro y las bibliotecas públicas en nuestro país.

Parte de esta investigación formó parte de la Memoria del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, en la convocatoria de septiembre de 2009 con el título “Las bibliotecas públicas durante el primer franquismo: entre la continuidad y la ruptura”, y en conjunto la tesis quiere ser una prolongación en el tiempo histórico de la que realizó Ana Martínez Rus para los años de la II República.

Los objetivos de esta tesis, algunos concebidos desde su inicio y otros alumbrados en su transcurso, se pueden sintetizar en los siguientes puntos. En primer lugar, se ha querido dar una visión completa de todas las facetas que conformaron la política del libro durante el primer franquismo, algunas ya investigadas pero nunca expuestas de manera conjunta, como la censura, la propaganda o el libro de texto, y otras más novedosas como las políticas del libro de Acción Católica y Falange abordadas desde la orientación de la lectura, la actividad editorial y la creación de bibliotecas

En segundo lugar, dada la dimensión del libro como actividad económica, se ha contextualizado la actividad económico-empresarial de editores, impresores y papeleros dentro de la política económica autárquica y cómo afectó ésta al desarrollo de la industria editorial, dándonos la clave para conocer el origen de las reivindicaciones expuestas en la Asamblea del Libro de 1944 y que culminaron en la Ley de Protección del Libro de 1946.

En tercer lugar, la investigación se ha centrado en el INLE, órgano de consulta de los problemas relativos al libro y su difusión, y ejecutor de la política del libro, cuya vida administrativa fue pareja a la de la dictadura. Partiendo de sus precedentes, se describen su estructura, funciones, presupuestos, personalidad jurídica y sus conflictos con el Sindicato del Papel, así como sus actividades en el ámbito de la política cultural, la ordenación bibliográfica y la política comercial del libro. Especial atención se ha dedicado a sus mayores logros en esta década: la organización de la Asamblea del Libro de 1944 y su culmen, la Ley de Protección del Libro de 1946, y el restablecimiento de la Feria del Libro.

En cuarto lugar, el foco de análisis se ha centrado en el entramado administrativo de las Bibliotecas a nivel estatal, provincial y local: Patronatos Provinciales, Centros Coordinadores y Bibliotecas Públicas Municipales autónomas, así como los órganos institucionales con competencias en política bibliotecaria: la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas. Además, se ha tratado de dibujar la realidad de las bibliotecas públicas en España entre 1939 y 1952. Cuántas se crearon y donde; el marco jurídico en que se desarrollaron; su variedad tipológica, el personal que las gestionó y atendió; sus instalaciones; qué servicios ofrecían y en qué prácticas profesionales se sustentaron, finalizando con algunos apuntes sobre las lecturas y lectores como punto de partida para futuras investigaciones.

Cronológicamente se ha acotado entre 1939 y 1952, en primer lugar, por recaer durante este periodo la responsabilidad de la política bibliotecaria y del libro escolar, en la figura de Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional, y en segundo lugar porque corresponde totalmente con la vida administrativa de la institución que se encargó de desarrollar la política bibliotecaria. Me refiero a la Junta de Intercambio y Adquisiciones de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas, restablecida por Orden de 13 de diciembre de 1939, que no será

absorbida por el Servicio Nacional de la Lectura hasta 1952, entidad que aunque se había creado en el Decreto de 24 de julio de 1947, sólo agrupaba nominalmente el conjunto de los servicios de lectura de la Nación sin realidad legal hasta que fue aprobado su Reglamento en 1952.

El no haber extendido en el tiempo la investigación se justifica por el hecho de que el Servicio Nacional de Lectura estaba siendo objeto de estudio. Trabajo que se ha publicado este mismo año dentro de “La Historia de la edición en España 1939-1975”<sup>1</sup>

### ***Estado de la cuestión***

Entre los balances que se han hecho sobre la historia del libro y las bibliotecas en España, el primero data de 1984 y fue elaborado por el hispanista francés François López<sup>2</sup> quién ponía de manifiesto la carencia de instrumentos bibliográficos básicos; el segundo se hizo diez años después por la bibliotecaria Mercedes Dexeus<sup>3</sup> y daba cuenta aparte de los prolíficos instrumentos bibliográficos, de las numerosas contribuciones, tanto colectivas e individuales, por parte de bibliotecarios y bibliógrafos así como de especialistas del campo de la literatura y de la historia social. En el ámbito de la historia política, social y económica, el tema del libro estaba despertando cierto interés reflejado en aportaciones coyunturales o en programas de investigación. Y concluía que, en cuanto al entorno social del libro y la difusión de la lectura, el análisis de los trabajos publicados ponía de manifiesto una sensible diversidad metodológica y bastante subjetividad a la hora de establecer resultados así como una falta de continuidad en las investigaciones en este campo en España y de tradición académica, aunque dicha interdisciplinaridad podía ser muy ventajosa si se lograba reforzar los contactos y dejar sentados ciertos principios metodológicos. Finalizaba su artículo con las aportaciones sobre historia de las bibliotecas citando sólo dos trabajos sobre bibliotecas públicas: *La Biblioteca Municipal de Jerez de la Frontera* y *Las bibliotecas y la lectura en Asturias*, estando ausentes trabajos como el de Antonio Viñao sobre las bibliotecas populares (1987) o el de Ángel Mateo Díaz (1991) sobre *La lectura popular en Asturias (1869-1936)*.

Años más tarde, en 2003, este era el panorama que describía Jesús A. Martínez Martín, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense:<sup>4</sup>

La historia del libro y la lectura está dando sus primeros pasos en España con una visión interdisciplinar, pero todavía con estudios muy dispersos y puntuales en su mayoría, sin la tradición historiográfica francesa o anglosajona, y que cuenta con escasos conocimientos básicos y con la necesidad de edificar desde la base una historia de la edición, el libro y la lectura.

Estos trabajos puntuales y dispersos procedían de diferentes ámbitos que abarcaban desde la estadística bibliográfica con los estudios de Botrel para la prensa<sup>5</sup> o, en el ámbito local, con

---

<sup>1</sup> “El Servicio Nacional de Lectura 1952-1975”, en: MARTÍNEZ MARTÍN. J.A. (coord.) *Historia de la edición en España (1939-1975)* coord. por Jesús Antonio Martínez Martín, 2015, pp. 181-208

<sup>2</sup> En: *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 4 (1984), p. 9-22.

<sup>3</sup> DEXEUS, Mercedes. “Diez años de historia del libro y las bibliotecas en España: 1983-93”. *Boletín de la ANABAD*, 1994, pp. 149-160.

<sup>4</sup> MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. “Historia de la cultura e historia de la lectura en la historiografía”. *Ayer* 52 (2003), pp. 284-294.

<sup>5</sup> *Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX* (1993).

Delgado-Cordón, M. Morán o Luxán<sup>6</sup>; la historia descriptiva del libro y las bibliotecas, donde el libro se concebía como un hecho autónomo desgajado de la historia sociocultural<sup>7</sup>; la comunicación literaria<sup>8</sup>; la historia de la Literatura que ha aportado numerosos trabajos, centrados en los textos y autores en relación con la producción intelectual o en aspectos sociológicos; la política bibliotecaria y las instituciones<sup>9</sup> o los numerosos trabajos relacionados con el ámbito editorial, impresores, libreros o géneros editoriales.

Si nos referimos a la historia de la lectura en España, la historiografía se había ocupado sólo marginalmente de la época contemporánea. Desde la historia social de la lectura, Jesús Martínez en Madrid y P. Anguera en Reus y desde la antropología social algún estudio había incorporado los significados que realizaban de sus obras los lectores. La historia de la pedagogía ha aportado de forma renovada los estudios sobre la escritura y la lectura a través de la alfabetización, la escolarización y la difusión de la cultura escrita (Escolano, Moreno Martínez y Viñao).

Desde el punto de vista de la historia cultural y social y en el marco de la historia de la edición, hay que destacar el trabajo coordinado por Jesús A. Martínez Martín *Historia de la edición en España 1836-1936*. Esta obra interrelaciona el mundo de la producción de libros, su difusión y su lectura siguiendo los postulados de la reciente historia cultural e incluye un capítulo sobre la historia de las bibliotecas y la lectura pública, insertándola en la historia socio-cultural, entendiendo las bibliotecas populares y luego públicas, como un mecanismo más de la circulación de los libros junto a la escuela o las librerías, elaborado por Ana Martínez Rus. Esta misma autora, siguiendo los postulados de la historia socio-cultural, publica en 2003 su tesis doctoral<sup>10</sup> donde estudia la política del libro durante la Segunda República, analizando tanto las iniciativas estatales en la promoción de la lectura pública como las de editores y libreros. Además, aborda la recepción y repercusión de éstas en los ciudadanos como agentes pasivos y como participantes en las diferentes actividades organizadas por el Estado y los profesionales del libro. Igualmente, analiza cómo y en qué medida influyó el régimen democrático de la Segunda República en el mundo del libro a través de la verificación, análisis y cuantificación de la circulación del libro en la sociedad.

Para el siglo XIX han tenido más predicamento los estudios desde el punto de vista de la historia política de las bibliotecas, realizados por estudiosos procedentes del campo de la Documentación. Por un lado, Genaro Luis García López lo ha hecho con dos aportaciones<sup>11</sup> que se centran en los orígenes de nuestra organización bibliotecaria. En la primera analiza la génesis de las bibliotecas públicas provinciales ligado al proceso desamortizador que tuvo como consecuencia la nacionalización del patrimonio documental y en la segunda se centra en las diferentes instituciones que intervinieron en el desarrollo bibliotecario entre 1835-1843, así

---

<sup>6</sup> *El libro: creación, producción y consumo en la Granada del siglo XIX* (1990); *La oferta literaria en Madrid (1789-1833)*; *La industria tipográfica en Canarias, 1750-1900*.

<sup>7</sup> *La historia del libro* de Hipólito Escolar (1984)

<sup>8</sup> Brotel, en la misma obra, trata la comunicación literaria y los elementos que intervienen en el proceso social de la comunicación, relacionando alfabetización, mundo literario y prensa, comercialización y edición

<sup>9</sup> García Ejarque, Luis. *Historia de la lectura pública en España*, Gijón, Trea, 2000

<sup>10</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana. *La política del libro durante la Segunda República: socialización de la lectura*. Gijón: Ediciones Trea, 2003.

<sup>11</sup> *Libros para no leer: el nacimiento de la política documental en España* (2004) y *La lectura como servicio público* (2006).

como en la política cultural bibliotecaria, utilizando profusamente fuentes primarias inéditas y de escasa difusión.

Por otro lado, M<sup>a</sup> Teresa Fernández Bajón<sup>12</sup> estudia las estructuras administrativo-políticas del siglo XIX en relación con las actuaciones en materia de archivos y bibliotecas; la creación del cuerpo de funcionarios archiveros, bibliotecarios y anticuarios; las acciones legislativas en materia de política documental; la Escuela Superior de Diplomática, y el funcionamiento de las más importantes instituciones documentarias de la época, como la Biblioteca del Congreso y del Senado, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas de los departamentos ministeriales, las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares y diversos archivos. Para el capítulo que dedica a las bibliotecas populares, además de a la legislación, la autora ha recurrido a la vertiente pedagógica de Viñao y a los trabajos coetáneos de Castellanos y Picatoste.

Dentro de la misma línea de investigación, hay que mencionar también el temprano artículo de Jerónimo Martínez González<sup>13</sup> que hace una amplia exposición de la historia de la biblioteca en España hasta 1975, fijando su atención en sus órganos de gestión.

También de la década de los 80, hay que reseñar la aportación de Guillermo Marqués Cruz<sup>14</sup> que aplica a los orígenes de la organización bibliotecaria española entre 1808 y 1939, un análisis sociológico que interrelaciona factores estructurales sociales (condiciones materiales, formas de control social, niveles de instrucción,...) con factores políticos, ideológicos y legislativos (aplicación de políticas).

Desde los presupuestos de la educación en relación a la alfabetización, Antonio Viñao<sup>15</sup> ha analizado las bibliotecas populares entre 1869 y 1885 como un intento de acercar la cultura impresa y la educación desde la burguesía culta, liberal y progresista, a quienes tenían escasas o nulas posibilidades de acceder a ella.

Respecto a la política bibliotecaria franquista entre el final de la guerra civil y el comienzo del funcionamiento del Servicio Nacional de Lectura (1952), periodo objeto de esta memoria, sólo aparecía recogida dentro de obras más generales, como en *La historia de las bibliotecas*, de Hipólito Escolar o en la *Historia de la lectura pública en España*, de Luis García Ejarque. Ambos procedentes del universo bibliotecario. El primero, de manera descriptiva y somera engloba, en apenas ocho páginas, la historia de las bibliotecas dedicando exclusivamente cuatro a las bibliotecas municipales. Igualmente, la bibliografía que recoge es exigua, limitándose al *Boletín Oficial del Estado* y a la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. Por su parte, Luis García Ejarque, gestor del Servicio Nacional de la Lectura desde 1958 hasta su desaparición, muestra un panorama de la política bibliotecaria de la JIAL<sup>16</sup> y de los Centros Coordinadores de Bibliotecas a través de leyes, órdenes y decretos, proporcionando un gran número de referencias bibliográficas.

---

<sup>12</sup> *Políticas de información y documentación en la España del siglo XIX*.

<sup>13</sup> MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo. "Sistemas de bibliotecas públicas en España y sus órganos de gestión", *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 1988, nº 4 (12-13), pp. 77-103.

<sup>14</sup> MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo. "Sociología de la biblioteca pública en España en el proceso de modernización: de los orígenes de la organización bibliotecaria a la burocratización de la lectura (1808-1939)", *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 1988, nº 4 (12-13), pp. 23-55.

<sup>15</sup> VIÑAO FRAGO, Antonio (1988). "A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-1885)", en: GUREÑA, J.L. y TIANA FERRER, A. (dirs.), *Clases populares, cultura, educación: Siglo XIX y XX*, pp. 301-335

<sup>16</sup> Junta de Intercambio y Adquisiciones de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas.

Para los años de la Guerra civil en el bando sublevado, tampoco existían trabajos independientes. Es preciso mencionar la obra de Alicia Alted Vigil, que se ha ocupado de la política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural, pormenorizando el proceso de constitución de los diversos organismos y cargos creados en el bando nacional para la defensa y recuperación del patrimonio cultural. Dedicó dos capítulos a la depuración de bibliotecas y a la lectura dirigida. En esta misma línea de investigación hay que encuadrar la aportación de Leonardo Borque López, que se acerca a la situación del patrimonio cultural asturiano tras la guerra. Su objetivo se centra en el proceso de depuración de bibliotecas, tanto de las escolares como públicas, y las incautadas a sociedades o elementos rojos. Las fuentes manejadas son fiables, aunque con alguna laguna historiográfica.<sup>17</sup>

Centrado en el primer franquismo y, desde la historia política, contamos con el trabajo de Eduardo Ruiz Bautista *Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios del primer franquismo* (2005), que aborda los discursos y prácticas estatales sobre el libro y la lectura entre 1941 y 1945. Y dentro de estos discursos, se centra en la propaganda y la censura editorial desarrollados por el Estado, mencionando el discurso oficial sobre la lectura, la depuración y la destrucción de bibliotecas durante la guerra, analizando los lotes de donativos y a quiénes se asignaban, así como la censura y los criterios que guiaron las adquisiciones de libros de la Junta de Intercambio y Adquisiciones de Libros y revistas.

*Tiempo de censura: la represión editorial durante el franquismo* (2008), coordinado por Ruiz Bautista, es otra aportación colectiva que se centra en la censura desde sus orígenes en la guerra civil hasta la Ley de 1966 en su primera parte, mientras que la segunda, más transversal, abarca la censura sobre el libro catalán y vasco; sobre las obras italianas entre 1936 y 1945 y sobre los géneros más populares.

Desde que comencé esta investigación en 2010, el panorama historiográfico se ha enriquecido con nuevas aportaciones. Cronológicamente, la primera fue el trabajo de Fernando Larraz (2010) “Una historia transatlántica del libro”, donde se estudian las relaciones editoriales entre España y América latina (1936-1950) desde el punto de vista de la economía y la política. A continuación las investigaciones de Ana Martínez Rus sobre la represión del libro, y de nuevo Fernando Larraz, pero esta vez con amplio trabajo sobre la censura literaria.

Por último como culmen, es más que obligado citar la *Historia de la edición en España 1939-1975* (2015) dirigida por Jesús Martínez en el que he tenido el privilegio de participar con dos capítulos. Esta obra llena un gran vacío historiográfico, y aunque en parte es una continuación que prolonga cronológicamente la anterior *Historia de la edición en España (1836-1936)*, es mucho más ambicioso al aumentar los temas y los contenidos, aunque con los mismos presupuestos metodológicos. Es integral porque cada capítulo está en función de los demás y es multidisciplinar. No es sólo una historia de la edición, sino también del libro y de la lectura. Abarca desde la política del libro y las relaciones entre el Estado y la edición; la dimensión económica y social y qué se editó desde el punto de vista de los contenidos: materias, autores, colecciones, géneros. Una gran aportación al conocimiento de la historia de la edición en nuestro país, que no es el resultado de trabajos previos, sino que se han concebido para este proyecto.

---

<sup>17</sup> El hallazgo en el AGA de las informaciones que a lo largo de 1939 emitieron los comandantes de puesto de la Guardia Civil de Asturias sobre la situación del patrimonio artístico y cultural en sus demarcaciones constituye el punto de partida de este trabajo. Dichos informes se produjeron a petición de la Sección de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Recuperación, del Ministerio de Educación Nacional con sede en Vitoria.

Dado que parte de esta investigación va a analizar la política del libro y las bibliotecas y ambas, forman parte de la política cultural, he creído conveniente acercarme a la historiografía que ha tratado la política cultural del franquismo.

El debate historiográfico<sup>18</sup> sobre la política cultural del franquismo ha seguido un desarrollo similar a lo sucedido en la historiografía italiana sobre el fascismo, en la que frente a la teoría de que el fascismo fue incapaz de transformar y generar una cultura propia, otros especialistas defendieron la idea de la existencia de una política cultural fascista.

En los sesenta, José Luis Abellán<sup>19</sup> señaló cómo las autoridades franquistas manifestaron un despego, cuando no un desprecio hacia la cultura, describiendo la dictadura como un “páramo cultural”, afirmación que volvería a ser repetida en numerosas ocasiones. Por otro lado Elías Díaz<sup>20</sup> reivindicaba la cultura, pero sólo desde la oposición e insistía en mostrar cómo durante la dictadura se produjo una verdadera recuperación de la cultura y el pensamiento liberal, democrático y socialista. Afirmaba que el franquismo mostró toda su efectividad destructiva frente a la cultura de la República y, sobre todo, de las distintas nacionalidades, fracasando por el contrario, en la construcción de una cultura propia, rasgos que se señalaban como inherentes de los regímenes fascistas. Igualmente, el trabajo colectivo del Equipo Reseña<sup>21</sup> afirmaba que el franquismo no llegó a ahogar de raíz la voz de la cultura independiente, pero es de lamentar la anulación de las riquezas nacionales y la provocación de un exilio humillante. Todo ello en un contexto institucional y personal escasamente preocupado por la cultura.

La política cultural del régimen de Franco fue de hecho tanto o más una política negativa de control a través de la censura (que se aplicó con todo rigor a prensa, libros, radio, cine y teatro) que una política afirmativa de creación de una cultura propia y original.<sup>22</sup>

Recogiendo los argumentos de postergación de la cultura y falta de interés del Estado por el arte, la investigación o la educación extraescolar, Emiliano Fernández se pregunta si existió una política cultural del franquismo<sup>23</sup>. Pese a los escasos fondos económicos que se destinaron a esos aspectos y la situación de precariedad que arrastraron las instituciones culturales públicas durante ese periodo, la administración cultural mostró un interés destacadísimo por controlar, elaborar y distribuir la cultura, desde el principio del alzamiento.

Sin embargo, en los años del franquismo se invierte dinero en determinado tipo de programas, que podemos considerar “culturales”. Así la Falange, la SF, el SEU y la OJE son organizaciones que mantiene el Estado y que realizan una parte importante de su trabajo en ese terreno que hoy llamaríamos de la “animación socio-cultural”. Su institucionalización está planteada de hecho como una alternativa a los movimientos culturales de los sindicatos y partidos obreros anteriores a 1939 y en muchos aspectos sigue el modelo de aquellos.

---

<sup>18</sup> SEVILLANO CALERO, Francisco (1998). *Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951)*.

<sup>19</sup> En “La cultura en España” y “La industria cultural en España”.

<sup>20</sup> “Pensamiento español en la era de Franco” (1973).

<sup>21</sup> “La cultura española durante el franquismo” (1977)

<sup>22</sup> FUSI, Juan Pablo, “El franquismo: la etapa totalitaria (1939-1959)”, en: JOVER ZAMORA, GÓMEZ-FERRER, Guadalupe y FUSI, Juan Pablo. *España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX)*, 2000, pp.

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ PRADO, Emiliano. *La política cultural: qué es y para qué sirve*, Gijón, Trea, 1991, pp. 99-104.

Aunque insuficientemente estudiada<sup>24</sup>, concluye Emiliano Fernández, que para él sí existe una política cultural del franquismo que llena un periodo denso y complejo de la historia de nuestro país. Corresponde además a ese periodo al surgimiento en los demás países europeos de las políticas culturales modernas, y España no está ausente de las realidades sociológicas a que responden esas nuevas políticas. Los sucesivos gobiernos no dejaron de experimentar su influencia. Otro argumento que esgrime es que el régimen de Franco mantuvo continuidades incómodas, que, a veces, instituciones y proyectos tildados de franquistas son en realidad pervivencias, más o menos revestidas de un nuevo ropaje, de la política cultural republicana.

Y finaliza diciendo: “Si interpretamos política cultural como intervención del estado en la vida cultural, consciente y dirigida, no sólo existe una política cultural del franquismo, sino que es eficaz y constante y arranca desde el origen del nuevo Estado. Si por política cultural entendemos en cambio intervención a favor del desarrollo de la vida cultural de acuerdo con valores democráticos, sin duda la respuesta será negativa”

Más recientemente, Eduardo Ruiz Bautista<sup>25</sup>, sostiene que la vida cultural del primer franquismo ha sufrido cierto abandono historiográfico, y lo que se ha hecho se ha ceñido al estudio de los intelectuales y de la ideología. Para él, se trata de un tema en proceso de investigación, habiéndose estudiado sólo algunos aspectos parciales, como la política cinematográfica o el NODO, y por ello, propone, a través de su obra *Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios del primer franquismo*, despejar algunos de los interrogantes que perduran en el campo de la cultura. En concreto aborda los discursos y prácticas estatales sobre el libro y la lectura entre 1941 y 1945. Y dentro de estos discursos se centra en la propaganda y en la censura editorial desarrollados por el Estado, a quién competía establecer el modo de lectura pública y, por tanto, la política bibliotecaria.

En su opinión, se ha relegado al olvido la participación efectiva del Estado en el campo de la cultura. Y, por ello, le interesan los intelectuales, más que como actores como agentes de una determinada política cultural. “Los intelectuales como jerarcas y funcionarios de la cultura, como editores y propagandistas orgánicos, como censores oficiales, como ordenadores de las bibliotecas”.

También se plantea qué concepto de cultura abrigaban los agentes políticos culturales y si este concepto era compartido por toda la sociedad o existían manifestaciones que escapaban al mismo, pero ocupaban un lugar en la vida cultural de determinados grupos o clases sociales.

### ***Reflexión teórica y metodológica***

Al abordar cualquier investigación sobre el libro, la lectura pública y las bibliotecas, es inevitable tener que hablar, desde el punto de vista de la metodología historiográfica, de la historia socio-cultural.

La historia cultural considera la cultura en un sentido extenso, como todo lo que atañe al ser humano, comprendiendo infinidad de aspectos, entre otros, como la importancia dada al proceso de producción de los objetos culturales y a los espacios para su difusión.

Dentro de todos los posibles temas que incluye la historia cultural, la historia de la lectura, el libro y los lectores, la edición y la difusión del libro, la cultura escrita y la oralidad constituyen

---

<sup>24</sup> FERNÁNDEZ PRADO, Emiliano. La política cultural...*Op. cit.*, pp. 101-102

<sup>25</sup> RUIZ BAUTISTA, Eduardo. Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios del primer franquismo, Gijón, Trea, 2005, pp. 13-25.



puntos centrales de esta renovación historiográfica y de los debates protagonizados en los últimos años por la historia de la cultura.

La historiografía española<sup>26</sup> inició su andadura en el campo de la historia cultural bajo el magisterio de Tuñón de Lara – con su obra *Los orígenes culturales de la II República española* (1992)-, quién junto a Jover Zamora, y con la colaboración de hispanistas franceses, enseñaron a varias generaciones que la “historia de la cultura tenía que ser económica, filosófica, literaria o social, sin dejar por ello de ser histórica”. Temas pioneros fueron los estudios sobre la inserción de escritores e intelectuales en su realidad social o los de la prensa como producto social e instrumento conformador de opinión y transformador de ideologías y actitudes.

Más tarde Juan Pablo Fusi, con su libro *Un siglo de España. La Cultura*, logra dar una visión de síntesis de la evolución de la cultura española partiendo de la idea de que la historia de la cultura integra muy distintas perspectivas: ensayo, arte, literatura, política cultural, religión, medios de comunicación, intelectuales, vanguardias, diversiones, modas y el propio consumo cultural.

Para el campo de la historia de la edición, el libro, la lectura y las bibliotecas que ha utilizado estos enfoques de la historia sociocultural, habría que mencionar las aportaciones de Jesús A. Martínez y Ana Martínez Rus, Trabajos en esta línea mucho más recientes son los de Raquel Sánchez García y del mismo Jesús A. Martínez Martín sobre la figura del autor<sup>27</sup>. Raquel Sánchez nos proporciona una mirada sobre el mundo cultural español del primer tercio del siglo XX desde una perspectiva centrada en el contexto donde se desarrollaba la creación. Más ambicioso, en cuanto a la cronología, es el estudio de Jesús A. Martínez, que adopta una doble perspectiva: económica y vital, a la hora de analizar el autor y las condiciones en las que se desenvolvió, vinculado al tejido económico, social, político y cultural de su tiempo histórico. Además de las ya citas historias de la edición en España, coordinadas por Jesús A. Martínez.

Tanto desde el punto de vista teórico como desde el práctico, la biblioteca pública es una institución cultural de primerísimo orden. Su marco filosófico, así como sus valores están estrechamente relacionados con el derecho a la educación, a la alfabetización y a la cultura, y además, es lugar de encuentro y preservación del patrimonio local como garantía de la conservación y difusión de la memoria colectiva.

Hoy, el estudio de las bibliotecas públicas se aborda como una práctica cultural dentro de los presupuestos teóricos de la historia cultural, pues fueron instituciones y espacios de difusión y circulación de libros para las clases con menos recursos durante las primeras décadas del XX y lo siguieron siendo, hasta que más recientemente, la Biblioteca Pública de los países occidentales ha dejado de ser un instrumento de educación de las clases trabajadoras para transformarse en una institución cultural y recreacional para las clases medias.

Cuando se afronta el estudio de una institución documental como es la biblioteca pública, hay que analizar el papel social que cumple, si se consideraba un servicio necesario, cómo interactuó con el entorno, tanto a la hora de prestar sus servicios como a la hora de justificar su creación y mantenimiento, cambio o desaparición.

Para comprender el modelo de biblioteca que predomina en una sociedad o en una cultura hay que abordar su estudio desde un punto de vista sociológico, estudiando la forma de las

---

<sup>26</sup> Alted Vigil, Alicia (2004). *De una historia de la cultura... Op. cit.*, pp. 358-376.

<sup>27</sup> Sánchez García, Raquel (2008). *El autor en España (1900-1936)*; MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. (2009) *Vivir de la pluma: la profesionalización del escritor, 1836-1936*.

instituciones existentes, las políticas públicas, los principales indicadores sociales, las relaciones socioeconómicas establecidas, la tecnología, la ideología y, en general, los múltiples componentes de un sistema social complejo. Junto a estos elementos visibles de un estudio sociológico, se puede intentar comprender la imagen social de la biblioteca: la visión de la profesión bibliotecaria y de las técnicas documentales de las bibliotecas<sup>28</sup>.

Desde un punto de vista más cercano, en el Estado español, la biblioteca pública ha sido el equipamiento cultural por excelencia, el único prácticamente presente en todo el territorio. Durante muchos años lo que ha simbolizado la política cultural han sido las bibliotecas. Las bibliotecas gestionaban recursos culturales y programaban actividades culturales desde tiempos remotos, sin llevar a cabo una verdadera planificación de las mismas, integrando contenidos educativos, informativos y culturales.

La titularidad de las bibliotecas públicas es mayoritariamente municipal y desde muy temprano intentaron organizarse en redes a través de los Centros Coordinadores de Bibliotecas. Con estos centros, y su posterior encuadramiento en el Servicio Nacional de la Lectura, se estableció uno de los pocos sistemas duraderos de cooperación entre distintas administraciones públicas.

La política bibliotecaria está inmersa dentro de la política cultural, por tanto ha de contextualizarse dentro de ella y tener en cuenta sus postulados metodológicos y teóricos. La actuación del Estado en el ámbito de la lectura pública es tipológicamente de intervención directa, y la ejerce sobre los sectores más desprotegidos y desde los escalones más bajos de la jerarquía administrativa. Por ello, serán los ayuntamientos los más legitimados por su cercanía al ciudadano para prestar directamente un servicio público, que un gobierno. De hecho, la titularidad de las bibliotecas públicas es mayoritariamente municipal, como veremos en el desarrollo de la investigación.<sup>29</sup>

Vistas las tendencias y aportaciones metodológicas que se pueden asumir a la hora de abordar el estudio de la biblioteca pública, esta investigación va a adoptar un enfoque interdisciplinar, utilizando presupuestos de la biblioteconomía, la sociología y la historia político-cultural.

### ***Fuentes documentales***

Las fuentes utilizadas en esta investigación comprenden documentación procedente de varios archivos, revistas profesionales de la época, estadísticas, memorias publicadas de Bibliotecas y Centros Coordinadores de Bibliotecas.

Del Archivo General de la Administración, se han consultado fondos procedentes de sus series de Cultura y Educación. Del fondo de Cultura se ha utilizado la documentación relativa a la actividad de la Junta de Intercambio y Adquisiciones de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas: actas y presupuestos, datos sobre las bibliotecas, los procesos de creación de Centros Coordinadores de Bibliotecas o el registro de bibliotecas particulares no dependientes de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, además de las listas de libros y revistas que seleccionaban. Esta documentación está poco sistematizada y es fragmentaria, pues hay que tener en cuenta que se estaba gestando el aparato administrativo del Nuevo Estado.

---

<sup>28</sup> GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. y SAORÍN, Tomás. *La información y las bibliotecas en la cultura de masas*, Valencia, Generalitat, 2001, pp. 19-24.

<sup>29</sup> LÓPEZ de AGUILERA, Iñiqui. *Cultura y ciudad: manual de política cultural municipal*, Gijón, Trea, 2000, pp. 21-44.

Dentro del fondo de Educación, existe una serie de cajas relativas a la Fiesta del Libro, de gran valor para conocer la práctica bibliotecaria durante estos años, pues reúnen recortes de prensa con los artículos y trabajos que concursaban para conmemorar el Día del libro, en los cuales aparecen reflejadas las ideas sobre el concepto del libro y la misión de las bibliotecas públicas de aquellos años, así como la documentación –memorias de sus actividades- que presentaban las bibliotecas para optar al premio de la Biblioteca Pública Municipal que más hubiese destacado durante el año por su labor bibliotecaria,

Se echa de menos no tener unos informes de inspección como los que realizó durante la II República Jaime Vicéns<sup>30</sup>, además, hay que tener en cuenta que las Inspecciones Regionales de Archivos y Bibliotecas y el Consejo de Inspectores como órgano asesor de la Dirección General de Archivos no se crean hasta 1953 (Decreto de 23 de enero de 1952, *BOE* de 9 de noviembre).

Para documentar la actividad de los Centros Coordinadores de Bibliotecas he recurrido a las memorias que editaron algunos de ellos y que se encuentran disponibles en la Biblioteca Nacional, además de los proyectos enviados a la Junta y dictámenes de la misma que se hallan en el AGA.

El otro fondo documental más utilizado ha sido el Archivo del INLE, fundamental para conocer la actividad del Instituto, la gestión de los cupos de papel, la organización de las Ferias del Libro, y exposiciones, así como las inquietudes de los editores ante el difícil momento económico por el que atravesaba el mundo del libro. Muy interesante es la documentación relativa a la Asamblea del Libro de Madrid (1944) y el proceso que culminó en la Ley de protección del libro de 1946. Para completar el conocimiento sobre la tramitación de ésta misma Ley he consultado el Archivo del Congreso de los Diputados.

Otros archivos con los que se ha trabajado son los Archivos de Acción Católica y sus diferentes ramas: el Archivo del Junta Nacional de Acción Católica, el Archivo de Jóvenes de Acción Católica y el Archivo de Acción Católica de Mujeres.

Para conocer la situación de las Bibliotecas Populares de Madrid en la década de los 40 he localizado en el Archivo General de Educación correspondencia y algunas estadísticas.

Especial mención quisiera hacer al Fondo Lasso de la Vega perteneciente al Archivo de la Biblioteca de la Universidad Complutense<sup>31</sup>. Este bibliotecario que durante la guerra civil española fue nombrado Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, permaneció en este servicio hasta que desaparece en agosto de 1939. Además de este puesto, durante los años de la guerra y la inmediata posguerra fue, asesor de bibliotecas de la Sección Femenina de Falange Española, fue Presidente del Comité Sindical del Papel y del Cartón, y luego Presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas y la Rama del Papel. También estuvo destinado en la Dirección de Bibliotecas Populares de Madrid, hasta que finalmente es reintegrado a su puesto de director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid. De su actividad en todos estos cargos hay constancia documental en este archivo, además de numerosos proyectos que después no vieron la luz pero que tienen un gran interés desde el punto de vista profesional, como un modelo de contrato de edición, unas ordenanzas

---

<sup>30</sup> Publicados recientemente por la revista *Educación y Biblioteca* n. 129, febrero 2009, pp. 37134.

<sup>31</sup> Torres Santo Domingo, Marta (2011) Biblioteca Histórica: Archivo BUC. Fondo Lasso de la Vega (1939-1942): guía provisional (septiembre 2011), *Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca Histórica*; nº 16, 11. Biblioteca Histórica, UCM (2013) Archivo BUC: Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia (1938-1939), *Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca Histórica*; nº 05, 13

para regular el comercio del libro o numerosos documentos que bajo el título de “Política del Libro” pretendían organizar la actividad del Estado en el ámbito de libro.

Durante estos pocos años, Lasso de la Vega nos muestra una gran capacidad de trabajo y una gran ubicuidad en todos los temas relacionados con el libro y las bibliotecas como se verá a lo largo de toda la investigación, reiteradamente citado y aludido. Aparte de los cargos citados, fue vocal de la JIAL, escribió un manual de Biblioteconomía y numerosos artículos en las revistas profesionales, además de traducir la CDU, fue el inspirador de proyectos como el Servicio de Lecturas para el Marino o de la biblioteca del Hospital Provincial de Madrid.

Entre las revistas utilizadas tengo que citar especialmente las revistas profesionales de la época, en concreto la *Revista de archivos, bibliotecas y museos*, que reanudó su andadura tras el paréntesis de la guerra, que, aparte de artículos de tipo profesional, tiene dos secciones muy aprovechables: una, dedicada a noticias dentro del ámbito bibliotecario – recoge todas las inauguraciones de bibliotecas públicas y todas las memorias de la Junta desde 1947- y otra, sobre la legislación que se generaba relativa a bibliotecas y bibliotecarios. Otras publicaciones de interés son *Bibliografía hispánica*, editada por el INLE, que para los años cuarenta, tiene bastantes artículos relativos a bibliotecas, aparte de ser una fuente imprescindible para conocer el mundo del libro; la *Revista de bibliografía nacional*, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, y *Biblioteconomía*, de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Ésta última tiene un gran interés ya que permite conocer la más avanzada práctica profesional de la época. Para aspectos económicos relacionados con el papel, las artes gráficas, y el Sindicato Nacional del Papel es fundamental el *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, ya que sobre los sindicatos sólo existe información en el AGA desde los años 60.

Manuales y monografías sobre Biblioteconomía de la época me han acercado a las técnicas e instrumentos técnicos que se utilizaban en la organización de las bibliotecas de la época.

También se ha utilizado el diario *ABC* para seguir la incidencia de la Feria del Libro en la prensa.

Imprescindible ha sido la consulta de la legislación, publicada en el *BOE*, que para mayor facilidad ha sido obtenida a través de Internet, así como de las series históricas de estadísticas del INE, relativas a bibliotecas, población y alfabetización, también accesibles *on line*.

Respecto a las fuentes estadísticas que sobre bibliotecas he utilizado, los datos no son uniformes, no están sistematizados y son incompletos, pues no todas las bibliotecas enviaban sus cuadernos de recuentos. Varias son las procedencias de esta información. Por un lado, a nivel estatal tenemos la que generó la propia Junta, que se encuentra en el AGA, y las del INE, que se crea en 1945; y por otro, a nivel regional y provincial, contamos con anuarios y memorias.

La documentación estadística de los primeros años de la Junta es bastante caótica, fragmentaria e incompleta, alguna está sin fechar, y las que aparecen manuscritas son, a veces, poco legibles. Sin embargo, el panorama cambia hacia el final de su vida administrativa cuando pasa el testigo al Servicio Nacional de Lectura, encontrándose documentos fechados entre 1951 y 1952 que me han sido de gran utilidad, sobre todo, aquel que recopila todas las bibliotecas municipales por año de creación desde 1933, dando información sobre si estaban en funcionamiento y el número de volúmenes que la componían, entre otros datos.

A nivel regional y provincial, más ricos en información respecto a las bibliotecas públicas, tenemos los anuarios estadísticos de Cataluña y Asturias, y los datos de las memorias de algunos de los centros coordinadores de bibliotecas que se van creando durante estos años (Huelva, Soria, Zaragoza,...) así como las memorias de bibliotecas.

La documentación gráfica relativa a fotografías sobre locales y edificios se pueden localizar en las revistas profesionales mencionadas anteriormente y en alguna publicación oficial, y además, en el AGA existe una caja, ubicada dentro del fondo de Cultura que está clasificada bajo el epígrafe *“Inspección de Bibliotecas. Archivo fotográfico”*, donde están recogidas fotografías de instalaciones bibliotecarias ordenadas por provincias, pero que tienen el inconveniente de no estar fechadas. Por último, el libro *“Diez años de servicio a la cultura española: 1939-1949”* que los funcionarios realizaron para conmemorar y dejar testimonio de los diez años de gestión en el campo de la cultura del ministro Ibáñez Martín, es muy rico en cuanto a documentación gráfica.

## **1. LA POLÍTICA DEL LIBRO ANTES DEL FRANQUISMO**

### ***1.1 LAS CÁMARAS DEL LIBRO Y EL COMITÉ OFICIAL DEL LIBRO***

Hasta la II República no se puede hablar realmente de política del libro, constituyendo una primera iniciativa aislada del Estado, y sin grandes consecuencias, un cuestionario que el Ministro de Estado remitió a los representantes consulares en países de habla española en 1922. En dichos cuestionarios se preguntaba sobre la industria editorial local y el comercio de librería, las ediciones clandestinas y numerosas cuestiones sobre el libro español, tales como, juicios sobre el libro español, plazos en servirse, precios, moneda en que facturaban, comparativa con los libros de otros países, presencia de libros en español de otros países, clases de relaciones comerciales entre los libreros del país con los editores españoles y, por último, se preguntaba cómo verían los libreros del país la instalación de un depósito de libros españoles en su capital.

Sin embargo, la acción política no vino directamente del Estado, sino que fueron las asociaciones profesionales, en concreto las Conferencias de Editores y de Amigos del Libro, las que estimularon la acción del Estado y obtuvieron su consagración definitiva con la creación de las Cámaras Oficiales del Libro –RD. 1922-, reorganizadas después por medio del RD de 23 de julio de 1925-.

El RD de 15 de febrero de 1922 constituyó oficialmente las cámaras del libro en España dándose un paso importante en lo que respecta a la vinculación del Estado a los problemas del mundo del libro. Las cámaras se configuraron como cuerpos consultivos de la Administración pública sobre todo lo que afectaba a la producción, comercio y exportación del libro; estaban integradas por publicistas, editores, fabricantes de papel, impresores, grabadores, encuadernadores y comerciantes de libros. Entre sus competencias estaba la creación de una bolsa de empleo para facilitar la relación entre autores y editores y el intercambio entre estos últimos; cuidar de todo lo que afectase a la Propiedad Intelectual; elaboración de estadísticas de producción, exportaciones, etc.; publicación y difusión de una Bibliografía general española e iberoamericana común; persecución de la competencia ilícita y desleal en todas sus manifestaciones; dirimirían por medio de juicios arbitrales, las diferencias que entre sus socios se susciten, y cuidarían de organizar sindicatos para la exportación del libro español al extranjero.

No se contemplaba la posibilidad de crear más cámaras (Barcelona y Madrid), y ambas se repartirían el territorio nacional. La representación de los distintos sectores era desigual, predominando los editores sobre los demás grupos profesionales. La oficialización de las

cámaras permitió a estas tener presencia en diversos organismos estatales de tipo económico que tomaban decisiones que afectaban a la industria del libro.

No se incluía a los autores, a diferencia de otras asociaciones profesionales anteriores, regulando únicamente los asuntos más puramente comerciales y económicos. El citado decreto regulaba todas las cuestiones relativas a los tipos de papel que se habrían de emplear y la compra del mismo, consiguiendo los editores un descuento en los precios de los papeles empleados para la fabricación de libros. De este modo los papeleros quedaban obligados a pagar a las cámaras del libro la cuota de un céntimo por kilo sobre todo el papel que se consumiera por sus miembros.

La primera en crearse fue la Cámara de Barcelona, que lo hizo en junio de 1918. Con su oficialización se pretendía crear una organización cultural y no una mera entidad preocupada por intereses económicos y comerciales. En cambio, con la creación de la Cámara de Madrid, se quiso convertir una antigua asociación poco coordinada en una entidad con representación social y económica.

Ambas cámaras se organizaron en secciones según los distintos gremios, y en ambas predominaron los editores y libreros de nuevo sobre los demás grupos profesionales, lo que a la larga llevó a que surgieran roces entre los editores y los demás miembros del colectivo de socios. En Barcelona se planteó actuar contra los kioscos que vendían libros haciendo la competencia ilícita a los libreros, y en Madrid, a partir de 1927 comenzaron a manifestarse en la Cámara problemas con los libreros de lance. Éstos pidieron al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria que interviniera para obtener representación en el pleno de la Cámara, resolviéndose con un control de los poderes públicos sobre las decisiones del consejo de gobierno de la Cámara, que nunca fue muy partidaria de incluir a los libreros de lance. La reforma del reglamento de la Cámara en 1932 supuso una ventaja para estos libreros, quienes pasaron de uno a tres vocales en el Pleno.

La preocupación por las relaciones con América constituyó uno de los principales quebraderos de cabeza de las cámaras. Aún más si cabe para la de Barcelona, que se manifestó con dureza al describir el desamparo del libro por parte del Estado, la superioridad de la competencia extranjera, la negligencia nacional durante la guerra y el peligro de perder el mercado de América. En Madrid la industria editorial, a través de su Cámara, se dedicó a pedir a los poderes públicos medidas que facilitaran el camino a la difusión comercial del libro, eliminando las barreras de tipo económico que detenían la compra e impedían que el libro español pudiera enfrentarse en igualdad de condiciones al extranjero.

Para solucionar los problemas del mercado americano ambas cámaras respondieron con la creación de sindicatos de exportación –el SELE madrileño y el Consorcio Nacional de Editores Exportadores catalán-. Con estas organizaciones se pretendía centralizar los procesos de exportación de libros, siendo el medio que enlazaba las necesidades de los demandantes (hispanoamericanos fundamentalmente) con las ofertas de editores y libreros, de manera que siempre que algún cliente de América solicitase un libro, estas organizaciones pudiesen proporcionárselo solicitándolo a sus afiliados. Ambos sindicatos negociaron conjuntamente con la Asociación Papelera para determinar los precios del papel y las bonificaciones a los editores. El Consorcio entró en crisis a causa de la supresión en el presupuesto estatal de la subvención de 1,5 millones de pesetas a la industria del papel, y el SELE a pesar de diseñar una estrategia comercial moderna y con posibilidades de éxito, la escasa voluntad asociativa de los editores impidió que se consiguiesen importantes logros.

Entre las realizaciones exitosas de la Cámara de Barcelona hay que citar la Exposición del Libro Español en Buenos Aires (1928) y la Exposición del Libro Catalán en Madrid auspiciada por la

*Gaceta Literaria* o la propuesta de la organización de una “feria o certamen del libro español” que habría de mostrar el desarrollo de la industria editorial en España, antecedente del RD de 1926 que dio lugar a la Fiesta del Libro. Pese a los proyectos mencionados, la Cámara de Barcelona padeció crónicos problemas económicos que llevaron a su junta de gobierno a plantearse prescindir de todo el personal.

Mejor fortuna tuvieron los nuevos servicios prestados desde la revista *Bibliografía General* en nombre de la Cámara de Madrid a sus asociados: consultorio jurídico, servicio de inscripción de obras en el Registro de la propiedad intelectual, gestión de los permisos de traducción, etc.

La Cámara de Madrid también inició una campaña contra el texto único, ya que éste, era la base para la mayoría de los negocios editoriales españoles. Otra de sus realizaciones fue la creación de la Escuela de Librería inaugurada en marzo de 1929, respondiendo al interés del gremio por profesionalizar el trabajo y regular su aprendizaje.

Las relaciones entre ambas cámaras fueron fluidas, pero no lograron un entendimiento completo. Los decretos de 1922 y 1925 establecieron unas pautas de acuerdo que obligaban a las dos instituciones con respecto a las resoluciones estatales, pero aun así, los conflictos de intereses y los deseos de preponderancia de una sobre la otra no cesaron de manifestarse.

Para regular el aprovisionamiento de papel destinado al negocio editorial y la tipología del mismo, el Estado crea en noviembre de 1920 el Comité Oficial del Libro<sup>32</sup>, dependiente del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Pero su actividad más importante la alcanzó a raíz de la oficialización de las cámaras, cuando su base fue organizada de nuevo para actuar de forma coordinada con las nuevas entidades. Es en el citado RD 23 de julio de 1925 de reestructuración de las cámaras del libro, donde se especifican y amplían sus funciones. Concretamente se le asignaban las cuestiones concernientes a la producción, exportación y comercio del libro; proponer al gobierno toda medida que estimase conveniente; todo lo relativo al papel como la fijación de sus precios; informar al gobierno sobre convenios de Propiedad Intelectual; sería el órgano ejecutivo permanente en los congresos y asambleas que convocasen las cámaras del libro; todo lo referido a la participación de España en exposiciones y otras muestras internacionales y desde 1926 tenía que preparar la celebración del “día del libro”. En 1925 se limitó su capacidad de iniciativa, al padecer endémicos problemas económicos, cesando su actividad en febrero de 1929, pasando sus atribuciones económicas y culturales a servicios diferentes.

Una de sus últimas acciones de importancia fue la organización y convocatoria de la Conferencia Nacional del Libro celebrada en Madrid en marzo de 1927, pretendiendo reunir a los más destacados miembros del mundo del libro, tanto del sector productivo como del sector intelectual.

¿Cómo se articuló la relación entre las Cámaras y el Comité Oficial del Libro? ¿Cuáles fueron sus fines y su naturaleza jurídica? Ambas instituciones se regularon como cuerpos consultivos de la Administración en materia de producción, comercio y exportación de la industria y comercio del libro, ambas dependieron del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria y ambas instituciones representaron a editores, papeleros, encuadernadores, artes gráficas y comerciantes del libro, además de publicistas, aunque en la práctica en las Cámaras van a predominar los editores y libreros de nuevo. Su colaboración se ciñó exclusivamente a fijar el precio del papel. Respecto a su financiación, el Comité Oficial del Libro tuvo una partida

---

<sup>32</sup> Raquel Sánchez García. “La oficialización de las asociaciones (1922-1931)” en: Los patrones del libro. Gijón: Trea, 2004, pp.73-77

presupuestaria directa del Estado, y, además, de las Cámaras recibían el 5% de sus ingresos. En cambio las Cámaras, como organismos cuasi autónomos, dependían fundamentalmente de las cuotas de sus socios, y el Estado indirectamente les asignó recursos provenientes de las actividad de las papeleras. Su funcionamiento, servicios, administración y contabilidad estaban sujetos a la Jefatura de Comercio del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, e incluso éste podía imponer su disolución cuando incurrieran en transgresión grave.

Para armonizar los intereses de los fabricantes de papel y la prensa y demás elementos consumidores, y dado que la industria de la fabricación de papel se consideró como una industria protegible, se creó el Comité Regulador de la Industria de Papel por RD de 11 de mayo de 1928, ¿quizás para sustituir al Comité Oficial del Libro, pronto a desaparecer? En dicho Comité estaban representadas empresas editoras de periódicos, revistas y libros y los fabricantes de papel, y tuvo como misión tomar los acuerdos para regular la producción del papel nacional.

Las fábricas de papel en activo estaban obligadas a satisfacer al Comité una cuota que nunca podía exceder de 0,05 pesetas por kg de capacidad de producción. Con el importe de los gravámenes y compensaciones citados se auxiliaba al papel destinado a la exportación al extranjero, islas Canarias y posesiones de África, así como el que se destinaba en el territorio nacional a la industria del libro y a la publicación de revistas y periódicos diarios. Pero mientras no estaba sujeto a tributación el papel destinado a la edición de periódicos diarios, el papel destinado a la impresión de libros disfrutaba únicamente de un descuento en el precio que se determinaba por el Comité y que no podía bajar de 15 pesetas por 100 kg. En su reglamento de 1928<sup>33</sup> se señalaba que tan solo recibirían primas a la exportación aquellos editores que pertenecieran a consorcios. Posteriormente<sup>34</sup>, se dispuso que los editores de libros que exportaran impresos en papel nacional a los países hispanoamericanos y Filipinas, y aquellos que tuvieran establecidas sucursales propias en dichos países o pertenecieran como miembros activos a alguna organización o sindicato, percibieran subvenciones y bonificaciones.

Me parece necesario, también, citar la legislación que sobre el libro de texto<sup>35</sup> se realizó en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, por cuanto afectó a los editores.

La idea de reformar la política de libros escolares acentuando la uniformidad y homogeneidad de los textos aparece oficialmente a los dos meses de implantada la Dictadura de Primo de Rivera en la Real Orden de 29 de noviembre de 1923, en la que se solicitaba del Consejo de Instrucción Pública una propuesta de norma que extirpara los abusos cometidos en los libros de texto de todos los grados de enseñanza. La idea misma de que el Estado editase un único libro de texto para cada asignatura encontraría su cauce en el RD de 23 de agosto de 1926, que, aunque tuvo una gran oposición en la prensa, el profesorado, padres y mundo editorial, llegó a promover varios concursos de los que salieron designados, durante los años 1928 y 1929, los libros oficiales para el bachillerato.

El RD de 23 de agosto estableció la obligatoriedad de estudiar todas las asignaturas que se cursaran en los Institutos por los libros que fueran declarados de texto (art. 1º), no pudiendo exigirse otros que los que fueran declarados de texto por las comisiones calificadoras en los concursos de obras dictadas (arts. 2º y 3º). La justificación de esta medida la encontramos en

---

<sup>33</sup> RD 23 agosto 1928

<sup>34</sup> RD 7 febrero 1931, nuevo Reglamento del Comité Regulador

<sup>35</sup> Ver: Emilio Díaz de la Guardia Bueno. "Evolución de la enseñanza media en España 1875-1930: un conflicto político-pedagógico" (1988).



la exposición del decreto en la que se afirma que, a pesar de la libertad de textos que existía legalmente y la prohibición a los catedráticos de fijar un libro de texto, el alumno no podía elegir libremente porque, “no faltaban indirectas insinuaciones de los catedráticos que les den resuelta la opción”.

La Cámara Oficial del Libro de Madrid, protestó en cuanto que era un sector implicado y perjudicado, ya que el decreto imponía una merma considerable en la producción de libros y en las ganancias, al fijar el estado un único modelo por asignatura, y su publicación a precio de coste, con un recargo que no excediese del 25% para compensar el importe de los premios concedidos a los autores de los libros elegidos como textos oficiales.

Para manifestar su protesta formal, la Cámara Oficial entregó una notificación a la prensa en la que se exponía que<sup>36</sup>:

“1º El texto único mata el espíritu investigador y de trabajo del alumno y del profesor; 2º No sigue de cerca los nuevos descubrimientos científicos (los libros se renuevan cada cinco años); 3º En materias sujetas a la libre discusión puede afectar a la formación del alumno por el partidismo, sectarismo, etc.; 4º Perjudica a los intereses de las industrias del libro en un momento en que la economía anda mal y las empresas están recargadas de impuestos.

Además, consideraban que los posibles abusos de los catedráticos estaban en función de los bajos salarios que pagaba el estado. Por lo que proponían como solución no el texto único, sino vigilar los fraudes y el contenido de los libros por medio de inspecciones de los organismos competentes; y la instauración de un cuestionario único para toda España, dejando plena libertad para desarrollarlo dentro de los límites expuestos a los profesores, y plena libertad, también para producirlos, porque sólo con el juego de la libre competencia puede llegarse a depurar y perfeccionar el libro en su aspecto científico y materia.

Para Raquel Sánchez<sup>37</sup> estas reivindicaciones revelaban la absoluta dependencia del sector del libro de las decisiones gubernamentales, la falta de un ámbito propio y la escasez de mercado para desenvolverse, prueba de ello era que la base que sustentaba la mayoría de los negocios editoriales era el libro de texto.

Por iniciativa de Vicente Clavel<sup>38</sup>, vocal de la Cámara del Libro de Barcelona desde 1922, y en colaboración con el Comité Oficial del Libro, se estableció la fiesta anual del libro español el 7 de octubre, fecha del posible nacimiento de Cervantes. El 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII firmaba el Real Decreto por el que se instituía oficialmente la "Fiesta del Libro Español."

Su objetivo era favorecer la expansión del mercado del libro de dos maneras: contribuyendo a la promoción del libro en la sociedad española así como a la compra de libros españoles. Se pretendía estimular la producción industrial a la vez que ganar influencia y prestigio en el exterior a través de los valores literarios y culturales españoles e hispanoamericanos. Para ello en este día debían celebrarse actos académicos, conferencias y lecturas de obras en academias, universidades, institutos, escuelas públicas y privadas, cuarteles y centros de beneficencia y se instaba a los docentes de todos los ámbitos educativos a inculcar y mantener

---

<sup>36</sup> Nota enviada por la Cámara Oficial del Libro al diario “El Heraldo de Madrid”, con fecha de 13 de septiembre de 1926 y publicada el 16 de septiembre. La nota iba firmada por Julián Martínez Reus como Presidente de la Cámara y por Pedro Sainz Rodríguez, secretario interino de la misma.

<sup>37</sup> Raquel Sánchez. “Los patrones del libro”. Gijón: Trea, 2004, p. 94

<sup>38</sup> Vicente Clavel Andrés, escritor y editor valenciano, amigo y correligionario de Blasco Ibáñez, establecido desde el año 1920 en Barcelona, donde rigió durante mucho tiempo la Editorial Cervantes y donde murió en 1967.

la afición a la lectura y el amor al libro. Por otro lado, se instituía que las diputaciones provinciales cada año tenían que crear al menos una biblioteca popular en el territorio de su provincia respectiva. Todos los ayuntamientos estaban obligados a destinar una cantidad que variaba del medio al tres por mil, según el presupuesto y el número de habitantes, a la creación de bibliotecas populares o al reparto de libros entre los establecimientos de enseñanza, de beneficencia y entre los niños desfavorecidos. Y las corporaciones y las entidades que percibían alguna subvención del Estado, de la provincia o del municipio debían dedicar el 1 por 1.000 de estas subvenciones a la compra y el reparto de volúmenes. La idea era ambiciosa pero, como tantas otras ideas y proyectos lanzados al viento, no arraigó con suficiente fuerza. Y, por último, a las cámaras del libro y sus agremiados se les obligaba a establecer descuentos en la venta de libros y a realizar donativos a instituciones educativas y de beneficencia, incluidas las prisiones.

El Decreto creaba, también, unos premios de mil pesetas que otorgarían las Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y de Barcelona a los mejores artículos periodísticos que se publicaran en idioma español.

Al Comité Oficial del Libro le correspondía recibir “la relación detallada de los actos celebrados, adquisiciones de libros efectuadas y distribución de los mismos, así como copia de los discursos, memorias o trabajos pronunciados o leídos, afín de que debidamente compilados y extractados, puedan servir de enseñanza y estímulo para el futuro”. En su ejecución se implicaban varios ministerios: Trabajo, Comercio e Industria; Gobernación; Instrucción Pública y Gracia y Justicia.

Hay que reconocer, de entrada, la buena intención del Día del Libro de promover el libro y la lectura. Pero no debemos olvidar los errores en que incurrió desde sus inicios<sup>39</sup>. Por un lado, la discriminación evidente hacia los libros escritos en otras lenguas que no fueran la castellana: se habla siempre y de una manera expresa de “lengua castellana” de “la lengua de Cervantes.” Discriminación que no se supera de manera oficial hasta que se promulga la Ley del libro de 1975.

En 1928 la fiesta a efectos comerciales se convirtió en Semana del Libro, días en que los libreros sacaban puestos de libros a la calle, en las aceras de sus establecimientos para atraer al público. Y en 1930 se traslada al 23 de abril, día de la muerte de Cervantes, considerando que el mes de abril era más indicado para actos en la calle que no en octubre, donde el tiempo no acompañaba, además, la coincidencia con el inicio del año escolar perturbaba la venta de libros de texto, en las librerías del ramo.

Si en la legislación no hubo una verdadera política del libro que abarcara todas sus facetas, ésta sí estuvo recogida en las actas y conclusiones de la Conferencia Nacional del Libro de 1927, que para Javier Lasso de la Vega<sup>40</sup>, fueron un “precioso e interesante cuerpo de doctrina y comentarios”.

En la Conferencia Nacional del Libro de Madrid (1927), a diferencia de anteriores reuniones profesionales, se intentó el diseño de una política general del libro que habría de tener dimensiones tanto culturales como comerciales. La Conferencia pretendió ir más allá de los intereses de los editores y libreros reuniendo a personas de todos los ámbitos relacionados

---

<sup>39</sup> Josep M. Ainaud de Lasarte. “Los cincuenta años del Día del Libro”. Barcelona : Gremio de Editores, 1976

<sup>40</sup> Entre los representantes propuestos por la Cámara de Madrid para el gremio de editores estuvo Javier Lasso de la Vega. Esta afirmación aparece en “Política del libro” documento de su Archivo Personal - UCM Caja 2

con la cultura (aparte de representantes del mundo de la edición y de las artes gráficas, asistieron representantes de universidades, cámaras de comercio, Asociación de la Prensa de Madrid, de los Ateneos, de los colegios de doctores, de editores españoles en el extranjero, academias,...), lo que en la práctica no haría más que dificultar las discusiones en torno a los asuntos relativos a la producción del libro.

En la Conferencia se afirmó con claridad que los auténticos problemas del libro, estaban afectados por un lado, con el bajo nivel de alfabetización, y por otro, con las cuestiones relacionadas con la producción y la venta.

En cuanto a la dimensión cultural, en la Conferencia se sugirió pedir que el gobierno intensificara la dotación del presupuesto de Instrucción Pública en Bibliotecas, se solicitó que se dictara un Real Decreto sobre Bibliotecas Populares y circulantes obligatorias, incorporándonos al movimiento mundial sobre esta materia. Que las Bibliotecas provinciales se convirtieran en populares con el auxilio económico de las Diputaciones y Ayuntamientos, y que en las universitarias se crearan secciones populares.

Solicitar un Real Decreto prohibiendo terminantemente que las consignaciones para compra de libros o fomento de bibliotecas figuraran en los presupuestos de cualquier Ministerio, Provincia o Municipio pudieran ser objeto de transferencia; siendo su incumplimiento motivo de reparo por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública. Las adquisiciones de libros se harían exclusivamente en función de las selecciones que hiciesen los jefes de bibliotecas y el director de la Biblioteca Nacional, y que las ediciones de obras publicadas por el Estado se vendiesen a poco más del precio de coste respetándose el descuento mínimo del 25% a los libreros.

La Asamblea exigió al gobierno que se cumplieran los arts. 9º y 10º del RD de 5 febrero de 1926 (de creación del “Día del Libro”) relativos a que cada Municipio debía establecer una Biblioteca Pública de importancia proporcional al número de habitantes y a la cuantía de su presupuesto. Y, finalmente, que al dictarse dicho decreto se tuviera en cuenta la legislación de países como Alemania, EE.UU., Inglaterra y Bélgica.

Todo un amplio programa de ambiciosas medidas en el ámbito de la política bibliotecaria que apenas se desarrolló.

Entre los temas relativos al tratamiento de los problemas económicos del libro, estuvieron las reformas de los preceptos legales vigentes en materia de propiedad intelectual, la defensa contra las ediciones clandestinas, la política arancelaria, la protección y expansión del libro, la competencia ilícita y la protección del libro en relación con la propiedad industrial, la organización de la industria librera, la subvención para la edición de folletos y libros científicos, la adquisición de libros por el Estado y las comunicaciones y transportes.

Por lo que respecta a la política arancelaria, quedó establecida la exención arancelaria para todas las máquinas de la industria editorial. Se incrementaron los supuestos de competencia ilícita, que además de alcanzar a los precios o a los ataques a la propiedad intelectual, se ampliaron a los fraudes en el tipo de papel o material de fabricación, la utilización de iconos gráficos ajenos, la venta al público en centros de enseñanza. Se decidió crear escuelas relacionadas con el mundo del libro y se consiguió el compromiso del Estado tanto para la adquisición de libros como para el desarrollo bibliotecario del país.

También se sacó a la luz el tema del papel. En este punto hay que recordar que los editores llevaban bastantes años pidiendo a los poderes públicos la igualación del pago de papel a la prensa que se había visto favorecida desde el final de la guerra mundial. Todos los periódicos reaccionaron con virulencia ante la decisión de la Asociación General Papelera en la Conferencia de pedir modificación del arancel, lo que perjudicaría los intereses de la prensa.

La Conferencia apenas tuvo eco para la prensa. El *ABC*, en concreto, criticó la actitud de los editores de querer obtener pequeñas ventajas económicas y considerar al libro un mero objeto mercantil, lo que según el diario, perjudicaba a los autores y a la prensa.

Vistas las acciones del Estado, podemos deducir que éstas estuvieron condicionadas por las iniciativas privadas de las asociaciones profesionales y el monopolio de La Papelera Española. Es cierto, que se logró una mayor visibilidad y resonancia social de los problemas del libro gracias a las instituciones que se crearon alrededor del mismo. También se favoreció a la prensa frente a los editores de libros y, la regulación del papel fue el tema estrella que más decretos y órdenes generó. Por último, los gobiernos de Primo de Rivera dejaron para la posteridad un Real Decreto con gran permanencia en el tiempo, aquel que establecía la Fiesta del libro, y como buena dictadura, apostó por el texto único en el ámbito del libro escolar.

En concreto el papel, su distribución, precios, aranceles, exportación/importación fue la materia objeto de más regulación y reglamentación por parte del Estado. La creación del Comité Oficial del Libro, los decretos que dan nacimiento a las Cámaras del Libro, y el Comité Regulador de la Industria del Papel fueron sus mayores exponentes.

El que se favoreciera a la prensa frente a los editores de libros, aparte de los subyacentes intereses económicos de las papeleras, entroncaba, con el paternalismo y cinismo que ya mostraron los políticos gobernantes desde el s.XIX. Como el obrero no podía leer libros, ya que con sus sueldos bajos no podía comprarlos, sólo podía leer periódicos. Idea que expresó claramente Sagasta en la exposición de motivos en el R.D. de 1 de mayo de 1871 que fijaba la cuota del timbre para los periódicos<sup>41</sup>:

“La elevada misión de la prensa periodística en todos los países de adelantada civilización es en nuestra patria más importante que en ninguno, pues estas publicaciones son las fuentes de instrucción del pueblo, a cuyo fácil alcance no se encuentra el libro por el excesivo precio que comparativamente aquí se señala. El periódico es en España el libro del obrero, y en el encuentra la pauta de sus derechos, así como la norma de sus obligaciones (...) Estas poderosas razones movieron al que suscribe a disminuir en diferentes épocas las cargas que pesaban sobre”.

A lo anterior podemos añadir otra contradicción más de los políticos. Durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera, la prensa sufrió más duramente el acoso de la censura que los libros editados. Lo que en el diario podía ser malo y objeto de sanción, lo mismo publicado en un libro no ofrecía el menor peligro, ya que llegaba a menos gente.

Concretamente, en 1922, el precio medio de un libro (3,5 pesetas) correspondía a más de la mitad del salario diario de la mayor parte de los profesores, que percibían de 5 a 7,5 pesetas diarias. La tirada media de una obra de creación era de 150-250 ejemplares y el nivel medio de lectores de obras literarias se reducía a 200.000-300.000 personas. Las obras publicadas conocieron una neta regresión en la Dictadura: de 4.820 libros registrados en el DL de la BNE en 1917 se pasó a 2.903 en 1925 y a 3.000 en 1930. Con todo, los últimos años de la Dictadura fueron una época de gran efervescencia editorial<sup>42</sup>.

¿Qué opinión les mereció a los contemporáneos las medidas sobre política del libro?

---

<sup>41</sup> Citado por Pedro Pascual. “El papel, instrumento político”, II Congreso Nacional de Historia del Papel en España: Actas, 1997, p. 320

<sup>42</sup> Eduardo González Calleja. “La España de Primo de Rivera: la modernización autoritaria (1923-1930)”, pp. 285-288

Las críticas más tempranas a la carencia de una política oficial del libro de España vinieron de dos editores catalanes, Gustavo Gili y Vicente Clavet, que expusieron en la memoria leída en la Junta General de la Cámara de Barcelona el 30 de mayo de 1920<sup>43</sup>:

“Una de las peores contradicciones que la causa del libro ha venido sufriendo en España desde tiempo inmemorial, ha sido la falta de un organismo público que se ocupase especialmente de sus problemas [...] y así resulta que los intereses del libro, cuando necesitan de alguna medida gubernamental que los ampare o apoye, no saben materialmente adónde dirigirse. Para pagar contribuciones, dependen de Hacienda; para solicitar expansión en las aulas, necesitan de Instrucción Pública”.

Pese a los intentos de configurar una imagen de la industria del libro que provocase en los poderes públicos una reacción favorable, las cosas no marchaban de forma halagüeña como manifestó Gustavo Gili, de nuevo, ante sus socios el 2 de febrero de 1925:

“El señor Gili expresa su criterio de que conviene gestionar del poder público una mayor atención a los asuntos que al libro se refieren, pues la actuación seguida últimamente no es la más favorable para desarrollar la política del libro que se había iniciado: disminución de la subvención asignada al Comité Oficial del Libro; exclusión de los representantes de las Cámaras del Consejo Económico Nacional, del Instituto de Comercio y otros organismos defensores de la producción; la no atención que presta el gobierno a ferias y exposiciones, fuente segura de propaganda y difusión de la cultura”.

Además, la dictadura de Primo de Rivera dejó fuera a la industria del libro en el RD de protección de las industrias, lo que llevó a la mayoría de los empresarios de las artes gráficas catalanas a demandar que esta medida se ampliase al sector del libro.

También muy crítico, Xavier Cabello Lapiedra, desde las páginas de *Bibliografía Española*<sup>44</sup> puso el acento en la dejación por parte del Estado de los aspectos culturales del libro frente a los económicos.

“Todas las disposiciones oficiales encauzadoras del problema del libro adolecen de un defecto de origen. Sólo se atiende a la necesidad del socorro y auxilio a la parte económica del problema, olvidando que ésta, muy importante, no puede tener sólida estabilidad y desarrollo si no se protege en primer término su elemento esencial”.

Y prosigue diciendo que:

“Ni en un solo instante de la vida oficial brota de la pluma del gobernante una sola disposición que vaya encaminada a buscar el fomento y la prosperidad de la parte espiritual de la producción del libro. El Ministerio de Instrucción Pública permanece mudo, y son las Cámaras del Libro quienes debían sacarle de ese mutismo. El RD de 23 de julio de 1925 parecía que venía a calmar las ansias de protección al libro en su aspecto espiritual, pero no se atreve a llegar a una exención de pago de los tributos establecidos por el Fisco a cuantas industrias complementarias forman las de la edición, así como la franquicia postal. A penas vagamente se dice en el citado Real Decreto que las Cámaras contribuirán a todo fin que aumente y difunda la cultura o que concederán subvenciones, premios y pensiones en beneficio de la industria y comercio del libro”.

---

<sup>43</sup> Citado por Raquel Sánchez García. “Los patrones del libro”. Gijón: Trea, 2004, p. 101

<sup>44</sup> Xavier Cabello Lapiedra. “Indicaciones para fomentar y desarrollar la afición al libro y su producción en España”. *Bibliografía General Española e Hispanoamericana*, año III, núm. 2, febr. 1928, pp. 32

## **1.2 LA POLÍTICA REPUBLICANA. EL INSTITUTO DEL LIBRO ESPAÑOL<sup>45</sup>**

Con la II República el acceso a la cultura y a la educación de los ciudadanos fue un objetivo que se planteó el Estado democrático, por ello consideró urgente alfabetizar a la población y asegurar el acceso al libro para mejorar su capacitación profesional, su formación cultural y su educación cívica con vistas a su participación en la vida pública. Y en orden a estos principios se elaboró una temprana política bibliotecaria cuyo objetivo fue acercar a todos los habitantes el libro. Tal política se articuló alrededor del Patronato de Misiones Pedagógicas y de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Las bibliotecas del Patronato formaron parte de la acción de extensión cultural desarrollada por Misiones en el ámbito rural atendiendo preferentemente a localidades aisladas y de población reducida. La Junta, en cambio, se encargó de modernizar el patrimonio bibliográfico nacional y de la dotación y expansión de las bibliotecas en localidades mayores, tratando de implicar a las autoridades municipales en su funcionamiento. Esta política bibliotecaria además favoreció el negocio del libro.

También, desde los primeros momentos la República adoptó disposiciones gubernativas respecto al libro escolar<sup>46</sup>. Una de las medidas iniciales del gobierno provisional fue el decreto de 22 de agosto de 1931, por el que se anulaba el libro de texto único y se reponía la Ley Moyano, es decir, se volvía al sistema de lista<sup>47</sup>. También dictó otro decreto, con fecha 8 septiembre de 1931, sobre precio y calidad de los libros de texto, en cuyo preámbulo se enumeraban los defectos que padecían éstos en cuanto a rigor científico, falta de pedagogía, imperfecciones de impresión y precios excesivos. Pero a la larga, se adoptó la solución tradicional<sup>48</sup> de encargar al Consejo de Instrucción Pública la selección de los libros escolares, empezando por los de lectura, de acuerdo con razones pedagógicas, científicas, literarias y económicas, pudiendo el maestro escoger de entre un mínimo de doce obras de materia. Más tarde, se legisló sobre los libros de texto del Bachillerato, acudiéndose de nuevo al criterio tradicional de que éstos se rigieran por unos cuestionarios predeterminados para cada asignatura. Con el estallido de la guerra civil el libro escolar se hará beligerante y adoctrinante.

Más tardías fueron las medidas tomadas en relación al mundo del libro quedando englobadas en tres actuaciones: el establecimiento de depósitos de libros en América, la creación del ILE - Instituto del Libro Español- y el apoyo a las ferias del libro<sup>49</sup>.

Aparte de la concesión temporal de primas a la exportación, entre 1928 y 1932, y el apoyo a la creación del SELE (Sindicato Exportador del Libro Español) y del Consorcio Nacional de

---

<sup>45</sup> Ver: Ana Martínez Rus. "La lectura pública durante la Segunda República". En: *Ayer* nº 58, 2005 (2), pp. 179-203 y Ana Martínez Rus. "La política del libro durante la Segunda República". Gijón: Trea, 2003

<sup>46</sup> Manuel de Puelles Benítez. "La política del libro escolar en España (1813-1939). En: *Historia ilustrada del libro escolar en España: del Antiguo Régimen a la Segunda República*". Madrid: F.G.S.R, 1997, pp.63-65

<sup>47</sup> El sistema de listas de la ley Moyano permitía la elección entre diversos libros escolares aprobados oficialmente. Inaugurado en 1840, dio estabilidad a la práctica del sistema que perduró hasta 1901 para los libros destinados a la enseñanza universitaria y hasta 1991 para los de la educación puramente escolar.

<sup>48</sup> Orden ministerial de 28 de mayo de 1932 y el decreto de 12 de octubre de 1934.

<sup>49</sup> Ana Martínez Rus. "La política del libro durante la II República". Gijón: Trea, 2004

Editores Exportadores, los poderes públicos no se ocuparon del comercio de libros con América hasta 1935 con la Segunda República, y entonces el Estado pretendió asumir la sistematización de la exportación ante la incapacidad de la iniciativa privada. La orden de 1 de marzo de 1935 del Ministerio de Instrucción Pública dispuso la instalación de depósitos de libros en Hispanoamérica<sup>50</sup>, es decir grandes stocks de libros para su venta al por mayor a los libreros, para racionalizar el comercio con aquellos mercados. Pero el Estado en ningún caso iba a comprar o vender libros al por menor. Con esta medida se pretendía paliar las demoras que implicaba la correspondencia y remesa de obras a larga distancia; abaratar los costes de envío al hacerse en grandes masas y en barcos españoles; facilitar las liquidaciones, siempre tardías y algunas veces desastrosas; mantener y defender la pureza del castellano y facilitar el estrecho contacto espiritual con las repúblicas americanas, estableciendo un régimen de reciprocidad de depósitos de libros americanos en España.

Pocos después, el 27 de abril de 1935, se crea el Instituto del Libro Español como organismo impulsor de la política del libro. Por fin, parecía que la idea, tan demandada por distintas voces desde fines del XIX, de crear un organismo público centralizado encargado de coordinar y encauzar los intereses económicos y culturales del libro, se había materializado.

Al Instituto se le asignaron diversas y complementarias funciones.<sup>51</sup> Formar y difundir la bibliografía del libro en lengua española; cooperar con el depósito legal y con el registro de la Propiedad Intelectual; llevar la estadística comercial de la producción del libro y el registro de autorizaciones y contratos con autores y editores extranjeros; vigilar los tratados de Propiedad Intelectual, sobre todo en los países iberoamericanos; realizar cada año un plan de publicaciones para completar o perfeccionar la bibliografía española; organizar periódicamente ferias y exposiciones del libro español en el extranjero y crear depósitos de libros en las principales capitales americanas, pero sin intervenir en la exportación.

A la vez, se erigía en representante de los intereses públicos, de los autores, editores, libreros y exportadores, y, por tanto, debía gozar de autonomía y medios económicos para desarrollar una labor cultural y de expansión del libro en España y en el extranjero.

El ILE debía estimular la difusión del libro y proteger la producción de los editados en España, coordinando para ello sus actividades con los organismo oficiales ya existentes que perseguían los mismos fines, es decir, las Cámaras. Debiendo consultar a éstas todos los asuntos referidos al libro y colaboraría con ellas en la propaganda de las publicaciones nacionales. Las apoyaría, pero sin sustituirlas en sus actividades. Debía prestarles, en determinadas condiciones, un auxilio económico directo, pero sobre todo indirecto, realizando aquellas funciones que escaparan a la capacidad de las empresas privadas, facilitando el apoyo de sus organismos técnicos y soportando gastos poco productivos en plazo breve, pero que contribuían a una intensificación y un perfeccionamiento en la producción y difusión de los libros.

---

<sup>50</sup> La idea de los depósitos no era nueva, Rafael Gutiérrez García en su proyecto de 1892, ya proponía establecer 17 depósitos internacionales de libros en lengua castellana con el objeto de abastecer de libros a los libreros y comisionistas, también abastecerán de libros a los libreros y comisionistas establecidos en dichas naciones. Y en los cuestionarios que el estado envió a los cónsules de España en América en 1922 para conocer tanto la situación de la industria editorial y el comercio de librería de las distintas repúblicas, ante la sugerencia de instalar un depósito de libros españoles en las diferentes capitales parece que no tuvo muy buena acogida, pues para algunos su fundación exigiría mucho tacto y cuantioso capital, y se le combatiría si los editores iban a entenderse directamente con el público. Para otros, ni los libreros instalados en América ni los editores españoles, los considerarían convenientes a sus intereses.

<sup>51</sup> Reglamento aprobado por orden del 25 de octubre de 1935

Para las Cámaras, las actividades del ILE debían ser de asesoramiento, a imitación del desaparecido Comité Oficial del Libro (1920-1929). Consideraban que este organismo debía ayudar a los editores y libreros en la conquista del mercado americano, pero sin actuar directamente; encargarse de informar sobre las leyes de propiedad intelectual de cada país y sobre la situación de cada mercado librero americano; elaborar catálogos y bibliografías de obras en castellano realizados por las Cámaras y organizar ferias y exposiciones del libro español en el extranjero.

Esta teórica armonía de competencias no se correspondió con la realidad, y la intervención del ILE en la exportación de libros a través de los depósitos, enfrentó a editores y libreros con el Gobierno durante 1935 y 1936.

La realidad fue que los depósitos limitaban la iniciativa privada, y perjudicaban la red mercantil establecida por cada editorial los países americanos. Por otra parte, las competencias del ILE coincidían en buena medida con las atribuidas desde su fundación a las Cámaras del libro, donde productores y comerciantes tenían más peso que en el ILE. De hecho emprendieron todas las acciones legales posibles para paralizar o desvirtuar ambos proyectos. Consideraban que tanto los depósitos como el ILE obstaculizaban el intercambio con los mercados americanos, así como el desarrollo normal de la industria y el comercio del libro en el ámbito nacional. Los protagonistas del libro demandaban un organismo de apoyo, que concediese subvenciones a la exportación y redujese los derechos arancelarios en las materias primas, pero que en ningún caso se encargase de regular la producción y el comercio del libro, ni se entrometiese en la labor de las corporaciones. En este sentido ambas cámaras solicitaron del Ministerio de Industria que se convirtiese en ley el RD de 23 de julio de 1925 sobre reorganización de las corporaciones del libro para dar mayor estabilidad a estas entidades, pero no lo consiguieron.

Además las Cámaras también protestaron ante su escasa representación en la Junta del ILE y reclamaron mayor protagonismo de las corporaciones de Madrid y Barcelona en la organización de los depósitos porque desconfiaban del intervencionismo estatal en la exportación de libros.

En el fondo, este enfrentamiento no hacía más que reproducir un conflicto entre la iniciativa privada y el Estado. Los editores y libreros se habían mostrado incapaces de sistematizar el comercio con América, de ahí las constantes quejas y escritos enviados a los ministerios de Comercio y de Estado solicitando ayuda para superar los obstáculos que entorpecían la exportación. Pedían apoyo económico e institucional, pero cuando el Estado intervino para regular la situación se opusieron. Entonces los editores reconocieron las actividades del ILE en relación con la política del libro en el extranjero, pero reivindicaron para las Cámaras la labor de difusión y propaganda del libro en España.

A esto hay que añadir que en la corta vida del ILE, éste sufrió constantes modificaciones relacionadas con los cambios que se sucedieron en el Ministerio de Instrucción Pública: en dieciséis meses hubo ocho ministros de partidos distintos.

La actitud de las cámaras del libro ante la proclamación de la II República fue de aceptación al igual que el resto de organizaciones patronales. Aunque protestaron contra la legislación social y laboral, el mundo del libro no fue hostil a la República ya que otras muchas medidas como la política bibliotecaria les beneficiaron, pero el recargo del 25% sobre la contribución industrial, dividió al sector provocando el fraccionamiento entre los que estaban a favor de la República y de su generosa política cultural de protección al libro, y los que defendían los intereses de los pequeños editores y libreros así como de impresores y encuadernadores humildes.



Las corporaciones realizaron numerosas actividades que favorecieron la ampliación del mercado librero como el *Catálogo de la Librería Española*, la organización de la fiesta y la feria del libro, la Escuela de Librería, aunque también fracasaron en la reglamentación de la venta del libro o la reforma de la ley de propiedad intelectual. Precisamente las rivalidades entre editores y libreros impidieron su realización, y cuestionaron la viabilidad y utilidad de las Cámaras. Para superar estas diferencias en un marco más amplio y con intervención estatal surgió el ILE. Pero la vertiente mercantilista de los profesionales acabó chocando con la preocupación cultural de la administración por difundir el libro español dentro y fuera de las fronteras. Además la actuación del ILE como rector de la política del libro suponía la desaparición de las corporaciones o su inclusión en el nuevo organismo, al invadir las funciones asignadas a las mismas.

El conflicto desatado entre editores e Instituto explica que tras la guerra civil, la actividad del ILE se recupere con la creación del INLE el 19 de abril de 1941 y que las cámaras desaparecieran.

Las ferias del libro de Madrid y los recorridos del camión-librería por distintos pueblos del país, fueron iniciativas de sector editorial para responder a la nueva demanda de lectura. Los editores, conscientes de las nuevas posibilidades del mercado interior, con la extensión de las escuelas y las bibliotecas, y de la débil red de distribución y puntos de venta, consideraron que debían fomentar la difusión del libro, acercando las obras al público. Interesados en la búsqueda de nuevos lectores, en la creación de canales de propaganda efectivos y en la ampliación de los sistemas de comercio, optaron por llevar el libro a la población. Con ello contribuyeron a la divulgación del libro, en consonancia con el proyecto cultural republicano, y mejoraron sus negocios. Además las autoridades republicanas respaldaron con su presencia, participación y autorización las ferias y las rutas del camión librería.

La idea de la feria del libro surgió de la Escuela de Librería, que funcionaba dentro de la Cámara de Madrid, y su mentor fue el editor, y profesor de la Escuela, Rafael Giménez Siles. La respuesta del público demostró que existía un ambiente cultural favorable y una demanda social de lectura importante. Se llegaron a celebrar cuatro: 1933, 1934, 1935 y 1936.

## **2. LA POLÍTICA DEL LIBRO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1951)**

### ***2.1 EL LIBRO ESPIRITUAL, IMPERIAL Y CATÓLICO***

La política del libro no es un ente aislado sino que forma parte de la política cultural e informativa de un país. Ambas fueron esenciales para la legitimación del Nuevo Estado, y su control junto a la educación, fueron motivo de disputas entre los que defendieron un proyecto inspirado en el fascismo –la Falange– y los que tutelados por la Iglesia católica defendían el tradicionalismo y el integrismo. El resultado fue que la cultura y la enseñanza quedaron en manos de los tradicionalistas católicos, con una penetración marginal de la Falange. Esto demuestra que los medios socializadores de la Iglesia católica en el control de las costumbres y de la moral y en el adoctrinamiento de la sociedad a través de la política cultural y del aparato educativo, fue mucho más efectivo. Sólo la prensa y la radio pertenecientes al Movimiento quedaron bajo el control del partido único.

Durante estos años asistimos a una confusión entre propaganda y cultura. De hecho, la labor propagandista en el bando sublevado partió del control de cualquier manifestación cultural, incluido el libro, como garante del orden y el bien común.

Concretamente se utilizó el libro de texto y la propaganda a través de la edición de libros pro afines y el control del resto mediante la depuración y censura y la intervención sobre su distribución y su comercio<sup>52</sup>.

Abarcar el estudio y análisis de la política del libro supone por un lado, identificar el conjunto de acciones oficiales y particulares desarrolladas para la producción, distribución y venta del libro, y, por otro, tener en cuenta que es un instrumento básico de educación, transmisión cultural y socialización política.

Abordar la política del libro durante la primera década del franquismo implica contemplar distintos aspectos políticos, todos ellos complementarios, pero que a la hora de su planificación y ejecución por parte de sus gestores se hicieron de manera descoordinada y separada sin tener en cuenta una concepción global del libro que comprendiera tanto su faceta económica como la educativa y cultural.

La política del libro en su dimensión no económica estuvo vinculada a la propaganda y a la censura, a la política cultural, tanto en el interior como en el exterior y a la política educativa, concretamente en el libro escolar.

Estas tres facetas han sido estudiadas de alguna manera, aunque con intensidad variable<sup>53</sup>, pero lo cierto es que nunca se han expuesto conjuntamente como elementos de una política que obedecieron a unos mismos principios ideológicos.

Pero antes de entrar de lleno en ellas y las conclusiones a las que han llegado las diferentes investigaciones veamos cómo interpreta la política del libro el nuevo Régimen.

Desde los presupuestos del falangismo la política del libro<sup>54</sup> implicaba realizar los valores imperiales del falangismo en España y América a través de un libro purificado de impregnaciones de liberalismo y marxismo de la época republicana.

“Al libro corresponde el cuidado de los intereses espirituales de los españoles establecidos en América y de quienes en Extremo Oriente conservan la lengua y la literatura de España”<sup>55</sup>

“No se ha de producir el libro español para andar por casa, sino para volar por el ancho mundo del habla española (...). El pensamiento de España, la Moral, el Derecho, el Arte y la concepción total de la vida, vertida en nuestra Catolicidad, han de ir a donde quiera que se hable nuestro idioma a mantener la influencia espiritual, que es la marca legítima de nuestro Imperio. (...).

---

<sup>52</sup> SEVILLANO CALERO, F. Propaganda y dirigismo cultural en los inicios del Nuevo Estado, *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, nº. 1, 2002 (Ejemplar dedicado a: Instituciones y sociedad en el franquismo), págs. 81-110 y SEVILLANO CALERO, F. “Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo”, *Ayer* (1999), nº 33, pp. 147-166

<sup>53</sup> La censura del libro, desde un punto de vista histórico, ha sido estudiada por José Andrés de Blas, Ruiz Bautista y Fernando Larraz; la política exterior cultural por Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (1992) y los estudios sobre el libro escolar han sido más prolíficos como se verá más adelante.

<sup>54</sup> Larraz, F. Una historia transatlántica del libro, Gijón, Trea, 2010 p. 137

<sup>55</sup> *Bibliografía General Española e Hispanoamericana* n. 3, junio-julio-agosto 1941, p.1

Serán necesarios esfuerzos heroicos en este sentido; pero se harán sin omitir medios hasta conseguir que España recobre la rectoría de la espiritualidad del mundo hispánico”<sup>56</sup>

En plena euforia del sector falangista en el poder controlando los medios de comunicación se explicaba la importancia que para el Nuevo Estado debía tener una política del libro combativa e intervencionista, arma fundamental para llevar a cabo la revolución espiritual<sup>57</sup>:

...el Instituto no puede limitarse a continuar, ni siquiera a renovar. Viene a implantar una política del libro o, mejor aún, a introducir en el dominio del libro la gran política española de la Falange. Esta política del libro es de absoluta perentoriedad para el nuevo Estado. Una revolución de tipo preeminentemente espiritual, que pone principal acento en restablecer el imperio moral de España en el mundo, necesita por exigencias de su misma naturaleza, controlar la producción editorial, vehículo del pensamiento, y encauzarla en derechura a su finalidad. La revolución tiene sus etapas, sus pasos contados; pero ni por un momento puede desatender este aspecto de la educación de la conciencia pública, de la modelación de la cultura española.

Nos dirigimos a los directamente interesados en la producción del libro; autores, editores, libreros y bibliotecarios. Dentro de este reducido círculo aspiramos a ejercer una dirección de ideas, de métodos, de modos de hacer y de proceder, que hagan del libro español el arma que España necesita en esta hora de su revolución.

En los textos oficialistas en los que se hablaba sobre la política del libro, era recurrente la máxima de que el libro no era una mercancía, sino un instrumento de cultura, aunque luego se matizaba que “sin desdeñar el indudable aspecto industrial de la producción bibliográfica y a las buenas ventajas que su buena organización acarrea a la economía nacional, atiende primordialmente al problema espiritual que representa la expansión del libro español en todos los pueblos de habla hispana”<sup>58</sup>

Bajo esta primacía del valor espiritual del libro, subyacía toda una crítica al Estado liberal por parte de los nuevos dirigentes, para quienes el problema del libro había quedado limitado durante la II República a la defensa de los intereses de productores y comerciantes. Nada más lejos de la realidad.

(...) En la trayectoria política del Estado liberal, la atomización de afanes y criterios esterilizaba cualquier obra fecunda de creación. Las ideologías más contradictorias, al dejarse al azar de las fuerzas ciegas de la democracia, hacían que el Estado actuase en régimen de vaivén y de inseguridad doctrinal, en la que ningún dogma político adquiriría rango de permanencia.

El carácter totalitario del Estado y la necesidad de que la producción y el comercio del libro dejaran de ser considerados como tarea meramente privada, obligaron a plantear y resolver con modo y fines distintos los problemas del libro<sup>59</sup>.

[...] el nuevo Estado, fiel a las directivas totalitarias que le informan, interviene no sólo en el aspecto económico del libro, sino en su aspecto político y moral, reservándose las funciones

---

<sup>56</sup> PEMARTÍN; José “Misión y voluntad del INLE”. *Bibliografía Hispánica*, marzo-abril 1942, n.2

<sup>57</sup> Editorial del n. 1 de *Bibliografía Hispánica* de mayo-junio de 1942

<sup>58</sup> Palabras que aparecen repetidas en los distintos informes que sobre política cultural publicó la Oficina Informativa Española. *Diez años de cultura española (1939-1948)*; *Quince años de cultura española (1939-52)*

<sup>59</sup> Ibáñez Martín, J. La política del libro español, Madrid, 1946.

rectoras que un tiempo atrás estaban en manos de la iniciativa individual o bien de organismos constituidos democráticamente.

Juan Beneyto<sup>60</sup>, quien estuvo a cargo de la Sección de Censura, en 1944 insistía en la misma idea:

“Lo que caracterizó la legislación anterior en tema de ediciones, que sigue aún vigente en su mayoría, fue la prioridad del elemento económico, cuando lo que caracteriza la nueva política es la prioridad de lo político y la supeditación de lo económico a lo político, incluso el INLE”.

Otro falangista, Dionisio Ridruejo, en el preámbulo de su *non nato* proyecto de creación de una Cámara del Libro<sup>61</sup>, cuando ostentaba la jefatura del Servicio Nacional de Propaganda volvía sobre la misma premisa:

“La participación del Estado liberal en el problema del libro quedó limitada, a la defensa de los intereses de productores y comerciantes. Solo el empeño de difundir el libro en Hispanoamérica determinó en algún momento que el Estado dictase ciertas disposiciones”.

“El carácter totalitario del Estado y la necesidad de que la producción y el comercio del libro, máximo instrumento de la obra de educación popular que acomete el Nuevo Estado- antes considerados como tarea meramente privada-, obligan a plantear y resolver con modo y fines distintos el problema de las Cámaras del Libro”.

Pero para Julián Pemartin, responsable del INLE durante toda esta etapa, aun estando de acuerdo en que la política del libro debía abarcar el conjunto de disposiciones estatales por las que el libro propio dejaba de ser considerado como mero producto de la producción industrial, para alcanzar la categoría de valor nacional<sup>62</sup> y que el valor espiritual que entraña cada libro, predominaba sobre todos los demás valores que puedan integrarlo, también reclamaría una protección –fundamentalmente económica- como contraprestación a la vigilancia y depuración que sufría por parte del Estado. Pues, como decía Lasso de la Vega, buen conocedor de los problemas del libro, la primacía del valor espiritual del libro no resolvía el problema del libro español.

El libro también fue concebido como un instrumento del resurgir nacional, de hecho el INLE, máximo organismo con competencias en el ámbito del libro, *nace con el empeño de encarnar la política de lucha regeneradora del nuevo Estado en el terreno de la cultura. El libro, tantas veces instrumento de frivolidad cuando no de la corrupción, tiene que ser en nuestras manos un arma noble de combate en pro de la moral y de la educación de nuestro pueblo. Tenemos que disputarle esta presa del pueblo a la incultura, depravación, chabacanería y mal gusto, en cuyas garras nos la ha dejado el estado demoliberal. Tenemos que esgrimir el arma del libro en todas direcciones y contra toda clase de enemigos. (...) el libro ha de ser, según nuestra consigna, soporte de exaltación de todos los valores patrios.*<sup>63</sup>

La política del libro también estuvo impregnada de una fuerte concepción paternalista y dirigista. El Estado, junto a la Iglesia católica, iban a decidir qué se podía leer y quiénes podían

---

<sup>60</sup> BENEYTO, Juan, Planteamiento del régimen jurídico de Prensa y Propaganda, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1944

<sup>61</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2 “Política del Libro”

<sup>62</sup> PEMARTÍN, J. Ley de protección del libro español : aprobado en Cortes el día 12 de diciembre de 1946 y discurso pronunciado en exposición y defensa de la misma Ley por D. Julián Pemartín, director del Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, 1946

<sup>63</sup> “Exposición del libro español de agricultura”, *Bibliografía hispánica*, nº1, mayo-junio, 1942, p.15

leer determinados textos. Su justificación estaba en la enorme influencia del libro en la formación moral e intelectual, por ello había que eliminar de aquél las malas enseñanzas y las falsas doctrinas a través de las depuraciones de bibliotecas y librerías y orientando las lecturas.

El mismo Ministro de educación Pedro Sainz Rodríguez, con motivo de la celebración de la Fiesta del Libro de 1938, hablaba de la finalidad moral que debía tener el libro<sup>64</sup>.

“No todos los libros por el mero hecho de serlo son buenos, los hay perjudiciales como el “Contrato social” de J. Rousseau, el “Capital” de Carlos Marx, han producido mucho daño a la humanidad; pero el Evangelio es un gran libro debido a la inspiración divina, que sirve para alumbrar a los hombres por el camino de la espiritualidad. Hay que adecuar los libros al lector para que sus frutos sean beneficiosos”

#### O el mismo director del INLE

(...) contra el democrático principio de que *el libro debe llegar a todas partes*, hemos de implantar este otro: *el libro debe llegar adonde haga falta*. Cada sector de lectores, cada profesión, cada clase cultural necesita sus libros. Facilitarle otros que no hablen al alma de sus lectores, que no estén a ras de su mentalidad, que no llenen un cometido real y verdadero es faltar a la primera norma que hemos asentado. No serán libros auténticos, sino trastos inútiles<sup>65</sup>.

El nacionalismo cultural y su pretendido carácter autárquico también impregnó la política del libro. Los ideólogos criticaron con frecuencia que la selección editorial en España estuviera inundada por traducciones<sup>66</sup> y libros de entretenimiento burgués, llegándose a organizar un servicio de Inspectores de Traducción<sup>67</sup> que vigilase la totalidad de las versiones al castellano de obras extranjeras, además de publicarse una directiva que proponía limitar el porcentaje de traducciones:

(...) Pero traducir al español obras de deleznable condición literaria y que, sobre ese pecado de origen, están taradas por una tesis de moral deficiente y corrosiva, agrava el problema de tal forma que se hace necesario atacarlo con métodos restrictivos.

(...) La Vicesecretaría de Educación Popular ha comunicado al INLE, para que por nuestro conducto sean avisados todos los editores, que ha decidido afrontar el problema de las traducciones con todos los resortes gubernativos que le están encomendados, tanto desde su Departamento de Censura de Libros como realizando directamente su propia función rectora sobre los planes semestrales de edición.

En su virtud, la Vicesecretaría de Educación Popular ejercerá, desde ahora, en la Censura previa de libros y en la vigilancia reglamentaria de dichos planes, un criterio restrictivo, muy especialmente en las obras imaginativas, según el cual concederá su aprobación a aquellas traducciones que no sólo se mantengan dentro de una impecable ortodoxia, sino cuya versión pueda justificarse también por su debido mérito literario.

El INLE, (...), está seguro de que con este llamamiento a la conciencia profesional de cada uno se alejará espontáneamente el peligro que para nuestra cultura representa esa

---

<sup>64</sup> *La Voz de Asturias*, 24-4-1938

<sup>65</sup> PEMARTÍN, J. “Misión y voluntad del INLE”, Suplemento *Sí* del diario *Arriba*, 1942

<sup>66</sup> Este tema es tratado por Gabriel Andrés en su libro *La batalla del libro en el primer franquismo. Política del libro, censura y traducciones italianas*, Madrid, Huerga & Fierro, 2012, pp. 47-57.

<sup>67</sup> Por oficio de 3 de junio de 1942, el Delegado Nacional de Propaganda ordenó al INLE la organización d este servicio de Inspectores de Traducciones.

sobreabundancia no seleccionada de obras traducidas que plantean un grave problema en el campo editorial de la cultura hispánica (Madrid 22 de noviembre de 1943)<sup>68</sup>

Desde el primer análisis de datos de libros editados en 1942, la cifra de traducciones empezó a usarse como señal de alarma para la política cultural franquista y como argumento de peso para exigir desde algunos medios de comunicación una actuación intervencionista en este ámbito. Pero esta concepción de la traducción como elemento culturalmente pernicioso, chocaba con la realidad del mercado y de las preferencias del público.

La preocupación por el efecto contaminante de las traducciones no provenía tanto de las obras científicas, pues se reconocía que eran necesarias, sino de las traducciones literarias –novela, biografías novelescas, cuentos infantiles- dada su capacidad para seducir, subyugar la voluntad, o excitar los sentimientos, según las autoridades.

Pero además, la traducción de obras extranjeras llevaba una carga exógena alarmante para el régimen y sus ideólogos, pues durante los años del conflicto civil se relacionó con las actividades de contrapropaganda de los sectores leales a la República, pero, a la vez también fue un elemento de interferencia por parte de los países del eje, al tener que condenar las traducciones de escritores proscritos por las respectivas censuras alemana e italiana o boicoteando las francesas y anglosajonas.

Este fenómeno de la traducción de obras literarias extranjeras, en particular, enlazaba dos preocupaciones: la defensa del sector del libro, con los problemas económicos que le aquejaban y de aspiración a conquistar espacios propios de lectura dentro y fuera de las fronteras nacionales, con la de la crisis de identidad en la literatura española del momento, incapaz de promover autores y obras capaces de ganarse el éxito del público y de la crítica<sup>69</sup>.

Un autor como Zunzunegui consideraba perjudicial permitir la traducción libre de todo tipo de novelas. Otros en cambio atribuían la proliferación de traducciones a un inevitable gusto hacia lo extranjero en tiempos de autarquía y racionamiento. El mismo Azorín<sup>70</sup> argumentó que nadie podía impedir que un público necesitado de leer, leyese traducciones cuando no tenía autores nacionales de su gusto y que con poner coto a la invasión no se conseguía que los autores nacionales produjesen. Y un editor como Gustavo Gili en su “Bosquejo de una política del libro” abogaba por la vuelta a los clásicos y la supresión de las traducciones literarias como una manera de salvar la industria editorial.

Todos los estereotipos negativos sobre la traducción: el gusto ramplón por lo exótico por parte de un público lector considerado como ignorante; la mediocridad de los textos elegidos para traducir por parte de los editores; la baja calidad lingüística de las versiones,... se reiteraron en los diarios nacionales y en las revistas profesionales como *Bibliografía Hispánica* o culturales como *La Estafeta*.

El caso es que el número de traducciones comenzó a descender desde 1944, y según el director del INLE, José Pemartín, aquéllas habían disminuido sin tomar ninguna medida contra el libro extranjero y preguntando por el criterio del INLE, respondía:

---

<sup>68</sup> “Circular núm.57: Traducciones”, *Bibliografía Hispánica*, 9 (nov.-dic. 1943), pp. 82-83

<sup>69</sup> ANDRÉS, Gabriel, *La batalla del libro en el primer franquismo. Política del libro, censura y traducciones italianas*, Madrid, Huerga & Fierro, 2012, pp. 47-57

<sup>70</sup> *La Estafeta Literaria*, n. 2, 1944

No queremos aislar a España ni privarla de ningún valor cultural de cualquier lengua o país del mundo, siempre que tal valor sea real o positivo. La nota de calidad es la pauta para traducir, pero la valoración de cada obra y su coyuntura editorial son muy complejas y hay que tener cierta flexibilidad<sup>71</sup>

Dos años después, en 1946, un grupo de editores se dirigió a la Dirección del INLE solicitando la supresión del visado de traducciones, alegando que la mejor garantía para la corrección y pureza de las versiones españolas era la conciencia profesional de los mismos editores. El INLE accede, dejando en manos de cada editor que lo solicitase la gestión del visado de traducciones y quedándose el derecho de suspender a los editores que demostraran incapacidad o desinterés<sup>72</sup>

Este nacionalismo cultural se plasmó también en la orientación a la hora de publicar y recomendar la lectura de nuestros clásicos, para que ellos fuesen modelo y guía de nuestra gloria.

“Hay que conocerlos y estudiarlos por ser españoles y por su genio. Este resurgir intelectual se busca en lo más puro y español, en el retorno a nuestros clásicos para que sean ellos modelo y guía de nuestra futura gloria y ello se hará conociéndolos, estudiándolos por ser genio y por ser españoles. Con esta fiesta del Libro se busca que el rico tesoro de nuestros clásicos sea aprovechado por todo español: Sta. Teresa, Cervantes, Tirso de Molina, Alarcón, Lope de Vega”<sup>73</sup>.

La política del libro al estar ligada a los ámbitos de la educación, los medios de comunicación y la cultura trajo consigo una separación de actividades, y así mientras el Ministerio de Educación Nacional se esforzó en implantar en las escuelas y, en cierta medida, en las bibliotecas públicas, también bajo su control, un modelo cultural de raigambre católica, los funcionarios de la Delegación Nacional de Propaganda hacían lo propio para difundir una propaganda con innegable acento falangista. Solamente entre 1945 y 1951, y dependiendo de la Subsecretaría de Educación Popular, la política del libro se planificó y ejecutó a través de un único ministerio, el de Educación Nacional.

## **2.2 LA CENSURA EDITORIAL Y LA PROPAGANDA A TRAVÉS DEL LIBRO**

La política cultural totalitaria e intervencionista puesta en marcha por el franquismo desde los inicios de la guerra, respecto al ámbito del libro tuvo dos caras. Por un lado, todo un conjunto de medidas negativas/represivas para eliminar cualquier heterodoxia como fueron la censura editorial, la destrucción de patrimonio bibliográfico, la depuración de bibliotecas, el control de la producción editorial, así como la vigilancia sobre la venta y circulación de libros nacionales y extranjeros. Por otro, unas actuaciones que podemos calificar de positivas, que englobadas dentro de la propaganda incluyeron una importante labor editorial con el objetivo de dar a conocer los valores y doctrinas del Movimiento y contar la verdad del régimen para contrarrestar la propaganda negativa exterior. Dicho de otra manera, la propaganda debía suplir el enorme vacío dejado por los libros depurados y realizar proselitismo a favor de la causa franquista. Había que sustituir los libros culpables por lecturas edificantes.

---

<sup>71</sup> “Han descendido las traducciones: entrevista al director del INLE”, *La Estafeta Literaria*, n. 1, 1944

<sup>72</sup> “Visado de traducciones”, *Bibliografía Hispánica*, 11 (nov. 1946), p. 750. Citado por Gabriel Andrés, *La batalla del libro en el primer franquismo*, p. 188

<sup>73</sup> VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A. “El libro: su valor moral patriótico didáctico” (23 abril 1941). AGA 31/6067

Esta política obedecía a unos principios doctrinarios e ideológicos. Por ejemplo, se aceptaba la censura porque se renegaba de las conquistas del liberalismo moderno, en concreto de la libertad de expresión, y se justificaba en el espíritu inquisitorial de los siglos XVI y XVII que hacía apología de la intolerancia como arma de combate en defensa de la dignidad humana y de las verdades seculares. El Estado tenía derecho a preservar la pureza religiosa y de ejercer con celo la labor de censurar las publicaciones para evitar contagios.

También, desde los principios autoritarios y totalitarios tanto de conservadores como de fascistas se defendía que debían existir una suma de verdades y proscribirse todos los escritos que las cuestionasen en tanto que minaran sus principios básicos.

El mismo golpe de Estado del 18 de julio se va a justificar como misión protectora para eliminar aquellos elementos disolventes —las ideas pornográficas, socialistas, comunistas y anarquistas que había inculcado la República en las *masas ignorantes y en la dócil juventud*— y recuperar la pureza de un supuesto pensamiento español originario.

### 2.2.1. El marco jurídico

El régimen franquista creó un marco jurídico para reglamentar la práctica de esta política represora contra el libro. Cronológicamente abarca desde el mismo inicio de la guerra hasta 1944 manteniéndose sin modificaciones hasta la Ley de prensa de 1966.

Como primera medida y a consecuencia de la guerra asistimos a la restricción de la libertad de expresión que se hizo extensivo a todo el territorio nacional siendo la autoridad militar quién llevara a cabo las primeras actuaciones relativas a la censura.

A partir de esta fecha iban a ser objeto de censura, y por tanto se declaraban ilícitos<sup>74</sup>, todo tipo de libros y folletos pornográficos, marxistas y disolventes, y en general todas las obras cuyo contenido filosófico se opusiera a los principios que integraban la doctrina del Nuevo Estado. Aquellas obras que fuesen contra los dogmas y principios de la Iglesia católica, así como contra aquellos países con los que mantenía relaciones diplomáticas el estado español —Alemania, Italia y Portugal—, tampoco podían atacarse los puntos 1, 7 y 25 de Falange<sup>75</sup> y no tenían cabida los autores anti-Patria, muchos de ellos exiliados.

Un paso más en la institucionalización de la censura fue la creación de una Sección de Censura<sup>76</sup> dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda y, por tanto, de la Secretaría General del Movimiento con el objetivo de unificar los criterios de la censura aplicables a determinadas publicaciones:

*1.º A la censura de toda clase de publicaciones no periódicas, y de aquellos periódicos ajenos a la jurisdicción del Servicio Nacional de Prensa; 2.º A los originales de obras teatrales, cualquiera que sea su género; 3.º A los guiones de películas*

---

<sup>74</sup> BOE normas.

<sup>75</sup> 1º. Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. 7º. La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles. Pero sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre. A nadie le será lícito usar su libertad contra la unión, la fortaleza y la libertad de la Patria. Una disciplina rigurosa impedirá todo intento dirigido a envenenar, a desunir a los españoles o a moverlos contra el destino de la Patria. 25º. Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico—de gloriosa tradición y predominante en España a la reconstrucción nacional. La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional.

<sup>76</sup> ORDEN de 15 de julio de 1939



*cinematográficos; 4.º A los originales y reproducciones de carácter patriótico; 5.º A los textos de todas las composiciones musicales que lo lleven, y a las partituras de las que lleven título o vayan dedicadas a personas o figuras o temas de carácter oficial.*

Además, a un año de finalizada la guerra se vio necesario establecer una censura previa *para las obras referentes a la guerra de liberación o a su preparación* a cargo del Ministerio del Ejército<sup>77</sup>.

En 1944 la VEP estimó conveniente flexibilizar la aplicación de la censura previa a determinadas obras:

*Artículo 1.º (...) a) Las de carácter litúrgico y los textos latinos usados por la Iglesia católica. b) Las de literatura española anteriores a 1800. c) Las exclusivamente musicales y las que, poseyendo letra, sean anteriores a 1800. d) Las de carácter técnico y científico.*

Más que una flexibilización, la medida suponía traspasar las responsabilidades a otros organismos. Pues las publicaciones comprendidas en el apartado a) deberían contar con un Oficio de remisión del Ordinario del lugar; las literarias necesitarían de un informe de la RAE; mientras que las musicales informe redactado por la Secretaría de la Real Academia de Bellas Artes. Las obras técnicas y científicas publicadas por “las Reales Academias, el CSIC, las Universidades del estado y Eclesiásticas reconocidas, Escuelas especiales y demás Centros oficiales superiores de enseñanza o investigación deberían ir acompañadas de un oficio del director o rector del centro, así como de un informe de la obra. A estas instituciones investigadoras y educativas les correspondería examinar las obras publicadas por las empresas editoriales de su circunscripción territorial. También desde el ámbito científico español se aconsejó extender los beneficios de la exención de censura previa a las publicaciones científicas extranjeras

Esta flexibilidad respecto a las obras literarias anteriores a 1800 no implicaba para nada cambiar los criterios censorios respecto a no tocar los fundamentos del Estado y el dogma de la Iglesia católica, y respecto a las obras de carácter científico, técnico y litúrgico tampoco podían beneficiarse aquellas que hubiesen sido prohibidas en alguna ocasión por la Congregación del Santo Oficio.

Siguiendo con las medidas de carácter represivo hay que citar las que supusieron la destrucción del patrimonio bibliográfico y la depuración de bibliotecas<sup>78</sup>. Desde los inicios del golpe militar fue una obsesión la eliminación de los textos perniciosos que habían introducido el mal en las mentes de los españoles. Se acusaba a estos libros de todos los problemas del país por sus ideas extranjerizantes, inmortales y subversivas. Así, desde los inicios de la guerra asistimos a una serie de operaciones dirigidas a incautar y destruir libros. Las hogueras, las quemas de libros fueron muy del gusto de los falangistas porque *de las cenizas de lo viejo resurgiría el nuevo orden*<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE de 25-9-1941) DECRETO de 23 de septiembre 1941

<sup>78</sup> Tema estudiado por Ana Martínez Rus en *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*, Gijón: Trea, 2014, compendio y actualización de otros trabajos anteriores: “*Expolios, hogueras, infiernos. La represión del libro (1936-1951)*” y “*La represión cultural: libros destruidos, bibliotecas depuradas y lecturas vigiladas*” en AROSTEGUI, J. (coord.), Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2011, pp. 365-415

<sup>79</sup> MARTÍNEZ RUS, ANA. *La persecución del libro*, pp. 69-92

Pero para el Estado totalitario no fueron suficientes estas medidas respecto a la edición y venta de publicaciones no periódicas y decidió también controlar la venta y circulación de libros nacionales y extranjeros con dos nuevas órdenes:

*Art. 1º (...) queda sujeta al requisito de autorización del Ministerio encargado de los Servicios de Prensa y Propaganda la producción comercial y circulación de libros, folletos y toda clase de impresos y grabados, tanto españoles como de origen extranjero. Art. 4.º Queda prohibida la venta y circulación, en territorio nacional, de libros, folletos y demás impresos, producidos en el Extranjero, cualquiera que sea el idioma en que estén escritos, sin la previa autorización de este Ministerio. Los editores, libreros o concesionarios que pretendan poner en venta o circulación tales obras, deberán remitir dos ejemplares a la previa censura. Esta disposición alcanza a las que actualmente se venden o circulan en territorio nacional después del diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis (Orden BOE 30 de abril 1938)*

Completada con esta otra de 22 junio 1938 que incluía una serie de excepciones para las importaciones:

*b) Circunstancialmente se autorizarán los libros, folletos y publicaciones periódicas doctrinales, impresas en alemán, italiano o portugués, desde los años 1932, 1923 y 1926 en sus países respectivos, recusándose los impresos en estos mismos idiomas fuera de Alemania, Italia o Portugal. Asimismo se consideran sospechosas las obras escritas en español y editadas fuera de España.*

*c) Solamente se podrá autorizar, sin necesidad de previa consulta, la introducción de obras técnicas, litúrgicas o profesionales que por su procedencia o consignación no susciten la menor suspicacia. En todo caso, los particulares que deseen introducir obras extranjeras pueden obtener una autorización del Servicio Nacional de Propaganda, que les facilitará su gestión.*

En último lugar y para no dejar ningún cabo suelto respecto a las actividades relativas al libro, se legisló sobre el control y vigilancia de la producción a través de la obligación de los editores de presentar sus planes editoriales<sup>80</sup> con el pretexto de que esta regulación del mercado del libro era necesaria en un contexto de escasez de papel ya que evitaría que obras interesantes y útiles no pudieran ser publicadas por carecer de aquél. El incumplimiento de esta orden se podía penar con fuertes sanciones económicas –multas de 500 a 5.000 pesetas- y hasta con la suspensión temporal de las actividades editoriales.

### **2.2.2. Organismos que gestionaron la política intervencionista del libro**

Como se ha mencionado más arriba la política del libro durante este periodo estuvo adscrita a las instituciones encargadas de gestionar la propaganda a medida que se fue conformando el Nuevo Estado.

Primero fue el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional, luego Oficina de Prensa y Propaganda, a continuación, entre el 17 de enero de 1937 y febrero de 1938, será la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda (DEPP) adscrita a la Secretaría General del Jefe de Estado. Con el primer gobierno de Franco, las competencias de prensa y propaganda pasaron al Ministerio de Gobernación (Interior) con Serrano Suñer al frente del Servicio

---

<sup>80</sup> ORDEN de 8 de marzo de 1941 por la que se dictan normas para los planes de trabajo de los editores y las casas editoriales (BOE de 15-3-1941). Se complementa con la ORDEN de 25 de noviembre de 1941 por la que se amplía la de 8 de marzo de 1941 en que se disponía a los Editores y Casas Editoriales la obligación de presentar sus planes editoriales para su aprobación o modificación.

Nacional de Prensa y Propaganda (SNP). En mayo de 1941, al reorganizarse el Estado, se transfirieron a la Vicesecretaría de Educación Popular (VEP), que al depender del Ministerio General del Movimiento también lo haría de Falange con Gabriel Arias Salgado como Vicesecretario. En 1945 al finalizar la II guerra mundial, y con ella la derrota de los aliados fascistas, el régimen se ve obligado a soltar el lastre de Falange y se apuesta por el anticomunismo y el catolicismo. En este contexto la propaganda pasa a depender del Ministerio de Educación Nacional a través de la Subsecretaría de Educación Popular (SEP). Su ministro José Ibáñez Martín, hombre fiel tanto al ideario del Movimiento como el de la Iglesia y de absoluta fidelidad a Franco. Por último en 1951 la propaganda pasó a depender del Ministerio de Información y Turismo con Arias Salgado de nuevo al frente. A partir de ahora la política del libro se planificaría y gestionaría a través de dos ministerios: Educación para el ámbito de las bibliotecas e Información y Turismo, para la censura y la propaganda, que además incluía en su organigrama al INLE.

Durante la etapa de la DEPP asistimos a la centralización de la censura de libros, folletos y demás impresos que excedieran las 20 páginas, con lo que a partir de ese momento todo lo editado en forma de libro o folleto debía ser remitido a este organismo, estableciéndose un primer procedimiento normalizado. Durante su mandato se pusieron en marcha las comisiones depuradas de bibliotecas, y se inician las primeras medidas que reglamentarán el control sobre la venta y circulación de libros, como un añadido más a la actividad de la propia censura de libros, que de este modo mostraba una voluntad de control absoluto sobre la edición y la circulación de libros. Prueba de ello es la circular (1374-C 24/8/37) que se dirigió a los puntos de venta de libros:

“La Sección de Censura de Libros de esta Delegación (...) debe tener noticia periódica de todos los libros que se ponen a la venta en España, ya de los aparecidos en primeras ediciones, como los antiguos que se reediten. Nos dirigimos a V. con el ruego de que decenalmente remita a esta Delegación (...) una nota de los puestos a la venta en su Librería, con el fin de poder comprobar si previamente han sido sometidos a la obligada Censura”<sup>81</sup>.

Durante la vida del SNP (1938-1941) asistimos a la asunción de las tareas de propaganda por parte de Falange, siendo Serrano Suñer el Delegado Nacional de Prensa y Propaganda desde el 15 de febrero de 1938, confundiéndose dichas atribuciones entre el partido y el Estado. Se completó la centralización de la censura acabándose con cualquier desvarío de autonomía del partido único en materia de información.

Para el desempeño de la Jefatura Nacional de Propaganda fue designado Dionisio Ridruejo (BOE 9 marzo 1938) y sus colaboradores fueron falangistas que habían permanecido fieles al pensamiento de José Antonio y no compartieron el acto de Unificación. Pedro Laín sería el jefe de la Sección de Ediciones y Publicaciones, y con él colaborarían: Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Torrente Ballester, Carlos Alonso del Real y Melchor Fernández Almagro. Juan Beneyto sería el jefe de la Censura de Libros.

Ridruejo tenía una concepción orgánica de la propaganda con una cabeza rectora que determinaría el funcionamiento de los distintos órganos subsidiarios. Así el Departamento de Ediciones no debía limitarse a publicar ciertas obras o a ejercer la censura, sino a organizar corporativamente el gremio. Esta idea quedó reflejada en su Proyecto de creación de una Cámara Nacional del Libro dependiente del Servicio Nacional de Propaganda, a la que debían adscribirse de manera obligatoria todos los escritores y publicistas de libros, editores, libreros, intermediarios, impresores, grabadores, encuadernadores y fabricantes de papel de España, y

---

<sup>81</sup> ANDRÉS de BLAS, J. “La Delegación de Estado para Prensa y Propaganda y la censura de libros”, revista digital *Represura*, núm. 2 (2007) <http://www.represura.es>

ello en razón del carácter totalitario del Estado y las necesidad de que la producción y el comercio del libro dejaran de ser considerados como tarea meramente privada.

La realidad fue que el SNP estuvo lastrado por la escasez presupuestaria y por deficiencias en la gestión administrativa. Además, Dionisio Ridruejo no solo fracasó en sus pretensiones de encuadramiento y dirección en cuanto a la producción del libro, sino que además sufrió un profundo desencanto respecto al poco margen de actuación que tenía en el funcionamiento de la censura de libros.

“Durante tres años ocupé el cargo del que dependían los servicios de censura de libros, cine y teatro. Pero yo mismo no podía aflojarla ni dirigirla. Una junta superior, más o menos secreta y con abundante participación eclesiástica, establecía normas y confeccionaba listas de exclusiones”<sup>82</sup>.

Pero la supuesta “junta secreta”, en realidad no era tan secreta. A la hora de realizar la depuración de libros ya editados, una de las fuentes para establecer criterios fue la reactualización del *Índice romano* y su normativa complementaria. Y los listados de libros que las comisiones depuradoras de bibliotecas y otros centros de lectura habían considerado como expurgables fueron elaborados con criterios católicos.

El SNP no sólo tenía competencias para autorizar la producción y circulación comercial de libros tanto españoles como extranjeros, sino que además podía decidir qué obras eran innecesarias por motivos doctrinales, y a veces, por falta de papel. Además todos los talleres de impresión, grabado y encuadernación de España, debían dar preferencia en el orden de sus trabajos a los encargos hechos por el Servicio Nacional de Propaganda a través de sus órganos ejecutivos<sup>83</sup>.

Como consecuencia de las muchas competencias que en materia de censura tenía asignadas el Servicio Nacional de Propaganda se concentraron tales tareas en un único organismo, la Sección de Censura, con competencias en toda clase de publicaciones no periódicas, obras teatrales, películas cinematográficas y textos de composiciones musicales. La Sección recayó en Juan Beneyto.

Durante la existencia del SNP se creó el Instituto Nacional del Libro<sup>84</sup>, dependiente de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación, como único organismo central de consulta y dirección de todos los problemas relativos a la producción y difusión del libro español, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España.

Bajo su mandato también se aprobó una orden que despertó una gran impopularidad entre los editores. Me refiero a la ya citada orden de 8 de marzo de 1941 por la que se dictaban normas para los planes de trabajo de los editores y las casas editoriales. Esta orden permitía el Estado vigilar escrupulosamente la producción del libro regulando su mercado, además del control que ya ejercía sobre la idoneidad del contenido moral y político. Los planes editoriales serían suprimidos por Arrese en septiembre de 1944.

---

<sup>82</sup> RIDRUEJO, Dionisio. *Casi unas memorias*, Barcelona: Península, 2007, p. 435

<sup>83</sup> BOE 13-1-1939

<sup>84</sup> ORDEN de 23 de mayo de 1939

Pese a que la censura fue el tema estrella de la política del libro, la Falange desplegó una labor editorial<sup>85</sup> que se llevó a cabo dentro del marco del Estado durante estos cuatro años (1938-1941), de la que se hablará más adelante.

La Ley de 20 de mayo de 1941, que fijó la nueva reorganización del Estado, implicó la transferencia de todas las competencias que hasta entonces dependían de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Educación Popular. La creación de la VEP implicó la asunción por parte de Falange de los poderes sobre el campo de la comunicación social.

Entre la primavera de 1941 y el verano de 1945 funcionó este organismo<sup>86</sup>, que abarcó en su esfera de acción la práctica totalidad de los aspectos de la comunicación social. Esto era el resultado de dos procesos que discurren paralelos desde principios de la Guerra civil: el creciente control del Estado de este campo y la expansión del aparato falangista de propaganda.

Su fin era la propagación del modelo ideológico y cultural de FET y de las JONS, que incluía la represión de cualquier atisbo de heterodoxia. La VEP se hallaba, como parte del Partido, bajo la autoridad del ministro-secretario general del Movimiento hasta que tras la derrota del Eje la estructura se transfirió al Ministerio de Educación Nacional.

La VEP se organizó a similitud a la estructura del Partido, al subdividirse en varias delegaciones nacionales, existir una serie de inspecciones y contar con sus delegados provinciales. Se dividió en la Delegación Nacional de Prensa y el resto de las actividades –cine, teatro, radio y el libro– quedaron encuadradas en la Delegación Nacional de Propaganda. La VEP comprendía dos tipos de estructuras: las “Secciones”, que abarcaban la autoridad sobre un ramo de la producción cultural a la vez que la propia actividad propagandística del Partido y los “Organismos subvencionados o autónomos”.

La VEP se creó como un órgano que conjugaba la centralización de la política propagandística con una mayor especialización en sus diferentes variantes a través de su organización en cuatro delegaciones nacionales.

A la Delegación Nacional de Propaganda le correspondió un campo de actuación más heterogéneo. Que nos interesen: el control de todo tipo de publicaciones no periódicas, labor adscrita a la Sección de Ediciones y Publicaciones que contó con un cuerpo de “lectores” (censores), el apoyo de toda una red de inspectores de la propia VEP, del Partido (Delegación Nacional de Investigación e Información) o policiales. Directamente relacionados con esta sección aparecen como organismos autónomos la Editora Nacional y el INLE.

La intervención del poder era posible en todos los escalones de la cadena de producción cultural, desde el autor a los medios de producción y distribución hasta el consumo en todo momento.

El personal de VEP recogía en buena parte el de los servicios que la precedieron pero con una ampliación considerable en su número. Para los escalones provinciales supuso este momento la asignación fija de salarios. Sin contar con el personal de la prensa y la radio del Partido, la VEP pudo contar con más de 1.500 personas. Las delegaciones comarcales y locales

---

<sup>85</sup> IÁÑEZ, Eduardo. “No parar hasta conquistar: propaganda y política cultural falangista: el grupo de Escorial”. —Gijón: Trea, 2011

<sup>86</sup> Organismo estudiado por Benito Bermejo Sánchez, “La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945)”, *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, Nº 4, 1991, págs. 73-96 y que luego amplió Eduardo Ruiz Bautista en *Los señores del libro*. Ver Organigramas en los anexos.

normalmente, cuando existieron, se ocupaban sin una remuneración específica (salvo Barcelona) y muchas veces se acumulaban a otros cargos del Partido.

Para todo el periodo, dos personas permanecieron sin interrupciones: el vicesecretario Gabriel Arias Salgado y el delegado nacional de prensa Juan Aparicio. La Delegación Nacional de Propaganda estuvo ocupada primero por Manuel Torres López y luego por David Jato, permaneciendo con ambos Patricio González Canales como secretario nacional. Juan Beneyto, responsable de la censura de libros y de la coordinación con los Ministerios. Darío Fernández Flórez en Ediciones. La Delegación Nacional de Propaganda fluctuó entre la ambición de sus planes propagandísticos y la su insolvencia económica.

El modelo de “cultura española” promovido desde la VSEP era el modelo “imperial” de Falange, donde estaba fuera de discusión el catolicismo conservador, así como el predominio de la lengua castellana.

La VEP es sustituida el verano de 1945 por la Subsecretaría de Educación Popular adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Esta etapa de la DGPP es más pobre porque perdió todas las competencias en radiodifusión, cinematografía y teatro, y no le quedó otra alternativa que buscar nuevos caminos o reforzar lo que le quedaba.

A través de la estructura de la Subsecretaría de Educación Popular (ley 31 de diciembre de 1945) se aprecia la tendencia de sustraer a los servicios de Propaganda del partido la labor orientadora de la política cultural, para ceñirlos en exclusiva a lo que el decreto ley de 1945 llama *una labor de formación espiritual y cultural de los ciudadanos*, considerando conveniente su integración en el Ministerio de Educación Nacional.

Los nuevos responsables de propaganda procedían del sector católico, en concreto de la ACNP. Los nuevos titulares de la Subsecretaría y de las Delegaciones toman posesión de sus cargos en enero 1946. Especialmente, Cerro Corrochano y el Subsecretario Luis Ortiz fueron elegidos a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo. Aunque los católicos coparon los cargos de la DGPP, sin embrago la Falange conservaría el control de su propia prensa, al sustraerse esta última de la autoridad de la nueva Subsecretaría e incluso polemizaría con los nuevos poderes en materia de prensa.

Los objetivos de la Dirección General de Propaganda eran “contar la verdad del régimen” para contrarrestar la propaganda negativa exterior. Era evidente que el nuevo Estado necesitaba de la propaganda como forma de incorporación y reconocimiento al orden internacional<sup>87</sup>.

Dar a conocer a todos las razones que impulsaron el movimiento de nuestra Cruzada. A esta línea cardinal responde la tarea múltiple y varia de la DGP, que mediante libros, folletos, carteles o fugaces hojas volanderas, va dejando el testimonio de la letra impresa las huellas de la historia diaria. La DGP es así la gran caja de resonancia de la vida española. Todo lo que de carácter nacional, provincial o municipal tiene importancia en el ámbito de la Patria, encuentra su difusión a través de este noble instrumento de la cultura popular. La verdadera finalidad de la propaganda es mantener y expandir la “democracia orgánica” y promocionar una cultura que fuese sólo la emanación de los valores del Régimen. A la DGP le cabe el honor de haber sido el organismo difusor de las doctrinas políticas que constituyen el núcleo modular del Movimiento.

De la Dirección General de Propaganda dependían 11 secciones de las cuales cuatro tenían competencias relacionadas con el libro: Ediciones y publicaciones; Inspección de libros, el INLE y la Editora Nacional.

---

<sup>87</sup> CAL MARTÍNEZ, R. “Apuntes sobre la actividad de la Dirección General de Propaganda del Franquismo (1945-1951)”, *Historia y comunicación social*, Nº 4, 1999, 15-34

Ediciones y Publicaciones gestionaba el Servicio de información española. Su finalidad era contribuir al conocimiento verdadero de España en el extranjero y combatir las falsedades que difundían los enemigos de la nación española, para ello proponía a la superioridad todo aquello que fuera oportuno y conveniente en defensa de la verdad española y elaboraba directamente el material informativo preciso con destino a las representaciones españolas, afín d en el extranjero para ser utilizadas en sus publicaciones o en las del país respectivo.

Este material informativo comprendía reportajes de la vida nacional, artículos polémicos en defensa de España, artículos literarios de firmas de gran prestigio, comentarios españoles políticos internacional, discursos, declaraciones y manifestaciones oficiales que expresaran el sentido nacional y hasta fotografías que mostraran la actividad española en sus diversos aspectos.

Durante este periodo de transición entre la caída del nazismo hasta la aceptación internacional del régimen franquista, la censura jugó un pequeño papel deslegitimador del supuesto estado de libertades que se quería demostrar hacia el exterior, tras la aprobación del Fuero de los españoles. Prueba de ello fue el I Congreso de Editores de América Latina, España y Portugal en 1947, en el que todos los países aprobaron la condena de la censura previa, excepto España<sup>88</sup>.

A nivel del partido, también se creó todo un entramado organizativo con competencias en cultura, entre las que se incluía el libro. Estamos hablando de la Delegación Nacional y las Delegaciones Provinciales de Educación. *La Delegación Nacional de Educación Nacional era el organismo de FET y de las JONS, que tenía por objeto la realización de toda clase de actividades docentes y de difusión de la cultura en todos sus grados y aspectos en coordinación con las realizadas con el Estado, así como el asesoramiento y la ordenación de toda la actividad cultural realizada por las distintas secciones y servicios encuadrados en el Movimiento*<sup>89</sup>.

Concretamente dentro de las Delegaciones provinciales existían dos secciones con competencias en el ámbito del libro: la Sección de Ediciones y Publicaciones y la Sección de Censura de publicaciones no periódicas. Podemos ver cómo actuaba, por ejemplo, en la memoria de la Delegación Provincial de Alicante<sup>90</sup>:

Sección de Ediciones y Publicaciones:

- a) Obras de propaganda y folletos editados por la Delegación Provincial (ninguno)
- b) Obras y folletos de propaganda editados por organismos oficiales del Estado o del Partido y dirigidos por esta Delegación Provincial (ninguno)
- c) Obras y folletos de propaganda recibidos de la Delegación Nacional para su distribución. Se han distribuido en esta semana a la Biblioteca de la Delegación Local de Propaganda, a la Biblioteca de la Beneficencia Provincial los siguientes folletos: “El gobierno de Franco gran defensor de la religión”; “mensaje del caudillo a los españoles”; “Fundamentos del Nuevo Estado”; “Carta del Camarada Alfonso de la Aldea, caído en Rusia”. El primer folleto a ha sido difundido de manera indirecta entre todos los centros católicos en Alicante capital y algunos pueblos de la provincia.
- d) Obras y folletos de diversa índole recibidos de organismos oficiales del Estado o del Partido o de entidades editoriales privadas (ninguno)

---

<sup>88</sup> LARRAZ, F. Una historia transatlántica del libro : relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Gijón, Trea, 2010

<sup>89</sup> Bases orgánicas de la Delegación Nacional de Educación (12-11-1942). AGA 52/14155.

<sup>90</sup> Actividad de la Delegación Provincial de Alicante AGA 21/1363 (s/f 194?)

- e) Solicitudes de organismos oficiales del estado o del Partido presentadas a la Delegación Provincial y cursadas a la Nacional en demanda de papel para edición de sus obras (ninguna).
- f) Comunicaciones sobre ediciones.

La Jefatura Provincial del Movimiento adquiere la totalidad de las obras lanzadas por la Editora Nacional. Tales libros pasan a depender directamente a los servicios de la Delegación Provincial, y se está pensando hacer una biblioteca circulante, para que los libros puedan ser objeto de estudio o simplemente leídos por los camaradas de esta capital.

Sección de censura de publicaciones no periódicas:

- A) Relación de obras sometidas a censura a esta Delegación: se solicita autorización para editar un almanaque.
- B) Relación de libros, folletos y hojas impresas presentadas en la Delegación para su previa censura. Se han censurado folletos y hojas volanderas, programas de espectáculos públicos.
- C) Inspección sobre censura de publicaciones no periódicas: se han visitado imprentas y editoriales.
- D) Comunicado sobre censura.

O en esta otra de Barcelona, donde la Sección de Publicaciones no Periódicas procedió a retirar catálogos de la Librería Mediterránea, se revisaron las existencias de obras escritas en catalán; se inspeccionó la Editorial Gustavo Gili para control de las hojas de autorización de las obras que tienen en circulación. También se controló la censura de carteles en vallas, anuncios, carteles de teatro incluso se visitan las agencias publicitarias.

Pero estas Delegaciones se quejaban de que para llevar a cabo su trabajo necesitaban ficheros o relaciones de obras editadas ya que sin ellos no podían fiscalizar en materia de censura por lo que a las librerías se refiere<sup>91</sup>.

### 2.2.3. La censura editorial

La investigación sobre la censura editorial franquista<sup>92</sup> es escasa en relación con el interés que el tema posee. Pese a existir trabajos apreciables, la mayor parte son parciales y no hay un estudio sistemático que ofrezca respuestas globales a qué fue la censura, cómo funcionó y qué consecuencias tuvo sobre la producción literaria española, la actividad editorial o sobre los mismos lectores, como apunta Fernando Larraz, quién además llama la atención sobre la abundancia de pseudoinvestigaciones de carácter anecdótico, superficial y, a veces, sensacionalista, que en cierto modo han exculpado al franquismo.

Los estudios desde la perspectiva literaria fueron pioneros y son los más numerosos. El primero fue el libro-informe de Georgina Cisquella *Diez años de represión cultural. La censura de libros durante la Ley de Prensa, 1966-1976*. Pródigo en datos, tiene carácter de crónica más que académico. Su fuente principal son las informaciones proporcionadas por varios editores que ofrecen casos del funcionamiento de la censura en su etapa terminal. Pero es el libro de

---

<sup>91</sup> Delegación Provincial de Ávila (194?). AGA 21/1363

<sup>92</sup> En dos ocasiones se ha hecho balance sobre el estudio de la censura editorial durante el franquismo. En 1999 José Andrés de Blas "El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras consideraciones", *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, nº 12, 1999, págs. 281-302 y recientemente Fernando Larraz, *Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo*. Gijón, Trea, 2014.



Manuel L. Abellán, *Censura y creación literaria en España (1939-1976)*, el que ha marcado la pauta y sigue siendo referencia ineludible. Estudio de urgencia aún válido, que ofrece un análisis completo desde el punto de vista de los estudios literarios, pese a que el acceso a la información de archivos era muy escasa. *La censura franquista en la novela de postguerra*. Excesivamente generalista, se limita a reproducir informes y no hace un análisis en profundidad.

También se han realizado estudios sobre los efectos de la censura en la literatura de los nacionalismos históricos que sufrieron una doble censura: la ordinaria y la idiomática regional<sup>93</sup>. Igualmente ha sido objeto de investigación la censura sobre los autores latinoamericanos, los escritores extranjeros como Hemingway y en la obra de algunas mujeres narradoras.

El último estudio, desde esta óptica literaria, corresponde a Fernando Larraz, quién reinterpreta la historia de la literatura española durante el franquismo a través de las repercusiones que sobre las distintas corrientes narrativas y autores tuvo la censura previa editorial. Aborda en profundidad, tras el análisis de cientos de expedientes de censura, los criterios, tipología de censores, la justificación ideológica, y los mecanismos de la autocensura.

Desde la perspectiva de la historia política (naturaleza del estado franquista) se han estudiado los diferentes organismos que tuvieron competencias en censura y propaganda. Fue precursor el trabajo de Benito Bermejo<sup>94</sup> al desentrañar el organigrama, el funcionamiento y objetivos de la Vicesecretaría de Educación Popular. Le siguió Eduardo Ruiz Bautista<sup>95</sup> al abordar los discursos y las prácticas estatales sobre el libro y la lectura entre 1941 y 1945, durante los años de vigencia de la citada Vicesecretaría de Educación Popular. Para los organismos anteriores, la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda y el Servicio Nacional de Propaganda, contamos con las aportaciones de José Andrés de Blas<sup>96</sup>. Para la última etapa, 1945-1951, Rosa Cal<sup>97</sup> estudia la Subsecretaría de Educación Popular, poniéndonos sobre aviso de la escasa documentación que hay sobre estos años previos a la incorporación de la propaganda y la censura al Ministerio de Información y Turismo.

Por último, las últimas aportaciones corresponden a Ana Martínez Rus<sup>98</sup> y su libro *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*. Compendio de otros trabajos anteriores, donde analiza la represión del libro desarrollada por el franquismo desde los primeros días de la guerra civil en todos los ámbitos: la destrucción de publicaciones,

---

<sup>93</sup> M<sup>a</sup> Josepa Gallofré para el catalán y Joan Mari Torrealdí para el libro en euskera.

<sup>94</sup> B. BERMEJO SÁNCHEZ, "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un ministerio de la propaganda en manos de Falange", *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, Nº 4, 1991, págs. 73-96

<sup>95</sup> RUIZ BAUTISTA, E. Los señores del libro (2005) y "La censura en los años azules" en RUIZ BAUTISTA, E (coord.), *Tiempos de censura*, Gijón, Trea, 2008, pp. 45-75

<sup>96</sup> JOSÉ ANDRÉS de BLAS "La Delegación de Estado para Prensa y Propaganda y la censura de libros", revista digital *Represura*, núm. 2 (2007) <http://www.represura.es> y "La censura del libro durante la guerra civil española", en: RUIZ BAUTISTA, E (coord.), *Tiempos de censura*, Gijón, Trea, 2008, pp.19-44

<sup>97</sup> Rosa CAL MARTÍNEZ, "Apuntes sobre la actividad de la Dirección General de Propaganda del Franquismo (1945-1951)", *Historia y comunicación social*, ISSN 1137-0734, Nº 4, 1999, págs. 15-34

<sup>98</sup> *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*. Gijón: Trea, 2015 "Expolios, hogueras, infiernos. La represión del libro (1936-1951)" revista digital *Represura*, núm. 8 (2013) <http://www.represura.es> y "La represión cultural: libros destruidos, bibliotecas depuradas y lecturas vigiladas" en AROSTEGUI, J. (coord.), *Franco: la represión como sistema*, Barcelona, Flor del Viento, 2011, pp. 365-415

depuración de los fondos de bibliotecas, editoriales y librerías, la censura previa para restringir la futura oferta en la producción bibliográfica nacional y en la importación de títulos extranjeros, así como las sanciones económicas, depuraciones profesionales, años de reclusión y pérdida de la vida que afectaron a escritores, editores y bibliotecarios como máximos responsables de la producción y difusión de esos textos perniciosos.

La dimensión económica sobre la actividad editorial, o la sociológica como es el impacto que pudo tener sobre las ideas del público lector y sus gustos o sobre la imagen pública del escritor, son facetas que aún están por investigar.

Antes de abordar cómo se ejerció la censura editorial, debemos tener muy presente la potente influencia que ejerció la Iglesia católica. A su colaboración con el Servicio se unen los mecanismos de calificación moral de las novelas con los que estableció una especie de censura de segundo grado a través de sus publicaciones sobre lo que ya se había censurado por el Estado.

El hecho de que la censura se implantara en el marco de una situación bélica y en un Estado en construcción favoreció la arbitrariedad e inseguridad jurídica de las que se benefició el sentido represor de la censura.

La censura editorial se ejerció de dos maneras: previa a la publicación impidiéndola o depurando el contenido de un texto mediante modificaciones y supresiones; o bien con posterioridad a la edición, secuestrándola y paralizando su difusión y ordenando la destrucción de los ejemplares impresos. Otra forma de censura encubierta y selectiva fue la publicación de libros en formato lujo, en obras completas, en idioma original o en tiradas muy cortas destinadas al lector culto con posibilidades económicas. Así como la posibilidad de que determinadas personas públicas y particulares consiguieran permisos especiales para la adquisición de obras prohibidas.

La Sección de Censura a cargo de Juan Beneyto, se ubicó en Barcelona tras la caída del frente republicano de Cataluña, luego se trasladó a Madrid, y a partir del final de la guerra y durante bastantes meses se centró en la depuración de fondos editoriales, bibliotecas y librerías ayudados por el personal de las Cámaras del Libro. Ante la ingente labor, se permitió que las propias editoriales depurasen sus stocks, los destruyesen o los vendiesen en el extranjero.

En los meses de 1939 las Cámaras del Libro elaboraron varias listas de autores proscritos ante la ausencia de una relación oficial de libros prohibidos y de acuerdo con los que habían sido retirados de las librerías inspeccionadas.

Tras la desaparición de la VEP como parte del lavado de imagen totalitaria tras la guerra mundial siguieron años menos claros para la censura, que coincidieron con un periodo de incertidumbre para el régimen, que oscilaba entre las manifestaciones de orgullo nacional frente a la marginación de los organismos internacionales y los intentos para lograr la aceptación de las democracias occidentales. El control que había tenido Falange fue diluyéndose aunque Juan Beneyto siguió estando al frente del Servicio.

A comienzos de 1950 se inicia un proceso de desideologización de la censura pasando a ser un mero instrumento en manos del poder. Antes la censura se había instaurado en sus orígenes como consecuencia de una doctrina antiliberal y como mecanismo de defensa de una ortodoxia moral, religiosa y política.

Gracias a los trabajos ya citados de Abellán, Eduardo Ruiz Bautista y Fernando Larraz conocemos sobre qué obras se ejerció la censura, quiénes eran los lectores-censores o cómo se desarrollaban los procesos censorios.

Fernando Larraz, tras analizar cientos de expedientes de censura deduce que siempre prevaleció la norma de salvar cualquier novela, aun tachándola masivamente, antes que denegar su publicación y que se dio más valor a lo denotativo y explícito que al sentido integral de las obras.

Los procedimientos y funcionamiento de la censura estuvieron llenos de trámites prolijos, en parte por la continua legislación y los sucesivos cambios de organismos a los que estuvo adscrita. También asistimos a incoherencias como que se persiguieron libros inocuos como obras infantiles.

Al principio se asistió a una confusión de competencias entre la censura de publicaciones periódicas y no periódicas hasta que se creó la Sección de Censura del SNP.

Al querer llegar a todos los espacios y controlar todos los textos se legisló de manera meticulosa pero en ocasiones confusa, duplicando organismos y funciones, quedando resquicios por donde se escapaban algunos escritos. De hecho, pese a todas las medidas, circularon libros prohibidos en el comercio de libros usados, sobre todo en los primeros años, debido a la ausencia de una organización adecuada, falta de personal y de medios materiales, aparte de la falta de coordinación.

No hubo una relación de criterios por los que se debía regir la censura, ni un manual en el que aprendieran el oficio los lectores adscritos al Servicio, ni circulares internas en las que contasen por escrito las modificaciones de los criterios y las instrucciones por las que los censores debían regir su trabajo, lo que provocaba en los autores una gran inseguridad.

La Iglesia y la Falange rivalizaron y entraron en colisión muchas veces, especialmente en estos primeros años, por imponer sus criterios, llegando a retirarse libros previamente autorizados por las presiones de ambas. Falange se plegó a los deseos de las autoridades nazis en materia de publicaciones –autores de origen judío–, y la Iglesia trató de defender sus dogmas religiosos.

La censura ocasionó grandes perjuicios a tres colectivos: a los autores, a los editores y a los lectores. A éstos últimos, aparte de tratarles como menores de edad, se les sustrajo de un patrimonio cultural que fue manipulado ilegítimamente. A la industria editorial les fue usurpada por los censores su función selectiva, además el amplio margen de arbitrariedad en el ejercicio de la censura hacían imprevisible la suerte de una publicación ocasionando pérdidas económicas en uno de los periodos más críticos de su historia como veremos más adelante al tratar la política económica.

Pero las víctimas más perjudicadas fueron los escritores que tuvieron que adoptar la autocensura. Al analizar los expedientes de censura, F. Larraz saca la conclusión de que la autocensura tuvo mucha más importancia sobre la creación literaria que la misma censura. pues los escritores escribían para que sus textos fueran aprobados y muchos editores actuaban como un tamiz previo ya que ni siquiera presentaban libros que sabían de antemano imposibles de publicar.

Siguiendo a F. Larraz, los porcentajes menores de libros censurados en el periodo de mayor represión son un claro indicador del grado de autocensura de los autores, sobre todo entre 1939 y 1953 a causa del miedo y de la inseguridad de los autores.

Los ideólogos y propagandistas franquistas desarrollaron toda una serie de argumentos a favor de la censura, como que la existencia de tal institución no menoscababa la producción literaria, sino que favoreció la producción orientada. Además se ha frivolidado mucho sobre el impacto benéfico de la censura al estimular las capacidades creativas del escritor al obligarle a

explotar sus recursos para ocultar el mensaje que realmente quería transmitir. O con este otro de que al finalizar el franquismo no se produjo una floración de novelas inéditas y escondidas.

#### 2.2.4. Las ediciones oficiales

Paralelamente a la destrucción y prohibición de publicaciones se desarrolló toda una actividad editorial oficial con una finalidad claramente propagandística. Esta actividad editorial se articuló en un primer momento en torno a la Falange y posteriormente sería el propio estado quien desarrollaría una línea editorial más propagandística a través de la Sección de Ediciones y Publicaciones y otra más cultural a través de la Editora Nacional.

La incipiente política editorial del Nuevo Estado corrió, en primer lugar, a cargo de Falange y Ediciones Jerarquía<sup>99</sup>. Cuando se produjo el decreto de “Unificación”, los falangistas ya tenían creado un grupo para el control y difusión de la información, que sería el germen originario del aparato ideológico del Nuevo Estado. Entre sus miembros existía la idea de realizar una labor intelectual con una función propagandística, que no se limitó a la prensa periódica, sino que se extendió a la edición. Además, con la unificación prosperaron las posibilidades económicas de sus propósitos editoriales.

Falange siempre dispuso de medios de difusión (revistas y periódicos) a los que nunca le faltó papel. Revistas que se crearon como órganos nacionales fueron: *Jerarquía* (revista literaria trimestral), *Vértice* (revista gráfico-literaria mensual), *Fotos* (revista gráfica semanal), *Flechas* (revista infantil semanal) y *Fe* (revista doctrinal mensual)<sup>100</sup>.

Laín, Rosales y Vivanco se encargaron de planificar y dirigir dos series de publicaciones: “Ediciones Jerarquía”, más intelectual y literaria y “Ediciones Fe”, más políticas, cuyos libros eran un reflejo de la mezcla de ingredientes ideológicos.

Pamplona fue la ciudad elegida donde se ubicó esta actividad editorial de cuyas prensas salieron unos trabajos de una calidad inusual para los tiempos que corrían, que parecían por su precio, presentación y nivel dirigidos a las élites culturales y económicas. Aunque, como apunta Iáñez, una mera enumeración de algunos de estos productos editoriales puede poner en entredicho esta afirmación: *Discurso al silencio y voz de la Falange* de Fermín Yzurdiaga (5 ediciones); *Genio de España* de Ernesto Giménez Caballero y *La Corona de los Sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera*, así como los numerosos títulos dedicados a figuras y escenarios ligados a la España imperial.

*Ediciones Jerarquía*, se constituyó en el embrión de la *Editora Nacional* y *Ediciones Fe* desembocó en la revista *Escorial* (1940-1950), más orientada al público minoritario de la alta cultura, que acabó convirtiéndose en medio de propaganda de la alta manera y objeto de prestigio para el Régimen. *Escorial* encarnó el espíritu más liberal dentro de Falange, pretendiendo recuperar «lo que fuese recuperable» del mundo intelectual anterior a la Guerra civil para procurar reemprender el debate cultural en la España de posguerra. Su intención fue restaurar la continuidad de una cultura violentamente quebrada, pero fracasó. La revista desempeñó también una labor editorial paralela bajo el sello de *Ediciones Escorial*, editándose obras literarias y ensayísticas entre 1941 y 1942.

---

<sup>99</sup> IÁÑEZ, E. No parar hasta conquistar: propaganda y política cultural falangista: el grupo de Escorial, Gijón; Trea, 2011, pp. 77-89

<sup>100</sup> NAHARRO, F. “Las publicaciones oficiales. Editora nacional”, en Martínez Martín, J.A. (coord.) Historia de la edición en España (1939-1975), Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 219-229

La Sección de Ediciones y Publicaciones<sup>101</sup>, dependiente orgánicamente de la Vicesecretaría de Educación Popular, primero estuvo a cargo de Laín Entralgo, y desde 1941 en Darío Fernández Flórez. Competía a la Sección todo lo relativo a la propaganda y educación popular. Como si se tratara de una editora, la sección desarrolló un plan de siete series de publicaciones de propaganda esencialmente popular<sup>102</sup>. Para ello contó con un cuerpo de autores y organizaba concursos como fuente de originales. Disponía de unos fondos que le permitieron adquirir libros, no solo a la Editora Nacional, sino a todas aquellas editoriales que pudiesen incluir en su catálogo obras propicias para la divulgación de la doctrina, historia y desarrollo del Movimiento y de la historia y prestigio nacional de España en la península y el extranjero.

También le correspondió la distribución de las obras producidas, creando una red a través de los ministerios y la Secretaría General de FET y el SEU.

El objetivo perseguido con su plan editorial residía en ofrecer libros y folletos de propaganda política y doctrinal del Movimiento al lector de cultura media y ágiles folletos al popular. Los libros y folletos tenían en principio, un carácter no venal, mas algunos se pusieron a la venta a bajos precios para evitar que los lectores los desvalorizaran.

Las obras se presentarían en la mayoría de los casos como anónimas, salvo cuando convenía utilizar el prestigio del autor. En el Esquema y Plan de Ediciones y Publicaciones se contempló la posibilidad de publicar una colección popular de novela rosa y otra policíaca de autores conocidos que mostraran una tendencia política disimulada y que incluso adulteraran las traducciones de obras emblemáticas intercalando motivos nacionales de propaganda (proyecto que parece no se llevó a cabo). El plan editorial permaneció vigente sin apenas sufrir modificaciones de consideración. Salvo la nueva colección *Españoles en el mundo*, las colecciones existentes no se enriquecieron significativamente con nuevos originales, y los nuevos títulos solían responder a la publicación de discursos pronunciados por personalidades y otros obedecían a un cierto oportunismo político.

Dentro de la Sección, Ruiz Bautista apunta la existencia de dos líneas de actuación divergentes: una propagandística, popular, falangista y otra, con aspiraciones literarias, eminentemente católica, elitista. Ambas coincidieron en la utilización de los recursos propagandísticos y materiales del Estado en la dirección de sus convicciones ideológicas.

La distribución de sus libros y folletos se hizo de dos maneras. A petición de los colegios, tanto públicos como privados, así como de bibliotecarios que deseaban proveerse de las obras de la Sección y de la Editora Nacional, o por imposición de la misma VEP a los obreros para que no les faltasen lecturas persuasivas y a los afiliados carentes de las más mínimas nociones nacionalsindicalistas.

---

<sup>101</sup> RUIZ BAUTISTA, Eduardo. "Los señores del libro", Gijón, Trea, 2004

<sup>102</sup> Primera Serie. Libros y folletos en 4º mayor de propaganda eminentemente gráfica. Entre 1 y 3 pesetas. Segunda serie dividida en mayor (libros y folletos de carácter acusadamente político, precio entre 1-5 pesetas) y menor (pequeños libros y folletos en 8º tipo breviarío para divulgar la doctrina del Movimiento y de la Falange). Tercera serie. Propaganda esencialmente colonialista. Cuarta serie. Popularizar nuestras grandes figuras históricas y las grandes batallas de la hispanidad e incluso manuales de historia de España sintéticos y tendenciosos. Quinta serie. Folletos en 8º orientados a la propaganda rápida de asuntos de máxima actualidad referidos a las circunstancias geopolíticas del momento o de interés técnico popular. Con estos folletos se aspiraba a contrarrestar los efectos de la contrapropaganda. Sexta. Folletos distribuidos gratuitamente, en 8º, trataban de divulgar los principales hitos legislativos del Régimen y del partido. Séptima. Hojas y octavillas para cumplir necesidades momentáneas de propaganda.

No todos recibían los mismos libros, sino que se estudiaba cada libro y cada folleto en relación a la circunstancia del destinatario y no todos los libros recibían el visto bueno de las autoridades eclesiásticas, ni estas eran unánimes en sus valoraciones.

Los maestros nacionales constituían una parte considerable de los peticionarios institucionales. El hecho de que la propaganda se utilizase con fines docentes constituía todo un éxito y una tendencia que convenía estimular. Las solicitudes procedían del mundo penitenciario.

La actividad de la Sección cuando pasó a depender de la Subsecretaría de Educación Popular se encargó<sup>103</sup> de gestionar la Editorial Publicaciones Españolas y el “Noticiero español” y sus traducciones. Publicación periódica que comenzó en 1946 con dos versiones en francés e inglés, con grabados de actualidad (fotografías en blanco y negro de tamaño muy reducido) *para informar tanto al interior como al extranjero con amplitud, constancia y objetividad de las realidades españolas.*

En momentos coyunturales se publicaron catálogos con belleza de edición y esmero tipográfico para demostrar la excelencia de las artes y las letras en nuestro país y homenajear a figuras relevantes, como ocurrió en el IV Centenario de Cervantes, en el del padre Francisco Suárez o en el del nacimiento de Balmes. Entre libros y folletos en el año 1946 se distribuyeron 245.500 y dos años más tarde se llegó hasta los 700.000 ejemplares.

Dentro de la labor editorial se quiso dar un papel destacado a La Editora Nacional<sup>104</sup>. Creada por orden de 1937, en sus inicios fue un órgano de difusión de los servicios de Propaganda, a la vez que un conglomerado editorial en el que fueron confluyendo casi todos los proyectos editoriales ligados a Falange, de hecho las Ediciones de Jerarquía, de Fe y de Escorial desde 1938 estuvieron incluidas en la Editora Nacional, de la cual constituían meras colecciones.

La Editora Nacional dependió económicamente de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Movimiento, pero ideológicamente quedó sometida a la Delegación Nacional de Propaganda de la Vicesecretaría de Educación Popular.

Sobre ella escribía en 1950 el ministro de Educación Nacional ensalzando sus actuaciones<sup>105</sup>:

“(…) habiéndose creado durante la guerra como eficaz elemento de propaganda de la España nacional atendió a los fundamentos ideológicos del régimen y así fue posible conservar el texto vivo de los discursos y otras manifestaciones verbales” no sólo de los jefes del movimiento sino de cuantos con su esfuerzo intelectual y el sacrificio de sus vidas contribuyeron a crear una ideología política de eficaz cometido”

Sus objetivos fundacionales fueron la edición, distribución, venta y fomento de todo tipo de publicaciones que contribuyeran a la formación cultural y social del pueblo español y al

---

<sup>103</sup> Memoria de las actividades de la Dirección General de Propaganda, Madrid, Publicaciones Españolas, 1947

<sup>104</sup> RUIZ BAUTISTA, E. Los señores del libro, Gijón, Trea, 2004 y “La Editora Nacional (1941-1945)”, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 13, 2005, págs. 99-120. GARCÍA NAHARRO, F. “Las publicaciones oficiales. Editora nacional”, en Martínez Martín, J.A. (coord.) *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 219-229

<sup>105</sup> IBÁÑEZ MARTÍN J. Diez años de servicio a la cultura española: 1939-1949, Madrid: Magisterio Español, 1950, p. 30

conocimiento de sus instituciones y características peculiares, dentro y fuera del territorio nacional.

Los problemas para el correcto desenvolvimiento de la Editora Nacional eran los habituales en toda empresa de titularidad estatal con el agravante de que producía publicaciones culturales e ideológicas que debían competir con la producción de las editoriales privadas.

La *Editora Nacional* debía comportarse como cualquier otra editorial: presentar los planes editoriales, obtener papel, firmar contratos con autores e intentar vender el mayor número de libros. Como empresa debía buscar la mayor rentabilidad posible aunque sin renunciar a unas premisas ideológicas. Por ello no se realizaban grandes tiradas, siendo frecuentes las reediciones. Sus precios oscilaron entre las 6 y las 25 pesetas y aunque eran elevados para la gran mayoría de la población, no diferían de los precios fijados por otras editoriales y estaban en consonancia con los costes comerciales.

La Editora no disponía de imprentas propias por lo que tenía que recurrir a los servicios de imprentas particulares.

Problema endémico que arrastró desde sus orígenes fue el de las escasísimas ventas de sus títulos a pesar de contar con la publicidad gratuita y constante de las cadenas de radiodifusión y prensa del Movimiento. Las librerías también hicieron llegar a la Sección de Ediciones sus problemas para encontrar mercado a las obras de Editora Nacional.

Para atenuar sus problemas económicos recibió de la Vicesecretaría de Educación Popular los ingresos que obtenía ésta de la distribución de libros y folletos de la Sección de Ediciones —se embolsaba la mitad del precio de la venta—, así como de las compras de libros que la misma Sección realizaba como complemento de su propaganda.

Desde una perspectiva ideológica los libros publicados por la Editora hasta 1945 eran similares a los editados por la Sección de Ediciones de Darío Fernández Flórez. En la colección *Biblioteca Nacional* se puede comprobar cómo los conceptos de España en clave imperial y nacionalcatólica estaban presentes, al igual que las obras de Falange sobre su historia y doctrina. Posteriormente este componente militante se irá atenuando.

Sus dos colecciones más representativas fueron *Breviarios del pensamiento español*, en la que se quería condensar todo el saber necesario y *Breviarios de la Vida Española*, conformada por las biografías de los conquistadores, políticos, santos, hombres de letras y de ciencias de antaño y actuales.

Las pretensiones culturales de la *Editora Nacional* quedaron patentes en la inclusión en su catálogo de obras de indudable calidad literaria que nunca habrían tenido cabida en la Sección de Ediciones, y aunque se editaron a autores identificadas con el bando vencedor (Manuel Machado, Gerardo Diego, Ángel Ganivet, Laín; Zubiri, Julián Marías), también se publicaron algunos, autores que aunque incómodos (Unamuno, Feijoo o Larra), era necesario incluir por su valía cultural, pero reinterpretándolos desde la ortodoxia de los principios del Régimen.

Pero la superioridad cultural de la Editora Nacional, no estaba solo en la inclusión de determinados autores, sino en cómo se presentaban las obras. Inclusión de citas, bibliografía, índices analíticos, mayor cuerpo argumental, mayor número de páginas.

## **2.3. LA POLÍTICA DEL LIBRO DE FALANGE Y ACCIÓN CATÓLICA**

Junto a la política oficial que desarrolló el franquismo en el ámbito del libro, dos organizaciones, FET y de las JONS y Acción Católica, ligadas al régimen con bastantes principios ideológicos concurrentes desarrollaron las suyas propias.

### **2.3.1. FALANGE. Libros azules al servicio del Estado totalitario**

Desde algunas secciones de FET, en concreto la Organización Juvenil, la Sección Femenina y la Obra Sindical de Educación y Descanso, se intentó hacer una labor activa de crear “cultura”, de “educar a la población” en los postulados del régimen. Pero esa cultura estuvo tan impregnada por la propaganda que incluso la anuló<sup>106</sup>. Dentro de esa labor cultural debemos incluir la política del libro que Falange desplegó sobre la juventud, las mujeres y los obreros mediante la edición, publicación y distribución de libros y revistas, así como, con la creación de bibliotecas.

#### ***La Organización Juvenil-Frente Juventudes***

Los dirigentes de la Organización Juvenil, luego Frente Juventudes, tempranamente vieron en el libro una de las fuerzas más eficaces para el resurgimiento de la Patria.

Educando al niño entre libros ponemos la más sólida piedra para hacer resurgir la España una grande y libre y para dirigir la Hispanidad era indispensable que las nuevas generaciones se formasen apoyándose en libros.

Incluso llegan a especificar lo que proporcionaría al niño la lectura de los distintos tipos de libros. Los cuentos de hadas exaltarán su imaginación; los de aventuras y exploración despertarán en su alma nobles y viriles aspiraciones; las biografías le llevarán a imitar conductas ejemplares; los de historia fortificarán su amor a la patria y a sus instituciones y los de religión a vivir como cristianos.

Pero junto a esta concepción ideológica se es consciente de la necesidad instrumental de crear en el niño el hábito de leer, el amor al libro y frecuentar las bibliotecas.

*Hay que acostumbrarle a manejar los libros, hay que enseñarles que en una biblioteca se pueden resolver todos los problemas de información y estudio, desde el dato más indispensable para la vida doméstica a la manera de pasar de oficial a maestro en una profesión cualquiera y aumentar por ende el volumen de sus ingresos.*

Por ello el Departamento de Cultura de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles se percata de la responsabilidad moral que sobre sí tiene en la formación y educación espiritual de los futuros hombres de la España Nueva, y crea una Sección de Bibliotecas en 1939, con objetivo de que en todo el territorio nacional, hasta en los más apartados rincones, se infiltre

---

<sup>106</sup> Miguel Ángel RUIZ CARNICER, *La España de Franco (1939-1975): cultura y vida cotidiana*, Madrid, Síntesis, 2004, pp. 155-159



la necesidad de acostumbrar a leer a los niños, y de despertarles la curiosidad por los conocimientos humanos.

Para conseguir esta finalidad había que formar a los camaradas encargados de estas bibliotecas para que supiesen seleccionar y recomendar los libros más adecuados, además de contar con unas normas comunes para todas las bibliotecas que facilitasen su organización técnica y material.

En enero de 1940 se presenta al Departamento de Cultura una ponencia sobre bibliotecas elaborada por el bibliotecario Javier Lasso de la Vega, Carmen Werner, Luisa M<sup>a</sup> de Aramburu y Fernando del Castillo. El contenido de la misma incluía crear a partir de 1940, una Biblioteca Infantil Modelo, una red de bibliotecas infantiles destinadas a la O.J., así como una editorial de la O.J. que colaborase con editoriales españolas. Constituir bibliotecas circulantes para servir a playas, campamentos, etc.; organizar cursillos para bibliotecarios/as; realizar una exposición de Bibliotecas infantiles y elaborar unos cuestionarios, que se enviarían a las Organizaciones, con el propósito de que los niños contrajeran un hábito de leer y consultar libros.<sup>107</sup>

Esta biblioteca infantil modelo o experimental se pretendió inaugurar entre marzo y abril en un lugar céntrico de Madrid. Con la ayuda económica de la O.J. se facilitaría el mobiliario y el local, y para dotarla de libros se solicitó a las principales editoriales españolas la donación de ejemplares adecuados a sus fines, aparte de los que proporcionaría la Comisión.

Se pretendía que funcionara como un laboratorio de lectura infantil, en estrecha colaboración con la Cátedra de Paidología y las editoriales de libros infantiles, donde se seleccionarían y clasificarían por edades y sexo la literatura infantil existente; y se fomentaría la literatura infantil nacional. Igualmente se abogaba por crear una editorial para la Organización Juvenil o contactar con empresas editoriales que publicaran series y colecciones infantiles. Y además, se debería publicar una revista infantil como órgano indispensable que con la editorial podría facilitar medios económicos para la más rápida creación de la red de bibliotecas y servicios de lectura.

Este proyecto no se llegó a ejecutarse tal cual, en cambio si se puso en funcionamiento la Biblioteca Provincial que tuvo la Delegación Provincial del Frente Juventudes en un chalet de la Glorieta de San Bernardo, que en palabras de Antonio Alcoba *estuvo estupendamente dotada con un amplio número de volúmenes, que podría cifrarse en más de 10.000 de diferentes áreas: novela, poesía, ciencia, historia, política, cine, teatro, deporte, juegos, cuentos, etc. El local, dentro de un reducido espacio, contaba con lugares para el estudio y puede decirse que era visitado por numerosos jóvenes, especialmente aquellos que por sus economías no podían comprar libros, razón por la que esta biblioteca nunca se encontró vacía. A los miembros de las Falanges Juveniles, se les autorizaba a sacar los libros del recinto para ser llevados a sus casas por un determinado tiempo*<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> ALCOBA, A. Auge y ocaso del Frente de Juventudes, Madrid, San Martín, 2002, pp. 144-145

<sup>108</sup> ALCOBA, A., Auge y ocaso...,

La exposición/concurso de librerías/bibliotecas infantiles si llegó a organizarse celebrándose en la Asociación de la Prensa de Madrid bajo el patrocinio de la O.J.

Ante la falta de personal capacitado se organizó un cursillo elemental en técnicas bibliotecarias para formar auxiliares de bibliotecas y así poder gestionar las recién creadas bibliotecas de la O.J. Se celebró en la sala de conferencias de la Asociación de la Prensa, durante los días que estuvo abierta la Exposición de Bibliotecas Infantiles que patrocinó la O.J. y más tarde continuó en la Residencia de Señoritas. El curso fue programado por Javier Lasso quién dio la primera lección inaugural. Participaban en el curso como docentes: Francisca Bohigas, profesora de pedagogía de la Universidad Central, Enriqueta Martín, bibliotecaria de la Residencia de Señoritas y María África Ibarra, bibliotecaria de la Academia de la Historia. El programa del cursillo incluyó estos contenidos: catalogación y clasificación; cómo se debe amueblar una biblioteca; formación del bibliotecario; actividades complementarias de la biblioteca y disposiciones de régimen interior de la misma; literatura; tipos femeninos en los cuentos clásicos o la hora del cuento y la técnica de contarlos.

El buen bibliotecario debería saber relacionar la edad con el libro, la aptitud y las condiciones del lector, por ello las lecturas en las bibliotecas de las O.J. se dividían en dos grupos: de 7 a 12 años, en donde se leían obras cuyo objetivo era aumentar los conocimientos y poner en relación al lector con las cosas y personas que le rodeaban y de 12 a 18 años, donde tanto niñas como niños, podían leer libros de aventuras, de viajes, de inventos, sobre ciencia o química o sobre cómo construir un aparato. Aunque las niñas podían leer todos estos libros que tradicionalmente gustaban a los chicos, sobre todo se fijaban en libros que hablasen de cosas menos objetivas, cosas de imaginación, con las que pudiesen divagar, hacerse ilusiones<sup>109</sup>.

Las primeras actuaciones del Departamento de Bibliotecas de la Delegación Nacional de O.J.<sup>110</sup> estuvieron encaminadas a la ordenación de los libros que el servicio de recuperación e incautación de Falange tenía amontonados en la Delegación Provincial de Madrid en la calle Ibiza, así como la organización de los libros de la biblioteca provincial. Labor que resultó pesada y lenta porque no existía entre los mandos ningún criterio fijo y preciso para la selección de obras pertinentes para las bibliotecas de la O.J., unido a la falta de recursos materiales y humanos.

Para paliar esta deficiencia se decidió dar inicio a unos cursillos elementales intensivos de biblioteconomía para Flechas Azules y Cadetes, que después pudieran así servir como auxiliares de bibliotecas, y al mismo tiempo se gestionó del Asesor Jurídico de la Sección de Falange Femenina la necesidad de incluir este trabajo en el Servicio Social Obligatorio, para poder contar en toda España *con un personal capacitado para la propagación de la cultura de nuestros futuros hombres, dentro de las bibliotecas*.

Obras de pedagogía; manuales de industrias y ciencias aplicadas; religión; biografías; historia; literatura clásica; cuentos; poesía.... formaban el fondo bibliográfico de esta Biblioteca

---

<sup>109</sup> "Libros, libros y...¡¡libros!!", Y. Revista para la mujer, 1940

<sup>110</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 5

provincial, que además también recibió de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros un lote *muy bien seleccionado en todas sus materias para los pequeños lectores*. Pero curiosamente carecía de lecturas falangistas, de las que había de proveerse.

El Departamento tuvo que lidiar con la Junta de Recuperación de la Biblioteca Nacional, pues tras entregar a ésta todos los libros que tenían sellos y los que no eran adecuados a sus fines no recibió a cambio obras dirigidas a jóvenes como se había acordado.

Con motivo de la Fiesta del Libro se realizó una cuestación Pro-Libros a través de la cual se recaudaron fondos en metálico y libros. Para la distribución de los primeros se estableció que las cantidades correspondientes a Organizaciones Juveniles se destinaran íntegras a la formación y fomento de sus secciones de Bibliotecas, arreglando y habilitando un local para Biblioteca, comprando libros adecuados para la formación moral y cultural de los afiliados y afiliadas o adquiriendo fichas y ficheros para catalogar los libros. En las provinciales donde la recaudación no alcanzaba una cifra lo suficientemente alta para cumplir todas estas cláusulas, se dispuso que empleasen este metálico en adquirir libros, ficheros y fichas para su catalogación. Respecto a los volúmenes recaudados había que seleccionarlos en función de los gustos y aficiones de las juventudes pasados por el tamiz del ideario falangista.

Inicialmente en Madrid se iban a constituir bibliotecas en algunos de sus distritos, pero en su primera inspección la situación de partida no era muy halagüeña<sup>111</sup>: la de Comillas se tuvo que cerrar porque, aparte de no estar catalogados y clasificados sus fondos, se habían perdido la mayor parte de los libros que había regalado para la inauguración la Junta de Intercambio. La de Centro tenía un local adecuado pero necesitaba libros y en la de Chamartín el mobiliario estaba muy deteriorado. Por su parte, la Provincial pese a la inversión en mobiliario le faltaba más presupuesto para gastos de escritorio y útiles de biblioteca.

Muy diferente fue la realidad de las bibliotecas creadas en Barcelona y su provincia, para cuyo conocimiento contamos con la publicación por parte de Falange de varios anuarios entre 1939 y 1941, además de las estadísticas recogidas en el *Anuario de la Biblioteca Central y de las Populares y Especiales de Barcelona* publicado por la Diputación de Barcelona.

Puesta en marcha la O.J. de Barcelona a pocos días de la liberación, surgió la iniciativa de crear un Departamento de Bibliotecas con la misión no sólo de organizar una sala de lecturas y nombrar unos camaradas para que la controlasen, sino para ofrecer además cursillos, conferencias, concursos, servicio de la “Hora del Cuento”, guías de lectura y hasta una sección filatélica<sup>112</sup>.

En Barcelona la O.J. desarrolló toda una organización bibliotecaria que comprendía: la Central de bibliotecas, las bibliotecas de distritos, las bibliotecas provinciales, unas pocas bibliotecas especializadas y las bibliotecas circulantes en campamentos.

---

<sup>111</sup> Bibliotecas de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles. Falange Española. 1939-1940. ARCHIVO BUC. Fondo Lasso de la Vega. Caja 5

<sup>112</sup> Frente de Juventudes. Delegación Provincial (Barcelona). Servicio de Bibliotecas. Anuario 1939

La Central como su nombre indica centralizaba las adquisiciones de libros y material para luego distribuirlos entre las diversas bibliotecas, una vez registrados, sellados y catalogados los libros. También recogía los informes de los encargados de las diferentes bibliotecas, para estudiarlos comparativamente con objeto de mejorar el servicio.

Las Bibliotecas de distritos se situaban en los cuarteles y casas de Flechas y las Bibliotecas de la Provincia, cuya calidad y servicios fueron muy desiguales, tendieron a instalarse con preferencia en los pueblos que no tenían ni habían tenido nunca biblioteca.

Dentro de las bibliotecas de cuarteles destacó especialmente la Biblioteca del distrito XI-Universidad industrial:

Se halla instalada en un magnífico local que reúne excelentes condiciones para la lectura y es fruto de una minuciosa preparación. El fondo bibliográfico ha sido aumentado de una manera continua. Como consecuencia del interés de los camaradas lectores hacia la Biblioteca, expresado en las elevadas cifras, que la convierten en la mejor de nuestras Bibliotecas de Cuarteles. La influencia que ejerce sobre los lectores es verdaderamente notable, gracias al ordenado criterio de organización de los mandos que la rigen. Un perfecto sistema permite la orientación de lecturas y un riguroso control, por parte del Departamento Provincial, del cual reciben los bibliotecarios las normas para desarrollar su actividad. Posee la biblioteca un "Periódico Mural" que redactan los Bibliotecarios en el que se fomenta el interés hacia los buenos libros, mediante Guías de Lectura, comentarios, críticas literarias, etc.

También se crearon bibliotecas especializadas: la Biblioteca de la Escuela de Orientación Profesional y de Mandos de la Sección Femenina y la Biblioteca de Flechas Navales, que en 1941 aún no funcionaron con normalidad. Por último, en los campamentos de verano se estableció un servicio de bibliotecas circulantes. Compuestas por lotes de 100 a 300 libros que se mandaban en muebles especiales, etiquetados, sellados, con catálogo en fichas de autores, lista de materias según CDU y las fichas de préstamo. Además, los camaradas encargados de estas bibliotecas, recibían unas normas escritas sobre la manera de controlar las estadísticas y el reglamento del servicio de préstamo.

En la Circular núm. 30<sup>113</sup> del Servicio de Bibliotecas del Frente Juventudes se especificaba pormenorizadamente la misión de la Biblioteca en el campamento:

a) En relación con los mandos: ofrecerles las fuentes de Información y los elementos necesarios para el perfecto cumplimiento del servicio que les ha sido encomendado. Consultar la Biblioteca antes de dar las clases y charlas, recomendar en ellas algunos libros que estén relacionados con el tema de que se trata y colaborar en la organización de concursos y demás actividades complementarias del servicio de lectura.

b) En relación con los acampados: inculcar nuestro estilo, nuestras doctrinas políticas y religiosas; colaborar en su formación cultural; ofrecerles el placer sano de los buenos libros de diversión y pasatiempo. Los campamentos ofrecen una gran ocasión para acercar nuestros afiliados a los buenos libros, arrebatando insensiblemente de sus manos los libros perniciosos y aún los inútiles, y hacer que poco a poco se impongan la lectura como una necesidad constante.

Obligación de los mandos en relación con la Biblioteca: ayudar al Bibliotecario en su misión; vigilar y aconsejar el buen trato de los libros; sancionar a los camaradas que estropeen los libros o los maltraten; no suprimir bajo ningún concepto el tiempo destinado a la lectura.

---

<sup>113</sup> Frente de Juventudes. Delegación Provincial (Barcelona). Servicio de Bibliotecas. Anuario 1941

Las bibliotecas de la Organización Juvenil se nutrieron , a parte de las aportaciones de la misma organización, de lotes recibidos de centros oficiales como la Diputación, o las embajadas de Italia y Alemania, de entidades como Acción Católica, la Caja de Pensiones y de editoriales.

En los trabajos iniciales colaboraron bibliotecarias profesionales, no olvidemos que en Barcelona se ubicaba la única escuela profesional de bibliotecarias, pero al reintegrarse a sus actividades se vieron en la necesidad de formar a los camaradas constituyéndose un Cuerpo de Bibliotecarios de la O.J. Se realizaron dos cursillos: uno en noviembre de 1939 y otro al año siguiente. Tras la formación teórica los asistentes realizaban seis meses de prácticas en bibliotecas de distritos o de campamentos, y quincenalmente se celebraban reuniones con los bibliotecarios para resolver problemas de funcionamiento, donde además de indicaciones técnicas se les daban charlas de orientación nacional-sindicalista a fin de conseguir la formación de una minoría selecta de camaradas que supiese hermanar y fundir en su espíritu la cultura y la milicia<sup>114</sup>.

En junio de 1941 se publicó un Reglamento en el que se especificaba que las bibliotecas sólo podrían utilizarlas los miembros de Falange y el horario de apertura de estas bibliotecas que ofrecieron fue muy restringido: de 6:30 a 8:30, dado la voluntariedad de los encargados.

¿Cuántas bibliotecas llegaron a crearse? ¿Cuántos lectores y libros se leyeron?

Año	Bibliotecas de Barcelona	Lectores	Libros leídos
1939	18	6.613	13.225
1940	10 + bibliotecas de campamentos	-----	-----
1941	36	31.853	30.679
1942	26	40.394	41.455
1943	25	39.778	26.989
1944	25+ bibliotecas de campamentos	47.323	16.090

**Gráfico 1. Datos hasta 1944 y para la provincia de Barcelona exclusivamente.**

De 1945 a 1951 y a nivel nacional y sólo para el Frente Juventudes contamos con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.

<sup>114</sup> Frente de Juventudes. Delegación Provincial (Barcelona). Servicio de Bibliotecas. Anuario 1939 y Anuario 1940

Año	Bibliotecas	Lectores
1945	87	110.172
1946	132	102.601
1947	184	151.423
1948	154	148.372
1949	139	180.468
1950	184	214.765
1951	372	356.496

**Gráfico 2. Fuente: INE. Actividades culturales del Frente de Juventudes**

¿Qué libros se leían en estas bibliotecas? Según los datos recogidos entre 1939 y 1941 los libros más leídos por materias fueron los cuentos y novelas, en las bibliotecas de flechas, seguido de los de historia y geografía, viajes y nacionalsindicalismo.

Para atraer al lector indiferente así como para formar moral e intelectualmente al público infantil y juvenil, se recurrió a las guías de lectura como uno de los medios más eficaces. Se hicieron guías sobre el nacional-sindicalismo, José Antonio o el Imperio español y sus figuras. Y se organizaron conferencias y cursillos sobre los mismos temas que las guías. Además se publicaron artículos cuyos títulos son más que significativos de la función que se asignaba a estas bibliotecas: *Nuestra Biblioteca*; *El arte de leer*; *Lope de Vega*; *García Morato*; *Cómo nos fue arrebatado el Peñón de Gibraltar*; *Piensa que un día España necesitará de ti, prepárate para cambiar el libro por el fusil cuando la hora llegue*.

Una de las actividades de más éxito entre los Pelayos y Margaritas fue la “Hora del Cuento”, pues en cierta medida venía a suplir la poca bibliografía infantil con que contaron estas bibliotecas, aunque en el Anuario de 1940 se decía que por falta de personal no se pudieron desarrollar al completo todas las sesiones.

El esquema editorial de publicaciones de las diferentes delegaciones de juventudes que se fueron sucediendo en el tiempo, corrieron paralelamente a la estructura organizativa de los organismos de que dependían. Por otro lado, hay dos constantes en los empeños editoriales de OJ y el Frente Juventudes: los libros de formación política, casi todos nacionalsindicalistas, y mayoritariamente destinados a la capacitación de mandos, y los manuales de montañismo y aire libre.

Iván García sistematiza así el conjunto de la producción editorial de la OJ y FJ: publicaciones legislativas; de formación política, pedagógicas y deportivas, manuales de aire libre, publicaciones periódicas y cancioneros<sup>115</sup>.

Desde la Organización Juvenil se fomentó la edición de periódicos, boletines provinciales y revistas, que en diversas provincias, llevaron estos nombres: *Boletín de Juventudes*, *Boletín de O.J.*, *Boletín Oficial de Juventudes Adelante*, *Juventud* y su suplemento infantil; *Clarín* y luego *Baladín*; *La Hora* para estudiantes; *Alfa* publicación para temas científicos; *Guía*; *Afán*, *Alerta*; *Consigna*; *Firmes*, *Flechas*, *Imperio*, *Norma*, *Saetas*, *Apuntes e Ideas*, etc. Para los más pequeños se editó *Flechas y Pelayos*, y poco después *Maravillas*, ambas publicaciones gozaron de una gran aceptación entre 1939 y primeros años de la década de los 40.

Paradigma de los primeros años del franquismo fue *Flechas y Pelayos*, publicación que gozó de gran aceptación y predicamento beneficiándose de la protección de la Prensa del Movimiento frente a los azares de la competencia. Sus contenidos en estos primeros años presentaban una voluntad de legitimar al régimen y al Caudillo, de enfervorecer a las masas y despertar su más incondicional adhesión al Nuevo Estado. Cumplía con todos los requisitos del discurso sobre la prensa infantil de la primera posguerra elaborados por fray Justo Pérez de Urgel, inspector de prensa infantil. Ésta como la prensa dirigida a adultos, debía estar sometida a los dictados del Estado, y su fin último era educar/adoctrinar a las nuevas generaciones, en formación religiosa moral, patriótica, científica y humana. Pero a la vez debía ofrecer entretenimiento, a través del uso de la imagen, la ejemplaridad de los héroes, el humor y la interactividad de los concursos.

Es cierto que incluía contenidos educativos, pero rara vez se transmitían de manera objetiva, neutral o con finalidad exclusivamente instructiva<sup>116</sup>.

Entre las publicaciones que más difusión tuvieron se encuentran las realizadas y editadas por el servicio de prensa de los campamentos, los populares *Mástil y Volante*, confeccionados por los propios acampados a ciclostil, en los que se contaban las cosas que sucedían durante cada turno, recogiendo ideas, artículos, etc. También, el citado servicio de prensa realizaba murales y llevaba la biblioteca del campamento. Esta labor de autoedición también la realizaban las centurias durante el resto del año con sus propios periódicos.

Para enseñar cómo podían llevarse a efecto esas publicaciones, la Ayudantía Nacional de las Falanges Juveniles, publicó un librito, titulado *Prensa de Centurias*, en el que se ofrecían nociones de maquetación, titulación y rotulación, manejo de la ciclostil, realización de murales, etc. No obstante, ello no impidió, que desde los periódicos de Centuria, se criticase la actitud del régimen y su paulatina desviación del ideario joseantoniano.

Con posterioridad se puso en marcha la editorial Doncel, que realizó una extraordinaria labor cultural con libros de todo tipo. Aunque su labor se pasa de los límites cronológicos de este trabajo, apuntar únicamente que fue una empresa estatal destinada a la impresión y

---

<sup>115</sup> Iván GARCÍA VÁZQUEZ, Estudio de una institución del franquismo: fuentes y metodología para el Frente de Juventudes, TFM, Universidad de Valladolid, 2011

<sup>116</sup> Henar HERRERO SUÁREZ, Un yugo para los flechas: educación no formal y adoctrinamiento infantil en "Flechas y Pelayos", Lleida, Milenio, 2007, pp.

confección de la mayor parte de los libros del FJ y de la OJE. Durante años fue la gran editorial juvenil estatal, que abarcó desde el género narrativo infantil, hasta la publicación de diferentes manuales de formación política y social. Si una publicación era juvenil, resultaba casi obligatorio su pase por las oficinas de la Editorial Doncel<sup>117</sup>.

### ***La Sección Femenina***

Para la Sección Femenina (SF) el adoctrinar a las mujeres en el “credo falangista” era el sentido último tanto de la actividad editorial como de las bibliotecas que organizó<sup>118</sup>. Pero también es verdad que la SF luchó contra el analfabetismo a través de sus actividades asistenciales en el medio rural, que por medio de los círculos Medina<sup>119</sup> acercó la alta cultura a la clase media y media alta urbana y a las estudiantes y que confió en la cultura y el conocimiento como medios idóneos para la formación de las mujeres trabajadoras fuera del hogar. Además la cultura siempre estuvo presente dentro de los diferentes programas de formación (de los mandos, de especialidades, de todas las afiliadas, en el Servicio social, en las juventudes y en las cátedras ambulantes)

Por ello, la SF vio desde el principio necesario y urgente la organización de la cultura femenina en España, que instrumentalizará a través el Servicio Central de Cultura, luego llamado Regiduría de Cultura, desde febrero de 1939<sup>120</sup>. Dentro de este Servicio se crea un departamento de bibliotecas y publicaciones cuyos ejes de actuación<sup>121</sup> debían girar en torno a la necesidad de crear publicaciones femeninas de calidad dirigidas a las mujeres sin hábito de lectura; la instalación de Bibliotecas en todas las Delegaciones provinciales y locales, y la utilización de las municipales y del Estado y, por último, la conveniencia de establecer convenios con las editoriales españolas que editasen libros para niños y mujeres, garantizándoles a cambio su propaganda y difusión entre los afiliados.

Pilar Primo de Rivera<sup>122</sup> expresaba así las aspiraciones de la Asesoría de Cultura de Falange Femenina:

*(...) crear el hábito de lecturas en la mujer y adiestrarla en la consulta cotidiana de libros para ampliar sus horizontes espirituales y la solución más científica y moderna de sus problemas,*

---

<sup>117</sup> Iván GARCÍA VÁZQUEZ, Estudio de una institución del franquismo..., pp. 73-75. En el AGA se encuentra depositado su fondo dentro de la Sección Ministerio de Cultura

<sup>118</sup> Fernanda RINCÓN “Mujeres azules en la Sección Femenina”, *Métodos de información*, (1), 2010, pp. 59-81

<sup>119</sup> Primero sólo en Madrid y Barcelona y luego en casi todas las provincias, los círculos Medina eran unos locales con salón de actos y biblioteca en donde se programaban conferencias, encuentros y actos culturales de todo tipo, como conciertos o exposiciones. Iban dirigidos fundamentalmente a las mujeres de clase media y alta urbana y a las estudiantes.

<sup>120</sup> Sección Femenina (Falange Española de las JONS). Proyecto de Servicio de Cultura, Burgos, 1-2-1939. Archivo BUC. Fondo Lasso de la Vega. Caja 5

<sup>121</sup> Estos ejes se definen en el III Consejo Nacional de la SF celebrado en Zamora el 5 de enero de 1939.

<sup>122</sup> Propuesta de Pilar Primo de Rivera al Ministro de Educación Nacional para obtener libros de las Bibliotecas Públicas para sus delegaciones (1940?). Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 5



*culinarios, de puericultura, higiene y economía doméstica.* Y para tal fin se pusieron en ejecución entre otros proyectos: a) la redacción de una “Guía de lecturas para la mujer”<sup>123</sup> mediante la cooperación de las autoridades nacionales representativas de las distintas ramas del saber humano; b) La organización de la biblioteca central de Falange Femenina en el Castillo de la Mota de Medina, y las bibliotecas propias de la Sección, clasificadas en provinciales, locales y sucursales y c) la distribución sistemática de cuestionarios encaminados a enseñar a la mujer la manera de obtener informaciones científicas prácticas en las Bibliotecas públicas.

La misión del Departamento Central de Bibliotecas abarcó cuatro líneas de actuación<sup>124</sup>:

1. Orientar las lecturas de todas las afiliadas y de las que sin serlo, acudían a sus centros de enseñanza. Para ello se formó un fichero bibliográfico con los libros más interesantes que se editaban, ampliado con las reseñas de revistas, más la reseña del Consejo de censura.
2. Crear y orientar la formación de bibliotecas en los Centros dependientes de la Delegación Nacional de SF, tanto en las provincias como en comarcales y pueblos. En este sentido se diseñó todo un sistema bibliotecario jerarquizado: la Central, las bibliotecas provinciales, fijas locales y comarcales, y las viajeras; las Bibliotecas de Juventud y de Sindicadas o Productoras y las Bibliotecas de Escuelas de Hogar. Además de las bibliotecas de los “Círculos Medina” y de las Escuelas de formación.
3. Divulgar todos los libros que por su contenido cultural, moral, político o recreativo fueran dignos de ello, a través de notas bibliográficas en la revista *Consigna* o elaborando relaciones de títulos que después se enviaban a las Bibliotecas.
4. Distribuir periódicamente lotes de libros a todas sus bibliotecas, siempre acompañados con una clasificación por edades e indicación del contenido de cada título.

Este Departamento tenía una Junta de Asesores formada, en sus inicios, por el Marqués de Lozoya, Javier Lasso de la Vega, Antonio Tovar y el padre Félix Grande. Igualmente cada Jefatura Provincial debía establecer la suya propia formada por el bibliotecario provincial, el asesor religioso y la regidora de cultura, con la función de determinar los fondos bibliográficos de cada una de las bibliotecas que la SF iría abriendo en los diferentes centros.

De hecho, las responsables no podían adquirir, bajo ningún pretexto, libros para su Biblioteca, fuesen fijas o viajeras, sin la autorización de la Regidora Central de Cultura, ni siquiera donativos y estaba totalmente prohibido ingresar o retener cualquiera de los libros incluido en el Índice de libro prohibidos de la Iglesia.

Las camaradas encargadas de las Bibliotecas tenían por misión todo lo referente a la organización técnica, cumplir todas las circulares y órdenes que recibiera de la Central, poniendo especial interés en que no ingresara ni se tuvieran libros en la Biblioteca sin ser autorizados por la Central, gestionar el préstamo, confeccionar partes trimestrales con los

---

<sup>123</sup> En estas guías se clasificarán las obras por medio de marcas en varios grupos: a) según su valor formativo y el ajuste más o menos pleno a las ideas que informan las directrices del estado actual. b) según la edad y condiciones que ha de reunir la mujer para obtener el máximo provecho de lectura.

<sup>124</sup> Normas relacionadas con el Departamento de Bibliotecas de la Regiduría Central de Cultura, Madrid [Sección Femenina], 1956

datos del servicio, y estar al tanto de las novedades literarias y conocer los libros de la Biblioteca para poder orientar con conocimiento. Las bibliotecarias no podían prestar ningún libro sin antes consultar las notas bibliográficas que enviaba la Regiduría Central donde se indicaba el contenido y la clasificación.



Desde su creación, este Departamento instó a todas las Regidurías Provinciales a establecer la consiguiente biblioteca provincial en todas las jefaturas. Al principio, para dotar de libros a estas bibliotecas se tuvo que recurrir a un acuerdo con el MEN por el que se permitía a la SF el préstamo de 200 libros al mes de las Bibliotecas Provinciales.

Los fondos debían ceñirse a las orientaciones establecidas por la Circular número 10 de la Regiduría de marzo de 1940 en la que se decía que la misma guía de lecturas debía estar en todas las delegaciones (libros de formación religiosa y política exclusivamente). La adquisición de libros la realizaba el Departamento Central y se elegían los mismos libros para todas las Bibliotecas provinciales. Todos los libros que llegaban a las bibliotecas eran censurados y clasificados por su valor moral. Muchos de ellos pertenecían a EQUIPO ESPECIAL, y ninguna camarada que no hubiera cumplido los 27 años podría reclamar estos libros si la biblioteca no juzga oportuno prestarlos.

Más variados posiblemente fueron los libros que llevaron las "bibliotecas circulares" o bibliotecas ambulantes a las localidades donde no se podía crear una biblioteca, pero sí había Escuela Hogar, según informe de la puesta en marcha de este servicio en 1940:

Para montar este Servicio definitivamente, del que se hablaba en carta circular fechada el 1 de marzo del pasado año, visité acompañada de la Regidora Central de Cultura al Jefe de Archivos y Bibliotecas que nos ofreció sin reservas su valiosa colaboración, prometiéndonos su ayuda en todo cuanto pudiese. Gracias a él pudimos inaugurar este Servicio que viene funcionando con éxito creciente a partir del 6 de agosto.

Hasta la fecha lo realizábamos los domingos, por ser el único día que teníamos libre, pero como transporte nos ha suprimido, pero como transportes nos ha suprimido el coche ese día, ahora saldremos los sábados.

Los equipos se compusieron al principio de 90 volúmenes, acondicionados en maletas. Ahora el nº ha disminuido a 50, para poder llevar la Biblioteca circulante a más pueblos y hemos entregado ya 9 cajones según el modelo que incluyo. Van acompañados de un catálogo, no pudiendo acompañar fichas, por el gasto que nos supondría, imposible de sostener. Queda el equipo un mes en el pueblo, al que se le da instrucciones para el buen funcionamiento de la Bibliotecas, todo libro que sale es anotado en una relación como la siguiente:

Así sabemos cuáles son los autores preferidos y los lectores más asiduos, que son casi siempre chiquillos.

Se compone el equipo de unas 20 novelas (Rosa, Pereda, etc.) algo de poesía (Rubén Darío, Gabriel y Galán, Bécquer) alguna biografía, libros del Movimiento (Madrid de Corte a Cheka, Discursos de José Antonio, Palabras del Caudillo) y cuentos, Heidi y otros. Animales salvajes y domésticos, la vivienda, Perrault, Schmist etc. Olvidaba citar los libros instructivos (Historia, Geografía, Agricultura, Ganadería) estos en unión de los cuentos y novela rosa son los que más se consultan. Relación de los pueblos visitados y nº de equipos que por ellos ha pasado: total de pueblos visitados 31, total de equipos 69

El número de libros que se leen varía bastante según los pueblos. Depende sobre todo del interés que se tome la Regidora o Delegada, tenemos el caso de Chozas pueblo de 683 habitantes antes del Movimiento que en un solo mes leyó 205 volúmenes, el afán de lectura es pues grande en la mayoría de los pueblos, pero es necesario saberlo despertar y dirigirlo, dar la mayor facilidad para la lectura, tropezamos a veces con Regidoras o poco capacitadas o faltas de interés, que a veces no entregan los libros o no apuntan quién lo saca, no pudiendo por tanto saber el nº exacto de volúmenes leídos.

El ideal para vencer estas dificultades que entorpecen el buen funcionamiento de la Biblioteca sería que camaradas de Madrid se quedasen por lo menos una semana en el pueblo, dirigiendo la lectura y estableciendo horas fijas para veladas literarias a las que se procuraría asistiesen el mayor nº de gentes (niños, muchachas) con los oyentes se harían después comentarios, haciéndolos contar lo leído y su opinión sobre ello.

Cada pueblo puede además solicitar los libros que prefiere que les servimos al viaje siguiente, algunos han llegado a solicitarnos el Quijote “para quedarse allí siempre” otros han pedido “Madrid de Corte a Checa”, figurines, libros de cocina, agricultura y novelas cinematográficas, en la mayoría de estos pedidos se nota naturalmente la falta de gusto y por tanto la conveniencia de una buena dirección<sup>125</sup>.

El préstamo a domicilio costaba 0,50 pesetas por libro y por cada día de retraso se debían abonar 0,25. Sólo era gratuito en las Bibliotecas de las Escuelas de Mandos. El dinero recaudado debía emplearse en la adquisición de nuevos libros.

El balance del Departamento de Bibliotecas en su primer año (1940)<sup>126</sup>, comprendía depósitos de libros en 26 provincias, bibliotecas viajeras en San Sebastián y Madrid y cinco bibliotecas en las Escuelas Hogar de Madrid. Según datos de la propia Sección, en 1943 se llegaron a organizar 150 bibliotecas, entre fijas y circulantes. Siete años después, en 1950, se

---

<sup>125</sup> “Biblioteca Circulante. 1940. Falange Española”. Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 5

<sup>126</sup> “Labor de la Sección Femenina en 1940”, Y. *Revista para la mujer*, febrero 1940

contabilizarían 476 bibliotecas con 100.322 volúmenes y 54.616 lectoras<sup>127</sup>. En 1954 según datos de la propia SF<sup>128</sup>, había cerca de 640 bibliotecas a las que habían acudido 105.000 lectoras y habían ingresado en la Central de Bibliotecas algo menos de 150.000 libros.

Pilar Primo de Rivera al evocar el servicio de biblioteca en sus memorias comete dos imprecisiones: ni el servicio de lectura fue gratuita y nunca se llegó a tales cifras de lectoras<sup>129</sup>:

“España estaba en déficit de cultura y había que elevarla; entonces la SF empezó por montar bibliotecas ambulantes y fijas que, con libros de naturaleza cultural o recreativa, recorrían los pueblos y barrios de las ciudades, donde gratuitamente se podía leer o consultar lo que se quisiera. En este servicio nos asesoró y siguió después con nosotras el profesor Lasso de la Vega, verdadero experto en la materia. Contábamos, aproximadamente, entre bibliotecas ambulantes y fijas, con más de 180.000 lectores por año, aparte, posteriormente, de las ya más eruditas de los Círculos medina y las escuelas para formación de alumnas”.

A partir de los 60 encontramos numerosas circulares y cartas de la responsable de la Regiduría Central de Cultura, M<sup>a</sup> Josefa Sampelayo, que nos muestran la decadencia en que entró el Servicio de Bibliotecas de la Sección Femenina.

Apenas se organizaban equipos de bibliotecas viajeras, salvo en algunas provincias, y cuando se tenían, las encargadas no se preocupaban de renovar los libros. Muchas Regidoras olvidaban recaudar la cuota del servicio de préstamo. Se perdían muchos libros por desidia o escaso interés en comprobar los paquetes, y cada vez llegaban menos relaciones solicitando adquisiciones de libros. Los concursos convocados relacionados con el libro apenas tenían repercusión.

Ante esta situación de degradación la Regidora envía circulares<sup>130</sup> a las afiladas responsables de las bibliotecas instándolas a que fomentaran por todos los medios el entusiasmo por los libros, argumentando que no se podían mantener bibliotecas inactivas, que al menos debían registrar un mínimo de 25 préstamos mensuales. Que impulsaran las bibliotecas viajeras, pues a veces se pasan meses en el mismo lugar sin renovar los lotes y ayudar económicamente a la adquisición de libros. Que se prestara especial atención a la confección de partes para conocer los datos estadísticos del servicio, que se organizaran las bibliotecas de acuerdo a las normas y dar vida a las Bibliotecas organizando actos culturales en torno a ellas. Hay muchas bibliotecas que no se presentan a los Concursos de Bibliotecas, de lo que se puede deducir que muchas de ellas no están organizadas.

La situación parece que no mejoró y en 1966<sup>131</sup> se decide restringir el Servicio de Bibliotecas exclusivamente a las Bibliotecas de los “Círculos Medina” y a las Escuelas donde se formaban

---

<sup>127</sup> Historia y misión: Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., Madrid, 1951, p 83. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S: labor realizada en 1950..., pp. 94-95

<sup>128</sup> Normas relacionadas con el Departamento de Bibliotecas de la Regiduría Central de Cultura, Madrid [Sección Femenina], 1956

<sup>129</sup> Pilar PRIMO de RIVERA, Recuerdos de una vida, p. 68.  
<http://www.maalla.es/Libros/Recuerdos%20de%20una%20Vida.pdf>

<sup>130</sup> AGA Cultura Caja 3 Grupo 7

<sup>131</sup> Circular 185. AGA Cultura Caja 3 Grupo 7

los mandos y profesorado, argumentando únicamente razones económicas y de competencia, ignorando la realidad de una institución que marchaba al margen de la sociedad:

Nuestras bibliotecas se han quedado pequeñas en todo y están desatendidas, por falta de personal especializado para atenderlas y de libros, El número de ellas en proporción con la asignación que tenemos es abrumador. Por otra parte, y esto es lo más importante, estas Bibliotecas ya no cumplen la misión para que fueron fundadas, pues otros organismos idóneos han cubierto en estos últimos años esas necesidades (Casa de Cultura, Centros Coordinadores de Bibliotecas, Servicio de Extensión Cultural) y en la actualidad existen Bibliotecas en todas las ciudades y pueblos de importancia, con un servicio prácticamente gratuito.

Para continuar nuestro servicio de Bibliotecas sería necesario volver a montarlo, con personal especializado, locales adecuados y un envío regular de libros, y esto sobre un la base de un fondo de 1.000 a 2.000 volúmenes, lo que supondría un presupuesto no inferior a las 30 o 40.000 pesetas por cada una de las 564 bibliotecas existentes en 1965.

Desde muy pronto la Sección Femenina teorizó sobre la importancia de crear publicaciones.

*Libros seleccionados que familiarizarían a la mujer con las obras mejores de la literatura española y universal, el arte, la Historia, la poesía, la religión, el hogar, etc. La presentación sería muy cuidada y femenina, en formato relativamente pequeño. El precio sería lo más reducido posible, ya que esto no nos interesa como negocio. Sino como medio para difundir la cultura, y únicamente buscaríamos como beneficio de venta el suficiente para cubrir el costo de los que hubiéramos de ceder gratuitamente a las Bibliotecas locales demasiado pobres*

*Libros, pues, sencillos y amenos hay que darle, dentro de las más altas exigencias literarias y artísticas, si no queremos dejarle por todo pasto espiritual, que deforma irremisiblemente su gusto y su mentalidad, la novelita blandengue, ñoña y cursi, única publicación hecha hasta ahora a su medida, en círculo vicioso.*

Pero la realidad es que se publicaron libros únicamente como soporte a la tarea que tenía encomendada la SF de formar políticamente a la mujer, prepararla para el hogar, la educación física y la formación musical.

Eran libros destinados a sus instituciones y a la enseñanza de diversas asignaturas de los diferentes niveles educativos del sistema reglado y no reglado. Con estas publicaciones se pretendía formar a la mujer en los nuevos ideales de la Falange y del régimen franquista como buena patriota, católica y excelente ama de casa. Al ser obligatorios alcanzaron varias ediciones y sufrieron modificaciones para adaptarse a los cuestionarios oficiales de la enseñanza oficial<sup>132</sup>.

Para facilitar la edición de cuantos libros de texto, folletos de propaganda y publicaciones de todo género necesitaba la SF, se creó una editorial dentro de este Departamento, editorial completada por un servicio de Distribución y Administración que alcanzó a todos los puntos de

---

<sup>132</sup> Francisco CANES GARRIDO, “Los libros de texto de la sección femenina de FET de las JONS”, en La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal: XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013, pp. 597-610

España. Tanto la Editorial como la Distribuidora funcionaron con arreglo a las normas usuales en este tipo de entidades. En todo lo que se editaba se cuidaba esmeradamente el estilo y la buena presentación tipográfica. Todos los trabajos de confección e imprenta se llevaban desde este Departamento.

En 1951 el Departamento de ediciones contaba con 57 títulos: 17 doctrinales, 8 de formación religiosa, 13 de Hogar; 4 de cultura; 4 de música; 3 de Higiene y puericultura y 8 sobre industrias rurales, aparte de postales y las revistas citadas.

Entre las revistas más emblemáticas de este periodo hay que citar: *Y. revista para la mujer*, *Consigna*, *Medina* y la infantil *Bazar*.

*Y. revista para la mujer (1938-1946)*<sup>133</sup>: dedicó especial atención a las actividades de la FET y de las JONS. Publicaría una serie de páginas informativas con cierta regularidad acerca de las actividades varias que realizaba y organizaba la Falange: noticias sobre sus congresos, sus almanaques para Margaritas y Flechas, vidas meritorias, las bibliotecas infantiles, lecciones deportivas. La Sección Femenina editora y responsable absoluta de la publicación de la revista, de forma sistemática y constante a lo largo de toda su existencia suministró al público distintos artículos sobre su dinámica y organización: la entrega por capítulos de la Historia de la Sección Femenina escrita por Pilar Primo de Rivera, información sobre sus actividades a nivel regional,..., inauguraciones de las Escuelas de Hogar, actividades de las Organizaciones Juveniles, discursos de las jefas y mandos, la formación de las Escuelas para Mandos,... En su totalidad toda esta información contribuyó a ensalzar la misión regeneracionista de la SF y su espíritu patriótico, a realizar una propaganda sobre su labor. El mensaje más frecuente era la importancia de la domesticidad y la presentación de los programas educativos de la SF como algo diferente, moderno y mejor que cualquier otro precedente en todos los sentidos.

La cultura y el saber fueron motivo de reflexión y presencia continua en la revista. La sección “Noticias de Libros” también representó el interés de la nueva mujer de Falange por la lectura de todo tipo, nacional y extranjera, y además por la política. Sección casi permanente desde los inicios de la revista, fue la que recogía las últimas novedades en la edición de libros haciendo una distinción entre: letras españolas, italianas, francesas e inglesas en materia de historia, biografías, enciclopedias, novelas, poesía y libros de política. En conjunto, esta publicación mostró una Intensa labor para fomentar el estudio del papel de las mujeres en la historia.

Como publicación especial de la Regiduría de Prensa y Propaganda, hay que citar la revista infantil, *Bazar (1947-1971)*, que se editaba mensualmente con la colaboración de los mejores escritores y dibujantes de España. Entendía la SF que las lecturas infantiles ejercían una influencia decisiva en la formación del individuo, y por ello cuidó como una de sus más importantes tarea la publicación de esta revista, en la que se seguía el más depurado criterio

---

<sup>133</sup> Mónica CARABIAS ÁLVARO, Imágenes de una metáfora circunstancial: la mujer falangista como mujer moderna: (*Y. revista para la mujer*, 1938-1940), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003.

para la selección de ilustraciones y textos, buscando cuanto pudiese orientar a los niñas en el sentido de la belleza, la alegría, la justicia y el bien.

Teniendo en cuenta que no fue una revista barata -3,75 pesetas- se puede deducir la clase social de las niñas que la leían, aunque también hay que decir que formó parte de los lotes de revistas que distribuyó la JIAL gratuitamente a las Bibliotecas Públicas. Se dirigía a afiliadas, escolares y aprendices. Respecto a su contenido tenía secciones fijas de carácter informativo y didáctico: *Juventudes Femeninas*, *Juguemos a ser amas de casa*, *Tijeras, hilo y dedal*, *Muñecos de papel*, *Aprende a pintar*, *Consejos a las niñas*. *Juventudes Femeninas*, era un claro ejemplo de la campaña de proselitismo juvenil seguida para atraer nuevas flechas, al dar cuenta de los servicios, encuentros y actividades de la organización.<sup>134</sup>

Otro título con larga vida fue *Consigna (1940-1977)*,<sup>135</sup> redactada por la Regiduría de Cultura. Revista mensual de pedagogía de la SF, dedicada exclusivamente a la formación de las maestras, teniéndolas al tanto de las últimas actividades literarias, científicas y artísticas, para suplir el alejamiento de centros culturales de muchas de ellas que desarrollan su labor en pequeños pueblos y centros rurales. Fue un vehículo propagador de los discursos educativos transmitidos por la SF y un organismo adoctrinador del régimen franquista en lo referente a la transmisión de valores dirigidos a las mujeres y, especialmente, a las maestras por su efecto multiplicador y propagador. En su primera etapa, de 1940 a 1954, sus orientaciones pedagógicas corrieron a cargo de Francisca Bohigas, y su contenido se orientó hacia tres niveles de actuación: la pedagogía familiar o escuela de padres, las orientaciones pedagógicas dirigidas a las cuestiones educativas originadas en la escuela y la orientación profesional femenina.

Por último, de trayectoria más breve, *Medina (1941-1945)*, semanario nacional femenino que ofrecía *literatura, arte, gracia y amenidad*. Sus páginas recogían la imagen de la mujer del ideario falangista, cuyos valores tanto en la vida privada como en la pública eran los mismos: sumisión, sacrificio y servicio.

---

<sup>134</sup> F.J. MARTÍNEZ CUESTA y J.M. ALFONSO SÁNCHEZ, "Tardes de enseñanza y parroquia: el adoctrinamiento de las niñas en la España franquista a través de las revistas "Bazar" y "Tin Tan" (1947-1957)", *El Futuro del Pasado*, nº 4 (2013), pp. 227-253

<sup>135</sup> Teresa RABAZAS ROMERO y Sara RAMOS ZAMORA, "La construcción del género en el franquismo y los discursos educativos de la Sección Femenina", *Encounters on Education*, vol. 7 (2006), pp. 43-70.



### ***Obra Sindical de Educación y Descanso***

Dentro de la Organización Sindical, y en base al punto 6º del Fuero del Trabajo<sup>136</sup>, se crea a finales de 1939 la Obra Sindical de Educación y Descanso dedicada al ocio del productor, dándole una asistencia cultural y recreativa. Su objetivo era destruir la cultura obrera, borrar la memoria colectiva y disipar la conciencia de clase.

Su actividad se desarrolló a través de varios departamentos: Viajes, vacaciones y excursiones; Belleza en el trabajo; Deportes; Cultura y arte. Éste último nace con el objetivo de formar cultural y artísticamente a los trabajadores. Pero en realidad más que formar, su verdadera razón de ser era hacer propaganda de la cultura oficial a través de los llamados Hogares del Productor, sustitutos de las Casas del Pueblo, casinos y Ateneos del movimiento obrero autónomo.

Los Hogares del Productor eran lugares donde al tiempo que descansar y recrearse, los productores podían recibir una preparación social, política y cultural de acuerdo con los principios de justicia social de la Falange. Además de un bar o salón para tertulias y juegos, los afiliados podían disponer de un servicio de Biblioteca gratuito. Incluso se pensó en conceder premios a los lectores más asiduos. No es de extrañar que las jerarquías de la Obra tuvieran interés en que los obreros leyeran, sobre todo si se atiende a las obras que se podían encontrar allí. Títulos dedicados a la doctrina joseantoniana, discursos de Franco y recopilaciones de los logros del régimen. Además había obras de consulta y clásicos de la literatura española.<sup>137</sup>

En el Centro Coordinador de Bibliotecas de Oviedo, está documentado que hubo cierto enfrentamiento con Falange al entrometerse los responsables de la Obra Sindical de Educación

<sup>136</sup> “el Nuevo Estado se comprometía a crear las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la Milicia, la salud y el deporte”.

<sup>137</sup> DÍAZ BELLO, María, “En busca del obrero”, en Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Carmen Frías Corredor (coords.), Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, pp. 241-254



y Descanso en las tres bibliotecas que organizaron conjuntamente -Oviedo, Luanco y Turón-<sup>138</sup>. Falange pretendía tutelar su funcionamiento, llegando incluso a considerar las bibliotecas como una dependencia propia, pero afortunadamente el Centro Coordinador tenía la capacidad suficiente para imponerse, gracias a la buena prensa que tenía su actividad tanto en el ámbito provincial como en las instituciones nacionales, recordemos que el Ministerio de Educación Nacional reconoció el sistema bibliotecario asturiano como un modelo para el resto de las provincias.

Aparte, las diferentes delegaciones provinciales de los Sindicatos se esforzaron en formar sus propias bibliotecas con la ayuda de la Vicesecretaría de Educación Popular con el objetivo, también, de reemplazar a las Casas del pueblo socialistas. Así en 1942 asistimos al intento de instalar por todo el territorio nacional bibliotecas falangistas como medio de propaganda, especialmente en los principales pueblos de las provincias donde existían núcleos obreros. Éstas se nutrían de los libros y folletos elaborados por la Sección de Ediciones y Publicaciones, por la Editora Nacional y alguna editorial afecta. Ruiz Bautista explica que realmente no se pretendía que el trabajador utilizara la biblioteca como un fin en sí mismo, sino que ésta se concebía como un reclamo para vincular al obrero con la ideología falangista.<sup>139</sup>

Complemento de las bibliotecas se concibió la labor editorial que pretendía llevar a cabo la Sección de Cultura de Educación y Descanso. Una vez más asistimos a esa confusión/identificación entre cultura y propaganda que tanto se practicó durante los primeros años del franquismo<sup>140</sup>:

(...) nuestro Sindicato no sólo crea las escuelas de formación profesional obrera para los jóvenes productores (...), sino que hace suya, y como predilecta, la labor de edición de obras que lleven al hogar de los obreros el comienzo de nuestros clásicos del Siglo de Oro. Y con ello se ve la intención clara de que el pensamiento de los moralistas, jurisconsultos, historiadores, dramaturgos, novelistas, etc., de la vieja y gloriosa España, deje de ser materia erudita para recrear a todos los españoles. Que estén no sólo en las bibliotecas, sino en las manos de nuestros productores, viejos y jóvenes, las historias de los actos sacramentales, las crónicas de los reyes o de sucesos memorables, y los cuentos, las comedias, etc.

(...) Corresponde al libro esta primordial tarea de enseñar al mundo que el sistema doctrinal de España no fue solo un polvo flotante (...) también le corresponde abrir ventanas en el espíritu de los que trabajan. (...) El sindicalismo nacional quiere capacitar a la masa de nuestros productores, quiere que nuestros productores lean, convencido de que con el alimento espiritual que se les pueda prestar en sus horas de descanso, se les identificara mejor con un orden social (...)

En nuestro Fuero del Trabajo, al reconocer a los productores su justo derecho a tener acceso a todos los bienes de la cultura, haciéndolos realidad, ha comenzado a preparar la edición de obras que por su costo puedan ser fácilmente adquiridas por el obrero y llevan a sus hogares el

<sup>138</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada, En: *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, p. 91

<sup>139</sup> RUIZ BAUTISTA, E., Los señores del libro.... *Opus cit.* p. 178-185

<sup>140</sup> ESTÉVEZ, M. "Las clases productoras leen con gran interés las obras de José Antonio: ingente labor de la Sección de Cultura de Educación y Descanso " 194?, p. 85-86

conocimiento de nuestros escritores y de los Capitanes heroicos de la Patria, que les llevan al color de la falange (....)

Con la más exigente escrupulosidad se ha de hacer la selección de libros que hayan de tener entrada en la pequeña biblioteca de un productor, procurando figuren en ella aquellos que les hablen de cuáles fueron las misiones históricas que a España en todo tiempo le tocó cumplir y evitando en lo posible cuanto pueda ser fortuito y pasajero, sin provecho alguno. (...) han de tener un precio al alcance de los más humildes.

### **2.3.2. ACCIÓN CATÓLICA. El apostolado de libros y lecturas**

La Acción Católica surge en el último tercio del s. XIX en Europa como un instrumento de participación de los laicos en el apostolado jerárquico y como herramienta fundamental en la tarea de combatir la influencia del laicismo. Por ello fue la obra preferida de la Iglesia jerárquica y su elemento principal para garantizar la presencia y la influencia específica de la Iglesia en la educación de la juventud, y en la recristianización-moralización en general de la sociedad

En España<sup>141</sup> surgió en 1926 de la mano de Ángel Herrera Oria y el cardenal Vidal i Barraquer, y cuando estalló la guerra civil la AC estaba en plena fase de expansión y consolidación; donde pugnaban por adaptarse y responder a la nueva situación laica nuevas tendencias, pero la guerra vino a interrumpir este proceso imponiéndose los postulados más integristas.

Durante la guerra civil y en los primeros años de la posguerra, coincidiendo con el momento de máximo protagonismo de la Falange en el régimen, la ACE tuvo dificultades para mantener su identidad y autonomía. Pero a partir de 1942, el cambio en la coyuntura tanto nacional como internacional y el impulso y la iniciativa del nuevo primado, Pla i Deniel, contribuyeron a afirmar la identidad y la configuración material de la nueva ACE. Se inicia así una etapa, desde el punto de vista ideológico, plenamente identificada con el nacionalcatolicismo, pero que afirma a la vez su autonomía orgánica. Un paso más adelante vino con el cambio cosmético que se ve obligado a hacer el régimen franquista al final de la II Guerra mundial. La ACE con las manos más libres y con más apoyos y medios consolidó y desarrolló sus estructuras e instituciones, reconociéndose en 1946 las especializaciones obrera y universitaria en su seno.

La Acción Católica, durante el primer franquismo ejerció el monopolio sobre el Movimiento católico, Incluso hubo un intento de absorber en la Acción Católica a todas las organizaciones católicas incluso las piadosas. De hecho fue la única organización tolerada y posteriormente reconocida legalmente en el Concordato de 1953, por el nuevo Régimen; siempre y cuando se limitara a tareas religiosas y morales, y bajo la estricta dependencia de la Jerarquía. y no pudo evitar la tentación de cristianizar desde el poder.

---

<sup>141</sup> MONTERO GARCÍA, F.: "La ACE en el Franquismo. Una visión de conjunto", XX Siglos, vol. 12, nº 49 (2001), pp. 25-39. (Feliciano Montero es el mayor estudioso de la Acción Católica en España). Ver también: Miguel BENZO, "Las tres etapas de la Acción Católica", *Ecclesia*, 1964, pp. 185 ss. <sup>141</sup> Pedro ESCARTÍN CELAYA. Apuntes para la historia de la Acción Católica en España, pp. 4-7. [http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=481](http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=481)

Lo que mejor define el tono ideológico y mental de la ACE en los primeros años del franquismo son las Campañas generales que pone en marcha al servicio de la recuperación misionera de la cristiandad perdida y en la recatolización de España: vocaciones sacerdotales, caridad, familia, moralidad.

Las funciones de encuadramiento y socialización que se asignaron a la ACE; sus campañas de moralidad a través de la censura -literaria y cinematográfica- y la apuesta por la formación de sus miembros, son el marco en que se van mover sus acciones en el campo del libro y la lectura. Éstas se van a desarrollar en tres frentes: una obsesiva orientación por las lecturas; un amplio despliegue editorial con la publicación de revistas, libros y folletos y, por último, la creación de bibliotecas. Toda esta actividad se experimentará en todas las ramas, tanto a nivel estatal como provincial y local, con mayor o menor fortuna según los casos.

### ***Orientación/Censura bibliográfica***

Antes de entrar de lleno en la actividad que desplegó específicamente la ACE en este campo, hemos de recordar que la AC no hacía más que seguir la doctrina de la Iglesia acerca de la lectura de libros.

Consciente del poder de las ideas que encierran los libros, sobre todo de los malos, y a partir de la introducción de la imprenta, la Iglesia irá estableciendo una serie de cánones que todo católico había de acatar<sup>142</sup>.

El canon 1395 estableció el derecho y el deber de los ordinarios a prohibir libros por causa justa; el canon 1397 autorizó la delegación en sacerdotes capaces de la vigilancia sobre libros publicados o vendidos en el territorio diocesano; el canon 1405 impuso a los ordinarios y sacerdotes con cura de almas el deber de avisar oportunamente a los fieles sobre el peligro y el daño de la lectura de libros malos y el 1399 amplió las normas prohibitivas especificando cuáles eran los libros prohibidos<sup>143</sup>.

Además, en base al canon 1322 a la Iglesia se le concede el poder de vigilar la doctrina y de prohibir las que le sean contrarias. Haciendo esta misión extensiva a conservar la verdad revelada y defenderla por medio de juicios acerca de libros, doctrinas u opiniones más o menos opuestos. Tal derecho se fundaba, además en la suprema jurisdicción de la Iglesia sobre sus súbditos, a los que puede marcar una norma de conducta o imponer una obligación respecto a sus actos o sus lecturas de modo absoluto e irrefragable. Estos son los fundamentos

---

<sup>142</sup> ABELLÁN, Manuel L. y OSKAM, J. Crítica de libros en la revista *Ecclesia* (1944-1951)", JILS/CIEL, 1 (1989), pp. 63-118

<sup>143</sup> Los que propugnan la herejía o que de cualquier modo ponen empeño en destruir los fundamentos de la religión, los libros en que se ataca de propósito las buenas costumbres o la moral, los libros que combaten o se mofan de algún dogma católico, los que defienden errores condenados, los que desprestigian el culto, la disciplina eclesiástica, el estado clerical, religioso o jerárquico, los libros de cualquier género que enseñan o recomiendan la superstición, la magia, los sortilegios, la adivinación, el espiritismo y cosas similares, los que enseñan como lícitos el duelo, el suicidio, el divorcio o que tratan de sectas masónicas como sociedades útiles y no peligrosas.

inconmovibles de su derecho a la intervención en lo que a lectura y prohibición de libros se refiere<sup>144</sup>.

La Iglesia hace efectivo este derecho por medio de la censura previa, la licencia de impresión y la prohibición. La censura era el reconocimiento autoritario de un libro por una autoridad eclesiástica competente y la licencia era el premo dado por esa autoridad para su publicación. El poder que se atribuye la Iglesia en lo que se refiere a la prohibición de lecturas y retención de libros lo justifica diciendo que como *hay muchos autores que no pertenecen a la Iglesia ni se subordinan a sus leyes, el peligro de infección no se descartaría si la Iglesia no tuviera en sus manos la facultad de prohibir los libros que ataquen o menoscaben la religión y las buenas costumbres, o siembren las dudas acerca de la Iglesia y sus instituciones*. La prohibición de un libro incluye además, el que no se pueda editar, ni leer, ni retener, ni vender, ni traducir, ni comunicarle a otro, mientras no se hagan las correcciones necesarias.

Pero el padre Gandía apunta una excepción -o doble moral-. La Iglesia concede permiso de leer libros prohibidos a los que pueden sacar algún provecho de ellos, con lo cual nada pierde la historia o la cultura y sólo se permite leer los libros obscenos a los que el deber de su cargo o de su enseñanza les impone el cuidado de su lectura.

Además la Iglesia -española- quería el mismo derecho que se atribuía el Estado -franquista- de impedir la lectura e impresión de libros que atacasen a los fundamentos de la patria o el poder, y que se sometiera todo lo escrito a su censura para evitar males mayores.

Hubo una obsesión por parte de las instancias papales sobre la influencia de las malas lecturas en los jóvenes. En 1929 el Papa Pío XI en su encíclica *Divini Illius Magistri*, sobre la educación cristiana de la juventud, subrayaba los daños que podían derivarse de los libros malos con estas palabras:

“En nuestro tiempo hay que tener una vigilancia más general y cuidadosa cuanto más general y cuidadosa cuanto más han aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso que la juventud inexperta encuentra, particularmente en los libros impíos o licenciosos, muchos de ellos diabólicamente difundidos a vil precio en los espectáculos del cine y en las audiciones radiofónicas que multiplican y facilitan toda clase de lecturas”.

Y el Papa Pío XII en el capítulo XXXVI de sus discursos a los recién casados (Familia cristiana) el 7 de agosto de 1940 hablaba de los graves daños de las malas lecturas.

No puede existir una libertad de leerlo todo. Ciertamente, no os está prohibido gustar el encanto de las narraciones de pura y santa ternura humana: la misma Sagrada Escritura ofrece escenas semejantes que han conservado su frescura de idilio: como el encuentro de Jacob y Raquel, el desposorio del joven Tobías, la historia de Ruth. Hay también autores de gran ingenio que han escrito novelas buenas y honestas (Manzoni). Pero junto a estas flores pululan plantas venenosas en el vasto imperio de las obras de imaginación, éstas son más accesibles y vistosas y se aspiran con más ansia a causa de su perfume intenso y embriagador.

---

<sup>144</sup> Isidro GANDÍA, La doctrina de la Iglesia acerca de la lectura de libros: conferencia pronunciada en la XII Semana de Educación Nacional. Atenas, marzo 1944, pp. 73-83

Pero no creáis, jóvenes y muchachas que os dejáis acaso arrastrar a leer, quizás secretamente, libros sospechosos, no creáis que su veneno no produce efectos sobre vosotros; temed más bien que este efecto, por no ser inmediato, sea más maléfico. Las imágenes impuras y los pensamientos nocivos que produce en vosotros un libro malo parecen tal vez entrar en vuestra mente sin haceros una herida sensible.

El peligro de las malas lecturas, es además, bajo algunos aspectos, más funesto que el de las malas compañías, porque sabe hacerse más traidoramente familiar.

Unos años después, el 17 de abril de 1944 la Sagrada Congregación del Santo Oficio publicó una circular que recordaba la necesidad de prevenir a las juventudes de las lecturas de libros perniciosos para la fe y las buenas costumbres. Ha de crear en los fieles la conciencia de un peligro gravísimo, como el que amenaza la fe desde las páginas impresas, escrupulosamente tendenciosas, amorales, irreligiosas.

Como ejemplar organización católica, la orientación bibliográfica fue objeto de las actividades de la ACE, integrándose en su organigrama a través de varios departamentos: el Secretariado de Orientación Bibliográfica dentro de la Junta Nacional o el Gabinete de Lecturas de Santa Teresa unido al Secretariado de Enseñanza de la ACM.

El Secretariado de Orientación Bibliográfica surge con el objetivo de institucionalizar y dar coherencia a la censura de publicaciones que se venían publicando en las páginas de la revista *Ecclesia* en forma de reseñas.

La Junta Técnica Nacional de ACE aprobó el 1 de enero de 1944 su constitución<sup>145</sup> y su labor se ciñó a la calificación moral de la bibliografía española para que sus dictámenes pudiesen servir de guía a educadores y educandos, al clero, a los padres de familia y a los lectores católicos en general.

La falta de recursos económicos se suplió con un voluntariado de lectores-censores, quienes aportaban su dictamen sobre las obras de mayor difusión y actualidad. Para dar cierta uniformidad a esta labor el Secretariado elaboró unas normas y estableció una escala de calificación tanto para las obras<sup>146</sup>, como para los lectores idóneos de las obras, teniendo en cuenta circunstancias, características, edad, formación, etc. Para el Secretariado esta última labor fue mucho más difícil ya que no tenía ningún medio para imponer al lector de libros su juicio, salvo en los libros incluidos en el *Índice* y sólo podía instar a la responsabilidad de los católicos.<sup>147</sup>

Fueron las novelas, fundamentalmente, su centro de atención, novelas que además se compraban para su lectura y crítica, consumiendo gran parte de su escaso presupuesto junto con el pago de las reseñas. Prueba de ello fue el compendio que se publica en 1952 bajo el título "6.000 novelas" de Nicolás González Ruiz, que recogía en un volumen el trabajo de

---

<sup>145</sup> Eduardo RUIZ BAUTISTA, Los señores del libro, Trea, Gijón p. 343. *Ecclesia*, nº 129, 1944

<sup>146</sup> La calificación comprendía estas categorías: si le son aplicables las reglas prohibitivas del Índice; Reprobada por la moral; Dañosa; Peligrosa; Frívola; Inofensiva; Moral y Moralizadora. La escala aplicable a los lectores comprendía: Ninguno, bajo excomunió, puede leerlas; no pueden leerse o sólo pueden leer: personas muy formadas, personas formadas, personas ilustradas, personas de mundo, personas mayores; obras que pueden ser leídas por todos; obras especiales para jóvenes y niños.

<sup>147</sup> ABELLÁN, Manuel L. y Jeroem OSKAM, "Función social de la censura eclesiástica: la crítica de libros en la revista *Ecclesia* (1944-1951)", JILS/CIEL, 1 (1989), pp. 63-118

diez años de crítica literaria y moral de la novela. La finalidad de la publicación era poner al alcance de los lectores, directores de bibliotecas, padres de familia, educadores, confesores, un instrumento eficaz y al día donde pudiesen seleccionar libros para leer o recomendar su lectura. Su reedición posterior con el doble de títulos no pudo culminarse por problemas económicos.

A partir de 1954 las páginas a cargo del equipo de Orientación Bibliográfica dejaron de aparecer. Las razones que esgrimen Abellán y Oskam son bastante certeras. En primer lugar porque la experiencia había demostrado que resultaba imposible mantener el número de reseñas al ritmo de aparición de las novedades bibliográficas. En segundo lugar porque el cine, la prensa y la radio constituían un medio de mucho mayor alcance y de inmediata influencia que los libros. Y en tercer lugar porque la sección inaugurada en 1944 podía mantenerse como publicación unitaria, independiente de la suscripción a la revista *Ecclesia*, bajo la forma de un *Boletín de Orientación Bibliográfica*. Éste funcionaría entre 1952 y 1964 y se concibió como una empresa apostólica y no económica.

Por su parte, la ACM se mostró muy activa en el campo de la orientación de lecturas para niños desde 1940 y muy especialmente a través del Secretariado de Niños y el de Enseñanza<sup>148</sup>. De ambos partieron la elaboración de críticas de libros religiosos, instructivos y recreativos, desechando los impropios, para orientar a los Consejos Diocesanos en la difusión de lecturas escogidas para los niños. También organizaron exposiciones de libros infantiles con motivo de las fiestas navideñas para orientar a madres y educadoras sobre los libros a regalar. Los libros seleccionados se dividían por edades y se elaboraba una ficha para cada uno siguiendo el mismo esquema: valor del autor; asunto; valor moral; valor literario; presentación; aplicación – destinatarios-; color<sup>149</sup>; firma de la persona que hace la reseña.

Las encargadas de la Biblioteca infantil del Secretariado de Enseñanza también colaboraron con las bibliotecas de ferrocarriles en la crítica de revistas infantiles y en la publicación de listas y crítica de libros para niños en el Boletín de la Federación de Amigos de la Enseñanza.

Toda esta actividad se agrupó al crearse el Gabinete de Lectura de “Santa Teresa” con la misión de depurar y recristianizar las lecturas infantiles<sup>150</sup>.

Sus fines se materializaron en la crítica de libros para niños; en la orientación de lecturas infantiles mediante publicaciones y exposiciones y en la puesta en circulación de bibliotecas viajeras. Su primera publicación fue el *Catálogo crítico de libros para niños: novecientos libros de lectura* (1945). Para evitar la rápida obsolescencia de este tipo de bibliografías se publicaría en la revista *Senda*, la sección *Crisol de libros*, donde se daba cuenta de los títulos recientes.

Además, en todas las revistas que editó la ACM se incluyeron secciones bibliográficas donde se recogían libros formativos y de ocio acompañados de notas sobre el autor, contenido, valor moral y religioso, valor pedagógico y aplicación.

Si perjudiciales eran las malas lecturas para los católicos lo eran mucho más para las mujeres y muchachas que leían novelas. Ejemplo de ello son estas palabras del Padre Enciso, Consiliario de la Acción Católica de Mujeres, que dedica a las jóvenes<sup>151</sup>:

---

<sup>148</sup> Memorias nacionales presentadas a la Junta Técnica por ACM. Archivo Acción Católica de Mujeres. Caja 5.1.1

<sup>149</sup> Plata: recomendable desde el punto de vista religioso, azul: además de entretener instruye, blanco: de mero entretenimiento, amarillo: los deformadores y excitan el desorden de las facultades, verde: impropios para una edad determinada, rojo: perjudiciales

<sup>150</sup> Isabel NIÑO MÁS, “El Gabinete de Lectura Santa Teresa de Jesús al servicio de los niños”, *El libro español*, noviembre 1959, pp. 595-598

“¿Cuáles son las lecturas a que más afición tienen las muchachas de nuestra sociedad? Las novelas. Y lo malo es que a muchas de las novelas que andan en manos de nuestra juventud. Tienen como trama el vicio; como argumento, la pasión; están confeccionadas con retazos de adulterios, de aventuras pasionales, de intrigas sensuales, de evoluciones de amor libre.

Abundan, sobre todo, esas novelitas ligeras, carentes de todo valor literario, cuyo principal atractivo es la frivolidad, el constante rozar temas escabrosos o deslizarse por pendientes de picardía.

Su efecto principal es crear una ligereza y frivolidad de espíritu grande, estragar el gusto literario, exaltar la imaginación, excitar la sensibilidad y empujarla hacia un mundo ideal que sólo existe en la literatura. Renault en *Educación de la pureza* opina que no conviene leer novelas antes de los veinticinco años, y que, aun así y todo, su lectura difícilmente será beneficiosa, mientras que es muy claro el perjuicio que puede causar

[...] ¿No podré leer novela?, Te diré: no hay inconveniente en que leas algunas, con tal que su lectura se ajuste a estas condiciones:

1ª Que sea buena; es decir, que no fomente lo más mínimo la impureza. Antes de leerla debes enterarte si es a propósito para ti o no.

2ª Que nunca dediques a la novela el tiempo que debieras invertir en otras ocupaciones, o en el sueño, o en el paseo conveniente, etc.

3ª Que no te entregues a la lectura, dejándote absorber por ella y no acertando a separarte del libro hasta saber si la protagonista se casa o se muere.

4ª Que no leas mucho, aunque seas desocupada.

5ª Que te acuerdes siempre de que la novela es un sueño.

Si a estas normas te sometes, conseguirás pasar el rato, conservándote inmune, que es lo más que puede aspirar una lectora de novelas, que con esta afición jamás conseguirá instruirse, ni desde el punto de vista literario, ni moral, ni científico”.

### ***Creación de bibliotecas***

La creación de bibliotecas estuvo más ligada a la ACM, tanto como soporte y complemento para la formación de sus dirigentes como para ejercer el apostolado. Sus fines eran:

(...) despertar en las mujeres el afán, la afición a la lectura, enseñar el uso de los libros, elevar la obra docente y educativa de los Centros y estimular a las asociadas al ejercicio de la fuerza cultural para el bien, convenciéndolas de los frutos de santificación propia y celo apostólico que podían proporcionar los libros buenos<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Emilio ENCISO VIANA, ¡Muchachas!, Madrid, Studium, [1962], pp. 102-104. La 1ª edición data de 1940

<sup>152</sup> Asamblea de Mujeres de la AC. Ponencia sobre bibliotecas del Consejo Diocesano de Granada (1944). Archivo del Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica, Caja 21 2.4.9

Prueba de esa importancia fue la convocatoria en 1944 de una ponencia sobre bibliotecas<sup>153</sup> o la misma creación del Secretariado de Bibliotecas.

Dentro del Secretariado de Enseñanza, en la citada Ponencia concurrieron los trabajos de varias Uniones Diocesanas. En tres puntos coincidieron: la importancia de la lectura como medio de formar mentalidades cristianas que sepan encontrar soluciones cristianas a los problemas de la vida; que la Biblioteca para socias era indispensable, y, por último, que las señoras leían poco y había que estimularlas.

En la ACM se establecieron bibliotecas en los Consejos diocesanos y en las parroquias siendo los libros seleccionados por la Presidenta y la Vocal de Prensa asesoradas por el Consiliario. Aparte de incluir las publicaciones del Consejo Superior y de la Junta Técnica, en las Bibliotecas de Consejos se incluían todo tipo de materias religiosas, pedagogía incluso de política, mientras que en los centros parroquiales además, se debían incluir tratados de hogar de la familia cristiana, libros de costumbres, modas, cine, espectáculos, vidas de santos y revistas morales infantiles.

Las responsables de las bibliotecas comprendieron que éstas debían estar bien organizadas, por ello eran indispensables para su buen funcionamiento, la elaboración de catálogos, el libro de registro, el control de los préstamos o establecer un reglamento.

Lo cierto es que en torno a 1944 en muchas Parroquias, no existió ni funcionó una biblioteca; que en algunos Consejos Diocesanos las bibliotecas contaban todavía con pocos volúmenes y que todavía eran pocas las asociadas que acudían en demanda de libros. En general, la biblioteca no alcanzó el interés de las mujeres de Acción Católica ni los Centros Parroquiales se interesaron por incrementarlas ni mejorarlas.

En las circulares sobre bibliotecas dirigidas a las jóvenes vocales de bibliotecas de los Consejos diocesanos<sup>154</sup> se hacía especial hincapié en que ejerciesen la función de orientar las lecturas de las jóvenes ante tanto libro que se leía sin discriminar. Para ello habían de acudir al párroco, al consiliario o las muchas entidades que publicaban orientación y se las proponía que captasen lectoras con obras de entretenimiento y biografías y luego poco a poco introducirles obras formativas y más elevadas.

Es probable que la situación mejorara con el tiempo ya que en 1949, en 40 diócesis de la Asociación de Mujeres, de un total de 67, tenían el Secretariado de Biblioteca en funcionamiento.

Dentro del Secretariado de Orientación Bibliográfica se propuso desde sus mismos comienzos –octubre 1945- la constitución de un servicio de formación de bibliotecas<sup>155</sup> para hacer frente a las consultas que se hacían a este Secretariado para formar bibliotecas en centros de AC y para estimular las buenas lecturas, no sólo formativas, sino también las recreativas. Pero este proyecto no pudo llevarse la práctica por innumerables inconvenientes<sup>156</sup>. Por un lado, la dificultad a la hora de proporcionar las listas de libros para las Bibliotecas, ya que en muchos lugares no había librerías o estaban mal surtidas y el pedirlos incrementaba su coste con el recargo de correos; las listas se confeccionaban de manera general, con lo cual a veces no se ajustaban a los ambientes o edades a que iban destinadas estas bibliotecas y muchos libros se agotaban rápidamente. En segundo lugar, la falta de medios personales y económicos, por ello

---

<sup>153</sup> Asamblea de Mujeres de la AC. Ponencia sobre bibliotecas (1944). Archivo del Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica de España. Caja 21 2.4.9

<sup>154</sup> Circulares de bibliotecas. Archivo Jóvenes de Acción Católica de Mujeres, Caja 21 2.4.9

<sup>155</sup> Archivo Junta Nacional de Acción Católica. Caja 102-2-1

<sup>156</sup> Archivo Junta Nacional de Acción Católica. Caja 110-1-5



se sugirió la colaboración con organizaciones afines al Servicio: el Círculo de Lectores de San Sebastián; el Gabinete de Lectura de Santa Teresa y Biblioteca y Documentación de Valencia.

En 1961, partiendo de la idea de que la Biblioteca es un elemento de trabajo indispensable, se redacta un anteproyecto de una Biblioteca que prestaría sus servicios a la Junta Nacional, Consejos y Comisiones Nacionales y a los miembros de sus organismos directivos. Su dirección de la Biblioteca se encomendaría al Servicio de Orientación Bibliográfica.

El fin de la Biblioteca era servir a los organismos antes citados para facilitar su labor apostólica, por lo tanto el fondo de la Biblioteca se constituirá a base de libros de disciplinas eclesiásticas, especialmente sobre doctrina, organización y métodos del apostolado seglar. Como complemento libros de otras materias como Historia, Economía, etc.

### ***Las publicaciones***

La Acción Católica manifestó un gran interés, como otros grupos de la Iglesia española, por los medios de comunicación. Su doctrina sobre la prensa<sup>157</sup> la expresó ya en 1929 en su Primer Congreso Nacional de la mano de Ildefonso Montero. En él se ofrecieron pautas de trabajo para los periodistas y para las familias católicas. Se afirmaba que dado que la prensa tenía como finalidad comunicar el propio pensamiento, difundir ideas y hacer prosélitos, debía también, ser un instrumento para servir a Dios.

A través de la prensa correspondía difundir la doctrina del Papa, sin la cual buena parte de la cristiandad tardaría en conocer la doctrina del Santo Padre. Si la prensa era portavoz del Papa, también debía serlo de la AC, ya que ésta era fiel colaboradora del primero. Su más eficaz actuación debía ser defender, ilustrar y preparar los caminos de penetración de esa misma AC.

También se consideró importante que la Acción Católica ayudase a la prensa católica. Para ello había de ofrecer a los profesionales una buena formación y un influjo espiritual para que ésta pudiese llegar a ser su voz e intérprete fiel. Otras dos maneras de apoyar a la prensa fueron económicas. En primer lugar todos los miembros de la AC debían estar suscritos a la prensa católica y en segundo lugar, ayudar con dinero para que este tipo de publicaciones no desapareciese. Esta ayuda era muy importante porque quedarse sin prensa católica sería perder la voz de la AC.

En concreto a la prensa de Acción Católica se le otorgó la defensa ante los ataques a la Iglesia y a la religión; la difusión e información de los principales acontecimientos y líneas de pensamiento de la Iglesia y, finalmente, dar a conocer la actividad de la asociación católica más importante de aquellos momentos.

Todas las ramas de la AC crearon en sus organigramas secretariados de prensa y propaganda y en concreto sus publicaciones solían depender de sus organismos nacionales, diocesanos o parroquiales a través de las respectivas vocalías o secciones de propaganda.

De las 847 revistas católicas que se editaban en España en 1957, según datos de la Oficina de Estadística de la Iglesia, 100 eran de la Acción Católica<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Fernando MARTÍNEZ VALLVEY, Doctrina de la Acción Católica sobre la prensa

<sup>158</sup> Ángel ORBEGOZO URRUELA, La prensa de la Iglesia en España : datos primarios de la Oficina Estadística de la Iglesia, Madrid, 1957

Todas las publicaciones siguieron la línea pastoral diseñada por la jerarquía eclesiástica y su contenido, en general, podía dividirse en dos tipos: los relacionados con temas organizativos, que eran los predominantes, y los artículos teológicos y apologeticos. Estos últimos se incorporaban como instrumentos de formación de militantes y hacían referencia a aspectos doctrinales o de ámbitos de la reglamentación de la Acción Católica. Además de una constante presencia de artículos que hacían referencia al concepto de sumisión jerárquica que debían profesar todos los miembros y entidades pertenecientes a la Acción Católica, y una máxima fidelidad a las enseñanzas, doctrinas y consignas del Vaticano<sup>159</sup>.

Conozcamos algunos de los títulos de mayor tirada e importancia.

*Ecclesia*<sup>160</sup>, creada por el cardenal Gomá en 1941, fue concebida en sus inicios como órgano informativo de la dirección central de AC., pero a la larga *Ecclesia* se convirtió en el órgano oficioso de la Iglesia española, dirigido desde 1942 y hasta 1954 por el sacerdote vasco Jesús Iribarren. Durante los doce años en que ejerció la dirección, Iribarren fue el alma de la revista. Supo dar forma a los deseos del Cardenal Primado y del Consejo Editorial, configurando una publicación de características propias, cuyos contenidos respondían al propósito fundacional.

Desde 1945, libre de la censura oficial, dependiente y tutelada por el primado Pla i Deniel que se mantuvo firme ante las presiones estatales y los buenos oficios y profesionalidad de su director, otorgaron a *Ecclesia* notable crédito en la opinión nacional e internacional. Durante aquellos años pudo decirse que lo que no encontraba eco en sus páginas no existía en la Iglesia y aun en el catolicismo español, de cuyos avatares no hubo cronista más minucioso y azeante que *Ecclesia*. Pero a la vez, el nacionalcatolicismo tuvo en ella su notario mayor tanto impresa como gráficamente, con puntual y verídica información de unas vicisitudes que no contaron de ordinario con el entusiasmo ni de su director ni de la plana mayor de sus redactores. Entre sus manchas estuvo la censura de libros, tema ya tratado más arriba.

Otros títulos de cobertura nacional fueron: *Signo: semanario nacional de la Juventud de Acción Católica de España* (1936-1967) donde la juventud católica durante el franquismo encuentra en él su principal cantera informativa. El apostolado obrero de mayor trascendencia e impacto se orientó desde sus páginas, convertidas no infrecuentemente en ariete contra la ortodoxia sindical del régimen, provocando sonados enfrentamientos con la censura oficial que frenó el primado Pla i Deniel en numerosas ocasiones. Con tirada copiosa –algún nº sobrepasó los 80.000 ejemplares– se convirtió no sólo en escuela de líderes sindicales, sino también de periodistas, a causa de la amplia información proporcionada acerca de muchos aspectos de la realidad social y política de la época.

---

<sup>159</sup> Joan Josep MATAS PASTOR, “La prensa no diaria de Acción Católica en la diócesis de Mallorca (1936-1975)”, en Juan Antonio García Galindo, Juan Francisco Gutiérrez Lozano, María Inmaculada Sánchez Alarcón (coord.): La comunicación social durante el franquismo, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 2002, pp. 7001-708

<sup>160</sup> VERDERA, Francisco. Algunas claves para estudiar la revista *Ecclesia* entre 1941 y 1954.

De vida sumamente más corta el semanario *¡Tú!* acompañó con perfil y programa propios la trayectoria de Signo a lo largo de un quinquenio –nov. 1946 marzo 1951-. Punta de lanza informativa y programática de la HOAC, llegó a alcanzar en su tramo final los 50.000 ejemplares. Sus choques con la censura fueron permanentes, pero pese a ello la dictadura nunca logró someterlo gracias al primado. Se cerró tras la huelga de tranvías de Barcelona de 1951.

Dentro de la prensa dirigida a las mujeres habría que citar: *Senda*; *Circular para dirigentes y Para nosotras* para la rama adulta, y para las jóvenes: *Volad*; *Cumbres y su suplemento Impulso*; *Tin, Tan y Alba*.

Éstas últimas se crean con un fin apostólico: dar a la niña algo positivo a la vez que se luchaba contra la prensa que le perjudicaba, era el caso de *Tin, Tan* para niñas y en *Volad* para adolescentes o llegar a chicas que *nunca habríamos podido hacerlas verdaderos miembros de AC* y demostrar que AC podía influir en la sociedad, en el caso de *Alba*, *Cumbres* y su suplemento *Impulso*.

La situación económica de la prensa de menores del Consejo Superior de las Jóvenes de Acción Católica no fue muy halagüeña y además parece que no obtuvo grandes apoyos económicos como consta en dos documentos del año 1957<sup>161</sup>. Hablando de la situación de la revista *Volad*:

En la actualidad han salido a la luz los fallos que ha habido en su administración en 1956 y 1955. El caso es que tiene un déficit de 180.000 pesetas. Esto viene porque la Tesorería del Consejo ha funcionado siempre así: se presentaban unos presupuestos donde los gastos no superaban los ingresos lo que no era real. Estos presupuestos no eran ni conocidos ni aceptados por el Consejo. Hasta el 25 de junio último no se habían presentado en varios años las cuentas por parte de la Tesorería. La Tesorería del Consejo nunca ha ayudado a las revistas de Menores volcando sus esfuerzos en Alba (antes Cumbres).

Se pregunta si interesa mantener esta arma de apostolado cuando de nadie encontramos ayuda: las Diócesis sólo dan buenas palabras, los organismos de Prensa católica ni eso. Dentro del Consejo existe la más dura postura contra las obras de Menores.

Se manifiestan quejas por el bajo número de suscripciones en comparación con el número de socias y todos los títulos necesitaban inyecciones económicas para seguir adelante. Tales eran las dificultades económicas que en la reaparición de la revista *Volad* en 1947, la Sra. Santolalla adelantó capital de su bolsillo para que pudiese salir. Se intentó incluir publicidad sin grandes resultados y para hacer cumplir su vocación de apostolado de llegar a todas las chicas se instaba a cada centro parroquial a suscribirse aparte de las suscripciones particulares de las socias<sup>162</sup>

*Senda* fue el órgano nacional de la Rama de las Mujeres desde 1941 hasta 1955:

---

<sup>161</sup> Carta dirigida al Obispo de Ereso por la Presidenta del Consejo Superior de las Jóvenes de Acción Católica, Carmen de Olivares (15 julio 1957) y Carta dirigida –sin firmar- a Alberto Bonet (16 sept. 1957) sobre la difícil situación de la revista “Volad”. Archivo Jóvenes de Acción Católica. Caja 45 2.12.1

<sup>162</sup> Circular nº 1 (3 -10-1947) sobre la revista “Cumbres”. Archivo Jóvenes de Acción Católica. Caja 45 2.12.1

[...] que da a las Diócesis la orientación del Consejo Superior en artículos e informaciones, y hace que todas laboren al unísono al ver en la Sección *De nuestras diócesis* cómo se trabaja en los demás sitios y reciban con ello estímulo y aliento (Manual del Secretariado de Prensa: curso 1944-45)

Jesús Enciso, Consiliario del Consejo Superior en estos años habla de *Senda* en estos términos:

(...) *Senda* es una revista de formación de la mentalidad religiosa y moral, formación de espíritu apostólico, formación del sentido estético religioso. Todo esto persiguen sus artículos que servirán a los diversos secretariados para ilustrar sus círculos de estudio. No es una revista que interese solamente a las militantes de AC, ha de servir también de propaganda de sus actividades y obras entre las personas de fuera. Procurar que el ejemplar al que se suscriba el centro circule por todas las asociadas. (Enciso, 1945)

Su paginación oscilaba entre las 24 y 30 páginas y en 1942 se incluyeron tintas de colores, en 1944 el formato se agranda unos centímetros y aumentan los patrocinadores de publicidad. Comenzó costando unas 2 pesetas y en 1948 ya había duplicado su precio a 4. Su periodicidad solía ser mensual, aunque a veces no se cumplía, agrupándose varios meses en un número. La redacción y administración estaba en la calle Velásquez 29 de Madrid, sede del Consejo Superior de Mujeres y se imprimió en Gráficas Lebrija. Hacia junio de 1947 el número de la tirada era de 3.000 ejemplares y se decía, en la propia revista, que el número de suscripciones era muy pequeño respecto al número de afiliadas (137.000). Pese al elevado precio del papel en la década de los cuarenta, *Senda* aumenta el número de páginas, introduce el papel couché en sus cubiertas, reproduce tricomías de elevado coste y sus páginas se realizan a dos tintas. Se alienta a que para mejorar la revista hay que suscribirse y propagarla, distinguiéndose las Diócesis de Córdoba y Valencia en su difusión.

A parte de las secciones que daban cuenta de las actividades de la organización se incluían otras sobre hogar y modas, moralidad, cuentos, vidas de mujeres admirables, libros y bibliografía, pero también se daba noticia sobre las mujeres católicas en América y de la ACM a nivel internacional.

Las destinatarias eran mujeres de clase media, mujeres con cierta instrucción y nivel cultural, dato que se aprecia en los temas de ciertos artículos: arte religioso o comentarios de obras literarias o determinados autores clásicos, o incluso en las páginas de moda se muestran modelos no precisamente muy asequibles en la situación de penuria de posguerra.

*Para nosotras*, revista para las obreras de AC, se empieza a editar desde marzo de 1944 y se publicó hasta 1965, fue el instrumento del Secretariado de Obreras cuyo fin era conquistar la clase obrera, la más alejada de la Iglesia durante esos años.

Es pequeña y se lee pronto. Tiene muchos grabados, que hablan a la imaginación y sensibilizan las ideas. Sus artículos son claros, sencillos e interesantes, y tratan de vigorizar los sentimientos nobles que atesora el corazón de la obrera. Junto al asunto religioso y moral, se estudia también el práctico: el hogar, el campo, el vestido la cocina. Y luego, fotografías y noticias de los centros especializados de obreras e información de leyes y disposiciones que a una obrera puedan interesar.

Si es obrera de Acción Católica le interesará hacer apostolado entre sus compañeras, y *Para nosotras* será en este aspecto será insustituible, porque podrá darla a leer a las demás, y porque en ella encontrará elementos para los círculos de estudio de su centro y para sus conversaciones en el taller o la fábrica (Enciso, 1945)

Revista más breve, comprendía unas ocho páginas, de precio más accesible, osciló entre los 35 y los 40 céntimos en la década de los 40. Con un lenguaje más asequible pretendía llegar a las mujeres trabajadoras con secciones tipo: consultorio (¿qué queréis saber?), hogar (cómo hacer un vestido nuevo de dos viejos), página para las solteras con sugerencias para las que buscan novio, pero también contenía informaciones más interesantes como la que englobaba la sección dedicada al ámbito rural o la reseña de las leyes sociales que debía conocer la obrera. Pese a ser un medio de comunicación dedicado a las mujeres trabajadoras se seguía insistiendo en que la mujer era la reina del hogar, se daban consejos para retener a los maridos en la casa, pero a la vez se valoraba el trabajo doméstico y se incitaba a participar y cooperar al marido en las tareas del hogar.

*Circular para dirigentes* como su título indica estaba destinada a las dirigentes,

[...] para todas aquellas que tienen que poner en marcha alguna parte de la organización, es decir, a las presidentas, secretarias, tesoreras y sus vices y a las vocales y sus auxiliares. En esta revista encontrarán todo lo que necesitan para conocer bien la Acción Católica y su Reglamento; y de ambas cosas se habla en párrafos breves que se leen con facilidad y con gusto (Enciso, 1945).

Instrumento para las que necesiten saber cómo se organiza un Secretariado o su Sección, cómo han de hacerse los Círculos de estudio y sus reuniones a para las que requieren guiones para el estudio y exposición de los temas o bibliografía.

Además los Consejos Diocesanos solían tener un boletín, que en cada sitio adoptaba un nombre distinto. En él se recogían las consignas dadas por el Obispo y por el Consejo Superior y se adaptaban a las necesidades y circunstancias de la Diócesis y se precisaba la forma concreta en que han de actuar todos los centros en su apostolado. Se anunciaban los cursillos para la formación de dirigentes y se recogía la actividad de los centros. Ejemplos serían: *Pro-Eclesia: boletín de la Unión Diocesana de las Mujeres de A.C. de Madrid-Alcalá* o *Vida: órgano Diocesano de la Rama de Mujeres de Acción Católica de Pamplona*.

Las jóvenes también contaban con sus órganos de prensa: *Sembrad: publicación mensual de la Juventud de Acción Católica de Zaragoza* (1937-1939), *Normas y orientaciones para la dirección de la Juventud Femenina de Acción Católica* (1939-1942) o *Conquistas* publicada en Toledo entre 1943 y 1949.

En su I Asamblea General de Dirigentes en junio de 1951, de nuevo la ACE vuelve a tratar el tema de la prensa pero esta vez junto al resto de medios: libros, cine, radio y televisión bajo el lema “Cristianización de los medios de comunicación”. Entre las conclusiones sobre la ponencia dedicada a Periódicos había viejas reivindicaciones de la Iglesia, como disponer directamente de un gran diario nacional o la petición de una nueva ley de prensa. También se reconocía la gran labor de *Ecclesia* y la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en la difusión de todas sus publicaciones.

También la ACE se dedicó a editar libros no sólo relacionados con su vida interna sino también dirigidos al gran público para darle a conocer el pensamiento pontificio, facilitar una formación religiosa moderna completa y sistemática, para conocer las instituciones y figuras de nuestra historia, o bien lecturas de tipo popular de figuras relacionadas con la caridad.

Una de las preocupaciones de la organización era mejorar su sistema de distribución, que compatibilizara el sentido económico con el criterio apostólico, pues pese a contar con 10.500 centros y más de medio millón de afilados, sólo un 11% de los libros se pedían a través de las organizaciones de Acción Católica.

Por último, aunque se pase un poco de fecha, dependiente de la Junta Nacional de ACE se creará el Secretariado de Prensa y Publicaciones Infantiles en 1955 con el fin de proteger y desarrollar la vida de las revistas infantiles católicas.<sup>163</sup>

### **2.3.3. UNA POLÍTICA EN COMÚN: adoctrinar con el libro.**

En una y otra formación tuvo presencia la política del libro dentro de sus organigramas, a través de departamentos, servicios o secretariados de publicaciones, prensa, bibliotecas u orientación bibliográfica.

Ambas utilizaron los mismos instrumentos: la censura, la actividad editorial y la organización de bibliotecas, y ambas intentaron desplegar su actividad por toda la geografía española sirviéndose de sus entramados organizativos.

También fue común una mayor orientación hacia las mujeres y los jóvenes. De hecho las publicaciones femeninas de ambas organizaciones fueron instrumentos de difusión del modelo de mujer que buscaba el franquismo, a la vez que ejercieron de verdaderos órganos de propaganda en la captación de nuevas militantes y asociadas<sup>164</sup>

Las dos utilizaron el libro y la lectura para adoctrinar, hacer apostolado o proselitismo a la vez que para formar dirigentes y mandos. Aunque algunas publicaciones con el tiempo fueron un resquicio por donde se coló la crítica al sistema establecido, como ocurrió con la prensa obrera católica o los periódicos de Centuria, donde se reprochaba al régimen su paulatina desviación del ideario joseantoniano.

Las publicaciones de Falange, contaron con el apoyo de las arcas públicas, mientras que las de ACE, además de sufrir la censura gubernamental hasta 1945, tuvieron que autofinanciarse para publicar, de ahí la constante invitación a los asociados/as para que se suscribiesen e hiciesen propaganda.

Ambas tuvieron interés e intención de organizar las bibliotecas de manera profesional, catalogando y clasificando los libros, dotándose de un reglamento o formando al personal encargado. En este punto la Falange salió beneficiada en estos primeros años por la

---

<sup>163</sup> Secretariado de Prensa y Publicaciones Infantiles (s/f) y Reglamento interno del Secretariado de Prensa y Publicaciones Infantiles (25 febrero 1955). Archivo Junta Nacional de Acción Católica. Caja 93.3.1

<sup>164</sup> F.J. MARTÍNEZ CUESTA y J.M. ALFONSO SÁNCHEZ: "Tardes de enseñanza y parroquia: el adoctrinamiento de las niñas en la España franquista a través de las revistas "Bazar" y "Tin Tan" (1947-1957)", *El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia*, 4 (2013) pp. 227-253.

colaboración de un excepcional bibliotecario, Javier Lasso de la Vega<sup>165</sup>, que dejó su impronta en varios de los proyectos que hemos citado.

También ambas organizaciones se beneficiaron de lotes de libros proporcionados por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros del Ministerio de Educación Nacional, pese a sus escasos recursos y no estar contemplado, ya que no eran bibliotecas gestionadas por personal del Cuerpo Facultativo. Incluso la SF fue más allá, obteniendo del Ministerio la posibilidad de que le prestasen libros procedentes de las bibliotecas públicas del Estado.

Si la ACE fue más explícita y desarrolló más su actividad en el campo de la orientación/censura de las lecturas, la SF, sobre todo, no le fue a la zaga, creando un cuerpo de censores para orientar las lecturas<sup>166</sup>, además de las juntas asesoras que seleccionaban los libros para las bibliotecas o los consultorios bibliográficos como el de la revista *Consigna* dedicada a las maestras que pretendían servir de guía a las camaradas lectoras.

Se crearon bibliotecas y, por tanto, la posibilidad de acceder al libro en lugares donde no llegaban las bibliotecas públicas. Es cierto que la mayoría de los libros eran doctrinarios (falangistas o católicos), sobre todo en los primeros años del Régimen, pero junto a ellos se permitió acceder a libros de narrativa, biografías o textos formativos, pero con el inconveniente de que al ser bibliotecas especializadas al servicio de organizaciones no siempre eran de libre acceso y a veces cobraban por sus servicios.

## **2.4. LA POLÍTICA DEL LIBRO ESCOLAR**

Dado que el libro de texto es el instrumento por excelencia de transmisión de los diferentes contenidos ideológicos sustentados por los sistemas social y político vigentes<sup>167</sup>, es fácilmente comprensible que el régimen de Franco se preocupara muy tempranamente de realizar un férreo control sobre la idoneidad ideológica de los textos que se debían utilizar en las escuelas.

O dicho de otra manera, la ideología del poder político invade todos los campos del sistema educativo, por ser la vía más rápida y segura de la reproducción ideológica, sobre todo en la escuela primaria, y dentro de ésta, un elemento de capital importancia es el contenido ideológico de los textos escolares que impregna hasta aquellos libros de temática científica.

Pero hablar del libro escolar durante el franquismo implica conocer su modelo educativo, que comienza a implantarse desde el mismo alzamiento suprimiendo la coeducación y las escuelas laicas, y depurando tanto a profesores como a los materiales didácticos. Su concepción de la educación y la cultura partía de la deslegitimación y el desmantelamiento del modelo republicano que se tachaba de antipatriótico y antirreligioso, mientras se construía otro sobre los fundamentos ideológicos del catolicismo y partían de la consideración de que el fin del hombre era Dios, y que al mismo tiempo, el ser humano era imperfecto como consecuencia del pecado original. Por tanto, ya que el niño venía al mundo con malas inclinaciones, era necesario que se sometiera a una pedagogía católica que le enderezase. Modelar, formar e influir sobre el carácter del niño, anulando toda posibilidad de pensamiento propio era el objetivo de este modelo educativo.

---

<sup>165</sup> Entre marzo 1938 y agosto 1939 ostentó la Jefatura del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad intelectual con Pedro Sainz Rodríguez como Ministro de Educación Nacional.

<sup>166</sup> “La Regiduría de Cultura, Departamento de Escuelas de Formación y Bibliotecas”, *Consigna*, 3 (1940), p. 24

<sup>167</sup> GERVILLA CASTILLO, Enrique. “La escuela del nacional-catolicismo: ideología y educación religiosa”, p. 294 ¿?

Concretamente, la política educativa del régimen se inspiró en los principios y sistemas educativos de la teoría católica educativa de los siglos XVI y XVII y en la doctrina tradicional de la Iglesia de la educación cristiana de la juventud, formulada por Pío XI en su encíclica *Divini illius magistri* de 21 de diciembre de 1929. Los mentores fueron Marcelino Menéndez Pelayo y Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María. Éstas se fundaron a fines del XIX para contrarrestar la postura neutral hacia la religión de las actividades educativas de Francisco Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza<sup>168</sup>.

La recatolización de la educación significó el estudio obligatorio de textos religiosos y la subordinación de todas las formas de enseñanza y comportamiento estudiantil a las normas de la moral católica. Las consecuencias sociales de esto fueron el predominio de la educación privada a cargo de órdenes religiosas, y la provisión de una educación especial para la mujer.

A esto hay que añadir que la educación primaria dejó de ser un medio a través del cual se adquirirían conocimientos para convertirse en un medio destinado a la transmisión de valores ideológicos que debían servir para fomentar en el niño el amor hacia la patria, hacia Dios y hacia Franco. Mientras que la educación secundaria se reservaba para los hijos de las élites.

En los primeros años de la Guerra, entre los militares y simpatizantes hubo una clara conciencia del influjo que la lectura podía ejercer sobre los escolares. Estos eran apreciados en cuanto receptores de mensajes en los que convenía primar determinadas cosmovisiones. Los textos debían imbuir de una determinada percepción del mundo y de la patria.

La lectura fue uno de los medios utilizados para despertar y arraigar en los escolares el sentimiento patriótico y la moral católica. Escuela y biblioteca debían cooperar para alcanzar ese objetivo y así se sugirió la lectura de obras clásicas (*El libro de la selva*, *El soldado de plomo*) y de obras que se venían utilizando en la escuela (*Inventos e inventores* y *Lecturas de oro*, de Solana; *Así quiero ser*, *Escudo imperial*, *Héroes* y *Frases célebres*, de Onieva; *La nueva emoción de España*, de Siurot)<sup>169</sup>

Las medidas que tomó el régimen franquista para controlar los contenidos de los textos escolares se articularon en torno a cuatro acciones: la depuración del material republicano; la creación de Comisiones dictaminadoras de libros de texto encargadas de aprobar o prohibir las listas oficiales; compartir con la Iglesia la labor censora –sobre todo en el tema de la selección de las lecturas idóneas– y tras fracasar en su intento del texto único, se optó por liberalizar el mercado del libro escolar, siempre que sus contenidos se ajustaran a lo estipulado.

Dado que la normativa legal era el único instrumento oficial que posibilitaba el cambio y anulaba las disposiciones precedentes en vigor<sup>170</sup>, se aprobaron numerosas órdenes, circulares y leyes que afectaron al libro escolar entre septiembre de 1936 y julio de 1945, aunque la política de los manuales escolares en esta segunda fase no va a sufrir grandes modificaciones formales. Hasta 1955<sup>171</sup> no se producirán cambios de importancia en la política legislativa de los libros escolares, limitándose el BOE a publicar las listas de los libros autorizados,

---

<sup>168</sup> Alicia Alted Vigil “Educación y control político”

<sup>169</sup> DIEGO PÉREZ, Carmen. “Los libros escolares de lectura extensiva y literaria”. En: *Historia ilustrada del libro escolar en España* (p. 225-238. FGSR)

<sup>170</sup> Enrique Gervilla. “La escuela del nacional-catolicismo”, p. 335

<sup>171</sup> Decreto 22/09/1955 será clave en la legislación de libros escolares de Enseñanza Primaria. Establecía que no podrán utilizarse en ninguna escuela ningún libro que no haya sido aprobado. Se clasifican los libros en varias categorías.



especialmente en Primaria y Secundaria. Como novedad, a partir de 1945, se puede observar en los textos escolares la expulsión de términos como fascismo, totalitarismo, raza, imperio, sangre y su sustitución por catolicismo, movimiento, reino,...

Del conjunto de esta normativa se pueden deducir las siguientes conclusiones. Primero, que los libros escolares fueron una preocupación para las fuerzas coaligadas, durante y después de la guerra, como medio de combatir a la república democrática, de ahí las tempranas medidas de depuración a través de la incautación y destrucción de libros. Segundo, la subordinación de los libros de texto al dogma y a la moral católicos, así como a un excluyente patriotismo. Quedando en un segundo plano la preocupación por la calidad científica o pedagógica. Tercero, los textos escolares fueron sometidos a una rígida censura ideológica y autorización previa. Cuarto, falta de coherencia pues, mientras en la enseñanza primaria, durante 15 años, no hubo ninguna norma precisa que determinase cuáles debían ser los contenidos concretos de la enseñanza que se impartía en las escuelas primarias, en cambio en la enseñanza secundaria, tras promulgarse la ley de 1938, se aprobaron inmediatamente los cuestionarios, en consecuencia los autores y editores de libros de texto supieron a qué atenerse a la hora de elaborar sus materiales<sup>172</sup>. Y en quinto, y último lugar no tuvo éxito la idea del texto único.

Me parece interesante detenerme en analizar por qué fracasó la tentativa del texto único de la mano del Instituto de España, tema estudiado por Carmen Diego de Pérez<sup>173</sup>, quien pone en evidencia la relación entre educación, economía y gobierno.

Desde que se crea el Instituto de España –diciembre de 1937-, como órgano superior de cultura, fijó entre sus objetivos la redacción y edición de textos escolares destinados a la enseñanza primaria, encargándose de la redacción de los mismos a cada una de las Reales Academias que lo componían y solicitando al Estado que los textos únicos elementales fueran obligatorios para la enseñanza primaria. Se acordó publicar dos líneas de libros: los prontuarios que debían ajustarse a un programa, y las antologías y libros destinados a la lectura, y se recomendó que la redacción de los textos se encargase a escritores experimentados en la comunicación para niños.

La intención del Instituto, y por tanto de los intelectuales que lo conformaban, era mejorar didácticamente y actualizar científicamente los libros escolares. Pero fueron muchos los escollos a salvar. Primero los relacionados con el contexto mismo de la guerra como las dificultades de abastecimiento de papel, la recaudación de fondos para iniciar la edición, la escasez de imprentas en el bando sublevado, el almacenaje y distribución de los libros, la adquisición de los mismos, etc.

En segundo lugar, la industria editorial dedicada a la primera enseñanza percibió como un peligro el monopolio del Estado a través del texto único que se impondría con carácter obligatorio tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Esta medida suponía, en su opinión, la ruina de toda la industria editorial de primera enseñanza y la destrucción de sus fondos editoriales. Y así lo expresaron en sendas cartas el gerente de la editorial Hijos de Santiago Rodríguez de Burgos al ministro de Educación<sup>174</sup> o la que envían los representantes de

---

<sup>172</sup> TIANA FERRER, Alejandro. “El libro escolar como instrumento didáctico”. En: *Historia ilustrada del libro escolar en España*. T.II, pp. 150-155

<sup>173</sup> DIEGO PÉREZ, Carmen de. “El Instituto de España: su labor en pro de los textos únicos de enseñanza primaria”. En: *El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas* (coord.) Alejandro Tiana Ferrer, Madrid, UNED, 2000, pp. 237-340

<sup>174</sup> Citado por Carmen de Diego

la editorial Calleja y Espasa Calpe con fecha 28 de junio a Lasso de la Vega –director de Archivos, Bibliotecas y Museos-<sup>175</sup>. En ésta última los editores hablan de que el decreto de 11 de abril de 1938 acarrearía la muerte de la producción editorial española y supondría un fatal estancamiento de la cultura nacional.

Sus argumentos son contundentes: apelan al fuero del trabajo donde se dice que “el estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación” y “el Estado no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación”, que en el caso de la industria editorial española parece no hacer falta intervención estatal alguna dado que hay excelentes libros escolares tanto por su calidad tipográfica, pedagógica y buen precio. Aluden al fracaso del texto único de la Dictadura de Primo de Rivera; alertan del peligro de anquilosamiento de los textos oficiales, más perezosos a reformarse desapareciendo el estímulo de la competencia en cuanto a la presentación tipográfica; causaría un daño irreparable a editoriales que durante años con su producción editorial de primer orden han contribuido a la elevación cultural de la nación. Además, el rígido monopolio estatal también acarrearía la pérdida del mercado americano y la influencia espiritual sobre América.

Sugieren que no se haga tabla rasa con todas las editoriales, que se castigue sólo a aquellas que “por su carácter sectario o disolvente han influido en la formación de esa mentalidad turbia y antisocial que ha llevado a España al borde de un insondable precipicio” y que se exima a las editoriales técnicas y científicas.

Y si se persiste en la idea del texto único, piden un tiempo para que den salida a su fondo editorial o se les indemnice. Que el Estado se limite a dictar normas a que han de ceñirse los textos escolares o que imponga las orientaciones en cuestiones de interés nacional, religioso o político. Piden que para el próximo curso que se utilicen los libros escolares ya editados, ante la falta de los nuevos textos, previa una selección realizada por una comisión especial.

Pero lo más llamativo, sea quizás, cuando ponen al descubierto la pretensión del Instituto de España de obtener beneficios económicos con la venta del libro escolar para destinarlos a la investigación, para ello proponen otras medidas para tal fin como el reservar un porcentaje del precio de venta al público de todo libro escolar.

También las artes gráficas mostraron su preocupación como lo demuestra la carta del presidente de la Federación Patronal Española de Artes Gráficas, Julián Bayo, que también se dirige a Lasso de la Vega el 5 de mayo de 1938:

“Que el establecimiento de textos únicos (ensayos que en España jamás han dado resultados en ningún aspecto) en la enseñanza primaria puede originar un grave trastorno y quebranto en toda la industria gráfica española que tan necesitada de la ayuda y protección oficial se encuentra” y suplica “que el Instituto de España se limite únicamente a fijar las características que deben reunir los textos de primaria, a los que se tendrán que adaptar autores y editores. Que el Estado inspeccione y controle estableciendo la censura para todo libro escolar que se edite”.

De lo expuesto se deduce que tanto editores como impresores antepusieron sus intereses económicos, aceptando la censura y el control ideológico, por encima de la calidad de los textos formativos. ¿Dónde queda su argumento de que las editoriales habían contribuido a la elevación cultural de la nación?

---

<sup>175</sup> Archivo BUC Fondo Lasso de la Vega BUC. Caja 2

Al final el gobierno, para no perjudicar la industria editorial española, aprueba la orden del 29 de junio de 1938:

“...podrán continuar en el mercado otros libros pedagógicos destinados a la primera enseñanza, cuya tirada en series numerosas ha obligado a las casas productoras a intervenir cuantiosas sumas, llevadas del deseo de asegurar la economía de los precios y la competencia en los mercados internacionales siempre que su contenido sea a juicio de este Ministerio, y previo examen riguroso, pedagógicamente recomendable, patriótico por su doctrina y apto por sus ideas a los nobles principios en que se inspira nuestra victoriosas revolución nacional”<sup>176</sup>

Lo cierto es que la producción de manuales escolares, comenzó ya desde 1936, y tras la eliminación de los libros de época anterior y a falta de nuevas obras, se recurrió en los primeros meses a manuales editados con anterioridad a 1931, pero a partir de abril de 1938, después de encomendar al Instituto de España la preparación y publicación de los libros de texto, éstos comenzaron a circular por la zona nacional con mayor fluidez. Poco después se liberalizó la edición y venta, siempre que sus contenidos se ajustaran a lo estipulado.

Las ediciones escolares de los años 40 y comienzos de los 50 fueron en parte reimpresiones de obras didácticas anteriores. Tanto las reediciones como los nuevos libros, responden en sus aspectos materiales e iconográficos a los modelos tradicionales ya conocidos reproducidos sobre soportes de baja calidad. Se ilustran con grabados y dibujos de escaso atractivo, impresos a menudo sobre papel reciclado, casi siempre a un color. Incluso se da una regresión respecto a niveles de calidad alcanzados por algunos editores en las primeras décadas de siglo. La fotografía está prácticamente ausente de los libros en estos años de pobreza y de autarquía. En el aspecto artístico asistimos a una regresión. La iconografía exaltaba los valores de la nueva ideología. Tanto las cubiertas de los libros como los dibujos insertados en su interior exhibieron toda la simbología del nuevo régimen y los valores morales en que se sustentaba<sup>177</sup>.

Desde las múltiples perspectivas que pueden ser objeto de estudio los textos escolares, aquí nos interesan dos: aquella que considera al libro escolar como reflejo de los valores, actitudes, estereotipos e ideología en que se inscribe, y la que contempla el libro como instrumento de la política educativa. Son numerosos, hasta la fecha, los trabajos aparecidos que han estudiado los textos escolares durante el franquismo. Desde los que analizan un nivel educativo, unos años concretos, una asignatura –la Historia, la Formación del Espíritu Nacional- o un tipo de libros, a los que adoptan enfoques globales o muy específicos como el lexicográfico<sup>178</sup> o temático<sup>179</sup>, pero, en general, en casi todos, de alguna manera se incluye el análisis de los contenidos ideológicos<sup>180</sup>, en concreto el nacionalcatolicismo.

De interés para el enfoque de esta tesis –la política del libro- es el trabajo de Carlos Sánchez-Redondo Morcillo *Leer en la escuela durante el franquismo*, donde analiza las normas que

---

<sup>176</sup> B.O.E. del 5 de julio de 1938, nº 5

<sup>177</sup> Agustín Escolano, en: “Historia ilustrada del libro escolar en España”

<sup>178</sup> C. García Crespo extrae de los libros de lecturas redes léxicas en torno a cinco palabras clave-base: religión, familia, escuela, nación, trabajo, guerra civil.

<sup>179</sup> Lara Campos Pérez. “Los relatos de la nación, iconografía de la idea de España en los manuales escolares (1931-1983)”.

<sup>180</sup> Ver estado de la cuestión en Emilio Castillejo Cambra. “Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de historia del franquismo (1936-1975)”, Madrid, UNED, 2008, pp. 27-33

regularon la autorización de los libros que se utilizaban en la Enseñanza Primaria y las que aprobaban o no dichos libros. Se centra exclusivamente en los textos de Primaria, ya que todos los niños pasaban por ella, y lo que contenían esos libros era leído por todos. Tras analizar las cartillas y los libros de primera lectura, concluye:

“Tanto las cartillas como los libros de primera lectura están cargados de contenidos del nacional-catolicismo propio del régimen de Franco, especialmente de postguerra. Lo que en principio resulta inesperado para que lo lean (o vean las ilustraciones) niños tan pequeños (de 5-7 años). Hay que pensar, tras este análisis, la prioridad del régimen inicial de inculcar su ideología a todo el pueblo español tras la guerra. Las cartillas aún siendo libros instrumentales de ejercitación de la lectura y escritura, se convierten también en libros informativos, a través de cuyos mensajes se intenta que los lectores conozcan determinadas informaciones o contenidos. Y especialmente en libros formativos y educativos, que intentan que los lectores capten determinadas actitudes, valores, ideas y normas de conducta social, o la ideología del gobierno. Por tanto, su finalidad es no sólo que el niño aprenda a leer y escribir, sino también desarrollar su interés por la lectura, y que a través de ella aprenda determinados conocimientos básicos y asimile determinada ideología”.

En la misma línea Emilio Castillejo, en *“Mitos, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de historia del franquismo (1936-1975)”* consta que los libros escolares son un producto ideológico que arrojan más luz sobre la naturaleza del franquismo que otras exposiciones al uso, reflejando la evolución del régimen y la univocidad de su discurso. El nacionalcatolicismo ocupa un gran espacio en su investigación haciendo de él un elemento principal de la ideología del franquismo tanto al comienzo como al final de la dictadura. Castillejo se centra en la manipulación ideológica del conocimiento histórico para socializar a los alumnos en valores que legitiman poderes o situaciones sociales y políticas. A través de la enseñanza de la historia, afirma, se ejerció la represión y la violencia simbólica.

Más ceñido temporalmente a los años primeros años del franquismo es el trabajo de Manuela López Marcos, *El fenómeno ideológico del franquismo en los manuales escolares de enseñanza primaria (1936-1945)*. Comienza su exposición con la experiencia del texto único y del Instituto de España y un breve análisis de los autores de esos manuales para llegar al tema central: la función ideológica de los manuales escolares. Escoge, en concreto, los manuales de historia de las enciclopedias cíclico-pedagógicas de grado medio ya que como compendios del saber debían contener todo lo que el niño tenía que adquirir a lo largo de la escolaridad. En muchos casos era el único libro de texto que poseían los alumnos. La historia se ponía al servicio del adoctrinamiento político y religioso de las nuevas generaciones.

La idea vertebradora de su trabajo es que la ideología del nacionalcatolicismo no es original, y, por tanto, el franquismo es fruto de la pugna soterrada de la mentalidad del Antiguo Régimen y la modernidad, y no supuso más que una hiperbólica recuperación de las tradiciones más ultranacionalistas e integristas. Siete son los elementos que analiza en dichos manuales y la llevan a esa conclusión: el nacionalismo, el catolicismo, el imperialismo espiritual, la exaltación del poder absoluto y la concepción jerárquica y autoritaria de la sociedad<sup>181</sup>.

Antonio Molero Pintado ha apuntado otras vías de investigación menos exploradas: “a parte de la ideologización del libro de texto hay que estudiar otras variables como el autor, la

---

<sup>181</sup> Más variados en planteamientos y temas son los artículos recogidos en la *Historia ilustrada del libro escolar en España*, bajo la dirección de Agustín Escolano Benito. Para el periodo 1939-1951 son de interés el de Carmen Diego Pérez sobre los libros de lectura; el de Manuel de Puelles Benítez sobre la política del libro escolar; la ilustración de la posguerra y los libros por áreas y materias de Agustín Escolano; y el libro escolar como instrumento didáctico de Alejandro Tiana Ferrer.

editorial, las instituciones y los ilustradores, así como el papel predominante que el libro de texto desempeña en la configuración de las políticas educativas de cada momentos<sup>182</sup>.

## **2.5. LA POLÍTICA EXTERIOR DEL LIBRO. IMPERIO DE PAPEL**

La política exterior cultural<sup>183</sup> representó una de las maneras fundamentales de hacer política exterior, máxime para una nación como España que difícilmente estaba en condiciones de recurrir a otros elementos como la fuerza, el dinero y el prestigio.

Esta manera de hacer política en el ámbito internacional era relativamente nueva<sup>184</sup>. Comenzó a definirse a principios del siglo XX como una manera de proyectar una imagen positiva del propio país que podía reportar varios beneficios, como acrecentar el prestigio y la influencia de un país en la escena internacional abriendo cauces a la colaboración política y la penetración económica. Además, desde la I guerra mundial, la difusión de la influencia cultural se convirtió en una verdadera necesidad vital en aquellos pueblos que no habían podido conservar el rango de potencia.

Concretamente la política cultural exterior se sustentó en la expansión del conocimiento de la lengua y de las creaciones intelectuales, artísticas y científicas de cada país.

La presencia cultural española en el extranjero a comienzos del siglo XX, con la salvedad de la zona del Protectorado y de algunas escuelas instaladas fuera del territorio nacional, estaba prácticamente reducida a una serie de instituciones de cultura superior. La formulación de un programa de expansión cultural partió de los intelectuales vinculados a la Institución Libre de Enseñanza e irá siendo asumida paulatinamente por los sucesivos gobiernos convencidos de que España debía poner en marcha medidas que impulsaran su presencia exterior y le permitieran recuperar un papel internacional activo.

El primer ensayo de una acción cultural en el exterior vinculada a la diplomacia fue la fundación en el seno del Ministerio de Estado, en 1921, de una Oficina de Relaciones Culturales Españolas (ORCE). Este organismo se encargó de recabar información y preparar iniciativas que fomentasen en el extranjero el conocimiento de la cultura española, la enseñanza del idioma y los intercambios. En 1926 pasó a llamarse Sección de Relaciones Culturales (SRC), dependiendo de la Sección de América.

Con esta orientación se constituyó también, ya con la Dictadura de Primo de Rivera (1926), la Junta de Relaciones Culturales (JRC) encargándose de organizar la enseñanza española en el extranjero, especialmente en países donde había colonias de españoles y focos de cultura española; la creación de Cátedras y Centros de Cultura superior en el extranjero; el intercambio científico, literario y artístico mediante cursos, conferencias, exposiciones,...y la difusión del idioma español y, como vehículos suyos, del libro, de la revista y del periódico español en el extranjero.

---

<sup>182</sup> Antonio Molero Pintado. "Tres momentos clave en la historia del libro escolar: de la dictadura primorriverista a los primeros años del franquismo". En: CASTIILEJO CAMBRA, E. Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de historia del franquismo, Madrid, UNED, 2008

<sup>183</sup> DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L., Imperio de papel, Madrid, CSIC, 1992, pp. 419-462

<sup>184</sup> DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. y FIGUEROA, M. "Los compromisos internacionales de España en materia de cultura", *Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos)*, nº. 4, 2008

Su labor fue casi irrelevante hasta la llegada de la II República en 1931. Entonces, de nuevo bajo la dirección de los intelectuales reformistas, se emprendió un programa más sistemático que comprendió un plan de fundación de escuelas para emigrantes y la organización de lectorados y subvenciones a cátedras de cultura española en universidades extranjeras, además de medidas dirigidas a Hispanoamérica.

Respecto a la difusión del libro y el idioma españoles en el extranjero se concretaron aún más sus actuaciones a través de exposiciones periódicas del libro español y conferencias con este motivo; el fomento de tratados de propiedad intelectual; el envío de obras españolas a los Centros culturales en el extranjero y la defensa de la inclusión del español en los planes de estudios de las instituciones escolares extranjeras.

La guerra civil dio fin a estos proyectos culturales y provocó al exilio a una buen número de universitarios, científicos e intelectuales.

La proyección cultural del régimen durante sus primeros años careció de una verdadera planificación comparable a la establecida en los inicios del periodo republicano y apenas introdujo innovaciones en la promoción de la presencia cultural española en el extranjero. No elaboró ninguna concepción alternativa en el marco de la difusión cultural, sino que se limitó a continuar con las líneas heredadas. Sólo se diferenció en el componente ideológico represivo que impregnó doctrinalmente las pocas formulaciones alrededor del papel espiritual de España.

La dictadura franquista, pese a todo, no cerró sus canales de interrelación cultural con el exterior y en 1938 se restableció la SRC, que tras la victoria de Franco cobraría impulso a partir de 1941 con Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores. Especialmente, se intensificaron los intercambios con Alemania e Italia. La SRC realizó una labor de reconstrucción de la red cultural erigida previamente y, en ocasiones, incrementó su radio de intervención. Pero le faltó un diseño de objetivos y un instrumento de coordinación entre las diversas instancias que actuaban en el mismo campo como el CSIC o el Ministerio de Asuntos Exteriores, papel que correspondió tiempo atrás a la JRC en suspenso desde el conflicto civil.

Entre las medidas tomadas, estuvieron la selección de libros, a cargo del SRC, el CSIC y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, y su posterior envío a los lectorados. El área de implantación donde se concentraban la mayor parte de los lectores de español fue en territorio europeo, sobre todo con destino a Alemania, que llegó a tener hasta 12 lectorados de los 37 puestos contabilizados.

Donde quizás pudo apreciarse una cierta intensificación de las actividades de la SRC fue en la difusión del pensamiento español. La SRC activó desde los últimos meses de 1942 la publicación de un reducido número de volúmenes de estilo panegirista, cuidada elaboración y edición numerada, con el objetivo primordial de distribuirlos como obsequio entre personalidades relevantes del mundo cultural o político de los distintos países, diplomáticos o bibliotecas públicas extranjeras. Esta actividad se inició en 1940 con el libro sobre Francisco d'Ollanda<sup>185</sup> para conmemorar la Exposición del mundo portugués y tuvo continuidad con otras obras entre las cuáles cabe destacar por su importancia y elevado precio *Monumenta Chartographica Indiana*.

Durante la II guerra mundial el Nuevo Estado acomodó la política cultural exterior a sus cambiantes expectativas internacionales. Inicialmente, se buscó la integración en la Europa

---

<sup>185</sup> *Os desenhos das antigualhas que vio Francisco d'Ollanda pintor português (1539-1540)* publicados con notas de estudio y preliminares el Prof. E. Tormo, Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 1940

totalitaria, pero cuando la guerra empezó a cambiar de signo se enfocó la política cultural hacia las relaciones con las repúblicas latinoamericanas como un medio indirecto de marcar distancias sin renegar del todo de la connivencia con las potencias del Eje, y se comenzó a tender puentes hacia los vencedores.

Ante la condena internacional, el régimen de Franco tuvo que recurrir a las relaciones culturales para suplir otros medios de actuación. Surgió así una simbiosis entre propaganda y acción cultural, y se buscó en el interior el apoyo de los sectores conservadores y católicos como vía para debilitar el cerco exterior impuesto al régimen.

Para combatir el aislamiento se incrementaron de forma considerable los créditos destinados a la política cultural y se dio un impulso institucional a sus organismos. Así las relaciones culturales, dentro del Ministerio, adquirieron la categoría de Dirección General de Relaciones Culturales (DGRC)<sup>186</sup>, y la Junta de Relaciones Culturales, sin apenas actividad desde la guerra civil, fue reconstituida para coordinar las diversas iniciativas emprendidas.

La DGRC se dividió en dos secciones: la de Expansión Cultural y la de la Obra Pía y Asuntos Misionales. Además la misma Ley que reorganizó el Ministerio de Asuntos Exteriores, desarrolló las funciones de la JRC, asignándole la expansión de la cultura española en el extranjero y el intercambio cultural de España con los demás países, constituyéndose como el organismo de colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores con el de Educación Nacional.

Los principales focos de atención, a partir de 1945, serían EE.UU, el Reino Unido y América Latina. Como plataforma hacia el mundo anglosajón se fomentó la proyección internacional de algunos organismos culturales y científicos españoles como el CSIC y el Instituto de España en Londres. Para potenciar las relaciones con América se creó el Instituto de Cultura Hispánica. Más tarde: el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, el Instituto de España en Múnich y el Instituto cultural de Santiago en Nápoles.

Los resultados de esta ofensiva cultural tardaron en dar sus frutos. Hacia fines de los 40 apenas se firmaron acuerdos con cuatro países: uno de intercambio de formación profesional en Suiza; varios convenios con Argentina de protección de derechos de autor, convalidación de títulos y estudios, e intercambio de libros y publicaciones. Pero, el panorama cambió en los 50, gracias a la confrontación entre USA y URSS. Además, las puertas de la UNESCO se abrieron en 1952, lo que permitió a España incorporarse a la primera organización internacional dedicada a las relaciones culturales.

El gobierno español tuvo que supeditar la política cultural a las necesidades inmediatas de la política exterior para ganar aliados y difundir una imagen más aperturista de la dictadura. Por ello, se utilizó lo cultural como vanguardia de la política de amistad con América Latina y el mundo árabe, al tiempo que se intentó el acercamiento a varios países europeos como medio para ir abriendo otras dimensiones diferentes a lo cultural.

La política cultural quedaría subordinada a lo largo de este periodo de ostracismo a lo que sus dirigentes calificaban como *Información Nacional en el Extranjero*, más claramente, un medio de propaganda y de legitimación. El régimen utilizó la acción cultural en el exterior como un medio de apertura hacia la comunidad internacional, y a la vez, sirvió para transmitir a la propia opinión pública interior una sensación de reconocimiento fuera de las fronteras nacionales.

---

<sup>186</sup> Ley de 31 de diciembre de 1945 (B.O.E. del 2 de enero 1946) que reorganizó el Ministerio de Asuntos Exteriores, creando la Dirección General de Relaciones Culturales.

Veamos las competencias y actuaciones que desarrolló la JRC a través del libro como soporte de la acción cultural en el exterior<sup>187</sup>.

En uno de sus primeros plenos (21-5-1945), la restaurada JRC, respecto al papel del libro acordó:

8º Ampliación de las bibliotecas españolas en el extranjero, creación de otras y remisión de textos impresos en España, al objeto de difundir el “Pensamiento Español por medio del libro”. Fomento a su vez de nuevas publicaciones, celebración de exposiciones, conciertos, cursos, conferencias y otras manifestaciones culturales, (...) 11º. Subvención para la Exposición del Libro Español en Lisboa, prevista para el mes de noviembre.

Unos meses después, en agosto de 1945, el Consejo de Ministros concedió un crédito extraordinario al Ministro de Asuntos Exteriores, con el fin de atender las necesidades de la expansión cultural.

Las realizaciones más destacadas llevadas a cabo por la JRC en el curso de 1946 afectarían a la publicación del *Índice Cultural Español*, a la convocatoria de un amplio programa de becas y a la difusión del pensamiento español por medio del libro. El *Índice Cultural Español* comenzó a editarse desde el mes de enero, respondiendo a un doble objetivo:

1º Contrarrestar la afirmación de nuestros adversarios, según la cual, a partir de 1939, había cesado toda actividad cultural de calidad en nuestro país, por haber emigrado al extranjero las personalidades más destacadas de la investigación, el profesorado y la técnica, y 2º Mantener normalmente informado al numerosísimo público hispanista del extranjero sobre nuestra actividad cultural.

Además se siguió con la actividad editorial dedicada a la publicación de algunas obras poco rentables pero de alto interés erudito y de espléndida encuadernación, o de libros que por su documentación gráfica más que por su alcance erudito, constituían un auxiliar imprescindible para el proceso de reconstrucción y/o propaganda.

Otra de sus actuaciones consistió en reponer en las bibliotecas universitarias<sup>188</sup> afectadas por la II guerra mundial los fondos bibliográficos españoles. Las bibliotecas eran de dos tipos, las generales universitarias y las de los departamentos, seminarios, cátedras y lectorados que sostenían las enseñanzas propias del hispanismo. A esta actividad de reponer las bibliotecas de los Centros eclesiásticos se adhirió el Consejo Superior de Misiones. La diversidad de estos centros hizo que los envíos de lotes bibliográficos fuesen muy variados. Así los nuevos envíos para la atención más modesta de los lectorados englobaba entre 400 y 600 títulos representativos de la historia del pensamiento español, estudios de carácter histórico, obras de carácter didáctico para la enseñanza de la lengua y la literatura, guardándose especial cuidado en que figurasen en tales bibliotecas las obras más recientes publicadas por el CSIC.

Los fondos iniciales de estas bibliotecas rondaban entre 4.000 y 5.000 títulos. La mayor parte procedían de las “Exposiciones del Libro Español Contemporáneo”, iniciativa realizada por la Junta de Relaciones Culturales en colaboración con los centros extranjeros y de autores también extranjeros. España donaba los libros a estos centros, no los depositaba.

---

<sup>187</sup> ROMERO DE TERREROS CASTILLA, J. M. y JEVENOIS ARCILLONA, P. de, La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1946-1996, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1996, pp. 92-99

<sup>188</sup> BORRÁS PRIM, R. “La política cultural” en *El nuevo estado español 1936-1963*, pp. 609-626



Y en cuanto a las exposiciones, el INLE organizó para 1945 una Exposición del Libro Español Contemporáneo en Lisboa, publicando el Catálogo con los materiales aportados, como prueba del renacer del arte tipográfico y de la actitud científica. A raíz de esta manifestación se proyectó realizar otras en grandes ciudades europeas.

La primera de las Exposiciones del Libro Español Contemporáneo se celebró en Montevideo. Al término de 1947 se celebraron por orden cronológico en Buenos Aires, Santiago de Chile, La Habana, Washington, Roma, Zúrich, Gotemburgo y La Haya hasta alcanzar el número de 40. No eran exposiciones viajeras, sino que los libros remitidos para cada Exposición se quedaban en el país donde se celebraron y en términos generales constituían los núcleos bibliográficos iniciales de las bibliotecas.

El resultado de esta política de difusión del pensamiento español a través del libro español contemporáneo fue, en términos generales encomiable, si se tiene en cuenta la exigüidad de medios. La difusión se estableció con cierta intensidad y de modo constante. De la Dirección General de Relaciones Culturales llegaron a depender directamente múltiples bibliotecas ubicadas en 35 ciudades de todos los continentes.

Las asignaciones presupuestarias para la partida “Difusión de la cultura española” englobaba: la adquisición de libros y folletos, suscripciones a revistas, publicaciones y ediciones, discos fonográficos, mapas y otros análogos, y gastos de encuadernación, embalaje y envío al extranjero<sup>189</sup>. Si se comparan con los presupuestos de la Junta, que abastecía de libros a todas las Bibliotecas Públicas del Estado, es fácil deducir el interés del Régimen por el lavado de imagen a través de la política cultural y del libro.

La Junta tuvo un presupuesto de 1.900.000 pesetas en 1947 y 1948, mientras que para esta partida de “Difusión de la cultura española” se asignaron esos mismos años 2.500.000 pesetas.

La formación de depósitos de libros en diferentes capitales americanas fue uno de los temas planteados con carácter urgente en el Acta de las sesiones de la Comisión julio 1945 para salir de la precaria situación arrastrada en años precedentes<sup>190</sup>. Así en dicha acta se recoge que se cursó un telegrama a las representaciones diplomáticas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, junto a los Cónsules en San Pablo y Montreal, para recabar datos sobre los libreros que ofreciesen garantías suficientes para recibir los depósitos y encargarse de su venta.

Mientras la Comisión Permanente de la JRC estableció el procedimiento de pago de las ventas de libros y efectuó una clasificación de los fondos de los depósitos según el descuento aplicado a cada remesa, contemplándose una rebaja del 50% a favor de los libreros en las obras de contenido propagandístico, al INLE se le encomendó la selección de las obras que compondrían dichos depósitos, acordándose la publicación de catálogos que serían repartidos gratuitamente entre los interesados. El CSIC también contribuyó a esta política concediendo un descuento del 50% en las adquisiciones de sus libros efectuadas por la Junta de Relaciones Culturales. Como norma general los depósitos se hacían por el plazo de un año, bajo la fiscalización de los Consulados. Buen número de los destinatarios de las donaciones fueron centros o personalidades religiosas que desempeñaban su labor en el continente americano.

---

<sup>189</sup> La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1946-1996 / (coord.) Pablo de Jevenois ; dirección de la edición, Juan M. Romero de Terreros, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1996, pp. 92-99

<sup>190</sup> Datos que aporta Lorenzo Delgado

En este terreno se pusieron de relieve las fricciones existentes con la Vicesecretaría de Educación Popular, cuya actitud restrictiva ante la importación de libros procedentes de América dificultaba la buena marcha de la iniciativa, llegando a ocasionar grandes perjuicios a las relaciones culturales hispano-americanas y, especialmente, en la venta del libro español. Para atajar esos inconvenientes se propuso requerir la mediación del Ministerio de AA.EE ante la Vicesecretaría de Educación Popular.

Dentro de la política cultural exterior, merece una mención especial la preocupación por la difusión del libro español y la protección intelectual en América Latina.

La reivindicación de un imperio hispano espiritual fue una idea irrenunciable para la política y la diplomacia cultural y no fue algo distintivo del régimen franquista. Los gobiernos españoles tras la pérdida de las últimas colonias aspiraron a recobrar el ascendente cultural en las repúblicas latinoamericanas. Fue una idea profundamente arraigada en la mentalidad colectiva española el que los países del otro lado del Atlántico y su antigua metrópoli colonial formaban una comunidad cultural que, al margen de factores de índole económica o política permitiría restaurar la identidad esencial que compartían los diferentes pueblos de similar raíz hispánica.

Ya en el curso del XIX, tras el proceso de emancipación de la mayor parte de los territorios del imperio español en América, habían tenido eco en la península los defensores de un estrechamiento de los vínculos a partir del incremento de las relaciones culturales. Además la supremacía material de la civilización anglosajona era percibida como un peligro para los valores sociales y las señas de identidad culturales de la civilización hispánica.

Frente a la expansión militar por África que acaparaba la atención de la política exterior española consumiendo recursos materiales y humanos, la proyección hacia América Latina representó una opción alternativa para la orientación internacional del país que a su vez, servía para incentivar la propia regeneración interior. La promoción y el fortalecimiento de la identidad cultural común de la colectividad hispanoamericana se veían como un medio de superar el decaimiento interior y exterior que arrastraba España desde hacía tiempo, como un revulsivo moral para generar una nueva conciencia nacional que la sacara de la postración.

Se hablaba de conquista espiritual de América por medio del libro y de las artes gráficas, de que el libro debía ser el embajador de la cultura nacional en el extranjero. Idea que generó toda una doctrina en torno a la presencia cultural de España en América Latina a través del libro, reivindicándose a España como la única productora a gran escala de libros entre las naciones hispanohablantes<sup>191</sup>. Idea documentada desde comienzos del siglo XX:

“Una vez alcanzada la independencia, hay que realizar la fusión espiritual de España con sus hijas de allende el Atlántico. Esto no se ha cumplido y nos vemos en las naciones hispanoamericanas postergadas al influjo de otros pueblos europeos a través del libro, incluso hasta en la lengua. Urge que nosotros opongamos pronto y eficazmente a la creciente invasión extranjera, nuestros productos y nuestras ideas como el mejor lazo de unión. El principal lazo de unión está en el libro, verdadero vehículo de la cultura y en el orden material representa una importante industria”<sup>192</sup>

Durante el primer tercio del s. XX España firmó varios acuerdos para la protección de los derechos de autor en varios países americanos para hacer frente a las ediciones piratas (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Perú). Tras estos

---

<sup>191</sup> Fernando Larraz. “Una historia transatlántica del libro”, Gijón: Trea, 2010, p.24

<sup>192</sup> “La conquista espiritual de América por medio del libro y de las artes gráficas” Documento sin firma ni fecha, probablemente de 192? Archivo Biblioteca de Cataluña. Fondo Bergnes de las Casas. C. 146

acuerdos latía la preocupación por el mercado del libro español en América, donde existía una fuerte competencia de las publicaciones en castellano editadas en Francia, Alemania y EE.UU. Pero la realidad es que no fueron muy efectivos porque se careció tanto de mecanismos que respaldasen su efectivo cumplimiento como de personal encargado de su cumplimiento.

Hablando de política exterior cultural en América y su relación con el libro, es inexcusable citar el convenio cultural que el Estado español firmó con Argentina el 7 de septiembre de 1942, ampliado posteriormente en abril del año siguiente. Su artículo 5 estaba dedicado al libro, aunque se ceñía exclusivamente a la eliminación de trabas al comercio editorial entre ambos países<sup>193</sup>.

A medida que la situación exterior acabó regularizándose y las críticas al régimen se atenuaron, la aportación política –y económica– de la acción cultural fue perdiendo importancia y dejó de ser relevante.

### 3. EL LIBRO AUTÁRQUICO E INTERVENIDO

El nuevo modelo económico que instauró la dictadura en la década de los 40 y 50 fue obra de ingenieros y militares y se basó en dos principios: la autarquía y el intervencionismo. Hay que dejar claro que esta política económica, en ningún caso, fue forzada por los acontecimientos exteriores.

La autarquía se caracterizó por una confusa y contradictoria agrupación de objetivos a conseguir, todos ellos enmarcados en un rechazo visceral y poco meditado de la ayuda exterior: intensificación del nacionalismo económico, optimismo ilimitado en los recursos propios, industrialización sustitutiva de importaciones –al margen de su coste– equilibrio de la balanza de pagos e incluso superávit, al que se oponía un tipo de cambio sobrevaluado<sup>194</sup>.

El intervencionismo fue el segundo eje, ejemplarizado en medidas como el control sobre la implantación de nuevas empresas o la apuesta por unos sectores industriales en detrimento de otros; la regulación de la actividad privada; el control sobre las divisas y el establecimiento de un tipo de cambio para la peseta sin ninguna relación con su valor real en el mercado; el racionamiento y suministro de recursos energéticos y materias primas a las empresas o las políticas de control de los precios.

Concretamente la política industrial estuvo marcada por la intervención del Estado, tanto de forma directa, mediante la actuación de la empresas públicas, como a través de la regulación, a veces exhaustiva de la actividad privada, ya que se consideraba que el sistema de libre mercado no era adecuado para asignar los recursos de acuerdo con las necesidades nacionales y que la iniciativa privada resultaba ineficiente. Además ignorando las interrelaciones económicas más básicas, con una mentalidad ingenieril, se establecieron como objetivos prioritarios el incremento de la producción y el pleno aprovechamiento de los recursos nacionales, sin tener en cuenta los costes<sup>195</sup>.

---

<sup>193</sup> Ver Fernando Larraz. “Una historia transatlántica del libro”, Gijón: Trea, 2010, pp. 160-163

<sup>194</sup> VELASCO MURVIERO, Carlos. El pensamiento autárquico español como directriz de la política económica (1936-1951). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982 (tesis), pp. 157-169

<sup>195</sup> MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. *El fracaso de la industrialización autárquica*, pp. En: BARCIELA, C. Autarquía y mercado negro : el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, Barcelona, Crítica, 2003

Los problemas para el abastecimiento de materias primas y energía en un entorno donde se limitaba la competencia y se multiplicaban las trabas para renovar el equipamiento productivo no favorecieron el desarrollo de la inversión industrial a largo plazo ni la introducción de innovaciones por parte de las empresas. Además, la escasez de las materias más esenciales hizo que las fábricas produjesen muy por debajo de su capacidad, lo que trajo consigo una caída de la productividad, a la que también contribuyó la desaparición de mano de obra formada y el profundo retroceso de los salarios reales, con lo que al reducirse los costes salariales, las empresas se inclinaron a aumentar sus plantillas más que a invertir en maquinaria.

Las industrias vinculadas a la defensa fueron las que disfrutaron de mayores privilegios para poder realizar importaciones, obtener materias primas, energía y bienes de equipo, y conseguir autorización para nuevas inversiones. Con las Leyes de Protección de las Nuevas Industrias de Interés Nacional y de Ordenación y Defensa de la Industria, promulgadas en el otoño del 39, y la Ley de creación de INI en septiembre de 1941, el Estado se dotó de una amplia capacidad de control sobre la iniciativa privada en la industria y con el INI de un instrumento para intervenir directamente como empresario en la producción. A cambio del control el Estado ofrecía múltiples ventajas a las empresas de interés nacional –privilegios fiscales, menores aranceles en la importación de bienes de equipo-. La capacidad del Ministerio de Industria y Comercio para autorizar o denegar el establecimiento de nuevas industrias restringió el impulso de las nuevas iniciativas empresariales pudiendo orientar las inversiones privadas a unos sectores en perjuicio de otros. Entre las industrias que mayor apoyo estatal obtuvieron no estuvieron ni las industrias gráficas, ni las empresas editoriales, y respecto a las papeleras se siguió permitiendo las prácticas monopolistas en beneficio de La Papelera Española.

La política comercial también se caracterizó por un radical intervencionismo, con la aplicación de estrictos controles directos tanto sobre los intercambios como sobre los pagos. Fue una política orientada a impulsar la sustitución de importaciones y se vio muy condicionada por la permanente insuficiencia de medios de pago. Corregir el desequilibrio en la balanza de mercancías se convirtió en una verdadera obsesión para las autoridades económicas del régimen y hasta para el mismo Franco.

Las exportaciones estuvieron sujetas a la necesidad de licencia previa, concedida por los organismos burocráticos competentes. Su evolución se vio seriamente perjudicada por la política de tipo de cambio vigente, que fijó el valor oficial de la moneda prescindiendo por completo del mercado, sin atender a que el diferencial de inflación entre España y sus principales socios comerciales convertía el mantenimiento del tipo de cambio en una auténtica revaluación. Al obstinarse en sostener el cambio por encima de la cotización de la peseta en el mercado internacional, las autoridades franquistas acentuaron el desequilibrio exterior de la economía española, ya que no sólo se restaba competitividad a las exportaciones, sino que también se estimulaban las importaciones y la evasión de divisas. La sobrevaloración de la peseta fue una más de las múltiples contradicciones de la política autárquica. En general, el conjunto del entramado intervencionista se caracterizó por su descoordinación e ineficacia.

A pesar de la política de sustitución de importaciones, la economía española siguió dependiendo estrechamente del exterior para el abastecimiento de carburantes, bienes de equipo y materias primas.

Para hacer frente al crecimiento de las compras en el exterior, resultaba imprescindible impulsar todas las actividades que proporcionaban divisas y de manera especial la exportación, ya que las importaciones dependían estrechamente de los medios de pago proporcionados por las exportaciones. Como no se quiso devaluar la peseta, se recurrió a la concesión de primas y compensaciones y a otros mecanismos de estímulo artificial de las ventas al exterior que favorecieron las prácticas especulativas y las presiones sobre la Administración. Entre las medidas tomadas en esta línea estuvo la creación del sistema de cuentas combinadas, que permitía a las empresas exportadoras reservarse una parte de las divisas para dedicarla a la importación de *inputs* utilizados en su proceso productivo. Este sistema permitió paliar la grave escasez de materias primas e incentivó las exportaciones, pero a costa de incrementar la especulación<sup>196</sup>.

Los cambios múltiples<sup>197</sup> contribuyeron a contrarrestar parcialmente la sobrevaloración de la divisa española, pero aumentaron la intervención administrativa sobre el comercio exterior e introdujeron nuevas distorsiones en la actividad económica. La maraña de tipos de cambio hizo más complejas las relaciones comerciales con el exterior, favoreció a unos sectores por encima de otros y convirtió la influencia que sobre la Administración se tuviese en un factor más importante para la rentabilidad de las empresas que su propia eficiencia y competitividad.

A pesar de estas medidas, la recuperación de las exportaciones fue muy débil y persistió el profundo desequilibrio en la balanza comercial. Lo que evitó realmente el colapso de la economía española en el periodo de aislamiento fue el comercio con Argentina y el crédito concedido por este país.

Todas las competencias en materia de divisas fueron atribuidas al Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), sustrayéndoselas al Banco de España. El IEME instituyó un férreo control de las divisas y estableció un tipo de cambio para la peseta sin ningún tipo de relación con su valor real en el mercado, sobrevalorándola, lo que llevó al encarecimiento de las exportaciones y a una espectacular subida de los precios en el mercado negro.

Las características fundamentales del control de cambios fueron la inconvertibilidad interna y externa de la peseta y una regulación muy estricta de las transacciones exteriores. Con este sistema se pretendía discriminar las exportaciones en las que se creía tener ventajas decisivas con tipos sobrevalorados, a modo de impuestos, mientras se fomentaba el desarrollo de otras aplicando tipos más bajos; se castigaban las salidas de capital; se favorecían importaciones estratégicas, como las de alimentos, maquinaria o materias primas, y se obstaculizaban las de otros productos, como los bienes de lujo, discriminando sus tipos. La manipulación del tipo de cambio permitió a los grupos de presión utilizar el argumento del agravio comparativo, lo que se tradujo en nuevas complejidades, arbitrariedades y pretendidas compensaciones que aumentaron la complicación del sistema.

Las reformas tributarias de la autarquía<sup>198</sup> llevadas a cabo por el Ministro Larraz en 1940 afectaron a la generalidad de los tributos, elevando los tipos impositivos de casi todos ellos.

---

<sup>196</sup> BARCIELA, C. La España de Franco (1939-1975). Economía. Madrid, Síntesis, 2005

<sup>197</sup> En 1948 se creó un sistema de cambios múltiples para la peseta que perduró hasta 1957. En este sistema la moneda tenía un valor diferente en función de la mercancía intercambiada, del carácter de importación o exportación del flujo de la balanza de pagos a que pertenecía la operación con el exterior.

<sup>198</sup> BARCIELA, Carlos. Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer Franquismo, 1939-1959, Barcelona: Crítica, 2003

Extendió la imposición de consumos a muchos artículos y retocó la imposición personal, ampliando el impuesto de sociedades (que incluyó a las empresas familiares) y rebajando el mínimo exento del impuesto complementario sobre la renta. La principal medida de la reforma de Larraz fue la creación de la Contribución de usos y consumos, que permitió incrementar la recaudación indirecta, pero que su resultado fue decepcionante, pues no fue una contribución unitaria, ni recaía sobre los “usos y consumos”. Se trataba, por el contrario, de un complejo conjunto de impuestos que adolecía de graves defectos técnicos, pues los gravámenes recaían sobre diversos artículos específicos, con tratamientos y tipos diferenciados, distorsionando los precios de mercado. Además gravaba los factores productivos, encareciendo los costes de producción de las empresas, y dificultaba enormemente las exportaciones, pues no permitía la devolución del tributo pagado, cuando los productos se exportaban.

Estas grandes líneas de la política económica también repercutieron en la industria del libro visibilizándose en aspectos como la apuesta por el esparto y otras plantas nacionales para fabricar papel sin tener en cuenta sus costes; las exportaciones de libros se vieron seriamente perjudicadas a causa del control sobre las divisas; el papel se racionó y suministró por el estado mediante el sistema de cupos, y por último, el régimen no favoreció a las industrias de bienes de consumo como era la industria del libro.

A continuación se analiza más detenidamente cómo afectó la política autárquica e intervencionista a los distintos sectores económicos que terciaban en la producción editorial.

### **3.1. EL PAPEL Y LA GESTIÓN DE LOS CUPOS**

La industria papelera española no se desarrolló sobre bases sólidas por varios motivos. Primero, España al ser un país desforestado carecía de madera, lo que le llevó a recurrir a la importación de pastas de los países bálticos, cuyos precios eran más bajos que si se fabricaban en España, y en segundo lugar, porque la explotación de la celulosa requería instalar complejas instalaciones técnicas que no parecieron despertar el interés nacional.

Por ello, España para lograr pastas baratas y en cantidad suficiente para atender las necesidades de consumo tuvo que recurrir a la importación de pastas de los países bálticos. Importación que se interrumpió durante la guerra civil, pero al reanudarse con el fin de ésta, inmediatamente se declara la guerra mundial, y los países productores de papel y de pastas disminuyeron notablemente su producción (Suecia, Noruega, Finlandia), y como consecuencia, aumentaron los precios. Pese a ello, tomando el tipo de papel corriente de edición, el papel de impresión de origen sueco costaba 225 pesetas los 100 kilos, mientras que el cíceros corriente español, apto para ediciones, rondaba las 335 pesetas por 100 kilo; lo que suponía un 54% más caro. Otro elemento que dificultó y limitó las importaciones de pastas fue la escasa disponibilidad de divisas de la economía española.

Ante la escasez y encarecimiento del papel y en consonancia con los principios de la economía autárquica de alcanzar la autosuficiencia con los recursos propios, se comienzan a explotar las celulosas propias con el objeto de crear una industria nacional que satisficiera las necesidades culturales.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> GAY de MONTELLA, R. Autarquía: nuevas orientaciones de la economía, 1940

Antes de 1936 ya hubo intentos y realizaciones encaminados a sondear este problema con el esparto andaluz y de Zaragoza, el cañete en la Albufera de Alcudia, el eucaliptus en Huelva, las pajas de trigo de Zaragoza y de arroz en Valencia o el *pinus insignis* de Guipúzcoa<sup>200</sup>.

El jurista y abogado catalán Rafael Gay de Montella<sup>201</sup> en su obra sobre la autarquía al hablar de la industria del papel enumeraba un gran número de plantas de crecimiento anual que podían sustituir las exportaciones: las pajas de trigo, centeno, arroz, con el cáñamo y lino, la caña y el cañete, el esparto, la retama y el palmito, y con los árboles de crecimiento más lento como el eucaliptus, las variedades de pino y pinabete y las de álamo, además de los recursos forestales de Guinea española, especialmente los árboles de maderas como el palo palomero, la ceiba y el bambú.

También se tuvieron en cuenta otros recursos como la reutilización de los desperdicios de fibra corta de la industria de las maderas, pero en cambio apenas se asumieron medidas dirigidas a la ordenación y el incremento de la masa forestal como las que recomendó el ingeniero Jaime de Ilurdoz en el informe que elaboró para el Comité Sindical del Papel y Cartón<sup>202</sup> donde proponía un plan de repoblación forestal de especies capaces de proporcionar materia a la industria papelera. En concreto, el *Pinus insignis* y el *Pinus pinaster* desde Galicia hasta el Bidasoa y plantaciones de eucaliptus en las provincias de Santander y el litoral andaluz. Advirtiendo de que para el sostenimiento autárquico de una pequeña fábrica de celulosa se precisaban concentraciones de masas forestales adecuadas del orden de 12.000 hectáreas como mínimo, con fáciles vías de extracción, y que mientras se desarrollara la repoblación se debía continuar con las importaciones y proteger a los fabricantes con medidas como la exención de derechos de aduana para la maquinaria que necesitaban importar por no ser posible su construcción en España y con tarifas de ferrocarril reducidas para el transporte de pajas y pastas de producción nacional. Y muy acertadamente, sugería que se prohibiese establecer nuevas fábricas de papel mientras las actuales no trabajasen a pleno rendimiento y con un régimen de abastecimiento garantizado, y que los nuevos capitales que se interesasen por esta industria, se los orientara hacia la fabricación de celulosa y no a la del papel.

De entre todas las materias nacionales útiles para la obtención de celulosa, la especie que generó más ensayos y expectativas de aprovechamiento como sustitutivo de la pasta de papel fue el esparto (*Sparteum junceum*)<sup>203</sup>. Especie abundantísima en Cataluña y Baleares, y de la que se podía conseguir un volumen considerable de celulosa o pasta blanqueada para papel, cuyo rendimiento oscilaba alrededor de un 35% del peso de la planta seca, siendo al mismo tiempo su tratamiento el más conocido por el industrial español.

Las estadísticas oficiales sobre producción de esparto (1942?), falsamente optimistas, hicieron suponer en un principio que la solución total del problema de la autarquía papelera podía basarse en el debido aprovechamiento de esta planta<sup>204</sup> incluso se llegó a pensar en aumentar

---

<sup>200</sup> BERGADÁ GIRONA, L. *Las celulosas como materia prima, especialmente en la industria del papel* (1940), pp. 549-557

<sup>201</sup> GAY de MONTELLA, R. *Autarquía: nuevas orientaciones de la economía*, 1940

<sup>202</sup> Informe de Jaime de Ilurdoz con fecha 1 /12/1939. Archivo BUC-Javier Lasso de la Vega. Caja 2

<sup>203</sup> A. de S. "Los papeles de esparto nacionales y al industria editorial", *Bibliografía hispánica*, núm. 1, 1943, pp. 21-30

<sup>204</sup> "Estudio sobre el esparto papelero", *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1942, nº 1, pp. 12-15

la producción. Estas falsas estadísticas indujeron al Estado al lamentable error de autorizar sin limitación estas instalaciones, instalaciones que llegaron a tener una capacidad de consumo de unas 160.000 toneladas, cifra más de tres veces superior a la producción real.

La Sección de Producción del Sindicato del Papel concienciada con el problema realizó un estudio sobre la situación de estas instalaciones de pasta a base de fibras nacionales, llegando a la conclusión de que se hubieran ahorrado costes en transportes y producido a más bajo precio edificándose fábricas grandes, exclusivamente de pastas, en zonas esparteras (Albacete, Almería, Granada,...) y no montando pequeñas instalaciones que resolvieran el problema particular de cada fábrica de papel. En segundo lugar que la subida del precio del esparto paplero –en 1936 era 86 pesetas la tonelada, en 1939, de 150 pesetas y en 1941, 500 pesetas- era en cierto modo ficticia, ya que no se debía exclusivamente al incremento en la demanda de la industria textil y papelera, sino a factores económicos como el aumento en el costo de los transportes, o la subida de jornales.

Por último, si la producción española de esparto en 1941 fue aproximadamente de 40.000 toneladas con esas 40.000 toneladas únicamente podían conseguirse unas 17.600 toneladas de pasta de esparto crudas y blanqueadas. Siendo las disponibilidades de esparto insuficientes para cubrir todas las atenciones del consumo, y produciendo esta materia prima pastas finas, pero de precios altos, era razonable destinarla únicamente a la fabricación de papeles finos.

En esta misma línea se manifestaba el articulista de *Bibliografía Hispánica*, publicación que en cierto modo representaba los intereses de editores y libreros<sup>205</sup>:

“Utilizar nuestros magníficos y caros espartos en hacer papeles baratos, es punto menos que imposible y antieconómico. La pasta química sueca se puede obtener a unas 1.000 pesetas, mientras la pasta elaborada a base de espartos en España, sale a unas 1.600. Preferible es vender el esparto y comprar pastas con su producto –tomando un cálculo hecho en 1939 se ofrecen los resultados siguientes: con 50.000 toneladas de esparto se pueden hacer 22.000 toneladas de pastas. Con el precio obtenido vendiéndolas a Inglaterra a los precios de dicho año se pueden adquirir 35.000 toneladas de pasta-.

Mejor sería destinar el esparto a la elaboración de papeles especiales y vender éstos después de elaborados, ya que por sus precios y las obras a que suelen destinarse no ofrecen posibilidades para ser absorbidas por nuestro mercado. Verdad es que para ello habría que perfeccionar mucho nuestra industria, que por ahora no logra fabricar con el esparto las clases y calidades que se fabricaban en el extranjero”.

Optimismo tecnológico y el desprecio por determinados conceptos económicos elementales llevaron al fracaso de proyectos, como la Sociedad Anónima de Industrias de la Paja de Arroz (SAIPA) dentro del marco del Plan Nacional de Fibras textiles Celulósicas que contemplaba como un subobjetivo producir 3.500 toneladas de pastas de papel y cartón al año. Pero esta factoría nunca salió adelante al igual que el Plan Nacional de Fibras textiles Celulósicas. Y la situación era igual de negativa en el caso de la celulosa destinada a la producción de papel,

---

<sup>205</sup> A. de S. “El mercado internacional del papel y los precios”, *Bibliografía Hispánica*, núm. 1, 1942, pp. 9-14



sector en el que habían proliferado peticiones de industrias de mínimas dimensiones que sólo podían sobrevivir en un régimen de intervencionismo<sup>206</sup>.

La insuficiencia de la producción de esparto para cubrir todas las necesidades de la industria papelera y el que las instalaciones pasteras tuvieran una capacidad de consumo superior a las disponibilidades existentes hizo necesaria la intervención.

Aquella se llevó a efecto mediante la Comisión Intersindical para la Distribución del Esparto<sup>207</sup> que había de encargarse de la función de compra y distribución del esparto. Se encomendó a la entidad Asociación Papelera<sup>208</sup> la realización de las operaciones de compra y distribución, habiendo de dar cuenta detallada de su gestión a la Comisión del Esparto. Se prohibió a los fabricantes la recepción de espartos sin previa autorización de la Comisión. Únicamente podían suministrar esparto a las fábricas paperas unos determinados almacenistas.

Pero la realidad es que los fabricantes no recibieron el esparto por medio de la Comisión y se mantuvo nominalmente la intervención, con lo cual todas las transacciones de esparto que se realizaban eran secretas y el fabricante, al adquirir clandestinamente la materia prima tenía que ocultar la producción.

Las razones que ocasionaron el fracaso de la intervención del esparto fueron expuestas claramente por la Asociación Papelera:

El ensayo que hizo la Sección del Papel del Sindicato de Industrias Químicas para regular la compra y distribución del esparto fracasó por dos causas: 1ª) por la exclusiva que se dio a un determinado número de almacenistas, pues al quedar al margen otros, no evitó las ventas clandestinas; 2ª) la falta de medios coercitivos que evitasen la recepción de esparto por las fábricas paperas al margen de la organización y 3ª) el precio a que había de comprar la Comisión no fuera para los esparteros suficientemente remunerador.

Por ello la Asociación Papelera considera necesario para la intervención del esparto la creación de una oficina única de compra del esparto papelero, bajo la tutela y control del Sindicato del Papel, reconociendo a éste de manera oficial como único organismo con personalidad legal para poder comprar el esparto papelero; y la prohibición a todas las fábricas de papel y cartón de adquirir esparto a persona, entidad u organismo distinto al que sea reconocido para ejercer tal función.

---

<sup>206</sup> RICO BOQUETE, E. "Autarquía e industria de la celulosa en España en el periodo 1939-1956", en: LANERO TÁBOAS, D.; FREIRE, D. (coord.) *Agriculturas e innovación tecnológica en la Península Ibérica: Portugal y España en perspectiva comparada (1946 – 1986)*, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2011, pp. 167-190.

<sup>207</sup> Por Orden de 6 de junio de 1942 se crea la Comisión Intersindical para la distribución del Esparto, a propuesta de los Sindicatos Nacionales Textil y del Papel para la distribución del esparto entre la industria textil y la papelera. Se determinarán de acuerdo con los Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, las zonas de producción de espartos textiles y paperos. Ambos sindicatos establecerán las normas necesarias para el funcionamiento, adquisición y distribución de los espartos correspondientes, que someterán a la aprobación de este Ministerio. Igualmente, darán cuenta mutuamente de las adquisiciones y distribuciones que realicen a fin de evitar el consumo de calidades que no correspondan a la industria que deba utilizarse.

<sup>208</sup> Por Real Decreto-Ley de 1928 se constituyó la *Asociación Papelera Española* con su filial *Consorcio de Fabricantes de Papel y Cartón*, la primera estableciendo precios venta según Regiones, y su filial aplicar un canon a tenor de producción y calidades procediendo a indemnizar máquinas obsoletas.

Lasso de la Vega, por su parte aportaba algunas posibles soluciones:

“Es necesario buscar en el salario del recolector espartero y el catastro de los campos destinados al cultivo del esparto, un precio regulador para éste, que impida los excesos que actualmente padece el mercado y que se corte con más atención la intervención abusiva de exportadores e intermediarios que han hecho sentir con un exceso de demanda desconsiderablemente los precios. Es necesario también suspender la exportación de esparto o someterla a contingentes de manera que no falte al mercado nacional”<sup>209</sup>.

Posteriormente se crea el Servicio del Esparto por Decreto conjunto del Ministerio de Industria y Comercio y de Agricultura el 2 de abril de 1948 con la intención de aprovechar, distribuir y utilizar racionalmente los recursos en esparto y albardín procedentes tanto de la producción del país como importados. Además de fijar los precios que debían regir en las distintas fases de su producción, transformación y consumo y adoptar medidas conducentes a lograr una mayor efectividad, así como la calificación de las entidades o personas que podían adquirir o comercializar el esparto.

El Servicio contaría con una Junta Asesora, de la que formaban parte el jefe nacional del Sindicato Nacional Textil y el del Papel.

Pero para el ámbito del papel en general, anteriormente se habían creado otras instituciones con la misma finalidad de centralizar y distribuir así como de fijar su precio. Primero fue el Comité Sindical del Papel y Cartón, que luego le sucederá la Rama del Papel dependiente de la Comisión Reguladora de Industrias Químicas. Del Comité y de la Comisión estuvo al frente la misma persona, el bibliotecario Javier Lasso de la Vega.

Por Orden de 15 de septiembre de 1937 se instituyó el Comité Sindical del Papel y Cartón, atribuyéndosele la facultad de entender en los problemas que se suscitasen en la fijación de los precios del papel entre fabricantes y consumidores, pero además centralizaba la distribución de las materias primas tanto nacionales como importadas; unificaba las ofertas de pasta de papel, teniendo en cuenta la cantidad, las conveniencias nacionales, el precio y la forma de pago, y de acuerdo con los principios de la economía autárquica, informaba a los órganos del estado sobre la utilización de substitutivos o elementos españoles como primeras materias.

En octubre de 1939 todavía seguía funcionando<sup>210</sup> y este es el balance que hace Javier Lasso de su corta historia<sup>211</sup>:

Desde que nos hicimos cargo de la Presidencia del Comité Sindical del Papel y Cartón hemos procurado, ser de todo punto consecuentes con la doctrina del Gobierno y las consignas del Caudillo, encaminadas a mantener los principios de la más pura justicia.

(...) El proceso a seguir ha consistido siempre en elaborar la norma, precio, resolución, dentro del sector industrial correspondiente, armonizando dentro de él los diferentes intereses, hasta llegar a una unidad de criterio. Sometiendo después esta norma a la aprobación de los Sectores

---

<sup>209</sup> Informe sobre el problema de la importación de pastas bálticas y la protección de la autarquía española (firmado por Javier Lasso de la Vega, enero 1941). Archivo BUC-Javier Lasso. Caja 2

<sup>210</sup> En el BOE de 30 de octubre de 1939 aparece una noticia relativa al aprovechamiento de los desperdicios para fabricar papel y cartón, con fecha de 11-10-1939, pero ¿hasta cuándo funcionó?

<sup>211</sup> Archivo BUC-Lasso de la Vega Caja 2. “Historia del Comité Sindical del Papel y el Cartón”, Madrid 12-09-1941

que por consumirla dependían de él, realizando así la armonía entre productor y consumidor y por último, llevando sus resultados a la aprobación del Pleno, en donde aparecen representados los indirectamente afectados por los acuerdos contraídos. (...) La celebración de plenos y reuniones de Secciones no ha sido observada por otros Comités, Comisiones Reguladoras y Sindicatos con la misma asiduidad que lo hemos hecho nosotros. (...) en nuestras reuniones los representantes son productores, profesionales y técnicos de la materia a tratar, nunca representantes ajenos a la función, ni al interés.

La ejecución de la distribución de las materias primas, tanto las importadas como las producidas en territorio español, el Comité se la encargó, otra vez, a la Asociación Papelera por disponer esta organización *de la experiencia y el personal competente necesario, los agentes y proveedores del extranjero, las estadísticas de producción y consumo, los precios y cotizaciones del mercado, pues la improvisación hubiera sido muy costosa e imposible*. Esta entidad, además, agrupaba y controlaba el 80% de la producción papelera.

El criterio para la distribución de materias primas y divisas fue que toda la industria no sancionada –por motivos políticos– se mantuviera a un mismo ritmo de fabricación proporcional a su capacidad y años anteriores al Glorioso Movimiento.

El Comité tuvo que lidiar en las violentas discusiones entre el sector central de fabricantes de papel agrupados bajo la Asociación Papelera y las papeleras libres llamadas catalanas. Éstas además cuestionaban los datos de importaciones de pastas presentados por el Comité.

También tuvo que hacer frente a las críticas al cierre por interés nacional de la Papelera del Oarso.<sup>212</sup>

Casi dos años después se crea la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas (Orden de 30 de octubre de 1939), con la intención de *reducir las importaciones y conseguir una autarquía que sirva para satisfacer por completo nuestras necesidades*. Dentro de la Subcomisión de la Industria Química Orgánica, y a su vez dentro de ésta dependiendo de la Sección de la Celulosa y Fotografía se crea la Rama del Papel, que sustituye al Comité Sindical del Papel, cuyos vocales representaban todos los sectores implicados en la fabricación y consumo de papel: DG de Industria, DG de Comercio y política arancelaria, DG de Agricultura, DG de Montes, DG de Archivos y Bibliotecas, fabricantes de papel, Delegación de Prensa y Propaganda y un representante de la prensa diaria. Por orden de 9 de diciembre de 1939 se nombró a Javier Lasso de la Vega Presidente de la Rama del Papel. Este organismo tuvo competencias hasta el 21 de noviembre de 1940, a partir de esa fecha pasarán al Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas.

Posteriormente la Sección del Papel del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas cogerá el testigo encargándose de:

---

<sup>212</sup> El criterio del Estado fue ahorrar la máxima cantidad posible de divisas, requeridas con angustia por las necesidades de la guerra. La Papelera del Oarso necesitaba para seguir produciendo papel prensa la importación de la pasta mecánica suficiente para su producción de 60 toneladas diarias. Las papeleras de Rentería (12.000) y Aranguren (4.500) estaban capacitadas para producir entre las dos 16.500 toneladas anuales de papel prensa sin necesidad de importar pasta mecánica. No era posible mantener en su ritmo normal de fabricación todas las fábricas. Estaba perfectamente justificado el cierre del Oarso y la aplicación de las fábricas de Rentería y Aranguren a la producción de papel prensa, tanto más, cuanto que durante aquellos primeros años de guerra, hubo madera en España suficiente para atender con holgura sus necesidades y por tanto no fue preciso invertir divisas en la importación de madera. (Archivo BUC-Lasso de la Vega Caja 2. “Historia del Comité Sindical del Papel y el Cartón”, Madrid 12-09-1941)

- Informar y asesorar sobre el aprovisionamiento de materias primas y su localización geográfica en los mercados nacionales y extranjeros y regularizar su producción y distribución.
- Estimular el aprovechamiento integral de las materias primas existentes en España y fomentar su obtención y utilización más adecuada en las industrias comprendidas en este sector.
- Estudiar la utilización de sustitutivos nacionales para aquellas materias primas que no se produzcan en España.
- Procurar el perfeccionamiento de las industrias de este sector y conocer los adelantos.

Entre las actuaciones del Sindicato en su primer año de existencia<sup>213</sup> (1942) hay que citar la elaboración de un mapa de la industria del papel en España en el que se ubicaron 160 fábricas distribuidas entre: Madrid, Cataluña, Región Valenciana, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla, Córdoba, Granada, Guadalajara, Segovia y Burgos y con arreglo a la producción de las mismas acordó la distribución de papel intervenido sujeto a cupo.

Ante la situación provocada por la guerra mundial, el Sindicato dirigirá sus esfuerzos hacia la obtención de materias primas alternativas, bien a través del estudio sobre la producción, recogida y distribución a las fábricas papeleras de los desperdicios de papel y trapos, bien a través de la reutilización del papel escrito, impreso o usado. Analizó el comercio exterior, descoyuntado por la guerra, enumerando todas las dificultades que le afectaban como la crisis de producción y de disponibilidades de los países abastecedores, el alza en los precios de las materias y de los transportes. Además de la lentitud en muchos casos de las tramitaciones oficiales, la carencia de materiales estadísticos, escasez de personal y de utillaje del mismo Sindicato.

Un año después en el Pleno del Sindicato celebrado Játiva en 1943,<sup>214</sup> después de calificar como etapa heroica y gloriosa dentro del sector del papel aquella en la que los fabricantes crearon nueva maquinaria y utillaje para la transformación de la fibra nacional –espartos y trapos- en pastas llegando a rozar la autarquía, el Sindicato afirmaba que los problemas no estaban en la producción, sino en la falta de armonía entre la producción y el consumo, incluso iba más allá y hablaba de la necesidad de que desapareciese totalmente la anarquía que subsistía en la producción del papel.

*(...) para que volvamos a encuadrar debidamente a los fabricantes de papel por maquinaria, etc. en el sector que corresponda. Que cada uno obedezca disciplinariamente las órdenes emanadas del Sindicato en cuanto a producción, cantidad y calidad del papel. (...) Sólo de esta manera, guardando esta disciplina, el Sindicato puede estimular el consumo del papel en España, para que el Estado sea poderoso y tenga el papel necesario para la propaganda de sus órdenes y mandatos. Esta es la consigna “llegar a la autarquía, que dispongamos siempre de papel en cantidad suficiente para cubrir nuestras mínimas necesidades, para ello es preciso os sometáis a la mayor disciplina económica”.*

---

<sup>213</sup> “Nuestra labor realizada por el Sindicato desde su fundación”, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, nº 1, junio 1942, pp. 20-28

<sup>214</sup> “Pleno papelerero en Játiva. Conmemoración del Primer aniversario de la constitución del Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes Gráficas, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1943, marzo-abril, pp. 12-15

Posteriormente en el marco del III Consejo Sindical (1944)<sup>215</sup> en las conclusiones de la Ponencia dedicada a la “Producción de pasta y papel” se vuelve a insistir en la necesidad de conseguir la disciplina sindical de la industria del gremio y evitar las rivalidades económicas ocasionadas por la invasión de los campos de sus respectivas fabricaciones.

En dichas conclusiones también se recogía la necesidad de seguir importando pastas mientras no se llevase a cabo una repoblación regular y continua en el norte y noroeste de España con especies adecuadas y con bases económicas anexas para el transporte de la madera y para la fuerza hidráulica y térmica de las instalaciones y que dichas importaciones debían ser reguladas y ordenadas por el Sindicato, órgano idóneo para esta tarea ya que encuadra a todos los elementos del sector y actúa con objetividad absoluta sobre los intereses de los industriales.

Igualmente mencionaba como necesarios para la buena marcha de las industrias papeleras perfeccionar la calidad de la producción y favorecer el funcionamiento de las mismas con el abastecimiento de materias primas y de productos químicos complementarios resolviendo previamente las dificultades de los transportes. Y, por último, había que mejorar la formación profesional de los papeleros en todos los niveles profesionales. Creando cursos teórico-prácticos en las escuelas de Ingenieros Industriales; implantando en las zonas papeleras o en las mismas fábricas Escuelas de la Obra Nacional de Formación Profesional para los obreros manuales capacitándoles adecuadamente, además de mejorar la Escuela Nacional de Artes Gráficas que debía depender en su aspecto de orientación técnica, del Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes Gráficas. Una vez más vemos como el Sindicato reclama para sí competencias que teóricamente le pertenecían.

Esta reivindicación se vuelve a formular en 1952 en el marco del Primer Congreso Económico Sindical de la Industria Valenciana, por el Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas de esta provincia<sup>216</sup>:

*(...) la apremiante necesidad de la creación de escuelas donde se capacite debidamente en la técnica papelera, pues esta importante industria nacional, cada vez con mayores problemas que defender y resolver, precisa de técnicos bien preparados para que sostenga el rango que le corresponde por razones históricas. Por ser esta industria una de las pocas, o quizás la única, sin censo de parados y en la que la mayoría de las veces, para ocupar vacantes, ha de recurrirse a obreros sin previo conocimiento de los más elementales principios papeleros, es más urgente lo que se expone.*

Complementan los análisis anteriores el que realizan en 1947 todos los elementos involucrados en la producción de papel<sup>217</sup>:

Falta de coordinación de la política económica en la rama del papel; absorción de un porcentaje voluminoso de la producción para suministros oficiales; insuficiencia acentuada de las importaciones de pastas extranjeras y de productos de procedencia exterior; escasez de materias primas nacionales; escasez y carestía de los productos auxiliares de la producción

---

<sup>215</sup> “Ponencia 9ª. Papel, prensa y artes gráficas. Conclusiones. *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1945, pp. 5-7

<sup>216</sup> *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, febrero 1952, p. 7

<sup>217</sup> “Informe al Ministerio de Industria y Comercio”, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1948, p.12

papelera; desequilibrio entre los precios de coste y los de venta autorizados; repercusión en la circulación y comercio de los productos papeleros de la acción fiscalizadora.

La legislación también se hizo eco de la necesidad de garantizar a las industrias productoras de celulosa toda la materia prima necesaria para su producción, como quedó reflejado en el Decreto que permitía la importación, libre de derechos, de aquellas plantas necesarias para producir celulosa.

En 1950<sup>218</sup> parece que se inició una recuperación de la producción papelera que, por diversas causas, se había visto frenada durante 1948 y 1949. Las causas de la recuperación estuvieron ligadas en primer lugar a una demanda firme sobre un mercado estabilizado, y cada vez más libre de intervenciones y tasas, con unos precios remuneradores, y en segundo lugar, a unas favorables condiciones climatológicas que se tradujeron en una abundante producción de fibras vegetales y un suministro de energía eléctrica sin restricciones que permitió trabajar a las fábricas normalmente. Estos determinantes permitieron a las fábricas incrementar la producción de pastas nacionales en casi un 50% sobre el año anterior.

Dentro de las medidas intervencionistas que afectaron a la materia prima de los libros no podemos olvidarnos de la **gestión de los cupos de papel** tanto a imprentas como a editoriales que veremos más adelante.

Los sindicatos nacionales fueron los únicos autorizados para distribuir los cupos de papel entre almacenistas, tipógrafos y editores. Primero fue el Sindicato Nacional de Industrias Químicas, a través de la Rama del Papel, y luego el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas.

La Rama del Papel en base a sus competencias dictó normas<sup>219</sup> encaminadas a regular *una adecuada y justa distribución en el mercado interior de las materias primas, semimanufacturadas y productos elaborados, entre los sectores que de ella dependían en sus etapas de producción, transformación, venta y consumo*. Dicha regulación pretendía lograr que cada productor mantuviese su industria, comercio o consumo a un ritmo matemáticamente proporcional al que tuvo antes de 1939 en relación con las disponibilidades del momento; regular el consumo de manera que el déficit de la producción no perjudique las necesidades de primordial interés del estado; imprimir con menos calidad aprovechando al máximo el papel (reduciendo márgenes, letras más pequeñas,...) y por último, que las materias primas y los productos manufacturados se distribuyeran de manera tal que no apareciese un mercado paralelo al margen de oficialidad.

Pero la Rama del Papel se encontró con la falta de estadísticas y censos, con lo que tuvo que consagrar gran parte de su actividad en los meses que transcurrieron desde su constitución a la obtención de datos.

Para fijar los cupos se siguió un complejo sistema basado, en parte, en el informe que elaboró el ingeniero asesor Fernández Agudo por encargo de la Rama del Papel, con el objeto de que calculase un coeficiente total representativo de la capacidad de trabajo de las imprentas en esos momentos. Este ingeniero propuso que debía tomarse como primera base para determinar el cupo la media aritmética del consumo de papel habido en los años anteriores al Movimiento, llegando incluso a la declaración jurada del consumo antes de la República los que con el advenimiento de ésta hubiesen sido perjudicados. En el caso de que la maquinaria

---

<sup>218</sup> MEANL GABAS, A. "La producción pastera y papelera en 1951", *Boletín del Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráfica*, marzo 1952, p. 23

<sup>219</sup> Reglamento sobre distribución de papel (Madrid octubre 1940). Archivo BUC-fondo Lasso de la Vega. Caja 2

no fuera la misma, habría que modificar el número base antes determinado multiplicándolo por el coeficiente de maquinaria. En todas aquellas imprentas o talleres establecidos en zona nacional durante el Movimiento, se tomaba como número base la media aritmética de papel consumido durante la guerra.

Concretamente, para fijar los cupos se pidió a cada almacenista, impresor y editor, el envío de declaraciones juradas de consumo de papel entre los años 1933 y 1935. Con la suma de las cantidades declaradas en cada provincia, se fijó el coeficiente de cada una de ellas, tomando como base la suma total de todas las provincias. Todos los meses y en proporción a las existencias de que se disponía se procedía al reparto de los cupos a los sectores adscritos a la Rama, con arreglo a la producción por mes y de acuerdo con los coeficientes fijados.

Cuando la empresa editorial, librería o imprenta, por su matiz ideológico hubiese experimentado perjuicio durante la República, la media de consumo se tomaba de los años 1928, 1929 y 1930.

Para calcular el cupo de los tipógrafos, además del consumo de papel también se contabilizó el número de máquinas por si hubiera variado. Con fecha 11 de enero de 1940 la Cámara de Madrid remitió a la Rama del Papel 711 declaraciones juradas de consumo y maquinaria de manipuladores de papel procedentes de industriales de la jurisdicción de esa Cámara, y 323 de los de Barcelona, en total 1.034.

Las clases de papel que se repartirán por cupos a las imprentas, tenían que coincidir con las clases de papel que normalmente consumieron en los años 1933 a 35. Si almacenistas y tipógrafos no recibían los cupos asignados, debían proceder a reclamarlos en el más breve espacio posible por conducto de la Delegación Nacional de Sindicatos, expresando por escrito las razones en que se hubieren fundado para negárselo.

El cupo mensual adjudicado para cada almacenista o tipógrafo debía ser entregado dentro del mes en que se ordenaba. Toda duda, cuestión o diferencia sobre el precio del papel en relación con el señalado oficialmente en razón de peso, calidad y demás características, se debía consultar a la Rama del papel, teniendo capacidad para imponer sanciones en el caso que fuese necesario.

Los tipógrafos debían atender los suministros según el siguiente orden de preferencia cuando no pudiesen atender a todo: trabajos del Ejército, servicios públicos, atenciones del Estado, provincia y municipio, otros centros oficiales de interés nacional, comercio y exportación, industria y comercio, particulares.

Aquellos sectores que no tuviesen todavía coeficientes, podían solicitar, en forma de cupo, la parte de papel que les podía corresponder y podían ser atendidos en la medida de lo posible por los almacenistas de papel.

Pero este control sobre la distribución de la principal materia prima de los impresores no fue muy efectiva, pues dirigidas a la Cámara de Madrid se registraron numerosas quejas por no recibir los cupos asignados o por ser insuficientes las cantidades que se les asignaban lo que suponía tener el negocio paralizado, a lo que la Cámara siempre respondía que la resolución de esas solicitudes competía al Gremio de Impresores de la Delegación Nacional del Sindicato del Papel y Artes Gráficas como se acordó el 26 de octubre de 1940<sup>220</sup>.

---

<sup>220</sup> Queja transmitida por la Cámara a la Rama del Papel (26 febr. 1941) de un asociado de Cádiz que tiene parado el negocio por falta de papel, pues no ha recibido el 40% de papel clase C a cambio de los 3.500 kg que envió de papel viejo. Queja de la Imprenta “La Española” de Córdoba en relación a que los

La distribución del cupo de papel para editores, la inició y montó la Cámara Oficial del Libro de Madrid, y la tuvo a su cargo hasta que en diciembre de 1940 la Rama del Papel del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, determinó transferirla a su propia competencia aun cuando la misma función siguió siendo ejercitada por la Cámara Oficial del Libro de Barcelona con respecto a los editores en su zona. Ante esta situación la Cámara de Madrid reclamó que se la facultase como único organismo en tanto que no se constituyera el INLE.

Para la fijación de los cupos de papel editorial, además de los datos del consumo entre 1933 y 1935 se tuvo en cuenta la información sobre el capital social o el programa editorial a cumplir, variando además los criterios de consumo en función del tipo de editorial.

Concretamente la Rama del Papel estableció cuatro categorías de editores con un orden de preferencia. 1º Debía ser concedido cupo a todos los editores anteriores al Glorioso Movimiento Nacional; 2º a todos los editores de la Zona Nacional, que había hasta la fecha de terminación de la guerra (1 abril 1939); 3º a los nuevos editores que habían sido incluidos en los repartos y 4º se concede a los autores que antes del Movimiento editaban libros por su cuenta, justificando fecha, título, etc. Los restantes editores no tenían derecho a cupo<sup>221</sup>.

A las editoriales fundadas antes del Glorioso Movimiento Nacional se les solicitó la cifra de consumo de papel durante el trienio 1933 a 1935, se hizo el promedio anual y se analizaron los programas editoriales, y si éstos guardaban relación con el consumo de los años anteriores, se tomaba el promedio del consumo. Determinada esta cifra se clasificaban los editores en tres grupos: editores de libros escolares, editores exportadores y editores no exportadores.

Editores de libros escolares. En atención a la carencia de libros escolares, se mejoraba su cifra de consumo en un 50%. Por ejemplo al que tenía un promedio de 10.000 Kg anuales se le señaló 15.000 kg y esta cantidad servía como base.

Editores exportadores. La cantidad de papel exportado se multiplicaba por tres, poniendo como tope hasta el 40% de su consumo, y el producto se sumaba al total de su consumo. La razón de esta mejora estaba relacionada con la necesidad de que los editores exportadores repusieran sus fondos, y estuvieran en condiciones de reanudar sus exportaciones cuanto antes.

Editores no exportadores. A estos editores se les consideraba solamente el promedio de su consumo en los años 1933 a 1935. A los que editaban obras religiosas se les dio a escoger entre los consumos de los años 1928, 1929 y 1930, o los de los años 1933 a 1935.

**Editores creados en la zona nacional.** Se siguió igual sistema que en los anteriores pero considerando su consumo en los años 1937 y 1938.

**Editores creados con posterioridad.** Se les señaló la cifra con arreglo a los programas editoriales una vez establecidos éstos<sup>222</sup>.

---

10 kg de cupo mensual son insuficientes para poder defender su establecimiento industrial ya que tiene dos máquinas y dos obreros. (29 nov. 1940). Otra queja similar de impresor de Toro que se le ha concedido media resma (250 pliegos) de papel (5 dic. 1940). Archivo INLE Caja 37

<sup>221</sup> Documento firmado por el Secretario de la Cámara de Madrid, 23 julio 1940. Archivo INLE Caja 37

<sup>222</sup> Criterio y normas de distribución de papel y cartón, libros y demás materias dependientes de esta Rama y Reglamento entregado a la D.N.S. para el servicio de distribución de los mismos (6-12-1940, firmado por Lasso de la Vega). Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2



El papel editorial asignado cada mes por la Rama se repartía entre los editores proporcionalmente de acuerdo con las precedentes normas. Las cámaras de Madrid y Barcelona siguieron las mismas pautas salvo que la de Barcelona no analizó los programas editoriales de los editores antiguos, sino que reconocieron los promedios de consumo anual, ya que las editoriales de Barcelona, por ser casas de gran prestigio necesitaban reponerse, y ninguno conceptuaba que fuesen a reducir sus ediciones.

Pero en la asignación de cupos de papel editorial hubo dos grupos que generaron polémica: los autores-editores que editaron y vendieron obras antes del Movimiento y los nuevos editores.

Respecto a los autores-editores si demostraban que habían consumido papel entre 1933-1935, tenían derecho a que se les concediese un cupo. Entre estos hubo catedráticos, literatos, autores dramáticos, hombres de ciencia, que editaron sus propias obras, pero muchos no se dieron de alta en la contribución como autores de sus propias obras, y la Cámara al no formar parte de sus agremiados tampoco se ocupó de ellos. En consecuencia el Presidente de la Rama del Papel, tomó como criterio admitir el hecho del editor-autor si demostraban que en los años 1933-1935 estaban al corriente con la contribución (clase 5ª de la tarifa 2ª vigente R.O 23 mayo 1926 sobre contribución industrial que dispone “los autores que vendan obras en su domicilio... sin establecimiento abierto al público, tributarán por este epígrafe”) así como en la actualidad y sugirió que la Cámara en cumplimiento de su deber ejerciera su derecho a denunciar a la Hacienda a cuantos autores no hubiesen pagado la contribución en los años pasados<sup>223</sup>.

Inexplicablemente se produjo un incremento notable de nuevas editoriales a las que había que asignar cupos de papel cuando este escaseaba. En consecuencia la Cámara de Madrid sugirió que no se incluyeran en los cupos de papel las nuevas editoriales<sup>224</sup> y acordó excluir de participación en los cupos de papel a los editores dados de alta con posterioridad a la fecha de distribución del cupo del mes de abril de 1940<sup>225</sup>. Por su parte la Rama del Papel en reunión del Pleno Asesor celebrado el día 30 de octubre de 1940 acordó no conceder papel a los editores que se habían dado de alta después del 1º de abril de 1940 y a los editores de sus propias obras que habían causado alta con posterioridad al día 1º de septiembre del citado año<sup>226</sup>.

Los repartos de papel los realizaba la Cámara del Libro a través de la representación editorial, pero quién determinaba si la editorial era objeto de inclusión en cupo era Rama del Papel. Podía darse el caso que una vez concedida determinada cifra ésta se viera disminuida. Por ejemplo a la editorial S.A.E.T.A. para todo el año 1940 se le concedieron 25.000 kg, pero se le comunica que puede sufrir mermas de hasta un 50% del total, “dada la exigüidad de papel existente en nuestro mercado, salvo posible resolución del problema que esto crea, si la importación de pasta extranjera o la producción de pasta nacional aumentaron, en cuyo caso los porcentajes de descuento disminuirían proporcionalmente”. Lo mismo se comunica a la casa editorial Hijos de Antonio Pérez, especializada en libros para la primera enseñanza.

---

<sup>223</sup> “Concesión de cupo a los editores que antes del G.M.N. editaron obras propias”. Firma Lasso de la Vega, 3 octubre 1940. Archivo INLE Caja 37

<sup>224</sup> Documento mayo 1940. Archivo INLE. Caja 37

<sup>225</sup> Documento fecha 12 noviembre de 1940. Archivo INLE. Caja 37

<sup>226</sup> Normas para la distribución de cupos a los editores de España. Junio 1941, sin firmar. Archivo BUC. Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

Una vez concedido el cupo las editoriales tenían la obligación de: 1º que el papel concedido había de ser única y exclusivamente invertido en la edición de libros y por la editorial que la recibía; 2º al recibir el papel quedaba la editorial obligada a remitir inmediatamente a la Sección Papel una muestra del mismo indicando el número de resmas, peso por resma, precio por 100 Kg y la fecha del cupo a que correspondía; 3º. el último día de cada trimestre los editores debían remitir un estadillo duplicado de sus exportaciones durante el mismo, especificando el número de cajas y de paquetes, kilos, países de destino, forma de venta (en firme o con derecho de devolución) y valor en cada clase de divisas y en pesetas; 4º remitir mensualmente a la Sección Papel un ejemplar de cada una de las obras que se publicasen, luego los ejemplares se devolverían a sus editores<sup>227</sup>.

El editor debía declarar bajo juramento que los kilos de papel que la Cámara Oficial del Libro le asignaba para un mes determinado los destinaba para la impresión de tal libro y la tirada iba a ser de tantos ejemplares. Toda cesión a tercera persona del vale o del papel implicaba la adopción de medidas del máximo rigor.

Una vez concedido el cupo, el editor debía retirarlo de las oficinas de la Cámara, tal que un 15 de mes y presentarlo antes del día 20 en las fábricas de papel. Su caducidad se produciría sin derecho a reclamaciones de ningún género, en el caso de que se dejaran transcurrir dichos plazos. Trámite previo para la expedición del vale por la Cámara era la presentación de las hojas de censura, con una copia de la obra u obras cuya edición se proyectaba. Cada vale expedido conllevaba el pago de cinco pesetas por arancel de distribución. Los editores de provincias debían remitir dentro del plazo marcado, las hojas de censura, con su copia; y por giro postal o en sellos de Correos, los derechos de arancel. A vuelta de correo se les enviaba el vale y la hoja de censura original.

El precio debía abonarse al fabricante al precio oficial correspondiente al día primero del mes en que el cupo se adjudicaba, y no al vigente el día de la entrega. (15 octubre 1940)

En 1941 se aparta a la Cámara de gestionar los repartos, pasando al Sindicato, pero entonces la Delegación Nacional de Propaganda reivindicó que esta competencia debía ejercerla el INLE con este argumento<sup>228</sup>:

“Es un hecho que el Sindicato, corporación de tipo económico, no puede efectuar los repartos de las materias indispensables para la edición, cualquiera que sea su naturaleza e importancia, salvo en función de factores de tipo económico. Le faltan las colaboraciones, los antecedentes y los medios para hacer entrar en juego y valorar los factores espirituales. Ignora la orientación político-cultural del Estado.

El INLE, al contrario, se halla en posesión de todos los datos para llevar a la práctica el criterio de la Vicesecretaría para que se favorezca una labor editorial, cultural o políticamente merecedora de fomento y protección. Sucesor de las Cámaras guarda en su archivo datos económicos de las editoriales desde su fundación, posee sus catálogos y conoce a fondo su actividad y las características de su labor; está integrado por representantes de las instituciones culturales y académicas más importantes de la nación y está adscrito a la DNP y presidido por alguien que debe su nombramiento a la Vicesecretaría. De ahí que se reivindique como función para el INLE la distribución de los cupos.

---

<sup>227</sup> Instrucciones a los editores una vez recibidos los cupos de papel dadas por el Sindicato Nacional de las Industrias Químicas. Sección Papel, 26 marzo 1941. Archivo INLE. Caja 37

<sup>228</sup> Documento firmado por el Consejero Nacional en funciones de la DNP 8 julio 1942. AGA 21/1363

Al final se llega a un consenso fijándose las competencias del INLE en el reparto del papel a las editoriales como sigue:

1. Mensualmente el Sindicato comunicará al INLE oficialmente la cantidad de papel editorial que los fabricantes, por orden del Sindicato, han de poner a disposición de la industria editorial.
2. El INLE procederá a la fijación de los cupos editoriales comunicando a los editores y a los papeleros las respectivas asignaciones.
3. La fijación de cupos para las editoriales establecidas antes del 18 de julio se hará con arreglo al consumo de papel entre 1939 y 1936
4. Para los editores de libros religiosos se admitirán los datos de consumo y exportación anteriores a la proclamación de la República.
5. Para los editores establecidos durante la Guerra de Liberación se admitirán, según las posibilidades, el consumo y exportación durante la guerra o se les reconocerá un nº índice proporcionado a su capital conocido.
6. Para los editores matriculados con posterioridad a la terminación de la guerra se fijará un nº-índice proporcionado a su capital conocido.
7. Si los criterios de papel consumido y de libros exportados no es suficiente, el INLE completará la fórmula propuesta clasificando a las editoriales en tres grupos teniendo en cuenta el valor político, moral, científico, etc. de sus publicaciones y aumentando o rebajando el índice en la cuantía que resuelva.
8. A fin de favorecer la difusión de obras merecedoras de los premios José Antonio, F. Franco, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega,...el INLE les galardonará con un cupo de papel igual al consumido en la edición.
9. Independientemente del papel editorial que la Sección de Ediciones se reserva para las ediciones de alto interés nacional, cultural o político, el INLE reservará un 5% del papel editorial destinada a estimular o patrocinar la publicación de obras de urgente interés nacional.

Y para resolver los roces entre el Sindicato y la Delegación Nacional de Propaganda y que el problema político de la dirección espiritual del libro estuviera lo suficientemente garantizada, a la vez que el problema económico-sindical no sufriera lesión<sup>229</sup>, se acuerda que el día 20 de cada mes el Sindicato del Papel comunicará a la Delegación Nacional de Propaganda por escrito la cantidad de papel disponible para ser repartido entre los editores como cupo mensual. Ésta a su vez junto con un representante del Sindicato haría la distribución individualizada y comunicaría a los editores la distribución del cupo proporcionándoles un servicio de reclamaciones para solventar anomalías en la entrega del papel.

Ante la escasez de papel, la Rama premiaba al editor, impresor o manipulador que entregase recortes de papel o cartón procedentes de su industria y a cambio tenía derecho a recibir el 30% de la cantidad entregada en papel elaborado con dicho recorte. A este efecto se debía solicitar de la Rama del Papel la autorización correspondiente, indicando cantidad, almacén donde se ha realizado la entrega, valor, clase de trabajo a que se va a destinar el papel y justificante de que el recorte procede exclusivamente de su industria.

Pese a los principios de equidad y justicia en las actuaciones de la Rama del Papel o de transparencia que permitían a los interesados reclamar contra cualquier confusión en los censos o contra las declaraciones juradas que no se ajustasen a la verdad o la intervención de

---

<sup>229</sup> Documento firmado por el Secretario Nacional del Sindicato, Guillén-Salaya con fecha 11 nov.1942. AGA 21/1363

los papeles vendidos a precios fuera de tasas, al final el control sobre el acceso al papel y su precio dio paso primero a la libertad de su venta<sup>230</sup>:

De acuerdo con el informe emitido por el Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas y con el fin de incrementar el consumo del papel estimulando al mismo tiempo a los fabricantes al mejoramiento de sus calidades ha resuelto el Ministerio de Industria y Comercio Dejar en régimen de libertad de venta el papel y cartón en sus diferentes calidades pudiendo concertarse libremente operaciones entre fabricantes, almacenistas y consumidores. A excepción del papel prensa y revistas. Los consumidores podrán pasar pedidos superiores a 500 kg de un solo tipo, a servir directamente de fábricas, debiendo ser estos pedidos informados por el Sindicato Nacional del Papel quién estudiará cada caso particular estando obligado entonces el fabricante que designe el consumidor a servir el papel directamente al precio autorizado en origen y sin ningún recargo de almacenista. El régimen de libertad de venta que es establece es según los precios máximos que tiene autorizados la Secretaría General Técnica de este Ministerio, pudiéndose concertarse operaciones a un precio inferior. Lo dispuesto no alterará las normas relativas a la obligación de los fabricantes de remitir al mismo los partes mensuales de fabricación.

Y en segundo lugar se liberó su precio<sup>231</sup>:

“Sucesivamente la situación del mercado papelerero ha ido variando con diversas alternativas, pero con una tendencia firme al incremento de la producción nacional debida a los esfuerzos realizados por las industrias para la fabricación en nuestra nación de una gran parte de las pastas necesarias para estos fines, contribuyendo con ello no sólo a resolver tan importante problema, sino también a revalorizar determinados productos agrícolas, como el esparto(...) En los momentos actuales se puede reputar como normal la situación del mercado papelerero en España, y parece llegada la ocasión de adoptar nuevas disposiciones, dando la mayor agilidad posible a las operaciones relacionadas con la producción y comercio del papel en todas sus clases, y adoptando al propio tiempo las necesarias garantías para seguir cubriendo las necesidades preferentes ya señaladas, tb para abastecer de papel la prensa periódica”. Se exceptúan de esta liberación el papel editorial protegido, que sigue regulado por la Ley de diciembre de 1946 y su legislación complementaria. Actualmente su cuantía se fija en 17.000 toneladas en total para todos los tipos, cantidad que podrá ser modificada por la Comisión Interministerial para la Protección del Libro Español.

### **3.2. LA INDUSTRIA PAPELERA**

Hasta aquí hemos visto las medidas y los instrumentos que crea el Nuevo Estado para hacer frente a la escasez y encarecimiento del papel, pero cuál fue la actuación de las papeleras.

Primero hagamos un breve repaso histórico del sector antes de situarnos en 1940, ya que la característica de monopolio de esta industria que hereda íntegramente el franquismo tiene sus orígenes a comienzos del XX.

El mercado papelerero español de finales del XIX<sup>232</sup> se distinguía del de otros países europeos por su debilidad y por su especial estructura. La dimensión y la estructura del sector papelerero español estuvo condicionado por una escasa demanda. La industria papelerera comenzó a modernizarse en la década de 1840 con la adopción de la tecnología continua. Sin embargo,

---

<sup>230</sup> 9 agosto 1943 (BOE 13 agosto 1943)

<sup>231</sup> Orden de 3 de octubre de 1951 sobre libertad de precios del papel en general y regulación del suministro del papel-prensa.

<sup>232</sup> GUTIÉRREZ POCH, Miquel, “Control de mercado y concentración empresarial: La Papelera Española, 1902-1936”, *Revista de Historia Industrial*, nº 10, 1996, pp. 183-199

hasta bien entrado el siglo XX, las máquinas modernas convivieron con los tradicionales molinos papeleros. Las nuevas fábricas se instalaron de forma relativamente dispersa, aunque se produjo una concentración en las inmediaciones de Madrid, Girona y Guipúzcoa. Hacia 1879 existían en España 48 máquinas continuas en funcionamiento distribuidas entre empresas que contaban con una sola fábrica y una sola máquina.

En las dos últimas décadas del siglo esta situación empezó a cambiar. El aumento de la demanda del papel prensa y la creciente articulación del mercado internacional de pasta fueron los factores de cambio. Se instalaron nuevas fábricas de mayores dimensiones con localización principal en Guipúzcoa y en Vizcaya. En Tolosa (Guipúzcoa) se instalaron cinco fábricas, núcleo futuro de la Papelera Española.

Pese a la presencia de estas nuevas instalaciones, la variabilidad y la estrechez del mercado siguieron siendo una realidad. La mayoría de las fábricas, para minimizar sus riesgos, se vieron obligadas a producir todo tipo de papel, con repercusiones en los costes. La estructura empresarial seguía siendo muy atomizada, sin un liderazgo. El súbito incremento de la capacidad productiva hizo aparecer los primeros indicios de saturación del mercado, pronto agravados por la creciente competencia foránea, con lo que el cierre y suspensiones de pagos empezaron a generalizarse.

Ante esta situación surgen intentos de establecer algún tipo de control sobre producciones y precios, pero los primeros acuerdos tuvieron muy poca utilidad práctica dada la atomización empresarial del sector. Además surgirán nuevas tensiones vinculadas a la sobreproducción ligada a la pérdida del mercado cubano.

En este contexto surgió un proyecto de crear una empresa que fuera el eje de la industria papelera española impulsado por Rafael Picavea y Nicolás M<sup>a</sup> Urgoiti. El acuerdo final se alcanzó en noviembre de 1901 con la fusión de diez empresas, llegando a controlar el 40% de la producción total, lo suficiente para regular el caótico mercado del papel y para articular a su alrededor un nuevo cártel que tuviera mayores garantías de estabilidad. El proyecto pretendió claramente la concentración tanto horizontal como vertical.

Cada máquina fue destinada a la elaboración de un solo producto con la finalidad de evitar los fuertes costes que ocasionaban los cambios de serie. Se crearon dos nuevos centros: uno en Rentería en 1912 y otro en el Prat de Llobregat en 1922. La empresa persiguió también mantener un cierto exceso de capacidad, lo que le permitía una respuesta flexible a una demanda que era siempre muy irregular.

La integración vertical abarcó tanto el abastecimiento de materias primas a través del acceso directo a los grandes productores escandinavos y así asegurarse un cierto grado de producción propia, como montar una red de almacenes para asegurarse el acceso directo al consumidor y poder aplicar tarifas más flexibles.

La competencia de nuevas fábricas y la debilidad de la demanda estuvieron a punto de dar al traste con “La Papelera Española” en los primeros años de su existencia. Pero a partir de 1914 se convertirá en un ejemplo de empresa que consiguió arrastrar al conjunto del sector a una política de disciplina comercial y de precios, y de aprovechamiento a fondo de una situación dominante en el mercado.

Llegados a 1935 este era el panorama nacional.<sup>233</sup> veinte eran las provincias con instalaciones papeleras que alcanzaban una capacidad de 270.685 Tm. La mayor era Guipúzcoa con 91.630

---

<sup>233</sup> BIELZA de ORY, Vicente. *Los focos españoles de producción papelera en el pasado: factores de localización.* -- Madrid: Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Española, 1973

Tm que representaba un tercio del total nacional. A continuación Barcelona con 74.155 Tm (27% del total nacional), Vizcaya con 25.380 Tm (9,3 %), Valencia, 24.675 Tm (9,1%). Con menos de 10.000 Tm, pero por encima de 300 Tm Alicante, Gerona, Córdoba, Zaragoza, Tarragona, Lérida y Navarra.

El foco papelerero vasco estaba a la cabeza de la producción nacional, al mismo tiempo que los papeleros de Cataluña y Levante experimentaron una remodelación y acercamiento a los puertos de Barcelona y Valencia.

Ante la escasez de pastas ocasionada por ambos conflictos<sup>234</sup>, primero el nacional y luego el internacional, la iniciativa privada española se lanzó a suplir con productos nacionales las importaciones, como vimos anteriormente, y el Ministerio de Industria y Comercio ejerció una labor rectora autorizando el establecimiento de nuevas industrias de este tipo, a pesar de las dificultades para traer del extranjero la maquinaria necesaria.

*En la actualidad han sido autorizadas, de acuerdo con estas normas, unas 14 nuevas fábricas de celulosa, y media docena de fábricas nuevas para producir pasta mecánica. Entre estas últimas merecen citarse, la de Illa y Compañía en Gerona, la de la Papelera Española en Prat de Llobregat, en Rentería. Las 14 fábricas autorizadas y creadas para la fabricación de pasta química, o sea celulosa, emplean como materias primas: el esparto, el palmito, el bagazo de la caña de azúcar, la retama, el cañizo, la paja de arroz, la paja de trigo y de otros cereales. Entre estas nuevas fábricas, se está construyendo una en Canarias que aprovechará el "rolo" de los plátanos.*

Con gran optimismo se afirmaba desde el Sindicato que *el día que estuvieran funcionando estas fábricas autorizadas el problema del papel no existirá, y habrá sido resuelto con nuestros propios medios, aprovechando las materias primas nacionales que antes del 18 de julio se perdían en baldíos, o se exportaban a precios irrisorios, para luego, una vez elaboradas por la mano de obra extraña, pagarlas España a precios muy altos. Además, contaremos con una industria papelerera automáticamente nacional.*

Las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Industria y Comercio, en lo que a celulosa se refieren, totalizaron una cantidad igual al consumo de España en la anteguerra; es decir, más de 100.000 toneladas de celulosa al año, según el articulista del Boletín del Sindicato. Y en cuanto a la pasta mecánica, se autorizó una producción del 30% de lo que importábamos.

Para el Sindicato<sup>235</sup> la organización de La Papelera Española estaba en plena sintonía con la organización sindical del Nuevo Estado y los principios de la autarquía, es decir, la producción de papel con materias primas propias así como su organización vertical del sector.

La Papelera Española englobaba fábricas de todo tipo de pastas: mecánica, con sus gigantescos desfibradores, en Rentería; semiquímica en Villava; las antiguas modernizadas de esparto en Arrigorriaga; las de trapo, en la propia fábrica; en Aranguren la moderna fábrica de pasta química por medio de madera, única en España, y en cuanto a la producción de papeles, La Papelera Española fabricaba todas las calidades conocidas.

Así, resultaba que autarquía y Papelera Española eran vocablos inseparables en el esfuerzo industrial español del papel. Otro de los orgullos de la compañía eran las grandes cantidades

---

<sup>234</sup> SANTOS ALCOCER "Hacia la autarquía nacional en la fabricación de papel", *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1942, nº 2, pp. 2-4

<sup>235</sup> "La Papelera Española y Guipúzcoa: desarrollo de una industria hacia la autarquía", *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1942, nº 2, pp. 6-7

de papel lanzados al mercado a precios módicos creando en España los grandes consumos papeleros, lo que llevó a un aumento de la prensa, se multiplicaron las editoriales, se difundió y abarató el libro y las exportaciones a América recuperaron los niveles de 1936.

Un tercer motivo de orgullo para La Papelera Española estaba constituido por todas aquellas entidades, satélites que colaboraron en la implantación autárquica. Talleres de maquinaria, fabricación de telas metálicas, fabricación de fieltros, manipulados de papel, etc.

Lo cierto es que las prácticas monopolistas del sector papelerero se heredan y se mantienen durante el franquismo. Afirmación que puede documentarse con las aportaciones, que el joven economista Juan Velarde Fuertes reunía en un artículo publicado en 1955<sup>236</sup>, advirtiéndonos de la carencia de datos, en parte por el interés de algunas empresas en desfigurar los que a ellas atañen. Enumeraba así las características del mercado papelerero: concentración de capital (el 22% de las empresas papeleras controlaba el 77% del capital), concentración de la producción, escasa afluencia de nuevas empresas, escasez del papel puesto a disposición del mercado, precios elevados, producción muy por debajo de la capacidad de las fábricas y defectuosa calidad del papel destinado al consumidor.

Características a las que no eran ajena La Papelera Española. Esta producía entre el 40 y el 30% del total de la producción; tenía importantes participaciones en otras sociedades, practicaba una decidida política de concentración vertical y horizontal y procuraba controlar tanto a las empresas dedicadas a la producción de papel, como todo el proceso industrial e incluso también pretendía regular el mercado. Por si fuera poco Juan Velarde, en base a los datos del Anuario Financiero, encontró conexiones entre la empresa papelerera y la Banca, y tras el análisis comparativo de las diferentes asociaciones papeleras, descubre no sólo el predominio en todas las entidades de La Papelera sino también de prácticas monopolísticas como la disminución de forma voluntaria de la oferta del papel, la restricción voluntaria de la afluencia de nuevas empresas o de la ampliación de las existentes, la fijación de precios mínimos y la vigilancia férrea para obligar a todos los fabricantes al cumplimiento de las normas de baja producción, altos precios y nula afluencia de nuevas entidades.

Consecuencia de estas prácticas fue un espectacular crecimiento y unos altos beneficios. Si La Papelera Española se constituyó en 1901 con un capital social de 20 millones de pesetas, en 1942 el capital escriturado se elevaba a 150 millones y en la Junta de 26 de abril de 1952 se autorizó al Consejo de Administración ampliar el capital en el plazo máximo de cinco años hasta los 255 millones.

Indudablemente estas prácticas económicas disgustaron a los industriales papeleros ante las excesivas atribuciones otorgadas por la Administración a la Papelera y además provocaron fricciones entre la Delegación Nacional de Sindicatos y la Asociación Papelera. Prueba de ello fue la negativa a la aprobación de una sociedad civil llamada “Asociación de Fabricantes de Papel de España” –calcada de la “Asociación Papelera”- pero dependiente del Sindicato del Papel, ya que, teóricamente, era la única organización con personalidad suficiente para la representación y disciplina de los interesados de la producción en esta rama de la economía. Frente a estos intentos de integración, que por el carácter público del Sindicato podrían dar al traste con los hábitos monopolísticos de la Asociación Papelera, ésta entidad argumentó ante el Tribunal Supremo que dada la tendencia del Estado hacia la concesión de una mayor libertad económica no tenía mucho sentido la integración con el Sindicato.

---

<sup>236</sup> VELARDE FUENTES, Juan. “Consideraciones sobre algunas actividades monopolísticas en el mercado papelerero español”, *Revista de Economía Política*, nº 14, sept.-dic. 1955, pp. 29-125

### 3.3. LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS

En tercer lugar tenemos que hablar de la industria gráfica. Para conocer su situación y evolución en esta década contamos con las informaciones reunidas en el *Boletín del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas* a modo de informes o artículos, las ponencias del III Congreso Nacional de las Artes Gráficas celebrado en Barcelona en 1950 y las memorias de la Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro.

El primer diagnóstico referido a este sector de la industria del libro, se incluyó dentro del informe que elaboró la Cámara del Libro de Barcelona a finales de 1939 teniendo como destinatario a Javier Lasso de la Vega<sup>237</sup>. En él se afirmaba que antes de producirse el Movimiento Nacional, la situación de la industria gráfica española era extremadamente crítica a causa de una política de atomización de los talleres de imprenta, la obsolescencia de la maquinaria y una competencia económica desastrosa derivada de la inexistencia de unas tarifas unificadas. A lo que añadía una deficiente formación profesional, pues tanto la Escuela de Maestros Impresores de Madrid como el Instituto Catalán de las Artes del Libro en Barcelona se desenvolvían en medio de la mayor estrechez económica y casi sólo con el auxilio de la iniciativa patronal trataban de suplir parte de las deficiencias de la formación profesional.

El régimen de Franco al crear el Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas, las Artes Gráficas son asignadas a la tercera sección con las funciones *de procurar el perfeccionamiento de las industrias de este sector y conocer los adelantos, promover y fomentar toda iniciativa que tuviese por objeto la mejor organización de la producción y crear escuelas profesionales de la industria del sector*.

Al año de funcionar (1942)<sup>238</sup> este era el balance que hacía el Sindicato de su actuación respecto a las industrias gráficas:

La labor realizada por esta Sección ha sido recopilar las declaraciones juradas de todos los impresores, litógrafos, encuadernadores y fotograbadores con el fin de proceder a la distribución equitativa de las materias primas que cada industria precisa. Esta distribución se establece de acuerdo con los medios de producción de que dispone cada empresa y de los productores a que dan trabajo. Se procede a realizar una estadística exacta de toda la maquinaria existente en España, indicando aquellos talleres que se dediquen a especialidades dentro de las Artes Gráficas.

Actualmente existen en España 2.723 talleres de Artes Gráficas, 1.065 encuadernadores y 249 talleres de fotograbado.

Se prepara el envío de aprendices y oficiales a Alemania para ampliar sus estudios. Se estudia la creación de una Escuela Nacional de Capacitación Profesional de Artes Gráficas, donde puedan desarrollar sus comienzos técnicos todos aquellos que tengan vocación por las Artes Gráficas.

Esta Sección se ocupa de: la fijación de los cupos de papel y fiscalización de éstos y proporcionar las materias necesarias, etc.; absorber totalmente el paro de los productores de esta importante rama del trabajo, y capacitarles para la mayor eficacia en su oficio.

---

<sup>237</sup> Escrito a modo de guion que la Cámara de Barcelona dirige a Lasso de la Vega. Archivo BUC- Lasso de la Vega, caja 2

<sup>238</sup> Nuestra labor realizada por el Sindicato desde su fundación, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1942, nº1, pp. 20-28



Las provincias más importantes en este sentido son las de Barcelona, que posee 574 talleres, Madrid con 380, Valencia con 154, Sevilla con 105.

Dos años más tarde, dentro el III Consejo Sindical (Industrial) de 1944, en la 9ª Ponencia dedicada al Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas se incide en la necesidad de mejorar la *actual Escuela Nacional de Artes Gráficas y que pasase a depender en su aspecto de orientación técnica, del Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes Gráficas; crear con toda urgencia un Instituto de Artes Gráficas en Barcelona y disponer que en los talleres con más de 250 productores se les exigiese establecer un pequeño taller de aprendizaje para suplir de momento, la necesidad existente de personal especializado.*

El Sindicato, y su máximo responsable en estos momentos, Julián Pemartín, que también ostentaba la dirección del INLE, se implicaron muy activamente en la organización del III Congreso Nacional de las Artes Gráficas, celebrado en Barcelona los días 19 al 24 de junio de 1950<sup>239</sup> -hacia 37 años que se había celebrado el anterior-. El objeto del Congreso fue *establecer un general contacto para poder estudiar, definir y lograr el mejoramiento económico de esta rama de la producción tan trascendente en la vida espiritual de los pueblos.*

Dentro del programa se incluyó de nuevo la formación profesional en las Artes Gráficas y la renovación del utillaje, accesorios y piezas de recambio como temas de debate.

La ponencia “Maquinaria para las Artes Gráficas” fue defendida por el profesor mercantil José María Roig Torrenella, quién estimaba que mal podría renovarse la industria si ésta no podía importar las máquinas que precisaba y que no se construían en España. También anotaba que, pese a la protección que se daba a la producción nacional, ésta salvo excepciones estaba representada por máquinas de flojo rendimiento.

En la ponencia “Aprendizaje y la formación en la Industria Gráfica” se llegaba a la conclusión de la necesidad de formar buenos técnicos y no sólo buenos oficiales de taller, demostrando que esta labor respondía a unos gastos en cierto modo importantes, pero compensadores a la larga. Destacaba la obligación que debían tener las empresas de coadyuvar con el Estado en este aspecto.

Los impresores reclamaban parte de las divisas obtenidas por los editores, a fin de que aquéllos pudiesen renovar la maquinaria. A lo que contestó el señor Salvat, que la única aspiración de los editores era abaratar el libro y que el reparto propuesto por el señor Hernando Martínez complicaría mucho las cosas, aparte de que el volumen de divisas por ese concepto sería mínimo.

Sobre la ordenación de la producción en su parte de precios de coste, se dijo que en el momento actual era difícil establecer condiciones rígidas para la facturación en las Artes Gráficas, porque cada taller tenía peculiaridades propias y variedad de maquinarias. Por ello el Ministerio de Industria y Comercio no sometió a la industria gráfica al régimen de precios oficiales. Después se preguntó a la Presidencia si existía algún medio de obtener la colaboración oficial para sancionar toda posible infracción en materia de los costos. Ésta respondió que no existía nada que amparase esta aspiración.

Entre las conclusiones aprobadas se incluyó la urgente necesidad de organizar el aprendizaje en las Artes Gráficas y se solicitaba al Gobierno apoyo en la consideración de este problema. También se pedía a los poderes públicos la protección oficial de la fabricación nacional de

---

<sup>239</sup> III CONGRESO NACIONAL DE ARTES GRAFICAS - BARCELONA 1950

todos aquellos tipos de máquinas producidos en el país que reuniesen características técnicas de modernismo y rendimiento y dejar amplia libertad para la importación. Igualmente se solicitaba una reducción de las tarifas arancelarias así como la concesión de licencias de importación de materias primas necesarias para obtener más calidad en la producción nacional de tintas para las Artes Gráficas.

En ese mismo año la Jefatura superior del Sindicato considerando la importancia y necesidad del acuerdo sobre la renovación de la maquinaria y accesorios de la industria de las Artes Gráficas que fue adoptado en reuniones anteriores, consideró oportuno elevar al Subsecretario de Economía Exterior un escrito en los que se argumentaba la necesidad urgente de reponer el material de las artes gráficas y los beneficios que esta renovación traería<sup>240</sup>:

“Entre los problemas que embargan la atención de este Sindicato Nacional, uno de los más acuciantes es el aniquilamiento del material de Artes Gráficas tras cerca de 20 años de incesante trabajo. Se hace urgente la reposición de esta industria, hoy en trance de paulatina disminución de su eficiencia y con riesgo evidente de ruina total, ya que desde 1936 prácticamente nada se ha hecho para evitarla debido a las circunstancias. Aún más no ha llegado a nosotros en los últimos 20 años ninguna de las innovaciones de esta técnica, con lo que la caducidad del material da un trabajo mucho más imperfecto que cuando se instaló. Esta es la razón de que no podamos competir más allá de nuestras fronteras; instalaciones antiguas que rinden menos y exigen más personal; que no solamente producen un trabajo anticuado, sino que por su vejez ha de ser necesariamente imperfecto.

Estas son las razones que nos mueven a rogar que tenga a bien considerar la necesidad mínima de reposición con 250 millones de pesetas anuales, de los cuales un 50% por deseo expreso de los profesionales deberían ser de procedencia alemana. Consideramos que es perfectamente evitable la pérdida del imperio espiritual que España conservaba en los países de ultramar, porque si esto se ha restringido en los últimos años a causa de un encarecimiento de nuestros libros, que tiene por motivo principal, como antes hemos precisado, un utillaje de inferior calidad y escaso rendimiento, que facilita la competencia de editoriales autóctonas en aquellas naciones cuyos naturales siguen prefiriendo el libro español por su pureza de lenguaje, al poder situar nosotros allí en condiciones de competencia nuestros productos, el éxito no es dudoso.

Tampoco es dudoso el logro de nuevos mercados internacionales. Pues el salario del trabajador español es notablemente inferior al de cualquier otro europeo o americano. De ahí que la posesión de una maquinaria moderna que nos sitúe en las mismas condiciones técnicas, unida a la maestría y coste de nuestros operarios, no hace dudoso nuestro éxito”.

¿Tuvo en cuenta la administración estas peticiones para resolver los problemas relativos a la formación profesional y la renovación de la maquinaria?

Parece ser que el Ministro de Comercio dio pruebas de buena disposición al permitir importar maquinaria de Artes Gráficas con cargo a una parte de las divisas producidas por la exportación de libros y material impreso; mas con tales disponibilidades de divisas sólo fue posible renovar una mínima parte de los talleres que eran propiedad de editoriales, subsistiendo, en general, la necesidad imperativa de renovar toda la maquinaria y el utillaje de la citada industria, que llevaba unos 20 años de retraso, lo que hacía que se resintieran extraordinariamente, tanto su producción como su calidad. En consecuencia, las Artes Gráficas

---

<sup>240</sup> “Renovación de la maquinaria y accesorios de la industria de Artes Gráficas”, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1950, enero, pp. 8-10

españolas se encontraban en inferioridad manifiesta ante las industrias extranjeras análogas, produciendo mermas considerables en el mercado interior y la consiguiente pérdida de prestigio nacional y de desarrollo económico.

Otra medida procedente del Ministerio de Comercio consistió en que en los tratados comerciales que se firmasen con países como Alemania, Inglaterra, Italia y USA<sup>241</sup> no se dejase de incluir con preferencia la importación de maquinaria y utillaje para las Artes Gráficas, así como también de dedicar un importante cupo de divisas para estas importaciones.

Pero la medida más eficaz vino tras la creación en 1951 de la Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro entre cuyos objetivos se incluyó la renovación del utillaje industrial necesario para incrementar la producción editorial. La CECEL, administraba una cuenta de reserva de divisas producidas por las exportaciones de libros que permitiría a los editores, entre otras cosas, importar los medios de producción necesarios para el normal desarrollo de sus ediciones.

En la Memoria que elabora en 1955 la Comisión Ejecutiva se relacionaba la disminución de los precios de costo de los libros españoles con la renovación de los elementos de producción de la industria editorial y que tal renovación no podía hacerse en el mercado interior y a base de la producción nacional, por lo que era imprescindible importar del extranjero una gran cantidad de los medios de producción indispensables a la industria editorial como máquinas tipográficas de alto rendimiento.

La renovación de los medios de producción aumentaría el rendimiento al permitir ediciones más numerosas y disminuir el precio de cada ejemplar, mejorando la oferta y ampliando las cifras de ventas. Al disponer de maquinaria eficaz los editores españoles podrían competir con los extranjeros en dos campos hasta entonces vetados a nuestra industria: las revistas ilustradas de gran tirada y los libros para niños.

Posteriormente en la Memoria de 1957 se decía que, pese al cambio positivo producido por una mayor demanda interior y exterior de libros, la industria de Artes Gráficas no pudo contraponer una oferta suficiente en cantidad ni en calidad, puesto que no disponía de maquinaria eficaz y le faltaban medios auxiliares de producción en cantidad suficiente. Este problema determinó la actuación de la Comisión, y en la medida de sus posibilidades –siempre muy limitadas– salvó el problema preocupándose en primer lugar de dotar a las industrias de Artes Gráficas con el utillaje más indispensable: máquinas de componer y repuestos y accesorios de uso constante y escasa duración. Aunque se necesitaban unas 200 máquinas nuevas de componer la Comisión consiguió unas 40, y pese a ello fue evidente que la confección de libros en España mejoró mediante la autorización para importar repuestos y accesorios para composición mecánica que permitieron paliar la falta suficiente de maquinaria, y por ello se invirtieron hasta ese momento presente 15 millones de pesetas en la importación de matrices, hornos y accesorios para la composición mecánica.

Después la Comisión se preocupó de la importación de máquinas tipográficas, y hasta 1957 se autorizaron la importación de 96 máquinas por un importe de 45 millones. Los repuestos y accesorios supusieron una inversión de 4 millones. La incidencia de estas inversiones no fue

---

<sup>241</sup> “La importación de maquinaria para las Artes Gráficas: ya está concertada en el Convenio Comercial con Alemania, y solicitada con más amplitud para los correspondientes con Inglaterra y Francia”, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1952, dic. , pp. 3-4

muy grande si tenemos en cuenta que las necesidades de la industria de Artes Gráficas dedicada a la producción de libros era del orden de 800 máquinas tipográficas de tamaño grande. La Comisión también favoreció la importación de maquinaria extranjera para encuadernar y las inversiones en este capítulo sumaron 12 millones, sin contar los bienes de consumo, como películas metálicas, cola y pequeños repuestos en los que se importaron 6 millones de pesetas. Por último, el capítulo dedicado a medios para la reproducción fotomecánica, la Comisión adquirió 32 máquinas para litografía y offset por un valor de 23 millones y medio. En conjunto la Comisión había dedicado a la importación de elementos de producción procedentes del extranjero 181,511.000 de pesetas desde el 1 de abril de 1951 hasta el 1 de enero de 1957. Esta cifra representó el 38,8% de todas las divisas cedidas.

“El mantenimiento de la situación actual hará imposible en breve plazo la renovación de los medios de producción de la industria editorial, ya que será forzoso invertir todos los saldos de la Cuenta de Reserva de Divisas en la adquisición de publicaciones extranjeras, cortando radicalmente la campaña de renovación del utillaje de las industrias de Artes Gráficas que, aun en mínima proporción, viene siendo desarrollada, y que tan fundamental interés tiene para el mantenimiento del actual ritmo de exportación de libros”.

Tampoco le fue mucho mejor a la formación profesional, pues aunque se dispuso la constitución de una Comisión encargada del estudio y redacción de un proyecto de plan nacional de reorganización de la enseñanza de las Artes Gráficas en España en la Orden de 19 de diciembre de 1951, de nuevo en la Reunión Extraordinaria de Empresarios del Sector de Artes Gráficas (4-5 diciembre de 1953)<sup>242</sup> se planteaba el problema de la enseñanza laboral en las industrias gráficas más allá del aprendizaje, pues no era sólo necesario formar aprendices, sino a todos los profesionales: oficiales, jefes de taller, administrativos, dibujantes, grabadores, para homologar nuestras Artes Gráficas a la altura de los extranjeros e incluso mejor. Para ello se propuso la creación de unos Centros de Investigación y Enseñanza para las Artes Gráficas en general, que pudiesen servir hasta para los empresarios en los principales centros: Madrid, Barcelona, Bilbao, costeados o subvencionados por los industriales gráficos, consiguiendo no sólo mejorar el nivel profesional, sino también, el nivel de vida de los trabajadores, atrayendo a la industria a personal más competente.

Pero lo cierto es que a fecha de 1955 aún no se había llevado a cabo ninguna actuación como muestra la Memoria de la CECEL, donde se denunciaba la falta de personal adecuado: *es difícil encontrar buenos operarios de artes gráficas, dificultad que se agrava teniendo en cuenta que los nuevos métodos y sistemas de producción exigen una mejor formación profesional.*

### **3.4. LA INDUSTRIA EDITORIAL**

A consecuencia de la Guerra civil y luego la guerra mundial los editores españoles sufrieron una triple crisis. En primer lugar económica, motivada por el desmantelamiento de la industria nacional y agravada por el contexto de guerra en Europa, que se tradujo en la ruina de casas editoriales tradicionales, la destrucción de infraestructuras, la caída de la demanda interna. En segundo lugar una crisis cultural, pues el exilio y muerte de los principales intelectuales de primera fila, la depuración de cátedras y el silencio obligado de muchos escritores, repercutieron en la escasez de autores, traductores, investigadores de solvencia. Y, por último, una crisis política fruto de la imposición de un régimen totalitario y de un férreo dirigismo cultural.

---

<sup>242</sup> Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas, 1953, dic. , pp. 2-6

La falta de materias primas, en concreto la escasez de papel, perjudicó al editor de dos maneras. Por un lado encareció el precio del libro, y por tanto se hizo menos competitivo en el mercado exterior americano, ya de por sí debilitado por las consecutivas coyunturas bélicas, y por otro, su adquisición dependía de la rigurosa distribución que hacía el Estado a través de la asignación de cupos de papel, además de controlar su precio hasta agosto de 1943.

Tampoco la reforma fiscal de Larraz de 1940 favoreció a la actividad empresarial en su conjunto, ya que supuso una elevación de las cuotas de la contribución industrial y un incremento en la imposición de las utilidades procedentes del trabajo personal. Así mismo el un nuevo impuesto de Contribución de Usos y Consumos no permitía la devolución del tributo pagado, cuando los productos se exportaban.

El comercio exterior del libro también fue intervenido, en concreto las importaciones se regularon con diferentes órdenes y decretos que supusieron trámites engorrosos para conseguir autorizaciones y además estuvo muy condicionado por la censura.

Así la Orden de 30 abril de 1938 en su art. 4º prohibía la venta y circulación, en territorio nacional, de libros, folletos y demás impresos, producidos en el extranjero, cualquiera que fuese el idioma en que estuvieran escritos, sin la previa autorización del Ministerio y los editores, libreros o concesionarios que pretendiesen poner en venta o circulación tales obras, debían remitir dos ejemplares a la previa censura. Esta disposición alcanzaba tanto a lo que se vendiese o circulase en territorio nacional después del diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis, y se concedía un plazo de treinta días, a partir de la publicación de la Orden, para el cumplimiento de dicha obligación. Su infracción, según el Art. 6º, se podía sancionar con multa e incautación de los ejemplares.

A los libreros importadores se les fijó un coeficiente de acuerdo con las importaciones que realizaron entre 1933 y 1935, y en función de dicho coeficiente se les asignaba las divisas, siendo la Rama del Papel quién efectuaba el reparto<sup>243</sup>.

Los concesionarios o importadores de libros o folletos que tuviesen un carácter predominantemente doctrinal, debían solicitar al Servicio Nacional de Propaganda, luego Delegación Nacional de Propaganda, autorización para la importación, circulación y venta en el territorio nacional de los impresos de cualquier clase que pretendan introducir<sup>244</sup>. Por cada título que se quería importar, se debía elevar a dicha Delegación una solicitud, acompañando al propio tiempo dos ejemplares. La Delegación podía denegar o autorizar la importación. En el primer caso debía renunciarse a la introducción. En el segundo, la Delegación remitía al solicitante una tarjeta de autorización. Al llegar los libros debían enviarse a la Delegación de Madrid cuatro ejemplares acompañando la tarjeta de autorización que permitió la importación. Una vez sellada y firmada la tarjeta por el jefe de la Delegación, el libro se podía poner a la venta. En caso de obras de reducido número de ejemplares la autorización se podía hacer por la Delegación Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular.

Cuando se trataba de publicaciones de tipo técnico o de carácter litúrgico, bastaba el envío por duplicado de catálogos o listas, que eran aprobadas y devueltas, a fin de que no hubiese obstáculo para la introducción. En cambio, las novelas y las publicaciones de tipo histórico o

---

<sup>243</sup> Criterio y normas de distribución de papel y cartón, libros y demás materias dependientes de esta Rama y Reglamento entregado a la D.N.S. para el servicio de distribución de los mismos (6-12-1940, firmado por Lasso de la Vega). Archivo BUC- Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

<sup>244</sup> Orden 22 junio 1938

doctrinal, así como los impresos de carácter social o político, debían de acompañar por duplicado a las instancias en que se solicitaba su importación.

Circunstancialmente se autorizaron los libros, folletos y publicaciones periódicas doctrinales, impresas en alemán, italiano o portugués, desde los años 1932, 1923 y 1926 en sus países respectivos, recusándose los impresos en estos mismos idiomas fuera de Alemania, Italia o Portugal. Asimismo se consideraron sospechosas las obras escritas en español y editadas fuera de España.

También los particulares que deseaban introducir obras extranjeras debían obtener una autorización del Servicio Nacional de Propaganda.

Posteriormente en enero de 1940, el gobierno franquista organizó el Registro Oficial de Importadores, obligando a todos los que desearan inscribirse a avalar su adhesión al Movimiento.

Con el Decreto de 19 de febrero del mismo año relativo a la entrada de libros extranjeros se obligó a la posesión de permisos de importación, los cuales debían restringirse ante la acuciante falta de divisas. Las cámaras del libro organizaron los cupos de divisas para la importación de libros basándose en los volúmenes de importaciones antes de la guerra. A la cámara de Madrid se le otorgó el 60% y a la de Barcelona el 40%. Esta medida generó un clima de hostilidad creciente entre las editoriales de Argentina y México, las cuales sugirieron poner trabas a la entrada del libro español.

De toda la reglamentación anterior se deduce que dos eran los escollos para la importación de libros. Primero era conseguir la licencia de importación que concedía el Ministerio de Industria y Comercio. Las licencias eran muy escasas a causa de la carencia de divisas. Una vez aprobada la licencia, el INLE distribuía entre los importadores o libreros las divisas concedidas de acuerdo con determinados criterios y entonces el importador podía gastarlas en los libros que considerase más oportuno. El segundo escollo que el importador debía superar era la censura. Antes de proceder a la importación, debía presentarse una relación de las obras que el importador había escogido. El permiso era inmediato en el caso de que las obras tuvieran ya un expediente afirmativo previo. En caso contrario, el trámite se podía alargar bastante, terminando en ocasiones en la denegación. Para evitarla el importador solía prever qué libros no pasarían la censura, estableciendo él mismo un primer filtro en la selección de títulos que se introducían en España.

Si ya era engorroso el proceso para importar libros, además se practicó la arbitrariedad a la hora de adjudicar las autorizaciones como muestra esta carta del secretario de la cámara del libro de Barcelona dirigida a Javier Lasso de la Vega.

Está establecido que las autorizaciones para la importación de libros deben ser otorgadas colectivamente por mediación de las Cámaras Oficiales del Libro o de los gremios de libreros que funcionan en las Cámaras. Hasta ahora las licencias y las divisas correspondientes se nos han concedido en esta forma. Pero ocurre que algunos libreros han obtenido individualmente licencias de importación –por ej. la Librería de Ciencias Médicas- y otros como Senna para los libros italianos y Kadner y Seither para los alemanes disfrutan de un verdadero monopolio para las importaciones de esos países o las realizan por un conducto que no es desconocido.

Hoy no puede un particular obtener libros franceses –si el cupo ha sido agotado por los organismos oficiales- y no pueden además importarse novelas de Francia o Inglaterra mientras no existe dificultad para conseguirlo de Alemania e Italia.

Como es natural los libreros se nos quejan y por eso nos atrevemos a sugerir a V.S. –se supone que es Lasso de la Vega- que todas las importaciones, cualquiera que sea su procedencia y la

forma de pago, estén sujetas a idéntico régimen, es decir, que todas sean colectivas y estén sometidas para el suministro de libros, a la preferencia establecida a favor de los organismos oficiales<sup>245</sup>.

La gestión de las divisas concedidas a los libreros importadores corría a cargo de la Rama del Papel<sup>246</sup>. Ésta fraccionaba las divisas concedidas a los libreros a través de las cámaras oficiales del libro, las cuales, conforme a sus instrucciones las distribuían y daban cuenta a la Sección que controlaba su ejecución e informaba, una vez terminada, al Ministerio.

Las Cámaras además debían observar los precios fijados para la venta en pesetas de los libros, revistas y prensa extranjera y a pasar las órdenes de pedidos a la previa aprobación de la Junta de Adquisición de Libros, la cual a su vez regulaba la compra de obras recreativas, revistas de modas, de cine y de deporte. En relación con las obras de carácter científico la JIAL podía rechazar las que consideraba improcedentes y daba preferencia a la demanda de universidades, seminarios, institutos científicos y de investigación, laboratorios, etc., sobre las de carácter privado. De esta Junta formaba parte Javier Lasso de la Vega por disposición del Ministerio de Educación Nacional y el Sr. Magariños, jefe de la censura.

No parece que tal normativa se cumpliera a rajatabla como muestra la sanción a tres librerías de Barcelona por no haberse ajustado a las normas vigentes para la importación de libros extranjeros, y por ello se les recordaba dichas normas como recogía el Correo Profesional de *Bibliografía Hispánica* de 1944.<sup>247</sup>

Las exportaciones de libros también sufrieron la intervención y una rigurosa reglamentación.

Con el objeto de ejercer un verdadero control sobre las exportaciones de libros por correo<sup>248</sup>, la previa concesión de la licencia de exportación se expedía por la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria. Únicamente se exceptuaban del régimen establecido los envíos de paquetes de libros que se realizasen por particulares, que no excedieran los 4 kg en un máximo de dos paquetes, encargándose la Dirección General de Correos y el INLE de la vigilancia de dichos envíos para evitar burlas del sistema.

A título excepcional se podían autorizar licencias de exportación globales por un valor de 5.000 pesetas a editoriales que las solicitasen, cuando los paquetes de libros eran de escasa importancia. Las licencias se tenían que solicitar una por cada país, salvo para países americanos que se podía solicitar una global, a excepción de Argentina, país con el que se firmó un tratado específico. Las licencias globales duraban 6 meses. En el momento de solicitar la licencia era el INLE quién daba el visto bueno respecto a precios y títulos. Las facturas pro-forma debían incluir 6 copias: una para el INLE, otra para la DG de Correos, para IE de Moneda Extranjera, para la DG Comercio y Política Arancelaria y otra para el interesado. Por su parte el exportador quedaba obligado a efectuar el reembolso de las divisas correspondientes a favor del Instituto Español de Moneda Extranjera en el plazo de máximo de 120 días, a partir de la exportación.

---

<sup>245</sup> Barcelona, 18 mayo 1940. Carta del Secretario de la Cámara del Libro de Barcelona a Javier Lasso de la Vega. Archivo-BUC Fondo Lasso de la Vega Caja 2

<sup>246</sup> Del Jefe de Sección Papel –Lasso de la Vega– al jefe Nacional del Sindicato (22-10-1941). Archivo-BUC Fondo Lasso de la Vega Caja 2

<sup>247</sup> Sección Correo Bibliotecario, *Bibliografía Hispánica*, 1944

<sup>248</sup> Normas para la exportación de libros. *Bibliografía Hispánica. Sección Correo Bibliotecario*, 1943

La Dirección General de Comercio y Política Arancelaria el 31 mayo 1943 fijó en 5.000 pesetas el valor máximo de las licencias globales, pero al comprobarse que esta cuantía era insuficiente el INLE solicitó a dicha Dirección que se aumentasen las cuantías de acuerdo con el volumen de cada exportador, pidiendo para las grandes editoriales licencias de hasta 100.000 pesetas. En abril de 1944 la DG de Comercio resolvió establecer tres categorías de editores para fijar el límite máximo de las licencias globales: 25.000, 15.000 y 5.000 pesetas. Por ejemplo a Ediciones Dossat se le adjudicó una licencia de 15.000 y a Espasa Calpe de 25.000 pesetas para todos los países de América, excepto Argentina que llevaba un régimen especial, como veremos más adelante.

Los editores, también tenían la obligación de remitir al Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas la relación de las exportaciones realizadas cada trimestre.

A partir de 1944 se reglamentó la exportación de libros, con un control mucho más exhaustivo sobre las divisas producidas. El Ministerio de Industria y Comercio facilitaba al INLE tres tipos de licencias de exportación: una para envíos en firme, otra para remesas en depósito y una tercera sin divisas ni compensación. Sin embargo, se establecieron licencias globales con generosos márgenes para cada editor, con lo que ese control no resultaba demasiado problemático para la exportación de libros. Aunque a cambio los editores debían dar cuenta de las divisas recibidas mediante el traslado de copias de las facturas al Instituto Español de Moneda Extranjera y a la Dirección General de Comercio

Respecto a las remesas de libros en depósito a América que autorizó el Ministerio de Industria y Comercio a instancias del INLE<sup>249</sup> debían liquidarse dentro de un plazo no superior a los tres años, a contar de la fecha de su expedición, así como a reimportar los libros correspondientes a esta remesa que quedasen invendidos. Las licencias de exportación, en concepto de depósito, sólo se concedían como máximo por el importe del doble del volumen medio de las exportaciones anuales netas correspondientes a los años 1930-35, para los editores que estuviesen dados de alta en la contribución con anterioridad a 1936, y por el valor que el INLE fijase, a los que se hubiesen matriculado con posterioridad a la referida fecha. Cubierta la cifra tope, sólo se autorizaban nuevas exportaciones por el valor de las divisas entregadas en el Instituto Español de Moneda Extranjera, y se autorizaba a los editores a facturar en pesetas. Sin embargo, las gestiones se fueron estancando a causa de la burocracia, dando lugar a que numerosas remesas de libros quedaran atascadas en las aduanas

Otro escollo para el comercio exterior fue la intervención estatal de los cambios y la obligación impuesta a los editores de facturar en dólares a la cotización oficial fijada, y no en pesetas, sus remesas en el extranjero. Esta medida perjudicó enormemente a nuestras exportaciones en América ya que provocó un aumento en los precios de nuestra producción editorial perdiendo competitividad en un mercado cada vez más competitivo<sup>250</sup>.

Para solventar la escasez de divisas<sup>251</sup> el Presidente de la Cámara de Barcelona exhortaba a que se concediese una cuenta de auto-compensación:

---

<sup>249</sup> Orden del Ministerio de Industria y Comercio (BOE 30 octubre 1943).

<sup>250</sup> A. de S., "La prima a la exportación del libro español", *Bibliografía Hispánica* n. 8, 1943, pp. 3-10

<sup>251</sup> Carta del Presidente de la Cámara del Libro de Barcelona a Lasso (1940). Archivo BUC-Lasso de la Vega. Caja 2



Que a tales fines ha solicitado la apertura de una cuenta de crédito en la banca española, concediéndole 133.000 dólares a pagar en tres meses. Que dicho crédito es factible de ser abonado por divisas producidas por la exportación de la industria editorial española. En el primer trimestre del 40 se han producido 1.908.432 pesetas. De no accederse a esta petición la industria editorial española está llamada a tener una vida muy precaria en España y a perderse para muchos años nuestro mercado de América, que produjo en 1929 25 millones de pesetas.

También se reclamaban primas a la exportación de libros<sup>252</sup> como mecanismo de salvación de la industria editorial española, que destinaba al mercado americano el 45% de su producción. Si desaparecía el mercado americano, habría que reducir las tiradas en un 45% y cargar el precio total de costo únicamente sobre el otro 55% que consumía el mercado español y, consecuentemente, aumentar su precio de venta en una cantidad muy estimable". Si ponía el ejemplo de Alemania que protegía la exportación de sus libros al extranjero con la prima del 25% en beneficio del comprador. "Creemos que debe ser el Estado el que debe crear la prima a la exportación de libros –igual que hizo en la construcción naval- porque es la única forma de mantener el tráfico espiritual y de la cultura de España con las naciones americanas y sostener un ritmo decoroso en la marcha de la técnica y del progreso de la Hispanidad".

De lo anterior es fácil deducir que la mayor preocupación de los editores fue la recuperación del mercado americano, pues éste pasó de facturar un 39% del total del comercio en 1935, al 10% en 1944.

Las dificultades del mercado trasatlántico tuvieron su origen en diferentes factores. Algunos heredados, otros coyunturales y otros ligados a la política económica del régimen. Los más denunciados fueron el encarecimiento del libro; las dificultades en los transportes; las elevadas tarifas de correos; muchos títulos agotados; la mala difusión y propaganda; la dificultad para importar maquinaria de artes gráficas; los largos plazos en el cobro; la falta de conexión entre los diferentes organismos que debían ejecutar la política (Gustavo Gili) y la competencia americana.

El excesivo costo de la producción editorial española se disparó a causa de un cúmulo de circunstancias. El encarecimiento del papel, cuyo origen estaba en la elevada protección arancelaria de que disfrutaba y a las trabas acordadas para su importación; al elevado coste de la impresión, encuadernaciones y demás materias propias para su fabricación y a la intervención estatal de los cambios y la obligación impuesta a los editores de facturar en dólares a la cotización oficial fijada, y no en pesetas. Todo ello colocó a la producción editorial en un nivel de precios de venta tan elevados en relación con la capacidad del mercado americano y los precios de los producidos en aquel continente, que su exportación se hizo más difícil y reducida.

A propuesta y/o por presión de los editores, Javier Lasso, conocedor de las causas que habían ocasionado el incremento del precio del libro, en enero de 1940 autoriza el aumento de su precio siendo competencia de la Rama del Papel. Una vez la editorial o librería tenía la autorización solicitaban a las cámaras las etiquetas con los aumentos autorizados: 25%, 20% y 15%<sup>253</sup>. Un mes más tarde se dictaron nuevas bases que regulaban los aumentos en el precio de los libros:

---

<sup>252</sup> A. de S., "La prima a la exportación del libro español", *Bibliografía Hispánica* n. 8, 1943, pp. 3-10

<sup>253</sup> Propuesta de subida del precio de los libros (16 enero 1940), firmada por Javier Lasso de la Vega. Archivo INLE. Caja 37

No se autorizará aumento alguno de precio en los siguientes casos: en los libros editados con posterioridad al 18 de julio del 36 y en los libros editados antes de esta fecha cuyas existencias estuvieran encuadernadas antes del 1º de abril de 1939. Podrán solicitarse aumento de precio con arreglo a las siguientes normas: a) detalle de los títulos y autores con la respectiva clase de encuadernación; b) precio anterior de cada libro, precio nuevo que se solicita o porcentaje de aumento; c) declaración jurada de las operaciones complementarias que son necesarias para poner el libro a la venta. (...). Los precios nunca podrán ser aumentados sin la autorización de la Rama del Papel, ésta podrá solicitar cuantos detalles e informaciones complementarias juzgue necesarias y cuando deniegue la autorización no tendrá que dar explicaciones de la negativa, limitándose únicamente a comunicarlo.

En octubre de 1940 se pusieron a disposición de la Cámara de Madrid 126.368 sellos de permiso de elevación del 25%, pero no debieron ser suficientes, estando registradas numerosas peticiones, primero de editores y libreros a las cámaras, y en segundo lugar de éstas a la Rama del Papel<sup>254</sup>.

A consecuencia de la coyuntura ocasionada por la II Guerra mundial las comunicaciones marítimas sufrieron los efectos del bloqueo y España padeció la inseguridad de los mares y escasez de buques repercutiendo en el suministro de los mercados ultramarinos. Siendo difícil predecir cuándo podía llegar al lector el libro que necesitaba.

Por otra parte, las administraciones de correos españolas estaban afectadas por un sinnúmero de dificultades: escasez de sacas, insuficiencia de personal técnico y subalterno, especialmente en Barcelona, y además, el estado aumentó considerablemente la tarifa de impresos. Por otra parte, los retrasos en el servicio era la normalidad. Un paquete de libros impresos antes de la Guerra tardaba unas 48 horas desde cualquier punto de España, hoy tarda de 10 a 15 días<sup>255</sup>.

Muchos títulos de los catálogos de todas las editoriales importantes estaban agotados siendo imposible reimprimirlos con la necesaria celeridad y a los precios convenientes. (Calleja)

En la mayor parte del continente americano eran extraordinarias las deficiencias para informarse de los libros que se producían en España<sup>256</sup>

Largos plazos en el cobro, era otro de los inconvenientes más graves de la exportación de libros a Hispanoamérica. Las letras iban desde los 30 o 60 días a los 24 meses, siendo un plazo normal de recepción del dinero de 8 a 12 meses. Demasiado tiempo para las editoriales pequeñas y medianas, que además acusaban la falta de crédito a la exportación y la inseguridad en el cobro por ineficacia de los bancos. Era palpable la necesidad de contar con un banco que diera garantías en el cobro y ofreciera ayuda crediticia al editor. Las editoriales de otros países sí gozaban de financiación preferente a través de créditos blandos.

A este cúmulo de factores negativos había que sumar uno más: la competencia americana, como describe el Presidente de la Cámara de Barcelona, Joaquín Sopena, quién además apunta estrategias para neutralizarla<sup>257</sup>:

---

<sup>254</sup> Archivo INLE Caja 37

<sup>255</sup> Gustavo Gili. *Bosquejo de una política del libro*, 1944

<sup>256</sup> A. de S., "En torno al problema del libro español en América: las remesas en depósito", *Bibliografía Hispánica* n. 3, 1943, pp. 1-11

<sup>257</sup> Carta del Presidente de la Cámara de Barcelona, Joaquín Sopena, a Javier Lasso (26-9-1939). Archivo-BUC Lasso de la Vega. Caja 2

“Es un hecho ya conocido que existe en América –Argentina, Chile, Méjico- una industria editorial en creciente desarrollo; que esta industria editorial apoyada por los elementos intelectuales y pseudointelectuales locales intenta desplazar y eliminar a la producción editorial española y finalmente que la tendencia nacionalista crece y ha conseguido algunas victorias de cierta consideración como son el que autores europeos hayan vendido a editores americanos los derechos de traducción de sus obras, el establecimiento de tarifas postales interiores que excluyan al libro español.

Cree la Cámara que reconocido como inevitable el desarrollo de una industria editorial americana, una buena política española debería consistir en procurar que aquella industria editorial estuviese en manos de editores españoles con casa en la Península, tanto porque sería posible al estado el dirigirla o encauzarla ocultamente, por que los beneficios económicos que produjese reverterían a España.

La existencia de casas españolas en América significaría un rudo golpe a la piratería local y un obstáculo al desarrollo de la industria editorial americana. En conclusión esta Cámara le ruega que a la hora de tomar decisiones con respecto a la actividad de los editores españoles en América, se tenga en cuenta la conveniencia de favorecer la instalación en América de sucursales de las casas editoras nacionales como medio para retardar la pérdida completa de aquellos mercados.

La verdad es que los editores españoles querían recuperar lo antes posible los mercados perdidos a causa de la guerra, pero chocaron, principalmente, con los argentinos que querían consolidar su reciente liderazgo. Esto ocasionó un conato de guerra comercial cuando las autoridades españolas cubrieron a su sector editorial con medidas y trámites proteccionistas para evitar que las librerías se inundaran de libros americanos. Aunque la prohibición total de importar libros no se llegó a producir, las dificultades burocráticas que se imponían eran tales que, en la práctica, se hacía muy difícil introducir legalmente libros en España. Veamos un ejemplo en las quejas de un ciudadano argentino dedicado a representar editoriales argentinas en España para la importación de libros y revistas argentinas<sup>258</sup>:

Hace más de 10 años que vengo ejerciendo mis actividades como importador de revistas y libros argentinos en España. Cuando la guerra cesó sometí mi derecho a la importación al Ministerio de Industria y Comercio, así como a las directrices de censura de prensa para obtener el permiso de libre circulación. A pesar de ello, los paquetes de libros y revistas debían sufrir el gravamen de un aforo aduanero antes de ser entregado a sus destinatarios.

El Decreto 19 febrero 1940 ha dejado sin efecto los anteriores permisos de importación paralizando por completo mis actividades comerciales en España, después de tantos años, con el consiguiente perjuicio económico agravado por no poder retirar mis agentes las remesas detenidas en las aduanas de diversas provincias españolas, remesas que estaban en viaje cuando se dio a conocer el citado decreto y que ascienden a unos 10.000 pesos anuales.

El valor de las importaciones que se efectuaban por mi intermedio en España eran de unos 7.000 pesos mensuales, cantidad exigua en comparación con la cifra que alcanza la importación de libros y revistas españolas en nuestro país, que se elevan a 150.00 pesos mensuales, sin que ninguna traba aduanera ni de otro carácter perjudique el libre desenvolvimiento de este comercio editorial en la Argentina-

Aducen las autoridades españolas que la promulgación del citado decreto fue aconsejada por el Instituto Español de Moneda Extranjera para evitar maniobras fiduciarias fuera del control de dicho Instituto, es ridículo que en base de una importación que no supera el valor de 7.000 pesos mensuales se hable de maniobras fiduciarias. Además aclaro, el pago de las facturas de

---

<sup>258</sup> Carta dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por un ciudadano argentino, Antonio Fossati, (Buenos Aires 20 abril 1940). Archivo BUC. Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

las editoriales que represento los efectúo en Buenos Aires, en moneda argentina, con cargo a mis fondos aquí depositados; destino el producto de ventas de las ediciones en España a los gastos que ahí demanda el sostenimiento de mi familia, y con el sobrante, escaso, adquiero libros que envío a libreros amigos aquí radicados. Señalo que apelo a estos medios de compensación por no existir otros hábiles, pues el Instituto Español de Moneda Extranjera deniega sistemáticamente todo pedido de divisas destinadas al pago de importaciones de libros y revistas de procedencia argentina, pero en cambio exige de sus exportadores a nuestro país que pongan a su disposición las divisas aquí devengadas para el reembolso de las cuales no le opone la Argentina ninguna dificultad.

Es de justicia obtener para nuestras ediciones en el mercado español el mismo trato que merecen las de este en el nuestro. Corresponde pues que el Gobierno español en base a la reciprocidad conceda libre entrada a nuestras ediciones y conceda para el pago de las mismas una cuota de divisas semejantes a la que ya han obtenido las revistas y libros franceses, en el reciente tratado comercial concertado entre ambos países. Esto no significaría ningún privilegio.

Por otro lado, en países como Argentina y México se articularon campañas hostiles al libro español.

Un corresponsal argentino comunica a esta Cámara que al parecer ha comenzado en Buenos Aires una campaña contra el libro español tomando como base y argumento las dificultades que España opone a la introducción de ciertos libros argentinos. No se dice nada sobre que el Gobierno español prohíba la importación de obras contrarias al movimiento o las producidas por editores piratas. Se afirma únicamente que España no facilita o dificulta la entrada del libro argentino y se citan casos concretos. Nos dice nuestro corresponsal que se manifiesta una hostilidad declarada hasta el extremo de que varias editoriales argentinas van a elevar una instancia al Ministro de Relaciones Exteriores revelando el importe de las importaciones de libros españoles en la Argentina y sosteniendo que como no hay contrapartida puesto que no pueden exportarse libros a España, ello supone prácticamente una evasión de capitales. Ante estos hechos se sugiere que se estudie una simplificación de los trámites necesarios para la importación de libros argentinos<sup>259</sup>.

Conscientes del riesgo de represalias, los editores españoles rechazaron las medidas proteccionistas con las que, supuestamente, el Gobierno trataba de relanzar su negocio. De hecho, el Presidente de la Cámara del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena sugería que antes de que los países americanos protegiesen su producción ante la competencia española mediante disposiciones legales, era mejor que espontáneamente se estableciese un sistema de intercambio que permitiera la entrada del libro americano en España y asegurase la del nuestro en América<sup>260</sup>. Sugiere dar libre entrada a los libros americanos legalmente editados después de cumplidos los trámites de orden administrativo y económico vigentes y excluidos los libros contrarios al Movimiento.

La realidad es que el comercio de libros entre España y Argentina<sup>261</sup> estuvo descompensado durante más de una década por una situación desigual respecto a las cargas arancelarias de uno y otro estado. Mientras la entrada en Argentina de libros editados en España era

---

<sup>259</sup> Carta de la Cámara del Libro de Barcelona a Lasso de la Vega sobre campaña contra libro español en Argentina (14 mayo 1940). Archivo Lasso de la Vega-BUC. Caja 2

<sup>260</sup> Carta del Presidente de la Cámara de Barcelona, Joaquín Sopena, a Javier Lasso (27-9-1939). Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

<sup>261</sup> Ver el estudio de Fernando Larraz *Una historia transatlántica del libro: relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950)*, Gijón: Trea, 2010, capítulo 6

absolutamente libre, España aplicaba un gravamen de importación de 0,10 pesetas oro por cada 100 kilos a libros en lengua española editados en el extranjero, a lo que se añadían los gravosos aranceles sobre la encuadernación.

Entre 1939 y 1941 fueron además muy frecuentes las retenciones de envíos de libros americanos en la aduana de Barcelona, y no solo por motivos de censura. A veces era la falta de permisos de importación. Otras veces, se trataba de una simple obstrucción burocrática. Además, los importadores de libros americanos debían afrontar dificultades logísticas que entorpecían el comercio mundial en general.

Para tratar de resolver estos desequilibrios el Gobierno argentino impulsó la firma de un acuerdo con el que se aspiraba a regularizar en su globalidad las relaciones culturales entre ambos países. El acuerdo se firma en Madrid el 7 de septiembre de 1942, y en el art. 2º se señalaba que “los dos países darán las máximas facilidades para el intercambio de publicaciones (libros, revistas y periódicos) que, por su finalidad superior, sirvan para una mayor comprensión de los problemas fundamentales de la Argentina y España. El art. 5º estaba dedicado en exclusiva al ámbito del libro- Se estipulaba que el comercio editorial entre ambos países quedaba a partir de entonces exento de trabas de ningún tipo, a excepción de la actuación de la censura –con la sola limitación de los que por su índole, sean contrarios al orden vigente en el país destino-.

El texto se amplió en abril de 1943 para dar mayor cobertura al libre intercambio de publicaciones. El acuerdo incluía además la supresión de aranceles consulares, así como el indefinido compromiso de ambos estados de gestionar con las compañías navieras las rebajas de fletes, como ya se había hecho en España. Para los editores de ambas orillas, el acuerdo resultaba sumamente prometedor.

Pero el Gobierno de España no ratificó el acuerdo hasta noviembre de 1943 y, después lo incumplió sistemáticamente por motivos diversos, en parte por la escasez de divisas para pagar importaciones, el férreo control de las licencias de importación, la burocratización agobiante, una censura que vigilaba con especial celo los libros extranjeros y la descoordinación entre organismos.

Augusto Matons, Secretario de la Delegación del INLE en Barcelona, elaboró un informe en marzo de 1943, que entregó a Pemartín, sobre la situación de las relaciones editoriales con los mercados americanos. El informe detallaba que para los editores españoles el principal inconveniente era la carencia de transportes, mientras que para el editor argentino el mayor obstáculo lo constituían la censura y la escasez de divisas de España, reconociendo que esto significaba una situación de inferioridad para la edición de aquel país, por cuanto la Argentina admitía la libre competencia de nuestro libro. La entrada de libros argentinos se hacía por cuenta de compensación, mientras que los libros españoles eran pagados en divisa. Como solución Mattons proponía abrir una cuenta global de importaciones y exportaciones de libros, dado que nuestras exportaciones siempre serían superiores a nuestras importaciones. Y respecto a la censura, solicitaba que dicho control se efectuase con rapidez y con cierta benevolencia.

Las facilidades para exportar libros a Argentina se quisieron hacer extensivas al resto de países americanos, por ello el INLE<sup>262</sup> a finales de 1945 acordó elevar un escrito al Ministerio de Industria y Comercio solicitando la modificación del régimen de exportación de libros, en el

---

<sup>262</sup> “Simplificación de trámites para la exportación”, Sección Correo Profesional de Editores y Libreros de *Bibliografía hispánica*, enero 1946

sentido de aplicar para todos los países lo que regía para la República Argentina. El director general de Comercio y Política Arancelaria aprobó la propuesta, y en consecuencia, se concederían licencias globales de exportación para todos los países a nombre del INLE, con cargo a las cuales podrían efectuar sus exportaciones los editores y libreros. No obstante esto no supuso la derogación del régimen vigente. Por lo que al mismo tiempo se permitiría a los exportadores que así lo desearan solicitar individualmente los permisos, tanto para partidas determinadas como globales.

Pero ni la censura abrió la mano ni se redujeron los trámites de importación. Y aunque los editores argentinos se quejaron reiteradamente por el incumplimiento del tratado por parte de España, tampoco tomaron represalias. La Embajada Española se amparaba en el artículo que decía que el intercambio se efectuaría según los acuerdos comerciales vigentes, lo que incluía el obligatorio permiso del Ministerio de Industria y Comercio, que suponía una enojosa tramitación. Además los editores argentinos protestaron porque en varias ediciones españolas se suprimían o tachaban los nombres de autores, traductores, recopiladores y exiliados republicanos.

En octubre de 1946, España y Argentina firmaron un nuevo convenio cultural en el que se establecía en términos de reciprocidad el intercambio de libros y revistas. Ahora ya no existía el problema de las divisas, pero la censura provocó que España siguiera incumpliendo el tratado. En palabras de Fernando Larraz<sup>263</sup>:

*(...) el hecho era especialmente lacerante en el caso de obras prohibidas en España, pero que los editores españoles imprimían y publicaban en América. Los argentinos veían atónitos cómo esa competencia resultaba desleal y cómo la censura funcionaba como pretexto para proteger a la industria editorial española. Lo cierto es que la censura, que tantas disfunciones causó a la producción literaria durante el franquismo, en cambio, favoreció en cierto sentido el negocio de la industria editorial. La censura terminó por ser una de las claves de su éxito empresarial.*

## 4. EL INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL

### 4.1. LOS ANTECEDENTES DEL INLE

Históricamente los precedentes más próximos a la creación del INLE hay que buscarlos en las corporaciones profesionales que intentaron organizar la industria del libro, y como organismos de la administración pública creados expresamente para gestionar la política del libro hay que citar el Comité Oficial del Libro (1920) y el Instituto del Libro Español (1933), ya comentados en el capítulo.

Paralelamente a estas realizaciones concretas, me parece interesante constatar la idea, expuesta reiteradamente, tanto por intelectuales como por los profesionales del sector, de la necesidad de un organismo central que dictase medidas relativas al comercio del libro español, sobre todo en América. Una de las propuestas más tempranas es la que formuló en 1892 Rafael Gutiérrez Giménez con el nombre de una Empresa nacional de propaganda de las letras hispano-americanas con carácter de empresa mercantil e industrial que tendría representación en todas las poblaciones importantes de España y América y que funcionaría como intermediario entre los productores y consumidores. Sus objetivos eran muy claros: promover tanto la producción como el consumo y adquisición del libro español, y para ello

---

<sup>263</sup> LARRAZ, Fernando. Una historia transatlántica del libro: relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Gijón, Trea, 2010

proponía la creación de depósitos internacionales de libros, impedir el fraude, formar bibliotecas y crear instrumentos de propaganda como boletines o carteles de novedades.

En el marco de la Conferencia de Editores y Amigos del Libro de 1917, el editor catalán Gustavo Gili presentó un proyecto de “Cámara del Libro Español” ante la urgente necesidad de copar los mercados americanos, pero con el objetivo más ambicioso de diseñar una auténtica política del libro.

Entre sus objetivos, y desde el punto de vista cultural, la Cámara debía facilitar las relaciones entre autores, editores, libreros; servir de conexión entre España y América, tanto en el terreno intelectual como comercial; simplificar los trámites para la inscripción de obras en el registro de la Propiedad Intelectual; crear una fiesta anual del libro, etc. Así como conseguir la representación en instituciones económicas que directamente le incumbieran; gestionar rebajas en el franqueo de libros para América; formar agentes que visitasen las naciones de habla hispana para proporcionar datos que contribuyan a la expansión de los mercados americanos. Su proyecto quedó en el aire, pero fue la base de las futuras Cámaras Oficiales del Libro.

Por su parte, Calvo Sotelo retoma la idea de formar un Sindicato como instrumento de cooperación entre editores y libreros en aras de lograr una mayor difusión del libro, siguiendo los intentos frustrados del Sindicato de Editores y Libreros de febrero de 1893 o el recogido en las conclusiones de la Conferencia de Editores y Amigos del Libro de junio de 1917, donde se formuló la conveniencia de la formación de un Sindicato de editores.

Entre las conclusiones de la Conferencia del Libro de 1927, también se acuerda la necesidad de formar un organismo (Cámara Oficial del Libro) que se encargaría sobre todo de las tareas de propaganda y difusión del libro.

Igualmente, el escritor Vicente Castro Les, en un artículo sobre la exportación del libro español, expresaba la necesidad de crear en el país un organismo fuerte y activo que estableciese una red distribuidora en América y que concediera al comercio el crédito y las facilidades que puede apetecer, organizando a la vez un sistema intenso de propaganda para que el conocimiento de nuestros libros llegase a los más apartados rincones.

Por último, casi diez años después y en un contexto muy diferente: el del fin de la Guerra civil y el triunfo de los fascismos en Europa, la Cámara del Libro de Barcelona con fecha 7 marzo 1939 elabora un informe dirigido a Javier Lasso de la Vega donde dedica todo un apartado a la necesidad de un organismo ordenador<sup>264</sup>.

“No puede hablarse de una política del libro con medianas probabilidades de acierto sin que exista en el país una poderosa organización corporativa, un órgano ordenador y ejecutor, que encauce dicha política”.

Sugiriendo:

“(…) debería reunir en su seno a todos los elementos que directa o indirectamente intervienen en el libro. Hasta ahora las Cámaras han agrupado sólo a editores, libreros, artes gráficas, encuadernadores, industria papelera editorial. En el nuevo organismo se debería dar cabida a: autores, traductores, adaptadores, bibliotecarios, entidades científicas y culturales que publican libros, ilustradores,... El nuevo organismo debería abarcar todas las profesiones y actividades a semejanza de la “Deutsche Schriftumskamer”, la cual reúne además las

---

<sup>264</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

representaciones oficiales de los departamentos administrativos del Reich que intervienen de un modo directo o indirecto en el libro”.

Sus funciones habrían de ser: consultiva y asesora de la Administración Pública; formación de censos y profesionales completos; elaboración de estadísticas; publicaciones bibliográficas; bolsas de trabajo; juicios arbitrales; asistencia regular a congresos, asambleas internacionales profesiones; orientación de la producción en cuanto a su contenido y a su presentación; regulación de horarios de trabajo, salarios.

Pero antes de que se diera carta legal el INLE en 1939, se formularon otros proyectos que pretendían organizar institucionalmente la política del libro.

Hay que constatar también la elaboración de informes de ingenieros españoles que viajaron a Alemania para conocer la organización nacionalsocialista en el campo del libro con el objeto de servir de guía y trasladar a España su sistema. He aquí las sugerencias de Martín Balzola en su informe sobre la organización del libro en España de 17 de agosto de 1938<sup>265</sup>:

“Los impresores como tales deberían formar parte de la Comisión Reguladora correspondiente dentro del Ministerio de Industria y Comercio. Editores y representantes de librerías formar una asociación similar a la *Bürsenverein* con agrupación forzosa, formaría lista y revista bibliográfica y catálogos y fichas de libros y una biblioteca. Respecto al mercado internacional, debe formar un Sindicato de venta y compras, el primero para la exportación para obtener el máximo de propaganda y de divisas, el segundo para obtener la máxima difusión de los libros de interés extranjeros al menor coste. De máximo interés obras técnicas extranjeras. Actualmente exportamos poco, importamos poco también, especialmente de Italia. Para el futuro conviene intensificar el intercambio como base de nuestra cultura. La asociación de impresores convendría formase parte de una Cámara Superior de Cultura, incluyendo las actividades análogas, y dependería del Ministerio de Educación”

Pese a ello, en un documento que escribe Lasso de la Vega bajo la rúbrica “Política del libro”, aun admitiendo que la organización alemana era la mejor, consideraba que era preferible la reorganización de organizaciones existentes –Cámaras del libro, el Comité Oficial del Libro y el Instituto del Libro- y su ensamblaje en un fin político y de cultura común.

“La organización alemana, que nos parece la mejor, hubiera sido difícil crearla en España de un solo golpe, por ello hemos creído preferible acercarnos a todo lo que tiene de mejor aprovechando las organizaciones de que ya disponía el estado por el arraigo que tiene ya entre nosotros y el prestigio alcanzado en el extranjero, América Latina.

Hemos concebido la organización en un sentido paralelo al alemán, distribuida entre un Consejo Nacional para la dirección y un Sindicato Exportador para el comercio, el primero obligatorio y el segundo voluntario”.

Lasso llegó a redactar varios documentos<sup>266</sup> en los que se puede observar una cierta evolución en su idea de cómo organizar la política del Estado en relación con el libro. En sus primeras manifestaciones afirmaba que la política del libro podría ser orientada y aún realizada por un organismo central, apoyado por el Estado pero no propiamente oficial. “La no oficialidad le permitía mayor independencia en su actuación en América. El Estado debería ayudarlo y controlarlo. A parte de los fondos que recibiera del Estado podría contar con aportaciones de los fabricantes de papel, dada la protección desmesurada de que disfruta en España el papel destinado a la edición”.

---

<sup>265</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2.

<sup>266</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2



Después afirmaría que, el comercio del libro y su producción debían estar sometidos a una ordenación nacional, al objeto de evitar la competencia ilícita, apoyar los esfuerzos, y mejorarlo en todos los órdenes sustituyendo la competencia por la cooperación y el mutuo auxilio bajo el amparo del Estado. Aunque como medida temporal, decía, convendría que las Cámaras del libro comenzaran de nuevo su actividad, pues como elementos técnicos podrían con sus conocimientos contribuir a encauzar los problemas del libro en la hora presente. Cita su labor cooperativa como argumento para mantenerlas aunque “tal vez articuladas a la dependencia de un organismo superior que coordine la labor a favor del libro en España y América”. Y estima que podrían realizar una labor útil.

Poco a poco desarrolló la idea de crear un organismo central encargado de decidir, orientar y dirigir en el más amplio sentido, la política nacional del libro, donde las propias Cámaras del Libro serían las encargadas de ejecutar dicha política. Primero le llama Comité Sindical del Libro, como complemento al Comité Sindical del Papel, luego Instituto Central del Libro con funciones de asesorar al Estado en cuestiones económicas, especialmente en todo lo relativo al comercio interior y exterior. Dicho organismo estaría formado por representantes del Estado (Ministerios de Educación, Industria y Comercio, Estado y acaso Organización Sindical); por los elementos productores del libro (autores, fabricantes de papel, editores, impresores, grabadores, encuadernadores, libreros) y corporativos (Cámaras Oficiales del Libro, Sociedad de Autores, Instituto de España, Cuerpo Archiveros y acaso FET y de las JONS).

Por último, elabora todo un organigrama encabezado por un Consejo Nacional del Libro encargado de los problemas generales y directrices fundamentales de la política del libro que había de contribuir con los medios a su alcance a la autarquía en el campo del libro. De dicho Consejo, para desarrollar sus funciones, hacía depender tres organismos. Un Instituto del Libro, encargado de los problemas de contenido del libro y su arquitectura y difusión en relación con los fines internacionales, políticos y culturales del Estado, con representación iberoamericana y delegaciones en la hispanidad, que como novedad habría de incluir ordenanzas sobre literatura perniciosa e indeseable y velar por el decoro y presentación del libro y su acento hispano. Un Comité Oficial del Libro que habría de bregar con los problemas de la industria y comercio del libro en su aspecto económico y fiscal, en sus relaciones con el Estado, procurando dictar normas para lograr el abaratamiento del libro, exenciones arancelarias, rebaja de tarifas, concesión de primas a la exportación. Por último, una Cámara Oficial del Libro que abarcaría los problemas de cooperación, arbitraje, aprendizaje, tributarios, propaganda, seguros y habría de establecer servicios y ordenanzas en relación con los intereses profesionales y de empresa. Obsérvese que ya no habla de las cámaras sino de una única Cámara Oficial del Libro.

Gráfico 3



Muy diferente es la propuesta de una Cámara Nacional del Libro, recogida en un documento sin fechar, que incluye el membrete del Servicio Nacional de Propaganda, Ediciones y Publicaciones, y que parece podría haber sido redactado por Dionisio Ridruejo. Esta Cámara se hacía depender del Servicio Nacional de Propaganda y pretendía organizar corporativamente el gremio “en razón del carácter totalitario del Estado y la necesidad de que la producción y el comercio del libro –máximo instrumento de la obra de educación popular que acomete el nuevo Estado- dejen de ser considerados como tarea meramente privada”.

La participación del Estado liberal en el problema del libro quedó limitada, a la defensa de los intereses de productores y comerciantes. Solo el empeño de difundir el libro en Hispanoamérica determinó en algún momento que el Estado dictase ciertas disposiciones. Y cita la creación en 1920 del Comité Oficial del Libro o la creación de las Cámaras del libro de Madrid y Barcelona, que –según quién redacta el texto- tuvieron un carácter corporativo, donde se mezclaba una cierta defensa de la cultura y de la literatura nacionales con propósitos de pura propaganda. (No se cita la iniciativa del ILE).

El carácter totalitario del Estado y la necesidad de que la producción y el comercio del libro, máximo instrumento de la obra de educación popular que acomete el Nuevo Estado- dejen de ser considerados como tarea meramente privada, obligan a plantear y resolver con modo y fines distintos el problema de las Cámaras del Libro.

Dispongo:

1º. Se crea la Cámara Nacional del Libro, como organismo central de consulta y dirección para todos los problemas relativos a la producción y difusión del libro español, dependiente del Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio del Interior.

2º. Pertenerán obligatoriamente a la Cámara todos los escritores y publicistas de libros, editores, libreros, intermediarios, impresores, grabadores, encuadernadores y fabricantes de papel de España.

3º. Presidida por el Jefe del SNP, su vice el Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas del MEN. Formarán parte de la Junta Superior: el Delegado Nacional de Prensa

y Propaganda del Movimiento, un representante del Instituto de España, dos de los escritores, otro de los editores, libreros, impresores, encuadernadores y grabadores, otro del Comité Sindical del Papel y Cartón, un secretario del departamento de Censura. Todos han de ser militantes de Falange.

4º. Como organismo de consulta, la Cámara será oída y se le solicitará informe, necesariamente, en cuantas decisiones del Estado y del Movimiento afecten a la producción y comercio del libro, al régimen de PI y a la fijación del precio del papel.

5º. Sus fines: trazar periódicamente las directivas generales de la política del libro; designar representantes en cuantos organismos de la Administración del Estado traten cuestiones relacionadas con la producción y comercio del libro. También podrá nombrar representantes en las empresas privadas; establecer y aplicar las normas sobre importación y exportación; publicar y difundir un Boletín bibliográfico español

6º. Se crea adscrito a la Cámara un Registro Oficial de Publicistas, en el que figurarán, obligatoriamente, todos los españoles que hayan publicado al menos un libro.

7º. Sus recursos procederán de las cuotas de los socios.

Ridruejo tenía una concepción orgánica de la Propaganda, división en departamentos, con una cabeza rectora que determinaría el funcionamiento de los distintos órganos subsidiarios. El Departamento de Ediciones no debía limitarse a publicar ciertas obras o a ejercer la censura, sino a organizar corporativamente el gremio. Esta idea queda reflejada en el artículo 2º, y ello en razón del carácter totalitario del Estado y las necesidades de que la producción y el comercio del libro –máximo instrumento de la obra de educación popular que acomete el nuevo Estado- dejaran de ser considerados como tarea meramente privada. Esta Cámara del Libro se hacía depender del Servicio Nacional de Propaganda. Estas ideas no se plasmaron cuando se creó el INLE: ni el encuadramiento corporativo se llevó a cabo, ni la dependencia administrativa, pues se adscribió a la Subsecretaría de Prensa y Propaganda<sup>267</sup>.

Este proyecto de Cámara del Libro redactado como decreto, fue comentado por Javier Lasso de la Vega en una carta que dirige a Ramón Serrano Suñer<sup>268</sup>. En ella, Lasso expone críticas muy contundentes a este decreto que califica de “pobre y no meditado que no recoge un tercio de la legislación anterior y está redactado con precipitación y rapidez”. Son numerosas las contradicciones que aprecia Lasso de la Vega, como la existencia de distintos organismos dedicados a la política del libro que se solapan en sus competencias –el Instituto del Libro no derogado, el Comité Sindical del Papel y Cartón-, la no vinculación de dicha política al Ministerio de Educación Nacional, o la incongruencia de unos postulados, que en consonancia con la ideología falangista, dicen primar los aspectos espirituales, sobre los puramente económicos defendidos por la iniciativa privada, cuando en la redacción de todo el decreto se dice todo lo contrario.

“Querido Ramón he recibido tu carta y el proyecto de Cámara del Libro. En mi proyecto de reorganización de este Ministerio figura una sección dedicada a la Política del Libro. En Educación lo que puede hacerse por medio de la palabra o enseñanza hablada no es nada en comparación con lo que se hace y debe hacerse por medio del libro, su necesario complemento. Una educación sin libros es inexplicable. Si el Ministerio de la Gobernación ha de influir en la política del libro, dada la esfera de sus actividades.

---

<sup>267</sup> RUIZ BAUTISTA, E. Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo (1939-1945), Gijón, Trea, 2005

<sup>268</sup> Archivo BUC-Fondo Lasso de la Vega. Caja 2

Creo que la política del libro debe ser en su línea superior, política del Gobierno, materia de Consejo de Ministros y en su ejecución del Ministerio de Educación. No nos dejemos influir por las fórmulas de otros países.

El Instituto del Libro no derogado, cuyos objetivos responden con mucha exactitud a las necesidades del libro, y por otra parte Industria y Comercio a su vez, tendrá que modificar su Sindicato de Papel y Cartón en Sindicato del Libro, con lo cual habrá tres organismos en espera de la reforma sindical.

Nosotros esperábamos, perfilando nuestro proyecto de organización del Sindicato del Libro con los fines que el problema del libro ha demostrado tener que realizar a que el Ministerio de Organización Sindical diera contestación a lo que le tenemos pedido, pero no ha podido contestar por estar pendiente de aprobación la Ley.

La primacía del valor espiritual del libro no resuelve el problema del libro español, no obstante estar formulada antes de 1920, cosa que se ignora en el preámbulo de la ley.

¿Es que existiendo un Ministerio de Educación, la educación popular va a depender de otro Ministerio? Se le atribuyen en el art. 1º a la Cámara los fines referidos a la producción y difusión del libro. En este caso la acción de la política del libro no es la esfera espiritual, sino la industria y el comercio del libro. Este carácter queda patente en su composición que de sus 8 miembros 7 representan a la industria y el comercio del libro y uno el pensamiento y la ideología -los escritores-.

Si el Ministerio de la Gobernación ha de regir la educación popular para imprimirle el carácter propio de los Estados totalitarios, la composición de esta Cámara debería tener otras representaciones, de autoridades políticas y científicas, Academias e instituciones, las únicas llamadas por su capacidad a facilitar orientaciones sobre estas directrices.

En el art. 3º se subraya más todavía el carácter ineficaz de la Cámara para los fines propios de una institución afecta a la política ideológica, pues predominan los representantes de la industria y del comercio del libro sobre los técnicos. Un solo representante debe orientar sobre la Filosofía, Derecho, Física, Medicina, Historia.

Sobre la participación de Ediciones del Estado en esta Cámara es mi deber hacerte algunas consideraciones. Un Estado publicista de novelas, poemas y obras de medicina que actúa con capital mercantil y económico propio, no con base presupuestaria, y que dispone de la facultad de impedir la publicación de una obra mediante el ejercicio de las funciones de censura o de la falta de papel, me parece digno de profunda meditación. Si las ediciones del Estado se circunscribieran a dar a conocer -como en Portugal- la obra realizada por el Estado en economía, obras públicas, enseñanza, bibliotecas, lecturas para el soldado, libros de texto, nada tendría que hacer esta sección en dicha Cámara, ni levantaría suspicacias, ni crítica en ningún terreno.

Otro término que deberemos considerar y ofrezco a tu meditación es este: ¿has pensado en el daño que se hará a la difusión del libro en América de donde depende el 50% de nuestra posibilidad editorial, y por tanto del libro no sólo como mercancía sino como vínculo de unión espiritual con aquellas repúblicas y a la Hispanidad si se anuncia que nuestra producción estará dirigida por el Servicio Nacional de Propaganda del Estado.

En el artículo 5º se vuelve a dibujar la Cámara como un organismo con fines industriales, producción y comercio del libro, PI y fijación del precio del papel, materias que incumben al Ministerio de Industria y Comercio, el cual dispone ya del Sindicato del Papel para tales fines, con representación de los Ministerios interesados.

En este mismo artículo se confiere a la Cámara la tarea de fijar las directrices de la "política del libro". Si esta política es la espiritual que se pregona en el preámbulo y no la material que se critica es atinado recordar que en éste tienen la representación más numerosa los grabadores, encuadernadores, editores, libreros, etc.

En el apartado b) se le confiere la facultad a la Cámara de nombrar representantes en las empresas privadas. Aquí es deber mío llamarte la atención. Si estos representantes van a sueldo de la propia empresa privada y si este sueldo es grande, el representante quedará ligado por enchufe a la empresa privada de la cual va a depender. Pronto no habrá editorial sin representante.

En este apartado c) creo que se dice establecer, pero no aplicar las normas. ¿es que va la Cámara a aplicar las tarifas aduaneras, pesar los paquetes, etc.?

d) ¿Publicar el Boletín? Siempre que la confección se haga en colaboración del Registro de la PI y del Depósito Legal.

En el art. 7º se olvida que si el libro ha de ejercer una función terapéutica en nuestro movimiento salvador el Estado tiene que hacer un sacrificio muy superior.

Visto así rápidamente el proyecto, solo me resta añadir que resulta más pobre desde todos los puntos de vista que el proyecto de Gutiérrez Jiménez de 1892 de las Cámaras y el del Instituto del Libro, y por último no tiene presente que hay organizaciones del libro casi perfectas en el extranjero, especialmente en Alemania y que merced a nuestro régimen se podrá resolver el problema del libro español, cosa que este Decreto no resuelve ni podrá resolver y además impedirá que se resuelva por no estar plegado a los verdaderos temas en que se mueve el problema del libro.

Ya sabes que a mí no me interesa acaparar funciones pero es mi deber patriótico velar porque las cosas se hagan bien”.

Lo cierto, es que Lasso de la Vega pese a sus cualificados conocimientos sobre política del libro, no olvidemos que además era funcionario del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, no formó parte del grupo que dio nacimiento al INLE, quizás ¿por estar pendiente de expediente de depuración por pertenecer a la masonería?, o ¿por no estar en sintonía con los círculos falangistas a los que estuvo ligado el futuro presidente del INLE, José Pemartín?

La realidad fue que el Estado franquista para desarrollar su política del libro se dotó de varios organismos, que actuaron de forma descoordinada, unos con competencias específicas para el libro, como fueron: el INLE (1939), el Sindicato Nacional del Papel, Artes Gráficas y Prensa (1941) o la Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro (1951), y otros englobados en organismos, como la Sección de Censura de Libros, inscrita dentro del organigrama de la Delegación Nacional de Propaganda donde quiera que se encontrase, en el Ministerio de la Gobernación o en la Vicesecretaría de Educación Popular, creada en mayo de 1941 y a su vez integrada dentro de la Secretaría General del Movimiento; la Comisión Dictaminadora de Libros Escolares de Primera Enseñanza del Ministerio de Educación Nacional o la Junta Asesora de Prensa Infantil (1952) que debía rendir cuentas al Ministerio de Información y Turismo. También debemos incluir al Ministerio de Industria y Comercio, ya que autorizaba o denegaba el establecimiento de nuevas empresas e industrias, pero sobre todo, será crucial para la buena o mala marcha del comercio exterior del libro, un organismo dependiente de él: el Instituto Español de Moneda Extranjera, ya que intervenía en el control e intercambio de divisas. Por último, la Junta de Relaciones Culturales y la Dirección General de Relaciones Culturales, ambas dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, desarrollarán su labor en el campo de la instrumentalización de la política cultural en el exterior a través del libro.

## 4.2. EL INLE (1939-1957)

De todos ellos fue el Instituto Nacional del Libro Español el “Organismo central de consulta y dirección de todos los problemas relativos a la producción y difusión del libro español”. Para su estudio durante el franquismo<sup>269</sup> podemos establecer dos periodos cuya fecha bisagra se puede situar en el Decreto de 28 de junio de 1957 por el que el Instituto experimenta cambios sustanciales en su organización administrativa.

El impulsor de la iniciativa de creación del INLE fue Manuel Torres López, Delegado Nacional de Propaganda. Puesto en manos de Falange, *el INLE aspiraba a ser un instrumento de la revolución de tipo preeminentemente espiritual, que pone principal acento en restablecer el imperio moral de España en el mundo, empresa que necesita controlar la producción editorial, vehículo del pensamiento, y encauzarla en derechura a su finalidad*” (BOE 22 mayo 1941).

Fue la temprana Orden Ministerial de Gobernación de 23 de mayo de 1939 la que dio nacimiento y personalidad jurídica al INLE bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación. Pero no se haría operativo hasta abril de 1941, cuando se aprueba su primer Reglamento por Decreto de 19 de abril de 1941.

El reglamento fue redactado por una comisión compuesta por Pedro Laín (Jefe de la Sección de Ediciones de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda), Miguel Artigas (director de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas), Francisco Lencín Corcuera (Presidente de la Cámara del Libro de Madrid), Joaquín Sopena (Presidente de la Cámara del Libro Barcelona), Joaquín Calvo Sotelo (secretario de la Cámara del Libro de Madrid) y Augusto Matons (secretario Cámara de Barcelona). También parece que intervino Dionisio Ridruejo. La puesta en funcionamiento del INLE aún se retrasó hasta 1942. El motivo fue el traspaso de las competencias de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Educación Popular. Esto obligó a dilatados trámites burocráticos para rectificar su reglamento, pues al ser traspasadas sus funciones a la Vicesecretaría de Educación Popular, hubo necesidad de hacer la oportuna rectificación en el Reglamento que fue promulgado en el Decreto de 6 de abril de 1943. Dos veces más cambiaría el INLE de adscripción administrativa. Por el Decreto-ley 27 julio 1945 pasaría a depender del Ministerio de Educación Nacional a través de la Subsecretaría de Educación Popular, y, posteriormente en 1951 al Ministerio de Información y Turismo a través de la Dirección General de Información hasta la desaparición del Régimen.

El INLE fue un organismo autónomo dependiente de la Vicesecretaría de Educación Popular, pero en cualquier caso su autonomía de acción fue relativa pues había de limitarse a ejecutar las consignas, primero de la Dirección General de Propaganda, después del Ministro Secretario de FET y de las JONS. De hecho con el nuevo reglamento, según Ruiz Bautista<sup>270</sup>, se sanciona aún más esta subordinación a la Vicesecretaría, con lo cual difícilmente podía ejercer una positiva tutela del sector.

En dicho reglamento se establecía que la máxima autoridad del INLE sería nombrada y cesada por el ministro secretario general de FET y de las JONS, de quién recibiría órdenes y consignas

---

<sup>269</sup> El INLE ha sido objeto de estudio únicamente en su trayectoria de los años cuarenta, y nunca monográficamente, sino dentro de trabajos más amplios: Ruiz Bautista le dedica un capítulo en *Los señores del libro* y Fernando Larraz unas páginas al hablar de la política del libro del régimen franquista en *Una historia transatlántica del libro*.

<sup>270</sup> RUIZ BAUTISTA Eduardo Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo (1939-1945), Gijón, Trea, 2005.

y a quien se atribuía la interpretación correcta del reglamento. Para la Vicesecretaría de Educación Popular, y para su Delegación Nacional de Propaganda, el INLE no era más que un medio de transmisión de sus decisiones y directrices a libreros y editores, fundamentalmente en cuestiones de censura.

Según la citada orden de 23 de mayo de 1939, el INLE<sup>271</sup> se crea como único organismo central de consulta y dirección de todos los problemas relativos a la producción y difusión del libro español. Como organismo de consulta debía ser oído en cuantas decisiones del estado afectasen a la producción y comercio del libro. Sus áreas de actuación, que no variaron a lo largo de su dilatada existencia, fueron: dirigir la política interior y exterior del libro, intensificar su propaganda a través de certámenes, fiestas, ferias, exposiciones y concursos; organizar la representación de España en las asambleas y congresos internacionales relacionados con el libro; dictar normas para combatir la competencia ilícita; publicar periódicamente un boletín bibliográfico de los libros aparecidos en lengua española y proseguir la edición del “Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana” y contribuir con todos los medios a su alcance al mejor cumplimiento de la misión cultural y educativa que correspondía al libro español.

En las Disposiciones adicionales de ambos se decía que el INLE asumiría todas las funciones que hasta ahora habían sido ejercidas por las Cámaras del Libro de Madrid y Barcelona, siendo el organismo encargado de informar sobre el establecimiento y traspaso de las mismas. Aunque el espíritu y funciones de las Cámaras no iban a desaparecer, sino que, por el contrario, pasaron íntegramente con un acrecentamiento de las posibilidades y de los medios con que hasta ahora se contaba para cumplirlas.

Surge el INLE como un organismo con atribuciones de autoridad y de acción que las Cámaras no detendrán nunca. [...] que las Cámaras nunca llegaron a un acuerdo a la hora de reglamentar la venta del libro. En las actividades del INLE no se presentarán esos obstáculos. Sus acuerdos tendrán fuerza de obligar para todos cuantos intervienen en la producción del libro; y el Presidente estará facultado para imponer sanciones económicas a quienes los burlen. Esta es una diferencia sustancial con las Cámaras. El INLE aparece dividido en tres secciones, quedando adscritos tanto autores, editores, libreros, representantes de artes gráficas. Pondrá la aptitud específica y profesional de cada uno al servicio de la dignificación del libro y relegará a un rango subordinado las rivalidades y competencias de grupos. El Estado al convocar a cuantos intervienen en la creación del libro quiere desterrar de una vez para siempre ciertas clásicas pero estériles antinomias y movilizar a todos, simultáneamente, para la más eficaz defensa de nuestra cultura, de la cual es el libro instrumento fundamental de propagación y arraigo.

El INLE es uno, pero no desconoce la existencia de zonas de España donde la industria editorial tiene un espesor y fuerza considerables. Por ello bajo su órbita nace al mismo tiempo, la Delegación de Barcelona, que acaso acompañe más adelante alguna otra más, si el mapa editorial español así lo aconseja<sup>272</sup>.

Los objetivos del INLE eran simultáneamente de tipo político y económico y su carácter estatal diferenciaba su naturaleza de la de las cámaras. De hecho, las cámaras tenían una cierta connotación descentralizadora y liberal que las identificaba con periodos democráticos. El 27 de julio, la de Madrid, y el 3 de diciembre de 1942, la de Barcelona, celebraron sus últimas sesiones y ambas cámaras entregaron sus bienes al INLE, aunque se disolvieron más tarde.

---

<sup>271</sup> MANFREDI CANO, D. *El Instituto Nacional del Libro Español*, Madrid, Publicaciones Españolas, 1963.

<sup>272</sup> “Un decreto fundamental”, *Bibliografía hispánica*, abril-mayo 1941, n. 2

La personalidad jurídica del INLE quedó definida por ser un organismo nacional, autónomo subvencionado por el Estado, que ejercía por delegación la función directiva de la política del libro español. Era obligatoria la asociación al Instituto para todos los industriales y comerciantes de libro; sus decisiones obligaban a todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción y al comercio del libro; pero a la vez en todas sus decisiones intervenían los representantes de las actividades relacionadas directamente con la creación, producción, distribución y venta del libro, elegidos en el seno de la Organización Sindical.

El INLE, como institución tenía un doble carácter<sup>273</sup>. Por una parte era cuerpo consultivo, organismo al cual debían atender los distintos departamentos del Estado, y, por otra, cuerpo ejecutivo, encargado de la difusión y protección del libro español, publicación de bibliografías, colaboración oficial en toda la política del libro, incluso en la distribución del papel.

Orgánicamente se estructuraba en órganos colegiados: la Junta de Gobierno, el Pleno, tres Secciones y cuantas Delegaciones se formaran, y órganos unipersonales: el Presidente, el Secretario General, el Tesorero y un Contador. En la Junta, que llevaba a cabo la misión total del INLE, estaban representados, a parte de los jefes de las tres Secciones y los representantes de las Delegaciones –sólo llegó existir la de Barcelona-, los escritores, los editores, los libreros, un representante de las artes gráficas y de los fabricantes de papel. Además la asociación al INLE era obligatoria a todos los industriales y comerciantes del libro. Esta idea se asemejaba a la expuesta por Dionisio Ridruejo en su proyecto de Cámara Nacional del Libro de encuadramiento corporativo del sector (“la pertenencia obligatoria al mismo de todos los escritores y publicistas de libros, editores, libreros, intermediarios, impresores, grabadores, encuadernadores y fabricantes de papel de España”)

Puede decirse que aunque en su Reglamento ya se preveía la participación de los profesionales privados del libro -6 escritores, 10 editores, 8 libreros, 4 representantes de Artes Gráficas y 2 de los fabricantes de papel- en sus órganos de gobierno, junto a los representantes de la Administración, lo cierto es que, hasta la reorganización llevada a cabo en 1957, no se produce una presencia real y mayoritaria de estos profesionales en sus órganos de dirección. La primera reunión del Pleno del INLE no se celebró hasta el 25 de mayo de 1945<sup>274</sup>.

Su labor debía estar respaldada económicamente, por ello se señalaron como principales fuentes de ingresos: una subvención anual del Estado (400.000 pts. en 1942); todos los recursos que obtuviesen en concepto de donaciones, cesiones o legados; las cuota<sup>275</sup>s de los asociados voluntarios y obligatorios; el importe de las publicaciones; el arbitrio sobre todo papel de fabricación nacional con destino a la edición que antes correspondía a las Cámaras (RD 23 julio 1925) así como del arbitrio sobre la importación de papel extranjero. Los bienes resultantes de la liquidación de las Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona pasarían también a formar parte del INLE.

---

<sup>273</sup> BENEYTO, Juan, Planteamiento del régimen jurídico de Prensa y Propaganda, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1944

<sup>274</sup> Cendán Pazos, F. “Cien años de iniciativas editoriales y librerías en España (1900-2000)”. De Libros, nº 13, mayo 2000, p. 44-51

<sup>275</sup> Según el Reglamento de 1943, los industriales del libro habían de abonar obligatoriamente cuotas que no fueran inferiores a 40 pesetas ni superiores a 1000 por año y que por Junta se determinaba con arreglo a la naturaleza de su industria.



Año	Presupuesto
1945	959.103 pts.
1947	1.206.000 pts.
1948	1.186.000 pts.
1950	1.287.000 pts.
1952	1.510.000 pts.

Gráfico 4. Fuente. AGA

Por presiones de Miguel Primo de Rivera se nombró a Julián Pemartín como presidente del INLE, viejo camarada, en vez de a Pedro Laín Entralgo. El resto de la Junta de Gobierno estuvo formada por: Darío Fernández Flórez – jefe de la Política Cultural-, Miguel Herrero –de Ordenación Bibliográfica-, Antonio Macipe –de Política Comercial-, Augusto Matons –Delegado de Barcelona-, Gustavo Gili y Saturnino Calleja –representantes de los editores- y Vicente Díaz Poyatos –secretario general-.

Julián Pemartín<sup>276</sup>, designado por la Vicesecretaría de Educación Popular incorporaba su purísimo historial falangista, su pasión y su cultura a la obra de abrir a la edición española futuros caminos de eficacia y de prosperidad. Al principio, Pemartín asumió que la tarea del INLE era de tipo político y, más secundariamente, económico, según los postulados del falangismo y en consecuencia adoptó una retórica ampulosa y justificativa de la acción gubernativa, entendiendo que la inspiración del Instituto, a diferencia de las cámaras, redimía al libro de su carácter puramente comercial. En un artículo publicado en el suplemento *Sí* del diario *Arriba* de 26 de abril de 1942, Pemartín insistía en la función ideológica de la institución y explicaba que el INLE pretendía ser el realizador de una política del libro. Frente al principio democrático de que el libro debía llegar a todas partes, el INLE iba a salvaguardar el principio falangista de que el libro debía llegar a donde hiciera falta, estableciendo así una política de distribución en la que se discriminaran sectores de lectores de acuerdo con criterios de clase, formación y sexo. Colocaba por encima de cualquier otra la misión de propagar por toda América valores espirituales basados en la catolicidad española<sup>277</sup>

<sup>276</sup> Hasta su nombramiento como director del INLE, había desempeñado la Asesoría de Formación Nacional-Sindicalista y la Dirección de la Academia Nacional de Mandos del Frente Juventudes, Asesor del Sindicato del Papel. Director del Instituto Nacional del Libro Español. Jefe Provincial del Movimiento de Cádiz. Vicesecretario del Movimiento. Jefe del Sindicato del Papel. Secretario de la Delegación Nacional de Educación. Parlamentario. Procurador en las Cortes durante el franquismo, nato por su condición de Consejero Nacional en la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946). Miembro del VI Consejo Nacional de FET y de las JONS. El 27 de febrero de 1963 cesa como Jefe del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas.

<sup>277</sup> LARRAZ, F. Una historia transatlántica del libro : relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Gijón, Trea, 2010

Para llevar a cabo sus fines el INLE se articuló en tres secciones cuyas funciones se desarrollaban en los capítulos III y VII de ambos Reglamentos. Las tres dependían jerárquicamente de la Secretaría General del INLE. Cada Sección estaba formada por un Jefe, un secretario técnico y por una Comisión de Estudio de carácter consultivo. Los acuerdos de cada Sección no tenían carácter ejecutivo en tanto no hubiesen sido conocidos y aprobados por la Junta de Gobierno.

#### 4.2.1. Sección de Política cultural

El Reglamento adjudicó a la Sección de Política Cultural aquellas actividades relacionadas con la propaganda del libro, si bien bajo el signo político acorde con los principios del nuevo Estado español.

Esta Sección debía llevar a la práctica las consignas que sobre política del libro recibiera de la Dirección del INLE. Respecto a la Propiedad Intelectual debía proponer las reformas legislativas necesarias, velar por el cumplimiento de los convenios internacionales y *llevar al día una información exacta de cuantos extremos interesasen a la protección del libro español en el mundo, especialmente a los de habla inglesa*. También debía organizar la propaganda del libro español y fomentar la enseñanza y perfeccionamiento de las Artes del Libro y tenía a su cargo la organización de las llamadas Semanas del Libro.

Durante la etapa previa a la adscripción del Instituto al Ministerio de Información y Turismo, tres fueron las actuaciones clave de esta sección: el control de los planes editoriales, la supervisión de las traducciones y el censo de autores.

La intervención en los planes editoriales fue ordenada por disposición ministerial en marzo de 1941, en la que se dictaban normas encaminadas a vigilar escrupulosamente la producción del libro, en todos sus aspectos. Esta tarea fue asignada primeramente a la Sección de Ediciones de la Delegación Nacional de Propaganda, para regular el mercado del libro, y *evitar una posible anarquía en los planes editoriales abastecedores del mercado español*.

Con fecha 7 de mayo de 1942 los asuntos de los planes editoriales y declaraciones juradas fueron traspasados desde la Sección de Ediciones de la Delegación Nacional de Propaganda a la Sección de Política Cultural del INLE. La labor desarrollada por el INLE en tal sentido, explicaba el mismo Instituto, había sido ímproba, en lo que concierne a la inspección minuciosa de cada uno de los planes editoriales presentados según se expresó en la memoria presentada por Adriano del Valle, Jefe de la Sección de Política Cultural:

Por oficio de la Delegación Nacional de Propaganda, de fecha 3 de julio de 1942, se nos ordenó la publicación de una circular por la que se comunicase a todos los editores españoles, qué obras eran aprobadas, suspendidas o recogidas por la Delegación Nacional de Propaganda, al objeto de que no puedan nunca alegar desconocimiento de las decisiones oficiales recaídas sobre las mismas. En este sentido y cumpliendo las órdenes superiores recibidas, la labor de la Sección de Política Cultural ha sido laboriosa y fructífera, según se puede comprobar en el voluminoso archivo de la Sección, donde hay constancia de innúmeros casos de intervención del INLE en la armonización de los puntos de vista de la censura y de los editores.

En septiembre de 1944 se suspenden los Planes Editoriales, en parte, por petición de los editores en la Asamblea del Libro, dada la poca viabilidad de mismos:

“Respecto a los planes editoriales la realidad ha demostrado que son inútiles, pues los editores redactan sus planes, unas veces a ciegas, pues no saben si la censura aprobará alguna de aquellas obras; otras que no llegarán a imprimirse. El INLE por su parte, carece de posibilidad de intervenir dichos planes, pues no se le ofrece más que una serie escueta de títulos y de autores, sobre los cuales sería temerario dictaminar. La solución: imponer a los editores la publicación de la ficha catalográfica de cada obra con la obligación de comunicarla al INLE con anterioridad a la puesta en circulación del libro”.

La delegación en el INLE la vigilancia de los planes de trabajo de las editoriales, le supuso tener que invertir una parte considerable de su capacidad de trabajo en el cumplimiento de una de las medidas más impopulares entre los editores (Ruiz Bautista)

Al INLE también se le ordenó, por oficio de 3 de junio del Delegado Nacional de Propaganda, la organización de un servicio de Inspectores de Traducción<sup>278</sup> dentro de la Sección de Política Cultural, para que vigilase la totalidad de las versiones al castellano de obras extranjeras, para cortar radicalmente la aparición de una serie de traducciones absolutamente inadmisibles y lesivas para la dignidad de nuestra lengua<sup>279</sup>. Y este es el balance que hace el Instituto de su labor:

Son innumerables los trabajos de crítica literaria aparecidos en la Prensa española haciendo justicia a la misión eficaz, humilde y callada, que desempeña el Cuerpo de Inspectores de Traducción creado por el INLE, formado por escritores, que colabora con los Inspectores de la Oficina de Visado de Traducciones. Se corrigieron los desafueros, se enmendaron errores lesivos para la gloria imperial de nuestra bella lengua. Se inspeccionaron 233 traducciones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1942.

Respecto al censo de editores, una manera de tener controlados a los autores, su organización tuvo su origen en una de las conclusiones de la Asamblea del Libro Español de 1944, quedando encomendada a la Sección de Política Cultural. El personal de esta sección tuvo la misión de ir nutriendo los expedientes personales archivados con los datos que día a día, iba facilitando la prensa diaria. La Sección se dirigió a todas las entidades editoriales de España, tanto oficiales como privadas, solicitándoles el envío de los datos personales de aquellos escritores colaboradores de las mismas, para completar en lo posible, las lagunas.

Los expedientes comprendían, a veces, recopilación de numerosos recortes y artículos de periódicos, críticas bibliográficas y otras clases de trabajos literarios referentes a cada uno de los escritores.

En la Memoria de la Subsecretaría de Educación Popular de 1947 se menciona que figuraban en los archivos del INLE más de 3.500 expedientes personales de autores españoles, pero también se ponía de manifiesto el obstáculo que suponía la inercia de los escritores españoles ante las reiteradas circulares, notas e insistentes llamamientos publicados en la prensa española con el propósito de ultimar la labor de recogida de los datos requeridos y la formalización de los expedientes personales de cada escritor en todo aquello que se refería a la bibliografía y biografía de cada uno.

---

<sup>278</sup> Ver supra capítulo “El libro espiritual, imperial y católico” .

<sup>279</sup> Documento firmado por Manuel Torres López. Madrid 3 junio 1942. AGA- Cultura 21/68

### 4.2.2. Sección de Ordenación Bibliográfica

Sus funciones, según rezaba en el Reglamento del INLE, comprendían desde la publicación de catálogos, revistas bibliográficas mensuales y anuarios, a la elaboración de guías temáticas y resúmenes bibliográficos para orientación de los lectores, así como editar obras de interés nacional desatendidas por las industrias del sector.

Se reanudó la publicación profesional *Bibliografía General Española e Hispanoamericana*, con el nombre de *Bibliografía Hispánica*<sup>280</sup>:

*“Bibliografía General Española e Hispanoamericana, después del largo eclipse iniciado en julio de 1936, saluda de nuevo a sus lectores. Constituiría para las Cámaras Oficiales del Libro que la editan la satisfacción, el que todos advirtieran las diferencias de forma y de fondo que en ella, al igual que en todas las cosas españolas, han impreso la Cruzada Nacional.*

*Los fines de hoy (...) no son muy distintos a los de 1936, por lo que al libro se refieren, pero sí necesitados de más severa ejecución: hay que arar en las entrañas mismas españolas para hacer del libro un instrumento de cultura, de recreo y de trabajo a todas las inteligencias indispensables; hay que hacer del libro español un heraldo más allá del Atlántico de nuestra civilización como pueblo...*

*Subrayemos este hecho consolador: la capacidad de lectura del pueblo español ha crecido considerablemente (...) en España se lee hoy más de lo que se ha leído nunca, y de que, por tanto, el mercado interior tiene hoy en ella unas posibilidades nunca antes conocidas. No son, infortunadamente, tan halagüeñas las perspectivas que nuestro mercado exterior ofrece.*

*Las dos dianas a las que Bibliografía apunta: de un lado, la mejora del libro español; del otro, su difusión cada vez más honda por aquellas tierras de Hispanoamérica.*

Dentro de esta revista se publicaba mensualmente una sección fija: el *Repertorio Bibliográfico* donde se reseñaban todos los libros publicados en España, que previamente habían pasado por el Departamento de Censura de la Vicesecretaría de Educación Popular, clasificados por materias, incluyendo índices de autores. De la información recopilada por dicho Repertorio se elaboraban otros instrumentos de información bibliográfica de interés para editores, libreros y bibliotecarios: el *Boletín Mensual de Novedades* o la edición mensual de las *Fichas catalográficas*. Aunque en estos primeros años a algunos editores les costaba hacer llegar un ejemplar de sus obras a la Sección de Ordenación Bibliográfica:

*Ahora bien hemos observado que hay cierto número de obras –puestas a la venta este año– de los que no se ha hecho la inserción en el citado repertorio. Rogamos a los señores editores que transcurridos dos meses de editar una obra y ponerla en venta, si no ha aparecido en nuestra revista, que es suya también, nos lo comuniquen, acompañando el ejemplar correspondiente. Encarecemos a todos los editores la conveniencia de hacer llegar a nuestras oficinas con la mayor premura un ejemplar de todo libro o impreso que publiquen con el fin de integrar debidamente nuestro Repertorio bibliográfico mensual; nuestro Boletín de Novedades mensual; nuestras Fichas catalográficas mensuales; nuestras Guía de escritores, en preparación; nuestro Anuario de Artes Gráficas, en preparación<sup>281</sup>.*

---

<sup>280</sup> Editorial del n.1 febr.-marzo 1941 *Bibliografía Hispánica*.

<sup>281</sup> Información recogida en la sección “Correo profesional de editores y libreros”, *Bibliografía Hispánica* dic. de 1942, donde se reúnen varios anuncios de interés para el Departamento de Ordenación Bibliográfica.

Desde *Bibliografía Hispánica*, también se incluyó otra sección, “*Lo que preparan los editores*”<sup>282</sup>, en la que con dos meses antes de efectuar la distribución a las librerías y de manera desinteresada, las editoriales debían remitir los datos de sus novedades para favorecer la propaganda de sus libros.

Desde esta Sección también se ofrecía un Servicio de Consultas a editores y libreros. En 1947 se atendieron consultas bibliográficas: resueltas 2250 de 2.650 realizadas.

El INLE también publicó los catálogos de la Feria del Libro así como de las exposiciones que organizaba. También editó “*Guías del Lector*”, donde se recogían la totalidad de obras existentes en el mercado sobre una materia determinada, con indicación de sus editoriales y sus precios. Se publicaron guías sobre: gastronomía, cine, toros, deportes, fotografía.

Otra iniciativa fue la edición del *Anuario del Libro y de las Artes Gráficas*, cuya primera edición salió a principios de febrero 1945. Para su elaboración se dirigieron circulares a las Cámaras de Comercio pidiendo datos de industriales del libro para redactar las fichas.

En 1947 se realizó la revisión de los catálogos de librería para la inclusión en su día de las obras que habrían de figurar en el tomo V del *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana*.

El servicio de estadística de la Sección proporcionaba datos sobre el número de libros publicados en España, atendiendo a sus materias, lugar de publicación, número de páginas y nacionalidad de los autores. Pero estas estadísticas nunca reflejaron la realidad de lo que se publicaba en España, ya que no se consideraban dignos de registrar, ni la llamada literatura de quiosco ni los tebeos.

Años después, en el marco del I Congreso Nacional de Libreros, éstos denunciaron las deficiencias en el ámbito de la información bibliográfica, reclamando que la estructura de la información bibliográfica se redactara de una manera más acorde con sus necesidades profesionales, ya que la que existía en España parecía hecha más con una finalidad erudita que comercial. Tampoco, como se decía en su Reglamento, se colaboró con los servicios de la Biblioteca Nacional en estas tareas, y además el Sindicato del Papel durante unos años elaboró su propio repertorio bibliográfico duplicando esfuerzos.

#### **4.2.3. Sección de Política comercial del Libro**

A esta Sección le competían las cuestiones más rigurosamente profesionales, desde las relacionadas con el proceso de edición hasta la comercialización del libro. Partiendo de la base de que la actividad comercial en el ámbito del libro era una actividad estrictamente privada, el INLE tenía que procurar todo lo necesario para que el comercio pudiesen ejercerlo los editores y libreros españoles en las mejores condiciones. A la vez, el Instituto mediará en los conflictos entre los elementos concurrentes en la producción del libro que estaban sometidos a su jurisdicción.

Respecto al comercio exterior del libro, desde la Sección se trató de centrar los esfuerzos en recuperar para los editores españoles el mercado americano; adoptar medidas eficaces para la represión del fraude editorial fuera de España y la regulación de la adquisición y pagos de derechos de autor en el extranjero.

---

<sup>282</sup> *Bibliografía Hispánica*, Circular 10 marzo 1943.

La ordenación del comercio de importación de libros constituyó también una de las funciones que el INLE desarrolló a través de su Sección de Política Comercial. Las importaciones eran realizadas por los libreros de acuerdo con la reglamentación establecida por el INLE. La fijación del cupo de divisas para importación de libros la realizaba el Instituto de Moneda Extranjera, éste a su vez se las concedía al Instituto quién las distribuía entre los libreros importadores controlando las licencias y las divisas asignadas a cada librero. Desde el INLE se recomendaba a los libreros que atendiesen con preferencia los pedidos de organismos oficiales y culturales, y respecto a la clase de libros a importar se recomendaba cubrir ante todo las necesidades de obras científicas y técnicas.

Pero a la hora de llevar a la práctica esta reglamentación en los años de la más dura autarquía, la Sección de Política Comercial tuvo que resolver grandes dificultades en el comercio de importación, pues el INLE recibía con retraso los cupos de divisas; los importadores efectuaban sus pedidos varios meses después de haberles asignado las divisas, alegando como causa la desorientación en la información bibliográfica extranjera y las casas extranjeras servían con mucho retraso, de tal modo que muchas veces llegaban los libros a la aduana española cuando la licencia de importación había caducado y había que esperar a hacer otra.

Por ello, el INLE a partir de 1943, trató de que se dieran mayores facilidades a las importaciones directas de América, y por ello propuso al Instituto de Moneda Extranjera la apertura de una cuenta especial de compensación con Argentina, con cargo a la cual se efectuaran importaciones y exportaciones con este país.

Otras actividades desarrolladas por la Sección fueron la confección del censo de industriales del libro (editores, libreros, otros), la elaboración de estadísticas relativas al comercio del libro en España; la regulación del comercio interior para evitar la competencia ilícita entre los industriales del libro o la organización de una Escuela Técnica de Librería para la formación profesional de los empleados de librería a petición de la Asamblea del Libro de 1944.

Entre las actividades de promoción y difusión del libro, el INLE restableció la Feria Nacional del Libro a partir de 1944 y organizó numerosas exposiciones dentro del territorio nacional y en el exterior, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores como ya se ha expuesto.

Otras iniciativas del INLE para estimular a editores y libreros, fueron el concurso de los 50 libros mejores del año y los premios a los mejores escaparates de las librerías. El primero tenía por objeto premiar los cinco libros mejor editados en España durante los meses comprendidos entre octubre y julio. La finalidad era estimular la mejor presentación de los libros españoles, desde el punto de vista de la tipografía, las ilustraciones, la encuadernación. Los cinco libros seleccionados cada mes eran expuestos en los principales escaparates de librería. La primera edición tuvo lugar en 1948, y al año siguiente, vista la realidad del país, se establecieron tres categorías: una para las ediciones de bibliófilo; otra para las obras técnicas de cualquier materia que excedieran el precio de 300 pesetas, y otra, para las ediciones más baratas. La inclusión de esta última categoría se justificó porque *esta clase de libros estaba llamada a desempeñar por sus condiciones expansivas un gran papel educador en las clases sociales ajenas al lujo y al coleccionismo*. Al principio los editores se mostraron reacios a enviar a sus libros a un certamen puramente honorífico, pero poco a poco se fueron consolidando y dando prestigio.

El INLE también contribuyó a la lectura pública cediendo lotes de libros, procedentes de su depósito de libros de censura, a los municipios premiados en los concursos que el mismo Instituto convocaba para crear bibliotecas públicas con motivo de la Fiesta del Libro. También recibió peticiones de donativos de libros de grupos escolares, del Ejército u otras instituciones, pero en numerosas ocasiones tenía que denegarlos por estar agotados.

### **4.3. DELEGACIÓN DEL INLE DE BARCELONA**

Hasta diciembre de 1942 la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, aunque subordinada a los dictados del INLE, siguió funcionando autónomamente dada su relevancia y hasta que el INLE superara sus dificultades iniciales. Se inauguró el 2 de diciembre de 1942 por Julián Pemartín, en el acto estuvo acompañado por Augusto Matons, Delegado en funciones, el Sr. Sopena, antiguo Presidente de la Cámara y destacados representantes de la industria editorial catalana. Las palabras de Pemartín:

“Aunque la integración oficial de la Cámara de Barcelona en el Instituto se esté ejecutando estos días, yo quiero recordaros en mis primeras palabras que la verdadera integración de hecho ya se realizó desde el momento en que fui designado para la presidencia del instituto. Yo no podía concebir un INLE sin que en este organismo desde la cabeza a los cimientos estuviese vivo y operante el buen espíritu técnico y artesano de las florecientísimas catalanas del libro (...) los actos relacionados con la integración de la Cámara no tienen más que el valor secundario de una ratificación ritual, porque la de estos días se hizo cuando debió hacerse al nacer el Instituto, y en el concepto de nacional, que gracias a Dios sustentamos en la España de Franco”

Intervinieron además varios editores para exponer algunos problemas de solución urgente, Sopena habló del problema del precio del papel editorial; Gili invitó al INLE para que se ocupe de la reforma del registro de PI y organización efectiva del DL en España, lo que permitirá constituir estadísticas exactas y fidedignas de la producción intelectual española.

Las razones de porqué se integró más tarde la Delegación al Instituto las expuso Julián Pemartín al Delegado Nacional de Propaganda<sup>283</sup>:

Como la Cámara Oficial del Libro de Barcelona era un organismo de gran utilidad corporativa y desarrollaba una constante labor beneficiosa entre los industriales del libro adscritos a su jurisdicción, planeé desde que asumí la Presidencia del INLE, aplazar la incorporación de la Cámara al Instituto hasta que una mínima consistencia en la organización y funcionamiento de éste alejara el riesgo de una paralización de las funciones de aquella, ya que como conoce tu jerarquía, el INLE nació agobiado de dificultades, algunas tan importantes como la que atañe a su Reglamento.

En 1943 arranca su actividad la Delegación del INLE en Barcelona, con sede en la antigua Cámara del Libro. Su jurisdicción se extendía a las provincias catalanas y Baleares, y estaba supeditada a la sede central del INLE en Madrid. Augusto Matons fue el delegado del INLE en Barcelona hasta su jubilación en 1957, quién participó en las tareas de depuración y de supervisión después de la guerra, había sido hombre de confianza del Ministro de Instrucción y aportó abundantes ideas y sugerencias para la fundación del INLE. En su informe de 1943, la Delegación de Barcelona detallaba que durante el primer año de existencia había cumplido con todos sus cometidos, entre ellos el del censo de editores (193 en Cataluña y Baleares). También se concretaban las gestiones conducentes al establecimiento de depósitos en América y a la lucha contra la piratería en México.

Según el Reglamento de la Delegación del INLE en Barcelona, se creaba en Barcelona con jurisdicción en Cataluña y Baleares, constituyéndose como órgano obligado de relación entre los industriales del libro establecidos en dichas regiones y el INLE. Tenía en su jurisdicción las mismas funciones que el INLE. Dichas funciones serían ejercidas en nombre y representación del INLE y con la amplitud y extensión que esta resuelva. La Delegación dependía directamente del director del INLE al que deberá rendir cuentas. La Delegación quedaba facultada para establecer en dichos territorios los servicios corporativos locales que en beneficio de la

---

<sup>283</sup> Documento con fecha 7 de diciembre 1942 AGA 21-1363

producción y difusión del libro se estimaran necesarios. Para atender a su funcionamiento contaba con las cuotas de los industriales de la zona, incorporados el INLE, teniendo facultades para imponer una escala especial de cuotas que debía ser aprobada por el director del INLE. El INLE consignará en su Presupuesto una cantidad suficiente para cubrir un déficit eventual. La Delegación también tenía potestad para presentar en el mes de diciembre un proyecto de presupuesto.

El arranque de la Delegación no estuvo exento de dificultades. Hubo roces con el Sindicato<sup>284</sup> en relación al traspaso del reparto del papel editorial del Sindicato al INLE, y para limar asperezas, al formar la Junta de Gobierno de la Delegación del INLE en Barcelona se incluyó al Delegado Provincial del Sindicato Nacional del Papel, que además se le propuso como profesor de un curso para libreros.

Otro asunto que enturbió la recién creada Delegación del INLE en Barcelona, fue el intento de expulsión de Augusto Matons del Movimiento por su pasado catalanista. J. Pemartín tuvo que salir en su defensa enviando un informe<sup>285</sup> de su trayectoria intachable al Delegado Nacional de Propaganda pidiendo se le condonase la pena para que se le pudiera nombrar en el cargo:

Si bien es cierto que hasta 1934 militó en el Partido de Acción Catalana, a raíz de los sucesos de octubre causó baja en este partido y se manifestó simpatizante del fascismo. Al estallar el Alzamiento tuvo que huir de Barcelona y en la actualidad no existe indicio ni apariencia alguna de contacto con la masonería.

Las actividades desplegadas por la Delegación de Barcelona fueron parejas a las que desarrolló el INLE desde Madrid<sup>286</sup>: tramitaciones sobre censura (revisión de obras no autorizadas por la censura; normas para la censura de reimpresiones, censura de publicaciones infantiles); control sobre las traducciones; conseguir mejoras en el servicio de paquetes editoriales en correo; solicitar divisas para pagos de derechos de autor; cursar circulares sobre normas para la importación de libros; organizar un curso de librería; gestionar la publicidad en la prensa del movimiento; reglamentar la venta de libros en quioscos o elaborar el censo de autores.

Especial interés despertó entre sus asociados la denuncia de las trabas del libro español en América, concretamente la importación de obras piratas, así como mejorar el Día del Libro.

#### **4.4. CONFLICTOS CON EL SINDICATO NACIONAL DEL PAPEL**

Otro organismo se creó con competencias en el ámbito del libro, sobre todo en su vertiente económica, y con él el INLE tuvo que hacer frente a continuas tensiones. Me refiero al Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas, creado por Decreto 6 de diciembre de 1941, cuya Sección de Ediciones englobaba a las editoriales, las librerías de nuevo y de viejo y los quioscos. Entre las tareas que debía realizar estaban la gestión del reparto de cupos de papel; la tramitación de consultas y peticiones de los editores; la intervención de las importaciones de publicaciones y la ordenación del comercio del libro, que se había de preparar con arreglo a las propuestas de los gremios de editores y libreros.

---

<sup>284</sup> AGA Cultura 21-1363

<sup>285</sup> AGA Cultura 21-1363

<sup>286</sup> AGA Cultura 21-1363 y 21-1312



De la lectura anterior se evidencia que al Sindicato se le adjudicaron funciones que aparecen ya en el primer reglamento del INLE (1941). Es significativo que en el artículo 8º del mismo se decía que la función de la Sección de Política Comercial la llevará a cabo «en estrecha y constante coordinación con el Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas», mientras que en el de 1943 desaparece esta mención de colaboración. Entre las competencias que se duplicaron hay que citar la creación de censos y la elaboración de estadísticas, la defensa de los intereses profesionales, así como la obligatoriedad de asociarse tanto al INLE como al Sindicato de todos los industriales y comerciantes del libro.

La asignación de los cupos de papel<sup>287</sup>, la formación profesional y la ordenación del comercio del libro fueron áreas de conflicto. Por ejemplo, la primera ordenación del comercio la elaboró en solitario el Sindicato el 24 julio de 1942, suscitando las denuncias del INLE al invadir sus competencias reguladas en el Reglamento de 1941. A partir de entonces las distintas ordenaciones del comercio del libro (1946, 1956 y 1972) se harían conjuntamente.

Pero también existieron mecanismos de integración entre ambas instituciones, como el que recayese simultáneamente la dirección del Instituto y el Sindicato en la misma persona (Julián Pemartín) o la participación de editores y libreros, elegidos a través de los gremios, en los órganos de gobierno del INLE.

En fecha tan tardía como 1975 los conflictos de competencias aún persistían. En los debates de la Comisión de Información y Turismo de la Ley del Libro de 1973, en los artículos relativos al INLE, Hernández Navarro, presidente del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas, afirmaba que *si el INLE no se hubiera fundado antes que el Sindicato no tendría las atribuciones y competencias que tenía*.

Otro organismo –la C.E.C.E.L.– se crearía por orden del Ministerio de Industria y Comercio en 1949 con competencias en comercio exterior, usurpando y/o duplicando funciones que de algún modo tenía asignadas el Instituto. Sus fines concretos eran servir de órgano de enlace entre la industria editorial y los organismos del comercio exterior y del Ministerio de Industria y Comercio. Administró durante su vigencia (1949-1957) todas las licencias de importación y exportación extendidas a favor de los industriales del libro español, facilitando la rápida relación de los exportadores e importadores con sus clientes. Además administró el 42% de las divisas producidas por las exportaciones de libros poniéndolo a disposición de los importadores españoles de libros para inversiones en maquinaria de imprenta y utillajes.

Con buen criterio de racionalización en la reorganización de 1957 sus funciones fueron asumidas por el INLE al igual que las de la CIPLE, Comisión que se creó al amparo de la Ley de Protección del Libro Español de 1946 con la finalidad de administrar el papel protegido y fijar su precio, que se verá más adelante.

EL INLE nace como respuesta a la paralización que el ILE republicano padeció por los intereses encontrados entre los que defendían el intervencionismo del Estado y los que defendían la iniciativa privada. Se le asigna, solo, la función de cuerpo ejecutivo de la política cultural institucional meramente asesora de las políticas editoriales, debiendo compaginar su obediencia a la VEP, luego a la SEP con la representación y defensa de editores y libreros.

Censaría a todos los profesionales del gremio, incluidos a los escritores, y mediaría en sus disputas o reprimiendo prácticas ilegales como la competencia ilícita, para ello se le dota de un atributo totalitario para conciliar intereses, incluso por la fuerza (art. 37 del 2º reglamento).

---

<sup>287</sup> Ver supra epígrafe relativo a la gestión de los cupos de papel.

La gestión del mundo editorial por parte del INLE adoleció en los primeros años de notorias lagunas y sus dificultades iniciales impidieron a los profesionales del libro apreciar sus potencialidades. Aunque en el marco de la Asamblea del Libro, el editor Dossat reconocía que el INLE había intentado resolver las graves dificultades que se oponían tanto a la exportación como a la importación de libros, y agradecía al INLE su labor de continuidad para intentar resolver las dificultades y conflictos de los editores.

El editor Gili Roig se lamentaba de la descoordinación que reinaba en el mundo del libro, en el que además del INLE terciaban otros organismos como el Sindicato Nacional del Papel; el Consejo de la Hispanidad; el MEN; el Ministerio de Asuntos Exteriores y la VEP, a la que el INLE estaba sometido. Además, su atonía invitaba a sus inmediatos rivales a invadir algunas de sus competencias como la regulación del comercio del libro —éxito que se apuntó el Sindicato del Papel— o la potestad de repartir los cupos de papel que al final recayó en el Instituto.

La actividad del INLE durante sus dos primeras décadas estuvo marcada por la lentitud, como lo demuestra que la primera reunión del Pleno se celebrara en mayo de 1945, cuando el Instituto se había creado a mediados de 1939 o que la Cámara del Libro de Barcelona permaneciera activa hasta finales de 1942 actuando casi de manera autónoma. Las derrotas institucionales que el INLE infligió al Sindicato del Papel, pese a la inoperancia de sus primeros años, hay que encuadrarlas en la realidad en que se desarrollaron los sindicatos verticales. Es decir, se crearon únicamente como instituciones de control sobre la actividad económica, quedando reducido su papel al de meros instrumentos subalternos. Su reconocimiento únicamente les capacitaba para desarrollar labores técnicas de apoyo a la política intervencionista —como el reparto de cupos de materias primas o el control de mercados— que les eran atribuidas por los organismos gubernamentales. Pese a dotársele con un atributo totalitario para conciliar intereses, su subordinación a la Vicesecretaría de Educación Popular hasta 1945 le limitó como organismo encargado corporativamente para la representación y defensa de los intereses de libreros y editores. Además el INLE no asumió en la práctica todo lo que concernía al libro español, teniendo que compartir con otros organismos la ejecución de la política del libro. La gestión del mundo editorial por parte del INLE adoleció en este período de notorias lagunas. Durante esta primera etapa, el INLE dio prioridad al comercio exterior frente al interior en sus gestiones, pese a reconocer la falta de lectores. Favoreció los intereses económicos de los editores, patente en la Ley de Protección del Libro, frente a las reclamaciones de los libreros, más interesados en acabar con el intrusismo profesional a través de una normalización del comercio interior que no cuajaba pese haberse regulado en varias ocasiones.

El INLE estuvo fuertemente condicionado en estos primeros años por una política del libro marcada por la propaganda y la censura. Tuvo que asumir la gestión de los visados de las traducciones, participar en la censura previa mediante la vigilancia de los planes editoriales<sup>288</sup> y favorecer a los escritores afines al Régimen en detrimento de los «autores liberales que habían pervertido el gusto y mentalidad de los pocos lectores que había». Además, el Instituto fue un elemento de la política autárquica, junto al Sindicato, en cuanto que le correspondió la asignación de los cupos de papel, función que ejerció hasta los últimos años del franquismo.

Entre sus éxitos la convocatoria de la Asamblea del Libro en junio de 1944, la Ley de Protección del Libro de 1946, la restauración de la Feria del Libro, y la organización de exposiciones.

---

<sup>288</sup> Vida Corporativa. Intervención de los planes editoriales, *Bibliografía Hispánica*, núm. 2, 1943, p. 31

#### 4.5. LA ASAMBLEA DEL LIBRO DE 1944

Organizada por el INLE entre el 31 de mayo al 7 de junio de 1944, paralelamente a la primera Feria del Libro del franquismo, la finalidad de la Asamblea fue deliberar sobre los problemas más importantes que afectaban al libro español y elementos afines a su creación y difusión. Los temas elegidos para ser estudiados fueron cerrados, es decir, no se podían discutir nuevos temas pero sí señalarse otros distintos a fin de que el INLE los tomara en cuenta. Los temas tratados fueron: la personalidad del escritor y su dignificación profesional; la necesidad de revisión de la Propiedad Intelectual; los derechos y deberes del editor; la difusión del libro español en el mundo y la función específica del librero.

Pemartín, en las palabras de apertura de la Asamblea anunció que con esta reunión de todos los sectores implicados en la producción y difusión del libro, y mediante un *diálogo jerarquizado* pretendía aumentar la eficacia de la política editorial. Meses después de su celebración exponía los motivos que le llevaron a convocar la Asamblea:

“Como casi todos los intentos que continua pero dispersamente inicié para aliviar los problemas de la mencionada crisis resultaron ineficaces, concebí una Asamblea en la que pudieran trabajar, conjuntamente, todos los elementos interesados en la producción y difusión del libro español.... Se celebró esa Asamblea... en la que laboraron no solo los representantes de organismos oficiales (Exteriores, Educación, Sindicato Papel), sino editores, escritores y libreros” (documento Archivo INLE 7-10-1944)

En esta convocatoria hay que apuntar la ausencia del sector de las artes gráficas así como de las papeleras. Aunque éstas no asistieron si se trató el tema del aumento del precio del papel y su escasez. De la problemática de las primeras, se haría eco la 9ª Ponencia del III Consejo Sindical (Industrial) ese mismo año, de la mano del Sindicato del Papel, y posteriormente, de una manera monográfica en el III Congreso Nacional de Artes Gráficas celebrado en Barcelona en junio de 1950.

A través de las ponencias, sus enmiendas y conclusiones se expusieron en la Asamblea los problemas que afectaban al libro en sus distintos sectores. Muchos de ellos eran heredados, ya denunciados por los mismos profesionales en varias ocasiones, e incrementados con otros nuevos, resultado de la misma naturaleza de la dictadura, como la censura, o de su política económica autárquica.

No era la primera vez que se convocaba este tipo de reuniones profesionales<sup>289</sup>, y en los inicios del franquismo también se habían analizado los problemas que afectaban al libro, sirvan de ejemplo el exhaustivo informe que la Cámara del Libro de Barcelona elaboró e hizo llegar a Javier Lasso de la Vega, en calidad de Presidente de la Rama del Papel, a fines de 1939 o el que redactó el mismo Lasso bajo el epígrafe “Política del Libro”. En ambos documentos se nos muestra tanto un análisis de los elementos de la crisis por la que atravesaba el libro como posibles soluciones a la misma. Y paralelamente al desarrollo de la Asamblea el editor Gustavo Gili presentó su análisis personal bajo la rúbrica “Bosquejo de la política del libro” *donde se impone abarcar de un modo orgánico todos los problemas que tiene planteado nuestro libro*<sup>290</sup>. Plantea soluciones prácticas para la producción, expansión y fomento del libro.

---

<sup>289</sup> Primera Asamblea Nacional de Editores (Barcelona, 1909), Segunda Asamblea Nacional de Editores y Libreros (Valencia, 1911), Conferencia Nacional de Editores (1917), la Conferencia Nacional del Libro de Madrid (1927). Ver: MARTÍNEZ, MARTÍN, J.A., MARTÍNEZ RUS, A. y SÁNCHEZ GARCÍA, R., Los patrones del libro, Gijón, Trea, 2004

<sup>290</sup> GILI ROIG, G. Bosquejo de una política del libro, Barcelona, Gustavo Gili, 1944, p. 17

Cinco fueron las ponencias presentadas<sup>291</sup>. La primera trató sobre “La personalidad del escritor y su dignificación profesional”. Fue redactada por Juan Antonio Tamayo Rubio, ésta junto a la dedicada a los derechos y deberes del editor fueron las que se argumentaron con una mayor carga ideológica en sintonía con los principios del Nuevo estado totalitario.

Para el señor Tamayo los escritores tenían el deber inexcusable de contribuir a prestigiar y honrar al Estado, es más con su pluma debían asistirle mediante una reeducación patriótico-política, lenta y profunda, y a cambio el Estado aumentaría tanto los medios destinados a la educación y la cultura, como a protegerlos.

El Estado debía asegurarse la colaboración de los hombres de letras para evitar que le desprestigasen como había ocurrido con el precedente estado liberal, y además debían encuadrarse, en algún sindicato, como el resto de actividades profesionales.

Proponía que el INLE incorporara a los escritores españoles en una sección análoga a las de editores y libreros, con el fin de armonizar sus mutuos intereses y así obtener de los poderes públicos todas aquellas mejoras de carácter económico-social que facilitasen el desempeño de la función cultural del escritor, elevasen su categoría profesional y dignificasen su personalidad. Concretamente, sugería tres medidas: 1ª que el INLE abriera un censo oficial de autores<sup>292</sup> análogo al de editores y libreros; 2ª que los autores incluidos en el censo tendrían derecho a las ventajas de toda índole que el INLE recabase del Estado en su beneficio profesional, y en tercer lugar que en la Junta de Gobierno del INLE figuraran dos representantes de la Sección de Escritores.

Esta adscripción de los autores al INLE generó cierto debate por el posible conflicto de competencias con la Sociedad General de Autores, entidad que ya tenía encomendada la defensa de los intereses profesionales de los autores de libros, así como el recelo del Sr. Guillén Salaya, Secretario general del Sindicato Vertical del Papel, quién recordaba que no se había tenido en cuenta la nueva realidad de la España nacional-sindicalista, en la que todos los sectores profesionales debían estar encuadrados en los sindicatos. *Y si hay una Ley que ha declarado viable la SGA de España, también hay otra que dispone que todas las personas que trabajan deben estar agrupadas en Sindicatos nacionales.*

Otras propuestas que no llegaron a incluirse entre las conclusiones acordadas por unanimidad tuvieron que ver con la creación de una Sociedad de Crédito Intelectual o Banco de Escritores Españoles como un mecanismo económico-financiero, con el objetivo de aumentar las tiradas de obras en España y así expandir el libro español por América y el mundo. Otras iban encaminadas a mejorar las condiciones de publicidad de los autores y sus obras a través de la prensa, el NO-DO, la Dirección General de Turismo, incluso se llegó a sugerir la creación de un servicio de camioneta-biblioteca llevando fragmentos de literatos y ediciones baratas para vender.

---

<sup>291</sup> Libro de actas de la Asamblea del Libro Español celebrada en Madrid del 31 de Mayo al 7 de Junio de 1944, Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1945

<sup>292</sup> Se consideraba autores aquellos que profesaran en la actualidad las letras con carácter de continuidad.

La segunda ponencia versó sobre la “Necesidad de revisión de la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1879”. Este no era un tema nuevo, por el contrario había sido una reivindicación en todas las reuniones profesionales anteriores<sup>293</sup>.

Pero ¿cuáles eran las deficiencias de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y su reglamento de 1880, que había que revisar? Para los autores era objeto de crítica el que la ley ignorara el derecho moral del autor, reconocido por las leyes más modernas de otros países y el que no estableciera el derecho inalienable del autor, según acuerdo de algunas reuniones internacionales, a percibir una parte del importe de las ventas sucesivas a que se someten sus obras. También la falta en la regulación de los contratos de edición dejaba a éstos al margen como un asunto entre particulares, permitiendo que la negociación entre las partes se hiciera como estas buenamente convinieran. La fuerza la tenía el editor que podía imponer sus condiciones al autor.

Para los editores, en cambio, las críticas se dirigían hacia la obligatoriedad de la inscripción de todas las obras literarias en el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo necesario entregar tres ejemplares. De este modo el Registro se erigía en garante de la propiedad de una obra, pues cualquier tipo de reclamación se tendría que hacer sobre la base de la inscripción en dicho repertorio. Si no se procedía a anotar una obra en el Registro, la ley permitía su reimpresión durante los 10 años siguientes, pues se daba por descontado que la obra pasaba al dominio público. En ese periodo el dueño podía registrarla pero si dejaba pasar el plazo perdía la propiedad de la obra. Además, el proceso terminaba con el pago de un impuesto que debía ser satisfecho por los editores y no por los autores o sus herederos.

En 1934 una resolución entendió que los derechos de autor no podrían ser considerados como sueldos, sino como frutos de la propiedad intelectual. Y en ese criterio se basó la orden que estableció la contribución de los editores en materia de impuesto de utilidades, es decir, este impuesto iba recaer sobre la propiedad intelectual y sobre los editores, provocando el malestar y la oposición a la misma de éstos últimos.

Sin embargo, Raquel Sánchez afirma<sup>294</sup>, que los editores no tenían tantas razones para estar disgustados, pues la ley al sancionar el Registro, garantizaba a éste la tenencia de las obras que hubieran adquirido. El problema venía dado porque con demasiada frecuencia los editores no inscribían las obras, ya que el impuesto de utilidades iba asociado a la inscripción, y además así se libraban de los engorrosos trámites de entrega gratuita de ejemplares, que según ellos, suponía una pérdida económica pues los ejemplares iban a las bibliotecas públicas y podían ser leídas por cualquiera sin pagar por ello. En otras ocasiones, los mismos editores incurrían en fraude al anotar como suyas a perpetuidad obras que le habían sido cedidas por un plazo determinado de tiempo para su explotación.

La ley también regulaba lo concerniente a los herederos. La propiedad intelectual correspondía a los autores en vida y se transmitía a sus herederos durante 80 años. Los editores consideraban que esto los perjudicaba, ya que la propiedad intelectual no era considerada por la legislación como las demás formas de propiedad, que una vez adquiridas, se obtienen para

---

<sup>293</sup> Los editores y libreros organizados corporativamente pusieron buena parte de su empeño durante el primer cuarto del s. XX en la modificación de la ley de Propiedad Intelectual de 1879 y el decreto de 1888. Concretamente en la 1ª Asamblea de Editores de Barcelona (1909), en la Conferencia de Editores Españoles y Amigos del Libro (Barcelona 1917) y en la Conferencia Nacional del Libro de 1927.

<sup>294</sup> SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel. “El autor en España, 1900-1936”. Madrid: Fundamentos, 2008, pp. 132-150

siempre. Según los editores esta circunstancia dejaba su negocio en una situación de perenne inseguridad. Ellos consideraban que el editor se hacía con la propiedad de una obra al firmar el contrato de cesión ante notario y no el de la inscripción en el Registro.

El Gobierno de la República presentó en 1935 a las Cortes un proyecto de ley que no llegó a sancionarse, y, posteriormente, el 7 de octubre de 1938 se dictó una Orden que ordenaba la creación de una Comisión que estudiase el proyecto de 1935, pues la Ley de 1879 era calificada de arcaica e ineficaz y no se adaptaba a los principios adoptados por otros países en la Conferencia Internacional de Berna. Esta Comisión tampoco llegó a constituirse.

En este proyecto de ley el derecho de autor abarcaba “la edición, representación, ejecución, traducción, adaptación, reproducción, difusión, comunicación y utilización en general de las obras”. El proyecto continuaba manteniendo los 80 años como periodo de pertenencia de los derechos de autor a los herederos, atribuía al autor el derecho absoluto sobre su obra e incorporaba el concepto del derecho moral del autor, considerado inalienable, pues el autor conservaba siempre la facultad de reivindicar la paternidad de la obra.

Aunque el INLE carecía de autoridad para intervenir en la función legislativa, sí necesitaba como organismo de consulta del Estado, conocer los distintos puntos de vista y opiniones sobre la regulación de la propiedad intelectual. De ahí que este tema, entre otras razones, se incluyera en la Asamblea del Libro.

La ponencia y las mociones que generó suscitaron el debate sobre varias cuestiones como la obligatoriedad o no del Registro para garantizar los derechos y deberes del autor o la necesidad de fijar un contrato de edición tipo. Otras propuestas estuvieron relacionadas con iniciativas para proteger y fomentar toda actividad intelectual o la reciprocidad de los derechos de autor entre países de habla hispana defendida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En cuanto a las carencias de la ley que había que subsanar estaba la inclusión de los derechos de traducción, de refundición, de reproducción ilícita, la situación de los colaboradores, de los adquirientes de derechos, de los adaptadores, de los intérpretes, de las cláusulas penales, en general todas las cuestiones anejas al derecho de propiedad, además de tener cabida los nuevos soportes.

Finalmente las cuestiones elegidas para ser propuestas a la Asamblea fueron:

El reconocimiento del derecho de autor sin necesidad de cumplir ninguna formalidad, pues la Ley de 1879 exigía que para gozar de sus beneficios el autor había de estar inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Respecto a la duración del plazo de protección y reversión de derechos a los herederos forzosos del autor, se proponía la supresión de toda medida restrictiva del derecho del autor a disponer libremente de sus obras por y para todo el tiempo de protección legal; y se sometía a la consideración de la Asamblea la conveniencia de solicitar la sustitución del art. 6º de la ley de 1879 por el que así dijera: “La protección del derecho de utilización económica de las obras de la inteligencia dura toda la vida del autor y se transmite a sus herederos por el término de 50 años”.

El dominio público tal como se proponía significaba que el Estado confiriera a entidades o Corporaciones gremiales de escritores, artistas, compositores, etc., la facultad de administrar en beneficio del fomento de sus actividades específicas el producto de la utilización económica de todas las obras de dominio público. La reglamentación comprendería cuestiones tales como: extensión del dominio, determinación de la tasa, aplicación del producto y sistema

recaudatorio. La percepción de la tasa sobre publicaciones de todo género de dominio público podría realizarse con toda facilidad timbrando los ejemplares que se editasen. La recaudación podría hacerse por el INLE, como organismo más idóneo, que facilitaría a los editores los sellos necesarios.

Con relación a las desavenencias y conflictos que puedan deducirse de la interpretación y ejecución de los contratos editoriales, la intervención conciliadora o mediadora del INLE podría evitar en muchas ocasiones pérdidas de tiempo, gastos y otros perjuicios. A estos efectos la nueva ley podría contener un precepto que dispusiera que todas las cuestiones que se promuevan entre partes, como consecuencia de la interpretación contractual serán sometidos en primera instancia a la decisión arbitral del INLE, aunque sus decisiones serán apelables en función de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Por último, se proponía la extensión de los beneficios de la ley a todos los creadores de obras de habla española.

En tercer lugar se debatió sobre los “Derechos y deberes del editor” . El falangista y Delegado Nacional de Propaganda, Manuel Torres López, presidió el debate, la vicepresidencia recayó en el editor Afrodisio Aguado y la ponencia fue defendida por Fernando Rodríguez Vázquez, quién abrió su intervención con la idea de que dada la misión social de los editores, su actividad debía ser asimilada a la enseñanza y la educación. Por un lado, afirmaba que los editores debían ser fieles colaboradores del Estado y servir de *filtro poderoso que detuviese y limpiase el papel impreso de las extravagancias e insensateces del escritor insolvente o mal intencionado*, pero a la vez reclamaba al Estado que no hiciese la competencia con sus editoriales, que eximiera al libro de impuestos que encarecían su coste y su difusión y que la censura previa se ejerciese con menos obstáculos.

Tras la lectura de la ponencia se presentaron varias mociones. Francisco Vindel defendió la necesidad de una *capacitación técnica de los editores, tanto en lo concerniente a la estética del libro, como a la ortografía oficial, como a la visibilidad y claridad de los tipos, de acuerdo con la higiene visual*. Luego Luis Santa Marina, expuso el derecho omnímodo de las editoriales oficiales, primero porque editaban a escritores noveles que las editoriales comerciales no hubieran editado; segundo porque publicaban obras profundamente antieconómicas (mete en el mismo saco obras científicas y de ambiente falangista) y tercero porque no publicaban traducciones. Sobre el mismo tema hizo uso de la palabra Laín Entralgo, director de la Editora Nacional, quién defendió que aquélla tenía que existir para que el Partido tuviese una Editorial donde editar la doctrina, literatura y poesía falangista.

Luego Torres López defendió la necesidad de una ley editorial que definiese el carácter del editor y concretase su responsabilidad, pues según su criterio mientras no hubiese una ley que determinase los derechos y deberes de los editores el Estado nunca podría confiar en que éstos cumpliesen con sus obligaciones.

(...) además de los aspectos económicos la posible ley editorial ha de pretender que además de la figura rectora en el orden económico, exista una que lleve la orientación cultural, espiritual, moral, para que no se pueda, por meros afanes económicos dar un aluvión de pornografía y de marxismo literarios que inunden quioscos, escaparates y Ferias de libros, como ha podido suceder en otros tiempos. El editor no puede tener como final preponderante la económica, sino la cultural y moral. Respecto a si la censura daña, Torres López acude a la censura editorial de nuestro país durante los siglos XVI y XVII, quién según él no dañó ni a la cultura ni al progreso editorial. Dado que todos partimos de la base que el Estado debe ejercer una vigilancia orientadora, lo que podemos hacer es sugerir al Estado la manera más eficaz de realizarla y a que órgano hay que encomendar esas funciones.

Las conclusiones acordadas se resumieron en: solicitar la publicación de normas que dignificasen al editor y regulasen sus derechos y deberes; que el INLE recibiera una reglamentación y unos medios económicos suficientes para que con sentido unitario y verdadera eficacia dirigiera en el interior y en el exterior la política del libro. Requerir de los poderes públicos, teniendo en cuenta la función cultural de la industria editorial, la reducción de impuestos equiparándose a las entidades dedicadas a la educación. Solicitar que la vigilancia que competía al Estado sobre el pensamiento por medio del libro se ejerciera de acuerdo a unas normas y por medio de un órgano adecuado. Pedir a los poderes públicos la reducción de su actividad editorial directa y sustituir la obligación de presentar los Planes editoriales por la entrega al INLE de la ficha catalográfica impresa antes de poner en circulación una obra cualquiera.

“Difusión del libro español” . Presidió el escritor y periodista Wenceslao Fernández Flórez, como vicepresidente el editor Gustavo Gili. La ponencia la presentaron los editores catalanes Santiago Salvat, Joaquín Sopena y José Zenderera. Ponencia de marcado carácter económico cuyo objetivo último era recuperar el mercado del libro en América, quedando bien claro desde la apertura de la misma sesión, donde se dijo claramente que había que ir al grano, es decir: “salvar nuestras relaciones en el campo del libro Hispanoamericano”. En la ponencia se expuso la situación de recesión del mercado del libro español en América; se analizaron las causas de la crisis del libro<sup>295</sup>, tanto en España como en América, y se puso especial énfasis en dos cuestiones: las condiciones de inferioridad del negocio editorial español respecto al americano y en el análisis exhaustivo, en algunos casos documentado con ejemplos, del elevado coste del libro en España.

La ponencia fue objeto de dos enmiendas. La primera fue defendida por Ruiz Castillo, quién propuso que se hiciesen efectivos los arts. 9º y 10º del RD de 6 de febrero de 1926, de instauración del Día del Libro, relativos a la compra y reparto de libros, así como a la creación de bibliotecas públicas por parte de Ayuntamientos y Diputaciones con motivo de la Fiesta del Libro. Esta enmienda se aprobó y constituyó el primer punto de las conclusiones acordadas por unanimidad. La segunda estuvo a cargo de Tovar sugiriendo una mayor intervención de la prensa en la propaganda del libro.

Las soluciones que proponían los editores se agruparon en doce puntos. Salvo el primero, ya citado, el resto eran peticiones encaminadas a favorecer el desarrollo de la industria editorial y así poder hacer frente a sus competidoras en el continente americano. La reivindicación principal se refería al precio del papel. Los editores pedían a las autoridades que intervinieran en el precio del papel para regularlo y rebajarlo, así como que lo liberaran de cargas arancelarias cuando estaba destinado a la producción de libros. Se pedía la exención del impuesto de utilidades, reducir otras cargas tributarias y los gastos de transporte, primas para la exportación, un cambio de divisa especial en pesos argentinos y dólares y otorgar ayudas a los editores españoles para instalarse en América.<sup>296</sup> Por último, para luchar contra la piratería editorial, era necesario *establecer con los países americanos convenios de propiedad intelectual que favoreciesen la expansión del libro español en un ambiente de mutua comprensión*<sup>297</sup>.

---

<sup>295</sup> Ver supra capítulo dedicado al Libro autárquico e intervenido.

<sup>296</sup> LARRAZ, Fernando. Una historia transatlántica del libro, Gijón, Trea, 2010

<sup>297</sup> *Conclusiones aprobadas por la Asamblea del Libro Español celebrada en Madrid del 31 de mayo al 9 de junio de 1944*, Madrid: INLE, 1944, p. 13-14



“La misión específica del librero”, última de las ponencias, fue redactada por Afrodisio Aguado Ibáñez. Presentaron mociones Antonio de Guzmán, Esteban Dossat, Juan Puchades y Francisco Vindel.

Los ejes centrales del debate giraron en torno a la necesidad de reglamentar el comercio del libro; la misión del librero unido a la creación de una escuela de librería; la necesidad de publicidad y propaganda; la problemática de los libreros exportadores y, por último, la reducción de tarifas y aranceles en justa igualdad a las que solicitaron los editores.

La reglamentación del libro era una asignatura pendiente que los gobiernos republicanos tampoco llegaron a consensuar. Aunque se habían establecido unas bases fundamentales para la ordenación del comercio del libro en la circular núm. 24 de julio de 1942<sup>298</sup>, éstas se consideraron como una solución pasajera, ya que la reglamentación del libro era un problema más complejo. Por ello el Sr. Puchades propuso que se refundieran las conclusiones de la ponencia junto a la citada circular, más las adiciones o modificaciones que la experiencia aconsejaban y expuso un completo borrador de *Reglamentación del comercio del libro español*.

Especial interés suscitó la actividad de los quioscos. Para los libreros estos establecimientos pagaban su contribución como libreros y aun considerando beneficiosa su actividad para los intereses del libro, los libreros pedían su reglamentación, pues ellos tienen más gastos y menos facilidades. Los quioscos no estaban sujetos a horario alguno, abrían en domingo, recibían las novedades antes, e incluso los editores les concedían depósitos. La contribución

---

<sup>298</sup> Circular núm. 24 estableciendo las bases fundamentales para la ordenación del comercio del libro (Madrid 24 de julio 1942) elaborada por el Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas. En el 2º apartado sobre autores, editores y libreros, establece que: los libreros no deberán aceptar ninguna clase de libros para la venta, sean en rústica o empastados, con una comisión menor del 25% cuando la obra no exceda de 25 pesetas. A partir de esta cifra el descuento se reducirá a un 20% cuando las obras las reciban las librerías en depósito, manteniéndose el mismo 25 si los ejemplares se compran en firme. Para los libros de texto editados por los autores será del 15% en la venta en comisión y 20%. Libre de gastos si es en firme. Para revistas, boletines u otras publicaciones periódicas la comisión mínima concedida a las librerías será del 20%. Los autores que editen una obra por su cuenta y entreguen la administración de la misma a una librería o a una editorial, tendrán que otorgarle como mínimo un 35% para que la casa que lo admitiese pueda otorgar a su vez un 25% a los libreros. El autor o editor que haga una nueva edición modificando el texto de la anterior deberá comunicarlo al librero y cambiarle los ejemplares. En ningún caso el editor o autor-editor podrá negar al librero las obras de su fondo editorial cuando se demuestre que en los almacenes tiene existencia de las mismas. Además, en caso de incumplimiento se podrá denunciar y el Sindicato podrá imponer al editor la sanción que estime pertinente. Se exceptúa el caso de morosidad por parte del librero.

Los libreros efectuarán siempre la venta al público al precio fijado por los editores, sin que les esté permitido hacer rebaja o descuento alguno a particulares. Los libros llevarán marcado en la cubierta y en sitio visible de venta, que será único.

Solamente podrán dedicarse a la venta del libro: los libreros dados de alta en la contribución industrial, los agentes y comisionistas pertenecientes al Colegio Oficial que satisfagan la contribución correspondiente, los dueños de quioscos debidamente autorizados y que el precio de las obra no exceda de 5 pesetas, los autores que al editar por su cuenta se den de alta en la contribución como editor y como librero; las casas editoriales, siempre que sea su fondo y satisfagan a la Hacienda un recargo del 25% sobre el importe de la cuota de su contribución como editor.

Los agentes o comisionistas que proporcionen venta a las librerías o editoriales percibirán la comisión que libremente convengan, que nunca podrá ser superior a la comisión de librería.

Tanto los editores como los libreros podrán efectuar ventas a pagar en varios plazos directamente con el público en general.

que pagaban era mínima y sus gastos de luz y personal también eran menores. En cambio Manuel Tovar pensaba que los quioscos no ocasionaban a los libreros perjuicios (merma apreciable en las ventas) por el hecho de vender libros después de las ocho de la noche y los días festivos, pues únicamente vendían novelas “rosa” y de “aventuras”. Incluso sugería ampliar los puntos de venta en hoteles, cines, teatros, trenes, etc. para aumentar el número de lectores. Proponía que siguieran con el mismo horario, pero que contribuyeran en la misma proporción que todos los libreros. En cambio, Guzmán propuso la misma libertad de horarios para las librerías sin perjuicio del respeto para la jornada de trabajo de los dependientes.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la misión específica del librero era convertir a los clientes potenciales en clientes regulares compradores de libros, y para esta labor el librero necesita de ayudantes capacitados, de ahí la necesidad de una escuela de librería, pero con la cooperación de los libreros, pues los cursos ofertados por el INLE en 1944 tuvieron que suspenderse porque sólo se matricularon dos personas.

Para tratar el tema central de la ponencia, la misión específica del librero, se utilizó una encuesta publicada en *El español* dónde se preguntaba a los editores de Biblioteca Nueva, Gustavo Gili, Labor, Manuel Aguilar, Calleja, Salvat y Luis Miracle.

Los encuestados estaban de acuerdo en que los libreros eran colaboradores imprescindibles, agentes difusores de la cultura que contribuyen al fomento de la lectura, cuya misión era vender libros y captar lectores. Pero salvo excepciones los libreros españoles no estaban capacitados para cumplir su misión eficazmente y no se les podía pedir más, pues la penuria con que se desenvolvía el librero impedía que se dedicasen a esta profesión personas en posesión de una cultura superior. Por ello había que protegerles y prestarles ayuda moral y material. Existían muy pocas librerías y pocos libreros en España a causa de la reducida capacidad de consumo del mercado nacional, pero sin libreros se crearía al editor un problema muy complicado para la divulgación de sus publicaciones. El librero era necesario al público y al editor. Era imprescindible que el librero estimulase al lector con una sugestiva y original publicidad para que comprara libros, pero también las principales librerías más fuertes económicamente debían retribuir mejor a los dependientes principales.

Esteban Dossat, tuvo unas palabras para el librero exportador, recordando que parte de la exportación de libros a América, sobre todo, la realizaban los libreros. Negocio caracterizado por una atomización infinita, con lo cual no podía exigírseles todos los permisos de exportación que se exigía a otros productos.

Respecto a la acusación de que las librerías realizaban poca propaganda, éstas tuvieron que recordar que la prensa había suprimido las tarifas especiales que regían antes de 1936 para el anuncio de libros, por ello reclamaban un trato de favor para la publicidad bibliográfica. Como propuestas se citaron la preparación de escaparates para presentar un libro o un autor; resucitar la Exposición del Libro Infantil; designar el mejor libro del mes o que los autores colaborasen con los libreros en la promoción de sus libros en contacto con el público.

En el discurso de clausura de la Asamblea Julián Pemartín se dirigió al mismo Franco tratando de justificar lo imprescindible e inaplazable de acometer una política del libro, siendo las conclusiones de esta Asamblea el punto de partida de esa política. Y dado que los editores estaban obligados al enaltecimiento y prestigio de los valores espirituales tradicionales y dado que acataban y cumplían lealmente cuantas disposiciones se dictaban en orden a la difusión de las doctrinas religiosas, morales y políticas y ejercían su industria como un altísimo magisterio, el poder público a cambio debía otorgarles los medios necesarios para el desarrollo de la industria editorial, sobre todo había que dotar al libro de comercialidad, aunque esta política

también permitiría salvar de los inminentes peligros que amenazaban la influencia de nuestra cultura y nuestro espíritu en el mundo de lengua hispana.

Finalizada la Asamblea, inmediatamente Pemartín se dirigió al Vicesecretario de Educación Popular para que aprobara las conclusiones y las hiciese llegar a los organismos oportunos<sup>299</sup>

De todas las peticiones reunidas en las conclusiones de la Asamblea, sólo una obtuvo respuesta inmediata. Me refiero a la supresión de la presentación de los Planes editoriales en septiembre de 1944, justificándose dicha decisión porque la venta del papel de edición se había declarado libre y, por tanto, se hacía innecesario dicho control.

Posteriormente con fecha 9 de octubre, el director del INLE, se dirigió al Ministro General del Movimiento, José Luis Arrese, como única autoridad que podía ejecutar o defender en el seno del gobierno las peticiones de la Asamblea:

“Como transcurre el tiempo sin que mi solicitud haya tenido efecto, me decido a rogarte directamente que accedas a recibir este informe mío, pues tengo el convencimiento de que si continúan desatendidas unas peticiones elaboradas con tales auspicios y garantías, aparte de otras funestas consecuencias, el INLE va a quedar incapacitado para realizar labor alguna que tenga verdadera eficacia”<sup>300</sup>

En el citado informe se detallaba el estado de realización de cada una de las conclusiones y los argumentos en los que se apoyaba el INLE para solicitar su inmediata puesta en marcha (26 octubre 1944). Respecto a la revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, la dirección del INLE opinaba que debía elevarse inmediatamente al ministro de Educación Nacional para que se nombrase una comisión, de la que formara parte el mismo Instituto y redactase el proyecto de reforma. Admitida la necesidad de la censura, los editores debían ser compensados con una decidida protección económica que fomentase la producción y difusión del libro español ya depurado, por ello debían abarcarse actuaciones como la promulgación de una Ley Editorial, el establecimiento de unas normas editoriales y la implantación de un sistema mixto de censura, es decir, se mantendría la censura previa en aquellas publicaciones que lo requiriesen y se levantaría para el resto.

Para fomentar la difusión del libro español, se solicitaba, para el cumplimiento del RD de 1926, un arbitrio mesurado para la creación y sostenimiento de bibliotecas populares. Para reducir el precio del papel, el INLE proponía que el Ministerio decretase un aumento de 10 céntimos por kilo que gravaría todos los precios del papel no destinados a edición de libros o prensa y una reducción del 50% de los actuales precios del papel de edición, que sería compensado a los papeleros con los fondos producidos por el gravamen. Este alcanzaría el 67% del consumo de papel de España y no debería ser uniforme para todos los papeles, sino oscilar entre los 5 y 15 céntimos.

Por otro lado, el impuesto del 10% de usos y consumos sobre el libro no tenía en cuenta el alto valor espiritual que representaba el libro y se exigía que el Nuevo Estado lo considerara como un artículo de primera necesidad. Se argumentaba que el papel editorial representaba solo el 3% del consumo total del papel en España, por tanto el volumen de ese impuesto sería mínimo y se citaba que en Argentina el papel estaba libre de todo impuesto.

---

<sup>299</sup> Documento firmado por J. Pemartín, 10 junio 1944, dirigido al Vicesecretario de Educación Popular. Archivo INLE. Caja 41

<sup>300</sup> Documento firmado por J. Pemartín, 7 de octubre 1944, dirigido a José Luis Arrese. Archivo INLE. Caja 41

El INLE también abogaba por modificar la tributación por utilidades, que la VEP gestionara con las compañías navieras un régimen especial de favor para el transporte de libros a América dado el valor espiritual del libro y la reducción de tarifas en el transporte por ferrocarril, que el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas; que se autorizase la importación de maquinaria de artes gráficas y de encuadernación destinados a los talleres editoriales, con un descuento del 50% de los aranceles vigentes, y por último, que se concediesen primas a la exportación. Toda una batería de medidas económicas cuyo coste era mucho menor que los enormes beneficios que podrían reportar a la industria del libro, en opinión del INLE.

También se quiso llamar la atención sobre el librero exportador que antes tributaba en concepto de recargo por exportación 816 pesetas y ahora pagaba 4.757. Una cantidad totalmente excesiva dado el reducido volumen de sus ventas.

Ante las propuestas relativas al precio del papel, Arias Salgado pidió al Secretario Nacional del Sindicato del Papel que le informara sobre la conveniencia y posibilidades de llevar a cabo la rebaja del precio del papel editorial que se contemplaba en las conclusiones de la Asamblea. El Sindicato respondió con un Informe<sup>301</sup>, afirmando que era más sustancial las reducciones tributarias y las ayudas directas, constatando además que el porcentaje de papel destinado a la edición era mayor al 3% que se barajaba. Desde el punto de vista de los industriales papeleros, en principio nada habría de oponer a tal propuesta por cuanto no gravaba de manera directa tal rama de la producción. Sin embargo había diversas consideraciones que aconsejaban, a su modo de ver, orientar la cuestión por derroteros distintos. En primer término había que tener en cuenta que el consumo de papel editorial en esos momentos significaba más de un 3% de total del consumo de papel en España. Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio se oponía a tales aumentos pues su implantación significaba hacer recaer sobre un número limitado y desigual de españoles –los consumidores de papel-, cuando en justicia debería recaer sobre todos los españoles. Por el contrario, argumentaba que era mejor adoptar medidas de tipo tributario, como la exención o rebaja de tarifas de la contribución industrial y de utilidades a favor de los editores, o medidas de auxilio directo como las primas a la exportación, creación de premios anuales a las mejores ediciones, reducción de tarifas de correos,...

De nuevo Julián Pemartín tuvo que dirigirse a José Luis Arrese (23 febrero 1945) y a Arias Salgado (28 abril de 1945) porque las conclusiones de la Asamblea seguían sin tener contestación de los diversos departamentos de los que dependía su ejecución –Ministerios de Hacienda, Industria y Comercio y Educación Nacional- salvo las dirigidas al Ministro Secretario General del Movimiento relacionadas con el mejoramiento de los servicios de Correos y que estaban en vías de estudio.

Trascurrido un año los editores<sup>302</sup> reconocían que el INLE había elevado sus peticiones al Gobierno para su ejecución, pero ninguna de las medidas propuestas había sido adoptada por los organismos ministeriales responsables. En cambio el peligro de la competencia americana era un hecho.

Partidas importantes de ediciones argentinas se hallaban camino de España. El plano de esta lucha es desigual y desventajosa para los editores españoles, principalmente por dos causas.

---

<sup>301</sup> Archivo INLE Caj. 39 Documento con fecha 14 nov. 1944.

<sup>302</sup> Archivo INLE Caj. 39. Documento con fecha 14 nov. 1944

Nuestras ediciones están sujetas antes de ser producidas y puestas a la venta, a unas limitaciones derivadas de la censura. No se trata solo de los trámites extraordinariamente lentos y engorrosos a que están sujetos gran número de originales antes de ser entregados a la imprenta sino de la censura previa a que forzosamente ha de sujetarse cada editor cuando elabora sus planes debido a los rígidos criterios de exclusión. Por otra parte, nuestro libro resulta excesivamente caro, sobre todo porque el precio del papel de edición es mucho más alto que el argentino. Estos hechos justifican el profundo pesimismo de los editores de cara al futuro. Ruegan al INLE y a su director instándole a que interponga toda la fuerza de su prestigio y autoridad en las esferas de gobierno para que en breve plazo se ejecuten en su parte sustantiva las conclusiones aprobadas por la Asamblea, especialmente la supresión o atenuación de la censura y el abaratamiento del papel. El escrito lo firmaban: Editorial Juventud, Labor, Ramón Sopena, José Janés, Luis de Caralt, Gustavo Gili, Saturnino Calleja, Espasa Calpe, Afrodiseo Aguado, Espasa Calpe, Aguilar, Javier Morata, Instituto Editorial Reus, Revista de Occidente, Biblioteca Nueva.

Julian Pemartín en respuesta a la anterior envía de nuevo una carta al Vicesecretario de Educación Popular suavizando un poco las peticiones de los editores:

Esta dirección juzga justísima la instancia, en cuanto solicita la inmediata adopción de una fórmula económica que determine el abaratamiento del papel editorial, aunque discrepa respecto al tema de la censura, diciendo que se ha deformado el espíritu de las Conclusiones aprobados ya que en ellas no se pedía la supresión de la censura. No obstante esta dirección cree conveniente se acelere la posible promulgación de una Ley de Imprenta, en la que se regule de una manera definitiva e indiscutible el ejercicio de la censura editorial.

La Vicesecretaría de Educación Popular con fecha de 4 de julio responde al director del INLE comunicándole que consultados los centros adscritos al Ministerio de Hacienda: Dirección General de la Contribución, Dirección General de Timbre y Monopolio y la Dirección General de Aduanas no existe cauce legal y además alegan los tres que las reducciones o exenciones que se piden no aligerarán el precio del libro, por ello no se accederá a realizar las conclusiones 4ª, 6ª y 9ª de la Asamblea del Libro.

La denegación de la supresión del impuesto de usos y consumos se basó en informes de los centros gestores de los impuestos en los que se argumentaba que la reforma tributaria de 1940 creó el gravamen sobre el papel, cartón y cartulina al tipo del 10% sobre el precio de venta en fábrica, y por tanto no tenía cabida otorgar la exención. Además hacían constar que el valor del papel como materia prima para confeccionar el libro representaba la mínima parte del valor de su venta. A lo que el INLE respondía que el papel editorial podía incluirse entre aquellos artículos que, por consideraciones especiales, estaban exentos. Respecto al segundo argumento, el INLE afirmaba que era totalmente inexacto dado el precio tan elevado del papel en esos momentos y que aunque variaran las circunstancias económicas convirtiendo al precio del papel en un factor menos decisivo en el precio final del libro, siempre sería obligado que en la legislación tributaria española se reconociese la exención solicitada dada la excepcional importancia del libro por el valor cultural que representa.

En cuanto a la modificación del impuesto de timbre, los técnicos argumentaron que su modificación produciría un grave quebranto en los ingresos del Timbre y respecto a la concesión de un Timbre concertado no se podía llevar a cabo ya que las operaciones de los comerciantes o industriales que podían realizar no se podían determinar.

La dirección del INLE apreció una gran contradicción entre la gran cantidad de ingresos que no se dejarían de percibir y la afirmación de lo ínfimo del importe de las ventas en la mayoría de las ocasiones. Igualmente no fue aceptada la reducción de las tarifas vigentes para el transporte de libros por ferrocarril por parte de RENFE.

Tampoco la Subsecretaría de Presidencia del Gobierno contestó a los requerimientos de un arbitrio municipal para la creación y sostenimiento de la bibliotecas públicas. Sólo se había comenzado a elaborar el censo de escritores, porque dependía exclusivamente del INLE.

Un análisis de las diferentes ponencias nos muestra que fueron los intereses de los editores, los que más poder y por tanto más presión ejercieron ante el INLE para que llevara a cabo sus demandas. En estas conclusiones, como explica F. Larraz<sup>303</sup>, *se percibe que los editores exploraron las posibilidades y retóricas de las cuales podían valerse para desarrollar sus actividades económicas en un marco estatal hostil, conscientes de que representaban a una industria especialmente sensible al intervencionismo público, que imponía los libros a publicar, la orientación de los catálogos y que tenía un fuerte departamento de propaganda que les hacía la competencia. A todas estas amenazas se le unía la competencia venida de ultramar a raíz de su propio ocaso. Pese a que solicitaban que se atenuase en todo lo posible las interferencias estatales, pretendían beneficiarse de la naturaleza totalitaria del Estado mediante una protección especial que la hiciese compatible con la dogmática del nacionalcatolicismo.*

Uno de los puntos no tratados en la asamblea y que algunos comentaristas económicos destacaron fue la necesidad de potenciar el mercado interior mediante políticas de lectura. Tema que si mereció un capítulo en el libro de Gustavo Gili.

Lo que sí queda patente tras leer el libro de Actas de la Asamblea, es que todos los gremios del libro -autores, editores y libreros- vieron al INLE como el organismo intermediario para canalizar y defender sus intereses ante el Estado. Así los libreros le reclamaron su intercesión en la reglamentación del comercio del libro (quioscos, librerías de viejo, ...), en la elevación del presupuesto escolar destinado a la compra de libros educativos o la defensa del librero frente a catedráticos y editores de libros de texto.

Los autores, que fuese el mismo INLE quién estableciese un contrato tipo entre autores y editores, y una vez que en su seno se incluyera a sus representantes, que se le capacitase con la autoridad suficiente para mediar y conciliar en la interpretación y ejecución de los contratos editoriales. Por último, los editores requerían que a través del Instituto se regulasen todos los problemas editoriales, evitándose duplicidad y dudas innecesarias y que la función de censura no se confiara al Instituto, ya que era una función exclusiva del Gobierno.

En conjunto, se demanda que se dote al INLE de los medios económicos suficientes, de una reglamentación y de unas facultades necesarias para que con sentido unitario y verdadera eficacia dirigiese eficazmente la política del libro en el interior y en el exterior.

Un año después de la clausura de la Asamblea, el Estado nada había hecho en relación con sus peticiones. Las razones: había que implicar a varios ministerios (Hacienda, Educación e Industria y Comercio), y todos denegaron las peticiones que les afectaban. Por ello un grupo de procuradores estudió y elaboró una proposición de ley elevada por el INLE, a lo que seguramente no fue ajeno que Julián Pemartín fuera procurador en las Cortes como miembro nato por su condición de consejero nacional en la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946).

20 años después con motivo de los XXV años de paz<sup>304</sup> se hacía esta negativa valoración de la Asamblea del Libro:

---

<sup>303</sup> LARRAZ, F. Historia trasatlántica del libro, Gijón, Trea, 2010

<sup>304</sup> MANGADA, A. "Pasado y futuro del comercio del libro", *El Libro Español*, junio 1964, p. 240

*Repasemos con un sentido realista el libro de Actas publicado por el INLE en 1945. Problemas que podrían estar resueltos en su mayor parte por una completa unión gremial, y por una fácil colaboración con el editor, fueron aireados y expuestos a la luz pública, y desorientados por intervenciones de autores y en muchos casos de editores. En ocasiones, el exhibicionismo, la defensa de pequeños intereses (pues mezquino era el año 1944 en cuanto a producción y papel editorial) y en ocasiones el despiste, dieron al traste los excelentes propósitos de esta Asamblea.*

#### **4.6. LA LEY DE PROTECCIÓN DEL LIBRO ESPAÑOL DE 1946**

Las conclusiones de la Asamblea del Libro de junio de 1944 al no obtener respuesta de los distintos ministerios, al final fueron articuladas en una Proposición de Ley que el Director del INLE, acompañado del número reglamentario de procuradores, elevó a la Mesa de las Cortes Españolas. La Comisión Permanente de las mismas la tomó en consideración, y el Presidente de las Cortes, informado de la trascendencia del problema que la Proposición intentaba resolver y de la diversidad de los factores que habían de intervenir, designó una Comisión especial integrada por Procuradores pertenecientes a las Comisiones de Educación Nacional, Hacienda e Industria y Comercio, presidida por el vicepresidente de las Cortes. Dentro de esa Comisión pudo estudiarse la Proposición de Ley desde todos los puntos de vista, que aconsejaron supresiones y ampliaciones.

Su objetivo era disminuir el coste de producción de los libros, pero sin olvidar las virtudes propagandísticas que para el régimen político podía tener su difusión tanto en el mercado interior como exterior.

La protección tenía un carácter marcadamente comercial, pues se otorgó un estatuto privilegiado al comercio exterior de libros, reduciendo drásticamente los impuestos sobre el papel en los libros para la exportación. Aunque la fijación de precios de venta de papel a los editores fue la medida más destacada de la ley.

Su tramitación se dilató por motivos burocráticos. Pese a la oposición del Ministerio de Hacienda y el silencio de Industria y Comercio, Julián Pemartín insistió hasta lograr una audiencia con el mismo Franco en julio de 1946, consiguiendo su aprobación y la de su Gobierno al proyecto de ley. Pero nuevamente el procedimiento se paralizó en su trámite hasta finales de 1946 debido a las presiones de la industria papelera<sup>305</sup>.

El articulado de la Proposición de Ley<sup>306</sup> en el curso de la tramitación experimentó algunas modificaciones fruto de las dos enmiendas que se presentaron ante la Comisión. Una contra el articulado y otra frente a la totalidad, firmadas por los señores Moreno Torres y Giménez Caballero respectivamente.

La primera de las enmiendas<sup>307</sup> pedía la eliminación de los arts. 6º y 7º<sup>308</sup> de la Proposición, considerándolos en desacuerdo con lo estatuido en la Ley de Régimen Local de 17 de julio de

---

<sup>305</sup> LARRAZ, F. Una historia transatlántica del libro, Gijón: Trea, p. 151

<sup>306</sup> "Proposición de Ley", *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, núm. 145 y 154

<sup>307</sup> Enmienda firmada por José Moreno Torres, Madrid 14 junio 1946. A.C.D. S. General, núm. 2348-1

<sup>308</sup> art. 6º - que se cumpla lo estipulado en el RD de 6 de febrero de 1926 que obliga a los ayuntamientos a la compra y reparto de libros o a la creación de bibliotecas públicas- y 7º -"...se pone en vigor un arbitrio municipal de 10 céntimos por habitante para creación y sostenimiento de bibliotecas públicas".

1945, ya que las competencias municipales relativas al libro y su lectura ya estaban especificadas. La ponencia encargada de emitir informe aceptó las razones del señor Moreno Torres y acordó la supresión de los mencionados artículos. Su argumento:

(...) dentro de las competencia municipal indicada figura ya la actividad dirigida principalmente a la consecución de instrucción y cultura (...) Por tanto, si no los aplica en la proporción o con la eficacia que se crea obligada podrá recurrirse en queja al Gobernador o acudirse al Delegado de Hacienda para que se haga una mejor distribución presupuestaria mas no existe justificación para imponer un nuevo arbitrio municipal, que habría de rendir cerca de tres millones de pesetas en junto y que ni siquiera dice la proposición de Ley examinada cómo y por quién se ha de cobrar y emplear. Y si la atención se reputa de necesidad general habrá de recaer sobre el Estado no sobre el Municipio.

La segunda enmienda a la totalidad de la proposición fue defendida por Ernesto Giménez Caballero en junio 1946<sup>309</sup>. Esta enmienda, por un lado representaba a los sectores más ideologizados de Falange que se opusieron a la ley por su carácter mercantilista, pero a la vez también trataba de defender los intereses de las papeleras. Tachaba de parcial la proposición y decía que para ser integral necesitaba contar con la política de varios ministerios: Exteriores, Hacienda, Industria y Comercio, Trabajo. De éste último porque de aprobarse supondría una ruina en las industrias de celulosa y papel que daría por resultado un paro obrero inevitable.

Giménez Caballero sustentaba sus argumentos en tres direcciones: la protección del libro de raza española, la defensa de la industria papelera y la denuncia de que la ley solo favorecía a los editores, entidades privadas, que además se les traspasaba parte de la misión tutelar de defensa del espíritu español que antes ejercía el Estado.

Este excéntrico ideólogo del fascismo hispano, entendía por libro español, el producido y editado en lengua española, dentro de España, cuyo contenido no fuera contrario a los principios espirituales y nacionales originados en el Movimiento liberador, y para su difusión tanto en el exterior como en el interior proponía crear el certificado de españolidad emitido por el INLE y el Ministerio de Educación Nacional. Había que premiar únicamente al editor que se esforzara en producir libros españoles con anticipos sindicales, con permisos de traducción, con subvenciones y con honores, y el Estado para propagar el libro español ya contaba con el CSIC y la Editora Nacional, además del resto de publicaciones oficiales.

Frente a este concepto de españolidad del libro, el editor Calleja aclararía en un escrito lo que se entendía por libro español en el Dictamen de de Ley<sup>310</sup>:

1º Libro de espíritu español, escrito y elaborado dentro o fuera de España. Si en Buenos Aires o en México se produce un libro de verdadero espíritu español, ese libro es merecedor de protección por parte del Estado.

2º. Libros de ciencia, técnica, literatura, arte, etc., que den fe de la cultura española, contribuyen a su conocimiento y prestigio y remuneran económicamente el trabajo de escritores, editores, papeleros, impresores, libreros y de todas cuantas actividades viven dentro del área de las artes gráficas.

3º. Libros extranjeros traducidos al español e impresos en España. Es de una evidencia que en el campo de la Medicina, de la Química, de las Ciencias Puras y aún de la Técnica, España

---

<sup>309</sup> Enmienda firmada por E. Giménez Caballero Madrid 14 junio 1946. A.C.D. S. General, núm. 2348-1

<sup>310</sup> “La españolidad del libro y defensa del art. 5º”, escrito del editor Calleja, s/f Archivo INLE- Caja 41



necesita acoger la producción extranjera, tanto para satisfacer necesidades del interior, como para seguir haciendo de puente científico entre Europa y Sudamérica. En ninguna de estas categorías es posible hablar de libros de espíritu no español, en el sentido de libros antiespañoles, dado el clima de depuración moral obtenido en nuestra patria. En todo caso llegar al casuismo de tal o cual libro, o tal página, es cosa que excede a la generalidad de una Ley y queda al cuidado diario de la censura gubernativa. Sobre esta firme base de que todo libro que actualmente se produce en España representa positivamente en mayor o menor grado los valores españoles, el Dictamen aboga por un régimen de protección integral y no parcial. La certificación de españolidad que defiende la Enmienda –de Giménez Caballero– cerraría a nuestros libros las fronteras. Precedente: el Consejo de la Hispanidad ha tenido que borrar su nombre al pie de sus publicaciones y camuflarse bajo el rótulo de Instituto de Cultura Hispánica, para poder introducir sus libros en Sudamérica. Estamos seguros de que los libros dotados de certificación de españolidad serían excluidos del comercio del mundo.

Respecto a las medidas que afectaban al precio del papel y, por tanto, a las papeleras, Giménez Caballero argüía que la escasez y costo del papel, era un problema general, y no particular de España, cuya solución dependía de causas exteriores y no internas, y que además el papel sólo suponía un 10% del coste de un libro, frente al 33% de beneficio de los libreros. Defendía la política autárquica de las papeleras para no importar celulosa, apostando en cambio, por la importación a través del Sindicato del Papel de las materias primas que no se producían o escaseaban –pastas blanqueadas, fibras nacionales, sosa, cloro. Y dado que se publicaban más libros y había más editoriales, según los datos recogidos en el citado libro de Gustavo Gili, proponía que elevasen las tiradas para obtener más beneficios, en vez de atenuar las cargas impositivas o favorecer la importación de papel.

La Ponencia por unanimidad rechazó esta enmienda por considerar que la protección del conjunto del libro editado en España estaba ya justificada por la tutela que el Estado ejercía sobre toda esa producción editorial, y porque tal protección de índole general no excluía la otra de excepción que debía otorgarse a determinados libros y publicaciones, pero cuya institución no era propia de una Ley, sino que debía realizarse a través de disposiciones de los organismos creados al efecto en los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación Nacional.

Giménez Caballero además de sugerir que se ampliasen los plazos para su tramitación y así poder aportar nuevas ideas y nuevos datos, respondió al rechazo de la Ponencia insistiendo de nuevo en la españolidad del libro, que aquélla sólo favorecía a los editores y que también era rechazada por el Sindicato del Papel y que no todos los editores estaban de acuerdo con sus medidas económicas.

Para un determinado grupo de editores<sup>311</sup> la Proposición de Ley encarnaba un proyecto generoso de protección al libro español que para llevarse a la práctica necesitaba, aparte de medidas de fomento en el ámbito de las bibliotecas, de una base económica sustentada en la reducción de las cargas tributarias, medidas que favoreciesen la exportación –primas a la exportación, regulación cambios de moneda- y un abaratamiento en el precio del papel. Respecto a éste último aspecto regulado en el art. 5º comentaban que sus propósitos son excelentes, pero que sus consecuencias prácticas serían escasas o contraproducentes:

Respecto al primer párrafo, sobre la regulación del precio por el Sindicato del Papel en función de los precios en el extranjero, los editores objetan que no se puede hacer depender el precio del papel en una coyuntura de inestabilidad de mercados, además de que va en contra de la política dirigista del Nuevo Estado que elude todo régimen de competencia libre. Respecto al segundo párrafo relativo a la autorización de un aumento del precio del papel no editorial,

---

<sup>311</sup> Escrito firmado por las editoriales: El Hogar y la Moda; Editorial Molino; Labor; Sociedad Anónima Horta de Impresiones y Ediciones; Instituto Gallach y Espasa-Calpe en respuesta a la Proposición de Ley aparecida en el Boletín de las Cortes el 3 de abril de 1946. A.C.D. S. General, núm. 2348-1

excepto el de la prensa, los editores opinaban que sería una medida impopular al encarecer un artículo de tan amplio consumo. El tercer párrafo establece la libre importación, lo que supone una alteración fundamental de nuestro régimen arancelario y su implantación provocaría que los fabricantes de papel solicitaran análogas franquicias para todos los elementos y materias primas de producción. Tb en contra de la nueva política económica. Hay que ir a medidas más efectivas, tales como que a la industria papelera se le suministre todo el papel editorial necesario, y para ello se requiere pueda adquirir la maquinaria y las materias primas para la fabricación de un buen papel editorial. Solo así, disponiendo de una industria moderna de gran capacidad productiva con bajos costes se podrá asegurar un abastecimiento suficiente de papeles tipo que permitan a los editores españoles enfrentarse a la competencia extranjera.

La Proposición generó un enfrentamiento, entre las papeleras y los editores. Las primeras tras analizar el contenido de los arts. 4º y 5º solicitaron fuesen suprimidos con los siguientes razonamientos, algunos ya expuestos por Giménez Caballero<sup>312</sup>:

1º. La proposición de ley no tiene como finalidad fomentar la cultura española, sino acrecentar los intereses materiales de los industriales editores de libros. Hemos de llamar la atención de que la proposición de ley que se inserta en el BO de las Cortes del 7 de junio coincide en su parte dispositiva con la que fue firmada por los Procuradores, pero difiere en su parte expositiva de la que se publicó en el del 3 de abril de 1946. En la primitiva redacción se inserta toda una serie de argumentos espirituales, morales y culturales, de los cuales se prescinde en el 2º texto, y alega, tan solo, que el promover el desarrollo de la industria editorial española en grado suficiente para hacer posible la competencia con la industria extranjera en calidad y precios, es la exigencia previa para conseguir que el libro español alcance la mayor difusión posible. No parece plausible pretender amparar sus intereses materiales encubriéndolos bajo el “santo nombre de España”. Nosotros afirmamos que la política cultural está ausente en la parte dispositiva.

(...)Lo que ya no puede tener disculpa es que esta industria editorial protegida para poder vivir contra su similar extranjera, aspira a estrangular las otras industrias nacionales, con objeto de que los editores puedan aumentar los considerables beneficios que en la actualidad obtienen. Si el libro editado en América es bueno y su precio más económico que el producido aquí, desde el punto de vista de la cultura nada habría que lamentar. Fomentar su importación será contribuir a que se lea más. Las enseñanzas que el libro reporte, el contenido espiritual de él, no cambian porque sea a uno u otro lado del océano donde se edite. Conviene, además, llamar la atención sobre un hecho, el que las empresas editoriales argentinas, principalmente, que envían sus libros a España, pertenecen a los propios editores españoles a quienes se pretende proteger con la proposición de Ley.

2º. Jamás los editores españoles han tenido una época de más prosperidad que la presente.

Lo que los editores llaman “política del libro” es un conjunto de ventajas económicas cuya concesión vienen solicitando con anterioridad a 1917. Han sido principalmente los editores catalanes los que se han mantenido en la vanguardia dirigidos por la destacada y prestigiosa personalidad de Gustavo Gili, en cuyo folleto “Bosquejo de una política del libro”, se insertan las soluciones que él propone y de las que son transcripción literal todos los artículos que integran la parte dispositiva de la proposición de ley no es otra cosa que la vía por la que pretenden obtener los editores catalanes lo que desde hace más de un cuarto de siglo vienen solicitando (...)

3º El precio del papel no influye apreciablemente en el problema editorial ni en el abaratamiento del libro. (...)Si el libro español debe ser impulsado por razones de cultura, deberá ser el Estado o todos los ciudadanos los que concurran a su auxilio; pero pensar que debe ser solo el consumidor de papel y no los demás españoles quienes deben pechar con ese

---

<sup>312</sup> Folleto de las papeleros (s/f). A.C.D. S. General, núm. 2348-1

gravamen, es de una injusticia que sólo puede explicarse por el precedente que ha regido en el papel para la Prensa. (...)¿Cuál es la razón por la que los editores solicitan esas ventajas de la industria papelera y del Estado? La razón es que son los únicos elementos de quienes pueden obtener algo. Al autor no se le puede pagar menos; a la imprenta tiene los jornales fijados por el Ministerio de Trabajo, al librero sí podría disminuirse los beneficios, pero los libreros son elogiados y defendidos por los editores. Sólo queda el Estado y la industria del papel (...)

4º. Razones que explican las actuales dificultades para la exportación del libro. Los industriales de todos los países del mundo, incluso los que no han tenido guerra civil ni han participado en la guerra mundial, han tenido y siguen teniendo enormes dificultades para exportar los productos que normalmente solían enviar fuera de su país. Los papeleros critican la actitud de los editores españoles que reclaman medidas urgentes que les permita producir más tanto en el mercado interior como en el exterior, sin esperar a que se regularice la economía posbélica. En ningún país del mundo existe una industria que tenga las protecciones que se aspira a conseguir en la proposición de ley (...)

5º. Las empresas editoriales son unas industrias como las demás, que deben estar sometidas al mismo régimen tributario y arancelario. Por el hecho de que el producto de su industria sea un libro, el que fabrica no es superior a cualquier otro industrial o mercader. No confundamos al autor, que es el que presta su inteligencia y su cultura, con el que hace de ellas un instrumento de negocio. Eximirle de impuestos, obligar a las entidades y corporaciones que perciban subvenciones del Estado, Provincia o Municipio, a dedicar un mínimo de 1% de estas subvenciones a compra y reparto de libros –aunque la gente a quien se le reparten no sepa leer-; obligar a los ayuntamientos a destinar cantidades entre el medio y el 3 por mil de su presupuesto a hacer otro reparto semejante o a crear bibliotecas populares ; establecer un arbitrio municipal de 10 céntimos por habitante para la creación de bibliotecas públicas, y por si fuera poco destinar 5 millones de pesetas a la concesión de primas a la exportación, a más de adquirir el papel a precio más reducido o importarlo libremente. Sin embargo, las entidades que suscriben solicitan que no se apruebe la proposición de ley (firman 16 papeleras, la mayoría del País Vasco).

La réplica de los editores<sup>313</sup> fue inmediata y contundente en sus argumentos:

La protección económica que con la ley se pretende otorgar a la industria editorial, favorece sin duda los intereses materiales de los editores. Pero que indiquen los papeleros cual es el sistema para que arruinado a los editores pueda asegurarse la difusión del libro. Una industria editorial sólida es el soporte indispensable para la difusión de la cultura.

No es un delito el que los editores procuren aumentar sus propios beneficios. Pero la protección que invocan, a la vez que aumentará sus ganancias también abaratará su precio y por tanto favorecerá la expansión del libro español. Sin libro barato y con libro americano barato de libre entrada en España, no existe posibilidad de difundir el libro español.

El legislador (arancel 1083 y el 1084<sup>314</sup>) ha querido defender a la producción española de la competencia que podían hacerle Francia, Italia, Alemania, etc. y en cambio ha considerado arancelariamente como producción española a la producción librera americana. Y por ello los libros americanos entran en España sin pagar más derecho que el puramente estadístico de 10 cts. los 100 kg.

---

<sup>313</sup> Réplica a las afirmaciones contenidas en el folleto de los papeleros. (s/f). A.C.D. S. General, núm. 2348-1

<sup>314</sup> El arancel 1083 establecía que “los libros, folletos, periódicos y otros impresos análogos, estén o no encuadrados, en lenguas hispánicas procedentes y editadas en naciones de habla española pagan por 100kg de peso 0,25 ptas. y 0,10, en cambio el arancel 1084 grava con 4 y 1,60 ptas. los libros procedentes de otros países.

Nadie pretende estrangular a nadie como afirma el folleto con evidente exageración. La Ley prevé una compensación para los papeleros. Pretende establecer para el papel editorial un régimen similar al que durante más de 20 años ha venido rigiendo para el papel prensa, y a pesar de que el volumen del papel de prensa es 5 o 6 veces mayor que el papel editorial, la industria papelería española no se ha arruinado.

Los editores no pretenden modificar el arancel. Desean que los libros americanos como hasta hoy puedan entrar libremente en España, ya que de rebote favorece la exportación de nuestro libro y tiende a fortalecer la unidad espiritual hispanoamericana.

No es un daño irreparable el que los libros que se lean en España sean americanos. Pero los editores no quieren que España se convierta en un dominio espiritual de América por salvar los intereses económicos de los fabricantes de papel.

La primera empresa editorial española que creó en América una editorial fue Espasa-Calpe, filial de la Papelería, y el nº de libros que ha publicado hasta ahora supera con creces los editados por todas las otras empresas españolas. Por otra parte varias de las casas que se cita no han editado en América libro alguno, sino que han funcionado como sucursales distribuyendo libros, han editado libros de autores locales, y exportan libros a los países americanos.

Ninguna de las editoriales argentinas realmente competidora de la producción española es sucursal de una casa española. Hasta ahora no se han vendido libros de Gili, Salvat, SGP. Se han limitado a reproducir en Buenos Aires sus ediciones para venderlas en América. Es una insidia hablar de editores catalanes haciendo un poco de separatismo. En la Asamblea del Libro prosperó la propuesta del catalán Gustavo Gili, porque la votaron editores, libreros y escritores de toda España. La Ley no beneficia exclusivamente o preferentemente a los editores catalanes. La medida es nacional.

En España ha aumentado el nº de editores, pequeños sobre todo, porque la editorial es la única industria que puede establecerse sin necesidad de autorización. Ello ha hecho que muchas personas, deseosas de emplear capitales se hayan dedicado a la única industria que podía establecerse sin cortapisas.

Las demandas de los editores no obligan a ninguna industria a sacrificar sus intereses. Además la Ley prevé una compensación para los papeleros.

Evidentemente el precio del papel no es el único componente del valor del libro pero hoy es uno de los más importantes, prueba de ello es que Sopena ha dejado de editar libros populares.

La forma en que el folleto realiza el cálculo del precio del libro no es ciertamente la que los papeleros emplean en sus escandallos, porque con ella parece que pretenden que el papel pase por las manos de los editores sin dejarles ningún beneficio. Además dan como precio del papel el precio de tasa que hoy es simplemente irrisorio: acaso no llega ni al 10% de su consumo. El 90% restante se adquiere a 12-14 ptas. Kg. Luego el librero tiene normalmente un 25% de descuento.

Se pide que todos los ciudadanos concurran en el auxilio del libro español, porque son consumidores de papel, esto le parece injusto a los papeleros, pero ellos no dicen que son una industria protegida que grava a los consumidores, pues cuando se pone un arancel al papel que entra en España, este arancel permite a los fabricantes nacionales vender más caro el papel que producen y por tanto beneficiarse a costa de los consumidores.

Teniendo en cuenta que el precio de venta al público de un libro se desglosa en 4 partes iguales: 25% desembolso para la producción; 25% para el librero; 25% gastos generales del editor y 25% beneficio editorial posible. La realidad respecto a los beneficios para el editor es muy diferente, ya que un libro genera los mismos gastos valga 10 pesetas o 200, además no debe olvidarse los gastos que ocasionan las devoluciones de los libros invendidos. Por otro lado raramente el editor vende rápidamente toda la edición de un libro, lo corriente es que tarde varios años (2, 3, 10 o más) en agotarse o que no se agote nunca. De manera que ese 25% del

precio de venta al público no constituye en la práctica más que un beneficio teórico que el editor no alcanza jamás en el conjunto de su negocio.

Conviene favorecer por razones espirituales y políticas el abaratamiento del libro. Hoy los países americanos disfrutan de papel barato y han desarrollado su propia industria editorial, con lo cual envían libros a España a precios más baratos que los libros españoles porque se da el caso único en la política arancelaria nacional de que el libro no está protegido con una barrera arancelaria como lo están todas las manufacturas españolas, incluido el papel. Para importar papel hay que pagar un derecho arancelario; para importar libros no. Y como estos libros están fabricados con papel adquirido al precio internacional, resultan más baratos que los libros españoles fabricados con papel que sobre el coste internacional soporta el gravamen del arancel.

Hoy las ediciones son pequeñas porque el editor no dispone de todo el papel necesario. El argumento de que la escasa potencia económica de las editoriales es la causa de las tiradas reducidas es falso. Así como que también es falso, que la industria editorial sea una industria como las demás, pues es la más intervenida y controlada por su importancia espiritual (censura, planes editoriales) Por ello en compensación ha de recibir un trato diferente. Un libro puede tener consecuencias incalculables morales, sociales, políticas.

Nadie pretende negar la importancia del autor, pero una obra no publicada no tiene valor alguno. Y para publicarla y difundirla se necesitan determinadas condiciones económicas que son las que se pretende crear con esta ley.

Examinadas las dos únicas enmiendas, la Ponencia estudió el articulado de la Proposición. Esta pasó de 9 artículos a 6 en la Ley definitiva. Por unanimidad fueron aprobados los artículos 1º y 2º<sup>315</sup>. El art. 3º se suprimió porque en parte estaba contenido en el 1º<sup>316</sup> y el 4º se modificó pasando a ser el 3º, en el que se regulaba la devolución del importe de la contribución de Usos y Consumos devengados sobre el papel invertido en los libros cuya exportación se justificase. Los arts. 6º y 7º, como ya vimos anteriormente fueron retirados. Por último los arts. 4º y 5º de la definitiva Ley comprendían las medidas encaminadas a reducir el precio del papel.

Concretamente, los fabricantes de papel no podrían vender a los editores matriculados a un precio superior al promedio de la cotización internacional del papel, por ello se creaba una Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda, Educación Nacional, de Industria y Comercio y el Sindicato del Papel que semestralmente fijaría el promedio. Y a propuesta de dicha Comisión y para compensar a las papeleras, se autorizaba un aumento sobre el precio del papel no editorial, exceptuando el papel prensa y el de fumar, cuyos fondos nutrirían una Caja de Compensación administrada por la citada Comisión. Y si la industria española no podía suministrar el papel solicitado por los editores se autorizaba, a propuesta de la Comisión la importación de cupos de papel editorial, cuyos derechos arancelarios se abonaban con cargo a los ingresos de la Caja de Compensación. También se autorizaba a los

---

<sup>315</sup> Art. 1º. Quedan exentas de la obligación de contribuir por los conceptos de Derechos reales, Timbre o Impuesto especial de Emisión durante el periodo de 5 años, las aportaciones de capitales para la constitución, ampliación y mejoras de empresas editoriales, sea cualquiera la forma jurídica que afecten. Art. 2º. Quedan, asimismo, exentos del Impuesto de Utilidades los beneficios obtenidos por las empresas editoriales que sean invertidos en mejoras o ampliaciones de la propia empresa.

<sup>316</sup> Art. 3º (suprimido). La D.G. del Timbre concertará el pago del impuesto del Timbre con todas las empresas editoriales que lo soliciten con una bonificación del 50% sobre la cifra que correspondería aplicar de acuerdo con el nº y volumen de ventas que realicen, según la vigente ley de impuesto del Timbre.

editores a importar papel libre de derechos arancelarios con destino exclusivo para ediciones destinadas a la exportación.

Calleja poniendo voz a los intereses de los editores, defendió el art. 5º, ya que la fórmula que en él se proponía era la única viable para abaratar el papel editorial en proporción suficiente para que dejase de ser prohibitivo su precio, porque las demás partidas no eran susceptibles de rebaja, puesto que reducir los gastos de impresión o encuadernación podían implicar un grave quebranto en la clase obrera.

Calleja hablaba de que con la aplicación del gravamen podía constituirse un fondo entre 12 y 14 millones de pesetas, cantidad suficiente para compensar una rebaja del 50% sobre los precios de venta vigentes para el papel de edición. Y tal rebaja del precio del papel era posible sin quebranto para el Estado y sin daño para la industria papelera, pues el gravamen se repartía proporcionalmente y con un desembolso mínimo, entre todos los consumidores de papel.

Ante la objeción hecha por el Ministerio de Hacienda de que el gasto de divisas que ese párrafo representaba, para Calleja no tenía fundamento real porque la cantidad de divisas que se consumiría en la importación de papel retornaría multiplicada al exportar los libros confeccionados con él y sería sobradamente recuperado por el Estado.

Finalizaba este editor, diciendo que para fomentar el desarrollo de la industria editorial española y poder hacer la competencia a la extranjera en calidad y precio de sus productos, había que recordar que el libro editado en los países de habla española era el único artículo terminado que está total y absolutamente exento de todo gravamen en el vigente arancel al ser importado a España; mientras que todas las materias primas (papel, cartón, telas, tintas, oro de encuadernación), etc., así como toda la maquinaria necesaria para editar libros en España, estaban gravadas con fuertes derechos arancelarios, lo cual era exactamente lo contrario de lo que ocurría en los países Hispanoamericanos, donde todas estas primeras materias y maquinaria estaban exentas de derechos de aduana.

Otro procurador, Riestra del Moral, propuso que se incluyera en la Ley alguna disposición que garantizase el abaratamiento de los libros una vez conseguido el abaratamiento del papel. La Ponencia lo aceptó unánimemente y se acordó la inclusión de un artículo, que sería el nº 5, en que se facultase a la Comisión encargada de administrar la caja para proponer a los Departamentos correspondientes una regulación de los precios.

¿Qué pasó con el art. 8º en el que se destinaban 5.000.000 de pesetas del Ministerio de Industria y Comercio para primas a la exportación? Pues en el texto definitivo de la Ley no aparece, ni tampoco suscitó debates para su supresión.

Pemartín puso especial celo en que la ley tuviera una rápida implantación. Antes de su defensa en Cortes, se dirigió al ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín, para pedirle la máxima diligencia, pues temía que las maniobras de las papeleras ralentizaran la entrada en funcionamiento de las nuevas tarifas y, por tanto, de los beneficios para los editores. Para evitar problemas, Pemartín solicitó a Ibáñez que garantizase el peso del INLE en la comisión interministerial que iba a administrar la caja de compensación, pues no le inspiraba confianza la gestión que pudiera hacer el Sindicato del Papel al frente de la caja.

En el discurso pronunciado en exposición y defensa de la Ley<sup>317</sup>, Julián Pemartín trató de convencer a los procuradores de la necesidad de una Ley que debía proteger la producción y difusión del libro español.

El libro no es sólo un artículo de comercio y exportación, sino que su valor cultural y espiritual predomina sobre todos los demás valores. Y si por un lado el libro merece y exige una vigilancia depuradora y una ordenación de su contenido, por otro lado merece una protección, un trato de preferencia que acreciente en extensión y eficacia la alta función que le corresponde (Tutela y privilegio). El trato de excepción es inaplazable, en el exterior por la competencia que sufre en el continente americano y en el interior porque es un producto caro poco asequible a extensos sectores nacionales. Por ello se requiere con urgencia que baje el precio del libro, que en la Ley se pretende conseguir en base a exenciones fiscales compatibles con las posibilidades de la Hacienda y el abaratamiento del precio del papel editorial.

Y afirmaba que aunque la Ley no resolvía todos los problemas relacionados con el libro, su cumplimiento había de mejorar considerablemente las condiciones económicas, con la consiguiente disminución de su precio de venta y el acrecentamiento de su difusión. Esta Ley, diría, no era más que el primer paso de una más vasta política protectora del libro español, y su índole económica no operaba al margen de la línea espiritual.

La puesta en marcha de la Ley, al afectar a las actividades de diversos Departamentos ministeriales, requirió la constitución de una Comisión interministerial, no sólo encargada de desarrollar cuanto se refería a precios, tasas y cupos de importación de papel, sino que también hubo que dotarla con facultades para facilitar la mejor difusión del libro español.

Un año y medio se tardaría en hacer efectivo el contenido de la Ley. En primer lugar se constituyó la Comisión Interministerial para la Protección del Libro Español (CIPLE)<sup>318</sup> a que se refería el art. 4º de la Ley, por Orden 11/02/1947<sup>319</sup>. Constituida por cada uno de los Ministerios de Hacienda, Industria y Comercio y Educación Nacional, así como por un representante de la Delegación Nacional de Sindicatos, bajo la presidencia del Director del INLE. El personal del Instituto realizaría todos los trabajos de oficina a que diese lugar su labor.

Como la Ley determinó que el papel que debían suministrar las fábricas a la industria editorial había de ser a un precio análogo al de la cotización internacional, la Comisión arbitró el siguiente sistema para conocer dicha cotización. Primero se enviaban muestrarios de los papeles de edición de aquellas calidades que habían de establecerse en España como papel editorial protegido al Ministerio de Industria y Comercio, para que a su vez este organismo los trasladara a los Agregados comerciales de dos países productores de papel, Suecia y Canadá, y otros dos consumidores del mundo hispano, Argentina y Cuba, con el fin de que semestralmente dichos representantes dieran a conocer a la Comisión los precios de papel existentes en los mercados de aquellos países.

---

<sup>317</sup> Ley de protección del libro español : aprobado en Cortes el día 12 de diciembre de 1946 y discurso pronunciado en exposición y defensa de la misma Ley por D. Julián Pemartín, director del Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, 1946

<sup>318</sup> Disposiciones normativas de la C.I.P.L.E., Madrid, 1957

<sup>319</sup> Memoria de las actividades de la Dirección General de Propaganda, Madrid: Publicaciones Españolas, 1947, pp. 113-118

En julio de 1947 apareció publicado el primer cupo de papel protegido del que cada editor podía disponer, facturándose el kg de papel de 1ª a 7 pesetas y el de 2ª a 5. A estos precios se les había aplicado una rebaja de 2 pesetas en kg.

Los fondos para llevar a cabo esta compensación se extraían de la Caja de Compensación. Su capital provenía de aplicar a los papeles no editoriales un gravamen de 0.10 pesetas por kg. A petición de la Comisión se autorizó la extensión de dicho gravamen al cartón y cartoncillo.

Nada más arrancar su actividad a la Comisión se le presentaron algunas dificultades, pues al no ser posible la fabricación del papel editorial con materias primas nacionales, ya que el precio alcanzado por el esparto, albardín, recortes de papel impedían la utilización de estos productos, la solución era la importación de pastas, pero el Ministerio de Industria y Comercio suspendió temporalmente la concesión de licencias de importación.

En cambio, la CIPLE sí consiguió del Ministerio de Industria y Comercio la concesión de un cupo extraordinario de 2.500 toneladas de sosa cáustica y 2.500 toneladas de cloruro de cal, con destino a la fabricación de papel editorial protegido. Igualmente obtuvo todo el esparto importado procedente de Marruecos para la fabricación de papel protegido.

Hasta marzo de 1947<sup>320</sup> no se dictaron las normas relativas a la aplicación del precepto contenido en el párrafo 4ª del art. 4º (se autoriza a los editores para que con destino exclusivo a sucesivas ediciones destinadas a otros países importen libros de derechos arancelarios el papel tarifado en las partidas 1.028 y 1.029 de los vigentes Aranceles de Aduanas en cantidad igual a la que previamente hayan exportado en libros editados por la industria nacional en idioma español)

Y a través de la Orden de 19 de junio de 1947, la CIPLE elevó a los Ministerios de Industria y Comercio y Educación Nacional la propuesta de unas normas necesarias para su mejor desarrollo. En dichas normas se especificaba qué se entendía por papel editorial protegido (el producido por fabricantes nacionales y destinados exclusivamente a la publicación de libros en lengua española e impresos en España, por editores debidamente clasificados), que la potestad de fijar los precios del papel editorial correspondía a la CIPLE; la producción mínima del papel editorial protegido se establecía en 7.200 toneladas anuales que los fabricantes de papel estarán obligados a poner a disposición de las editoriales a razón de 600 toneladas mensuales y en cuanto a la Fabricación de papel editorial:

Todos los fabricantes de papel de España que fabriquen papeles corrientes vienen obligados a suministrar la cantidad de papel editorial protegido que les sea señalado por la CIPLE de acuerdo con el Sindicato. Los fabricantes de papel que no acepten fabricar serán privados de los cupos de pasta y materias primas, tanto nacionales como extranjeras, que les corresponda para la producción de papel editorial. A fin de asegurarse debidamente el suministro de papel editorial, el Ministerio de Industria y Comercio, previa propuesta del Sindicato, adoptará las medidas necesarias para detraer de las totales importaciones de pasta, así como de las demás materias primas destinadas a la fabricación de papel, las cantidades precisas para el debido abastecimiento de los fabricantes de papel.

Finalmente, a través de la Orden de 1 de junio de 1948 se reguló la última de las exenciones a los editores: la del impuesto de utilidades para aquellos que invirtieran los beneficios en mejoras o ampliaciones de la empresa. El cumplimiento de la exención de impuestos por ampliación de capital fue inmediato. En su primer año de vigencia, se acogieron a ella las editoriales Salvat, Labor, Ramón Sopena, Selecta, Montaner y Simón, Raute y Argos. Manuel

---

<sup>320</sup> Orden ministerial de 13 de marzo de 1947



Aguilar pasó a constituirse en S.A. poco después gracias a esa exención. Algo más lenta fue la aplicación de exención de impuestos sobre el papel editorial, que se retrasó un año y medio<sup>321</sup>.

En el acta de reunión de la Junta de Gobierno del INLE celebrada el 27 de noviembre de 1948<sup>322</sup> sus miembros expresaban su satisfacción, tanto por la leve mejora, como por el buen curso, pese a las innumerables dificultades, que llevaba la Ley de Protección del Libro:

“En lo que se refiere al suministro del papel editorial protegido, en vista de que los fabricantes de papel han tratado de justificar la lentitud en el servicio del papel aduciendo la falta de materias primas para su fabricación, consideró que era del máximo interés para la Comisión Interministerial el conocimiento puntual y exacto de la importación de pastas. Desde los primeros meses de 1948, el Director General de Aduanas viene comunicando a la Comisión la llegada a los puertos españoles de las diferentes partidas de pastas para la fabricación de papel. Este conocimiento exacto que no se tenía, proporciona una gran fuerza a la Comisión para obligar a los fabricantes al suministro de papel editorial protegido, de acuerdo con los escandallos más convenientes

Los editores asistentes a la Junta ponen de relieve la importancia que tiene una revisión de los precios del papel, puesto que con la bonificación que actualmente se da por la Caja de Compensación de 5 pesetas por kg, no permitirá a la Comisión distribuir todo el papel editorial necesario, dada la limitación de ingresos que percibe la Caja de Compensación por el gravamen de 10 céntimos por kg de papel vendido. Opinan, además, que los precios que perciben los fabricantes, de 10 y 12 pesetas para los papeles de 1ª y 2ª clase son más bien elevados y someten a la consideración del director del INLE la posibilidad de que la Comisión Interministerial revise cuanto antes los escandallos.

Nuevas órdenes que regulaban los suministros y el precio del papel fueron promulgadas entre marzo y diciembre de 1949.

Las consecuencias de la ley se hicieron sentir: el precio del papel bajó sustancialmente y a raíz de este hecho, las exportaciones de libros de España a América se duplicaron.

Entre las ausencias y críticas, hay que mencionar que no se promovió la compra pública de libros para bibliotecas o la implementación de políticas de lectura. Significativo fue la supresión de los arts. 6 y 7 con el pretexto de ser una competencia municipal ya regulada y que los papeleros interpretaron como una apuesta personal del editor catalán Gustavo Gili. Los editores sí estaban a favor aunque no se mostraron muy combativos. Significativa es la opinión del editor Calleja<sup>323</sup> al afirmar *que los arbitrios que defendía la Enmienda para la difusión del libro español, gravando las haciendas municipales y provinciales, son reconocidos fracasos.*

Los profesionales de las artes gráficas también se sintieron marginados, y así lo hizo saber el Sr. Castrillo pidiendo mayor protección para los demás factores de producción, que eran los que menos lo habían encarecido, en las Actas de la sesión celebrada en las Cortes el 5 de noviembre de 1946. Tampoco se incluyeron las reivindicaciones de los libreros.

Hay que dar la razón, en parte, a Giménez Caballero cuando criticaba a la Ley por su carácter parcial y mercantil. Todos sus beneficios fueron orientados hacia el sector productivo del libro, sin que la comercialización pudiera acogerse a los mismos.

---

<sup>321</sup> LARRAZ, F. Una historia transatlántica del libro : relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Gijón, Trea, 2010, p. 234

<sup>322</sup> AGA Cultura 21-1379

<sup>323</sup> “La españolidad del libro y defensa del art. 5º”, escrito del editor Calleja, s/f. Archivo INLE- Caja 41

Con la perspectiva de los años los profesionales vinculados al libro<sup>324</sup> valoraron que la ley se promulgó en el momento justo en que la industria editorial española estaba muy necesitada de estímulos y protección de todo tipo, pero a quince de años de su implantación, sólo se cumplía en proporción mínima. De las cuatro medidas que contemplaba sólo una se había aplicado satisfactoriamente, la que fijaba una prima por cada kilo de papel editorial consumido para acercar en lo posible su precio al que regía en el mercado internacional. Las otras tres medidas, la reposición del papel exportado mediante importaciones libres de arancel no se pudo llevar a cabo; la devolución del impuesto sobre el gasto había tropezado, igual que la medida anterior, hasta 1961, con la barrera infranqueable de una reglamentación que parecía hecha más para impedir que para posibilitar la aplicación de la Ley, habiendo gozado de ella apenas el 1% de las exportaciones; y la exención del impuesto de utilidades sólo se ha aplicado a los beneficios invertidos en inmuebles, cuando era mínimo el número de editoriales que eran propietarias de sus edificios.

Para F. Cendán<sup>325</sup> sus beneficios habían quedado reducidos a unas determinadas exenciones fiscales durante un periodo de tiempo más bien corto y a unas bonificaciones en el precio del papel editorial que dejaron de ser beneficiosas a medida que los precios del mismo se iban incrementando. Además ni los exportadores de libros percibieron el Impuesto de Usos y Consumos sobre el papel exportado en forma de libros ni se les autorizó a importar la misma materia en cantidad igual a la exportada, tal y como estaba previsto en la Ley.

A pesar de todo, la Ley de Protección al Libro fue beneficiosa para el libro español, puesto que al amparo de la misma, mejoró la competitividad del libro español en el mercado internacional<sup>326</sup> y a la larga favoreció la creación de importantes y vigorosas empresas editoriales que alcanzaron un gran prestigio dentro y fuera de España, a diferencia del comercio de librería que se convirtió en una actividad atomizada y precaria.

#### **4.7. LA FERIA DEL LIBRO**

La restauración de la Feria del Libro<sup>327</sup>, a diferencia de otras instituciones o normativas relacionadas con el libro que el franquismo hereda y mantiene –la JIAL, la Fiesta del Libro, o la misma legislación sobre bibliotecas públicas–, tuvo que esperar a 1944 para reanudarse. Las razones la escasez de títulos nuevos, la falta de ejemplares de los más solicitados o el aumento de los precios del libro que resultaban poco accesibles a las clases populares. Su inauguración, además tuvo que convivir con la quema de libros prohibidos por los falangistas.

---

<sup>324</sup> AZAOLA, J.M. de “Una grave crisis de nuestros mercados exteriores”, *El libro español*, nº. 60, 1962, págs. 335-340

<sup>325</sup> CENDÁN PAZOS, F. “Urge la revisión y puesta al día de la Ley de Protección al Libro Español”, *El libro español*, nº. 84, 1964, págs. 565-568

<sup>326</sup> A partir de 1949 las exportaciones comenzarán a ser superiores a las importaciones, hasta 1953 de manera poco significativa, sextuplicándose en 1956 (Estadística de la producción y comercio del libro español. Años 1946-1957, Madrid, INLE, 1958)

<sup>327</sup> CENDÁN PAZOS, Fernando (1960). La Feria Nacional del Libro: apuntes para su historia; Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933.1986) y La Fiesta del libro en España: crónica y miscelánea. Archivo INLE Caja2 Feria Nacional del Libro 1944. Cajas 5 y 4. Feria Nacional del Libro 1945 y Caja 7 y 6 Feria Nacional del Libro 1946.

Aunque el Nuevo Régimen abominaba del trasfondo ideológico que representaba la Feria del libro, resultaba innegable la necesidad propagandística de recuperar el rito y apropiarse de sus símbolos.

Patrocinada por la VEP le correspondió al INLE su organización<sup>328</sup>, para ello formó 6 comisiones encargadas de estudiar y resolver todos los problemas que se presentasen para su organización, instalación, conservación, asuntos económicos y actos culturales de la misma. En estas comisiones estuvieron presentes los ministros de Agricultura, Educación Nacional, Industria y Comercio y el Secretario General del Movimiento. Y el Jefe de la Sección de Política Cultural encabezó una comisión de Actos Culturales que garantizase con su propaganda el éxito de la Feria. La Comisión estuvo integrada por: Pedro Laín Entralgo, Gerardo Diego, Miguel Herrero García, José Losada de la Torre, Ángel González Palencia.

El presupuesto para su realización procedía de varios canales. Así para la Feria de 1944 la Delegación Nacional de Sindicatos dio una subvención de 50.000 peseta, el Ministerio de Industria y Comercio 50.000 y el de Educación Nacional 25.000 pesetas. La Central de Fabricantes de Papel concedió 5.000 pesetas, y el Ayuntamiento de Madrid también contribuyó con apoyo económico, además de otras entidades oficiales.

La propaganda que generó la Feria comenzó con el mismo cartel mural que se diseñó para su difusión. Este fue otorgado a Ricardo Summers (Serny) tras ser premiado en el concurso convocado, siendo repartido quince días antes de la inauguración en todas las librerías y centros oficiales, y en las calles de Madrid. Se pidió a la Compañía de Tranvías que exhibiera en los tranvías, durante los días que durase la Feria, banderas y carteles anunciadores. La prensa también se hizo eco de este evento cultural y, en concreto, al director del ABC se le dio las gracias por la campaña que había hecho en su periódico dedicada a la Feria del Libro.

Se elaboró un Catálogo de la Feria, donde se recogieron 5.300 fichas de títulos clasificadas por materias y agrupadas en orden alfabético, además de incluir un completo índice de autores y obras anónimas y una relación de las casetas feriantes, completado con 36 páginas de publicidad y cubierta a cuatrinomía con reproducción del cartel anunciador de la Feria. Se editaron 7.000 ejemplares, de los que se vendieron 3.000 en la feria y se imprimió gracias al papel que proporcionó de manera gratuita la Central de Fabricantes de Papel.

También se editaron con motivo de la Feria, 60 tarjetas postales de marcas y exlibris de libreros españoles de los siglos XV al XVIII clasificadas por regiones.

Para participar en la Feria<sup>329</sup>, editores y libreros debieron hacerlo según las condiciones recogidas en el Reglamento que se elaboró para la misma. Así solo podían ser admitidos como feriantes los editores y libreros de nuevo.

Los editores no podían acudir a la Feria en otra calidad que la de editor, y no podían exponer ni vender más que libros de su fondo. Los representantes que tuviesen además establecimiento de librería abierto al público, podían tomar parte en la Feria en su calidad de libreros. Por su parte, los libreros no podían anunciar en sus casetas, por medio de carteles, ninguna casa editorial, y si lo hiciesen de algún libro, no podían anunciar el editor, tampoco podían exponer en la Feria más que un máximo de 10 títulos de los pertenecientes a editores que no

---

<sup>328</sup> Para la Feria de 1944 se han consultado: Partes de actividades del INLE AGA 21/1312. "La Feria Nacional del Libro", *Bibliografía Hispánica*, núm. 5, mayo 1944, pp. 312-322. "La Feria Nacional del Libro", *Bibliografía Hispánica*, núm. 6, junio 1944, pp. 417-425

<sup>329</sup> Reglamento de la Feria Nacional del Libro (1944) (28 d mayo-6 de junio). Madrid: INLE, 1944

concurrieran al Certamen. Se debía procurar que alternasen las casetas de los editores y libreros, evitándose en lo posible que apareciesen juntos dos o más de una misma categoría.

La tributación de los feriantes se estableció en función de las categorías que determinó la Comisión Ejecutiva. Para los editores se establecieron cuatro categorías contribuyendo con 7.000, 4.000, 3.000 pts. y una cuarta para agrupados cuyas cuotas iban desde las 2.500 a 1.750 pts. Para los libreros se estableció dos categorías, tributando con 3.000 y 2.000 pts.

Quedaba prohibido hacer obsequios o regalos de cualquier clase que pudiesen representar competencia ilícita en la venta. Se concedía al público la rebaja del 10% sobre los precios de catálogo, y los editores-feriantes debían conceder a los Libreros-feriantes, un descuento suplementario del 10% en un pedido "Pro-Feria".

Estaba prohibida toda modificación en el aspecto exterior de las Casetas, aunque en su interior el feriante tiene libertad para adornarla o distribuirla a su gusto.

Participaron en la Feria: 55 editoriales, 11 librerías, 6 distribuidoras y 8 centros oficiales, correspondiendo 54 casetas a Madrid, 25 a Barcelona, una a Valladolid y otra a San Sebastián. Además de una Estafeta de Correos y una instalación con 3 departamentos para las oficinas de información del INLE. En total 70 casetas corrientes y 4 extraordinarias. Se ubicó en el Paseo de Calvo Sotelo (hoy Paseo de Recoletos) durante 300 m con un horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche por espacio de 10 días (28 de mayo a 6 de junio). Para cumplir con ese horario hubo que solicitar al Sindicato de la Construcción que concediera permiso a los obreros de dicho Ramo para que trabajasen los domingos en las obras de las casetas; al Obispo de Madrid-Alcalá para efectuar la venta durante los domingos en la Feria y a la Delegación Provincial del Trabajo autorización para que los obreros pudieran trabajar horas extraordinarias. Todo un reflejo de la regulación de la sociedad por parte del Estado nacionalcatólico.

Según se recogió en la prensa diaria como en la especializada se calculó que más de 50.000 personas por término medio visitaron diariamente la Feria, prorrogándose durante 3 días más, en los que ni decayeron ni la animación ni el interés.

Las ventas ascendieron a un total de 1,1853.387 pesetas. Esta cifra correspondía a los precios netos, deducido el 10% de descuento de unos 150.000 volúmenes vendidos. También Se vendieron gran número de ejemplares del catálogo

La Feria se complementó con una serie de actos culturales como conciertos y danzas folklóricas, teatro-guiñol y cuentos animados a cargo de la Sección Femenina, que se harán inseparables en las siguientes ediciones. Paralelamente se organizó la Asamblea del Libro Español y la Exposición Histórica del Libro en los salones de la Sociedad de Amigos del Arte en la Biblioteca Nacional, con el objetivo de mostrar la evolución del libro español.

El resultado de la Feria y la Asamblea se vendieron como:

(...) el estado de actual florecimiento de la industria editorial y de la cultura española alcanzada bajo el signo de Franco. (...) España en estas horas sombrías para el mundo se dedica a su reconstrucción material y espiritual. Y el Gobierno inicia una intensa política del libro, cuyos magníficos exponentes han sido la Feria y la Asamblea<sup>330</sup>

La idea de celebrar al año siguiente la Feria se sometió a consulta del INLE entre los profesionales del libro, que la aceptaron de mutuo acuerdo. Las razones esgrimidas fueron, a

---

<sup>330</sup> ABC, 5 julio 1944, p. 12

parte del éxito de la anterior, la enorme repercusión en el exterior –da muestra de normalidad y del progreso de la cultura hispánica–, las ventajas económicas para los participantes.

En las ediciones siguientes se fue consolidando la presencia del sector librero, aunque originariamente, esta parada bibliográfica fue cosa más propia de los editores, creadores de la misma. Una vez al año, y durante 10 días, los editores salían al encuentro del público, poniéndole ante la vista sus novedades, su fondo completo o seleccionado, para darse a conocer y ganar clientela. Pero el editor solo podía vender y exhibir en la Feria sus propias obras, el librero, en cambio tenía un atractivo más comercial, pues podía ofrecer lo mejor de cada editorial y presentar un surtido en cantidad y calidad capaz de satisfacer las mayores exigencias del comprador. De este modo muchos libreros vieron campo abierto a una expansión de su comercio que no lograrían en la mejor época de ventas cotidianas de su librería<sup>331</sup>.

Hubo algunas casas que concurren simultáneamente en calidad de editores y libreros. Además la participación en la Feria proporcionaba nombre y auge al establecimiento. Poco a poco se auguraba que la participación de los libreros sería mayoría en la Feria y ésta se transformaría en un acto anual de la librería española<sup>332</sup>.

Las editoriales oficiales también veían una oportunidad excelente para darse a conocer, pues en los escaparates de las librerías durante el año no solían aparecer las publicaciones de los Ministerios, aunque interesasen a los especialistas. En 1949 esta fueron las editoriales oficiales que acudieron: INLE, SEP, Publicaciones Españolas, el Ayuntamiento de Madrid, Editora Naval, Editora Nacional, Instituto de Estudios Políticos, Acción Católica de España y la Sección Femenina.

Llamativa y paradójica fue la ausencia en la Feria del Libro de, durante dos años consecutivos - 1945-1946-, de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y, por tanto, de las publicaciones de los centros que tenía adscritos (Biblioteca Nacional, Junta Técnica, el Archivo Histórico Nacional, el Museo Arqueológico,...) *por carecer totalmente de consignaciones en su presupuesto que le permita pagar la cuota asignada para los organismos oficiales (7.500 pesetas)*<sup>333</sup>

Poco a poco se irán incorporando otros países afines políticamente como invitados de honor. Primero fue Portugal, luego Argentina y México, que participaron con pabellones propios. En 1947 veinte editoriales hispanoamericanas estuvieron representadas en cuatro casetas y Francia lo hizo en 1951.

La Feria también fue una ocasión inestimable para que editores y libreros diesen a conocer las nuevas formas de comercialización como el crédito editorial y la venta a plazos. He aquí dos muestras incluidas en el Catálogo de la Feria de 1947.

---

<sup>331</sup> “La Feria Nacional del Libro, 1945”. *Bibliografía Hispánica*, núm. 5, mayo 1945, pp. 285-295.

<sup>332</sup> “La Feria Nacional del Libro, 1945”. *Bibliografía Hispánica*, núm. 5, mayo 1945, pp. 285-295.

<sup>333</sup> AGA-Cultura 25/19801

¡ROGAMOS ATENCION!  
¡ANUNCIO IMPORTANTE!

## LIBROS A PLAZOS


Todos los libros que usted desee, de cualquier autor, materia y precio, se los serviremos cobrando el importe de todos sus pedidos en **doce mensualidades**, y en **dieciséis** si su importe excede de **600 pesetas** (ninguna cuota extraordinaria anticipada, ni aceptación previa de letras) abriéndole con el primer pedido una **CUENTA CORRIENTE DE LIBRERÍA** y con cargo a ella podrá pedirnos en todo momento, a su comodidad y deseo (aun cuando esté su cuenta saldada) cuantos libros usted precisamente nos pida.

Solicite nuestros Catálogos generales de Derecho, Literatura, Medicina, etcétera, que enviamos gratuitamente, así como de cualquier otra materia que desee; igualmente le ofrecemos información bibliográfica en general, todo sin el menor compromiso para usted.

Disponemos de un perfecto servicio de librería que ponemos por entero a su disposición.

●

**CREDITO EDITORIAL HERNANDO**  
CARREJAS, 21, entrepuerto  
APARTADO 1603 - TELEFONO 17330  
MADRID



**Caseta núm. 66**

## LIBROS A PLAZOS CON PRECIOS DE CONTADO

SIN FIADOR, CUOTA DE ENTRADA  
NI ACEPTACION DE LETRAS

Servimos toda clase de libros, sin distinción de autor, precio o materia, abonando una pequeña cuota mensual que cobramos a domicilio. Obtenga los beneficios que nuestro moderno sistema de ventas por medio de **CUENTAS CORRIENTES DE LIBRERÍA** con **PRECIOS DE CONTADO** le reportará, y con un mínimo desembolso tendrá su Biblioteca al día.

**CONCEDEMOS HASTA DIECISEIS MESES DE CREDITO**

Si así lo desea, le visitará en su domicilio uno de nuestros Agentes y le informará de nuestro sistema de ventas.

Gratuitamente a quien lo solicite enviamos nuestro "**Boletín mensual de Información Bibliográfica**".

●

**CREDITO EDITORIAL THADER**  
HORTALEZA, 18, 1.º TELEFONO 22 39 03  
MADRID

En la Feria Caseta núm. 66

El público que acudía, no sólo lo hacía por el tentador 10% de descuento, sino por la posibilidad de ver la mayor parte de la producción bibliográfica española (se ofrecen al público una media de 20.000 títulos diferentes). Aunque para algunos no era comprensible tanta voracidad durante los días de la Feria y una tan prudente moderación adquisitiva durante el resto del año<sup>334</sup>

El público de la Feria era distinto de la habitual clientela de las librerías, compraba un poco de todo. Y en un periodo como el actual, en que la crisis del papel encarece la producción literaria y restringe el número de lectores, tiene la ventaja de atraer, como las viejas barracas de las ferias medievales, a una muchedumbre de compradores, diversos por su cultura y condición<sup>335</sup>

Los establecimientos más numerosos eran de literatura y novela popular (28 sobre 92 en 1945). ¿Pero qué se vendía? ¿qué se leía? En 1945 la literatura y los libros de política internacional, entonces muy de moda por las consecuencias bélicas del momento, fueron los más solicitados. Sospechosas biografías, superabundancia de novela blanca y literatura comercial se decía en ABC 26 mayo 1945. En 1947 el libro de más venta fue *Desde Hendaya a Gibraltar* y las novelas editadas por las editoriales Lauro, Luis de Caralt, Lara e Hispano Americana. La popular editorial Dédalo fue una de las que más ventas alcanzó con sus novelas de 3,5 y 5 pesetas editadas en folio.<sup>336</sup>

En 1951 se anunciaba como novedad la próxima aparición del "Atlas Universal" de Aguilar, el 1º editado en España a todo color, así como la celebración de la publicación del nº 1.000 de la colección "Austral" que correspondió al título "El Cid Campeador" de Ramón Menéndez Pidal.

Las casetas más visitadas y los libros de más éxito en la Feria de 1951 fueron según recogió el diario ABC<sup>337</sup>:

<sup>334</sup> ABC 26 mayo 1945.

<sup>335</sup> ABC, 1950

<sup>336</sup> "La Feria Nacional del Libro", *Bibliografía hispánica*, 1949, nº ,p. 4

<sup>337</sup> ABC, 7 junio 1951, p. 7

**Librería Climent**, presenta la Colección Cumbre de la Hispano Americana de Ediciones; las publicaciones científicas de la Editorial Reverte; los cuadernos de Disney de Fher, las ediciones "Cias" y los libros de dibujo de Suc. de E. Meseguer.

**Unión Distribuidora de Ediciones (U.D.E.)** ha logrado el mayor éxito de venta con la novela de Ledesma Miranda "La Casa de la Fama", la de Camilo José Cela "El gallego y su cuadrilla", la de César González Ruano "Ni César ni nada" y las de Bartomé Soler.

**Librería y Casa Editorial Hernando**, acaba de editar "Perros y cazadores" de Muñoz Seca, curioso estudio sobre la educación y modo de cazar de perros y cazadores con abundantes perrerías y un ensayo sobre el origen de algunos instintos.

**Aymar-Editor** presenta la edición en piel del "Gaspar de la Noche" que despierta el interés que puede apreciarse en la fotografía y las ya populares novelas policiacas del célebre autor Jorge Simenon, las más solicitadas en esta Feria.

**Distribuciones Deymi** presenta entre las novedades de actualidad "La Dinastía de los Forsyte", tercera edición de las aparecidas y primera en rústica, en edición popular de 40 pesetas con el texto íntegro y fotografías del film, en exclusiva para España y extranjero.

**Crédito Editorial Hernando** importantísima firma que vende todos los libros que se le pidan y los cobra en 16 mensualidades, por su sistema de "Cuentas corrientes de librería" o venta a plazos continuada.

**Antonio de Guzmán**. Librería Antigua y Moderna, ofrece el "Catálogo de Libros referentes a los Reyes Católicos", 141 título de diferentes autores.

**Ediciones Cliper** expone sus colecciones "Florita Lupita" y "Nicolás", en magníficos tomos encuadernados; su última novedad "Historia completa de la Aviación desde sus comienzos hasta nuestros días, en magnífico álbum-archivo y preciosos cromos a todo color.



## Carteles de la Feria del Libro

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1951





Si analizamos los datos de la Feria en las siete ediciones comprendidas entre 1944 y 1951<sup>338</sup>, periodo de objeto de estudio, se observa una continua progresión en los números de facturación, así como una cierta estabilidad en cuanto al número de participantes a excepción de la convocatoria de Barcelona que sobrepasó con creces la media de los 90.

Año	Localidad	Días de duración	Participantes	Ventas
1944	Madrid	12	78	1.135.387
1945	Madrid	15	92	1.472.259
1946	Barcelona	15	134	No registrado
1947	Madrid	14	95	1.615.829
1948	Sevilla	12	42	433.846
1949	Madrid	12	93	1.727.862
1951	Madrid	12	93	1.885.077

**Gráfico 5.** Estadísticas de las ferias del libro

Cada Feria tuvo una peculiaridad o acontecimiento a destacar. Así la Feria celebrada en 1945 contó con la presencia de Stanley Unwin, presidente de la Asociación de Editores de Gran Bretaña para tratar con Pemartín del intercambio cultural anglo-hispano a través del libro.

En 1946 se celebró en Barcelona, del 9 de junio al 25 de junio, coincidiendo con la apertura de la Feria Internacional de Muestras. Se instaló en el Paseo de Gracia, con 140 casetas ocupando 1 km de avenida, y a su clausura asistió el Ministro de Educación con un discurso donde habló de la Feria de Libro como el triunfo de una política cultural, sabia y sana, cuyas máximas realizaciones fueron la creación de un número tal de bibliotecas que había excedido toda previsión así como el Proyecto de ley del Libro Español como premio a los editores, en cambio al citar a las librerías les dejó este recado<sup>339</sup>:

“(…) la necesidad de la vigilancia del Estado sobre la librería para que no se pueda utilizar en caso alguno como instrumento destructor de la unidad de la Patria, ni para disgregar la familia, ni subvertir el orden social haciendo granjería de la mentalidad, dada a la exaltación de las clases populares.

Medidas son estas de buen gobierno y se justifican sobradamente cuando se trata de la dignificación del libro español, íntimamente relacionada con la dignidad de los lectores que en los libros busquen satisfacción de sus ansias de cultura”

La edición de 1947 coincidió con la celebración del centenario de Miguel de Cervantes, y el INLE se propuso darle la mayor brillantez posible, organizando una serie de actos culturales

<sup>338</sup> Datos sacados de CENDÁN PAZOS, Fernando (1960). La Feria Nacional del Libro: apuntes para su historia, p.11

<sup>339</sup> “Política bibliográfica”, ABC, 26 junio 1946

como concursos literarios, conciertos musicales y festivales artísticos. Igualmente se asignó una caseta especial dedicada exclusivamente a las ediciones de y sobre Cervantes que existían en librerías en esos momentos.

También se propuso que un día de la Feria se dedicará exclusivamente a los niños, en el que las casetas exhibirían preferentemente publicaciones infantiles, y la propaganda del día se encaminará hacia este motivo y se cursaron invitaciones a las escuelas públicas y privadas.

El INLE también proyectó inculcar a la Feria cierto carácter obrero y popular un día determinado, el “Día del productor”, que se celebró el 6 de junio. Para ello contactó con la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica y se puso de acuerdo con la Delegación Nacional de Sindicatos, con el fin de organizar algunos actos de carácter divulgador. Entre ellos figuraba la posibilidad de que durante el “día del obrero” pudieran los trabajadores adquirir algunas clases de libros con un descuento privilegiado, con cargo a una compensación que concediera la Delegación Nacional de Sindicatos. Para este proyecto se recabó la colaboración de la radio y la prensa madrileña, y se sugirió a los feriantes a ofrecer la mayor cantidad posible de libros de divulgación científica, manuales técnicos, literatura popular y ediciones económicas de novelistas clásicos internacionales. Para ello el Ministerio de Trabajo donó 25.000 pesetas para suplir el 20% de descuento. Los trabajadores debían presentarse en su respectivo Sindicato con una nota de la obra u obras que desearan adquirir, indicando el número de la caseta donde se vendían y la editorial, el Sindicato emitía un volante con esos datos además del precio con el descuento ya aplicado, no pudiendo exceder de 20 pesetas por caseta<sup>340</sup>.

La Feria de 1948, se celebró en Sevilla del 14 al 25 de abril, coincidiendo con el centenario de las ferias de Primavera. El Ayuntamiento con motivo de la conmemoración de la conquista de Sevilla por San Fernando hizo la petición de que se celebrara la Feria del Libro, ya que existía el precedente de la celebración en la ciudad de Barcelona en 1946.

Se instalaron en el Paseo de Bécquer, en el Parque de María Luisa 43 casetas y 5 pabellones. El mal tiempo fue la causa principal de que la Feria no obtuviese el éxito que era de esperar facturándose 433.846 pesetas. Simultáneamente se celebraron otros acontecimientos de índole cultural, como la Asamblea de la Lengua Cervantina, una exposición de libros de artes militares, otra de libros ingleses y españoles, la Fiesta del Libro y una exposición retrospectiva del libro impreso en Sevilla. No faltaron el pabellón portugués y el argentino.

La VI Feria, se ubicó en el Paseo de la Castellana, desde la plaza de Colón hasta rebasar el cruce con Ayala y Fernando el Santo, celebrándose del 29 de mayo al 7 de junio. El cartel premiado fue el que llevó por lema “Leamos”, original de los señores R. Riera y Ramón Martí.

En 1950 no se celebró e ignoro los motivos, pues en la documentación del Archivo del INLE no aparece ningún documento que informe sobre los motivos que llevaron a no celebrarse.

Con el paso de los años la Feria se fue consolidando en las costumbres madrileñas de la primavera, llevando aparejada, aparte de su difusión a través de carteles anunciadores, la organización de conferencias con personalidades de las letras, alocuciones radiofónicas, notas de prensa o la firma de autores (Carmen de Icaza en 1949)

Los propósitos de la Feria estaban claros: atraer la mayor suma de lectores e introducirles en el mundo de las letras, y en segundo lugar, obtener beneficios económicos para editores y

---


<sup>340</sup> ABC, 4 junio 1947, pág. 17

libreros a la vez que se creaban nuevos canales de propaganda efectivos y se ampliaban los sistemas de comercio. Los mismos objetivos que persiguieron las ferias republicanas.

#### **4.8. LAS EXPOSICIONES**

Las exposiciones bibliográficas, aparte de su gran valor como exponentes de la cultura nacional, son un instrumento de difusión imprescindible para el negocio de librería y un escaparate para los editores cuando reúnen, sobre todo, obras actuales.

Si hacemos un repaso de las exposiciones que se organizaron durante el periodo estudiado (1939-1951) no parece que muchas de ellas pudieran suscitar el interés de los editores, sino más bien del bibliófilo. Otras, en cambio, respondieron a intereses meramente propagandísticos del régimen –Exposición del Libro del Movimiento Nacional- o reflejaron la infiltración del nacionalcatolicismo sobre el ámbito de la cultura -Exposición del Beato Fray José de Cádiz o la Exposición del libro misional-.

- 
- Libro del Movimiento Nacional (1941)
  - Exposición Nacional del Libro de Agricultura (1942)
  - Exposición del libro del mar (abril 1943 en Barcelona)
  - Exposición de Balmes (1944)
  - Exposición del Beato Fray José de Cádiz (otoño 1943 en 13 ciudades)
  - Exposición del Libro del Caballo en Sevilla (abril 1944)
  - Exposición del Libro Infantil (1945)
  - Exposición del libro misional (1946)
  - Exposición del libro español en Lisboa (1946)

**Gráfico 6**

El Instituto podía organizar exposiciones pero debía solicitar a la Vicesecretaría de Educación Popular su autorización, y en muchos casos la adjudicación de recursos económicos, como ocurrió en la exposición dedicada al Beato Fray José de Cádiz,<sup>341</sup> que dada su condición de itinerante, los gastos de personal y automóvil ascendieron a unas 25.000 pesetas de las que el INLE no disponía y tuvo que pedir las al Vicesecretario. Además, esta exposición tuvo que aplazarse por las restricciones de gasolina.

---

<sup>341</sup> AGA-Cultura 21-4399

La Exposición del Libro del Movimiento Nacional<sup>342</sup>, concebida como una iniciativa patriótica que pretendía dar a conocer las fuentes<sup>343</sup> pasadas y presentes en que las se había gestado el Movimiento, se celebró en 1941. Patrocinada por la Subsecretaría de Prensa y Propaganda y organizada por la Cámara Oficial del Libro de Madrid con ocasión de la Fiesta del Libro de 1941 (23 abril a 3 de mayo), con el objetivo de:

(..) ilustrar la conciencia de los españoles respecto al magno e incomparable suceso que ha liberado y engrandecido a nuestra Patria bajo el signo radiante del Caudillo. La Cámara del Libro de Madrid ha percibido y aspira a que todos se den cuenta de la preciosa función cumplida por libro respecto al Movimiento salvador de España, por cuanto ha contribuido a prepararlo, a difundirlo, a afianzar sus victorias, en la guerra como en la paz, mediante la propagación de ideas y emociones que en principio ayudaron a crear el clima propicio a la justificada y fecunda vindicación del 18 de julio, y que luego sirvieron de orientación, estímulo o consigna en la pelea, como sirviendo están a la consolidación del nuevo Estado.

“Nuestra iniciativa implica un afán de profunda motivación patriótica a favor del libro como instrumento de conocimiento y servicio”.

Por su parte, la Exposición Nacional del Libro de Agricultura (1942) se concibe en el contexto de los principios de la economía autárquica:

(...) Mientras importemos ciencia seguiremos importando mercancías. Por eso necesitamos aliar teoría y práctica. Y por lo mismo se siente con urgencia la necesidad del libro agrícola y forestal. Desperdiciamos nuestras fuerzas creadoras. Recuerda que la fabricación del papel tuvo su cuna en España, único país europeo que posee espartales de tal calidad que el mercado inglés aprecia. (...) He aquí la gran tarea que espera al libro de agricultura. La autarquía de las ideas, de las técnicas, de los conocimientos, adaptadas a las genuinas características agrícolas, ganaderas y sélvico de nuestra patria<sup>344</sup>.

En 1943 la actividad expositiva se traslada a Barcelona, y con la Exposición del libro del Mar el INLE quiso sumarse a las celebraciones con motivo del 450 aniversario del regreso de Colón a la ciudad condal tras descubrir el Nuevo Mundo. Europa aprendió a navegar en los libros españoles, por ello la mayor parte de estos libros españoles fueron reiteradamente traducidos a lenguas europeas y muchos de ellos aparecen en la Exposición. El INLE publicará un Ensayo de Bibliografía Marítima Española como recordatorio de la Exposición. Presupuestada en 100.000 pts. J. Pemartín sólo obtuvo un crédito de 25.000 de la VEP de FET y de las JONS<sup>345</sup>

<sup>342</sup> Exposición del libro del Movimiento Nacional: patrocinada por la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, organizada por la Cámara Oficial del Libro con ocasión de la Fiesta del Libro de 1941..., Madrid, Cámara Oficial del Libro, 1941 y Archivo INLE Caja 28

<sup>343</sup> 21 stands con 3.000 volúmenes: 1. Guerras carlistas; 2. Antecedentes remotos: obras de Donoso Cortés, Aparisi Guijarro, Balmes, Menéndez Pelayo, Ganivet, Vázquez de Mella, procedentes de la BNE. 3. Maura, Primo de Rivera, Monarquía, República, Mola Sanjurjo. 4. Y 5. Prensa de combate (Arriba, La Conquista del Estado,...) . 6, 7 y 8. Historia y anecdotario de la Guerra: la Marina en la Guerra, el Alcázar y su epopeya. 9 y 10. Marruecos. 11. La Hispanidad. Gibraltar. 12. Obras y biografías del Caudillo, José Antonio y Calvo Sotelo. 13. Doctrina del Movimiento. 14. El terror de la zona roja. Asesinatos, depravaciones, checas, cárceles, refugios de Embajadas.... 15. Literatura de guerra. Técnica de la guerra. 16. La Historia de la Cruzada. 17 y 17. Poesía de guerra. 19. Historia de la Falange. 20. La Iglesia y su doctrina (mártires, posición de la Iglesia en la Cruzada). Legislación del Nuevo Estado. 21. Libro escolar en el Movimiento.

<sup>344</sup> “Exposición Nacional del Libro de Agricultura 1942”, *Bibliografía Hispánica*, núm. 1, 1942, pp. 15-21

<sup>345</sup> AGA 21-1363

La primera exposición exclusivamente dedicada a promocionar la actividad editorial no fue iniciativa del INLE, sino del Departamento de Propaganda de la Delegación Provincial de Educación Popular de Barcelona, que recogió toda la actividad editorial de la ciudad condal entre abril 1941- y abril 1942 y la expuso con motivo de la Fiesta del Libro<sup>346</sup>. Además se anunció el propósito de repetir anualmente dicha exposición y editar un catálogo anual de la actividad editorial. Fue todo un éxito siendo visitada por numeroso público.

Cuando la misma Delegación Provincial de Educación Popular de Barcelona solicita al Vicesecretario de Educación Popular autorización y recursos económicos para la edición de 1943, se le contesta que no tiene medios y sugiere se dirija a las Casas Editoras de Barcelona para que afronten el gasto, ya que al fin y al cabo eran ellas las beneficiarias, así como al INLE por si dicho organismo estimara oportuno satisfacerlo. Pero el Instituto ya había agotado su capítulo destinado a Exposiciones, con la Exposición Nacional del Libro del Mar, aunque su Delegación en Barcelona sí prestó su colaboración y apoyo moral.

Al final, dado que ya se tenían concluidas las obras de instalación así como la catalogación de los libros y tiraje de pruebas del catálogo, unido al rendimiento propagandístico que podía obtener el partido con *la presencia falangista en la Fiesta del Libro demostrando así una vez más el interés y cariño del Partido hacia las tareas del espíritu*, se llevó adelante.

La participación activa del Partido en la Fiesta del Libro, puede contribuir a despejar el tópico de nuestra pretendida fobia anticultural, idea que difundieron los escritores rojo-separatistas de Cataluña. La instalación del pabellón permite reunir, bajo el pretexto de firma de originales, a los escritores e intelectuales más destacados en la vida barcelonesa, bajo el signo del Movimiento, y ponerlos en relación con editores, libreros, así como establecer contactos entre elementos intelectuales, y personalidades oficiales y del movimiento.

Si comparamos ambas ediciones en base a sus catálogos<sup>347</sup>, sabemos que en 1942 se expusieron 880 libros, y 1.232 en 1943. Aumentaron en número de producción los Diccionarios, los libros de comercio, biografías, literatura extranjera, pero sobre todo la literatura infantil, que pasó de 36 títulos a 292. También se apreció un progreso en cuanto la presentación y la calidad tipográfica. Y entre los libros expuestos, éstos fueron los que llamaron la atención de los comentaristas: *El espejo* de Jaime Roig editado por Miquel i Planas; *El cancionero del amor antiguo*, recopilación de la Ed. Gustavo Gili; *La poesía sagrada hebraico-española*, editada por el CSIC y que había obtenido el premio Franco; *Edad media: diez años de civilización* de E. Bargué y *La leyenda negra* de Julián Juderías.

Sí participó el Instituto, en cambio, en la organización de la Exposición del Libro Infantil que se celebró en Madrid entre el 1 y 15 de enero de 1945<sup>348</sup>, coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad. Esta idea ya había sido llevada a la práctica por la Cámara del Libro de Madrid en diciembre de 1935 con el objetivo de dar a conocer al público una muestra del volumen y calidad del libro infantil español. Se expusieron más de 2.500 títulos diferentes y a consecuencia de la misma aumentaron considerablemente las ventas del libro infantil<sup>349</sup>.

<sup>346</sup> *Exposición de la actividad editorial en Barcelona, 1943*. AGA-Cultura 21-787

<sup>347</sup> "Un año editorial en Barcelona", *La Prensa*, 3 mayo 1943.

<sup>348</sup> Imágenes de la Exposición del Libro Infantil fueron recogidas por el NO-DO del 15 de enero 1945. <http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-107/1467122/>

<sup>349</sup> "La I Exposición del Libro Infantil en Madrid", *Boletín de las Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona*, año 2, núm. 12, dic. 1935, pp. 167-171

Diez años después el INLE, casi con los mismos argumentos presenta su iniciativa<sup>350</sup>:

De acuerdo con los antecedentes que existen en el INLE sobre el extraordinario aumento y gran variedad que en estos últimos años habían adquirido las publicaciones infantiles en España, las cuales habían adquirido una altura, capaces de competir con las que se editan en otros países y, por otra parte, una serie de circunstancias políticas y comerciales aconsejaban la celebración en Madrid de una Exposición de Libros Infantiles que pusiera de relieve el auge y prosperidad. Análogos certámenes se vienen celebrando en otros países.

El proyecto fue aprobado por el Ministro Secretario General del Movimiento y la VEP dio el visto bueno al ante-proyecto de los gastos. El INLE solicitó la colaboración del Frente Juventudes, de la Dirección General de Primera Enseñanza y de la Delegación Nacional de la Sección Femenina. Se formó una Comisión de Honor y una Comisión ejecutiva en la que se acordaron todos los detalles de instalación, organización, propaganda y gastos.

El INLE pidió su instalación en los salones de la Sociedad Española de Amigos del Arte en los bajos de la Biblioteca Nacional. El salón se dividió en tres espacios: sala de exposición para los editores que al tener una copiosa producción editorial infantil pudieran ir con una instalación propia; otra con carácter general donde se expusieran los libros infantiles de todas las editoriales de España y una sala modelo de lectura infantil donde los pequeños visitantes tuvieran los libros al alcance de la mano y pudieran seleccionarlos a su antojo, contando con una biblioteca bien surtida organizada por medio de fichas y servida por un joven bibliotecario.

A raíz de la exposición se barajó la posibilidad que suponía para los editores conocer qué lecturas preferían los niños, información que también podía ser de utilidad a los educadores. Por ello en la exposición se dio a todos los pequeños visitantes un impreso llamado “La biblioteca que yo desearía” para que expresaran con absoluta espontaneidad cuáles eran sus lecturas favoritas o los géneros que preferían. Quienes los rellenaban participaron después en un sorteo de un lote de libros.

Pero junto a esta idea tan acertada, se quiso que la Exposición tuviera un interés religioso, moral y político, y al servicio de dicho interés se proyectó la publicación de un catálogo<sup>351</sup> crítico de libros infantiles y juveniles que servir de orientación a maestros, padres de familia, directores espirituales, editores y libreros.

“Este catálogo deberá presentar todos los libros que en la actualidad existan para niños y jóvenes hasta los 17 años, catalogados desde el punto de vista religioso, moral, político, literario y artístico, según su valor, y clasificados no sólo por materias sino tb pedagógicamente según la edad de los lectores. Se crea una comisión redactora entre cuyos componentes había: miembros de ACE entre ellos el Secretario de Orientación Bibliográfica, Editorial Magisterio Español, maestros, Jefe de la Sección de Ordenación Bibliográfica del INLE,... El Comité ha redactado un cuestionario que los censores de libros infantiles deberán tener en cuenta en su labor de revisión de tales libros:

Punto de vista religioso: positivo, neutro, negativo  
Punto de vista moral: tonificante o deprimente  
Punto de vista español: políticamente positivo, neutral, negativo  
Punto de vista literario: decoroso o chabacano  
Punto de vista artístico: buen gusto o mal gusto.

Para aliviar la tarea de pasar revista a la cuantiosa literatura infantil en circulación, el Comité ha obtenido las fichas de 3 entidades: la Comisión de Cultura del Ministerio de Educación Nacional,

---

<sup>350</sup> Archivo INLE- Caja 29 *Memoria para la celebración de una exposición del infantil en Madrid, 1945*

<sup>351</sup> Archivo INLE- Caja 29 *Proyecto de ordenación bibliográfica infantil*

el Secretariado de Orientación Bibliográfica de Acción Católica y Bibliotecas y Documentación de Valencia. Aun disponiendo de estas fichas es necesario organizar un cuerpo de lectores que en un mes lleve a cabo la revisión de los libros infantiles que queda por juzgar. Para este trabajo el INLE solicita una subvención mínima de 10.000 pesetas”.

Otra exposición también de interés editorial fue la Exposición del libro español en Lisboa, pues suponía una gran oportunidad para el libro español al ser la primera salida exterior tras la guerra.

La idea de celebrar en Lisboa una Exposición del Libro Español era una iniciativa que pretendía paliar la escasa difusión de nuestra cultura en Portugal, especialmente del libro, que además había quedado excluido del reciente acuerdo comercial hispano-portugués que entró en vigor desde enero de 1946, siendo prohibitiva la entrada de libros españoles en Portugal por el sinnúmero de dificultades que oponían en la aduana.

Hasta hace media docena de años, nuestro libro era casi desconocido en este país, donde sólo el libro francés y algo menos el inglés figuraba en los escaparates. Pero un poco antes de la guerra europea y en los primeros de ésta (la II) pudo conseguirse una cierta presencia de nuestro libro en la vida lusitana. Poco a poco ha aumentado esa densidad del libro español en Portugal siendo hoy apreciable.

Quizá la difusión de nuestro libro hubiera sido todavía mayor si se beneficiase de una prima de exportación para colocarlo en este mercado en mejores condiciones adquisitivas. Pero más importante es dar a conocer la diversidad de nuestras editoriales, su variedad de estilos y colecciones, pues algunas de nuestras más interesantes editoriales no enviaban aquí sus libros, ni hacían el menor acto de presencia para darse a conocer. Por eso una Expo en Lisboa y si fuera posible otra en Oporto daría a conocer toda esa riqueza de nuestras ediciones<sup>352</sup>.

El Gremio Nacional de Editores y Libreros cursó una invitación a los editores españoles para que concurrieran a través del INLE. Participaron 45 editoriales, y aunque los gastos fueron sufragados por el Estado, aquellos tuvieron que pagar una cuota según la categoría de la editorial. El INLE se reservó el derecho de exponer gratuitamente aquellos libros pertenecientes a entidades particulares, y que a juicio de la Junta de Admisión, no debían faltar en una Exposición de libros españoles en un país extranjero.

La Exposición, que al final obtuvo un presupuesto de 380.000 pts. se tuvo que aplazar en dos ocasiones por motivos económicos, fundamentalmente<sup>353</sup>. Sólo se llevaron libros de literatura –no obras extranjeras traducidas- y de arte, en parte, por lo limitado del espacio concedido. 376 títulos con un promedio de cinco ejemplares por título. De estos libros el INLE elaboró un catálogo del que se tiraron 5.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente en la Feria. El pabellón fue muy visitado, pero las ventas fueron poco cuantiosas, a causa del elevado precio al hacer la transformación de pesetas a escudos<sup>354</sup>.

En otras exposiciones el INLE jugó un papel menor al tener que colaborar con otras entidades. Es el caso de la Exposición del Libro Misional (23 abril de 1946) organizada por el Consejo Superior de Misiones, institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la que

---

<sup>352</sup> Archivo INLE Caja 28. *Proyecto de Exposición del Libro Español en Lisboa* (Lisboa 30 de enero de 1945 firmado por el Agregado Cultural Eugenio Montes)

<sup>353</sup> Es sintomático de la falta de presupuestos del INLE para realizar exposiciones el que la Sección de Política Cultural estimara que esta Exposición debía ser organizada cuando hubiese sido totalmente cancelado el déficit originado por la Exposición Nacional del Libro del Mar, además de que su lejano emplazamiento traía aparejado un cuantioso presupuesto de gastos. (Archivo INLE Caja 28)

<sup>354</sup> “La Exposición del Libro Español en Lisboa”, *Bibliografía hispánica*, núm. 10, 1946, pp. 601-612

se quiso poner de manifiesto todo lo que la civilización, la Iglesia, España y el Mundo en general debían a la labor de los religiosos y de los misioneros españoles en el extranjero<sup>355</sup>. Abarcó no solo los documentos estrictamente misionales, sino todas aquellas obras científicas y literarias en cuya redacción intervinieron misioneros españoles. Llama la atención que en una de las salas se expusiera un álbum monumental que en 1938 se envió desde Buenos Aires con 40.000 firmas en homenaje al Caudillo y a los mártires de la madre patria<sup>356</sup>.

Diferente fue el talante de las exposiciones del libro español que se llevaron a numerosos países de América, fundamentalmente, a iniciativa de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y que ya fueron comentadas en el epígrafe sobre la política cultural exterior. Estas exposiciones, a diferencia del carácter agresivo propagandístico de las que practicó el III Reich en el exterior, incluido nuestro país<sup>357</sup>, tuvieron un cariz más defensivo al concebirse como instrumento para combatir el aislamiento internacional.

## 5. LA POLÍTICA BIBLIOTECARIA DE POSGUERRA

### 5.1. LOS FUNDAMENTOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Las medidas tomadas para el fomento del libro y las bibliotecas durante la guerra y la primera década del franquismo estuvieron insertas en la tendencia general de los regímenes totalitarios que vieron en la biblioteca un posible complemento en la tarea de adoctrinamiento. Los libros, la lectura y el desarrollo de las bibliotecas fueron un ingrediente más de la educación del nuevo Estado, ya que éste necesitaba hombres y mujeres adiestrados en los principios del Movimiento. Las bibliotecas se plantean para los sublevados como posibles instrumentos de control de las ideas subversivas republicanas como en un medio de acercamiento a la cultura nacional «depurada»<sup>358</sup>.

Fue Javier Lasso de la Vega<sup>359</sup> quien definió las ideas directrices de la política sobre el libro y las bibliotecas, cuyo sustrato intelectual estaba en la biblioteconomía anglosajona y en las ideas de Ortega y Menéndez Pelayo. Para Lasso, la biblioteca debía tener unos nuevos rasgos: ser un instrumento de previsión social, es decir, el Estado a través de las bibliotecas debía evitar que el individuo fuera pasto de propagandas políticas. Debía ser un centro de formación e instrucción del «verdadero español» al proporcionarle únicamente libros de «nuestra producción más clásica y españolizante, limitando la invasión de traducciones antiespañolas». Y, por último, la biblioteca pública debía de adoptar una actitud más agresiva en busca del lector, dejando atrás su función conservadora, a través del préstamo a domicilio.

---

<sup>355</sup> Archivo INLE Caja 28 Documento fecha 5 febrero 1945, del Consejo de Misiones a José Pemartín

<sup>356</sup> Noticiario. España y el mundo hispánico. La Exposición del Libro Misional Español, *Biblioteconomía*, abril-junio 1946, p. 236-237

<sup>357</sup> BERNAL MARTÍNEZ, Isabel. "Libros, bibliotecas y propaganda nazi en el primer franquismo: las exposiciones del libro alemán", *Hispana nova*, núm. 7 (2007).  
<http://hispanianova.rediris.es/7/articulos/7a010.pdf>

<sup>358</sup> MARTÍNEZ MONTALVO, E. *Investigación y producción científica en documentación: la obra de Javier Lasso de la Vega (1892-1990)*, Madrid, Fragua, 2000, pp. 100 y ALTED VIGIL, A. *Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural... Op. cit.*, pp. 53-55.

<sup>359</sup> ALTED VIGIAL, Alicia, 1984, pp. 53-55 y LASSO de la VEGA, Javier. *Concepto y misión de la biblioteca en el momento actual*, 1939, pp. IX-LXXXIX.



De los textos que se escribieron en estos primeros años de la dictadura relativos al concepto y misión de la biblioteca pública<sup>360</sup> se pueden extraer varias ideas recurrentes en casi todos ellos. En concreto, se le asigna una triple función educativa, social y moral, mientras que para el Estado las bibliotecas públicas eran un medio para divulgar la ideología del nuevo Estado.

La biblioteca pública era, primero, un complemento indispensable de la enseñanza elemental, donde el estudiante lee y amplía sus conocimientos en los libros, y, segundo, una institución que permitía acceder a la educación fuera de la escuela ofreciendo «al aprendiz y al obrero la cultura necesaria para mejorar en su profesión poniendo a su disposición manuales técnicos para el mejor rendimiento en el trabajo, libros para desarrollar su inteligencia, cultivar sus conocimientos y enaltecer su espíritu, y, más secundariamente, literatura sana y agradable para distraer»<sup>361</sup>.

Con un lenguaje más técnico-profesional, en las conclusiones de la sección de bibliotecas del I Congreso de la Asociación Nacional de Bibliotecarios Archiveros y Arqueólogos (ANABA) de 1950 se recoge de nuevo esta faceta educativa<sup>362</sup>:

«5.ª Que se reconozca, como se hace en todos los países, que de nada sirve a los pueblos la escuela primaria obligatoria, ni, por tanto, aprender a leer y las nociones más elementales de las ciencias y artes, si después no se les facilitan gratuitamente libros que leer y que estudiar [...] 7.ª Que, en cumplimiento de sus fines como institución complementaria de la enseñanza en todos sus grados, le corresponda a la biblioteca organizar círculos de lectura, conferencias, cursos cíclicos tutelados, sesiones de cine educativo, audiciones musicales, exposiciones, etc.».

¿Pero qué efectividad podía tener esta función educativa cuando sólo en dieciséis provincias había entre ninguna y una bibliotecas municipales por cada 100.000 habitantes o cuando en treinta y cinco provincias sólo utilizaban la biblioteca entre el 0 y el 10 por 100 de las personas que sabían leer?<sup>363</sup>

La biblioteca pública debía ser un importante instrumento de acceso al libro entre la gente que no podía poseer una biblioteca propia, pero también debía ser una «biblioteca general que satisficiera las necesidades culturales y educativas más elementales de todas las clases sociales: las no pudientes, de la inculta baja y la media más culta y educada». Y en base a su gratuidad y libre acceso, a la biblioteca pública se le asignaba también una función de acogida más propia de un servicio social:

«Proporciona a los jóvenes gratuitamente un casi nuevo hogar tranquilo, higiénico y acogedor, al propio tiempo que los aleja de las tentaciones de la vida disipada de la ciudad, educan y ensanchan la capacidad para el sano esparcimiento [...]»<sup>364</sup>.

Para los desocupados pobres que habitan en casas de huéspedes, trabajadores, estudiantes pobres, jubilados, chicuelos que andan por las calles jugando y los niños de las clases medias

---

<sup>360</sup> Dichos textos fueron escritos, fundamentalmente, por bibliotecarios o maestros- Díaz Plaja, Huidrobo, Lasso de la Vega o Puga- con motivo de la Fiesta del Libro, publicándose en la prensa diaria nacional y local.

<sup>361</sup> DÍAZ PLAJA, A., *Bibliotecas populares: la cultura del obrero*, Madrid, 1944

<sup>362</sup> *Boletín de ANABA*, núm. 1, 1950

<sup>363</sup> Estos datos aparecen recogidos en RODRIGO ECHALECU, A.M. *Las bibliotecas públicas durante el primer franquismo: entre la continuidad y la ruptura*, Memoria de Máster, UCM, 2009

<sup>364</sup> PUGA PEQUEÑO, M. «La biblioteca pública como instrumento de la cultura y justicia social en su relación con la enseñanza», *I Congreso Iberoamericano y Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual*, vol. 3, Madrid, 1952, p. 835

más o menos acomodadas con la función de recogerlos, educarlos e instruirlos en las horas extraescolares y extrauniversitarias, apartarlos de la calle y encauzarlos e iniciarlos en los estudios»<sup>365</sup>.

Por último, el nuevo régimen va a considerar la biblioteca pública como un agente moralizador e instrumento de propaganda:

«La obra de las bibliotecas, además de instructiva, es preventiva, porque, anticipándose al mal y sustituyéndolo por el antídoto, promueve el amor a lo que es bueno y grande, antes que los bajos instintos tengan la oportunidad de envenenar el espíritu.

[...] la elevada misión que a las bibliotecas populares de España está reservada no sólo para ascender el nivel medio cultural de los españoles, sino más principalmente para atender a la educación moral —regeneración moral colectiva— de los indotados, que desgraciadamente son los más, por lo que en la organización de las mismas han de ajustarse a necesarias y severas normas de selección y gradación para obtener el beneficioso fruto educativo deseado [...] selección y gradación han de inspirarse en los puros principios de la fe que informa nuestra religión y nuestras sanas costumbres»<sup>366</sup>.

Y al hilo de esta función moral se consideraba de gran importancia la labor del bibliotecario en la selección y orientación de las lecturas que podían hacer los lectores. Concepto que Lasso toma de Ortega y Gasset y expresa tan gráficamente así:

« [La intervención] no está justificada meramente por la existencia de lecturas nocivas, sino por toda clase de libros, ya que la lectura de cada uno requiere el conocimiento previo de la edad, sexo, grado de cultura y demás circunstancias que rodean al lector. Además del valor formativo de la literatura, el bibliotecario ha de tener presente su poderoso influjo sobre la mente y las enfermedades nerviosas.

La literatura anarquista no sólo perjudica la mente del lector que la padece, sino que hace peligrar la sociedad en que vive. El carácter aparentemente inofensivo de las escuelas naturalista y realista cuando se desvía por los senderos del dolor, el erotismo, la miseria o la desgracia, ejerce también una influencia decidida sobre los enfermos mentales. La novela folletinesca con sus infundios novelescos antiartísticos ha oscurecido miles de cerebros y perturbado hondamente las conciencias. Por último, los efectos medulares y las psicopatías sexuales que promueve la lectura de las obras eróticas y pornográficas»<sup>367</sup>.

En el conjunto de estas ideas encontramos la base teórica que justificaba la censura establecida contra todo texto impreso y la depuración a que fueron sometidas las bibliotecas, así como una concepción dual de la cultura y, por extensión, de los lectores. Éstos se dividirían en lectores<sup>368</sup> cultos, dotados de solvencia y criterio para discernir lo bueno, o en lectores populares, poco familiarizados con el medio escrito, un tanto infantiles, que requerían la paternal tutela del Estado.

Este pensamiento quedó reflejado en la temprana Orden de 23 de diciembre de 1936, donde se prohibía y sancionaba el comercio y circulación de libros de literatura disolvente y se clasificaban los libros en varios grupos, de los cuales «no serán destruidos aquellos con mérito literario o científico que por su contenido ideológico puedan resultar nocivos para lectores ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura de los mismos». Estas publicaciones

---

<sup>365</sup> HUIDROBO VIÑAS, C., Concepto y misión de las bibliotecas populares: (divagaciones experimentales de un bibliotecario sentimental). Madrid, 1945, p. 9

<sup>366</sup> GARCÍA CABRAL, "El libro", Diario de Jerez, 17 abril 1941, recogido en AGA, Cultura, 31/06065.

<sup>367</sup> LASSO de la VEGA, Javier. *Concepto y misión de la biblioteca en el momento actual*, 1939, pp. 9-89

<sup>368</sup> RUIZ BAUTISTA, E. *Tiempo de censura*, Gijón, Trea, 2008

sólo podían ser utilizadas por personas que llevasen un permiso especial dado por la Comisión de Cultura, previo asesoramiento de autoridades competentes.

## **5. 2. LA ORGANIZACIÓN BIBLIOTECARIA: LA DGAB Y LA JIAL**

Antes de entrar de lleno a describir el marco jurídico y administrativo que reguló las bibliotecas entre 1939 y 1951, creo necesario esbozar brevemente unos trazos sobre la normativa que hereda el franquismo.

Fueron los procesos desamortizadores del XIX los que sentaron las bases de la gran red pública de museos, archivos y bibliotecas, principalmente provinciales con el objetivo de proteger los numerosos fondos bibliográficos que quedaron liberalizados. Tras este impulso institucionalizador, la ley Moyano de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, fija las bases del modelo bibliotecario liberal, al implicar el desarrollo de las bibliotecas con el progreso científico y cultural; insertar las bibliotecas dentro del sistema educativo y la dotación con un personal profesional de Archivos y Bibliotecas que gestionará las bibliotecas públicas. Dos años después el Real Decreto de 8 de mayo de 1859 dispone las bases para la organización de los archivos y bibliotecas, la regulación del ingreso y ascenso en el Cuerpo Facultativo y una serie de medidas de gestión y orden técnico, como la obligación de utilizar unos mismos sistemas de índices e inventarios.

Hasta finales del XIX, se asiste a una profusa intervención normativa marcada excesivamente por las tendencias políticas, llegando a la aprobación de dos medidas decisorias: el Reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios mediante el Real Decreto de 18 de noviembre de 1887, y especialmente, el Reglamento para el Régimen y Servicio de las Bibliotecas Públicas del Estado aprobado el 18 de octubre de 1901. Norma muy completa, que supuso un impulso modernizador del régimen de las bibliotecas en cuanto aborda la ordenación y clasificación de las bibliotecas, la determinación del personal y de sus funciones y obligaciones y el establecimiento de unas normas técnicas de gestión y normalización, y que estará vigente hasta 1989.

Hasta la llegada del régimen franquista<sup>369</sup> no se producirán novedades reseñables respecto a la gestación del sistema bibliotecario, con la salvedad del incipiente sistema bibliotecario catalán, que se articuló en torno a la Mancomunidad, que después rescató la Generalitat, y que, aunque legalmente desapareció durante el franquismo, *de facto* siguió funcionando.

La II República no supondrá una ruptura orgánica, conceptual e instrumental con respecto a los periodos anteriores, y los elementos innovadores que aporta<sup>370</sup> se refieren a la constitucionalización de los bienes culturales y una preferencia por la creación y diversificación de las bibliotecas<sup>371</sup>, mostrando una continuidad al optar por una organización compartida con

---

<sup>369</sup> PRIETO DE PEDRO, Jesús. "El sistema español de bibliotecas", en: Comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio), 2008, pp.317-325.

<sup>370</sup> GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier. *Las bibliotecas y su regulación... Op. cit.*, pp. 245-264.

<sup>371</sup> Su labor en este sentido se concretó en: las instrucciones sobre la gestión de Bibliotecas que contiene el nuevo Reglamento orgánico del Cuerpo de Facultativos de 1932; la regulación de las bibliotecas provinciales (incluso cuando estaba a punto de acabar la guerra) y municipales, universitarias, populares, escolares, militares; el impulso de las secciones circulantes y la creación de la Junta de Intercambio y Adquisiciones para Bibliotecas Públicas.

los Archivos y Museos, así como una gestión colegiada de las bibliotecas y del sistema bibliotecario a través de Patronatos y Juntas.

El nuevo régimen no tuvo dificultades para establecer una organización y un sistema bibliotecarios pues, por un lado, el modelo organizativo estaba consolidado y no se vinculaba con las opciones políticas de la España republicana, y por otra desde el punto de vista personal, contó desde sus inicios con el apoyo de una parte del Cuerpo Facultativo.

Dentro de las medidas de ámbito general, el régimen de Franco articulará la formalización del sistema de bibliotecas, sobre el sustrato anterior, con el Decreto de 24 de julio de 1947, relativo a la ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro histórico-documenta. concretamente será el Servicio Nacional de Lectura (arts. 44 a 48) el marco en el que se desenvolverán las bibliotecas a partir de los 50.

Antes de llegar a este Decreto, se aprobaron varias medidas, algunas de tipo excepcional como: la Orden de la Junta 16 septiembre 1937, que pretendía controlar todas bibliotecas y depurar sus libros; o la de 17 agosto 1938, sobre las bibliotecas no regidas por el Cuerpo Facultativo, por la que las obras de mérito literario o científico que pudieran ser nocivas para lectores no preparados se enviaran a las bibliotecas regidas por funcionarios del Cuerpo, y éstos crearían una sección especial de obras reservadas.

Más normalidad administrativa tuvo la orden que dio lugar a la creación de los Patronatos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas de junio de 1938, y más tarde los Centros Coordinadores de Bibliotecas, de los que se hablará extensamente más adelante.

Fue el citado Decreto de 24 de julio de 1947 el que aportaría la primera norma de ámbito general que establecía, por primera vez en nuestro país, un sistema bibliotecario de ámbito nacional: el Servicio Nacional de Lectura. Además de aportar una noción moderna de Biblioteca:

“Las Bibliotecas son establecimientos de cultura donde se reúne, conserva, cataloga, y clasifica científicamente la producción bibliográfica para su general o limitada utilización”

También establecía una completa y, quizás enmarañada, clasificación de las Bibliotecas,<sup>372</sup> definía los órganos rectores (Dirección General de Archivos y Bibliotecas), el régimen de su personal y su organización, que en realidad estaba dedicada enteramente a la Biblioteca Nacional. Lo curioso, como dice García-Ejarque,<sup>373</sup> es que el Servicio Nacional de Lectura no aparece como órgano consultivo de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, entre los siete que se enumeran. Simplemente se bautizó como Servicio Nacional de Lectura al conjunto de servicios de lectura de la Nación, especialmente a los de carácter municipal creados por la Junta, órgano que perduró.

El Decreto resultó igualmente confuso en relación con las Bibliotecas Provinciales que no eran citadas y parecía que se vinculaban, si no se transferían, a los Ayuntamientos (en el art. 43) y entendía que se mantenían en toda su naturaleza y funciones (en el art. 44) aunque se encargaron de las funciones del Servicio Nacional de Lectura, creado por esta disposición.

---

<sup>372</sup> Públicas y privadas; de libre acceso/públicas de acceso restringido; Nacional/del Estado español en el extranjero; adscritas a centros de enseñanza, de Corporaciones y establecimientos científicos, especiales o las del Servicio Nacional de Lectura y las creadas y sostenidas por las Corporaciones Locales.

<sup>373</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura pública...* Op. cit., p. 274

Lo cierto es que, pese a sus contradicciones, este Decreto contribuyó a modernizar la gestión del sistema bibliotecario al tiempo que dio los primeros sólidos pasos para la conservación del Patrimonio Bibliográfico público y privado.

Al Servicio Nacional de Lectura se le asignó la misión de contribuir al desarrollo cultural de España haciendo llegar el libro a todo el territorio nacional, confiándosele las funciones que desempeñaba, mejor o peor, la Junta de Intercambio. Sin embargo, no parece que corriese demasiada prisa ponerlo en funcionamiento, porque hubo que esperar cinco años para que, por el Decreto de 4 de julio de 1952, se reglamentase y estableciese la normativa que iba a hacer posible una colaboración entre el Estado y las Corporaciones locales para realizar en común una política bibliotecaria<sup>374</sup>.

En dicho Reglamento, el Servicio Nacional de Lectura<sup>375</sup> se establece sobre un régimen de colaboración que tendría su expresión por medio de conciertos realizados entre el Ministerio de Educación Nacional con las Diputaciones Provinciales, los Municipios, las Corporaciones y Entidades interesadas en el desarrollo cultural por medio del libro. De esta relación contractual surgía una estructura de círculos concéntricos que iban englobando las unidades bibliotecarias de menor a mayor y transfiriendo de arriba abajo las ayudas de la Administración. La elemental unidad era la Biblioteca Pública Municipal cuya creación podía ser solicitada por el respectivo Ayuntamiento, que se responsabilizaba de su sostenimiento con la ayuda de las otras dos entidades. La unidad intermedia era el Centro Coordinador de Bibliotecas, cuya creación podía solicitar la respectiva Diputación Provincial, responsabilizándose ésta de su sostenimiento con la ayuda del Servicio Nacional de Lectura, que venía a ser la unidad superior de todo el sistema.

La administración de las tres unidades básicas del sistema bibliotecario español era doble. Por un lado, había una dirección superior colegiada que, para la Biblioteca Pública Municipal, era la Junta, presidida por el Alcalde y en la que actuaba como Secretario el Encargado de la biblioteca; para el Centro Provincial Coordinador, era el Patronato presidido por el Presidente de la Diputación Provincial y en él actuaba como Secretario el Director Técnico del Centro; y para el Servicio Nacional era el Consejo Nacional de Lectura, presidido por el Ministro, y en el que actuaba como secretario un funcionario del Cuerpo Facultativo.

Por otro lado, había una dirección técnica. Para la Biblioteca Pública Municipal el responsable técnico era el encargado de la biblioteca, persona designada por el ayuntamiento, la mayoría de las veces sin experiencia ni preparación técnica en la materia, dada la imposibilidad de encontrar quien los reuniera; para el Centro Provincial Coordinador, la dirección técnica correspondía reglamentariamente al funcionario del Cuerpo Facultativo que fuese de plantilla, al que se le acumulaban todos los servicios de Archivos y Bibliotecas de la Provincia.

Respecto a las medidas adoptadas para la política de difusión y creación de Bibliotecas hay que mencionar: la Orden de 6 marzo de 1939, sobre servicios de Bibliotecas en Institutos de Segunda Enseñanza que establecía reglas para la gestión y la utilización de estos establecimientos; la Orden ministerial de 9 de marzo de 1939, que reguló el régimen de las Bibliotecas Públicas Municipales, si bien esta disposición tenía un alcance mayor pues vino a regular también las bibliotecas de Misiones y las que había creado el Gobierno republicano durante la guerra civil; la Orden de 8 de noviembre de 1941 que regulaba las bibliotecas populares que aún se regían por el RD de 22 noviembre de 1912, que creó la Dirección de las

---

<sup>374</sup> FONSECA, Isabel, "La lectura pública en España. Pasado, presente y deseable futuro", *Boletín de ANABA*, 2, abr.-junio 1977, vol. XXVII, p. 20.

<sup>375</sup> MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. *Sistemas de bibliotecas públicas en España y ... Op. cit.*, pp. 90-91.

Bibliotecas Populares de Madrid y estableció la plantilla mínima de cada Biblioteca; y por último, la Ley de Bases del Régimen Local de 17 de julio de 1945 que atribuyó a las Diputaciones provinciales el fomento de la cultura y se hacía una

En el ámbito de la organización administrativa se creó la **Dirección General de Archivos y Bibliotecas** por Ley de 25 de agosto de 1939, con el objeto de:

“...planear y realizar una política de ensanchamiento de métodos, de revitalización de estímulos, de sistematización general del aprovechamiento de Bibliotecas y Archivos, que abarque el curso de la educación (...)”

Bajo la dependencia del Ministerio de Educación Nacional, pasó a ser el órgano de más rango encargado de programar la gestión de todos los centros de depósito cultural que permitió, a su vez, la creación, por Decreto de 22 de septiembre de 1939, de la Junta Central de Archivos, Bibliotecas y Museos de España, pasando a ser el órgano encargado de programar la gestión de todos los centros de documentales si bien coexistía con la Junta Facultativa.

La Dirección General de Archivos y Bibliotecas, estuvo a cargo de Miguel Artigas hasta su muerte, quién poseía una concepción tradicional de la finalidad y funcionamiento de las bibliotecas, en la que la preservación y el acrecentamiento del patrimonio documental y bibliográfico primaba sobre la lectura. Entre su haber se halla: la reinstauración de la Junta de Intercambio; la aprobación del Reglamento para el préstamo de libros en las bibliotecas públicas del estado, aprobado en 13 de diciembre de 1940, y el intento de desarrollar un Servicio de Bibliotecas Circulantes.

A su muerte, le sucedió Miguel Bordonau quién estuvo en la Dirección desde el 11 octubre de 1946 hasta que fue cesado en julio de 1951, con la entrada del nuevo ministro Joaquín Ruiz-Giménez, quién nombró a Francisco Sintés Obrador como nuevo director. A Bordonau se debe la creación de la Biblioteca Pública “Francisco Villaespesa” de Almería en 1947 y la reanudación de la cuarta época de la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, pero su mayor contribución al desarrollo bibliotecario fue el Decreto de 24 de julio de 1947 sobre Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro histórico-documental y bibliográfico.

Precisamente en ese mismo Decreto de 1947 es cuando aparecen desarrolladas las funciones y los órganos asesores y consultivos que conformarían la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. *Órgano rector y propulsor de los intereses histórico-documentales y bibliográficos de la Nación, director superior de todos los archivos y bibliotecas, protector legal de la obra intelectual y defensor del tesoro histórico-documental y bibliográfico*. Sus órganos consultivos serían: la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos; las inspecciones generales de Archivos y Bibliotecas; la Comisión Central del Catálogo Histórico-documental y Bibliográfico de España; los patronatos provinciales para el fomento de los archivos, bibliotecas y museos; las delegaciones provinciales de Archivos y Bibliotecas; el Registro de la Propiedad Intelectual y la Junta de Adquisiciones y Distribución de Publicaciones.

### **La Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas (1939-1951)**

La Orden de 13 de diciembre de 1939 restableció el funcionamiento de la republicana Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas (JIAL)<sup>376</sup>, con las

---

<sup>376</sup> La Junta se crea el 21 de septiembre de 1931 para ampliar y actualizar los fondos bibliográficos de las bibliotecas del Estado, administrar las cantidades designadas para la compra de libros, enviar las publicaciones a las bibliotecas y además seleccionar y distribuir lotes de libros para formar la sección circulante de toda biblioteca pública. Durante la guerra y desde abril de 1937, sus funciones pasaron a la

funciones de<sup>377</sup>: a) nutrir los fondos de la Bibliotecas Públicas del estado, las bibliotecas públicas municipales y otras similares de carácter cultural; b) continuar la organización y funcionamiento de las Bibliotecas Públicas Municipales, ejerciendo sobre ellas su patronato e inspección, según el Decreto de 13 de junio de 1932; c) adquirir revistas nacionales y extranjeras y organizar el Servicio de Circulación de las mismas; d) atender al Cambio Internacional de Publicaciones, cumpliendo las obligaciones del Convenio de Bruselas de 1886, procurando especialmente la intensificación de este servicio con los países de habla española y e) organizar la Biblioteca-Depósito de Madrid. También asumió las competencias de la Junta Reguladora para la Adquisición de Revistas y Publicaciones Extranjeras que había creada Lasso de la Vega.

Las razones esgrimidas, algunas de urgencia, para reanudar la actividad de la Junta fueron expuestas por Luis Morales Oliver, futuro censor de la Junta, a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas<sup>378</sup>:

Las diversas disposiciones ministeriales sobre organización de Bibliotecas requieren que esta Junta pueda reanudar cuanto antes su importante misión, cual es la provisión de libros a las mismas, distribuyendo los fondos adecuados que posee y adquiriendo los imprescindibles de actualidad en consonancia con el Glorioso Movimiento. Téngase en cuenta que además de las Bibliotecas Municipales (...) entre otras de gran importancia se encuentra en primer plano la Biblioteca Nacional, retrasados sus fondos en tres años (...) Otra misión no menos importante de esta Junta es el servicio de Cambio Internacional de Obras y Publicaciones (...) Hay en las fronteras varias cajas detenidas del Cambio Internacional pendientes de despacho de aduanas por falta de consignación. Actualmente es de suma urgencia el traslado a Madrid del depósito existente en valencia que comprende varios millones de volúmenes y mobiliario de oficina, por ser necesarios dichos libros para su distribución a las Bibliotecas y por reclamar el local la Escuela de Artes y Oficios, a quién pertenece. La realización inmediata de estos servicios exige contar con los fondos necesarios. Se piden 45.000 pts. para atender los más urgente: 30.000 para adquirir libros y encuadernaciones con destino a las Bibliotecas Públicas y los gastos de la Oficina Técnica; 10.000 para gastos de envío, transportes, embalajes y trabajos anexos y 5.000 pts. para envío y recepción del Servicio de Cambio Internacional de Obras y Publicaciones.

La JIAL también tenía su razón de ser como institución complementaria del recién creado INLE, de hecho en el art. 7<sup>º</sup> de la citada Orden de recreación de la Junta se dice que tendrá relación con el INLE *para tener un conocimiento exacto de la producción bibliográfica y poder seleccionar mejor los fondos*<sup>379</sup>:

Creado el INLE ha de proceder el Estado a la creación de un organismo encargado de la adquisición, selección y distribución de libros a las Bibliotecas públicas de él dependientes. De nada serviría vigilar la producción bibliográfica, si no tuviésemos la seguridad de que ésta había de aplicarse ordenadamente mediante un eficaz servicio de lectura pública. A este fin, y al de dotar nuestras biblioteca de libros modernos que convirtiesen estos establecimientos en centros de estudio y progreso científico, fue creada la Junta, cuya beneficiosa labor se ha dejado sentir en las Bibliotecas Públicas del Estado.

---

Oficina de Adquisición y Distribución de Libros. La Junta en su etapa republicana ha sido estudiada por Ana Martínez Rus, "La política del libro durante la II República", Gijón, Trea, 2003, pp. 76-181

<sup>377</sup> "Proyecto de Reglamento Interior de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas para Biblioteca". AGA-Cultura 75/20054.

<sup>378</sup> Documento 6-11-1939 firmado por Luis Morales Oliver dirigido al director de la DGAB. AGA Cultura 75/20054.

<sup>379</sup> Documento Junta s/f, parece borrador decreto que restaura la Junta. AGA-Cultura 75/20055.

Posteriormente en el Decreto de 1947 aparece rebautizada con el nombre de Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones confiándole la administración y distribución de las cantidades que el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional consignase para el incremento de los fondos de las bibliotecas públicas del Estado, misión que ya le correspondía desde su fundación en 1931, y se le añadió la nueva tarea de regir directamente el Servicio Nacional de Lectura, en colaboración con la Inspección General de Bibliotecas, los patronatos provinciales para el fomento de los archivos, bibliotecas y museos, las bibliotecas públicas provinciales y las juntas locales de bibliotecas, así como la de servir de vehículo a través del cual se ejerciera la Inspección General de Bibliotecas.

A partir de este mismo año comenzará a elaborar de una manera sistemática y periódica estadísticas relativas a las bibliotecas municipales y al Servicio de Cambio Internacional de Publicaciones.

La presidencia recayó en Melchor Fernández Almagro, después de renunciar el duque de Maura por motivos de residencia. Lasso de la Vega, quien permaneció a lo largo de toda la vida de la Junta, Manuel Machado, la Srta. Bohigas, Fernández Victorio, Marquerie, Srta. Naverán,.. fueron algunos de sus primeros vocales, más tarde se incorporaron José María Castrillo, Francisco Tolsada, Amadeo Tortajada y como Presidente Bordonau y Más, todos ellos miembros del Cuerpo Facultativo, algunos vinculados a las Bibliotecas Populares de Madrid. Esta Junta incorporó un nuevo cargo el de vocal censor, que recayó en Luis Morales Oliver, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla.

La administración franquista, por un lado reconocía la importante labor realizada por la JIAL en la organización bibliotecaria española en el campo de las bibliotecas públicas locales y creía imprescindible mantener las bibliotecas si se quería proporcionar al medio rural los elementos necesarios para completar su instrucción una vez pasada la edad escolar. Pero por otra parte creyó necesario, una nueva organización que no desvirtuase sus primitivos fines y los encauzase en las orientaciones de la Nueva España, ya que algunas de sus *actividades fueron aprovechadas por elementos del Frente Popular durante la dominación marxista, para propaganda de sus fines, y muchas de sus creaciones desaparecieron rápidamente en la rapiña final, al derrumbarse la estructura del Estado rojo.*

Respecto a las bibliotecas creadas en la etapa anterior, para los nuevos miembros de la Junta esta tarea se había acometido de una manera un tanto alegre y a la postre ineficaz, ya que ni por la importancia limitada de estas colecciones, ni por la escasa preparación de los municipios beneficiarios se logró, sino en contados casos, una adecuada consolidación de las instituciones bibliotecarias locales. Por ello, de esos centenares de pequeñas bibliotecas creadas por la Junta en sus primeros cuatro años apenas si existían algunas. Verdad a medias porque la supervivencia de muchas bibliotecas locales dependió del signo político y de las disponibilidades económicas de los ayuntamientos, y aunque muchas fueron destruidas durante la guerra otras se abandonaron por ser desvirtuadas por las nuevas autoridades políticas.

Aunque la Junta restableció/restauró algunas bibliotecas, en total según datos oficiales fueron 25, su actividad se dirigió principalmente a la creación de nuevas bibliotecas y éstas por lo general de mayor importancia, según su criterio, que las creadas antes de 1936. Aunque en 1946 en la introducción al *Catálogo de la Biblioteca central Circulante*<sup>380</sup>, al hablar de la creación de una red bibliotecas municipales, se hacía este comentario reflejo de la concepción dual del acceso a la cultura que practicó el Régimen:

---

<sup>380</sup> JUNTA DE INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Catálogo de la Biblioteca Central Circulante , Madrid , [La Xilográfica], 1946



[...] dotar a los Municipios españoles de Bibliotecas con fondos numerosos, equivaldría, en mucho casos, a situar, en un determinado lugar, una serie de libros que ni por el nivel intelectual de la localidad, ni por la consulta que de los mismos pudiera hacerse, merecería sacrificar por hoy los esfuerzos del Estado. El plan de creación de una Red de Bibliotecas en España, que dotase a los lugares más apartados de nuestro territorio de una expansión cultural, representa un esfuerzo económico que pocos estados pueden mantener; en España, encomendada esta misión a la JIAL, los resultados han de ser pequeños, dada la escasa consignación disponible para estas atenciones.

Se decidió que a la hora de crear nuevas bibliotecas, estas fueran cabeceras de partido pues podían tener más actividad y ser más eficaces en localidades que por el número de sus habitantes podrían proporcionar una mayor estabilización en su funcionamiento. Para las localidades pequeñas se establecerían bibliotecas viajeras o lotes de circulación para llevar la lectura a los rincones más apartados.

Posteriormente, a partir de 1946, y a raíz del éxito del Centro Coordinador de Bibliotecas de Oviedo, como se verá más adelante, se optó por esta fórmula, la de Centro Coordinador, como medio de descentralizar la política bibliotecaria, de este modo la inspección desde las diputaciones sería más eficiente, pues la tarea de inspección desde Madrid además de costosísima era inoperante, porque transcurría mucho tiempo entre una y otra visita, y en ese tiempo la actividad de la biblioteca solía decaer y hasta podía perderse.

Y hablando de inspecciones, apenas hay constancia de que la Junta inspeccionara bibliotecas antes de que decidiera que esta labor fuera asumida por los Centros Coordinadores. Una de ellas quedó reflejada en el acta de la sesión del 6 de octubre de 1942<sup>381</sup>, en la que el Sr. Castrillo informa de que no se pudieron abrir al público las bibliotecas de Ferrol y Vigo. En Ferrol por no disponer de local y en Vigo porque el local destinado a la Biblioteca estaba inutilizado por la caída del techo del salón de lectura. La otra inspección se realizó entre el 4 y el 10 de septiembre de 1945 a las bibliotecas del Centro Coordinador de Asturias<sup>382</sup>, aprovechando que el inspector pasaba las vacaciones de verano en el Norte.

El saldo, en cifras, con el que cerraba su labor la Junta al final de su vida administrativa es el siguiente<sup>383</sup>: gastos efectuados en la creación de bibliotecas: 6.523.613 pts.; bibliotecas reorganizadas o restablecidas, entre 1942 y 1944, 25. Creación de Bibliotecas Públicas Municipales autónomas y encuadradas en Centros Coordinadores de Bibliotecas, entre 1939 y 1951: 370. Centros Coordinadores de Bibliotecas: 20. Volúmenes adquiridos hasta 1950, 757.535 con un coste de 15.562.627 pts. Suscripción a revistas 32.312 con un importe de 2.250.234 pts. Se encuadernaron 237.783 volúmenes que facturaron 2.249.918 pts y se obtuvo un descuento en la compra de libros de 2.503.944 pts.

A las nuevas Bibliotecas Públicas Municipales creadas en 1950, hay que agregar las bibliotecas llamadas del “párroco” creadas a iniciativa del Ministro de Educación Ibáñez, integradas por una escogida colección de obras que necesitaba el párroco para conseguir una básica y eficaz preparación de sus quehaceres. Veinte bibliotecas de este tipo son pocas. Sus libros fueron seleccionados por las altas jerarquías de la Iglesia, con el fin de que el mayor acierto

---

<sup>381</sup> Acta de la sesión de la Junta del 6 del 10 de 1942. Libro de Actas de la Junta. AGA

<sup>382</sup> “Visita de inspección a las bibliotecas populares de Asturias”, 4 de octubre 1945. AGA- Cultura 75/20152

<sup>383</sup> “El Servicio Nacional de Lectura”, *Documenta*, nº 112, 1952, pp. 2-14

acompañara esta tarea. 75 libros con un importe de 2.986 pts. de los siguientes temas: Sagrada Escritura, Teología, Liturgia, Derecho canónico, Filosofía, Historia, Sociología, Acética y Mística, Predicación (Pérez de Urbel, Toth). Se comenzó su implantación por Teruel<sup>384</sup>.

Tal era la demanda de recursos para sostener o crear bibliotecas, que a la misma Dirección General de Archivos y Bibliotecas llegaban peticiones para formar bibliotecas, que en algunos casos aceptó, pese a no ser competencia directa de la misma. Veamos tres ejemplos<sup>385</sup>.

El director del Grupo Escolar “Enrique Tarrasa” ubicado en los Poblados Marítimos de Valencia solicita a la Junta el 28 de junio de 1949 un biblioteca escolar todo lo numerosa y selecta que las circunstancias económicas y de distribución puedan permitir. El maestro ha montado una Biblioteca con 700 ejemplares a base de donativos y con el material de la escuela pero es insuficiente para fomentar la afición a las buenas lecturas a los 400 niños del colegio. Además expone que si la Biblioteca cuenta con más volúmenes puede hacer de Biblioteca Popular Circulante, pues está enclavada en los Poblados Marítimos con + de 70.000 habitantes que no tienen biblioteca. La solicitud es aceptada por la inspección pese a que no es competencia de la DGAB las bibliotecas escolares y se le pide al maestro que informe de las condiciones del local: dimensiones, ventilación, luz, si tiene entrada independiente.

El segundo corresponde a una petición del Presidente de la Rama de Hombres de Acción Católica de la Parroquia de San Ildefonso de Madrid al Ministro, quién poseía una pequeña biblioteca religioso-literaria para atender a la formación espiritual y cultural de sus socios (120 tomos y los números de tres revistas que se habían conseguido con gran esfuerzo), y pretendían convertir esa Biblioteca en circulante dentro de la feligresía, a fin de que sin distinción de clases sociales ni de personas, salga a la calle a propagar las ideas religiosas y culturales que la AC propugna a las 40.000 almas de la barriada. Nos proponemos facilitar a nuestros feligreses obras de carácter eminentemente social, inspiradas en las doctrinas sociales y económicas de la Iglesia católica, pero como carecemos de medios económicos aunque sí de personal para gestionar los trabajos que implican la circulación, solicita algún donativo para adquisición de libros o algún lote (27 enero 1948).

Se le contesta que el Ministerio concede anualmente una subvención al Consejo Superior de Acción Católica con destino a la adquisición de libros para su Biblioteca. Se le propone en cambio una colaboración entre su centro y la DGAB para establecer una Biblioteca Circulante. Ustedes ofrecen el local, luz y servicio para establecer una BP de lectura y circulación de libros, y por su condición de pública se permitiría la entrada a toda clase de público. Este ensayo por 1ª vez intentado en esta capital pero que próximamente será una realidad en Valencia, facilitaría ventajosamente a esta DGAB su misión de contribuir por medio de la lectura a la formación moral y material. AC acepta a condición de que el local esté dentro de la demarcación de la Parroquia.

Por último, se solicita instalar una Biblioteca dentro del Grupo benéfico “San Francisco Javier” de Valencia para atender a 500 niños y a la población circundante por estar alejado de las instituciones culturales de la ciudad. Se dispone de local adecuado y de personal para llevarla (profesores). Se le pide un informe más detallado de los planos del edificio y se deja caer que la Junta Provincial de Menores asumiría los costes del mobiliario. (12 abril 1951)

Formar y distribuir lotes de libros modernos para las bibliotecas existentes mediante una selección apropiada fue la otra competencia en importancia de la Junta. Las normas por las

---

<sup>384</sup> *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, p. 164-166

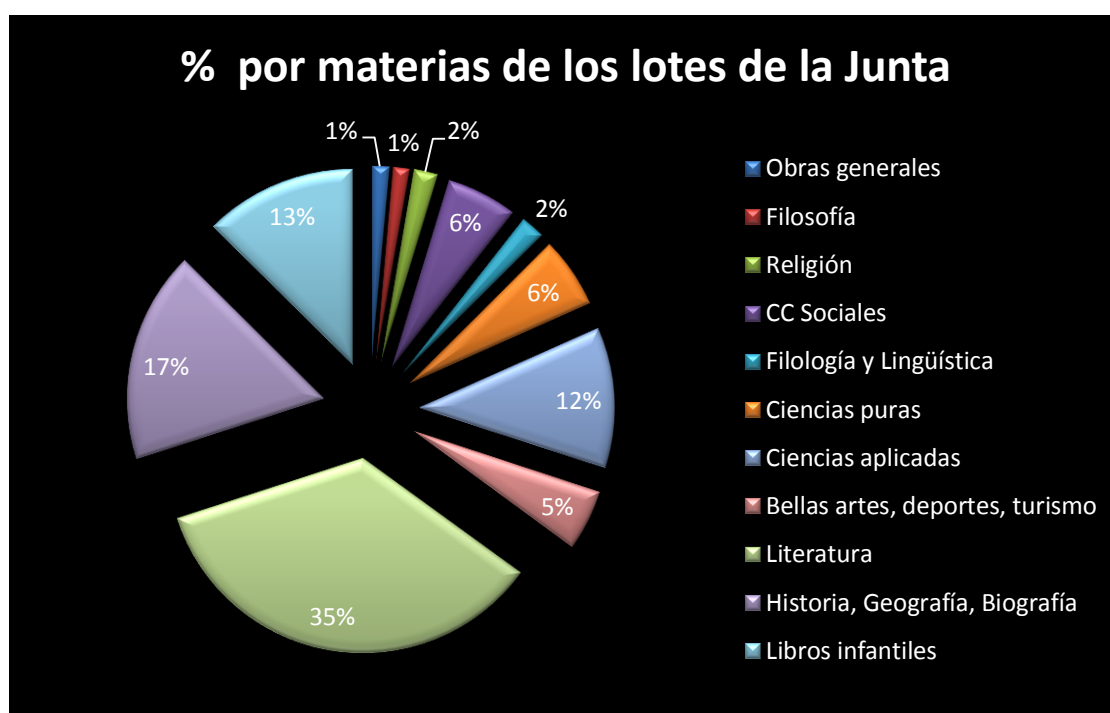
<sup>385</sup> AGA-Cultura 31-6078

que se rigió a la hora de adjudicar el número de libros de los lotes y su contenido estuvieron encaminadas a formar, por un lado bibliotecas uniformes, y por otro, a acomodarse a las necesidades culturales, económicas y sociales del municipio, sin dejar el carácter de universalidad de materias a los lotes de fundación, ya que éstos en muchos sitios significaba el único núcleo de libros al alcance de todos.

La primera preocupación para constituir una biblioteca-tipo fue la de dar cabida en gran parte a la literatura recreativa (poesía, novela, teatro, viajes, geografía, biografía y manuales técnicos sencillos, en un 60 por 100) pues el objetivo era crear hábitos de lectura. A pesar de este carácter enciclopédico y literario, la norma en la selección fue la de ofrecer obras de un valor permanente, educativo y formativo con el fin de desarrollar la afición por la lectura.

En cuanto al número de volúmenes, los lotes iniciales a partir de 1944 se fijaron en 500, 750 y 1.200 volúmenes para bibliotecas de pueblos inferiores a 3.000 habitantes, de 3.000 a 10.000 y superiores a esta cifra o cabezas de partido, sin mantener un criterio cerrado en los casos en las circunstancias aconsejaron una modificación.

Los libros se repartían por materias en la siguiente proporción para las bibliotecas de tipo A: 1.200 volúmenes y la suscripción a 12 revistas y la mitad para las de tipo B: 500-600 libros y 8 revistas<sup>386</sup>.



**Gráfico 7**

Pese a que el número de lotes se fue incrementado dando cabida a todas las materias, éstos, en opinión de algunos miembros la Junta, eran demasiado pobres para satisfacer necesidades culturales e intelectuales, pero por otro, en algunas localidades sobrepasaban el escaso nivel cultural de los destinatarios. De nuevo nos encontramos con esa doble moral cultural:

(...) más que una excitación de la curiosidad mental que la plena satisfacción de las necesidades culturales que puedan existir en un determinado municipio. Creer que con 500 volúmenes se ha

<sup>386</sup> Ver anexos con los títulos de los lotes destinados al público adulto e infantil.

cumplido, desde el punto de vista cultural, la misión encomendada a esta Junta, supone negar el desarrollo intelectual que el individuo puede alimentar, pero por otra parte, dotar a los Municipios españoles de Bibliotecas con fondos numerosos, equivaldría, en muchos casos, a situar, en un determinado lugar, una serie de libros que ni por el nivel intelectual de la localidad, ni por la consulta que de los mismos pudiera hacerse, merecería sacrificar por hoy los esfuerzos del Estado<sup>387</sup>.

Respecto a la selección y propuestas de adquisiciones la Junta contó con el vocal censor, cuya obligación primordial era examinar los volúmenes que constituyeran el fondo de las Bibliotecas encomendadas a la Junta, procediendo a su depuración según los criterios de la Orden de 13 de diciembre de 1939; examinar las propuestas de adquisición de libros y presentar a la Junta los informes sobre cada obra y presentar a la Junta las relaciones de obras de los lotes de incremento y nueva fundación de bibliotecas municipales. En su labor podía solicitar el asesoramiento de algún vocal cuando se tratara de obras muy especializadas<sup>388</sup>.

En la propuesta de adquisiciones que García Oliver presentó a la Junta en el mes de junio de 1944, se agrupaban las obras en función del tipo de biblioteca: para bibliotecas provinciales, para provinciales, universitarias y especializadas; para infantiles y escolares; para las bibliotecas que lo soliciten y obras que no es indispensable su adquisición. En este último grupo se incluían títulos como “Los grandes inventos”, “Tres grandes escritores: Dante, Shakespeare, Balzac”; “Tres grandes filósofos: Confucio, Sócrates, Kant”, “El parque Mansfield” de Jane Austen o “El damero maldito” de Conchita Montes.

El modo de seleccionar los documentos para el depósito de la Junta corría a cargo de la Comisión Permanente de Hacienda, previo informe de los funcionarios técnicos de la Junta y del propio Secretario. Verificada la selección y confeccionadas las listas no se procedía a la compra hasta que no fueran comprobadas por el Pleno de la misma Junta. Este sistema parece que no gustó a Javier Lasso de la Vega, quien estimaba que todos los miembros debían proponer la adquisición de obras y no solo las que por propia iniciativa presentaran los interesados a la Junta, y en el acta de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 1948<sup>389</sup>, se acordó que en adelante se hiciesen relaciones de obras ofrecidas en adquisición y de aquellas otras que aun no habiendo sido presentadas por los interesados se estimasen convenientes. Tales relaciones, conjuntamente con los informes de los técnicos, circularían entre los miembros de la Junta que podrían señalar las que debían ser adquiridas o rechazadas. También se acordó que los miembros de la Junta aportasen desideratas de libros útiles, así como que cuando se reuniese la Comisión Permanente de Hacienda para acordar adquisiciones se diese derecho a cada vocal para asistir y tomar parte de los acuerdos.

Un año antes, en la sesión del 28 abril de 1947, también propuso Javier Lasso a la Junta crear una “Guía de libros de estudio seleccionada para las bibliotecas españolas<sup>390</sup>”. Ambicioso proyecto que comprendía la redacción de un catálogo con unas 5.000 fichas relativas a libros de ciencias, excluyéndose la literatura recreativa. Cada materia propia de cada asignatura en todos sus grados desde el elemental hasta el universitario estaría representada entre uno y tres títulos. La selección y juicio crítico de cada título se haría por un especialista abonándosele cinco pesetas por cada ficha.

---

<sup>387</sup> Prólogo del Catálogo de la Biblioteca Central Circulante, 1946

<sup>388</sup> Proyecto de Reglamento Interior de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas para Biblioteca. AGA-Cultura 75/20054

<sup>389</sup> Libro de Actas de la Junta. AGA

<sup>390</sup> “Plan para la redacción de una Guía selecta...” firmado por Lasso de la Vega (s/f) AGA-Cultura 75/20054

De la lectura de dieciséis relaciones de libros<sup>391</sup>, que la Junta envió a diferentes instituciones y asociaciones como escuelas nacionales, escuelas profesionales, parroquias de los suburbios de Madrid, regimientos militares hasta la misma Junta Nacional de Bibliotecas de Madrid de Falange, se observa un predominio de títulos de literatura, manuales escolares, textos universitarios, libros de viajes o textos de ciencias puras y aplicadas, historia o biografías, en proporciones variables según las necesidades de cada centro. En ningún caso están incluidos un gran número de libros relativos a Franco, José Antonio o la cruzada, sino excepcionalmente aparecen títulos como “El Estado corporativo” de Aspiazú, “¿Qué son los Sindicatos verticales?” , “Siete discursos” de Serrano Suñer, “El glorioso movimiento de España” de P. Ibáñez o “Palabras del Caudillo”. En cambio si son más recurrentes libros de autores religiosos coetáneos como los del Cardenal Gomá (“El matrimonio”, “La familia”, “Los Santos Evangelios”), Pérez de Urbel (“Historia sagrada”, “Vida de Cristo”, “Año cristiano”) y Tihamér Toth (“El matrimonio cristiano”). Como llamativo, por lo inesperado de que estuvieran incluidos en un lote de libros para un regimiento militar, en concreto el de Carabanchel, en 1944, aparece en el listado “El romancero gitano” de García Lora y “María Antonieta” de Stefan Zweig, un escritor judío prohibido por los alemanes y sus *aliados*. También es llamativo que en el lote infantil de 113 obras seleccionadas por la Junta en 1943, sólo hay cuatro títulos editados después de 1939, siendo biografías claramente doctrinarias: “Laureados”; “Franco el muchacho español”, “Cuando los grandes hombres eran niños” y “Cuando las grandes mujeres eran niñas”.

Con el fin de estimular el interés de los lectores de una Biblioteca Pública Municipal y de ejercer sobre ellos una mayor atracción hacia la labor de cultura que la misma realizaba, la Junta consideró la conveniencia de incrementar los fondos de la misma con colecciones de interesantes revistas de temática variada, como ciencia, arte, literatura, religión, enseñanza, recreo o agricultura. Por ello las Bibliotecas Municipales creadas por la Junta, comenzaron a recibir periódicamente las siguientes revistas:

“Marca” (Deportes)  
“Primer Plano” (Cine)  
“Semana” (Gráfica)  
“Bazar” (Infantil de niñas) publicada por la SF  
“Dumbo” (Infantil de niños)  
“Ecclesia” (Religiosa) publicada por AC  
“Agricultura” (Agrícola)  
“Guía” (Boletín de enseñanza)  
“Mundo hispánico” (Hispanismo)  
“Endeavour” (Científica)  
“El Hogar y la moda” (Femenina)

Estas revistas el encargado de la Biblioteca podía ponerlas en manos de los lectores desde su llegada y después de ser leídas debían ser coleccionadas para su encuadernación.<sup>392</sup>

---

<sup>391</sup> AGA-Cultura 75/ 20156 y 75/20067

<sup>392</sup> AGA-Cultura (22-12-1948)

El éxito conseguido al dotar de revistas a las Bibliotecas Públicas Municipales y la experiencia obtenida durante los dos años de funcionamiento del servicio, *aconsejaron el intento de infundir una máxima eficacia al mismo, perfeccionándole hasta donde lo permitió el mantenimiento de la uniformidad directiva y orientadora.*

En la sesión de la Junta de primeros de diciembre de 1950 se acordó establecer unas normas generales para 1951 con la finalidad de dar mayor agilidad al servicio y conceder libertad a la propia iniciativa seleccionadora de cada Biblioteca, con arreglo a su carácter, intereses y público que la utilizaba.

Se formaron tres grupos de revistas para bibliotecas: obligatorias para todas las bibliotecas; voluntarias, de las que la Biblioteca podía prescindir o no, a voluntad y las sustituibles, es decir obligatorias en cuanto al tema y carácter de la revista, pero voluntarias en la elección del título: por ejemplo *Marca* o *El Hogar y la moda* se podían sustituir por otros títulos. El importe total de la suscripción anual de las revistas elegidas no debía exceder de 1.352 pts. para Bibliotecas de tipo A, y de 678 para las de tipo B .

OBLIGATORIAS	VOLUNTARIAS	SUSTITUIBLES
<p>“Bazar” (Infantil niñas)</p> <p>“Dumbo” (Infantil niños)</p> <p>“Ecclesia” (Religiosa)</p> <p>“Agricultura” (Agrícola)</p> <p>“Guía” (Boletín de enseñanza)</p>	<p>“Bibliografía médica internacional”</p> <p>“Meridiano”(internacional)</p> <p>“Mundo hispánico” (Hispanismo)</p> <p>“Primer Plano” (Cine)</p> <p>“El Ruedo” (toros)</p>	<p>“Marca” (Deportes)</p> <p>“El Hogar y la Moda” (femenina)</p> <p>“Semana” (Gráfica)</p>

Gráfico 8

Las revistas de la primera categoría se enviaban a todas las Bibliotecas sin aviso. Las Bibliotecas que desearan suscribirse a revistas de carácter local, provincial o comarcal o regional quedaban facultadas para formalizar directamente las correspondientes suscripciones.

La Junta también tenía asignada, entre sus competencias, atender las peticiones que formularan las direcciones técnicas de las bibliotecas, reservando a la Junta la facultad de enviar las obras que estimase adecuadas a los fines de cada centro, así como atender las solicitudes de lotes bibliográficos que formularan entidades privadas y personas particulares de toda índole con fines públicos.

A partir de los datos estadísticos hallados en el AGA entre la documentación administrativa que generó la Junta, se han elaborado estos gráficos para poder conocer a qué entidades se destinaron parte de los exiguos presupuestos asignados a las peticiones de lotes de libros y cómo evolucionaron éstos en el tiempo.

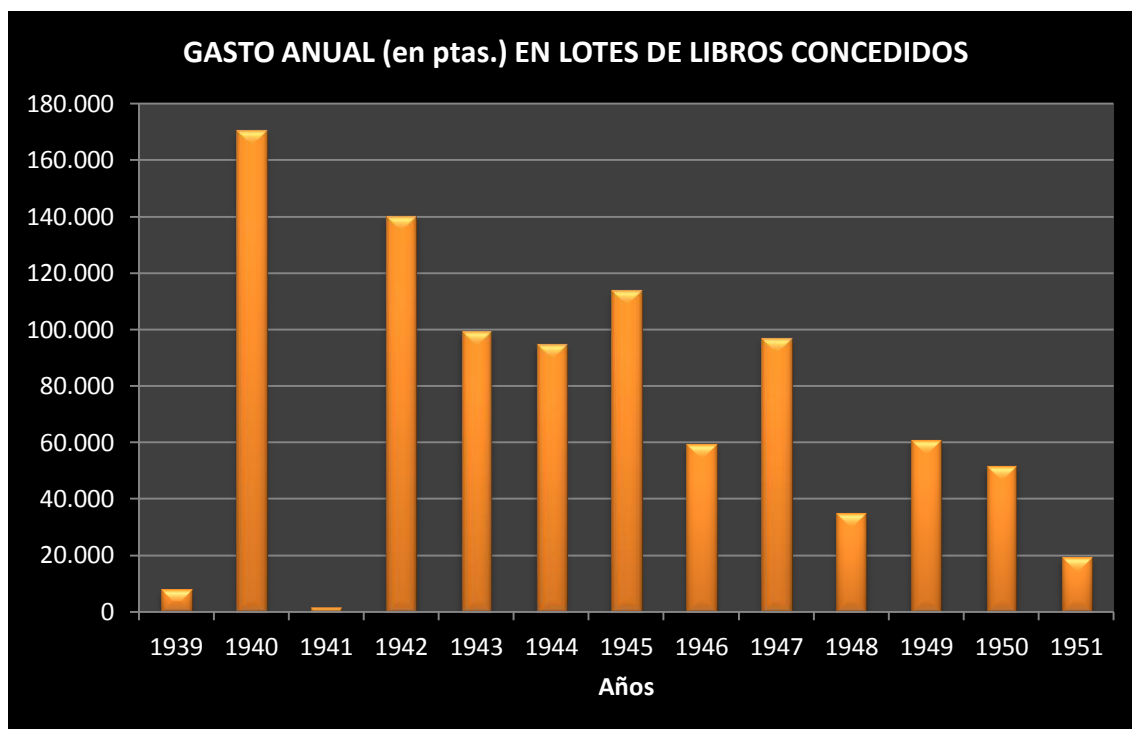


Gráfico 9

En este primer gráfico es fácil deducir el progresivo y espectacular descenso en el gasto en esta partida que debemos poner en relación inversa con el gasto destinado en la creación de bibliotecas. Mientras en 1940 se gastaron 170.534 pesetas en lotes de libros, sólo se inauguraron cuatro bibliotecas municipales. En cambio en 1951, se destinaron 19.250 pesetas en peticiones de lotes de libros, y se crearon 75 bibliotecas.

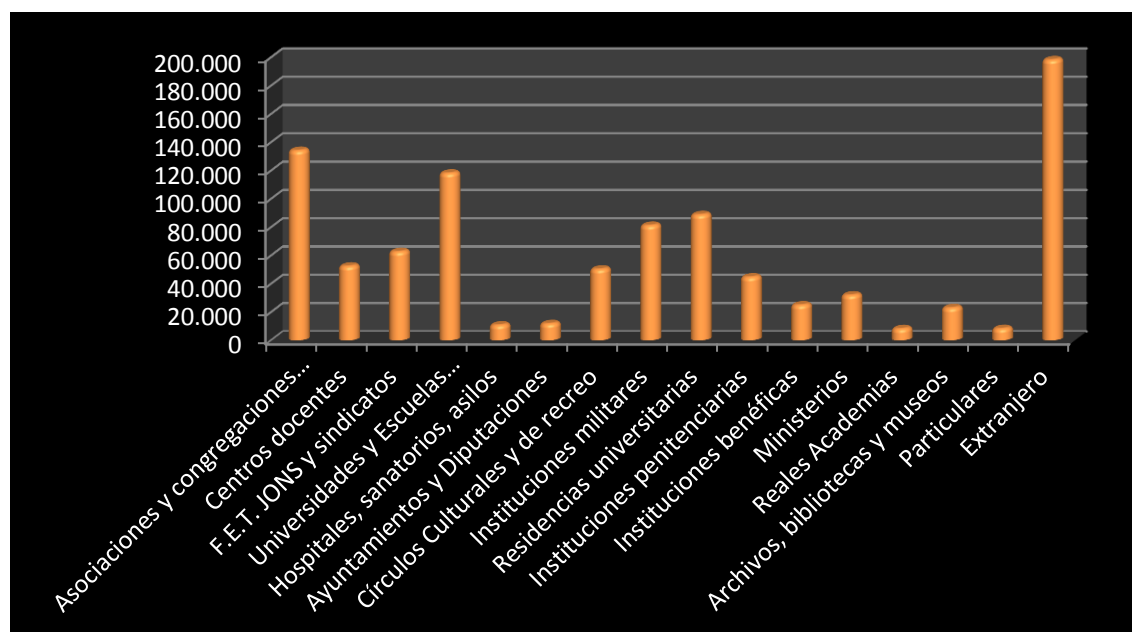


Gráfico 10. Gasto por entidades en ptas. (1939-51)

En cuanto a las entidades que más se beneficiaron, en un muy primer lugar destacado aparecen los lotes asignados a centros ubicados en el extranjero. De las casi 200.000 pesetas que recibieron a lo largo de este decenio, las mayores cantidades se asignaron entre 1943 y 1949, coincidiendo con los años en que el régimen practicó una política cultural en el exterior para compensar esa mala imagen de haber sido aliado de los fascismos derrotados como se comentó en el capítulo I.

Del resto de entidades beneficiadas, son significativas las importantes partidas que recibieron las asociaciones y congregaciones religiosas, las instituciones militares y la FET de las JONS y los sindicatos, entre las tres más de 277.000 pesetas, frente a las 258.000 asignadas a las universidades y centros docentes.

De lo expuesto anteriormente es fácil deducir las instituciones y organizaciones que sustentaban el régimen, que a cambio de su apoyo podían recibir todo tipo de prebendas, incluido el acceso al libro. Libro que en estos años de autarquía fue un producto caro y difícil de adquirir.

La Junta también recibió la misión de crear y mantener eficazmente la Biblioteca Central Circulante, con la que se trataba de crear un servicio de préstamo interbibliotecario.

Sus presupuestos y objetivos fueron más modestos y más restringidos socialmente respecto a la creación de bibliotecas municipales y la adquisición de publicaciones que los de su predecesora republicana.

En las actas y memorias de la Junta<sup>393</sup> es recurrente el comentario de la insuficiencia presupuestaria, pese a contar con fuertes descuentos obtenidos en la compra de libros - 2.503.944 de pesetas entre 1939 y 1950-:

(...) Dentro de las limitaciones que los presupuestos exigen, en especial la creación y fomento de las Bibliotecas Públicas, se desarrollan con toda actividad, aunque a veces haya de demorar la instalación de éstas por esas mismas limitaciones. Asimismo, la parvedad presupuestaria ha impedido incrementar la ayuda y sostenimiento de las existentes, como era su propósito, teniendo en cuenta el precio alcanzado por el libro y la encuadernación y, en general, por los varios aspectos de las artes gráficas, lo que ha impedido también extender las organizaciones provinciales (Centros coordinadores), a más de dos provinciales en 1949, cuando los normal venía siendo desde 1946 crear de 4 a 5 cada año, dotándoles inicialmente con 100.000 pts. en libros. Sólo pudieron Badajoz y Valladolid. Se crearon 53 bibliotecas: encuadradas en Centros Coordinadores 33 y Bibliotecas Públicas Municipales autónomas 20 (Memoria de 1949)

Norma general del año ha sido la de la continuidad sin prisa y sin pausa de la labor emprendida hace años, referente a la creación de nuevas bibliotecas, si bien dificultada cada vez más por el aumento de coste continuo de libros, revistas y encuadernaciones, sin un aumento correlativo del presupuesto. Ello ha obligado a adoptar acuerdos nada agradables, de carácter restrictivo, en la concesión de subvenciones a los Centros protegidos. Con un presupuesto de ingresos idéntico al del año anterior, con varias decenas más de bibliotecas en funcionamiento y con su encarecimiento progresivo del material bibliográfico, las consecuencias son: reducción proporcional de todas las subvenciones o detención absoluta de la política de expansión de la

---

<sup>393</sup> "Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones. Datos estadísticos y trabajos de..."; *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, nº 2, 1947; nº 1, 1949; nº 2, 1950; nº 2, 1951. Libro de actas de la Junta. AGA



biblioteca popular; venciendo en el dilema la consideración de llevar adelante las tareas de creación de nuevos centros para no detener una marcha iniciada con cierta agilidad, ya que reanudarla hubiese sido más difícil después de un periodo de estancamiento. Se ha considerado imprescindible distribuir por los municipios españoles algunas decenas más de bibliotecas, aun a cambio de reducir los presupuestos de las que vienen funcionando (Memoria 1950)



**Gráfico 11**

Pese a casi triplicar su asignación presupuestaria entre 1939 y 1951, apenas llegó al millón de pesetas entre los años 1939 y 1943.

Del anterior gráfico puede llamar la atención que las asignaciones a la JIAL republicana fueran menores que los de la Junta en su periodo franquista. Aquí hay que precisar que la política bibliotecaria republicana no sólo comprendió la actividad de la Junta, sino que debemos añadirle los presupuestos concedidos a las Misiones Pedagógicas que en los dos primeros años y medio de su existencia recibió 1.022.435 pts. para crear bibliotecas, comprar y encuadernar libros y 650.000 en 1934. Posteriormente, durante la guerra, la Oficina de Adquisición y Distribución de Libros entre marzo de 1937 y todo 1938 recibió más de 2.980.363 pts.<sup>394</sup>

Respecto a la adquisición de revistas extranjeras, la Junta estableció dos divisiones en función del país de compra. Así la bibliografía extranjera cuya adquisición podía hacerse mediante el pago en pesetas y aquella otra cuyo abono podía hacerse obligatoriamente en divisas.

Los libros alemanes e italianos se podían adquirir mediante pesetas, con lo cual las peticiones de los particulares quedaban a la libre disposición de los libreros el servirlos. Para las bibliotecas cuyo régimen estaba encomendado a la Junta se estableció como criterio el no

<sup>394</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana, La política del libro durante la II República, Gijón, Trea, 2003, pp.35-36

duplicar proponiéndose dar prioridad a las desideratas de revistas literarias, de modas y de mero pasatiempo, a excepción de los grandes núcleos de población como Madrid o Barcelona.

La compra de libros y revistas francesas se reguló por el tratado hispano-francés que le dedicaba un apartado a la compra de bibliografía francesa.

Para la compra de libros y revistas que necesitasen el empleo de divisas (Inglaterra, USA, Bélgica,...) con destino a entidades oficiales era examinada por la Junta, quien teniendo en cuenta la índole de las peticiones las adaptaba a las disponibilidades de las divisas concedidas. Se estableció un orden de prelación: 1º los organismos de investigación científica, agrícola o industrial y las universidades; 2º establecimientos de enseñanza media, primaria y escuelas especiales, 3º los demás organismos dependientes del estado y 4º los particulares.

Informada favorablemente una petición, la Junta pasaba el pedido a las Cámaras Oficiales del Libro para que éstas ordenaran su adquisición conforme a los cupos fijados entre libreros importadores. No podían realizarse nuevas suscripciones a revistas en tanto no estuvieran satisfechas las suscripciones a las colecciones que antes de 1935 se recibían, salvo razón justificada.

Esta situación se suaviza en el art. 21 del citado Decreto de 24 de julio de 1947:

Los envíos de Cambio Internacional y las adquisiciones de publicaciones extranjeras que haga la expresada Junta para las Bibliotecas Públicas del Estado quedan exentas de las licencias de importación y exportación, del pago de derechos de aduanas y del impuesto de Usos y Consumos. En los presupuestos del Estado se consignará anualmente a dicha Junta una cantidad para la adquisición de obras y revistas extranjeras.

Otra tarea de la Junta, heredada de la anterior, fue el intercambio bibliográfico entre entidades españolas y extranjeras. De hecho este servicio de Cambio Internacional de Publicaciones se estableció en el Convenio de Bruselas de 1886 que España suscribió.

A partir de 1946<sup>395</sup> este servicio reanudó su actividad con normalidad tras quedar interrumpido a consecuencia de la guerra mundial. Poco a poco los diferentes países comenzaron a remitir las publicaciones oficiales de sus respectivos centros oficiales y culturales y en correspondencia, España envió las suyas.

Aunque el cambio comenzó a normalizarse, todavía en 1948 hubo trabas derivadas del intervencionismo estatal en la política de cambios que dificultaban el servicio, con lo que a los centros de investigación les era imposible encontrar medios legales de cambio para obtener la producción bibliográfica indispensable de los países técnicamente avanzados y de cultura muy desarrollada.

Con excepción de los países al otro lado del telón de acero, España reanudó poco a poco sus relaciones de intercambio de libros y revistas oficiales con todo el mundo. Sólo Inglaterra no se acogía a la Organización Internacional de Cambio Bibliográfico y tampoco contaba con un organismo central, con lo que la Junta asumió las gestiones directamente con los interesados en las publicaciones inglesas.

Poco a poco se registró un ascenso en el movimiento del servicio gracias a unas mayores facilidades en los transportes y una consiguiente mayor libertad en las normas del comercio internacional

---

<sup>395</sup> Los datos aparecen en: "Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones. Datos estadísticos y trabajos de..."; *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, nº 2, 1947; nº 1, 1949; nº 2, 1950; nº 2, 1951.

Ni remitentes ni destinatarios tenían que abonar cantidad alguna por el servicio, salvo los costes ocasionados por el transporte y el franqueo.

Una de las misiones encomendadas a este servicio por el Convenio, era la de formar un catálogo completo de cuantas publicaciones llevasen a cabo los órganos de la Administración del Estado, pero no se ha podido llevar a efecto.

Se importaban más publicaciones que se exportaban. Así entre 1939 y 1947 se importaron 67.378 publicaciones, y sólo se exportaron 12.373<sup>396</sup>. En 1949 se importaron 7.609 paquetes y se exportaron 3.256. Se importaba fundamentalmente de EE.UU, seguido a muy larga distancia de Italia y Francia y los países destinatarios de nuestras publicaciones eran EE.UU, Argentina, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal,...

En 1950 se observa una ligera bajada en las importaciones porque los centros españoles que intercambiaban sus publicaciones con sus colegas del extranjero comprendieron la utilidad y ventajas del servicio oficial sobre su propio servicio de cambio privado, ya que este no podía competir en garantía, rapidez y economía con aquél, pues el servicio oficial era gratuito. Sin embargo, éste no llega a tener el desarrollo que la cultura española requería, a causa de que la mayor parte de los centros de estudio e investigación dependían del CISC y éste había creado y sostenía su propio y muy voluminoso servicio de canje con todo el mundo de la ciencia, restándole al oficial una gran masa de publicaciones intercambiables.

Si se estos datos se comparan con los que realizó la Junta en su época republicana es fácil deducir el alto nivel de nuestra ciencia y cultura en esos años respecto a los inicios del franquismo<sup>397</sup>

### **5.3. LOS PATRONATOS PROVINCIALES**

Fue en el ámbito territorial de la provincia donde la administración franquista en materia bibliotecaria hizo su aportación más novedosa. Estamos hablando de los Patronatos Provinciales para el Fomento de las Bibliotecas, los Archivos y Museos y de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas.

Los primeros, inspirados por Javier Lasso de la Vega, se establecen por Decreto de 13 de octubre de 1938, y se desarrollan por Orden de 19 del mismo y Orden de 5 de noviembre siguiente. Este insigne y avanzado bibliotecario se basó en los *boards* que regían las bibliotecas inglesas y norteamericanas. Pero en aquellos países sí había ingresos económicos para administrar, libros que comparar y una política por encima del director de la biblioteca<sup>398</sup>.

---

<sup>396</sup> Servicio de Cambio Internacional. Resumen de las operaciones de importación y exportación. AGA-Cultura 75/02073

<sup>397</sup> En 1932 se exportaron 3.925 paquetes y se importaron 7.366 paquetes y 19 cajas. En 1933 se exportaron 7.404 paquetes y 5 cajas y se importaron 7.825 paquetes y 19 cajas. En 1934 la exportación superó la importación: 11.515 paquetes se exportaron y 7.608 paquetes y 10 cajas se importaron. Datos recogidos por una Ana Martínez Rus en "La política del libro durante la Segunda República: socialización de la lectura".

<sup>398</sup> ESCOLAR, Hipólito. *La cultura durante la guerra civil*, Madrid, Alhambra, 1987, pp. 252-257

Presididos por los respectivos gobernadores civiles, completaban su composición un vicepresidente primero (sería el presidente de la diputación Provincial o el diputado en que delegara), un vicepresidente segundo (alcalde de la capital de provincia o el concejal en que delegara) y 11 vocales: un representante del obispo de la diócesis, otro de FET y de las JONS, el notario archivero, tres funcionarios del Cuerpo de Facultativos, y cuatro personas de acreditada competencia en materias bibliográficas, históricas y arqueológicas, y un vocal de la docencia, añadido por Orden de 7 de marzo de 1939.

Entres sus funciones respecto a las bibliotecas estaban<sup>399</sup>:

(...) el mantener y propagar por medio de las bibliotecas públicas establecidas en la provincia, el espíritu y la ideología que informa el Estado Nuevo; aprobar las propuestas de adquisiciones nuevas de libros con destino a las bibliotecas de la provincia; prestar su colaboración al Estado en la creación de nuevas bibliotecas municipales, infantiles, de hospitales y en la organización de los servicios de circulación de libros, bibliotecas viajeras, préstamos a domicilio, etc.; nombrar a las Juntas de bibliotecas municipales, a tenor del artículo 2º del decreto del Ministerio de Instrucción Pública del 13 de junio de 1932, sobre creación de bibliotecas municipales, o las que, en su caso, las sustituyan; administrar los recursos que el Estado les asigne y organizar la Fiesta del Libro, en la cual se leerían la memoria y estadística anuales de la labor realizada en la provincia, y se haría entrega de los premios y diplomas que se hubiesen adjudicado durante el año; organizar cursillos de verano para bachilleres, maestros y sacerdotes que desearan adquirir el título de bibliotecario elemental, a tenor de las disposiciones que a ese fin se dicten y fiscalizar el cumplimiento de la legislación sobre el depósito legal de impresos.

Además de velar por el buen funcionamiento de los servicios bibliotecarios, debían procurar que las instituciones docentes cumplieran las disposiciones sobre las prácticas de alumnos en las bibliotecas; solicitar las inspecciones extraordinarias; organizar concursos para premiar las mejores bibliotecas; otorgar diplomas y premios a los municipios que más sobresalieran por su atención a la biblioteca.

Funcionaron durante tres o cuatro lustros sin regularidad. Ni siquiera realizaron la labor inspectora que dio origen a su nacimiento, pues apenas había libros que seleccionar para su compra, ni nada que administrar porque no se allegaron recursos ni se consiguieron donativos. De todas formas no resultaron totalmente inútiles e incluso, en algunas provincias, tuvieron una larga vida, aunque en constante decadencia. Sirvieron para que los bibliotecarios pudieran visitar y explicar sus problemas a los poderosos gobernadores civiles, canalizar las raras subvenciones destinadas principalmente a la organización de la Fiesta del Libro, y, en algunos casos para que intervinieran en la gestación de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas.

Después de la guerra, poco a poco, fueron sustituidos por los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas, a los que pasaron por Orden de 21 febrero de 1950 la casi totalidad de sus competencias referentes a bibliotecas<sup>400</sup>. En el Decreto de 1947, estos Patronatos aparecen como uno de los organismos del Servicio Nacional de Lectura junto a la Inspección General, la Junta de Intercambio y las Juntas Locales de Bibliotecas, y en la Orden

---

<sup>399</sup> BOE nº 118, de 26 de octubre de 1938. La Orden Ministerial de 7 de marzo de 1939 (BOE, nº 73, de 14 de marzo de 1939) complementó la anterior.

<sup>400</sup> Todas estas funciones pasan a los centros Coordinadores: velar por el buen funcionamiento de los servicios de bibliotecas, archivos y museos arqueológicos; procurar que las instituciones docentes cumplan las disposiciones sobre las prácticas de alumnos en las bibliotecas, visitas a museos, etc., y dirigir y fomentar la propaganda de los servicios de lecturas; llegar recursos y fomentar los donativos; solicitar las inspecciones extraordinarias...Redactar la memoria anual...

de 15 de julio de 1950, aún se les asignara la función de revisar y eliminar de las listas de las Bibliotecas Circulantes privadas lo que a su juicio fuera nocivo moralmente (art. 2º) y se les encomendaba la vigilancia y cumplimiento de los artículos 37 y 38 (art. 1º y 6º) del Decreto de 1947 donde quedaban englobadas este tipo de bibliotecas, convirtiéndose así en un órgano de vigilancia y mediatización de las bibliotecas para que mantuvieran y propagaran el espíritu y la ideología que informaba el Nuevo Estado.

Finalmente desaparecerían mediante la disposición transitoria 2ª<sup>401</sup> del Decreto de 4 de julio de 1952 que reguló el funcionamiento del Servicio Nacional de Lectura.

Como valoración final de sus aportaciones a la administración bibliotecaria Hipólito Escolar las resume así<sup>402</sup>.

“Pueden parecer disposiciones hijas de la desconfianza del nuevo Régimen hacia toda labor intelectual, en concreto hacia las bibliotecas, pues, a través de los Patronatos, podían ser vigiladas estrechamente por las autoridades; pero no lo fueron. Contenían algunos aciertos y literatura biblioteconómica teórica alejada de la realidad administrativa y cotidiana. Era acertado el pretendido deseo de acabar con el aislamiento de los centros, que normalmente vivían de espaldas a la sociedad y a las autoridades locales. Fueron un instrumento útil cuando confluían la iniciativa del bibliotecario y la buena voluntad y comprensión del gobernador y del alcalde de la capital”.

A través de las memorias<sup>403</sup> que elaboraron los Patronatos en cumplimiento de lo que preceptuaba el Decreto que los regulaba, podemos conocer cómo se celebraba la Fiesta del Libro, así como la situación en que se encontraban las bibliotecas al asumir su competencia, lo que pudieron realizar y los proyectos y propuestas para ejercicios posteriores.

La celebración de la Fiesta del Libro solía consistir en un acto religioso con misa responso en recuerdo de los literatos caídos, al que asistían todas las autoridades locales. Se completaba con un acto académico en el Instituto de Enseñanza Secundaria o en la Universidad con la colaboración del SEU, si la había en la localidad, con disertaciones sobre Cervantes, El Quijote, la lengua castellana o el Siglo de Oro,...

En Salamanca, por ejemplo, se celebró en 1939 un concurso literario sobre el Glorioso Movimiento Nacional, mientras que en Zaragoza, como contrapunto, la Fiesta del Libro tuvo un cariz mucho más cultural y bibliotecario que político:

Con motivo de la Fiesta del Libro en esta Biblioteca se ha celebrado una reunión de lectores para conmemorarlo. La Bibliotecaria explicó el origen de la Imprenta, su dispersión por Europa y su introducción en España, exponiendo el estado actual de la investigación de este problema. Luego fue resaltado el valor social y educativo de la Biblioteca como hogar espiritual de todos los estudiantes. Se hizo una información de la manera que funcionan en Inglaterra, Norte-América y Alemania las organizaciones adjuntas y privadas de las bibliotecas populares. Dada la pobreza material y bibliográfica de esta biblioteca, el jefe propuso la colaboración de los lectores para aumentar sus fondos, decorar su agrio local y hacerla más agradable y bella. Se

---

<sup>401</sup> En aquellas provincias que tuvieran en funcionamiento su Centro Provincial Coordinador, las funciones que están actualmente atribuidas por la legislación vigente a los Patronatos Provinciales para el Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos serán asumidos por los Patronatos de aquellas organizaciones Provinciales.

<sup>402</sup> ESCOLAR, Hipólito (1987). *La cultura... Op. cit.*, p. 254

<sup>403</sup> Reunidas en el AGA-Educación 31/6064 (Gerona, Salamanca) 31/6065 (Segovia, Palencia, Huelva, Huesca, Baleares, Zamora, Pontevedra) y 31/6067 (Zaragoza) y correspondientes a la actividad de los años 1939 y 1940 en las provincias de, Castellón, Orense, Salamanca y Navarra.

constituyó la “Asociación de Amigos de la Biblioteca del Instituto Servet” con 53 socios. Después se visitó la Exposición de la Tipografía Zaragoza y delante de los ejemplares se explicó las diversas características formales, tipográficas y decorativas.

En el Día de la Fiesta del Libro también se hacían colectas organizadas por los Patronatos Provinciales en colaboración con la Delegación Provincial de Organizaciones Juveniles, el SEU y la Sección Femenina. Se colocaban en las plazas públicas mesas petitorias presididas por señoras representativas de la sociedad local, un miembro de algún centro docente o academia, personal de la Sección Femenina y algún estudiante o “balilla”. En esas mesas petitorias se recogían tanto libros como donativos en metálico. Estas colectas también se realizaban el día de la Fiesta del Marino que coincidía con la festividad del Carmen, En ésta última lo recaudado se dirigía a la formación y mejora de las bibliotecas-depósitos en los departamentos marítimos y bibliotecas circulantes, en los buques de guerra y unidades de la flota.

La distribución de lo recaudado, una vez descontados los gastos, se hacía en tres partes: una para el Patronato, y el resto solía repartirse entre las OO.JJ de FET y de las JONS, el SEU o la Sección Femenina. En Tarragona, por ejemplo en los actos del año 1940, aparte de recoger 97 libros y folletos se recaudaron 652 pts., de las cuales 441 se utilizaron para sufragar gastos (325 pts. para la función en la catedral, 31 para el material de la cuestación, 75 para emisora de Radio Tarragona y 10 para la imprenta), y de las 210 pts. restantes sólo 140 fueron a parar el Patronato y el resto para las OO.JJ.

Lo que recaudaban los Patronatos, más sus exiguos presupuestos, lo destinaban a Lecturas para el soldado, Lecturas para el marino, las cárceles, el ejército o la Falange y sus diferentes organizaciones. Por ejemplo, el Patronato de Zaragoza entre 1939 y 1940 formó una biblioteca en la Prisión de Torrero, se instaló otra en la Cárcel de mujeres, que nutrió con las aportaciones del depósito de la Universitaria, y una tercera en el Cuartel de Zapadores con las aportaciones de Fiesta del Libro que merced a los donativos del Patronato se instaló en lujoso salón.

El Patronato de Segovia, terminada la guerra envió 642 obras al Hospital Provincial de la Misericordia, al Hospicio y al Convento de las Madres Oblatas para que la biblioteca de hospitales continuase su misión de proporcionar cultura y distracción a los enfermos acogidos.

A la Prisión Preventiva de Huesca se le adjudicó la cuarta parte de la cuestación. En Baleares con las 220 pesetas recaudadas se compró un lote de 90 libros de amena e instructiva lectura que se entregó a la Comandancia Militar de Baleares con destino a las fuerzas armadas de tierra y aire.

Visto lo exiguo de las donaciones y quiénes eran los beneficiarios estaba claro cuáles eran los intereses prioritarios en materia de lectura para el régimen en la más inmediata posguerra.

La mayoría de estas memorias recogen información, sobre todo, de las bibliotecas provinciales, y de las de Institutos de Enseñanza Media, algunas públicas, y .en función de la localidad, de la biblioteca universitaria.

Hubo Patronatos que tuvieron verdadero interés por conocer la realidad de sus bibliotecas. Así, por ejemplo el Patronato de Segovia con el fin de proceder a la creación de bibliotecas y mejorar las existentes en los ayuntamientos de la provincia, en la Memoria correspondiente a 1939, pidió a los alcaldes que diesen al gobierno la siguiente información sobre bibliotecas (Circular núm. 3.100 del Gobierno de la Provincia, 5 agosto 1940):

1. Si en las localidades de su respectiva jurisdicción existe Biblioteca Pública Municipal o Popular de carácter público, aparte de las escolares de Misiones Pedagógicas. En caso afirmativo, condiciones del local, número de volúmenes y funcionamiento. Y en caso negativo disponibilidades y deseos del Ayuntamiento para contribuir a su creación.
2. Sociedades o entidades de la localidad que posean Biblioteca, indicando las condiciones de local y nº de volúmenes.
3. Si existe alguna biblioteca particular de importancia.

Y en la Memoria del año siguiente, se informa de que:

Unos 60 contestaron que las tenían escolares, parroquiales, de Misiones Pedagógicas, sociedades culturales o de recreo y algunas con regular nº de vols. Hay local especial para la Biblioteca en 9 pueblos y 4 tienen establecido el préstamo de libros. Es de lamentar que los trabajos empezados con tanto entusiasmo y con tan felices promesas hayan tenido que suspenderse por falta de recursos necesarios.

También Zamora se hizo eco de la necesidad de unificar las bibliotecas municipales y encarga a su Patronato recoger los datos de la provincia y formar con ellos un plan de unificación. Los datos obtenidos en la provincia fueron escasos, no existiendo como tales verdaderas bibliotecas más que la del Ayuntamiento de Corrales y la del extinguido Instituto de Enseñanza Media de Toro. La primera fue expurgada por una comisión formada por dos sacerdotes y dos maestros del pueblo, por lo que se ha autorizado provisionalmente su funcionamiento hasta que se le den normas definitivas sobre ello. La 2ª que estaba en poder del Colegio Calasancio pasa a la jurisdicción de la Junta de Intercambio por orden ministerial.

Salamanca también consiguió que gran parte de los Ayuntamientos de la Provincia enviasen informes al Patronato sobre archivos, bibliotecas y antigüedades de sus respectivos términos. Con esta fuente se organizó un servicio público de información y al exponer la labor acometida por el Patronato en los establecimientos encomendados al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, previamente se llama la atención de que al enjuiciarla se tenga presente la carencia de medios económicos. Esta era el escenario de las tres bibliotecas de la capital<sup>404</sup>:

La Biblioteca universitaria: han gestionado resolver los problemas de locales e instalaciones con el fin de corregir los graves defectos que hoy tienen. Han ingresado 8.768 vols., en su mayoría procedentes del donativo de Miguel de Unamuno, sumados a los que ya había se cuenta con 128.768. Se han catalogado 5.300. El servicio de lectura acusa más de 10.000 lectores sin contar los servicios de préstamo.

La Biblioteca popular. Se ha conseguido una habitación para instalar los ficheros. Se deben mejorar local e instalaciones para sacar el rendimiento debido y atender a los muchos lectores que no pueden aprovecharla por lo mismo. Han ingresado 854 vols. Con lo que hoy se cuenta con 5.530. Los pedidos de obras se elevan a 46.660 y el nº de lectores a 35.505. Se aprovecharon del carné para el servicio de préstamo 888.

La Biblioteca del Instituto. Otra que puede rendir más. El local actual es muy malo y esperamos que pronto ocupe el que merece. La labor desarrollada es notabilísima. Carece de espacio y no tiene sala de lectura. Se han adquirido varios muebles. Han ingresado 1.000 vols. Se han numerado 4.500. Se han registrado 2.000. Se han catalogado los 4.500 numerados; la catalogación ha sido rápida y por tanto no con la minuciosidad que exigen las instrucciones que se redactaron ha mucho tiempo y pensando en obras de distinto tipo. Se cuenta con los catálogos alfabético, topográfico y de materias. Préstamos se hicieron cerca de 2.500.

---

<sup>404</sup> Memoria Patronato Salamanca. AGA-Educación 31/6064

Detrás del deseo de conocer la realidad bibliotecaria, para después actuar subyacía la idea de poder crear en España por primera vez un Servicio de Coordinación de Bibliotecas, consistente *en un sistema de comunicación entre todas las bibliotecas empezando por las diminutas locales y llegando hasta la Nacional de Madrid y sus ramificaciones en el extranjero, mediante cuyo sistema, cualquier lector aunque se encuentre en el más apartado rincón pueblerino puede tener a su alcance la obra que le interese solicitándola en la Biblioteca más próxima, aunque se trate de un libro raro, agotado, extranjero o difícil de conseguir.*

Muchos de los edificios estaban ocupados por los militares o utilizados para otros servicios, con lo que se tuvieron que hacer gestiones para recuperar su uso anterior. Este fue el caso de la Pública Provincial de Huelva donde se habían instalado las fuerzas militares, la Pública Provincial de Castellón ocupada por el servicio sanitario o la Biblioteca Pública de Zaragoza que albergó la Jefatura del Aire.

Al estar hablando de los años de la más inmediata posguerra, la falta de recursos y personal prácticamente era común a todas ellas.

El Patronato de Huelva en la memoria de 1940 decía que su tarea través del año anterior se vio casi anulada por la total y absoluta carencia de medios económicos, no se pudieron comprar libros, ni abrir bibliotecas, ni adquirir material, ni disponer de los empleados necesarios, ni recorrer los pueblos de la provincia en hacer labor de inspección, pues sólo se podía contar nada más que con la buena voluntad y la capacidad de trabajo de los miembros de un Patronato sin asignación económica alguna. *Es imposible crear bibliotecas populares que formen inteligencias sanas y cultivadas.*

En la memoria de Zamora de 1941 se decía que debido al encarecimiento de los artículos, especialmente del papel, base del funcionamiento del establecimiento por la gran cantidad de papeletas y fichas que se utilizan, unido a la escasez de carbón para el mantenimiento de una temperatura soportable durante el crudo invierno y la falta de iluminación adecuada, se produjo una situación de verdaderos apuros. De la Diputación se obtuvieron 344 pts. para pagar al carbonero, pero evadió el compromiso de asignar una cantidad fija porque la Diputación tenía muchos gastos que atender.

Respecto al personal pasaba otro tanto. En Pontevedra se funcionaba a base de la voluntad y vocación de algunos alumnos auxiliares aumentando día a día los trabajos que realizaban en la Biblioteca y la falta de personal suficiente impidió seguir el ritmo deseable en la catalogación.

En Segovia los miembros que componían el Patronato realizaban su labor de manera gratuita deseosos de rendir la máxima utilidad en favor de la cultura patria y del tesoro nacional y en la Biblioteca de San Quirce la falta de personal subalterno y la de consignación para su mantenimiento hicieron imposible su funcionamiento.

A parte de tener cuidado en el cumplimiento de las prescripciones legales sobre el expurgo y selección de obras o la catalogación de los fondos procedentes de las incautaciones de colecciones particulares y libros retirados de Sociedades y entidades por orden de la Comisión depuradora de bibliotecas del distrito universitario correspondiente, los diferentes Patronatos intentaron normalizar los servicios de biblioteca adquiriendo lotes de libros a través de la Junta, reconstruyendo y redactando catálogos alfabéticos y sistemáticos, asignando signaturas topográficas, mejorando los locales y las instalaciones, instaurando el servicio de préstamo a



domicilio o estimulando el interés por la lectura y el uso de la Biblioteca pública como nos indica la bibliotecaria de Huelva, María Brey<sup>405</sup>:

Decaída por no decir muerta estaba la lectura pública en Huelva a mi llegada. La Biblioteca provincial cerrada desde que el Instituto se trasladó al nuevo edificio, era desconocida de la gente y aquellas personas que la habían visitado alguna vez, la recordaban como poco confortable, poco interesante y nada moderna. La Biblioteca del Instituto, en periodo de formación no había comenzado a prestar servicio. La del Ayuntamiento hace años que dejó de existir. Pero hay que decir que esta ausencia de bibliotecas oficiales no era exclusiva de Huelva. Desgraciadamente, la organización de tales centros en España ha estado hasta ahora poco atendida, a pesar de que la afición a la lectura es innata en los españoles.

(...) No obstante, en los últimos tiempos, el alejamiento en que las vicisitudes históricas han colocado a España respecto de la vida intelectual del mundo y la ruda lucha por la existencia, crearon un ambiente de indiferencia hacia el afán de leer. Las bibliotecas públicas olvidadas, desatendidas y en muchos casos inexistentes, no contribuían a mejorar tal desidia. El origen de la falta de interés por la lectura estaba en la falta de ambiente, pero si no hay ambiente, hagámoslo. El público no acudirá a una biblioteca si en ellas no hay algo que le interese, y aunque lo haya no sabe que lo hay. Si la Biblioteca está compuesta de libros anticuados y sin interés, si está convertida en depósito de estadísticas y memorias oficiales atrasadas, el ambiente público le será adverso. Si la biblioteca está bien seleccionada: si los libros antiguos o modernos son interesantes, pero sus organizadores no procuran el contacto con el público por medio de una oportuna propaganda, si se deja que la gente siga creyendo que la biblioteca es un lugar donde únicamente tienen cabida los eruditos, continuará desierta y poco visitada. El público debe saber que al lado del libro de investigación, historia, bellas artes están los que más de cerca sirven de orientación en las distintas profesiones y oficios (...) ampliando los conocimientos, indicando sus dificultades y exponiendo los modernos adelantos y nuevas aplicaciones.

Quién a continuación describe los cambios experimentados en apenas un año:

(...) las bibliotecas de Huelva, casi ignoradas e inactivas hace un año y en pleno florecimiento hoy. Durante el año 1940, la biblioteca del Instituto vio de tal modo aumentado el número de sus lectores que muchos días es menester cerrar sus puertas por no disponer de más espacio, y de 17 carnés expedidos en enero se llegó a 187 el 31 de diciembre. Siguió la biblioteca del Instituto adquiriendo libros empleando la cantidad asignada por su claustro y además mis gestiones ante la JIAL dieron como resultado la concesión de un lote de 200 volúmenes para cuya elección colaboraron los catedráticos. Suscripciones a revistas científicas, literarias y de actualidad gráfica y una sección de libros de pasatiempos puramente infantil completan la Biblioteca. Completan la biblioteca la redacción de índices para poder responder a: ¿qué obras hay de un autor?, ¿cuántas de una materia?, ¿dónde se ubica un libro? Puede decirse que la Biblioteca del Instituto está al día en todos sus servicios y responde a su finalidad por su contenido y por el contingente de sus lectores.

La Biblioteca provincial ha sido una cuestión más lenta y difícil. Hace un año expuse su anómala situación desde que en su edificio se instalaran fuerzas militares que motivó el cierre de la Biblioteca. Todo el año transcurrió sin que mis comunicaciones al Ministerio consiguieran mejorar la situación y en vista del fracaso de mis consultas y haciéndose insoportable la persistente clausura solicité a las autoridades militares autorización para abrirla al público siendo atendida la petición. En cambio, la JIAL concedió un crédito de 3.000 pesetas para adquirir libros. Como los libros existentes pecaban de anticuados, dediqué esa cantidad a la adquisición de un pequeño número de obras de todas las materias. Así, además de los fondos que ya tenía aprovechables, la Biblioteca cuenta ahora con una serie de libros modernos y prácticos que forman la base de sucesivos envíos por parte de la JIAL. Tan pronto como se

---

<sup>405</sup> Memoria Patronato de Huelva. AGA-Educación 31/6065

abrió la biblioteca a principios de año con anuncio en la prensa local, comenzaron a acudir lectores, escasos en los primeros días y lenta pero constantemente fueron aumentando (de 24 lectores en enero se pasó a 150 en marzo). Números no muy bajos para una localidad en que la lectura pública era como casi desconocida. El éxito de la biblioteca es rotundo y contribuirá a ello en lo que de mí dependa, organizando servicios, adquiriendo libros, mejorando el local y extendiendo el préstamo a domicilio (firma la Memoria María Brey Huelva 23 abril 1941)

También algunas bibliotecas intentaron cumplir las disposiciones de depósito legal para crear en el futuro un centro con bibliografía local de la que hasta ahora se carecía.

Era preceptivo que en las memorias, una vez reseñado lo que se había hecho y vistas las necesidades futuras, se plantearan propuestas u objetivos para el año siguiente.

Zaragoza crearía una Biblioteca Popular en el barrio “Las Delicias” para fomentar la lectura entre las clases más humildes, si se le prestaba un local.

En Castellón el programa mínimo que se propuso el Patronato fue la normalización del servicio de todas las bibliotecas del Estado: la Pública Provincial con los servicios anejos de préstamo interbibliotecario y Depósito Legal de autores e impresores, y la del Instituto que se abriría en condiciones muy superiores a las antiguas, ya que contarían con mejores locales. Además se proponía el Patronato llevar a cabo la apertura de bibliotecas en todas las poblaciones importantes de la Provincia.

En Pontevedra para aunar esfuerzos se pretendió reunir el archivo histórico y la biblioteca en el mismo local, así se dotaría a los investigadores de una biblioteca que poco a poco se especializaría en los estudios de la cultura de la provincia. El Ayuntamiento se comprometió a asignar 6.000 pts. para acometer las primeras obras de adaptación de locales. Se comprarían estanterías y se quería dar a la Biblioteca un nuevo impulso de acercamiento al pueblo, mejorando sus locales, colocando sus elementos de trabajo en pleno rendimiento, organizando conferencias, poniendo al alcance de todos el libro que cada uno necesitara. En este caso, además, el Patronato contaba con el entusiasta apoyo del Gobernador civil de la provincia.

Para el Patronato de Orense era indispensable y apremiante comprar vitrinas y anaqueles para su Biblioteca provincial para dar holgura a sus 14.000 vols. que se hallaban comprimidos, además, los 200 lectores cotidianos que acudían a esta misma Biblioteca necesitaban mayor comodidad así como los que se veían obligados a hacer cola. Por ello sugería que la Diputación se decidiese a erigir un nuevo edificio no muy costoso de planta baja para albergar la Biblioteca, la Pinacoteca y el Museo arqueológico.

La memoria del Patronato de Navarra<sup>406</sup>, en su apartado relativo a las bibliotecas destacaba especialmente la deficiente situación en la que se encontraba la provincia, donde se consideraba que en Navarra no había biblioteca pública, ya que no merecía tal nombre el raquítico local que servía de lectura en el Instituto, donde no había más que unos centenares de libros, ni tampoco la Biblioteca de la Diputación que era pequeñísima y de insignificante valor. En cambio el Patronato se implicó en la organización de la iniciativa “Lecturas para el soldado”. Al final sería la Diputación Foral la que asumió la creación de una Biblioteca Pública digna de la capital.

---

<sup>406</sup> NÚÑEZ CEPEDA, M. Memoria anual del patronato de Archivos de Navarra, 1940

## 5.4. LOS CENTROS COORDINADORES DE BIBLIOTECAS

El primer Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas surgió por iniciativa propia del patronato de Oviedo, sentando las bases de una nueva organización estatal. Será Rafael Quirós Isla, vicepresidente de la Diputación de Oviedo, quién propuso crear un Centro Coordinador para las bibliotecas existentes en la provincia, muchas de las cuales procedían de ateneos obreros y de centros y sociedades *rojas*, que estaría dirigido por un Facultativo al que se gratificaría y facilitaría local y medios para su trabajo. El vocal y el secretario del Patronato Provincial redactaron el informe técnico, que fue aprobado por la Diputación y dotado con 30.000 pesetas para su creación, y se nombró director a Ignacio Aguilera Santiago<sup>407</sup>.

No fue por casualidad que esta iniciativa surgiera en Asturias, ya que esta región desde fines del XIX había venido destacándose por su interés en el desarrollo de la lectura pública con la creación de los Casinos Obreros o Ateneos Culturales, sobresaliendo en todos ellos unas bibliotecas muy vivas, mantenidas por los socios a través del pago de cuotas periódicas. La memoria de estos servicios no se olvida, y en 1940 surge la necesidad de reorganizar las antiguas bibliotecas y el deseo de crear otras nuevas en aquellas poblaciones que, por su interés y entusiasmo por la lectura, eran acreedoras de ellas. Aunque la guerra había arrasado la mayoría de las bibliotecas, el espíritu y la memoria de éstas quedaron presentes<sup>408</sup>.

En estas condiciones se crea, por iniciativa de la Diputación Provincial de Oviedo, el primer Centro Coordinador de Bibliotecas a instancia de las continuas peticiones y solicitudes de la población. En un régimen fuertemente centralizado, la aparición de cualquier órgano se ligaba a la estructura de la Administración Central del Estado, y así, este Centro fue patrocinado por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, de la que pasó a depender técnicamente, y subvencionado por la Junta de Intercambio, aunando los esfuerzos de la Diputación, el Estado y los Ayuntamientos.

Este modelo prevaleció y mereció el apoyo económico de la Junta de Intercambio y consiguió su reconocimiento oficial mediante Orden de 18 de noviembre de 1940. Se convocarían cinco concursos<sup>409</sup>, hasta 1950, con dotaciones de 100.000 pesetas en libros y revistas totalizando 20 centros en 5 años:

- Santander, Guadalajara, Huelva y Burgos y Ávila (Orden 17 de septiembre y Orden de 7 diciembre de 1946)
- Soria, Logroño, Zaragoza, Málaga y León (Orden de 18 abril de 1947, Orden de 5 de febrero de 1948)
- Almería, Lugo, Palencia (Orden de 25 de mayo de 1949)
- Badajoz y Valladolid (Ordenes de 9 marzo de 1951)
- Granada, Huesca, Madrid, Tarragona y Toledo (Orden de 23 de abril de 1950 y Orden de 20 de abril de 1951)

La Dirección General de Archivos y Bibliotecas convocó el primer concurso a través de la Orden de 5 de marzo de 1946 “entre todas las Diputaciones Provinciales españolas que no tuvieran establecidas Bibliotecas en los Municipios de su respectivo territorio con cargo a su propio presupuesto o al de la Junta de Intercambio para aspirar a 4 dotaciones de 100.000 pesetas cada una para el establecimiento de otras tantas Organizaciones provinciales destinadas a

---

<sup>407</sup> PRIETO ÁLVAREZ-VALDÉS, Carmen. “Aproximación a la historia del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias”, en: *I Congreso de Bibliografía Asturiana*. 1989, págs. 703-705.

<sup>408</sup> SANIGER MARTÍNEZ, M<sup>a</sup> Nieves, *Los Centros Provinciales... Op. cit.*, pp. 61-62

<sup>409</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura... Op. cit.*, pp. 266-267

crear y sostener bibliotecas en los Ayuntamientos de su demarcación”. Los proyectos habían de contemplar como requisitos: quedar bajo la protección de la Junta de Intercambio, ser dirigidos por el Director de la Biblioteca Pública Provincial correspondiente y que tuvieran preferencia en la dotación de bibliotecas públicas los Municipios cabeza de partido, además se debían comprometer a elaborar unas normas de funcionamiento incluido el tema del personal (el Reglamento), que debería ser aprobado por la Junta de Intercambio. Estos requisitos se repetirán en los siguientes concursos hasta que se apruebe el Reglamento del Servicio Nacional de Lectura.

Ante el éxito de control que estaban suponiendo los Centros Provinciales<sup>410</sup>, el Gobierno se plantea dar forma legal a esa nueva organización estatal. Así, por Decreto de 24 de junio de 1947 se planifica con carácter general la organización bibliotecaria, se crea un nuevo aparato legislativo y se dan las normas de ordenación para Bibliotecas. En este nuevo marco legal nace el Servicio Nacional de Lectura y a él, y en tanto las Diputaciones respondían a la llamada de coordinación bibliotecaria, se encomendaba la misión de los Centros Coordinadores a las Bibliotecas Públicas del Estado de cada capital de provincia, reconociéndose las ventajas de una descentralización como base de una mejor atención y control de las bibliotecas.

Los Centros Coordinadores, creados por el Ministerio de Educación Nacional a petición de la Diputación, correspondiente, recibían asesoramiento técnico del Estado, y su financiación era compartida entre la Corporación provincial y el Ministerio, que aportaba un mínimo de dos tercios de lo recogido por la primera.

Posteriormente en el Decreto de 4 de julio de 1952, que estructura el Servicio Nacional de Lectura, los Centros Coordinadores son uno de los tres pilares del sistema y son definidos como “los órganos encargados del gobierno del Servicio Nacional de Lectura en su demarcación”. Su cabecera se encuentra en la capital de la provincia, desde donde pretenderá llegar a todos los rincones de su jurisdicción conjugando las Bibliotecas Municipales con otros sistemas como las bibliotecas viajeras y, posteriormente, con los bibliobuses.

Al primer concurso se presentaron nueve diputaciones: Salamanca, Santander, Foral de Navarra, Huelva, Guadalajara, Guipúzcoa, Málaga, Ávila y Burgos, cuyos proyectos fueron evaluados por un jurado compuesto por el inspector general de bibliotecas, Enrique Sánchez Reyes, el vicedirector de la Biblioteca Nacional, Nicolás Fernández-Victorio, y el secretario de la Junta de Intercambio, Francisco Tolsada.

Del análisis de los nueve proyectos presentados al primer concurso, este jurado redactó un informe<sup>411</sup> del que se extraen las siguientes conclusiones: respecto a los proyectos desestimados, se dan algunas razones para su no adjudicación. A Salamanca se le niega porque la Diputación propone la creación de siete bibliotecas municipales, pero no cifra la aportación económica, ni de la Diputación ni de los Ayuntamientos interesados, y presenta la creación de un Comité Organizador sin tener en cuenta la existencia del Patronato, y no contempla el obligado requisito de crear un Centro Coordinador. A la Diputación foral de Navarra se le achaca presentar un proyecto más ajustado a sus propias necesidades económicas y administrativas que a las disposiciones de la Orden del concurso, haciendo depender la organización bibliotecaria de la Institución Príncipe de Viana, sin especificar si estaría a cargo de un funcionario del Cuerpo Facultativo; propone la creación de cuatro bibliotecas municipales y una popular en Pamplona, y de un Cuerpo de Bibliotecarias, pero tampoco se consignan las cantidades que aportaría la Diputación.

---

<sup>410</sup> SANIGER MARTÍNEZ, M<sup>a</sup> Nieves, *Los Centros Provinciales... Op. cit.*, pp. 62

<sup>411</sup> AGA 75/2073.

El proyecto de la Diputación de Málaga proponía la creación de tres bibliotecas de acuerdo a los requisitos de la Orden, pero tampoco estimaba cuantitativamente la aportación económica y, por lo tanto, no fue aceptado. Por su parte, la Diputación de Guipúzcoa elaboró un plan que comienza con un largo preámbulo muy técnico en el que se esbozan unas líneas muy generales de una política bibliotecaria muy adaptada a sus necesidades provinciales; proyecta crear cinco bibliotecas y no especifica la aportación provincial ni municipal ni alude a la creación de un Centro Coordinador. De este proyecto, al igual que el de Salamanca existe copia en el AGA<sup>412</sup>, y de él se puede destacar su apuesta por la iniciativa privada y por crear bibliotecas-base al amparo de las Escuelas de Trabajo de San Sebastián, Éibar, Vergara, Irún y Tolosa, optando por la gestión de las mismas con personal preparado y dedicado exclusivamente. Como anécdota, recojo el comentario que envió el Inspector de Bibliotecas Enrique Sánchez Reyes al Secretario de la Junta Francisco Tolsada cuando le envía el Informe firmado:

Querido Paco: Te devuelvo el informe sobre los premios a las Diputaciones que creen Centros Coordinadores de Bibliotecas. Me parece muy bien y nada tengo que añadir. Solamente, si lo creéis oportuno se puede dulcificar algún pinchazo que se le da, creo a Navarra o a Guipúzcoa, al hacer el extracto de su propuesta. Buena gana de molestarles cuando lo que debemos hacer es procurar quedar amigos atraerlos poco a poco a buen camino hasta que presenten en otro concurso algo aceptable que se les pueda premia (Santander, 2 de julio de 1946).

En cambio, sí fueron aprobados y dotados con las 100.000 pesetas los proyectos de Santander, Huelva, Guadalajara y Burgos, y con 50.000 el de Ávila. Todos cumplían con los requisitos de la citada orden<sup>413</sup>: la creación del Centro Coordinador bajo dependencia de la JIAL, proponían la instauración de nuevas bibliotecas y la incorporación de las existentes, y cifraban y especificaban cuantitativamente las aportaciones económicas. Me ha parecido llamativo el hecho de que cuando se habla de establecer nuevas bibliotecas en varios de los proyectos se citaban bibliotecas que ya estaban creadas, como por ejemplo, Béjar (Salamanca); Alsasua (Navarra); Nerja, Totalán y Villanueva del Trabuco (Málaga); Barco de Ávila, Hoyos del Espino, Mingorría, San Esteban del Valle, Umbrías, Navalperal de Pinares (Ávila). Salvo esta última provincia, como ya se ha mencionado, todas las demás bibliotecas peretenecían proyectos no que no fueron aceptados.

Como datos diferenciadores, citaría la creación de una biblioteca especializada en materias industriales, tecnológicas y mineras en Río Tinto (Huelva) o la división que hace la Diputación de Burgos entre bibliotecas fijas y circulantes, urbanas, industriales o rurales.

Respecto a los presupuestos que se asignan a la creación de los respectivos Centros Coordinadores he elaborado esta pequeña tabla donde se muestra la disparidad y heterogeneidad e imprecisión a la hora de asignar los recursos económicos:

---

<sup>412</sup> AGA 75/2073.

<sup>413</sup> Propuesta: a) Sobresalen entre todos los proyectos presentados por la rigurosa adaptación a las condiciones del concurso, por la precisión en especificar concretamente las aportaciones económicas respectivas, por la previa aceptación de las normas de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y la consiguiente subordinación a sus normas e inspección, los proyectos de las Diputaciones provinciales de Santander, Guadalajara, Huelva y Burgos (...) b) Considerando este jurado que el expediente presentado por la Diputación de Ávila se adapta con precisión a las condiciones del concurso; teniendo en cuenta que la J.I.A.L. y su Depósito de Libros están en condiciones de soportar el exceso que supone una quinta dotación (...) se concede a la Diputación de Ávila una dotación de 50.000 pesetas en libros para llevar a cabo en este mismo ejercicio la instalación de una red provincial más (...) c) ...la atribución de las dotaciones referidas no significa para aquél repulsa a los proyectos que no la obtenido(...) la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y la JIAL no pueden ceder totalmente a iniciativas y direcciones sin conexión con la alta inspección ministerial (AGA 75/2073).

Diputación	Presupuestos
Santander	75.000 pts. de la Diputación
Huelva	25.000 pts. de la Diputación + ayudas de los Ayuntamientos en locales y mobiliario
Guadalajara	50.000 pts. de la Diputación + ayudas de los Ayuntamientos en locales y mobiliario
Ávila	15.000 pts. de la Diputación + 3.000 pts. de los ayuntamientos
Burgos	No cita datos

Gráfico 12

En 1948, la Orden de 13 abril anuncia el segundo concurso entre Diputaciones provinciales que se resuelve el 25 de junio (León, Logroño, Málaga, Soria y Zaragoza). En ese mismo año, otra Orden de 25 de octubre crea la Biblioteca Pública de la Ciudad de Zaragoza, cuyas secciones populares formarían parte también del Servicio Nacional de Lectura y que, por las fórmulas jurídicas y económicas de su régimen, ejercieron una influencia decisiva en la reglamentación del mismo.

En el tercer concurso se ofertaban dos dotaciones de 100.000 pesetas, resuelto el 25 de mayo de 1949<sup>414</sup>, tres sólo fueron los candidatos y al final tres los premiados: Almería, Lugo y Palencia. El proyecto de ésta última el jurado lo consideró digno de atención si rectificaba dos extremos: aumentar la dotación de 25.000 a 50.000 pesetas y realizar una declaración explícita de la Diputación de someterse en todo a las normas dictadas por la Orden Ministerial de 13 de abril de 1948, especialmente, que la dirección del Centro y de la Red estuviesen a cargo de un funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, pues la Diputación “consideraba de vital importancia la designación de un funcionario provincial para llevar un perfecto control de los libros, aspecto este que está en pugna con el espíritu de esta clase de Ordenamientos Bibliotecario”.

El proyecto de la Diputación de Almería estipulaba la creación del Centro Coordinador en la Biblioteca “Francisco Villaespesa” de la capital, en el que se integrarían las bibliotecas ya existentes y las nuevas que se fuesen creando entre 1949 y 1950. Ofrecía, en nombre de los

<sup>414</sup> Este Ministerio ha tenido a bien disponer los siguiente: Primero .- Se crean los Centros Coordinadores de Bibliotecas Públicas de Almería, Lugo y Palencia; Segundo.- Los citados Centros se instalarán en las Bibliotecas Públicas del Estado en cada una de las mencionadas provincias o en los locales que las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, faciliten; Tercero.- La Dirección Técnica de estos Centros se encomienda al director de la Biblioteca Pública de cada una de las capitales citadas, que en la actualidad y respectivamente son D. Hipólito Escolar Sobrino, D. Antonio Gil Merino y D. Ramón Revilla Vuelta ; 4.- Todas las Bibliotecas Públicas Municipales creadas por este Ministerio y que en la actualidad existen en cualquiera de las provincias mencionadas, pasan a depender del Centro Coordinador de Bibliotecas de su provincia respectiva (...); Quinto.- Para el funcionamiento de estos Centros Coordinadores, sus Directores, de acuerdo con el Presidente de su propia Diputación, presentarán antes del 15 de octubre próximo un proyecto de reglamento para ser aprobado por esta Dirección General (AGA 75/2073).

ayuntamientos, locales, personas idóneas y 50.000 pesetas como recurso económico para el primer año, que no podrían bajar de 25.000 pesetas en los años siguientes para gratificaciones del personal, material inventariable, gastos de instalación y adquisiciones de material bibliográfico. Se estudiaba la posibilidad de aumentar los ingresos mediante la creación de una asociación de Amigos de la Biblioteca en cada pueblo.

Lugo acata la citada Orden de marzo de 1946, pero aportando peculiaridades tales como la intervención de una Gestora provincial en la función administrativa, facultando al Patronato para orientar la marcha de la Red, o una clasificación de las bibliotecas en: marítimas, industriales-agrícolas y rurales. La creación y dotación de nuevas bibliotecas se haría en tres fases y las aportaciones económicas serían iguales a la de Almería: primero 50.000 pesetas y luego, nunca menos de 25.000, más las aportaciones de los ayuntamientos que no especifica. De las dotaciones provinciales se reserva una parte para crear una sección bibliográfica local.

El cuarto concurso se convocó el 23 de abril de 1949, ofreciendo otras dos dotaciones de 100.000 pesetas que se adjudicaron, por el mismo jurado, a las dos únicas Diputaciones Provinciales que se presentaron: Badajoz y Valladolid, en la Orden de 21 de diciembre de 1949, creándose más tarde por Orden de 9 de marzo de 1951.

Un quinto y último concurso, también de dos dotaciones, se convocó por Orden de 23 de abril de 1950, al mismo se presentaron Granada, Huesca, Madrid, Tarragona y Toledo. El jurado adjudicó los premios ordinarios a Granada y Tarragona, y se dieron tres premios extraordinarios a las otras tres: Huesca recibió 50.000 pesetas y Toledo 100.000. El Centro Coordinador de Madrid se creó por Orden de 20 de abril de 1951.

Visto el desarrollo cronológico de estos Centros, conviene pararse a reflexionar sobre las ideas que sustentaron esta iniciativa de organización bibliotecaria. Ximénez Embún, director del Centro Coordinador de Zaragoza, y J.A. Pérez-Rioja, director del de Soria, coincidieron en afirmar que todos los ciudadanos de un país no podían recibir servicios de lectura adecuados a nivel regional, provincial o comarcal a través de pequeñas y aisladas bibliotecas. El primero apelaba al éxito de experiencias cooperativas de los bibliotecarios españoles aun en formas primitivas y limitadas (préstamo interbibliotecario, la catalogación y clasificación centralizada de la Junta de Intercambio o el Centro Coordinador de Oviedo); mientras que Pérez-Rioja invocaba la tendencia imperante a nivel internacional de considerar las diversas bibliotecas de un país como una inmensa organización de conjunto, con una vasta red regional y provincial de bibliotecas públicas y de servicios circulantes, y por ello era necesario la centralización en la dirección de los planes generales bibliotecarios y la descentralización en aspectos como la dirección inmediata de los establecimientos y servicios de cada provincia, y en el orden económico a través de un régimen de colaboración entre el Ministerio, las Diputaciones y los Municipios.

Este mismo bibliotecario consideraba que los fines de los Centros Coordinadores debían ser<sup>415</sup>:

- Extender por todas las provincias una red de bibliotecas y servicios de circulación de libros, bajo la dirección directa de una biblioteca y oficina central (el Centro Coordinador)
- Conseguir la mayor difusión del libro por medio de un sistema de circulación y de información bibliográficas que impida la estabilización innecesaria de los volúmenes. No crear muchas bibliotecas, sino las necesarias dentro de una estrategia prudente.

---

<sup>415</sup> PÉREZ-RIOJA, José Antonio, *Moción informativa sobre Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas*, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, pp. 16-18

- Convertir en lectores a los que antes no lo eran.
- Conseguir que cada libro sea leído –gracias a una adecuada organización- por un número mayor de lectores. Objetivo económico.
- Difundir por cada provincia un ambiente propicio a la lectura, y la de confirmar con sus realizaciones la importantísima misión social y educadora que desarrolla la biblioteca.

Se puede concluir, que la actuación de los Centros se repartió en dos frentes dentro del plano provincial: por un lado, se encargarían del correcto funcionamiento y la perfecta organización técnica de las Bibliotecas existentes, mediante el desarrollo de inspecciones reglamentarias y la disponibilidad de cursillos para la formación de los Encargados de las Bibliotecas Municipales; de otra parte, elaborarían la planificación bibliotecaria de la provincia, con el fin de determinar las poblaciones en las que se debían aplicar los otros servicios bibliotecarios complementarios: las bibliotecas viajeras y ambulantes. Al mismo tiempo que se ocuparían de la extensión cultural de esas bibliotecas en sus múltiples facetas como conferencias, exposiciones, proyecciones,...así como la promoción, ante las autoridades y el público, del uso y utilidad de las bibliotecas y de su integración en un sistema bibliotecario eficiente.

En resumidas cuentas, el papel del Centro Coordinador debía ser el intermediario entre la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura –a partir de 1952- y las bibliotecas dependientes, de manera que asegurase e hiciese cumplir las normas legales y profesionales impuestas por el Estado en el ámbito provincial, al tiempo que analizaba la información que sobre estas Bibliotecas dependientes solicitaba el Ministerio. En cuanto a las Bibliotecas, se ofrecía como el canal idóneo para su comunicación con el SNL, tanto en la remisión de estadísticas y otros datos como para la solicitud de lotes de monografías y títulos de publicaciones periódicas<sup>416</sup>.

Veamos algunos ejemplos de la trayectoria seguida por estos Centros Coordinadores en estos primeros años de implantación.

#### **5.4.1. Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias**

Al finalizar la guerra, las autoridades provinciales asturianas constataron la pérdida y desorganización de la mayor parte de las bibliotecas públicas y populares asturianas, y en su deseo de normalizar la vida cotidiana, fijaron sus prioridades culturales en la reconstrucción de las infraestructuras básicas, con especial atención a las bibliotecas y museos de la Provincia. A tal fin se constituyó, con premura, un Patronato para el Fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos, dedicado en exclusiva a la recuperación de los bienes culturales dañados durante la Guerra.

Fue un bibliotecario del Estado, Ignacio Aguilera, quien desarrolló la idea de crear un organismo central de ámbito provincial dedicado a la reorganización de la estructura bibliotecaria destruida por el conflicto y la recuperación de los fondos bibliográficos que aún se conservasen de las bibliotecas destruidas en Asturias entre julio de 1936 y octubre de 1937.

La Diputación Provincial hace suya la idea y, en 1939, a propuesta del Diputado regional Rafael Quirós Isla -que más tarde daría nombre al organismo-, se acuerda la creación del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias, con la misión de promover, crear y asesorar técnicamente a las bibliotecas, además de controlarlas y depurarlas, “inoculando en ellas las nuevas doctrinas y extender esta actuación de tal modo que no quede ningún rincón sin

---

<sup>416</sup> SOTO ARRANZ, Roberto. (1995). *Historia del centro provincial coordinador de bibliotecas de León (1948 - 1986)*. León: Instituto Leonés de Cultura, pp. 48-49.



biblioteca propia o al menos biblioteca viajera, recabando para ello la cooperación de los Alcaldes, Párrocos, Maestros, etc.”<sup>417</sup>.

Durante el primer quinquenio de funcionamiento (1939-1944)<sup>418</sup>, bajo la dirección de Ignacio Aguilera, el Centro Coordinador extendió su radio de acción a las ciudades y principales villas de la región, ya que el objetivo fue extender su radio de acción a las ciudades y principales villas de la región, ya que se trataba de tener bibliotecas en todas las cabezas de partido judicial, principio también seguido por la Junta a la hora de crear bibliotecas, dirigiendo escalonadamente sus recursos económicos: primero reorganizar las existentes en las ciudades, después reestructurar las que permanecían en funcionamiento en las villas y, finalmente reabrir las cerradas en las cuencas mineras. El objetivo del plan era llegar a todas las comarcas de Asturias, impulsar la lectura en grupos sociales nuevos (presos, niños, huérfanos), colaborar con los centros de enseñanza y lograr que los ayuntamientos se hicieran cargo de los gastos de mantenimiento mientras que el Centro Coordinador corría con los de mobiliario. Para dotar a las nuevas bibliotecas se recurrió a los lotes fundacionales de la Junta, unos 12.000 volúmenes, actualizados posteriormente con uno o varios lotes procedentes del Centro Coordinador.

Ignacio Aguilera ofreció, tanto en nombre de la Diputación como del Ministerio, a todos los Ayuntamientos que tuviesen un local conveniente, una persona encargada y servicio bibliográfico, unas bibliotecas de 150 a 500 volúmenes en su primer envío. En este primer año se dio preferencia a las localidades que ya contaban con biblioteca, como la de Castropol que se acrecentó con 1.000 volúmenes, la de Tineo que se abrió de nuevo y se le envió un pequeño lote inicial, o la de Salas a la que se remitieron 500 volúmenes. En Oviedo se proyectó la creación de dos bibliotecas especiales: una, en el Hospital Provincial con destino a la lectura de enfermos, y otra en la Residencia Provincial de Niños. El año finalizó con la Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1940, que dio carácter oficial al Centro y se volvió a insistir en su “especial misión de transformar inspirándose en las normas que rigen el Estado español, las bibliotecas ya existentes y fundar otras nuevas que propaguen por todos los pueblos la cultura política, religiosa, literaria y científica de la España de Franco”<sup>419</sup>.

De la Dirección General de Archivos y Bibliotecas se recibieron 15.000 volúmenes de obras pertenecientes a todas las materias, catalogadas y encuadernadas. Esto creó un grave problema de espacio al Centro, que se había trasladado de la Biblioteca Universitaria a los locales destinados al Archivo Municipal. Prosigió la reorganización de las bibliotecas de Castropol, de Salas y de Cangas de Onís y se iniciaron contactos con el Pósito de Pescadores de Lastres y con el alcalde de Mieres para la instalación de sus respectivas bibliotecas. A la Biblioteca del Real Instituto de Jovellanos de Gijón se le enviaron 800 volúmenes y se inauguró la “Biblioteca Isidoro Gil de Jaz” de la Residencia Provincial de Niños.

En la memoria de este año se alude a que otras regiones españolas se habían interesado por el funcionamiento de este organismo bibliotecario para instalar en sus demarcaciones uno similar.

En 1942 se inauguró la “Biblioteca Félix Aramburu” de la Prisión Provincial con una dotación de 2.000 volúmenes y se incorporaron al Centro la Biblioteca de Gijón (donde se estudió implantar la tarjeta de lector y se dispuso de una sección regional) y la Pública de Avilés,

---

<sup>417</sup> PRIETO ÁLVAREZ-VALDÉS, Carmen, *Aproximación a la historia del Centro...* Op. cit. p. 704.

<sup>418</sup> MATO DÍAZ, A. “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada”, En: Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, pp. 85-103

<sup>419</sup> PRIETO ÁLVAREZ-VALDÉS, Carmen. *Aproximación a la historia del Centro...* Op. cit., pp. 702-710.

instalada momentáneamente en el Instituto. En 1943, se llegó a un acuerdo con la Delegación de Educación y Descanso para la organización de varias bibliotecas en las localidades de Oviedo, Luanco, Laviana y La Felguera.

Esta primera etapa (1939-1944) se saldó con nueve bibliotecas abiertas, cuatro en la capital y cinco en la provincia, se habían iniciado los trabajos para la instalación de tres más (Castropol, Luanco y Tapia) y las ayudas no solo se renovaron sino que aumentaron (la Diputación otorgó una subvención de 50.000 pesetas y el Ministerio de Educación Nacional de 25.000).

En 1944 se hace cargo del Centro Coordinador Lorenzo Rodríguez-Castellano que logró consolidar los apoyos económicos y estableció un primer Plan Bibliotecario cuyos objetivos fueron establecer como prioridad llegar a todos los públicos y a la mayor parte de los núcleos de población para poner a su disposición libros modernos de conocimientos prácticos y de literatura, con la acción combinada de la Junta, la Diputación Provincial y los ayuntamientos. También se estableció una clasificación de las bibliotecas con el fin de aportar a cada sitio los libros más convenientes para los potenciales usuarios y priorizar el servicio de préstamo y la Sección Infantil.

En el verano de 1945 la Junta realiza una inspección al Centro Coordinador y sus Bibliotecas<sup>420</sup>. Aprovechando que el funcionario inspector veraneaba en Suances se desplaza desde Torrelavega a Oviedo, y allí visitó la Biblioteca del Hospicio-Residencia, destinada al personal; la Biblioteca de la Prisión Provincial; el mismo Centro Coordinador ubicado en el Palacio de la Diputación de Oviedo, y fuera de la capital se recorrió las bibliotecas de las poblaciones de Salas, Tapia de Casariego, Castropol, Luanco, Mieres y Turón y de vuelta a Oviedo se inspeccionó la Biblioteca del Instituto de Enseñanza Media masculino.

Del Centro Coordinador destaca que en la Secretaría estaban los ficheros generales de todas las Bibliotecas de la Provincia, de tal manera que en cualquier momento se podía saber qué libros tenía cada una de aquellas y cuáles eran los que deseaba adquirir. En la Biblioteca de Salas (población de unos 1.000 habitantes), pese a sus modestas instalaciones le sorprende que el número de habitantes fuese menor que el número de lecturas mensuales, que alcanzaban a veces 1.200 y 1.400. Además la Biblioteca funcionaba mediante la aportación de cuotas de los socios. En Tapia de Casariego la Biblioteca estaba instalada en dependencias del Ayuntamiento, tenía ficheros, mobiliario excelente, servicio de luz individual en las mesas, y el índice de lecturas también era superior al número de los habitantes, quienes se interesaban por obras relativas al mar, la pesca, construcción de barcos y obras de agricultura. En Castropol asiste a los preparativos para su futura inauguración y reseña el inspector que se van a aprovechar los fondos de la antigua Biblioteca. En Mieres también se incorporaron los volúmenes del ateneo y constata que a los lectores les interesaba sobre todo la Literatura y la Historia. En Turón, a la espera de la orden de apertura, su bibliotecario le solicita literatura moderna, biografías, la Colección Universal (Espasa-calpe), clásicos castellanos y obras de nuestros clásicos en ediciones sueltas para disponer de ejemplares múltiples, y le muestra interés por poseer las obras completas de Concha Espina.

En el prólogo a la Memoria de 1945<sup>421</sup>, primera publicada por la Junta de Intercambio, se hablaba de la descentralización del libro y cómo se llevaba a cabo esta labor con el concurso

---

<sup>420</sup> "Visita de inspección a las Bibliotecas Populares de Asturias" (4-10-1945). AGA-Cultura 75/20152

<sup>421</sup> *Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias*, año 1945, p. 17

del Centro, el Ministerio de Educación a través de la Junta de Intercambio y de los ayuntamientos. Aludía a las clases de biblioteca que integraban el plan bibliotecario de la Diputación, en función del tipo de usuarios: bibliotecas de zonas industriales, rurales, marineras y especiales. Más interesante es la mención que se hacía a las dificultades del Centro: apatía y falta de interés de algunas corporaciones y la carencia de encargados formados en conocimientos básicos de Biblioteconomía. Por ello la Diputación propuso al amparo del naciente Instituto de Estudios Asturianos, crear una Escuela de Bibliotecarios.

La orientación del Centro en ese año fue la de dirigir sus esfuerzos hacia la cuenca minera, poniendo en marcha las bibliotecas de Turón y Mieres, y la de Castropol. Y se prepararon las de La Felguera, Sama y Pola de Lena. Se consideró prioritario el establecimiento de una gran Biblioteca Pública Provincial en Oviedo.

La Memoria de 1946 recoge un análisis del tipo de lecturas preferidas por los usuarios y, a raíz de sus conclusiones, se demandaron fondos modernos y para las secciones infantiles; la Junta envió cuatro lotes de más de 1.500 volúmenes. Se hicieron obras en el antiguo edificio de Correos para instalar allí el Centro Coordinador. Siguieron las quejas por la apatía de algunos Ayuntamientos y se inauguraron las bibliotecas de La Felguera, Pola de Lena e Infiesto. El número de lecturas en las 14 bibliotecas existentes aumentó considerablemente. Se previó para el año próximo enviar más libros de actualidad, establecer premios en lotes de libros para los lectores que más han frecuentado la biblioteca, así como la organización de conferencias.

En el año 1947 ya había veinte bibliotecas en funcionamiento y el Centro sirvió de modelo por su organización a los que empezaban a crearse en otras provincias. Con la apertura de las bibliotecas de Moreda y Sama se cerró el programa de creación de bibliotecas en la cuenca minera y ahora se dirigían los esfuerzos hacia las zonas rurales. Más significativo fue el traslado del Centro a los nuevos locales y la inauguración de la Pública “Fr. Jerónimo Feijoo” de Oviedo, cimentada sobre los restos de la que se había establecido en el Instituto femenino

Durante 1948 se prestó más atención a las bibliotecas existentes, antes que crear otras nuevas, mediante el envío periódico de libros, visitas de inspección, servicio de desideratas, préstamo de obras, etc. Para lograr esto, la JIAL elevó la consignación del Centro a 50.000 pesetas y la Diputación a 125.000. La intención era organizar una nueva biblioteca cada año, en lugar de tres. En este año funcionan 21 bibliotecas y las estadísticas acusaron un gran movimiento de lectores de todas las clases sociales. Se crearon las Juntas de Bibliotecas como organismo asesor, cuyos miembros eran nombrados por el Centro Coordinador y elegidos entre personas destacadas por su amor al libro y a la lectura y se redactó un Reglamento para el funcionamiento de las mismas. Se estableció un modelo de contrato en el que se estipulaban las obligaciones del Ayuntamiento y del Centro Coordinador con respecto al funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal. En la memoria de este año, como autocrítica, apareció el tema del personal: éste debía ser un verdadero bibliotecario con categoría de funcionario provincial, al menos en las bibliotecas donde hubiera gran movimiento de lectores. Se inauguró la “Biblioteca Alonso Marcos de Llanes” de Noreña, proviniendo sus fondos de los enviados por la Junta y de las obras recuperadas de las dos bibliotecas que funcionaban en la localidad antes de la guerra.

Del año 1949 cabe destacar que todas las bibliotecas tuvieron mayor movimiento de lectores, con un total anual de 224.916 y la instalación de la Biblioteca de Avilés en el local para ella construido. Se celebró un cursillo para los encargados en el que participaron 28 personas con dos objetivos: tanto adiestrar a los encargados en los conocimientos indispensables como llevar a su ánimo el convencimiento de que con sus pequeñas bibliotecas estaban realizando una obra de gran alcance para el mejoramiento moral, cultural y material de la patria.

Por último, en los años 1950-1951, sin abandonar la creación de bibliotecas –se abren al público las de Pravia y Boal- se inicia una política de extensión cultural, complementaria del libro, consistente en actos públicos en diversas localidades. Como mejoras en los servicios destacaremos el establecimiento del préstamo interbibliotecario y la creación de tarjetas de reclamación para morosos, y otras para comunicar a determinadas personas la llegada a la biblioteca de obras que pudieran interesarle. En Turón se ensayó el empleo del altavoz del cinematógrafo local, en los intermedios de las sesiones, para anunciar la llegada de nuevas obras a la biblioteca. El presupuesto del Centro llegó a la nada despreciable cantidad de 445.000 pesetas, y en 1952, la Diputación le asignó 30.000 pts. más para la formación de una biblioteca asturianista. En 1951 se adquiere el Palacio del Conde de Toreno, sede futura del Centro Coordinador y el Centro obtiene el Primer Premio en el Concurso entre Centros Coordinadores.

La conclusión a una década de actividad del primer Centro Coordinador no puede ser más positiva: aumento progresivo del número de bibliotecas, de recursos económicos<sup>422</sup>, de lectores y la aparición de nuevos servicios, además se crearon las Juntas de bibliotecas y se las dotó con un reglamento. Y a nivel estatal, su trascendencia e influencia no podía ser más exitosa al convertirse en el Centro Coordinador, pionero y modelo de los que se crearían en otras provincias, constituyéndose más tarde en uno de los pilares del sistema español de bibliotecas durante todo el franquismo.

#### **5.4.2. Centro Coordinador de Bibliotecas de León**

La Diputación de León, en mayo de 1947, decidió asistir al concurso convocado en abril del mismo año. El proyecto sería tramitado por el Patronato Provincial para el Fomento de Archivos y Bibliotecas. Tras recabar información sobre las respectivas organizaciones bibliotecarias provinciales de Guadalajara, Ávila, Burgos, Huelva y Santander, se envió el proyecto a Madrid.

León quedó fuera, pero el Jurado le otorgó también una dotación de 100.000 pesetas. Su proyecto tuvo la peculiaridad de crear una Organización bibliotecaria, aneja a otra, de carácter histórico y cultural, con propósitos investigadores provinciales que excedían de la política bibliotecaria del Ministerio.

La Junta de Intercambio asignó 20.000 pesetas, se nombró director a Luis Martín Galindo y se estableció que todas las bibliotecas públicas municipales creadas por el Ministerio pasasen a depender del Centro Coordinador. Pero, a su vez, la Presidencia de la Diputación facultó a la Comisión Gestora de Cultura a adoptar las resoluciones pertinentes en lo relativo a la instalación y funcionamiento del Centro, chocando con el texto del Proyecto y con las disposiciones legales a las que tenía que ceñirse.

El proyecto presentado se organizaba en doce bases<sup>423</sup>, abarcando aspectos tales como: objetivos, organización, situación administrativa, recursos, secciones, servicios del Centro

---

<sup>422</sup> Sus presupuestos aumentaron considerablemente de año en año: 24.000 pesetas (1940), 50.000 (1941), 75.000 (1945), 175.000 (1948), 224.916 (1949) y, para 1950-51, contó con 445.000 pesetas.

<sup>423</sup> SOTO ARRANZ, Roberto, *Historia del centro provincial coordinador de bibliotecas de León (1948 - 1986)*, León, Instituto Leonés de Cultura, 1986, pp. 23-29

Coordinador, régimen interno, estructuración y función de los centros, biblioteca circulante y adscripción del director.

La puesta en marcha y primer desarrollo del Centro estuvo marcada por frecuentes enfrentamientos entre el director del Centro, José Luis Martín Galindo, y la Diputación. Todos ellos tuvieron como base la usurpación de funciones y atribuciones por parte de la Diputación sobre las del Director. La Diputación pretendía ejercer el control absoluto sobre la Organización Bibliotecaria imponiendo sus criterios. Concretamente, la Corporación provincial pretendía controlar la adquisición de libros y revistas, coartando las funciones del Director.

En la base cuarta de la Organización Bibliotecaria se daba cuenta de la reforma de las instalaciones de la Biblioteca Regional y del Archivo Provincial, para acondicionarlas como futura sede del Centro Coordinador. Sin embargo la Diputación nunca acordó dicha instalación. Más tarde, en 1952, se rehabilitarían unos locales donde se alojaron la Biblioteca Regional y el Archivo, relegando al Centro Coordinador, por depender de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, a un local de la planta baja del Palacio Provincial de apenas 30 metros cuadrados, sin calefacción, mal distribuido, sin luz suficiente, sin mobiliario y sin personal. La precariedad fue tal que durante un tiempo hubo de funcionar con mobiliario adquirido en principio para las bibliotecas municipales.

Controvertida también fue la adscripción del Director del Centro al servicio del Estado o su vinculación exclusiva a la Diputación de León. Debajo subyacía un localismo intransigente que derivó en un enfrentamiento personal entre el Director y el Secretario de la Diputación y que trajo la relegación a un segundo plano del Centro y su Director, como lo demuestran las 4.000 pesetas de gratificación que recibió éste, frente a las 6.000 que asignaban otras diputaciones a sus directores (Cataluña, Navarra o Asturias).

Respecto a la aplicación de los presupuestos, los problemas vinieron de dos direcciones: por un lado, las cantidades presupuestadas vieron reducido su volumen después de la dotación inicial de 100.000 pesetas; y por otro, no se cumplieron las finalidades para las que se acordaron. Fue una constante en los primeros años el que las dotaciones dinerarias para adquirir publicaciones para el Centro y sus Bibliotecas se gastaran en mobiliario. Una prueba más de las dificultades es que el Reglamento no se aprobó hasta 1955.

A las bibliotecas municipales, instaladas en las capitales de los diez partidos judiciales de la provincia, se les asignó la obligación de fomentar la lectura y el interés cultural entre los habitantes, con especial atención a las zonas de mayor atraso; el estudio y la recogida de datos sobre la cultura tradicional, colaborar con el resto de asociaciones y entidades de tipo cultural de la localidad y hacer depender de ellas todas las demás bibliotecas que se llegasen a crear en el espacio del partido judicial (circulantes, escolares, industriales o locales). Tendrían una colección de 3.500 volúmenes como mínimo, estando especialmente orientadas a las labores de los habitantes de cada zona geográfica.

El desarrollo factual de la Organización bibliotecaria leonesa<sup>424</sup> desde su nacimiento hasta 1951 estuvo marcada por el deseo de perfeccionarla. En 1950 se inauguran las bibliotecas de Burón, Riaño, Villafranca del Bierzo, Residencia de Huérfanos de León, Murias de Paredes, Villablino, La Bañeza y Astorga. Las de esta última localidad (inaugurada en 1933 y reorganizada en 1944), La Bañeza (1942) y Villablino (1947) fueron integradas en la

---

<sup>424</sup> SOTO ARRANZ, Roberto, *Historia del Centro Provincial Coordinador... Op. cit.*, pp. 62-67

Organización. En estos primeros tiempos, sólo algunas de las cabeceras de partido que contestaron ofrecían un local adecuado. Para el año 1951, los objetivos que se marcaron fueron tanto el asentamiento de la Organización Provincial conseguida hasta el momento, como la ampliación de las colecciones de las bibliotecas ya creadas y la inauguración de otras nuevas en Valencia de Don Juan, Cistierna y Bustillo del Páramo. También se estudió la posibilidad de crear filiales de otras municipales como solución a la peculiar estructura del poblamiento leonés en algunas áreas de la provincia, donde, como comarcas cerradas que son, los núcleos de población están alejados de la Biblioteca Municipal. A manera de ensayo, se establecieron dos filiales para Villablino: Villaseca de Laciana y Caboañes de Abajo.

Respecto a la labor realizada desde el Centro Coordinador con destino a las Bibliotecas Públicas Municipales, cabe señalar varias iniciativas: se puso en marcha el servicio de préstamo entre bibliotecas de la provincia; se realizaron varias inspecciones, que según la predisposición de los municipios fueron más o menos eficaces, y en las que se dedicó especial consideración a orientar a los Encargados. También se quiso sobrepasar la fase de préstamo en que se centraba casi exclusivamente el servicio bibliotecario, para ser completado por la lectura en sala. Se catalogaron los libros comprados con presupuesto de la Diputación con destino a las bibliotecas y se enviaron listas de encabezamientos de materias para orientar a los lectores y carteles con los 100 primeros números de la CDU.

#### **5.4.3. Centro Coordinador de Soria**

El proyecto de Soria obtuvo uno de los cuatro premios otorgados en 1948 y por O.M. de 25 de junio de 1948, se dispuso la creación de este Centro Coordinador. Precedente de una mínima organización bibliotecaria dio a finales de la década de los 20, mediante el envío por parte de la Diputación de cajas circulantes de libros a diferentes pueblos para difundir la cultura por toda la provincia.

Hasta ese momento, el panorama bibliotecario de la provincia no podía ser más limitado: aparte de la Biblioteca Pública de Soria que se acababa de inaugurar —en enero de 1948— estaba la Biblioteca Pública de Almazán, creada a expensas de este Ayuntamiento, y de la Junta de Adquisiciones y Distribución de Publicaciones.

Había que hacerlo casi todo en el aspecto bibliotecario. La primera medida fue la incorporación de la Biblioteca Pública de Soria, pasando a ser la Central de todas las que se fueron posteriormente creando. Durante los primeros meses se procedió al estudio de las características y posibilidades de la provincia. Sus reducidos recursos económicos, así como sus 350 municipios con poblaciones mínimas, llevaron a no establecer un gran número de bibliotecas, considerando que era más prudente y eficaz crear tan sólo las indispensables y paralelamente se pensó en establecer un servicio de bibliotecas viajeras. Cabe a este Centro, a pesar de la modestia de sus recursos, la primacía entre los demás centros de España del establecimiento del sistema rotatorio de circulación de libros. Igualmente, se tuvo en cuenta el índice reducido de analfabetismo, la especial psicología de sus habitantes, tipo de vida sobrio y el clima frío.

La dirección del Centro Coordinador pudo seguir el desenvolvimiento de las bibliotecas creadas, sus necesidades y problemas y orientar a sus incipientes bibliotecarios gracias a una relación continua mediante viajes de organización, visitas de inspección y por correspondencia con los encargados locales.

Se prestó atención especial, desde su creación, a la responsabilidad en el nombramiento de los encargados locales y para ello se exigió a los Ayuntamientos que propusieran a los maestros (a falta de Licenciados en Letras).

Las relaciones del Centro Coordinador con los Ayuntamientos fueron correctas y cordiales, pero la escasez de recursos de los pequeños municipios dificultó en gran manera las gestiones iniciales y la tramitación reglamentaria de los expedientes de creación de Bibliotecas. Los problemas con los que se encontró Pérez-Rioja en los primeros años de su andadura los resume así: encontrar un local adecuado, el obtener de los Municipios el firme compromiso de atender a los gastos iniciales y, sobre todo, el de presupuestar una cantidad fija para el encargado de la Biblioteca, aparte de su pereza para formar las Juntas reglamentarias locales. Tuvo que realizar más de un viaje y adoptar una postura flexible y comprensiva.

El Director del Centro procuró tener un conocimiento exacto de la verdadera situación de las Bibliotecas creadas por la Junta, con anterioridad a 1936, en los pueblecitos de Piquera de San Esteban, Árvala de la Sierra, Esteras, Villar del Campo y Cigudosa. Tales Bibliotecas, o no existían, o, dispersados sus fondos, no funcionaban en la actualidad, lo que unido a la escasísima población y a la insignificancia de los pueblos no compensaba reorganizarlas. Mereció especial atención la de Morón de Almazán (con más de 1.000 habitantes), donde se conservaban unas 200 obras de sus fondos iniciales, aunque en realidad habría que fundarla de nuevo, pues dichos fondos estaban depositados en un recinto de 8 metros cuadrados que compartía con el Juzgado, por lo tanto hubo que buscar un local adecuado dentro del Grupo Escolar.

En 1951 formaban parte de este Centro Coordinador las bibliotecas de Almazán, Burgo de Osma, Agreda, San Leonardo de Yagüe, Morón de Almazán, Santa María de Huerta, Duruelo de la Sierra y Amarza; la Biblioteca Pública de Soria; tres bibliotecas especiales (Hospital de Soria, Hogar Infantil de Soria y Hogar Infantil de Burgo de Osma) y 24 bibliotecas viajeras. El balance no podía ser más positivo: de 1948 a 1952 pasó la provincia de dos a nueve Bibliotecas Públicas, tres especiales y 24 Viajeras, y de 26.035 servicios computados a 65.663, lo que supone un aumento del 300%. En 1952, Soria también participó en el I Cursillo interprovincial de Capacitación para encargados de bibliotecas celebrado en Zaragoza del 23 de septiembre al 3 de octubre<sup>425</sup>.

#### **5.4.4. Centro Coordinador de Huelva**

En noviembre de 1946 se constituyó el Patronato Provincial de Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos, el 7 de diciembre se publicó la orden de creación del Centro Coordinador de Bibliotecas de Huelva y el 19 se nombró a su director en la persona de Antonio Palma Chaguaceda.

El 10 de marzo de 1947 se inauguró el Centro Provincial y en 1951 el Centro Coordinador de Bibliotecas de Huelva ya contaba con las siguientes bibliotecas públicas: La Pública Provincial; 16 Bibliotecas Municipales en las localidades de Alájar, Almonte, Aracena, Aroche, Ayamonte, Calañas, El Cerro de Andévalo, Cortegana, Galaroza, Gibrleón, Isla Cristina, Minas de Riotinto, Moguer, La Palma del Condado, Puebla de Guzmán y Valverde del Camino; tres Bibliotecas

---

<sup>425</sup> PÉREZ-RIOJA, José Antonio, *Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria (año 1949)*, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950; PÉREZ-RIOJA, José Antonio, "El Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria", *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, año 2, n. 2, pp. 13-20

Populares – Las Colonias, Estudios Politécnicos y José Antonio- establecidas o proyectadas en barriadas populosas de la capital, en zonas, salvo la de José Antonio, de elevado número de analfabetos y destinadas a un público constituido en su mayoría por obreros. También se establecieron Bibliotecas Especiales en hospitales y prisiones, dando servicio a personas en su gran mayoría de instrucción escasa o nula, y en localidades veraniegas como Punta Umbría y Galaroza que, por el contrario, estaban pensadas para personas acomodadas y de regular o elevada instrucción. Y, por último, se crearon bibliotecas mixtas, unión de una Biblioteca Municipal y una Biblioteca temática propia. Así, en la Municipal de Palos se unía una amplia sección integrada por una copiosa bibliografía colombina y en Almonte se guardaba una espléndida cantidad de libros, folletos y prensa relativos a la tradicional romería de la Virgen del Rocío.

Casi todos los encargados eran los maestros nacionales pues ofrecían las ventajas de su preparación cultural, su solvencia económica (que les permitía aceptar gustosamente gratificaciones modestas) y su hábito profesional resultaba un excelente auxiliar en la función educativa de la Biblioteca. En aquellas que funcionaba con intensidad el préstamo domiciliario había un ayudante y se prestó especial atención a la necesidad de formación mediante cursillos de perfeccionamiento.

Para evitar el abandono, como había ocurrido en muchas bibliotecas creadas al amparo del decreto de 1932, el Centro Coordinador trató de mantener el mayor contacto posible con las bibliotecas creadas, haciéndose dos visitas anuales para conocer su labor, resolver sus problemas y corregir sus deficiencias.

En cuanto a las instalaciones, unos locales fueron magníficos -en palabras de su director- y los demás buenos, excepto la Biblioteca Popular de Las Colonias que no pasó de regular. El mobiliario se repitió en todas salvo ligeras variaciones.

La colocación y clasificación estaba hecha íntegramente conforme a la clasificación decimal universal. Sólo tenían que catalogarse las donaciones y adquisiciones propias, ya que el lote fundacional de la Junta ya venía con sus juegos de fichas impresas.

Respecto a su funcionamiento, horarios y servicios, la Biblioteca Provincial abría de las 11 a las 13 h. y de 6 a 9 de la tarde; cuando se proveían las dos vacantes de porteros se aumentaba la jornada. Todas las Bibliotecas Municipales funcionaban los días laborables de 18 a 21 h. Se cerraba una hora después del comercio para que sus empleados se pudieran beneficiar de los servicios de la biblioteca.

La publicidad de las actividades del Centro se realizaba a través la emisora en Huelva de Radio Nacional de España y del diario *Odiel*, creando en la provincia un buen clima bibliotecario que hacía más fácil la extensión y mejora de los servicios<sup>426</sup>.

#### **5.4.5. Centro Coordinador de Zaragoza**

Creado oficialmente por la O.M. de 25 de junio de 1948, este Centro, a la vez que arbitraba los recursos necesarios para su puesta en marcha, nombró una comisión que realizase los estudios

---

<sup>426</sup> PALMA CHAGUACEDA, ANTONIO (1950). *Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Huelva (1949)*, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1950



preparatorios y elaborase un Reglamento que, como norma jurídica, regulase todas las actividades y su desarrollo posterior. Bajo la tutela del Estado, el gobierno inmediato de la organización correspondía a un Patronato, que se constituyó el 22 de septiembre del mismo año. La instalación del centro se facilitó en los locales de la Biblioteca Pública de Zaragoza, en la Sección Popular “Miguel Artigas”, limitándose a la construcción de estanterías para Biblioteca Circulante y Depósito, así como a la adquisición del material necesario.

El Patronato elaboró un plan sistemático que englobaba la creación de nuevas Bibliotecas Públicas Municipales, y, para estimular a las Corporaciones Municipales, acordó celebrar concursos entre Ayuntamientos cabeza judicial y de importancia urbana adjudicándoles 10.000 pesetas para invertir las en instalaciones, mientras el lote bibliográfico lo facilitaba la Junta. En el curso de las gestiones realizadas con distintos ayuntamientos para la creación de bibliotecas, se vio la necesidad de contar con un proyecto de organización bibliotecaria provincial que determinase las características y funciones de cada centro y estableciera de manera clara el régimen de relaciones que entre ellos había de existir, y para ello se firmaron convenios con los Ayuntamientos.

Se implantó el servicio de préstamo entre bibliotecas para suplir la escasez inicial de sus fondos, sobre la base de las adquisiciones realizadas para la proyectada Biblioteca Circulante y los fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública de Zaragoza.

Respecto al personal, se procedió a la renovación de todos los Encargados de Bibliotecas, anunciándose su provisión mediante Concurso público en el BO de la provincia de Zaragoza del 10 de diciembre de 1949. En relación al técnico del Centro Coordinador y, ante la imposibilidad de que toda la actividad de la organización recayese sobre un único funcionario, el Patronato acordó que todas las funciones técnicas y burocráticas, a partir de 1950, fueran desempeñadas por todo el personal de la Biblioteca Pública de Zaragoza: maestros, bachilleres, un Secretario del Ayuntamiento y un abogado.

Y en cuanto a las adquisiciones, el Patronato solicitó de las Juntas de gobierno la formación de desideratas que después de seleccionadas y aprobadas, fueron adquiridas con cargo a la consignación atribuida a este Centro por la Junta. El Patronato hizo donaciones de lotes a algunas entidades, como por ejemplo la Sección Femenina.

En Zaragoza, el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas pretendió la formación de toda una organización bibliotecaria<sup>427</sup> a base de un conjunto de centros y servicios de lectura adecuados a toda la población provincial, que se sistematizó en torno a tres elementos: una dirección técnica centralizada, una Biblioteca Central para los servicios de préstamo e información bibliográfica y una serie de centros distribuidos de acuerdo con el volumen de población, recursos económicos y localización de las poblaciones. Este proyecto se fue aplicando de una manera progresiva: en 1948 se dio la incorporación, con la consiguiente transformación en Públicas Municipales, de las Bibliotecas de Caspe, Ejea de los Caballeros, Quinto de Ebro, Tarazona y Urrea de Jalón; en 1949, la creación de las Bibliotecas Municipales de Calatorao y Pina de Ebro; en 1950, las de Almonacid de la Sierra, Ariza, Daroca, Epila y Luna; y en 1951, las de Aniñón y Zuera.

---

<sup>427</sup> XIMÉNEZ de EMBÚN y CANTÍN, Luis, *La organización bibliotecaria provincial zaragozana*, Zaragoza, Librería General, 1959 ; para conocer más en detalle la actuación del Centro en estos primeros años hay que consultar: *Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y Biblioteca Pública de la Ciudad de Zaragoza: memoria (octubre 1948-marzo 1950)*, Zaragoza, Librería, 1951

El Centro Coordinador se articuló en torno a tres órganos: el Patronato, la Oficina Central y la Biblioteca Pública de Zaragoza. El Patronato fue el primero ensayado en un Centro Coordinador antes de ser regulado para todos los Centros Coordinadores, a él le correspondía informar las solicitudes de creación y adscripción de Bibliotecas Públicas Municipales, concertar las condiciones de su régimen y la formación de sus reglamentos de régimen interno; todo lo relativo a los presupuestos anuales de la organización provincial así como de los centros y servicios; seleccionar las publicaciones que habían de adquirirse, según desideratas formuladas por las Juntas de gobierno de los centros y servicios. Su composición respondía acertadamente a las funciones de carácter social, cultural y administrativo que se le atribuyen<sup>428</sup> y, por ello, podían facilitar la gestión de la organización, además de contribuir a su financiamiento. La Oficina Central tenía asignadas funciones administrativas y técnicas. La Biblioteca Pública de Zaragoza, que había de actuar de Biblioteca Central y tener a su cargo el servicio inmediato de los habitantes de la capital. Creada por Orden de 24 de octubre de 1948 y modificada y adaptada en 1953, estaba formada por una Biblioteca de Ciudad que, además de especializarse en las materias propias de la gestión de la Corporación municipal, había de construir un centro de información local, y formaba parte de una Red de “Secciones Populares”, pertenecientes al Servicio Nacional de Lectura, para servir a los “grandes públicos zaragozanos”.

Tras este repaso por la trayectoria de estos cinco Centros Provinciales, se impone hacer una reflexión de lo que supuso su labor. Partiendo de una desigualdad presupuestaria<sup>429</sup>, todos ejercieron en la medida que pudieron una labor fundamental en el fomento de la lectura pública, no sólo por el número de bibliotecas que crean sino también por el deseo de adaptarse a todo tipo de necesidades, como es el caso de Huelva, que intentó llevar el libro a todas partes, tanto a las poblaciones de vacaciones estivales como a las zonas mineras, o el caso de las bibliotecas viajeras de Soria. Realmente intentaron planificar y establecer una red bibliotecaria a nivel provincial que perdurara en el tiempo, de ahí la importancia que dieron a las visitas de inspección hechas por sus directores y la preocupación por formar al personal y profesionalizarlo. Aparte de contar con medios económicos, fue fundamental el apoyo de las Diputaciones y de los gobernadores civiles, además de estar dirigidos por bibliotecarios que creyeron y apostaron por llevar la lectura a todos los rincones de España, y como signo de modernidad, comenzaron a utilizar los medios de comunicación, prensa y radio, como medio de propaganda y difusión de sus actividades y servicios, como en Turón que se llegó a utilizar el altavoz del cinematógrafo para anunciar la llegada de las novedades a la biblioteca.

---

<sup>428</sup> Regulado en el art. 10 del Decreto de 4 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Nacional de Lectura: “Los Patronatos de los Centros Coordinadores estarán presididos por el Presidente de la Diputación Provincial respectiva y en su composición entrarán a formar parte, mediante nombramiento ministerial, representaciones de los Organismos colaboradores, personas destacadas de la vida cultural de la provincia y representantes obreros de las Organizaciones sindicales. Será secretario el funcionario facultativo encargado de la dirección técnica.

<sup>429</sup> Para 1951 Oviedo contó con 445.000 pesetas, León con 88.205, Zaragoza 134.900 para 1950, Soria 55.000 pesetas en 1949 y Huelva, también en 1949, recibió alrededor de 79.000 pesetas (del Estado y la Diputación y los ayuntamientos).

## 6. TIPOLOGIA BIBLIOTECARIA

### 6.1. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PROVINCIALES

Las bibliotecas públicas provinciales aparecieron tras las leyes desamortizadoras de Mendizábal para recoger todo el patrimonio bibliográfico y documental de las órdenes suprimidas. Por Real Decreto de 29 de julio de 1837 se decide distribuir estos fondos entre bibliotecas provinciales, y, más tarde, por la Real Orden de 22 de septiembre de 1838 se establecen las bibliotecas públicas en las capitales de provincia para reunir y utilizar los fondos que encerraban los conventos desaparecidos. Pero dada la escasez de recursos pasaron a las bibliotecas universitarias y las de los Institutos de segunda enseñanza, que se convirtieron en provinciales y se abrieron al público. En general, los volúmenes eran de gran valor bibliográfico pero de escasa utilidad para los estudiantes y el público lector<sup>430</sup>. Muchos de estos libros sufrieron auténticas odiseas, cambiando constantemente de lugar hasta que se ubicaron en el local destinado a Instituto de Segunda Enseñanza y la biblioteca siguió cuantos traslados sufrió este Centro.

A pesar de su carácter mixto de biblioteca pública y docente, de sus escasos e inadecuados fondos, de ser museos bibliográficos, a veces mal instalados, que sólo ofrecían salas dedicadas al trabajo intelectual, estas bibliotecas contribuyeron a la difusión de la lectura y fueron las primeras bibliotecas públicas, que permitieron el acceso a toda clase de lectores, que dependían del Estado y que estaban a cargo del Cuerpo Facultativo.

A fines del XIX su panorama no era muy satisfactorio ni por la cantidad y calidad de los fondos, ni por los servicios que ofrecían, unido a la corruptela de las llamadas plazas de gracia, que se quiso acabar con ella. Además en 1885 carecían de biblioteca pública 19 capitales de provincia.

Con el R.D. de 4 agosto 1900, en el que se especifica la prueba de oposición como única forma de ingreso en el Cuerpo y con la aprobación del R.D. de 18 octubre de 1901 del *Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado*, se inicia la tecnificación y consolidación de las Públicas del Estado. En dicho reglamento, estas bibliotecas, o sea, las provinciales y de los institutos generales y técnicos, quedaban englobadas en las incorporadas a establecimientos de enseñanza. Por ello serían los directores de los centros de enseñanza quienes determinaban el horario de las bibliotecas y quienes presidían las juntas que entendían en asuntos de adquisiciones, publicación de catálogos y régimen disciplinario de los lectores<sup>431</sup>.

Esta europeización de las bibliotecas públicas del Estado se completó con la aprobación de las *Instrucciones para la redacción de los catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado*, dictadas por la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. Pese a esta modernización, la mayoría de las bibliotecas públicas provinciales y de Instituto, mantenían la misma situación: carencia de libros modernos instructivos y de entretenimiento, escasas instalaciones y deficientes, exiguo personal cualificado y apenas disponían de presupuesto.

Durante la II República, sería María Moliner quién prestó atención a este tipo de biblioteca pública a través del Decreto de 13 de noviembre de 1937, en el que se estableció la fundación de una biblioteca general en cada capital de provincia, con la denominación de Biblioteca Provincial, que funcionaría como organismo central en lo que se refería a la coordinación de todas las actividades de bibliotecas de cada provincia. Sus locales, instalación y servicios

---

<sup>430</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana. "Las bibliotecas y la lectura de la biblioteca popular a la biblioteca pública", en: *Historia de la edición en España (1836-1936)*. Madrid, Marcial Pons, pp. 431-435.

<sup>431</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura...Op. cit.*, pp. 139-140.

complementarios serían costeados por el Estado y su personal pertenecería a la escala de facultativos o auxiliares de bibliotecas. De hecho, por orden de 30 de noviembre del mismo año, se organizó un concurso para seleccionar y formar a 50 encargados de bibliotecas con destino a estos centros. Como estas bibliotecas provinciales ya habían sido creadas en el XIX, por orden de 7 de enero de 1938 se reorganizaron las de Alicante, Cuenca, Guadalajara, bajo la dirección de los facultativos Carlos Huidrobo Viñas, José López de Toro y Luisa Cuesta respectivamente. Sobre la red de bibliotecas provinciales como base de la organización general de bibliotecas destacó la labor realizada en la guerra por Federico Navarro Franco en la de Castellón y Manuel de Santiago en la de Murcia<sup>432</sup>

En el reglamento del Servicio Nacional de Lectura<sup>433</sup>, se dispuso que se integrarían en su estructura las Bibliotecas del Estado que se designasen por Orden Ministerial, pero en la aplicación de este precepto no se llegó más allá de la integración de las bibliotecas populares de Madrid. Señaló también el Reglamento que en los locales de la Biblioteca Pública del Estado se instalara el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas mientras no dispusiera de local propio. Y estableció que los Ayuntamientos de las capitales de provincia solicitaran la transformación de la Biblioteca Pública del Estado en Biblioteca Pública de la Ciudad<sup>434</sup>, mediante la aprobación del correspondiente concierto por el cual el Estado cedía en usufructo al Ayuntamiento para fundirla con la Municipal, conservándoles su consignación y funcionarios, aunándose así los esfuerzos del Municipio y del Estado. Esta transformación solo se cumplió en Zaragoza. La realidad fue otra, porque ni hubo grandes bibliotecas de ciudad, ni se construyeron edificios *ad hoc* con la colaboración de los Ayuntamientos.

La Biblioteca de la Ciudad de Zaragoza se creó por Orden de 25 de octubre de 1948 luego modificada para ajustarse a la nueva legislación (1953) y en 1954 se aprueba su reglamento. Como esto no se hizo en ningún otro caso, la Biblioteca Pública de la Ciudad de Zaragoza fue la única en disfrutar de este régimen que le permitió beneficiarse de una aportación económica del Servicio Nacional de Lectura para su sostenimiento anual, equivalente al 50% de la aportación que recibía del Ayuntamiento. Fue la única, pero nunca fue tan grande, ni tuvo un edificio adecuado, sino unas pésimas instalaciones. Esta biblioteca no se hizo transformando en dicho nuevo centro a la Biblioteca Pública del Estado como mandaba la legislación, sino que se creó por la reunión y no fusión de los fondos bibliográficos procedentes de la biblioteca y hemeroteca municipales, duplicados de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, otros duplicados de la Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas del Estado y fondos propios procedentes del Depósito Legal. De esta unidad central pasaron a depender las bibliotecas populares que ya existían en la capital (Miguel Artigas de 1920, San José de 1945 y la Miguel de Cervantes 1947)<sup>435</sup>

También el Decreto de 1947, al tratar de la organización de las bibliotecas, sometió a las Bibliotecas Públicas del Estado a las normas de catalogación y clasificación que habría dictado el ministerio, estableció en ellas el servicio de préstamo, aunque con las limitaciones y excepciones que determinaron los Reglamentos, y concedió los beneficios de la franquicia postal a los envíos de préstamo interbibliotecario.

---

<sup>432</sup> Martínez Rus, Ana. *La política del libro durante la Segunda república...Op. cit.*, p. 191.

<sup>433</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura...Op. cit.*, pp. 286-287.

<sup>434</sup> Esta idea la trajo Bordanou tras un viaje a Estados Unidos junto a Amadeo Tortajada pretendiendo implantar en España grandes bibliotecas de ciudad en edificios construidos *ad hoc* con la colaboración de los propios ayuntamientos, según el modelo norteamericano.

<sup>435</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis. *La lectura pública en España...Op. cit.*, p. 274.

Lo cierto es que a comienzos de los cincuenta, para algunos, estas bibliotecas aparecían asociadas aún a establecimientos de tipo erudito y cultural “que continuaban la ruta de la tradición y seguían teniendo un carácter histórico”<sup>436</sup>, y se dirigen al elemento medio de la población con inquietudes espirituales convirtiendo a los especialistas en hombres cultos<sup>437</sup>; pero para otros, aparte de ser el órgano más importante de lectura y de consulta de la provincia, era el órgano representativo de sus intereses culturales propios, por ello la Biblioteca Provincial debía tener una Sección independiente de libros de autores nacidos en la provincia y libros que tratasen de temas relativos al interés de la provincia<sup>438</sup>.

La limitada consignación de que gozaron estos centros, tuvieron por efecto una desproporción en calidad y cantidad entre fondos antiguos y modernos, éstos con muchas lagunas y en muy pocas ocasiones al día en la producción científica. Pese a esta valoración negativa hecha hacia 1956<sup>439</sup>, estas bibliotecas irán experimentado cambios<sup>440</sup> a lo largo de los 40-50. Unas harán hincapié en la dirección de un mayor peso de los servicios de lectura pública sobre los de conservación del patrimonio bibliográfico y, simultáneamente, una mayor separación de los servicios bibliotecarios de los archivísticos. También se fue consolidando la tendencia de que los archivos y bibliotecas pasasen a ocupar un edificio propio. En los casos en que la biblioteca provincial del Estado estaba en un centro de enseñanza secundaria, se traslada todo el servicio a otro edificio. En los casos en que el depósito se efectuó en la biblioteca universitaria, el proceso se hace más gradual y parcial: en un primer momento se crea una “Sección Popular” o “Biblioteca Popular” como sucursal de la Biblioteca Universitaria, dependiente de ella y atendida por su personal. Esta biblioteca acabaría independizándose con el tiempo, pero se mantendrían en la biblioteca universitaria los fondos bibliográficos antiguos procedentes de la desamortización del siglo pasado. Las capitales de provincia en las que no había universidad en los años 40 y 50 tienen fondos antiguos valiosos; aquellas, una docena, en que sí había universidad tienen únicamente fondos del XX.

Tanto en unas como otras, el servicio de lectura pública empieza a ser atendido cada vez más como el objetivo prioritario: se facilita el préstamo, se instalan secciones de referencia y de información bibliográfica, se ponen libros en libre acceso o se trata de atender al público infantil con secciones aparte y actividades específicas como la “hora del cuento”. Y mientras algunas apuestan por una amplia oferta de extensión cultural y la inclusión de nuevos soportes documentales (Almería), otras permiten dentro de sus salas la segregación por sexos (Burgos).

No hay ni memorias, ni informes elaborados desde la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para este tipo de estas bibliotecas que nos pudieran dar una visión de conjunto y establecer comparaciones en cuanto a recursos económicos, servicios, fondos o préstamos. Además sus estadísticas de préstamo quedaban ocultas junto con el resto de bibliotecas de las capitales de provincia. Sólo he hallado dos menciones de tipo oficial: la primera se encuentra en una publicación de 1947:

---

<sup>436</sup> TORTAJADA, Amadeo, “Las bibliotecas en España: su movimiento y estado actual (1939-1949)”, *Revista de Bibliografía Nacional*, 1950, t. 40, p. 10.

<sup>437</sup> GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel. “Misión de la biblioteca pública provincial, en: *Primera Reunión bibliotecaria de la zona noroeste, Santiago 1954*, p. 39-40.

<sup>438</sup> PALMA CHAGUACEDA, Antonio. *Memoria del centro coordinador de bibliotecas de Huelva*, 1950.

<sup>439</sup> SARRIÁ RUEDA, Amalia, “Bibliotecas públicas en España”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, 1956, nº 36, p. 179.

<sup>440</sup> MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo, *Sistemas de bibliotecas públicas en España y ... Op. cit.*, p. 88.

Las bibliotecas establecidas en capitales de provincia poseen un conjunto de 6.161.188 volúmenes –estadística de 1944– y en dicho año han tenido 2.450.107 lectores. Para ellas se han inaugurado edificios de nueva planta en Murcia, Málaga, Palma de Mallorca, Mahón, Teruel y Segovia; y se ha proyectado la construcción de otros en Vitoria, Logroño, Cáceres, Lérida y Cádiz.<sup>441</sup>

Y la otra es de tipo gráfico, pues bajo forma cartográfica se dan datos de los fondos y presupuestos dedicados a las Bibliotecas Provinciales entre 1939 y 1949, extraídos de la publicación que conmemoraba los diez años al frente del Ministerio de Educación Nacional de José Ibáñez Martín<sup>442</sup>.



En este mapa llama poderosamente la atención la desproporción tan grande entre los recursos destinados, por parte del Estado, a la compra de libros y los gastados en instalaciones, de lo que se puede deducir que la renovación de los edificios de estas bibliotecas en esta década provinieron sobre todo de las Diputaciones y Ayuntamientos más que de la Administración central.

De las casi cuarenta Bibliotecas Provinciales que funcionaban en estos años, he podido localizar información de unas doce: Burgos, Oviedo, Mahón, Almería, Segovia, Pontevedra, Gerona, Huesca, Teruel, Castellón, Huelva y Soria<sup>443</sup>, siendo dos de nueva creación: Oviedo, que pasa por distintas ubicaciones, y Almería que llegaría a constituirse en modelo de

<sup>441</sup> *Franco y la cultura: labor del estado español (1939-1947)*, Madrid, Oficina de Información Española, 1947, pp. 125

<sup>442</sup> IBÁÑEZ MARTÍN J., *La política del libro español*, Madrid, 1946

<sup>443</sup> Para conocer la situación de cada una de ellas me ha sido de gran utilidad la publicación realizada en 1991 por el Centro de Coordinación Bibliotecaria, que a modo de fichas recoge información de todas las Bibliotecas Públicas del Estado, incluyendo referencias bibliográficas. Para estos años la mayoría de reseñas sobre estas bibliotecas fueron publicadas en el *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas* y en *la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*.

organización bibliotecaria. Elementos comunes al resto va a ser la reforma de instalaciones y traslado a edificios remodelados y la creación de una incipiente Sección de fondos locales, además del interés por modernizar los fondos y favorecer la consulta y el préstamo de sus fondos.

## **6.2. LAS BIBLIOTECAS POPULARES**

La concepción de las bibliotecas populares surge como reacción a las bibliotecas provinciales eruditas, alimentada por la corriente liberal, y se llamaron “populares”, no porque estuvieran concebidas para toda la población, sino porque eran sólo para la plebe, para la clase social más baja, formada por el pueblo que vivía fuera de las capitales de provincia, donde estaban las bibliotecas provinciales, o el que ni social ni culturalmente estaba preparado para entrar en las provinciales y utilizar sus eruditos fondos bibliográficos<sup>444</sup>.

Las primeras medidas de apoyo a las bibliotecas públicas/populares se producen como consecuencia de los planes de alfabetización y de reforma de la enseñanza hechos por los gobiernos constitucionales. Piensan los legisladores que no sirve de nada sacar a los ciudadanos más necesitados del analfabetismo si, a continuación no se les proporcionan a través de bibliotecas populares los medios para poder leer. Esta idea queda reflejada en medidas legales en favor de las bibliotecas populares a partir de 1847 y se crearán concretamente a partir de 1869<sup>445</sup>.

Las primeras bibliotecas populares españolas se concibieron, de acuerdo con la organización entonces dada a todos los asuntos dependientes de la Dirección General de Instrucción Pública, como creación de la Administración Central del Estado, aunque las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos debían contribuir a sostenerlas.

Las bibliotecas populares entre 1869-1885, según Viñao<sup>446</sup>, fueron un intento de acercar una determinada cultura impresa a quienes tenían escasas o nulas posibilidades de acceder a ella. Sería el liberalismo progresista durante el sexenio republicano quien llevó a las zonas rurales estas bibliotecas, encargando su formación y funcionamiento al maestro, pero no eran bibliotecas escolares, aunque sí eran las escuelas del adulto que se instruye por sí solo para impedir el analfabetismo por desuso. Buena parte de las bibliotecas no se concedieron a pequeñas poblaciones rurales, sino a localidades de tipo intermedio, además había que tener en cuenta que las bibliotecas se concedían a petición municipal o del maestro y que su ubicación, conservación y mantenimiento corrían a cargo de la entidad beneficiaria. Todo dependía del voluntarismo e interés de unos pocos alcaldes y maestros y más tarde del espíritu de asociación y la iniciativa particular.

Nacieron con un aire moralizador y utilitario, y por ello sólo ofertaban obras consideradas adecuadas: libros de índole no estrictamente escolar, pero sí de ampliación y divulgación o de carácter utilitario y aplicado, y nada de literatura popular que tan importante papel tuvo en la ampliación del público lector a partir de 1840. Su suerte estuvo ligada a la ideología liberal y regeneracionista, por lo que cuando llega la Restauración, esta cortó su difusión y funcionamiento e impidió una evolución que corrigiese los errores iniciales, concluyendo esta primera iniciativa en una escasa difusión e incidencia.

---

<sup>444</sup> GARCÍA EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura... Op. cit.*, p. 111.

<sup>445</sup> MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo (1988). *Sistemas de bibliotecas públicas... Op. cit.*, pp. 79.

<sup>446</sup> VIÑAO FRAGO, Antonio. *A la cultura por la lectura... Op. cit.*, p. 301.

Pero lo cierto es que en la Administración existía una inquietud por crear Bibliotecas Populares, se tenía una concepción moderna de las mismas, y se estaba al tanto de las realizaciones de otros países<sup>447</sup>

En 1911, siendo ministro de Instrucción Pública Amalio Gimeno, la administración central hace un nuevo intento de impulsar la lectura pública, y mediante R.D de 10 de noviembre se crean “dos Bibliotecas Populares modelo”, una en Madrid y otra en Barcelona. Poco después por R.D. de 7 de diciembre de 1911, se crea una Junta especial encargada de las adquisiciones de libros con destino a las Bibliotecas Populares. Pero estas disposiciones quedan en nada: en la propia “Gaceta” vemos cómo en el R.D. de 22 de marzo de 1912 “se reconoce la patente imposibilidad de hallar edificios apropiados, hasta el extremo de haberse tenido que declarar desierto el concurso público anunciado en la *Gazeta* por carecer de condiciones necesarias el local ofrecido”, y se propone como solución crear “secciones populares a cargo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Se insiste asimismo en la conveniencia de crear algunas Bibliotecas especiales en los barrios populares de las grandes poblaciones, procurando acomodarse en cuanto a su número y tipo a las necesidades del medio social y las deficiencias de los locales donde se instalasen. Esta va a ser la tónica de las Bibliotecas Populares: se adaptan al local, jamás tendrán un edificio propio pensado para Biblioteca: un piso de una comunidad de vecinos, un aula de una escuela, parte de una Parroquia,...

A continuación el R.D. de 22 de noviembre de 1922 estableció la creación de secciones populares, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, así como el establecimiento en Madrid de Bibliotecas Populares especiales y que estas secciones y bibliotecas populares estuviesen abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, tuviesen fondos apropiados a su misión, una sección circulante y siempre que el local lo permitiera una sala de niños en la que actuaría un maestro, sin perjuicio de las facultades atribuidas al personal bibliotecario. El Ministerio sería el encargado de designar directamente al personal facultativo y destinar una cantidad para su mantenimiento.

Más tarde, estas bibliotecas recibirán un reglamento específico para su funcionamiento, además de registrarse por el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado de 1901, en el R.D. de 23 de octubre de 1915. Se establecen los horarios de apertura y cierre, el carácter libre de la entrada, la forma de entregar los libros al público, el número, cualificación y categorías de personal que las atiende, la obligación de imprimir anualmente el catálogo de materias, el funcionamiento de la desiderata...

A partir de este año se crearon las Bibliotecas Populares en Madrid, una por distrito. En Cataluña gracias a la actividad y el interés de Eugenio D’Ors se funda la Red de Bibliotecas de la Mancomunidad Catalana, atendidas por las profesionales de la Escola de Bibliotecàries desde 1918, y más tarde, también en Cataluña, se formará una red de bibliotecas populares de carácter privado a cargo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.

También, en 1916, se establecieron bibliotecas populares en las cabezas de distrito universitario de Granada, Zaragoza, Salamanca, Murcia y Sevilla, ya que habían quedado sin biblioteca provincial pública porque éstas se habían fusionado con las universitarias, y su servicio había quedado reservado al ámbito académico. En Valladolid se abrió la Biblioteca Cervantina Popular, en Valencia se creó aprovechando la Biblioteca de la Casa del Pueblo en

---

<sup>447</sup> GIRÓN, Alicia, “Las bibliotecas populares de Madrid: ensayo para una planificación de la lectura pública en Madrid capital: memoria, Madrid: Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1982, pp. 13-17.



colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y en Santiago se fundó con los fondos de la biblioteca y el museo de la Sociedad Económica de Amigos del País<sup>448</sup>.

Veamos a continuación, más detalladamente, el origen y desarrollo tan variado que tuvieron las bibliotecas populares en tres regiones -Cataluña, Asturias y Madrid-, durante los años que precedieron al franquismo y su evolución durante el mismo, para finalizar con la relación de bibliotecas populares que existían en 1951.

### **6.2.1. Las bibliotecas populares de Cataluña**

El origen de las bibliotecas populares de Cataluña<sup>449</sup> está ligado al Instituto de Estudios Catalanes (1907) y la creación de la Biblioteca de Cataluña (1910), cuyo director Jordi Rubió supo darle una moderna organización técnica, y hacer de ella la primera biblioteca que ensayó en España el libre acceso a los estantes, primero para obras de consulta, y ofreció al público un catálogo sistemático de materias de acuerdo con la CDU. Simultáneamente se crea la Mancomunitat de Catalunya, cuyo presidente Prat de la Riba se mostró muy sensible a una campaña de la prensa que solicitaba la creación de bibliotecas populares en Cataluña, pues a través de ellas permitía afirmar al libro como vehículo de la lengua catalana. En 1915 bajo la dirección de Eugeni d'Ors se inaugura la Escola Superior de Bibliotecaries de la Mancomunitat y en 1918 se abren al público las cuatro primeras bibliotecas populares: Valls (Tarragona), Sallent (Barcelona), Olot (Gerona), Borges Blanques (Lérida), dos más lo hacen en 1920: Canet de Mar y El Vendrell, y en ese mismo año se crea la Dirección Técnica de las Bibliotecas Populares bajo la dirección de Jordi Rubió i Balaguer, luego llamada Central de Bibliotecas Populares, que tuvo como principal responsabilidad seleccionar, adquirir y preparar técnicamente las colecciones iniciales de las bibliotecas populares, incrementar sus fondos y mantener con todas ellas una normativa uniforme. También fue la encargada de aglutinar todas las bibliotecas de la red creando el primer sistema regional de bibliotecas que hubo en España, cuya cabeza era la Biblioteca de Catalunya, mientras que las populares actuaban como sucursales suyas, que a su vez instalaban filiales, mediante lotes circulantes. En 1922, ya eran ocho las bibliotecas creadas.

Con la Dictadura de Primo de Rivera desaparece la Mancomunitat y las bibliotecas pasan a sus respectivas Diputaciones, con lo cual perdieron su unidad de funcionamiento. A pesar de ello, las Diputaciones catalanas continuaron su obra bibliotecaria y crearon las Centrales de Bibliotecas. Rubió gestionó la de Barcelona además de actuar de nexo entre todas las demás manteniendo el espíritu unitario catalán. Creó entre 1926 y 1931 las bibliotecas de Granollers, Manresa, Vic, Calella, Tarragona y Ulldecona.

A la llegada de la II República Cataluña contaba con 14 bibliotecas populares, instaladas en locales ofrecidos por los municipios, con sala de lectura infantil y dirigidas por personal técnico de la Escola Superior de Bibliotecaries, pero en el plazo de cinco años quería llegar a 45. El 28 de marzo de 1934, el Parlament de Catalunya aprueba una Ley mediante la cual se crea el Servicio de Bibliotecas, Archivos, Museos Monumentos y Excavaciones, cuya sección primera se destinó a todo lo relativo a la ordenación central de las Bibliotecas públicas: adquisición, encuadernación, restauración, servicio de material técnico, catálogos, proyectos de bibliotecas, coordinación de estadísticas, información y ayuda técnica de la Central a las pequeñas bibliotecas y distribución de lotes circulantes.

---

<sup>448</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana, *Las bibliotecas y la lectura... Op. cit.*, p. 444

<sup>449</sup> GARCÍA EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura...Op. cit.*, pp. 154-168

El Gobierno republicano le reconoció a la Generalitat autoridad para la legislación exclusiva y la ejecución directa en su territorio en materia de bibliotecas, salvo las docentes y las de los particulares, por lo que procedió al traspaso de dichos servicios por Decreto de 5 de octubre de 1934, concretamente las bibliotecas públicas, provinciales y populares del Estado en territorio catalán.

En su corta existencia la Generalitat no alcanzó a inaugurar todas las nuevas bibliotecas populares que deseó, sino tan solo ocho: Tortosa, Vilafranca del Penedés, Cervera, las de los distritos IV y IX de Barcelona, Sitges, Palafrugell y Esparraguera, pero la contribución de estas bibliotecas populares a la difusión de la lectura en Cataluña, fue de capital importancia cultural.

Hacia el final de la guerra Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, dictó la Orden de 18 de enero de 1939, por la que dispuso la reversión al Estado de los archivos, bibliotecas y museos de Cataluña, pero la realidad fue que, a la larga, como pasó durante la Dictadura de Primo de Rivera, sólo hubo una restitución de las que antes eran del Estado, pues cada una de las restauradas Diputaciones Provinciales se hizo cargo de las bibliotecas populares de la Generalitat de Catalunya que había dentro de su jurisdicción territorial.

Así la Diputación de Barcelona se hizo cargo tanto de la Biblioteca de Catalunya, ahora Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona, como de las bibliotecas populares de los distritos IV y IX de la capital, y las de Calella, Canet de Mar, Esparraguera, Granollers, Manresa, Pineda, Sallent, Sitges, Vic y Vilafranca del Penedés, y las mantuvo celosamente al margen de la organización bibliotecaria estatal, es decir de la Junta y luego del Servicio Nacional de Lectura. La Diputación de Tarragona se hizo cargo de las bibliotecas populares de Tarragona, Tortosa, Ulldecona, Valls y El Vendrell, manteniéndolas al margen del Servicio Nacional de Lectura, a pesar de que llegó a un acuerdo para crear su Centro Coordinador de Bibliotecas. La Diputación de Lérida se hizo cargo de las bibliotecas populares de Borges Blanques, destruida por la guerra, y de Cervera. La segunda sí pasó al Servicio Nacional de Lectura en 1962 al crearse el Centro Coordinador ilerdense. Y, por último, la Diputación de Gerona se hizo cargo de las bibliotecas públicas de Figueres, Olot y Palafrugell, posteriormente integradas en su Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas en 1955.

Pero las bibliotecas populares de Cataluña no se quedaron al margen de la administración central y su acción se hizo sentir a través de la labor que la Junta de Intercambio encomendó a la Dirección de Bibliotecas Populares<sup>450</sup> regulando y autorizando la concesión de lotes que la Junta hacía a entidades y poblaciones que se dirigen a ella en demanda de libros, e inspeccionar las Bibliotecas Municipales creadas por la misma Junta en diversos pueblos desde 1933. También representó a la Junta para autorizar en todo el territorio de la jurisdicción de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona la adquisición de libros y revistas extranjeras, señalando la presencia que debía darse a los pedidos de dichas obras, en beneficio de las Bibliotecas del Estado. A través de las noticias recogidas en el *Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales* de los años cuarenta sabemos que en 1940 los pueblos que se vieron favorecidos con lotes fueron: Pla de Cabra (Tarragona), Vilabella (Tarragona), Tortosa y Ulldecona, así como un importante lote a la Biblioteca Popular Juvenil de la Santa Cruz con motivo de su inauguración. Tras inspeccionar en ese mismo año las bibliotecas municipales de la Junta, se concluye que éstas habían perdido pocos libros, otras funcionaban normalmente o estaban a punto de abrirse después de su reorganización, y en un caso se habían perdido todos los libros. En Port de la Selva quedaban solo la mitad y se estaba en trámites para reabrir la. En

---

<sup>450</sup> *Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales*, 1940, pp. 343-347.

1941<sup>451</sup> se recibe un importante donativo de libros para la Biblioteca de San Martín de Arenys de Munt, inaugurada en 1934, abierta nuevamente al público incorporándose a la red de Populares de la Diputación de Barcelona. Y, por último<sup>452</sup>, en 1943 la Junta completó varios volúmenes de la Enciclopedia Espasa a las Bibliotecas de San Pablo y Popular de la Mujer y adjudicó un lote de 514 volúmenes a la Biblioteca de Cornellá.

Para conocer la situación de estas bibliotecas en estos años es imprescindible consultar el ya citado *Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales*, donde se recogen profusamente datos estadísticos y se relacionan todas las actividades que realizaban, pero frente a la neutralidad de los datos, he hallado un pequeño artículo, más sustancioso y crítico, relativo a la situación de las bibliotecas de Barcelona publicado en 1951 por el Gremio de Editores y Libreros<sup>453</sup>:

Barcelona no puede vanagloriarse todavía de sus Bibliotecas Populares. A pesar de existir un número esperanzador, son todavía insuficientes dentro de la gran extensión de la ciudad, y grandes zonas quedan desatendidas perdiéndose un número considerable de lectores.

De un defecto adolecen: su ubicación, a veces, recóndita, e insuficiente propaganda de sus servicios. Muchas de ellas pasan inadvertidas al transeúnte, escondidas tras el aprovechamiento de algún noble edificio, pero falta de presencia en la calle.

La Diputación sostiene cinco Bibliotecas populares, distribuidas con escasa fortuna por la ciudad, que forman parte de la que tiene organizada en toda la provincia. La Caja de Pensiones posee otras cuatro en las barriadas extremas. Todas ellas excelentemente dotadas con libros modernos, hacen olvidar su título de *populares* y alejan del pensamiento la inexistente división en castas intelectuales. Magníficamente atendidas por personal competente, ofrecen halagüeñas perspectivas a todos a pesar de los defectos apuntados.

A continuación pasa revista a esas cinco bibliotecas<sup>454</sup>:

La Biblioteca Popular del Distrito IV se halla dentro del *Grupo Escolar Pedro Vila*, amplia y moderna instalación con capacidad para 120 personas sentadas con todos sus libros, 7.800 volúmenes, en la sala de lectura son de libre acceso, además de 30 revistas, con buen número de semanarios ilustrados. Abre de once a una por las mañanas para los niños y de cinco a ocho para los adultos. El término diario de adultos es de 45. Esta cifra, tan sensiblemente reducida, demuestra lo poco frecuentadas que son nuestras Bibliotecas Populares. No cabe imputarlo al horario como si fuera incompatible con las horas de trabajo, se ha de tener en cuenta que con sólo la firma de un comerciante o industrial se puede gozar del servicio de préstamo durante ocho días. Y es que la Biblioteca del Distrito IV la ahogan los espacios libres y los organismos oficiales que la rodean (...) las bibliotecas necesitan para cumplir con su función, estar rodeadas de casas y de vecinos.

La Biblioteca Popular de la Mujer, institución particular en su origen, instalada en una zona populosa, pasa en 1939 a ser propiedad de la Diputación, admitiéndose entonces a los lectores masculinos, pero en 1949 de nuevo se les niega el acceso descendiendo enormemente el

---

<sup>451</sup> *Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales*, 1941, pp. 359-361.

<sup>452</sup> A partir de 1944 en el Anuario no aparecen más reseñas relativas a la actividad de la Junta en Cataluña, lo que no quiere decir que ésta se acabara.

<sup>453</sup> VIÑA, ALBERTO, *Las bibliotecas de Barcelona*, Barcelona, Gremio de Editores y Libreros, 1951, p. 9.

<sup>454</sup> VIÑA, ALBERTO, *Las bibliotecas de Barcelona*, Barcelona, Gremio de Editores y Libreros, 1951, p. 10-15.

número de lectores (de 1840 en 1948 se pasó a 866 en 1950). De nuevo se les admite, pero sólo los sábados por la tarde. Existe servicio de préstamo para ambos sexos, mediante depósito de 25 pesetas y aval de persona solvente. Posee 20.000 volúmenes, con predominio de la literatura (especialmente teatro y novela), y además un extenso repertorio de libros de cocina, labores, cultura y oficios femeninos, así como un gran número de obras de sociología dedicados a la mujer.

Biblioteca Popular de San Andrés, instalada en el primer piso de la Tenencia de Alcaldía, fundada en 1935 (...) los lectores que frecuentan la sala de lectura acuden de Santa Coloma, San Martín y La Sagrera, demostrando con sus largas distancias que recorren, la necesidad de Bibliotecas en que se encuentran aquellas barriadas, con todo y ser de las más favorecidas.

La Biblioteca de San Pablo se halla instalada en dos salas de un ángulo del patio de la Casa de Convalecencia. En la primera está la sala de lectura, desprovista por completo de libros, que se hallan en la segunda, a la que no tiene acceso el público. Los libros se solicitan a la bibliotecaria sin necesidad de llenar boletín de petición. Como la Biblioteca se fundó para que los estudiantes acudieran a estudiar con sus propios libros, se dio esta especial disposición (...) sólo por la tarde funciona el servicio de Biblioteca, pero la sala de lectura permanece abierta todo el día. En ella se encuentran los periódicos locales corrientes.

La Biblioteca Juvenil de la Santa Cruz ocupa la planta del edificio destinado a depósito de libros de la Biblioteca Central. Consta de dos secciones con locales independientes: la infantil y la juvenil, sólo abierta por las tardes y en la que se admiten lectores adultos. El local de la sección infantil está instalado con especial cariño. (...) Cuatro grandes grupos se han formado con los 1.000 volúmenes que posee la Biblioteca: el de los álbumes, en donde el texto queda reducido a la mínima expresión frente al predominio de dibujos. Los cuentos ilustrados en donde ya adquiere importancia el texto. Las pequeñas novelitas o cuentos extensos con valor literario. Y por último, los libros de materias diversas. (...) Se permite la entrada a todo niño que sepa leer, sea cual sea su edad (...) La sección juvenil, capaz para veinte lectores, posee unos 3.000 volúmenes.

A nivel de la Diputación de Barcelona, las Bibliotecas Populares entre 1945 y 1951, mejoraron sus servicios y su desenvolvimiento fue altamente satisfactorio a pesar de las dificultades. En 1949 se contabilizaron 176.445 lectores en sala, que leyeron 281.551 libros y 30.057 usaron el préstamo leyendo 81.551 obras. Pese al encarecimiento del libro, en 1949 ingresaron 2.882 volúmenes, de los cuales casi una cuarta parte las proporcionó la Junta. Para paliar la escasez de obras de interés actual y de técnica que constantemente pedían los lectores de los pueblos, éstos los proporcionó la Biblioteca Central a través del préstamo interbibliotecario. Los servicios y actividades se mantuvieron a un nivel muy apreciable gracias a la cualificación y entrega del personal que tenía a su cargo estas bibliotecas como muestran las Reuniones de Bibliotecarias, donde se compartían las prácticas profesionales. En todas se celebraba la Fiesta del Libro, se organizaban exposiciones, conferencias, se redactaron guías de lectura,...<sup>455</sup>

### **6.6.2. Las bibliotecas de las Cajas de Ahorros de Cataluña y Baleares**

En 1923 con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y la agonía de la Mancomunitat, la poderosa Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares recogió la antorcha dorsiana e inició como parte de su obra cultural, la creación de nuevas bibliotecas populares, inaugurando la primera de ellas en Santa Coloma de Farnés ese mismo año. A ésta

---

<sup>455</sup> XXV Reunión de Bibliotecarias. Resumen de la labor de las Populares en 1948 y XXVI Reunión de Bibliotecarias. Resumen de las populares durante 1949

siguieron las de Igualada, Vielha y Les en 1927; Sóller, Inca, Vic y Badalona en 1929; las de Berga, Lérida, Manacor, Lluchmajor, Seo de Urgell, Mahón e Ibiza, en 1930; las de Palma de Mallorca, Alayor, Ciudadela y Felanix, en 1931; las de Montblanc, Manresa, Vilafranca del Penedès, y Sant Feliú de Llobregat, en 1932; las Santa Coloma de Queralt, Muro, Torrelló, Banyoles y San Sadurní de Noya, en 1933; las de Tárrega, Torroella de Montgrí, Masnou, Petra y Son servera, en 1934; las de Andorra, Moià, Solsona, Cardona, La Bisbal, en 1935; y la de Balaguer, en 1936.

Entre 1940 y 1951<sup>456</sup> se inauguraron bibliotecas en Molins de Rey, Casa de Familia de Santa Madrona (Barcelona), Capdepera, Andraitx, Calaf, Falset, Gerona, Alaró, Artés, La Riba, San Celoní y Hospitalet. Dentro de este mismo periodo se instalaron en las barriadas de Barcelona de Pueblo Nuevo, San Martín (Clot), Horta y Gracia, que junto con las bibliotecas Braille del instituto Educativo de Sordo-Mudos y de Ciegos, y las otras bibliotecas especializadas y la de la “Asociación del Personal de la Caja de Pensiones de la Vejez” constituyeron “una digna aportación popular, científica y especializada en la capital barcelonesa”.

Al finalizar el año 1950 se contabilizaban 61 bibliotecas, 59 públicas más la técnica y la general, que realizaban una fecunda labor cultural, literaria, científica y artística. En ese año se mejoraron sus dotaciones, con un notable aumento de libros mediante adquisiciones periódicas por un valor de un millón de pesetas. Se dedicó especial atención a la formación de bibliotecas locales contribuyendo a la preparación e integración del Archivo histórico y del fondo bibliográfico de las más importantes bibliotecas de Cataluña y Baleares. Igualmente se prestó especial atención a las bibliotecas infantiles; se elaboraron guías de lectura, se organizaron conferencias y exposiciones y se celebró la Fiesta del Libro. En este mismo año fueron frecuentadas por 604.000 lectores de ambos sexos que leyeron y consultaron 722.000 volúmenes.

Las instalaciones de Barcelona capital: Poblet Nou, Clot, Horta y Gracia, recibieron este elogioso comentario de Alberto Viña<sup>457</sup>:

Locales amplios, con mucha luz, agradables a la vista, que cautivan por su grato ambiente de bienestar. Atendidas siempre por personal técnico y con gran calidad de libros de reciente adquisición. No hay que rellenar en absoluto ningún requisito para servirse de ellas, siendo todos los libros que poseen de libre acceso (...) No tienen establecido el servicio de préstamo a domicilio. No termina en la sala de lectura la labor de estas bibliotecas. Cada una de ellas es como la sección principal de la Casa de Cultura que se desarrolla a su calor, teniéndola por centro vital, y que, al extender su obra cultural, literaria y artística, con exposiciones, conferencias y actos diversos, hacen esperar que se conviertan en focos intelectuales de primer orden.

El ejemplo cundió entre otras entidades similares, especialmente dentro de Cataluña. Así hay que destacar la labor de la Caja de Ahorros de Sabadell que en 1928 inaugura su biblioteca pública, y durante el curso 1941-1942, organizó un servicio de bibliotecas escolares circulantes

---

<sup>456</sup> “Las bibliotecas populares y casas de cultura de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña”, en: *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, p. 134-140; GARCÍA EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura...*, Op. cit., pp. 168-170.

<sup>457</sup> VIÑA, ALBERTO, *Las bibliotecas de Barcelona*, op. cit., p. 15-16.

graduadas a base de lotes contenidos en armarios, que se comentará al hablar de las bibliotecas viajeras<sup>458</sup>.

A raíz de la reglamentación del Servicio Nacional de Lectura, en 1952, se estableció alguna relación entre cajas de ahorros y centros provinciales coordinadores de bibliotecas llegando en algunos casos a ser las artífices en su puesta en marcha como en Sevilla y Álava.

### 6.2.3. Las Bibliotecas Populares en Asturias

La iniciativa a la hora de crear bibliotecas populares en Asturias tuvo dos orígenes muy diferentes: una dentro de las labores socio-culturales que realizó la Residencia de Estudiantes, que incluía campañas de creación de bibliotecas populares que se empezó en 1917<sup>459</sup>, la otra, provino de los ateneos obreros.

La primera biblioteca popular creada en España, al calor de la Residencia de Estudiantes<sup>460</sup>, nació a principios de 1918, precisamente en Asturias, y fue la Biblioteca Popular Circulante de Cangas de Onís, y con ella puede decirse que surge un verdadero movimiento bibliotecario asturiano. Por la misma época, se hicieron la Biblioteca Popular Circulante de Avilés, la Biblioteca Popular Circulante de Luanco, la Biblioteca Popular Municipal de Mieres, la Biblioteca Popular Circulante de Llanes, se proyectó una en Sama de Langreo, y se incorporó al movimiento bibliotecario residencial la Biblioteca Circulante del Ateneo Obrero de Gijón, que se había fundado en 1904.

Fue tal el éxito que la Diputación Provincial destinó 7.500 pesetas a la celebración de un cursillo para la formación de los encargados de las futuras bibliotecas populares.

Por otro lado, está la labor bibliotecaria iniciada por los ateneos obreros que contó con el apoyo de algunos paisanos residentes en América y algunos mecenas indianos.<sup>461</sup> Pese a su calificativo de obreros, fueron sociedades interclasistas, promovidas por la burguesía reformista para la formación de los obreros manuales a finales del siglo XIX, y en la segunda década del XX, derivaron en sociedades muy abiertas con participación masiva de las clases medias y de sectores intelectuales, dedicados a la promoción de todo tipo de actividades culturales, incluso elitistas (fotografía, pintura, gimnasia, excursionismo, montañismo, ajedrez). En estos centros, la biblioteca circulante era la actividad permanente más requerida y utilizada por unos socios que pagaban una cuota.

---

<sup>458</sup> RIBAS. E. "La Biblioteca de la Caja de Ahorros de Sabadell. Bibliotecas escolares circulantes", *Biblioteconomía: Boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 3, nº. 11, 1946, pp.. 253-256

<sup>459</sup> No hubo reglas fijas para crear estas bibliotecas. Los promotores fueron conscientes de la rémora que suponía para el desarrollo de sus fines la existencia de una tasa de analfabetismo del 50% que había de incidir desfavorablemente en las dos funciones principales que encomendaban a las bibliotecas: enseñar a instruirse por medio de los libros, creando en los lectores un sentido crítico; y mantener vivos en los espíritus la curiosidad y el gusto por el conocimiento. Recomendaban una instalación modesta, aunque sana y limpia. En cuanto a los fondos bibliográficos, que debían adquirirse con los donativos en metálico que recogieron los promotores, se ofrecía una lista de obras seleccionadas en función de un principio liberal o humanista que atendía a la formación del individuo, y de otro principio utilitario que procuraba unos conocimientos de aplicación práctica.

<sup>460</sup> GARCÍA EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura...Op. cit.*, pp. 170-174.

<sup>461</sup> RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón, "Las bibliotecas y la lectura en Asturias: una aproximación histórica, en: *I Congreso de Bibliografía Asturiana*, 1989, pp. 528-533 y MATO DÍAZ, A. "A la cultura por la lectura: las bibliotecas populares", *AABADOM*, enero-junio 2004, pp. 34-36

Las lecturas<sup>462</sup> que se realizaron en estas bibliotecas evolucionaron desde el pensamiento filosófico y político contemporáneo y los manuales técnicos de fines del XIX a la literatura de evasión, galante y rosa de la tercera década del XX como registran los catálogos y los préstamos servidos.

Poco antes de iniciarse la guerra civil, había 79 ateneos en Asturias, algunos de ellos con importante biblioteca, como eran los casos de Arriendas, la Calzada –fundada en 1915-, La Felguera, Figaredo, Grado, Mieres, Noreña, Oviedo, Sama, Turón –inaugurada en 1926-, Valdecuna y Villaviciosa.

Destacó especialmente la Biblioteca Circulante de Castropol, inaugurada en 1922 con 158 volúmenes y que en 1933 llegó a contar con 4.300. A partir de 1926 llegó a tener filiales en Tol, Figueras, Seares, San Juan de Moldes, Piñera, Las Campas, Añides, Belmonte, Vilavedelle, y una estación en San Cristóbal, todas ellas entidades de población del mismo concejo, más otras filiales en La Caridad, La Veguilla, Paleiras y Vinjoy, ajenas al concejo. Estas bibliotecas filiales estuvieron formadas desde 1931 por lotes de unos 100 volúmenes enviados por el Patronato de Misiones Pedagógicas, y su éxito se debió a la renovación de estos lotes mediante la circulación de préstamos colectivos entre ellas.

Además de dar servicio gratuito de lectura en sala y de ofrecer generoso servicio de préstamo de hasta cuatro libros en una sola vez, desarrollaba otras actividades de extensión cultural como hora del cuento, teatro aldeano, concursos de canto y gaita, cine educativo, conferencias, conciertos,...

El alma de esta biblioteca, aunque siempre situado en un discreto segundo plano, fue Vicente Lorient Cancio, hombre culto, que dejó para otros la función de bibliotecario, mientras él realizaba todas las gestiones y mantenía excelentes y provechosos contactos con destacadas personalidades culturales para que favorecieron a la biblioteca de Castropol con sus envíos de libros, con sus conferencias, y con su apoyo en general. Llegó a organizar cuatro asambleas de bibliotecas del concejo.

La Biblioteca de Castropol quiso ser la primera de España en disponer de lo que ahora se conoce con el nombre de artoteca o colección de reproducciones pictóricas enmarcadas y destinadas al préstamo.

Otra biblioteca notable fue la de Ribadeo, inaugurada el 11 de diciembre de 1927, con el patronato inicial del catedrático de Derecho internacional Camilo Barcia Trelles, y de la que después de la guerra civil, fue alma el profesor y poeta Dionisio Gamallo Fierros.

Si las bibliotecas populares en España se habían concebido para llevar la lectura a la España rural, en el caso de Asturias, debido a la dispersión de la población, la mayor parte de ellas se establecieron en las villas cabecera de municipio, quedando pueblos y aldeas sin acceso al libro, de hecho, los usuarios de las bibliotecas de los ateneos obreros eran las clases trabajadoras de los núcleos urbanos de Asturias. Pero si a estas bibliotecas se añaden las municipales, y las creadas por las Misiones Pedagógicas, la oferta de lectura en Asturias desde fines del XIX hasta 1936 fue particularmente abundante.

Entre los problemas que acuciaron a las bibliotecas asturianas estaba la falta de medios económicos y el apoyo de personas influyentes sensibles a los problemas culturales para llevar

---

<sup>462</sup> Para saber más sobre la sociología lectora de estas bibliotecas ver: MATO DÍAZ, A. “La tradición lectora en España: las bibliotecas populares en Asturias”, *CEE Participación Educativa*, nº extraordinario, 2010, pp. 49-66

a cabo las actividades bibliotecarias o, tal vez, la prevención contra las bibliotecas populares por considerarlas sectarias y rojas. Por eso, se pidió que se diesen normas fijas para regular la concesión de subvenciones por parte de las Corporaciones Locales y Provinciales, para que quedasen al margen de las contingencias de la política y no a merced de la buena o mala voluntad de los que mandaran.

El movimiento bibliotecario asturiano es sólo comparable al catalán, incluso fue mucho más amplio y espontáneo que aquel, pues llegó a contar con 10 bibliotecas populares municipales, 21 en centros obreros, 15 en centros religiosos y 164 en ateneos y sociedades culturales durante el periodo de 1923 a 1937. Pero mientras las bibliotecas populares en Cataluña estuvieron promovidas institucionalmente desde la Generalitat, que financió la iniciativa y desarrolló un proyecto profesional de redes bibliotecarias comarcales, en Asturias la labor institucional es inapreciable (pequeñas subvenciones municipales o de la Diputación) y las iniciativas partieron de sectores empresariales reformistas, de la intelectualidad universitaria y de la buena acogida entre la clase obrera.

Ángel Mato<sup>463</sup>, cuando habla del movimiento bibliotecario asturiano lo califica de un hecho insólito en España, al poner en marcha una red de cientos de bibliotecas sin planificación previa, que se financia con las aportaciones de un pequeño grupo de socios protectores o con las cuotas de miles de socios lectores y que se dinamiza en toda la región gracias a un inusitado interés por todo tipo de manifestación cultural, con participación de todas las clases sociales

Su éxito hay que relacionarlo con las altas tasas de alfabetización regional y porque fue impulsado por una pujante burguesía reformista, comerciante e industrial, deseosa de transmitir a todas las clases sociales formación y cultura.

Este movimiento contó con una gran receptividad de amplios sectores de la población con perfiles sociológicos muy variados: clase media urbana, trabajadores asalariados de la industria, de la minería y del comercio. Las lecturas se practicaban tanto en los barrios industriales y en las villas mineras como en las aldeas rurales. Pero la mayor voracidad lectora se dio entre jóvenes, niños y mujeres jóvenes, sectores de población que habían accedido recientemente a la alfabetización.

Muchas de estas bibliotecas quedaron destruidas durante los sucesos revolucionarios de 1934 y particularmente durante la guerra civil, pero su implantación era tan notable que la actividad bibliotecaria en Asturias resurgirá con fuerza en los años cuarenta, creándose el Centro Coordinador de Bibliotecas, tomando como base las bibliotecas de los ateneos y las numerosas bibliotecas municipales como ya se ha visto.

#### **6.2.4. Las Bibliotecas Populares de Madrid**

Teniendo por marco los RD de 22 de marzo de 1912 y de 23 de octubre de 1915 ya citados, se crean las primeras bibliotecas en Madrid, una por distrito.<sup>464</sup>

Eran pequeñas Bibliotecas independientes unas de otras, a cuyo frente se colocaba un funcionario del Cuerpo Facultativo con atribuciones para administrar el presupuesto global

---

<sup>463</sup> MATO DÍAZ, A. "A la cultura por la lectura: las bibliotecas populares", *AABADOM*, enero-junio 2004, pp. 34-36

<sup>464</sup> GIRÓN, Alicia, *Las bibliotecas populares de Madrid... Op. cit.*, pp. 17-19.



que se recibía directamente del Ministerio y, que también, tenía libertad para seleccionar los fondos, aunque la Junta Facultativa podía darle instrucciones para adquisiciones sucesivas.

En la adquisición de las colecciones<sup>465</sup> se dio prioridad al criterio de instruir al obrero pero respondiendo a la diversidad de oficios. También se cuidó la dotación de obras de los escritores más conocidos en el momento (Blasco Ibáñez, Echegaray, Dickens o Verne). Los fondos hemerográficos también seguían los mismos criterios de adquirir revistas relacionados con los gremios laborales más atractivos.

En 1915 se inaugura en el distrito de Chamberí la primera Biblioteca Popular a cargo del facultativo Florián Ruiz Egea en el local de un grupo escolar, un año después y también en el marco de un grupo escolar arranca la de Inclusa. Al ponerse en funcionamiento las dos primeras bibliotecas, sus directores temieron su fracaso por estar enclavadas en barrios obreros, pero la realidad les sorprendió llenando las salas de lectura, con lo que desde el principio, en concreto la de Inclusa, se vio en la necesidad de tener que ampliar un local que solo tenía una capacidad máxima para 40 lectores<sup>466</sup>:

*Salta a primera vista la necesidad de ampliar el local en que en la actualidad nos desenvolvemos. Por término medio asisten a nuestra biblioteca en los meses de invierno que son los más concurridos de 150 a 180 lectores diarios cuando la cabida de las dos salas de la misma (de libros y revistas) es solamente de unos 65 a 70, dándose el caso, no solamente de estos que no hallen las debidas condiciones de holgura y comodidad, sino también de que nos veamos precisados frecuentemente a privar de la entrada a muchísimas personas, ocasionando en algunos casos, bien quejas o comentarios desfavorables (...).*

En la misma Memoria, se decía que era necesaria y utilísima la creación de una Sección Infantil, una sección circulante así como mejorar la sección de periódicos y revistas:

*Muy pobre es asimismo, la sección de periódicos y revistas, una por cierto de las más concurridas [...] y creemos que adquiriría esta sección un gran relieve, solamente con que pudieran figurar en ella, un periódico, el más importante o conocido, de cada una de las provincias; esto aparte, de las Revistas de especialización, por ejemplo, Revista de Arte, de Agricultura e industria, de fotografía y otras de artes gráficas, etc., solicitadas infructuosamente, por lectores con harta frecuencia, en unión de las más importantes revistas francesas e inglesas, toda vez que muchos de los obreros que nos visitan, conocen ambos idiomas.*

También se estimaba conveniente la apertura de una sala diferenciada de uso exclusivo para las mujeres dotada con una colección específica con obras de fisiología en general, y mecanografía, álbumes y dibujos de labores, recetarios de cocina, normas de higiene infantil, prontuarios de medicina doméstica,...

Paralelamente en 1919 se inicia en Madrid, dependiente del Ayuntamiento, un Servicio de Bibliotecas Circulantes y de los Parques, con la Biblioteca Circulante Literaria formada por 2.000 volúmenes, y el establecimiento de 2 bibliotecas en los Parques del Oeste y del Retiro.

---

<sup>465</sup> VALVERDE OGALLAR, P. "Leer en Madrid: 100 años de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid", *Mi Biblioteca*, nº 42, 2015, pp. 74-80.

<sup>466</sup> Memoria "Que sobre el origen y estado actual de la Biblioteca Popular de la Sección de la Inclusa, presentan a la Junta Superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos Jaime Lasala y Gravisaco y José de Góngora y Ayustante en 1916". Archivo BNE

Las Bibliotecas de los Parques funcionaban a pleno rendimiento en las estaciones de primavera y verano. En cada parque existían dos colecciones especializadas, una con las obras completas de Pérez Galdós y otra con las de los Hermanos Álvarez Quintero.

Todos los servicios que prestaban las bibliotecas circulantes y de parques eran gratuitos, y dejaban o regalaban los catálogos de los fondos a los usuarios para facilitar el pausado examen antes de pedir un libro. El lector debía acreditar la cédula de vecindad, el domicilio estable y conocido y entregar fotos para su identificación.

Estas bibliotecas circulantes acercaron el libro a los ciudadanos ya que sacaron el libro de los depósitos a la calle en busca de nuevos lectores, y de este modo consiguieron aficionar a un gran público a la lectura.

En la década de los años 20, la prensa se hace eco de la falta de más bibliotecas como las que ya funcionaban para dar respuesta *al apetito intelectual de la época y a la necesidad de formación*, después de la instrucción que se recibía en la enseñanza regular. A estos objetivos de facilitar la lectura pública responderán la creación de cuatro bibliotecas más: Buenavista, La Latina, Hospicio y Hospital, creándose las bases para la apertura de José Acuña.

El 1 de noviembre de 1922 comienza a funcionar la Biblioteca de Buenavista (calle Don Ramón de la Cruz) instalada en un edificio aislado con condiciones suficientes para ubicar una sección reservada para los niños y otra destinada a los lectores de periódicos. Además contaba con una galería abierta que se pensaba reservar para la lectura al aire libre. En esta misma Biblioteca, su director Amadeo Tortajada pidió permiso para iniciar una tertulia literaria.

En la calle San Oprobio 18, en el distrito de Hospicio se instala la cuarta Biblioteca popular madrileña a cargo de Carlos Huidrobo. Local moderno, espacioso y claro con Sección juvenil. Como novedad se organizaron, a cargo de su director, en esta biblioteca varios ciclos de conferencias de vulgarización científica, literaria, artística y de curiosidades de la vida práctica; de iniciación y de orientación cultural, por personas de gran autoridad en las respectivas materias, haciéndose uso del aparato de proyecciones y del cinematógrafo de salón.

La década se cierra con la apertura en 1925 de la Biblioteca del distrito Latina en la calle Mayor 71, a cargo de José M<sup>a</sup> Castrillo y en 1927 la Biblioteca de Hospital en el populoso Paseo de las Delicias, 22.

Resumiendo, en 1926 existían cinco Bibliotecas Populares: Chamberí, Inclusa, Buenavista, Hospicio y Latina, dirigidas respectivamente por los señores Ruiz Egea, Góngora, Amadeo Tortajada, Carlos Huidrobo y José María Castrillo, elegidos por O.M. de la Dirección General de Bellas Artes, para seleccionar los fondos de la sexta Biblioteca Popular de Madrid: la de Hospital, más tarde llamada López de Hoyos. La siguiente, y última durante muchos años, fue la de Centro, llamada "José Acuña", se le asigna un crédito de 30.000 pesetas para la selección del fondo inicial y pese a que la O. M. de 21 de noviembre de 1929 autorizaba su apertura hasta 1931 no comenzó a funcionar.

Esta Biblioteca<sup>467</sup> reunía excelentes condiciones de modernidad y de situación incomparable, en la Gran Vía, Avenida de Eduardo Dato, a dos minutos de la Puerta del Sol, próxima a la Universidad Central, Instituto del Cardenal Cisneros, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de idiomas, se halla en plena zona escolar, como acredita su numerosa asistencia de jóvenes

---

<sup>467</sup> Huidrobo y Viñas, Carlos. "Las bibliotecas populares de Madrid", *Boletín de Bibliotecas y Bibliografía*. Tomo II, Julio-septiembre 1935.

estudiosos de ambos sexos, no faltando obreros y niños y personas de toda edad y condición social que han recibido con gran satisfacción.

Según Huidobro constaba de un espléndido local de unos doscientos metros cuadrados, con abundante luz, buena ventilación, calefacción central, etc., distribuido en cinco departamentos: tres magníficas secciones para el público. La primera, destinada a la lectura de obras de estudio y consulta, la segunda, la de Literatura en todas sus ramas y la tercera, dividida en dos partes: una destinada a la Sección infantil, y otra para Revistas, Catálogos, Guías, etc. Entre todas las secciones la biblioteca tenía una capacidad para 94 lectores.

Aunque cada una de estas Bibliotecas Populares gozaba de plena autonomía, desde 1929 se instauró una Junta formada por los directores, del cuerpo facultativo, para coordinar la selección de fondos. Las Bibliotecas Populares de Madrid marcaron la pauta del desarrollo de las bibliotecas públicas españolas. Querían ser bibliotecas para todos, no sólo para estudiantes, con amplios horarios, bien señalizadas, con colecciones adecuadas y, en fin, con bibliotecarios muy motivados para realizar una gran obra cultural.

Este era el panorama de las Bibliotecas Populares de Madrid en julio de 1936: siete centros jóvenes y pioneros en el establecimiento de un incipiente sistema bibliotecario en la capital de España.

Al iniciarse la guerra<sup>468</sup> una de las primeras medidas de la Comisión Gestora del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos fue suspender provisionalmente los préstamos de todas las Bibliotecas públicas, y además se pidió que todos los bibliotecarios en activo fuesen a trabajar a la Biblioteca Nacional para colaborar en la ordenación y catalogación de los libros incautados. A pesar de esta orden, los responsables de las Bibliotecas Populares de Madrid intentaron mantener abiertos sus servicios.

Finalmente, el 12 de febrero de 1937 se disponía el cierre al servicio de la mayoría de los establecimientos de Madrid entre los que se incluían las Bibliotecas Populares.

A pesar de esta orden de cierre, parece que a partir de mayo se intentó abrir algunos servicios bibliotecarios en Madrid pues se conserva documentación que prueba alguna actividad, como el restablecimiento del servicio de préstamo de libros en la Biblioteca de Hospicio, la adjudicación de créditos presupuestarios a cada Biblioteca<sup>469</sup> o la reintegración de algunas personas a sus destinos en cada Biblioteca.

Entre noviembre de 1937 y abril de 1939 Bonifacio Chamorro, facultativo de la Universidad, asumió la dirección de "José Acuña" y se encargó de vigilar las Bibliotecas cerradas de Hospital, Inclusa, Latina y Chamberí y fundar dos Bibliotecas Circulantes en las barriadas de Prosperidad y Ventas. Estas dos últimas se crearon para dar servicio de biblioteca a la población que se había desplazado a la parte noroeste de la ciudad por ser más segura.

En diciembre de 1938 esta era la situación de las Bibliotecas Populares: en Acuña: se había suspendido el servicio de lectura en sala, pero funcionaba el préstamo que Bonifacio Chamorro

---

<sup>468</sup> TORRES SANTODOMINGO, M. La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, Tesis , UCM, 2011

<sup>469</sup> Documento fechado en Madrid a 31 mayo 1937 a propuesta del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico asignar las siguientes cantidades con destino a las Bibliotecas Populares de Madrid: 3000 pesetas para 1 auxiliar administrativo y 1.825 para la mujer de la limpieza a las bibliotecas de Hospicio, Buenavista, Inclusa y Latina y de 1.825 para la mujer de la limpieza a las bibliotecas de Chamberí; Hospital y Acuña. Archivo General de Educación

revitalizó; Incluso, La Latina y Hospital permanecieron cerradas; en Chamberí, durante unos meses se quiso organizar en esta Biblioteca otro servicio de préstamo como el de Ventas o Prosperidad pero las dificultades de personal, material y reposición de libros hicieron desistir de su propósito inicial. Por su parte, las recién creadas bibliotecas circulantes de Las Ventas y Guindalera-Prosperidad funcionaban con gran éxito de público y préstamos.

Tras finalizar la guerra y normalizarse las actividades culturales de la capital<sup>470</sup>, se unifican los servicios con objeto de centralizar la gestión, por ello se crea la Dirección de Bibliotecas Populares por Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1941, con una plantilla de 3 funcionarios facultativos adscritos a la Dirección y 7 auxiliares de biblioteca uno para cada centro, 4 administrativos privativos de estas bibliotecas, 1 administrativo del MEN y 17 subalternos. La Dirección se instala en la antigua Biblioteca de Centro “José Acuña” y su director será José María Castrillo hasta 1953. Pero esta escasa plantilla a poco menos de un año se quiso reducir como muestra esta petición de la Dirección<sup>471</sup>:

La gran labor cultural que realizan las Bibliotecas Populares de Madrid puede verse comprometida aunque sea pasajeramente si se lleva a efecto inmediatamente la reducción a su mitad del personal administrativo (Decreto 1º agosto 1942) y también quedaría gravemente perjudicado el servicio si no continuaran en las Bibliotecas Populares aquellos funcionarios administrativos que han dado pruebas relevantes de su entusiasmo y compenetración con la modalidad peculiar del servicio de las Bibliotecas Populares. Por ambas causas esta Dirección solicita que provisionalmente y durante el breve tiempo que tarde en acoplarse la nueva organización a la nueva plantilla, sean 5 los funcionarios administrativos dependientes de la Dirección de las Bibliotecas Populares de Madrid.

De cómo se debía trabajar en las Bibliotecas, nos informa esta Orden de 22 de enero de 1944 dirigida tanto a los auxiliares como al Jefe del Servicio<sup>472</sup>:

(...) a la apertura del servicio acudan mínimo dos personas; recordar al personal las siguientes normas: los libros deben ser restituidos a su sitio inmediatamente después de su devolución salvo que haya que atender la portería o la vigilancia, prohibido sostener conversación ni con compañeros ni con lectores, así como dedicarse a la lectura de periódicos o libros durante las horas de servicio. Todo el personal administrativo y subalterno tiene que cubrir el horario de 16 a 21:15.

También disminuyeron sus asignaciones presupuestarias<sup>473</sup>. Antes de la guerra, las Bibliotecas tenían asignados 50.000 pesetas para material ordinario y 17.000 para luz y calefacción. En 1940 desaparecieron ambas consignaciones privativas de las Populares y su importe pasó a formar parte dentro de una dotación general de 86.700 pesetas para material de todas las Bibliotecas Populares y Públicas, a distribuir por la Inspección General de Bibliotecas. La consecuencia fue un colapso económico de las Bibliotecas Populares que se llenaron de deudas para poder sostener un servicio raquítico. En 1951 se percibió para material no inventariable 45.200 pts. y para adquisiciones y otras atenciones 10.000 pts. Si se compara esta dotación con la de antes de la Guerra y se tiene en cuenta el aumento sufrido por todos

---

<sup>470</sup> Memoria de los XXV años de Paz. Archivo Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

<sup>471</sup> Archivo General de Educación . Signatura 51.863 y 51.864

<sup>472</sup> Archivo General de Educación. Signatura 51.864.

<sup>473</sup> Memoria XXV años de Paz. Archivo Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

los precios, era fácil llegar a la conclusión, de que las Bibliotecas Populares de Madrid, hicieron un verdadero esfuerzo para solo subsistir-

Los locales eran viejos y ruinosos y con esfuerzo y paciencia se intentó modernizarlos dentro de las limitaciones existentes y además padecieron deficiencias en el servicio a causa de restricciones en el suministro del alumbrado.

También se tuvo que luchar por restituir su horario anterior (de las 16 horas a las 22 ), ya que se impuso por imperativo legal (Orden 265 noviembre de 1940 que disponía que todo servicio público debía cerrarse a las 20 horas) la apertura de 15 a 20 horas, no teniendo en cuenta que de 15 a 16 horas apenas había lectores y sí se frecuentaba más las bibliotecas de 20 a 22. Al final se estableció un horario de 14 a 21:15 horas.

Son tiempos difíciles que se dedicaron en gran medida a las depuraciones de fondos de carácter político-religioso. Los 60.961 volúmenes que componían el stock de las siete Bibliotecas Populares de Madrid se convirtieron en 35.000. Posteriormente incrementaría poco a poco sus fondos con los lotes de libros procedentes de la Junta.

Respecto a los fondos anteriores a 1941, aunque un pequeño lote de libros resultaba común en todas las bibliotecas, la casi totalidad de sus fondos, era específicamente diversa como consecuencia de la distinta antigüedad de la creación de cada centro y del distinto criterio del personal que lo había dirigido por, lo que se pensó en unificar los fondos de todas y cada una de estas bibliotecas en un fichero Central. Para llevar a cabo esta unificación y puesto que las fichas estaban redactadas a mano se vieron obligados a trasladar a máquina las fichas manuscritas, y se comenzó a clasificar los libros por las dos primeras cifras de la clasificación decimal, labor que fue llevándose a cabo entre 1939 al 1952.

Se inició la normalización y la centralización de los catálogos, organizándose un catálogo colectivo en fichas de tamaño octavilla, que además de los datos bibliográficos reseñaba las Bibliotecas que poseían cada ejemplar.

Comenzó a utilizarse la CDU como sistema de clasificación de los fondos, que además se dividieron en tres categorías según su clasificación moral: a) aptos para todos los públicos, b) no aptos para jóvenes y c) para adultos, con advertencia de encerrar algún peligro de orden moral. Estos grupos se distinguían con tejuelos de colores.

En cuanto a los servicios parece que la circulación de libros tardó en volver a funcionar como muestra este documento firmado por Bordonau el 19 de febrero de 1946:

Próxima la inauguración del servicio de préstamo de libros en las Bibliotecas Populares de Madrid, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas ha tenido a bien autorizar a la de las Bibliotecas Populares de Madrid a percibir 2 pesetas por cada tarjeta anual del Servicio de Préstamo y 0,25 por cada día de retraso en la devolución; ingresos que se destinarán a los gastos que originan las encuadernaciones y reposición de libros perjudicados por el uso. También autoriza a percibir en depósito 0,50 al otorgar un préstamo de libros para gastos de correspondencia si diera lugar al aviso de demora de entrega<sup>474</sup>

O en el cuestionario que se elaboró para que respondieran los directores de las bibliotecas, en mayo de 1950, para redactar la Memoria anual se dice que se tengan al día los ficheros de la Sección circulante para cuando se dé orden de comienzo de este servicio.

---

<sup>474</sup> Archivo General de Educación. Signatura 51.864

Estaba claro que se primó la lectura en sala y no sería a partir de 1954 con la nueva Dirección, en la persona de Elena Amat, cuando se convirtió en interés primordial el préstamo de libros.

No puede ser más desolador el balance de la lectura pública en la capital, que vio disminuir sustancialmente el número de lectores. En 1934 la Biblioteca “José Acuña” registró 47.570 lectores y 47.818 volúmenes servidos. En 1943, después de tres años de finalizada la guerra, los lectores y los volúmenes servidos seguían siendo inferiores (41.633 lectores y 41.633 volúmenes servidos).<sup>475</sup>

La falta de bibliotecas municipales en Madrid capital durante estos años se pone de manifiesto en dos documentos recogidos en el Archivo de Villa. Uno es un informe<sup>476</sup> elaborado por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid en 1947 proponiendo la creación de bibliotecas públicas municipales de distrito o barrio. No especifica cuántas ni dónde y se limita a una serie de consideraciones generales previas a la hora de planificar, siendo desestimado por falta de “partida expresa a la que tenga aplicación el gasto de 75.000 pesetas que se propone”. Los motivos que llevan a redactar este informe son muy significativos:

Es obvio que, pese a constituir Madrid el centro intelectual de la nación, se halla insuficientemente dotado en este sentido, ya que existe una masa de lectores muy superior a la capacidad de desenvolvimiento de las Bibliotecas de la Capital. Valiéndonos de un ejemplo, notaremos que el cine satisface en cierto modo una necesidad espiritual y si se observa el plano de Madrid, existen en él abundantemente locales de proyección distribuidos en toda su superficie y convenientemente emplazados; sus características responden a aquellas propias de la zona en que radican y a las posibilidades de su vecindario, apoyando su éxito en la propaganda y en la adaptación a los gustos del público. Señalando en el plano de esta capital todas las bibliotecas existentes advertiremos que su número y distribución son insuficientes, sin corresponder a las necesidades y características del público lector, ya que, por añadidura, éste no se integra en una masa homogénea.

El otro documento<sup>477</sup> corresponde a una iniciativa privada por parte de la Editorial Purcalla proponiendo la adquisición por el Ayuntamiento de cinco bibliotecas populares en los parques madrileños: dos infantiles en la Chopera y Jardines del Hospicio y tres para adultos en el Parque del Oeste, en el de la Arganzuela y en el Retiro. El proyecto también es desestimado. La propuesta era presentada en forma de tríptico con planos y especificaciones de todo el mobiliario, incluyendo hasta los más mínimos detalles.

La Editorial Purcalla en su deseo de contribuir al propósito señalado por nuestro Caudillo, de conseguir un elevado nivel para la Enseñanza Media de los españoles, inaugura una nueva sección de su negocio editorial ofreciendo a los organismos estatales, provinciales, municipales y del Movimiento, y asimismo a las empresas privadas, la posibilidad de tener en breve tiempo montada una biblioteca popular completa, esto es, edificio, mobiliario y libros. El tipo de biblioteca corresponde a las necesidades de núcleo de población de 5.000 a 10.000 habitantes. (...) Esta biblioteca se ha estudiado con posibilidades de ampliación y pensando en su eventual utilización, como local para dar clases y conferencias. Su capacidad es para 2.500 a 3.000 volúmenes, 18 lectores, 60 alumnos o 150 oyentes. El precio todo comprendido, es exactamente el de 180.000 pesetas.

Testimonio posterior de la deficiente situación de las Bibliotecas públicas en Madrid, es este discurso del nuevo Director General de Archivos y Bibliotecas el día de la Fiesta del Libro de

---

<sup>475</sup> Archivo General de Educación. Signatura 51.863 y 51.864

<sup>476</sup> AVM 32.228-49.

<sup>477</sup> AVM 32.228-33.

1952<sup>478</sup> en el que se pone de manifiesto el uso de la Biblioteca Nacional por parte de usuarios que no tienen bibliotecas públicas donde acudir:

Por otro lado, las bibliotecas populares de Madrid, que son siete y que son estatales, no municipales, están concebidas para un Madrid pequeño, y no para este Madrid que está creciendo a pasos agigantados y transformándose en proyectado gran Madrid, con la anexión de una serie de pueblos –algunos de los cuales tienen pequeñas bibliotecas, a su vez insuficientes– y por lo tanto el problema de la lectura de las bibliotecas populares tampoco está resuelto. Como directa consecuencia de ello, vienen aquí un conjunto de lectores que no son específicamente los que normalmente debe tener la Biblioteca Nacional.

En 1954 al asumir la Dirección de las Bibliotecas Populares Elena Amat, después de trece años de existencia de la Dirección, esta era la precaria herencia recibida:

En 1954 las siete Bibliotecas Populares existentes cuya reorganización me fue encomendada se encontraban instaladas en viejos locales, mal conservador, carentes del alumbrado necesario y de servicios, con deficiente o nula calefacción y con un mobiliario en mal estado lo que presentaba un aspecto tan poco atractivo que retraía a los lectores, dificultando extraordinariamente a las Bibliotecas el cumplimiento de uno de sus fines, la lectura en Sala<sup>479</sup>.

Ciertamente comprendí que con 7 Bibliotecas no podían llenarse las necesidades de una población de 2.000.000 de habitantes, sin embargo no siendo posible de momento crear el número de bibliotecas que exigiría este núcleo de población, debía al menos, tratarse por todos los medios de reestructurar las existentes, renovando sus instalaciones y sus fondos bibliográficos<sup>480</sup>.

Varios son los interrogantes, para una futura investigación, que se pueden plantear ante esta situación tan deficiente. ¿A qué se debió esta falta de interés de las autoridades políticas y los responsables en materia bibliotecaria por las bibliotecas públicas de la capital? ¿Su dependencia directa del Estado las perjudicó? ¿No tuvieron en esta década un Director a la altura, más comprometido e interesado en recuperar ese espíritu con el que nacieron? ¿Por qué pasaron a depender directamente del SNL y no se integraron en el Centro Coordinador de Bibliotecas de Madrid?

### 6.2.5. Otras localidades

En 1951 este era el mapa de las llamadas Bibliotecas Populares. 7 en Madrid ; en Barcelona 24 de la Diputación y 45 de la Caja de Pensiones; y otras 22 entre las provincias de Cartagena, Ceuta, Granada, Huelva (3), Murcia, Salamanca, Santiago de Compostela, en Valencia (2) y otras dos en Valladolid<sup>481</sup>.

En las barriadas de la capital de Huelva se instalaron tres Bibliotecas Populares: Las Colonias, Biblioteca de Estudios Politécnicos y José Antonio. Establecidas o proyectadas en barriadas populosas de la capital, en zonas, salvo la de José Antonio, de elevado número de analfabetos y destinadas a un público constituido en su mayoría por obreros. Ofrecían algunos matices

---

<sup>478</sup> SINTÉS OBRADOR, Francisco, “23 de abril de 1952 Fiesta del Libro en la Biblioteca Nacional. Discurso del Director General de Archivos y Bibliotecas”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, año 1, n. 2, 1952, p. 9-10.

<sup>479</sup> Memoria anual de las Bibliotecas Públicas de Madrid. 1959, firmadas por Elena Amat. Archivo de la Unidad de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid

<sup>480</sup> Actividades del periodo comprendido entre 1954 y 1963. Elena Amat. Archivo de la Unidad de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid

<sup>481</sup> PÉREZ-RIOJA, J.A. *Moción informativa sobre Centros Provinciales...* Op. cit., p. 86

diferenciales: en las Colonias predominaba el carácter educativo; en los Estudios Politécnicos, lo social se une a lo docente; en José Antonio (nueva barriada de viviendas protegidas muy distante de la ciudad) se implantó el préstamo de libros a domicilio desde el principio, y para una cuarta, la de San Sebastián, se pensó en una sección taurina.

En Zaragoza se establecieron cuatro “Secciones Populares”<sup>482</sup>:

“Miguel Artigas”, creada por la orden de 18 de noviembre de 1920, funcionado primeramente en locales de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza hasta 1923, que fue instalada definitivamente en un edificio de propiedad estatal, que compartía con las Escuelas de Artes y Oficios, Comercio y Peritos Industriales. En el año 1948, al crearse la entidad Biblioteca Pública de la Ciudad y el Centro Provincial se convierte “central” de toda la organización provincial.

“San José”, creada por Orden del Ministerio de Educación Nacional el 5 de noviembre de 1945 e inaugurada el 11 de marzo de 1946. En 1948 se integra en la entidad Biblioteca Pública de la Ciudad, realizándose una total reforma de sus locales e instalaciones, de propiedad privada, que la transformaron en una atractiva y funcional biblioteca

“Miguel de Cervantes,” enclavada en una de las zonas del magnífico ensanche de Zaragoza habitada principalmente por clases sociales acomodadas. Creada por la Orden del Ministerio de Educación Nacional 16 de septiembre de 1947, época en la que el Ayuntamiento comenzó a prestar atención a los servicios bibliotecarios, y prueba de ello fue el acuerdo de reservar en un magnífico bloque de viviendas que acababa de construirse, unos locales para la proyectada biblioteca que, por su original y armónica estructura y bellas instalaciones dio lugar a “una grata y atrayente biblioteca”. Inaugurada el 16 de octubre de 1947.

“Delicias”, su instalación representó la satisfacción de una necesidad de años atrás sentida en uno de los sectores urbanos más populosos de Zaragoza, en el que, por estar habitado por gentes de actividades variadas: empleados, comerciantes, pequeños industriales, técnicos y productores, esta biblioteca constituyó un insustituible y eficaz instrumento de ayuda y perfeccionamiento profesional. Su consecución, intentada en varias ocasiones, se hizo posible con la constitución de la entidad Biblioteca Pública de la Ciudad, pues merced a la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza se pudo habilitar un local en un Grupo Escolar de su propiedad, situado en el lugar más céntrico del barrio. Las obras de adaptación corrieron a cargo de la Corporación Municipal y la Dirección General de Archivos y Bibliotecas concedió un crédito de 32.000 pesetas, que permitieron una sencilla pero bella y funcional instalación, y para la formación de sus colecciones iniciales, un importante lote bibliográfico que se seleccionó por el Patronato para que fuera lo más adecuado a los usuarios que iba destinado. Fue inaugurada el 21 de octubre de 1951.

## **6.3. LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

### **6.3.1. Marco jurídico**

Las leyes municipales y provinciales del XIX guardan silencio sobre la competencia local sobre las Bibliotecas, pues en esta época la acción del Estado a nivel territorial se concibe aislada de las demás fuerzas sociales que actúan en el territorio. Y los Reales Decretos de 1858 y de 1867 fundamentales en esta materia, no contemplan la articulación Estado-Entes locales en el

---

<sup>482</sup> XIMÉNEZ de EMBÚN y CANTÍN, Luis, *La organización bibliotecaria provincial zaragozana*, Zaragoza, Librería General, 1959, pp. 149-155



campo cultural. El Estado se extiende a las provincias y municipios, contando sólo con los Entes locales para que apoyen financieramente sus actuaciones<sup>483</sup>.

Más pervivencia y eficacia sí que tuvo el R.D. de 6 de febrero de 1926, instituyendo el “Día del Libro Español”. Según Gustavo Gili Roig<sup>484</sup>, el alcance de este texto es mucho mayor de lo que su título permitiría suponer.

“Se trataba no sólo de instaurar en España la simpática fiesta que tanto arraigo tiene en la actualidad después de 18 años de celebración ininterrumpida, sino que, además el legislador se proponía inequívocamente sentar unas bases razonables para ir incrementando los fondos bibliográficos del país. En el art. 9º se estatuye la obligación de que las entidades y corporaciones que perciban subvención del estado, la Provincia o el Municipio dediquen, el Día del Libro, un mínimo del 1% de tales subvenciones a la compra y reparto de libros. El art. 10º impone a las Diputaciones provinciales la obligación de crear cada año, en aquel día precisamente, por lo menos una Biblioteca Popular dentro del territorio de su respectiva provincia. Finalmente, en el segundo párrafo del mismo art., se prevé que los Ayuntamientos destinarán una cantidad del 0,5 al 3 por 1.000, según el presupuesto y nº de habitantes, para la creación de Bibliotecas Populares o el reparto de libros en sus establecimientos de enseñanza o de beneficencia. Estas acertadas disposiciones no han surtido todo el efecto deseable, en parte por apatía de los dirigentes de las corporaciones locales, pero en parte también porque los Gobiernos que sucedieron a Primo de Rivera no se cuidaron de ir estructurando con disposiciones y reglamentos complementarios las normas que genéricamente se señalaron entonces. El Nuevo Estado puede y debe hacer suyo el R.D.”

Será necesario llegar a los tiempos de la II República para atisbar un principio de coordinación de la acción bibliotecaria de todas las Administraciones, aunque sólo sea en algunos aspectos. La Junta de Intercambio por la vía de la subvención, inspeccionaría el funcionamiento de las bibliotecas escolares (creadas por Decreto de 7 agosto 1931) y de las municipales (Decreto 13 junio de 1932).

Con el Decreto 13 junio 1932 sobre creación de bibliotecas municipales, que se mantuvo vigente hasta 1952, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes estableció que “*Cualquier Municipio español, en cuyo término no existía Biblioteca Pública del Estado, puede solicitar de la JIAL la creación de una Biblioteca municipal*”. Se insistía en la difusión de la cultura y el fomento de la lectura pública en localidades rurales y el Estado involucraba obligatoriamente a las autoridades municipales, que anteriormente se habían mostrado reacias a colaborar con las bibliotecas de Misiones. De este modo cualquier municipio, en cuyo término no existiera una biblioteca pública del Estado, podría solicitar a la Junta el establecimiento de una biblioteca. El acceso a ésta era libre y gratuito para todos los habitantes del término municipal. Debía permanecer abierta al público un mínimo de cuatro horas diarias y dedicar al menos una sesión de préstamo a la semana. Las bibliotecas actuarían como un servicio autónomo, estarían dirigidas por una Junta con presencia de la sociedad civil y se clasificarían en dos categorías conforme al nivel profesional de su director, y sólo obligaban al Ayuntamiento a ofrecer un local conveniente.

Hasta entonces no se había llegado a utilizar oficialmente el título de Biblioteca Pública Municipal, y fue la Junta, quién en aplicación del mencionado texto legal, estableció mediante

---

<sup>483</sup> el Decreto de 18 enero de 1869, que crea las Bibliotecas populares considera los libros remitidos por el Estado como propiedad inalienable y el Real Decreto de 5 mayo de 1859 señala las cantidades que las provincias debían destinar a las bibliotecas provinciales.

<sup>484</sup> GILI ROIG, Gustavo. *Bosquejo de una política del libro*, Barcelona, Gustavo Gili Roig, 1944, pp. 54-55.

una circular las normas para solicitar Bibliotecas Públicas Municipales, acuñando así un término oficial.

Más ambicioso fue el Plan Moliner (puesto parcialmente en vigor por Decreto 13 noviembre de 1937) que estructuraba las biblioteca públicas en una red provincial, comarcal, municipal y corresponsales en función del número de habitantes.

En todo caso, persistía la indefinición de las competencias públicas sobre las bibliotecas. Por ello, cuando se traspasó a la Generalitat de Cataluña los servicios bibliotecarios se tuvo que acudir a la enumeración concreta de las bibliotecas estatales que se transfirieron.

Más tarde, con la Ley de Régimen Local, apartado f) en la Base 11<sup>485</sup>, los Ayuntamientos tenían entre sus fines, que no obligaciones, el servicio de bibliotecas, además de los derivados de lo establecido en el RD de 6 febrero de 1926 y Real Orden complementaria de 31 de agosto del mismo año, arriba mencionados, con lo cual ni siquiera aclaraba que la biblioteca fuese servicio autónomo del Municipio.

Es necesario llegar a 1947 para que se declare la competencia estatal para planificar, controlar, dirigir e inspeccionar<sup>486</sup> los servicios culturales prestados a través de cualquier Archivo y Biblioteca. El decreto de 24 julio de 1947 afirma que incumbe al Estado la conservación y acrecentamiento del Patrimonio histórico documental y bibliográfico de España quienquiera que sea su poseedor (art. 49), pero no hay una afirmación expresa de que los Archivos y Bibliotecas Públicas sean servicio público.

Por otra parte, todos los Archivos y Bibliotecas de carácter civil de la Administración Central, Provincial y Local (art. 19) quedan sujetos a la dirección superior de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas que podrá hacer visitas de inspección a cualquier Archivo o Biblioteca de carácter civil del Estado, Provincia o Municipio (art. 35). Mas las posibilidades que brindaba este decreto quedaron frustradas por el mantenimiento por parte de la Administración de técnicas y rutinas heredadas. Por lo pronto hubo que esperar a que se reglamentase y estableciese la normativa que iba a hacer posible una colaboración entre el Estado y las Corporaciones locales para realizar en común una política bibliotecaria, pero con el Decreto de 4 julio 1952 se subvierte el criterio de la ordenación de Bibliotecas, al poner el acento en la organización centralizada.

Estas bibliotecas tuvieron más de públicas que de municipales, porque la ley no las obligó, a ser un servicio municipal sostenido con fondos públicos, como el agua potable, alcantarillado, alumbrado público, etc.

Como no sólo se dejaba a la iniciativa de los Ayuntamientos la petición de la biblioteca sino, lo que es peor, su sostenimiento, sin obligación alguna de hacerlo, salvo en lo dispuesto en el RD de 6 febrero para fondos bibliográficos, puede afirmarse que su financiación municipal fue pobre. En cuanto a la estatal, la Junta no pasaba de enviar el lote bibliográfico de la fundación,

---

<sup>485</sup> En la Ley de Bases del Régimen Local de 17 de julio de 1945 se atribuía a las Diputaciones Provinciales el fomento de la cultura y se hacía una referencia expresa a las Bibliotecas.

<sup>486</sup> “Art. 38. A partir de la promulgación de este Decreto para fundar bibliotecas de las comprendidas en el art. anterior (que faciliten lectura en sala pública o a domicilio), será necesaria la autorización del Ministerio de Educación Nacional al que competen las funciones de inspección y vigilancia de la misma”.

cuyo valor material no podría ser mucho, cuando estaba compuesto entre 500 o 1200 volúmenes de media.

En cuanto a los Ayuntamientos, los secretarios fueron celosos cumplidores de la contribución presupuestaria para compra de libros que les señalaba la RO de 1926 en aplicación del Día del Libro, pero todas las demás ayudas para la Biblioteca Pública Municipal figuraron casi siempre en el capítulo de subvenciones a terceros como prueba evidente de que el Ayuntamiento no se sentía obligado a cumplir ninguna obligación bibliotecaria, especialmente en lo que se refería a personal. Para éste se reservaba el procedimiento de la gratificación por vía de la Junta de Biblioteca, mediante el cual era fácil ampliarle los ingresos a un empleado municipal. Si la gratificación era pobre, la designación recaía en el alguacil, pero si era importante podía recaer en el mismo Secretario. Sin embargo, abundaron los abnegados, que hicieron el trabajo desinteresadamente y ni siquiera reclamaron la percepción de la mísera cantidad reservada para su trabajo en el presupuesto de la biblioteca, aunque hubo Ayuntamientos ejemplares<sup>487</sup>.

### **6.3.2. Situación de las bibliotecas municipales tras la guerra civil**

La II República a través de la Junta llegó a crear unas 230 bibliotecas públicas de ámbito municipal entre 1933 y 1938. El criterio que prevaleció<sup>488</sup> fue favorecer a los municipios que tuviesen más habitantes para llevar el libro a las localidades de población intermedia o amplia. La JIAL no pretendía formar bibliotecas municipales uniformes de acuerdo con el decreto de creación, sino atender a las necesidades de cultura, economía y población de cada municipio. Pero se optó por enviar en 1933 una biblioteca tipo de carácter enciclopédico con 300 volúmenes. Con esta colección se cubrían las primeras necesidades de los municipios de 1.000 a 3.000 habitantes. El reparto trató de ser equilibrado, pero varió en relación con el número de peticiones recibidas y las características de las mismas, llegando a ser Teruel la provincia donde más bibliotecas se instalaron, 39 en total, mientras que en ninguna otra provincia se alcanzaron las 10. Muchas solicitudes fueron descartadas por documentación incompleta, o porque no cumplían las condiciones exigidas.

Mucha importancia se dio al servicio de inspección de las bibliotecas municipales con el objetivo, no sólo de enseñar a los encargados el manejo de los fondos, sino de implicar a las juntas rectoras en la difusión y ampliación de las bibliotecas y entablar contacto con los lectores, sino, además, con la inspección se pretendía desarrollar una labor de colaboración, consejo y estímulo para que las bibliotecas públicas municipales se convirtiesen en una institución cultural y activa de la vida local.

Pero la Junta de Intercambio en su intento de implicar a las autoridades municipales en la marcha de la biblioteca y al nombrar los miembros de las juntas de las bibliotecas en relación con sus cargos políticos, sometió a las bibliotecas a los vaivenes de la política municipal que reflejaban los conflictos socioeconómicos de los pueblos. Esta circunstancia representó la mayor amenaza para su continuidad ya que no tenían entidad propia, ni autonomía que las mantuviese al margen de los cambios políticos. Por tanto, la orientación política y las disponibilidades económicas de los Ayuntamientos determinaron la actitud y la actuación de los municipios ante las nuevas bibliotecas creadas por Misiones y por la JIAL.

---

<sup>487</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis. "Las bibliotecas municipales en el contexto bibliotecario español", en: I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local, Valencia, Generalitat Valenciana..., pp. 410-411.

<sup>488</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana. *La política del libro durante la II República...Op. cit.*, pp. 120-142.

Muchas bibliotecas municipales fueron destruidas parcial o totalmente durante la guerra civil, pero otras continuaron su actividad posteriormente, previa depuración de los fondos y cambio en los miembros de cada Junta Bibliotecaria. En este sentido algunas bibliotecas que no sufrieron daños materiales acabaron abandonadas por la falta de público, que dejó de acudir a un centro de creación republicana, pero adulterado por los vencedores. Además, algunos miembros de las antiguas juntas habían muerto en la contienda, o bien habían sido sustituidos por los nuevos alcaldes fieles al régimen, por cargos de Falange, y por las demás fuerzas vivas de los pueblos, sin participación de elementos obreros ni organizaciones sindicales, prohibidas por el nuevo estado. De hecho, en la documentación aparecen noticias contradictorias sobre el estado de los establecimientos. Algunas bibliotecas, que figuraban en buen estado en las listas elaboradas al poco tiempo de acabar la contienda, en informes posteriores aparecen como destruidas por la guerra, probablemente para justificar su cierre o abandono. Por otra parte, muchos libros del catálogo de las bibliotecas habían desaparecido, tras el expurgo al que fueron sometidas.

Para localizar las bibliotecas que creó la II República he recurrido a los datos que aparecen en el citado trabajo de Ana Martínez Rus y la memoria de inspección de Juan Vicéns<sup>489</sup>, y para conocer la situación en qué quedaron tras la guerra me he guiado por la relación que elaboró la Junta en 1951<sup>490</sup> en la que se incluyen datos de localidad, provincia, número de habitantes, lote inicial, valor en pesetas, incremento volúmenes, estado actual, año de restauración, volúmenes y valor en pesetas. De la conjunción de las tres fuentes se ha elaborado el siguiente mapa<sup>491</sup> donde se contabilizan 233 bibliotecas englobadas en cuatro situaciones: destruida/desaparecida, funciona, sin noticias y restaurada, de las cuales seis<sup>492</sup> no he podido identificar su año de creación.



<sup>489</sup> CALVO, Blanca y SALABERRÍA, Ramón (eds.), "Juan Vicéns, inspector de bibliotecas públicas municipales (1933-1936)", en: *Educación y Biblioteca* n. 129, febr. 2009, pp. 37-134.

<sup>490</sup> AGA 75/20145, y para facilitar su cita lo he identifica como AGA 3.

<sup>491</sup> En el anexo final aparece a mayor tamaño para facilitar su lectura.

<sup>492</sup> Fonz, Tudela, Villa de Arico, Odón, Monterde de Albarracín y Torrelavega. Estas dos últimas se restauraron después, las demás desaparecieron.

Esta es la herencia que recibe el franquismo, y sobre ella, y con la restauración de la misma Junta que va a seguir con la misma facultad de crear bibliotecas municipales y con el mismo marco jurídico, el Decreto de junio de 1932, para su instauración, arranca la política bibliotecaria que a fines de 1951 mostrará un saldo de cerca de 400 nuevas bibliotecas, populares y públicas, y la restauración de unas treinta.

Como prueba de la dificultad para saber en qué situación se encontraban las bibliotecas republicanas tras la guerra, está este documento de la Junta del año 1944<sup>493</sup>:

Existen en esta Junta antecedentes de numerosas Bibliotecas creadas antes de la guerra y durante la misma, de cuya existencia actual no se tenían noticias ciertas. Solamente había algún dato que los Ayuntamientos proporcionaron en 1939 al Servicio de Bibliotecas en contestación a la encuesta realizada por dicha entidad a raíz de la liberación.

Como complemento de estos datos y para ampliación de los mismos se enviaron a los Municipios, en febrero y marzo, unas circulares con cuestionario referente a la existencia de la Biblioteca y de su estado presente. Fueron remitidas 252 circulares, pero sólo se han recibido 92 contestaciones. Suponemos que la mayor parte de los Ayuntamientos que no han respondido lo habrán hecho así por estar destruida la Biblioteca y no desear la reanudación del servicio, pero de todos modos debieron dar una contestación terminante. En consecuencia, la Junta sólo reconoce como dependientes de ella a las 92 bibliotecas municipales que han contestado (documento titulado *Bibliotecas Municipales año 1944*)

### 6.3.3. Cuántas y dónde se crean

Varias han sido las fuentes documentales que he utilizado para identificar las localidades donde se crearon bibliotecas, año por año:

Documentos del Archivo General de la Administración<sup>494</sup> que para facilitar su cita he nombrado como AGA 1, AGA 2 y AGA 3:

- Documento del año 1944 titulado *Bibliotecas Municipales año 1944*
- Documento con datos a fecha de 1948: incluye las restauradas, pero las considera como nuevas, y no incluye las de Oviedo ni las de las Colonias (AGA 1)
- Documento manuscrito con datos hasta 1949 con anotaciones sobre si funciona, sin noticias y reciente (AGA 2)
- Tabla de 1951 que engloba todas las bibliotecas creadas desde 1933 hasta 1951, incluye las de Oviedo y las restauradas aparecen en su año de creación, no en el de restauración, salvo las del año 1951 que sí las incluye. Contiene estadísticas relativas a la localidad, provincia, número habitantes, lote inicial, valor en pesetas, incremento volúmenes, estado actual, año de restauración, volúmenes y valor en pesetas (AGA 3)

El *BOE*, que recoge las localidades donde se crean bibliotecas, año por año, con motivo de la Fiesta del Libro, distinguía entre las que dependían de Centros Coordinadores y las que eran autónomas.

El trabajo publicado en 1952<sup>495</sup> por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas elaborado por José Antonio Pérez-Rioja, donde aparecen datos a fecha de 1951, pero sin citar las

---

<sup>493</sup> AGA 75/2073

<sup>494</sup> AGA 75/20073, AGA 75/20145, AGA 75/20156

<sup>495</sup> PÉREZ-RIOJA, J.A. *Moción informativa sobre Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas*, Madrid, Dirección General de Bibliotecas y Archivos, 1952.

fuentes, con un tratamiento diferenciado respecto a las provincias que contaban con Centro Provincial Coordinador de las que no, pues de las primeras los datos son más abundantes y parecen más fiables. En la relación de municipios por provincia que poseen biblioteca aparecen algunas localidades, muy pocas, cuyas bibliotecas se debieron crear antes de 1933, pues no aparecen en ninguna de las relaciones anteriores. También he comprobado algunas fechas en las memorias de los Centros Coordinadores a las que he tenido acceso: Soria, Huelva, Zaragoza, León y Oviedo.

Determinar el número de bibliotecas y en qué año se crearon ha sido una labor ardua y trabajosa, pues la documentación generada por la Junta es caótica, fragmentaria y, a veces, contradictoria, sobre todo para las bibliotecas que se crearon los primeros años. Por ello he tenido que cotejar las diferentes fuentes año por año, no coincidiendo siempre la misma cifra, ni las mismas localidades.

Para 1940, el número de bibliotecas oscila entre dos y seis bibliotecas, de las cuales, la de Campo de Criptana se creó en 1941, la de Cervera de Pisuerga, lo hace en 1942, Salas y Cangas de Onís, según la Memoria de la Diputación, se estaban reorganizando y sí hubo acuerdo respecto a la de Elche y de Lucena que se crearon en 1940, y para rematar, la de Oñate se la data en 1939.

En la relación de Bibliotecas creadas con motivo de la Fiesta del Libro de 1944 en el *BOE* Orden de 24 de abril de 1944, aparece una lista con las bibliotecas que dice se crean, en total aparecen 32 bibliotecas, pero según varios documentos del AGA, éstas oscilan entre 10 y 34:

- En el texto manuscrito de 1949 (AGA 2): aparecen sólo 10 bibliotecas con fecha de creación 1944: Alesanco (Logroño), Aranjuez, Béjar, Escucha (Teruel), Guadalaviar (Teruel), Mazuecos (Guadalajara), Mora de Rubielos, Silla, Urrea de Jalón, Villar de Torre (Logroño)
- En la tabla de 1951 (AGA 3) se citan 16 para este año: Alesanco, Azofra, Béjar, Castropol, Escucha, Gavá, Luanco, Mazuecos, Mora de Rubielos, Onteniente, Oviedo (Biblioteca de Educación y Descanso), Pastrana, Silla, Tapia, Urrea de Jalón, Villar de Torre
- Y en el tercer documento fechado en 1944 que lleva por título *Bibliotecas Municipales año 1944*, se dice: “En la creación de nuevas bibliotecas en el año actual se ha dado preferencia a los Ayuntamientos cuya Biblioteca había sido destruida y que deseaba continuar con la lectura, cuya lista se enumera al final. En total se han creado 34 bibliotecas municipales con lotes de 500 volúmenes, que se descomponen en los siguientes conceptos: destruidas que se reponen, de nueva creación y creadas por iniciativa de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas”. Transcribo literalmente:

Bibliotecas destruidas que se reponen (16): Antequera, Canillejas, Godella, Guadalaviar, Mas de las Matas (1947), Mora de Rubielos, Naval, Onteniente, Quinto, Reinosa, Santa Fe, Toril y Masegoso, Torreblanca, Valdetormo, Villanueva del Duque, Villanueva del Trabuco. De estas 16 que en teoría se reponen, por datos aparecidos en la tabla elaborada por la Junta en 1951 (AGA 3), sólo cinco se restauraron ese año: Canillejas, Guadalaviar, Quinto de Ebro, Valdetormo y Villanueva del Trabuco; aparecen de nueva creación Onteniente, Mora de Rubielos en 1944 (que en 1951 está sin noticias) y Mas de las Matas (citada en la relación de bibliotecas creadas por la Junta en 1947, pero a continuación en letra manuscrita aparece *sin recibo ni inauguración*).

Bibliotecas de nueva creación (9): aquí sí hay acuerdo en todos los documentos. Alesanco, Azofra, Escucha, Gavá, Mazuecos, Motril, Pastrana, Silla, Urrea de Jalón, Villar de Torre.

Bibliotecas creadas por iniciativa de la Dirección General de Archivos Y Bibliotecas (9): Albarracín (1948), Alcoy (1945), Astorga (1946), Béjar (1944), Cabra (creada en 1933, a fecha de 1951 funcionaba con normalidad), Cieza (no aparece en ninguna fuente), Lebrija (1945), Lugo (no aparece) y Yecla (1946)

Por su parte, García-Ejarque dice que se crearon 39, e Hipólito Escolar, 35<sup>496</sup>.

En 1946, sí hay coincidencia en las fuentes de la Junta, pero en el *BOE* (Orden de 23 de abril de 1946 por la que se crean las Bibliotecas Públicas) de las 12 localidades que se citan, ni Alcaraz, ni Bailén, ni Benicarló, ni Cehegín (Murcia) se crearán hasta después de 1951 y un año más tarde, en 1947, lo hacen Villanueva de la Serena, La Marañosa, Moreda de Aller, Navia y Villaviciosa.

Para 1949, el *BOE* (17 mayo 1949) menciona 73 municipios, de los cuales Medina de Pomar, Campillos, Cabezón de la Sal, Burgo de Osma, Priego, Toro, Cortes de la Frontera habían inaugurado su biblioteca en 1948; Madridejos, Vall de Uxó, Épila, San Leonardo de Yagüe, Pantón y Pravia lo hicieron en 1950; y Cariñena en 1952. Si restamos estas 13 bibliotecas, quedarían unas 60.

Como último ejemplo de esta discordancia, cito el año 1951. En el *BOE* se contabilizan 68, de las cuales 15 según documento de 1951 (AGA 3) no se inauguran o crean ese año, sino en 1950: Sorbas, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Cebreros, Solana de los Barros, Covarrubias, Mecina-Bombarón, Meira, Cenicientos, Getafe, Calanda, Madrigalejo, Padrón y Almonacid de la Sierra y se restauraron Valdetormo (restaurada en 1944 o 1951), mientras que en el documento de 1951 (AGA 3) se citan 75, de las cuales son restauradas: Budia, Navalperal de Pinares y Biernservida.

De esta maraña de números y nombres de localidades, se puede concluir que el *BOE* es la fuente menos fiable, ya que el baile de números entre años contiguos se puede explicar porque desde que se decide crear una biblioteca hasta que se inauguraba podía pasar uno o más años; el que a veces las bibliotecas restauradas no se contabilizaban como nueva creación; y respecto a las fuentes monográficas actuales elaboradas por bibliotecarios – Hipólito Escolar<sup>497</sup> y García-Ejarque-, muestran bastante coincidencia pero ninguno cita las fuentes, ni enumera las localidades. Llama la atención que para el año 1944 den una cifra de más de 30 cuando el resto de fuentes, salvo el *BOE*, no sobrepasan las 16. A continuación se ha elaborado una tabla que permite comparar la disparidad de datos en el número de bibliotecas públicas que se crearon entre 1940 y 1951 según las distintas fuentes consultadas.

---

<sup>496</sup> GARCÍA EJARQUE, Luis. *Historia de la lectura... Op. cit.*, p. 266, ESCOLAR, Hipólito. *El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1989, p. 266

<sup>497</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis. *Historia de la lectura pública en España*, pp. 266; ESCOLAR, Hipólito. *El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores*, pp. 266.

Fuente	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
AGA 1	2	2	14	10	16	18	11	45	37	---	---	---
AGA 2	2	2	14	6	11	16	11	34	26	50	---	---
AGA 3	6	9	14	9	16	20	10	39	28	64	60	75
BOE			15		32		12	41		73		68
Ejarque	4	3	18	6	39	21	13	44	23	72	91	74
Escolar	4	3	17	7	35	21	13	---	---	---	---	---
Tesis	6	7	14	11	16	20	11	41	29	74	48	90

AGA 1 (Documento 1948), AGA 2 (lista manuscrita 1949), AGA 3 (Tabla de 1951)

Gráfico 13

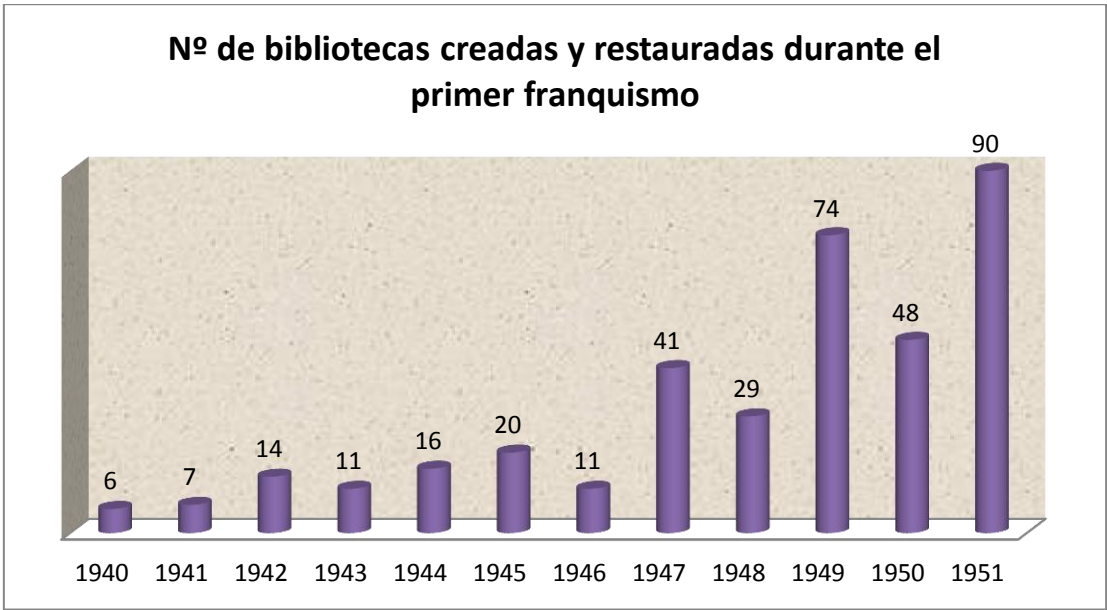
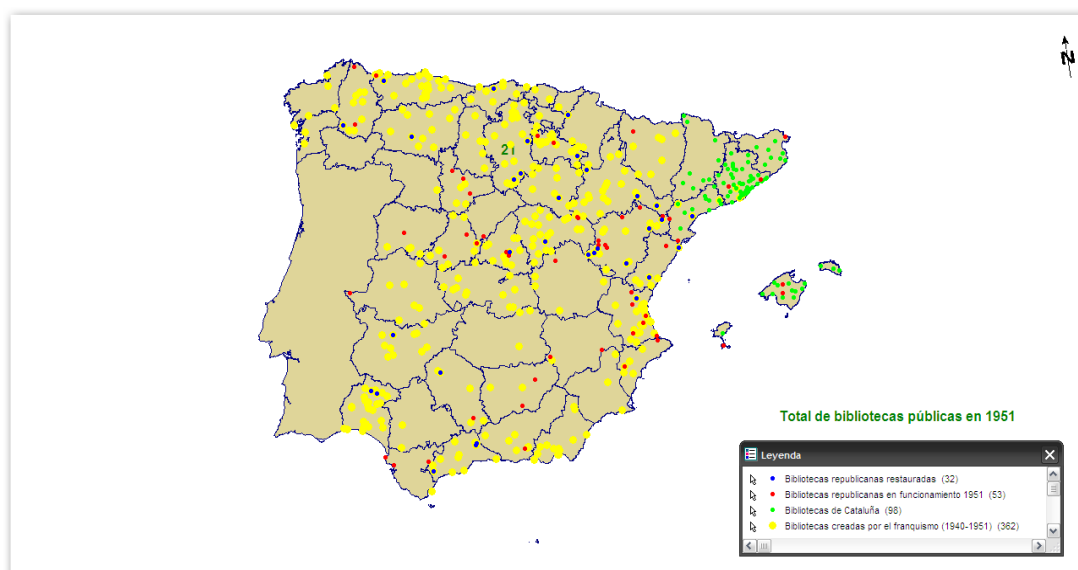


Gráfico 14

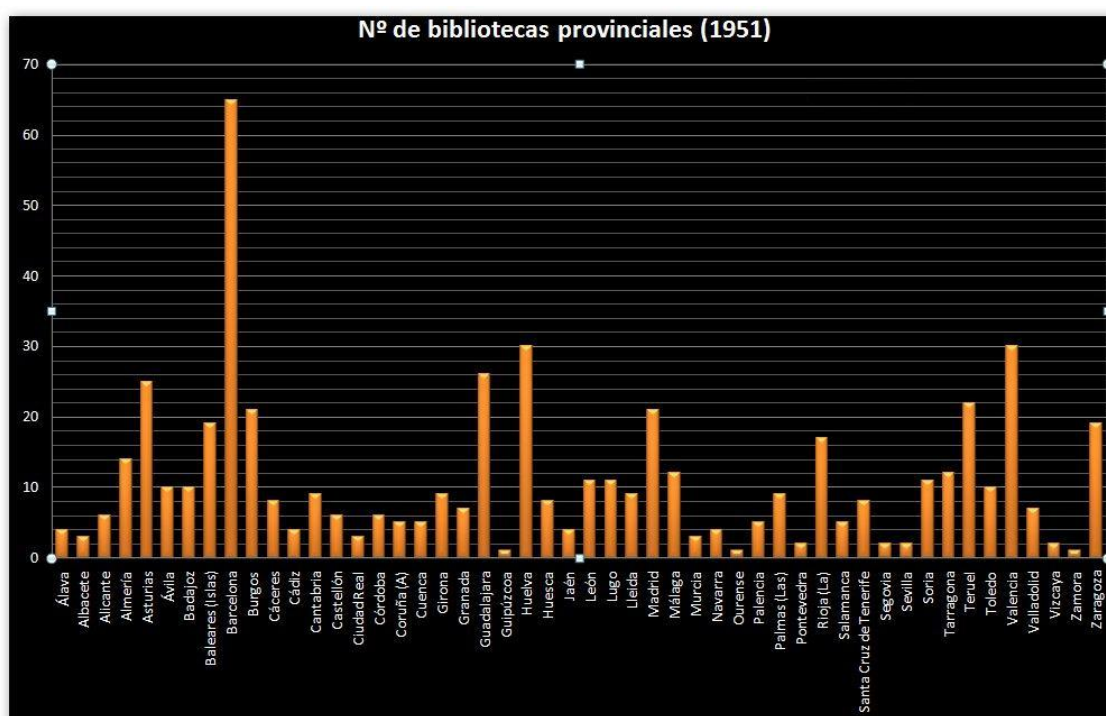
Como conclusión se puede afirmar que al final de 1951, incluyendo las Bibliotecas Públicas Provinciales (39), las Populares y las Municipales, de todo el territorio español –Marruecos y Guinea-, había unas 645<sup>498</sup>, según documento de la Junta (AGA 3), para Pérez-Rioja, eran 590, contabilizando las bibliotecas viajeras (51) y las Populares de la Caja de Pensiones y de Ahorro para la Vejez, pero no incluye los territorios coloniales.

<sup>498</sup> AGA 75/ 20145





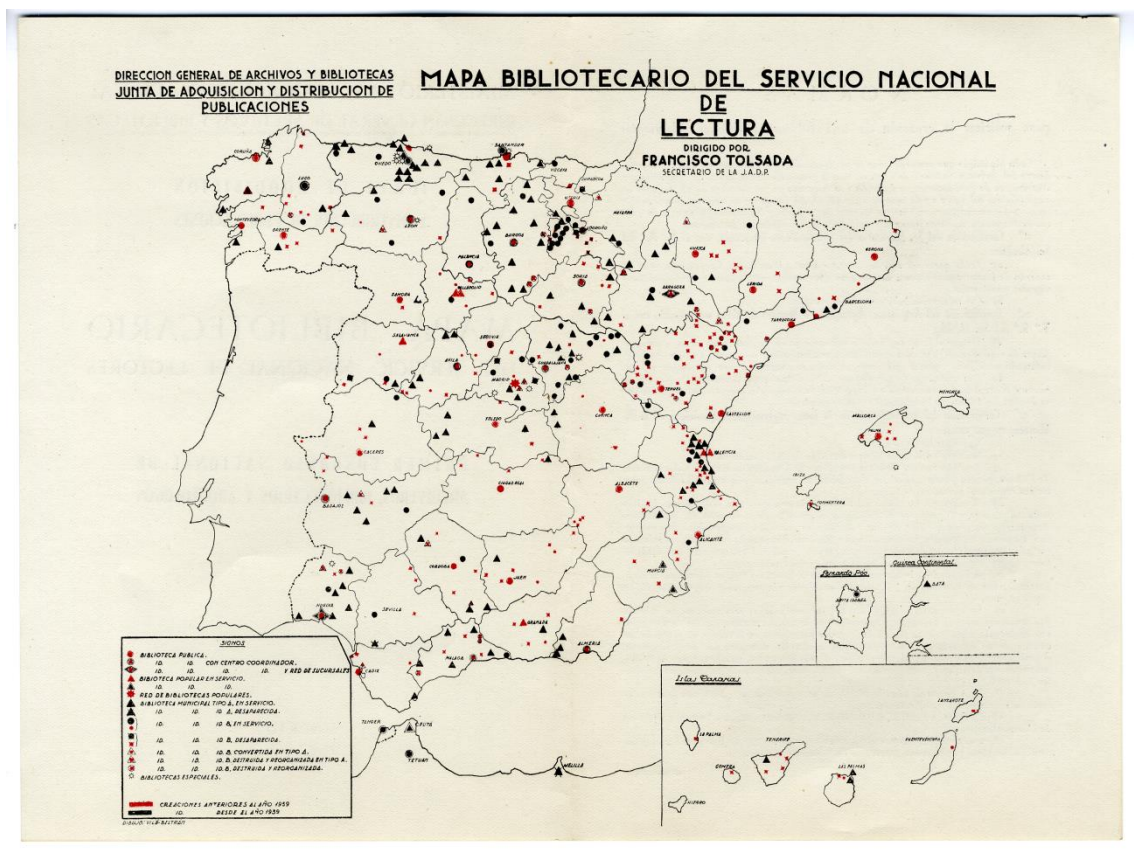
Dado que en el mapa que resume la situación de las bibliotecas públicas, a nivel territorial, no incluye Canarias y las provincias de África, a continuación se citan las bibliotecas de estas provincias, a través de un gráfico de elaboración propia y el mapa que realizó la Junta de Adquisiciones y Distribución de Publicaciones en 1950 donde sí aparecen todas las bibliotecas.



**Gráfico 16. Nº de bibliotecas por provincia**

En Las Palmas se dotaron con biblioteca las localidades de: Arrecife (1934), Moya ( ), Puerto de Cabra, Fuerteventura (1943) Puerto de la Luz (1946), Haría (1951) y en la capital tres más; en Santa Cruz de Tenerife: Realejo Alto (1934), Vallehermoso (1933) Icod de los Vinos (1947), Llanos de Aridana (1948), Breña Alta (1950) , Puerto de la Cruz (1951), Puntallana (1951) y San Andrés y Sauces (1951). En el Protectorado de Marruecos se crearon bibliotecas en Ceuta, Tánger, Tetuán y Melilla, en 1941; y en el resto de territorios africanos: Santa Isabel en Fernando Poo inaugurada en 1944 con una sucursal en Bata y dos bibliotecas circulantes en

Annobón y San Carlos. En 1951<sup>499</sup> se proyecta extender el servicio bibliotecario a nuevos territorios, en Santa Isabel: la Biblioteca del Patronato de Indígenas, dedicada a éstos exclusivamente, y la Biblioteca del Hospital General. En Guinea continental: en Niefang Ebebiyin, Mikomeseng, Río y Kogo.



Pero ¿qué suponía ese número de bibliotecas para todo el territorio español? La mejor respuesta sobre la valoración de la situación bibliotecaria es la que hace Pérez-Rioja en 1952<sup>500</sup>

Francia, para sus 40 millones de habitantes, tiene unas 3.000 bibliotecas públicas; Italia, todavía más poblada -45 millones- posee en cambio unas 1.500. Esta última cifra sería extraordinaria para cubrir en abundancia el área de nuestros 500.000 kilómetros cuadrados, poblados hoy por algo más de 28 millones de habitantes. Creemos que con 1.000 bibliotecas públicas —el doble de las que hoy existen- tendría España un número discreto y suficiente.

De los 9.255 municipios españoles, más de 400 (excluidas las capitales) son cabeza de partido judicial, y más de 300 pueblos (excluidos también aquellas) rebasan los 10.000 habitantes, según el censo de 1940.

Fuera de Cataluña —con su red de bibliotecas populares- y de una veintena de provincias que ya cuentan con Centro Coordinador, quedarán en treinta provincias cerca de 300 pueblos cabeza de partido judicial sin biblioteca pública; añádanse a ellos, por lo menos, otros doscientos pueblos de importancia diseminados por todo el mapa hispano que aún carecen de ella, y tendremos aproximadamente esas 500 bibliotecas públicas que conviene crear en España para que ésta cuente con una adecuada y suficiente red nacional.

<sup>499</sup> "Bibliotecas en Guinea Española", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951

<sup>500</sup> PÉREZ-RIOJA, José Antonio. *Las bibliotecas viajeras*, pp. 13.14

Y para comparar lo que se había hecho respecto a los años anteriores cito este testimonio de Javier Lasso de la Vega de 1934<sup>501</sup>:

Hay, por último, 127 ciudades con más de 14.000 habitantes que carecen de bibliotecario y biblioteca pública, y entre éstas, con más de 20.000 habitantes: Hellín, Alcoy, Don Benito, Badalona, Algeciras, La Línea, Sanlúcar de Barrameda, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Baena, Lucena, Peñarroya, Pueblo-Nuevo, Priego de Córdoba, El Ferrol, Ortigueira, Loja, Andújar, Linares, Martos, Úbeda, Ronda, Antequera, Vélez-Málaga, Cartagena, Jumilla, Lorca, Yecla, Vigo, Carmona, Écija, Morón de la Frontera, Utrera, Alcira, Sagunto, Baracaldo y La Estrada.

De las 37 localidades que cita, tras 17 años de política bibliotecaria ejercida por la Junta, en 1951 sólo gozaban de biblioteca 15. Un balance muy pobre que hay que pasar por el tamiz de una guerra civil y una dura posguerra bajo el paraguas de una dictadura que optó por el aislamiento y la autarquía durante sus primeros años.

Para tener una visión de conjunto de la ubicación de estas casi 600 bibliotecas he realizado una cartografía<sup>502</sup> que se ha centrado en la catalogación y localización de las bibliotecas:

---

<sup>501</sup> LASSO de la VEGA, Javier, "Política bibliotecaria", *Boletín de Bibliotecas y Bibliografía*, I, 1934, p. 12

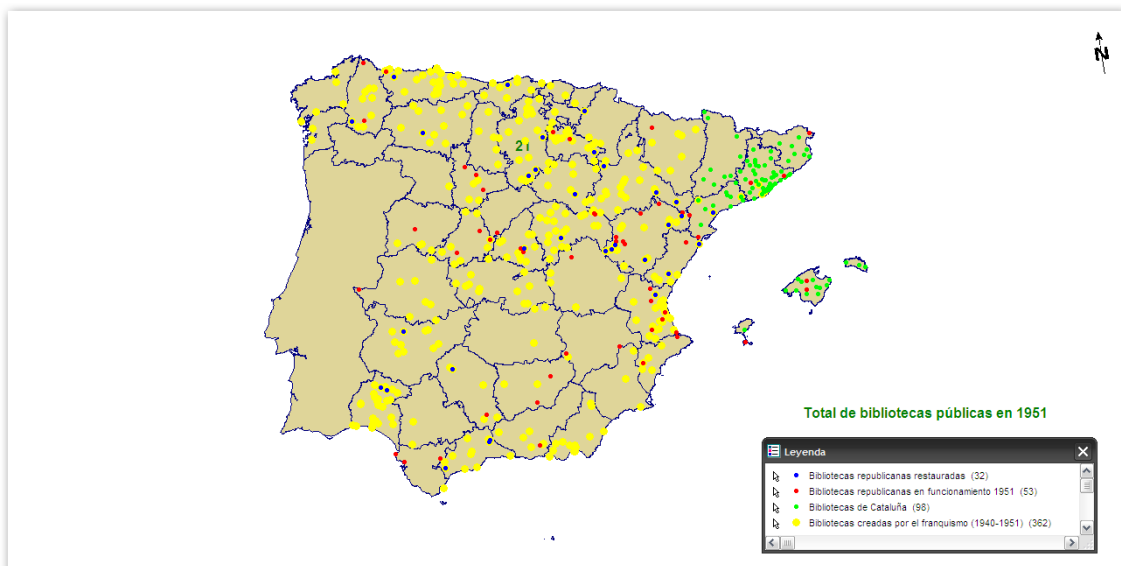
<sup>502</sup> La cartografía no incluye Canarias y territorios africanos. El proceso seguido para la elaboración de los mapas ha sido: creación de una base de datos en ACCESS que contiene la información recogida de cada una de las bibliotecas, así como su localización geográfica; se han cargado los mapas correspondientes a las provincias españolas (Península y Baleares). Se ha utilizado la herramienta *Geomedia Professional* para enlazar los datos temáticos con los geográficos, y generar las consultas que se muestran en el documento. Los campos definidos para caracterizar los datos de cada biblioteca han sido elaborados en tres tablas en Access: una con las bibliotecas creadas por la II República. Campos: provincia, localidad, año de creación de la biblioteca, número de habitantes (censo 1950), número de volúmenes, situación (destruida, funciona, sin noticias, restaurada); otra con las bibliotecas creadas por el franquismo hasta 1951. Campos: provincia, localidad, año de creación de la biblioteca, número de habitantes (censo 1950), número de volúmenes, dependencia administrativa –autónoma o perteneciente a Centro Coordinador- y tipo de biblioteca (municipal, popular, especial). Y una tercera con las provincias donde se han incluido diversos campos siempre referidos a datos de 1951: número de habitantes, población alfabetizada y porcentaje de analfabetos extraídos del censo de población de 1950; número de bibliotecas por provincia, provincias que tenían Centro Coordinador, número de préstamos, número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes y un índice de uso de las bibliotecas a base de relacionar la población alfabetizada con el nº de préstamos.

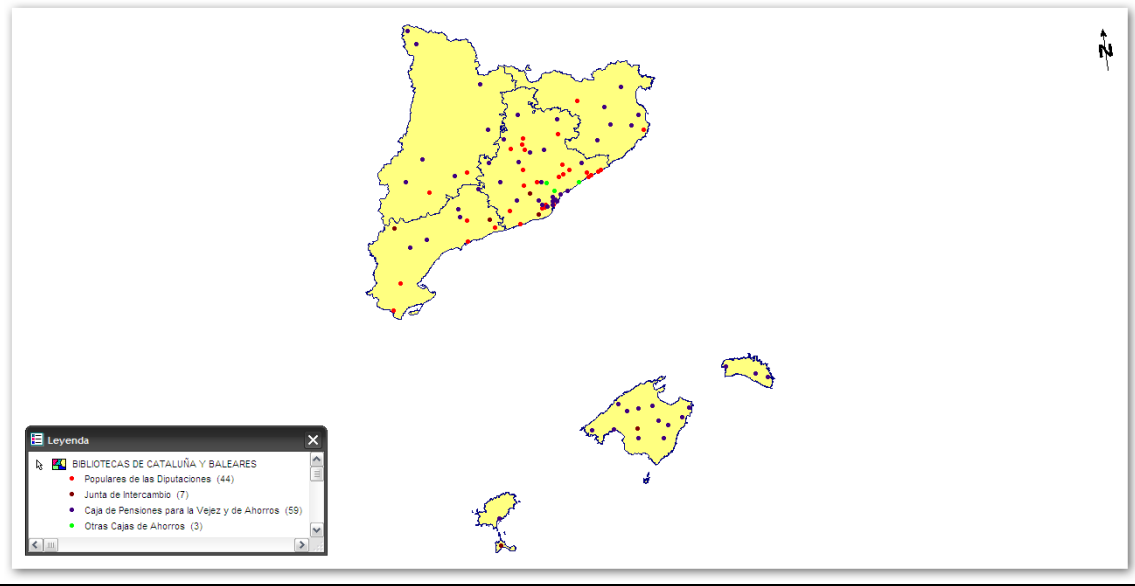
Además para la localización de cada "biblioteca" se han recogido: las coordenadas UTM (x,y,z), referidas al elipsoide ED50, de un SIG; los códigos INE de los municipios y provincias a los que pertenecen. La herramienta *Geomedia*, utilizada en este trabajo, ha permitido, mediante conexiones con la base de datos bibliotecas y con la base cartográfica, generar los siguientes tipos de mapas, algunos de ellos ya insertados en párrafos anteriores.

Mapas de consultas por atributos: Bibliotecas creadas por la II República especificando su situación en 1951.



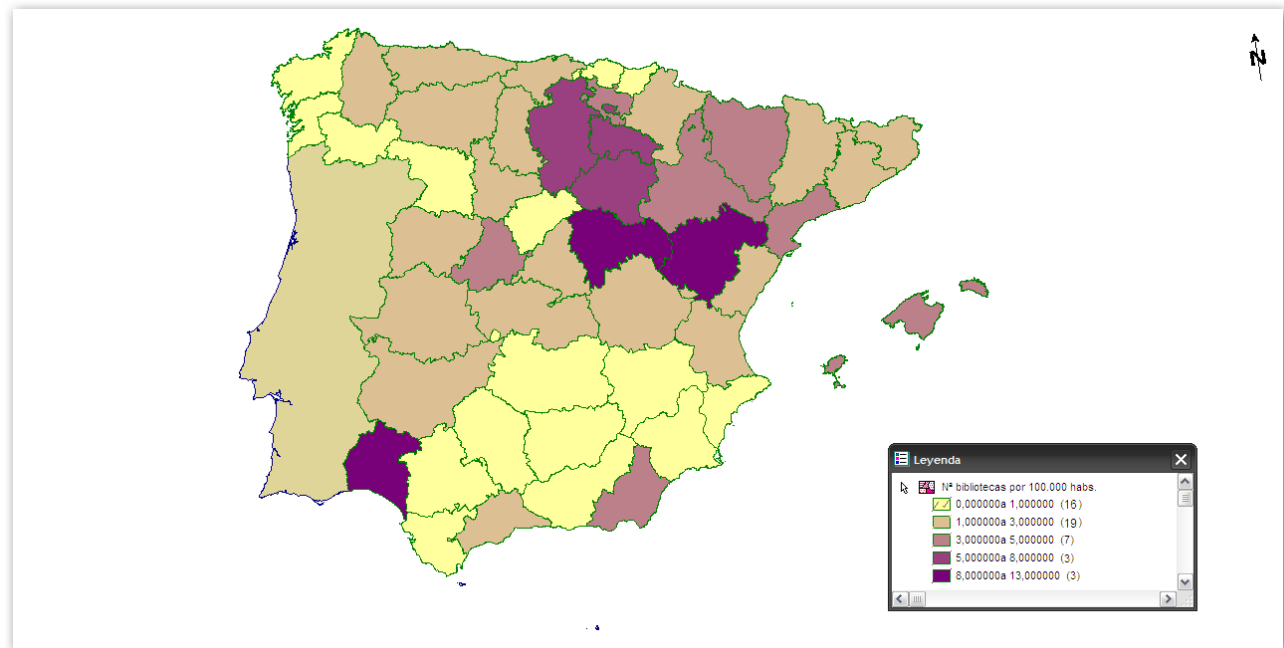
Mapas de entidades superficiales: mapa con todas las bibliotecas públicas existentes en 1951, municipales y populares, incluidas las republicanas restauradas por el franquismo y todas las existentes en Cataluña y Baleares, incluidas las inauguradas antes de la II República, todas las posteriores y las de la Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares. Se ha hecho una captura a mayor tamaño de Cataluña y Baleares para ver más en detalle la realidad bibliotecaria en esta región que gozaba de mejores y más servicios bibliotecarios, en parte, gracias a la iniciativa privada.



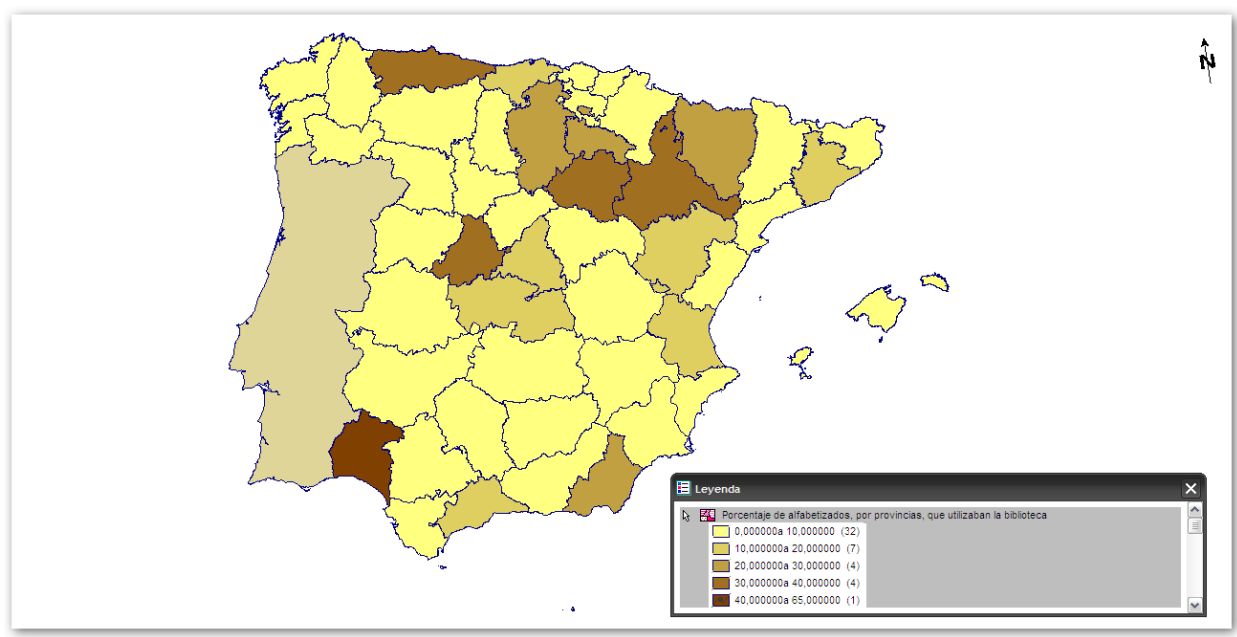


Mapas temáticos:

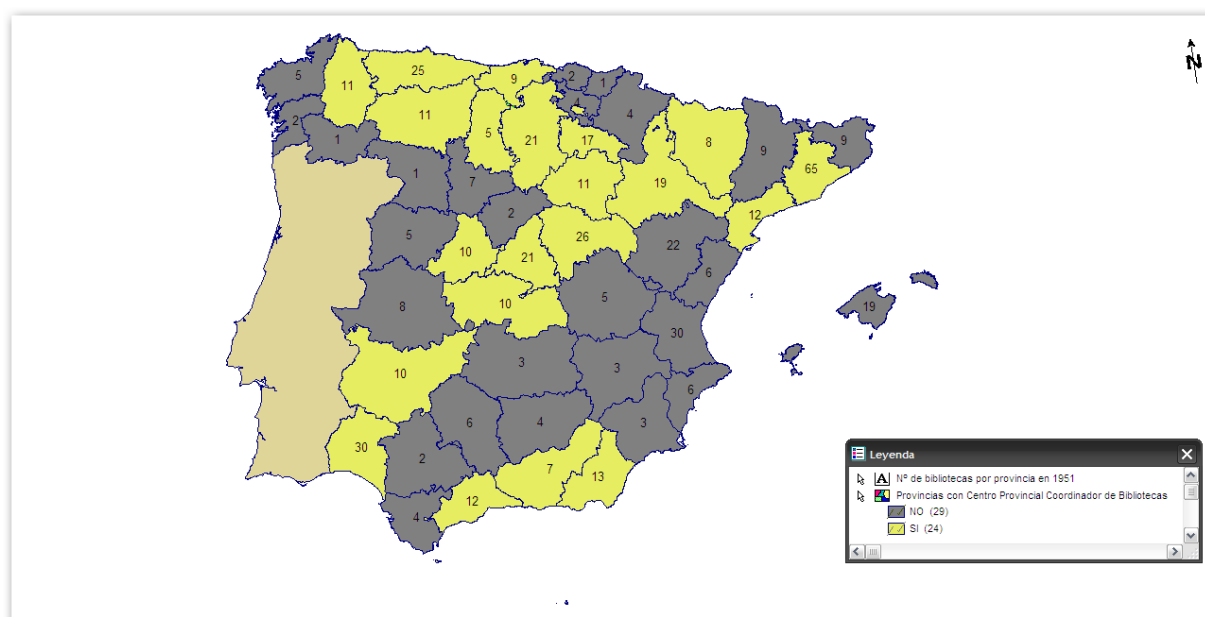
- Número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes



- Porcentaje de alfabetizados que utilizan la biblioteca (índice de uso)



- Provincias que tenían Centro Coordinador de Bibliotecas



La lectura de los tres últimos mapas sugiere los siguientes comentarios. Sólo había tres provincias, Huelva, Guadalajara y Teruel, que tenían entre 8 y 13 bibliotecas por cada 100.000 habitantes; en el otro extremo había más de 35 provincias que sólo disponían entre 0-3 bibliotecas por cada 100.000 habitantes. Las provincias que disfrutaban de mayor número de bibliotecas eran: Barcelona, Huelva, Valencia, Guadalajara, Asturias, Teruel, Zaragoza, Burgos, y en todas ellas se había establecido un Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, salvo Teruel y Valencia, que arrastraban una mayor tradición bibliotecaria heredada de la II República, y Barcelona, que tenía un organismo similar, la Dirección de Bibliotecas Populares.

También llama la atención que no hay una relación directa entre: a mayor número de bibliotecas mayor número de población alfabetizada, pues en cuatro provincias andaluzas con más de un 20% de analfabetos tuvieron más bibliotecas que la media territorial.

Huelva	24% analfabetos	30 bibliotecas
Málaga	27% analfabetos	13 bibliotecas
Almería	23% analfabetos	13 bibliotecas
Granada	25% analfabetos	7 bibliotecas

Una posible explicación estaría en que estas provincias, sus Diputaciones se habían interesado por mejorar sus servicios de lectura pública y, por tanto, dotarse con un Centro Coordinador, además, en el caso de Huelva y Almería contaron con unos directores de gran talla profesional: Antonio Palma, en Huelva, e Hipólito Escolar –futuro director de la Biblioteca Nacional- en Almería. Por el contrario llama la atención el escaso número de bibliotecas en las provincias del País Vasco donde los índices de analfabetismo eran de los más bajos, y si confirman la posible regla, las provincias de Soria y Burgos, la primera con 4% de analfabetos disfrutó de 11 bibliotecas, y la segunda de 21 para un 3% de analfabetos.

Respecto al índice de uso de las bibliotecas por parte de las personas alfabetizadas se ha hallado relacionando éstos con el nº de lectores y el nº de bibliotecas en cada provincia, expresado en porcentajes<sup>503</sup>. Sorprendentemente es Huelva la que alcanza una mayor proporción de uso con casi un 63%, seguida de Zaragoza, Ávila, Soria y Oviedo que sobrepasan el 30%. Las grandes ciudades, Barcelona con un 16,5% y Madrid con casi un 11%, muestran unos índices muy bajos respecto a sus menores porcentajes de analfabetismo, 7,4% y 5,5% respectivamente; y en 32 provincias sólo utilizaban las bibliotecas entre el 0 y el 10% de la población. Quizás estos datos no sean muy significativos al utilizar la escala de la provincia, y sería más real manejar una escala más micro calculando el porcentaje en relación con las poblaciones que tenían biblioteca, pero esta opción la he desestimado, de momento, porque no tenía datos de todos los municipios.

¿Qué razones subyacían al bajo uso de las bibliotecas? Las explicaciones que se pueden deducir después de trabajar con la documentación de la época pueden ser que, no se utilizaban porque había pocas, y no muy accesibles, a muchas poblaciones rurales y dispersas; que sus fondos eran escasos y poco atractivos, demasiado formativos y educativos, donde la literatura de quiosco estaba poco menos que prohibida. Recordemos, también, que el préstamo a domicilio no era gratuito en todas las bibliotecas y se requería dejar un depósito o presentar un aval. O quizás era responsable un sistema educativo memorístico que no fomentaba el uso de la biblioteca como recurso educativo, llevando en la edad adulta a no tener un “hábito de acudir a la biblioteca para satisfacer curiosidades, resolver problemas, aclarar dudas o deleitarse simplemente”<sup>504</sup>

<sup>503</sup> Hubiera sido interesante relacionarlos también con los números de préstamo, pero no hay datos ni para todas las provincias, ni para todas las localidades.

<sup>504</sup> PÉREZ RIOJA, José Antonio. *La penetración social del concepto de biblioteca*, pp. 9-11

## 6.4. SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA<sup>505</sup>

### 6.4.1. Lecturas para el soldado

Este tipo de Iniciativas surgieron a raíz de la I guerra mundial, y en España se experimentaron durante la guerra civil tanto en el bando republicano como el de los sublevados. Éstos últimos desarrollaron la iniciativa *Lecturas para el Soldado* en los frentes y hospitales<sup>506</sup>.

Sus objetivos fueron proporcionar al soldado herido un medio de evasión y distracción; influir en él contribuyendo a modelar su pensamiento, ya que las lecturas eran cuidadosamente seleccionadas y, por último, desarrollaba una especie de “biblioterapia”.

Este servicio comenzó a funcionar en Zaragoza y se extendió a todas las provincias en la zona sublevada. En Sevilla se encargó de su funcionamiento Javier Lasso de la Vega, quedando instalado en octubre de 1937. Los medios necesarios para comenzar a funcionar se consiguieron gracias a una intensa propaganda desarrollada en la prensa y en la radio. Cada biblioteca dependía de una biblioteca central que era la que suministraba los libros, organizaba los intercambios de éstos entre hospitales y procuraba atender las peticiones de los soldados hospitalizados.

Aunque se procuró atender las necesidades de libros de todos los hospitales de la provincia, fueron los 7 hospitales de la capital los que registraron más movimiento entre noviembre de 1937 y julio de 1938 leyéndose más de 40.000 libros. En este mismo periodo se enviaron al frente 22.709 libros y 17.600 revistas y se recibieron 5.281 peticiones individuales, especialmente de libros de estudio, junto a libros de primera enseñanza, éstos últimos utilizados para enseñar a leer y escribir a los soldados analfabetos.

También en Sevilla, se organizaron en algunos hospitales lecturas, charlas, recitales y visitas culturales a la ciudad con los soldados que podían salir a la calle.

Navarra<sup>507</sup> fue pionera y modélica en la implantación de este servicio, pues desde septiembre de 1936, el facultativo Marcelo Núñez de Cepeda, en colaboración con la Junta Carlista de Guerra y las Margaritas, comenzó a repartir en los distintos hospitales que se hallaban en Guipúzcoa y Navarra numerosos volúmenes que en el mes de abril de 1937 ascendieron a 10.000, y en 1938 llegó hasta los 25.000.

---

<sup>505</sup> Los servicios de extensión bibliotecaria son aquellos que tratan de acercar la biblioteca a aquellos que no pueden acceder a ella. Engloban toda clase de propuestas y medidas tendentes a paliar las barreras físicas, geográficas, económicas, políticas o de cualquier otra naturaleza, que impiden o dificultan el acceso a la cultura e información a ciertos grupos sociales. Pueden ser de dos tipos: aquellos que intentan llegar a todo tipo de usuarios, sin que su prestación se encuadre dentro de una biblioteca con carácter autónomo. Son las bibliotecas filiales, las bibliotecas móviles y el préstamo colectivo. Por otro lado, están los servicios para usuarios especiales, cuya prestación sí justifica la apertura de auténticas bibliotecas con carácter autónomo. Son las bibliotecas de hospitales, de establecimientos penitenciarios, de cuarteles,...

<sup>506</sup> ALTED VIGIL, A. La política..., pp. 57-59

<sup>507</sup> La Fiesta del Libro en Pamplona: 23 de abril de 1939, Pamplona, pp. 20-23



Más tarde se suprimió este servicio en los Hospitales de Oronoz, Irún, Tolosa, Alzola, Azpeitia y San Sebastián; pero en cambio con periodicidad constante recibieron libros, folletos y revistas, los establecimientos benéficos de Estella, Tafalla y Pamplona, hasta que se reglamentó esta obra creando Bibliotecas permanentes en los cuatro Hospitales de Pamplona: Militar, Provincial, Alfonso Carlos y José Antonio, facilitando el personal necesario el Auxilio Social de la Mujer de Falange.

Los datos estadísticos de estas cuatro Bibliotecas entre septiembre de 1938 y Marzo de 1939 se tradujeron en 6.913 lectores y 5.324 obras leídas. Se impartieron conferencias y se realizaron lecturas, tanto por el jefe de *Lecturas para el Soldado*, como por catedráticos y profesores que cooperaron. También se enviaron a distintos frentes de Madrid, Castellón y Cataluña, a través del Delegación Provincial de Navarra, 7.534 libros y 12.000 revistas.

Tras finalizar la guerra este proyecto desaparece ya que no tenía razón de existir.

#### **6.4.2. Servicio de Lecturas para el Marino**

La falta de medios del Servicio de lecturas para el soldado de llegar al personal de la Marina, llevó a la creación del Servicio de Lecturas para el Marino a iniciativa de Javier Lasso de la Vega. Este tipo de servicio ya funcionaba en otros países y su organización se realizó en colaboración con la Jefatura de Archivos y Bibliotecas y la Subsecretaría de Marina. Desde el principio se concibió no para una situación de guerra sino con un carácter más amplio tanto en el tiempo como en los destinatarios.

En 1938 es cuando se redactó el proyecto de decreto para la creación de un Patronato de Lecturas para el Marino que actuaría a favor tanto de la Marina de guerra como de la mercante. El decreto se aprobó el 5 de enero de 1939<sup>508</sup>, recogiendo las experiencias de otras naciones y comprendía el objeto, las funciones, la jurisdicción, los recursos, el personal y las bibliotecas que lo integraban:

Artículo 1º. Con el fin de proporcionar sana distracción en las horas de descanso y fomentar la formación profesional, moral y patriótica de los obreros del mar y de los que sirven a la Patria a bordo de sus buques de guerra, se crea el Servicio de Lecturas para el Marino. (...)

Artículo 3º. El Patronato de Lecturas para el Marino se encargará de reorganizar y unificar las Bibliotecas dependientes de la Subsecretaría de la Marina, de manera que, sin modificar sus establecimientos ni colecciones de libros actuales, rinda un servicio más adecuado a las necesidades presentes y futuras mediante una dirección facultativa: la centralización y unificación de los catálogos, la adopción de los procedimientos internacionales de clasificación, circulación y préstamo de libros (...) para que el marino pueda encontrar la obra más adecuada a su vocación profesional, gustos literarios o necesidades recreativas.

La jurisdicción del Patronato se extendía a todas las Bibliotecas dependientes de la Subsecretaría de Marina actuales y futuras. Las bibliotecas que habían de integrar el Servicio eran: la Biblioteca de la Subsecretaría de la Marina, central del Servicio, encargada de servir en circulación o préstamo a las otras bibliotecas y recibir, a su vez, en préstamo, los libros que el personal para el cual se crea este Servicio necesite de las diversas Bibliotecas del Estado. En esta Biblioteca se organizaba el catálogo central de las Bibliotecas al servicio de la Marina, se realizaba la adquisición, selección y censura de libros, además de tareas relacionadas con la propaganda, la elaboración de estadísticas, y se imprimía el catálogo de a bordo. Su dirección

---

<sup>508</sup> LASSO de la VEGA, J. Manual de biblioteconomía: organización técnica y científica, Madrid, Mayfé, 1952, pp. 604-609

técnica corría a cargo de un funcionario del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos.

El resto de bibliotecas que lo integraban fueron: las bibliotecas sucursales, ubicadas en los departamentos marítimos, también a cargo de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Disponían de un gabinete de lectura, con servicio de préstamo a domicilio y era la que proporcionaba los lotes de libros a las Bibliotecas de a bordo. A continuación, las bibliotecas-depósitos ubicadas en los puertos, y donde no los hubiera, en las cofradías u hogares del marino y las bibliotecas de a bordo, que consistían en armarios manejables fácilmente transportables, que podían cambiar en otros puertos. Estos armarios-biblioteca también podían circular dentro del mismo barco entre unidades diferentes. Por último, las bibliotecas de consulta, que no eran sino el equivalente a las secciones de referencia de una biblioteca física dentro de los barcos.



El Servicio de Lecturas para el Marino se nutría con recursos de variada procedencia: de las subvenciones de la Subsecretaría de Marina; los donativos de libros del Ministerio de Educación, de los servicios de propaganda del Estado, de las obras que editase FET y de las JONS y de publicaciones impresas por entidades oficiales adecuadas a sus fines; los donativos en libros o en metálico de las Empresas navieras y de los constructores de buques y de los donativos e ingresos que se obtuvieran en la Fiesta anual del Libro para el Marino, día de la Virgen del Carmen.

En el Decreto también se asignaban al Servicio labores editoriales como la publicación de una enciclopedia elemental de lecturas para formación del marino y una Biblioteca de volúmenes asequibles por su precio que abarcaría dos series: una de carácter recreativo y otra técnica.

Aprobado el Decreto que lo creó se procedió a nombrar los miembros del Patronato y se organizaron varias colectas de libros y en metálico los días de la Virgen del Carmen, Patrona de la Marina. A estas colectas autorizadas contribuyeron ilustres damas y señoritas presidiendo y organizando las mesas petitorias, con las que colaboraron las autoridades militares y civiles.

En el prólogo a la Memoria del Patronato de 1945 su Presidente, Pascual Díaz de Rivera hacía una loable síntesis de lo que era este Servicio<sup>509</sup>:

Lectura para el Marino pretende llegar a servir a toda la gente del mar, desde las poco cultas hasta las más preparadas; es una institución popular en el sentido de que en sus bibliotecas se encuentran volúmenes al alcance de las clases menos instruidas y a la vez quiere proporcionar obras para uso de sabios, obras raras y de precio, pues aspiramos a tener el libro que se nos pida si más méritos por parte del que lo solicite, de que sea hombre que tenga relación con el mar y lo desee. Nuestra misión es fomentar la formación profesional, moral y patriótica de la gente de mar.

La inmensa mayoría de las Cofradías de Pescadores, lo primero que solicitan al constituir su Casa del Pescador, es una biblioteca. Complemento de las clases de adultos en las Cofradías y de las Escuelas de Orientación Marítima y Pesquera.

En nuestras bibliotecas debe haber libros de todas las disciplinas y la misión de las bibliotecas es prodigar los libros que inclinan la imaginación y la voluntad hacia el bien. Lecturas para el Marino puede y debe llegar a todos lados, desde la capital de los Departamentos Marítimos hasta los más modestos rincones de la costa donde haya una Cofradía de Pescadores, o caseríos o parroquias en que aquéllas ejerzan su jurisdicción. A flote debe suceder lo mismo, desde el acorazado hasta el barco de pesca más modesto deben beneficiarse

La labor realizada hasta 1945<sup>510</sup> se resumía en la implantación de un conjunto de 100 bibliotecas-armarios, metálicos, contruidos al efecto y dotados con 200 obras. Estas bibliotecas se consideraron suficientes en número para que no faltase este servicio en los principales barcos de la flota de guerra, y desde hacía tres años prestaban sus servicios en la Marina. Posteriormente el servicio se extendió a la Marina mercante y en 1944 se entregaron 12 armarios repartidos entre las siguientes compañías: Ibarra, Transmediterránea, Trasatlántica y Aznar. Estas bibliotecas se entregaban mediante un convenio, en el que la Compañía se obligaba a depositar en el buque de su propiedad el armario-biblioteca, a nombrar un bibliotecario entre la tripulación que se encargara del préstamo, a cuidar de la buena conservación de las obras y a recoger las sugerencias y desideratas de los lectores y transmitirlos al Patronato. Por su parte, el Patronato se comprometía a facilitar el armario-biblioteca, a sustituirlo por otro cuando haya sido leído y asesorar a los lectores.

---

<sup>509</sup> Patronato de Lecturas para el Marino: memorias redactadas por Don Javier Lasso de la Vega y Jiménez-Placer y Don José González Hontoria, Madrid, 1945

<sup>510</sup> Patronato de Lecturas para el Marino: memorias redactadas por Don Javier Lasso de la Vega y Jiménez-Placer y Don José González Hontoria, Madrid, 1945



El sollado del destructor «Ciscar»; la gente del mar es dada a la lectura y a la meditación.

La dotación de las bibliotecas era muy variada, siendo similar a lo que se había hecho en los países que nos habían precedido en este tipo de servicios. Se procuró que no faltase una representación de libros indispensable para la enseñanza primaria: el devocionario, la enciclopedia escolar en varios de sus grados, y los diccionarios abreviados de la lengua y enciclopédicos. El resto del conjunto estaba formado por manuales para el estudio de las artes y oficios, especialmente profesiones relacionadas con el mar. Por ejemplo, no faltaron, en las bibliotecas destinadas a los Pósitos, Cofradías y Hermandades de Pescadores las obras sobre materias relacionadas con la agricultura y la ganadería y un 31% corresponden a títulos meramente recreativos. La proporción de materias en los armarios-biblioteca que ofrecían 100 volúmenes era la siguiente: Biografía, 21, Historia, 2; Ciencias aplicada 42; Geografía 2; Literatura 31 y Jurídicas, 2

En el conjunto se procuró que figuraran obras de imaginación, como las de Verne, Salgari, Foe, Kipling o Sven Hedin, muy adecuadas para excitar la imaginación y captar lectores. Junto a estos autores y con la misma finalidad, aparecían algunas representaciones de la literatura policiaca (Conan-Doyle, Wallace, Stevenson,...). Lasso de la Vega defendía la lectura de esta denostada literatura, no solo porque aislaba de las preocupaciones y la rutina, sino por el empleo de la investigación, por la aplicación de métodos inductivos y deductivos para descubrir al delincuente. De estas obras, y por consejo, el lector pasaría insensiblemente a leer otras obras de más provecho como las batallas navales, los descubrimientos de españoles y portugueses, las exploraciones árticas, las de África o Asia. De aquí a las biografías de los españoles ilustres, a la Historia de España y a la universal. También había pequeñas representaciones de obras, tales como la física recreativa, antesala del estudio serio de la materia, de economía doméstica y una representación de nuestros clásicos: Cervantes, Pereda, Alarcón, Quintana,...

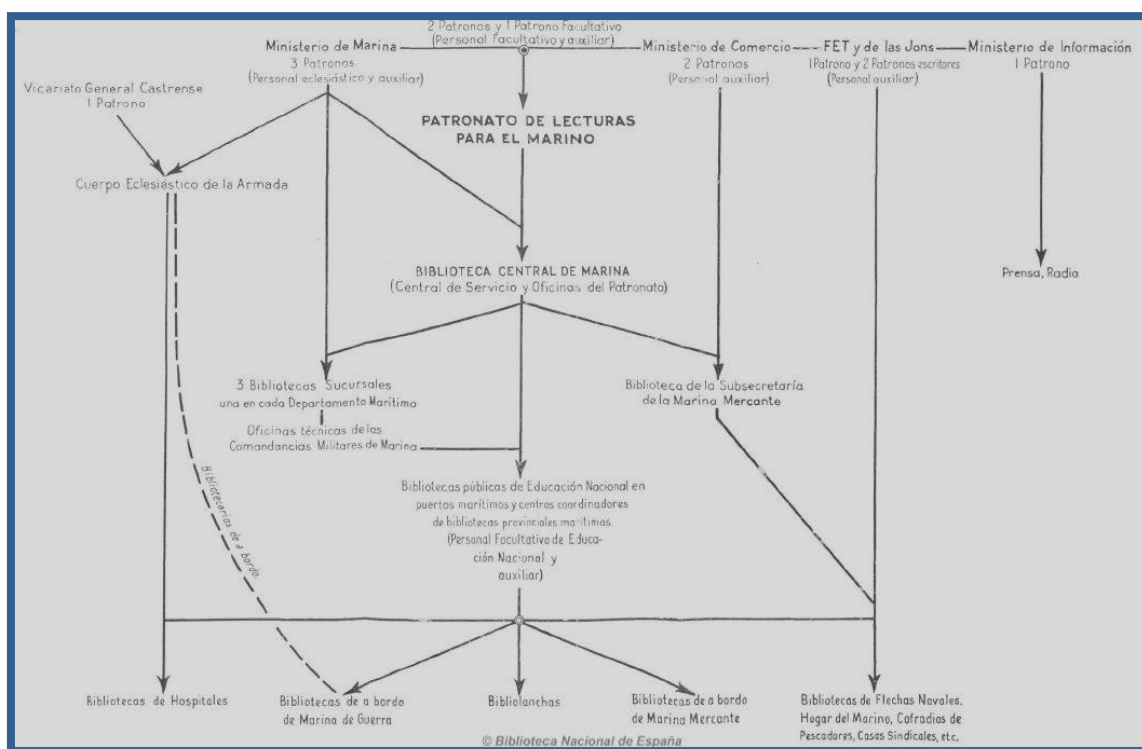
Igualmente se destinaron más de 43 lotes a cofradías, hermandades, pósitos y sindicatos. En 1944 se envió a la Escuela Naval de Pontevedra con motivo de su inauguración una colección de clásicos castellanos. También se remitieron colecciones de libros a los torreros y encargados de faros.

Se movilizaron 30.000 volúmenes y de éstos 25.000 fueron trasladados de Vitoria a Madrid para su catalogación censura y movilización. Trabajo realizado en gran parte desinteresadamente por personas del sexo femenino.

Lasso de la Vega reconociendo lo imperfecta y limitada de la actuación del Patronato en relación a las necesidades, invitaba a la donación de libros y a los que no tuvieran libros que ofrecer que formaran parte de “Los amigos del Patronato” por la módica cantidad de cinco pesetas al año.

En la compra de libros las editoriales redujeron un 10% sus precios en atención a los fines del Patronato. Los ingresos del Patronato entre el 1 de enero de 1940 y el 31 de diciembre de 1944 fueron de 124.946 pesetas, de los cuales 76.900 procedían de la colecta efectuada el día del Carmen de 1939 en toda España. Los gastos hasta 1944 fueron de 89.039, siendo las partidas más voluminosas las 47.172 pesetas por adquisición de libros, 23.62 por los armarios-biblioteca y 8.330 sueldos del personal auxiliar.

Cambios en la organización del Estado que afectaron al Patronato se recogen en este organigrama que apareció publicado en un breve artículo del *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas* de junio de 1954, en el que se insta a las Diputaciones y Ayuntamientos para que colaboren económicamente, y anuncia, que por imitación de la Marina danesa se van a instalar Bibliolanchas en los puertos pesqueros<sup>511</sup>.



<sup>511</sup> PALAU, Agustín, “Una empresa de gran trascendencia social. El servicio de lecturas para el marino”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, nº 20, junio 1954, pp. 21-24

### 6.4.3. Servicios de lectura en hospitales<sup>512</sup>

En España, las primeras disposiciones legales sobre bibliotecas en hospitales datan de 1883 e iban destinadas a los lazaretos y a los hospitales de la Marina. También hay testimonio de la entrega de lotes de bibliotecas populares al Hospital Militar de Madrid en 1884, y a los de Barcelona y Zaragoza en 1889. Pero no se puede hablar de verdaderas bibliotecas de hospitales hasta la I Guerra mundial, que surgen ante la necesidad de ofrecer lectura a los soldados convalecientes.

Durante la II República se crean este tipo de bibliotecas en algunos hospitales públicos, especialmente en Madrid y Cataluña<sup>513</sup>. Gracias al trabajo de Marta Torres sobre la Biblioteca de la Universidad de Madrid, hemos conocido las experiencias que se llevaron a cabo en Madrid. En 1933, concretamente, Javier Lasso de la Vega como director de la Biblioteca universitaria solicitó al Decano de Medicina instalar un servicio circulante de lectura para los enfermos del Hospital Clínico situado en el mismo local de la Facultad con este argumento:

“(…) Nuestra propuesta respondía a varias razones: a) el deseo de distraer al enfermo apartando su espíritu de las dolencias del cuerpo y de las preocupaciones morales que suelen aquejar a los hospitalizados; b) las posibilidades de fomentar la cultura pública, así literaria como científica o industrial por este medio; pues la situación del hospitalizado es muy favorable para despertar en ellos unas veces, y estimular otras, la afición a la lectura y al estudio; c) la conveniencia de situar a España dentro del grupo de las naciones que reconociendo los principios expuestos han iniciado con creciente éxito la instalación de bibliotecas de Hospitales; d) cumplir con nuestro concepto del bibliotecario, que no es el de atesorar libros, como se entendió en un pasado remoto o reducirse a servir el libro que se nos pide, sino buscar lectores para nuestros libros en aras del fomento de la cultura pública que tiene en la biblioteca el complemento definitivo de la escuela”.

Posteriormente la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España (ABBE), siguiendo modelos extranjeros, quiso extender esta experiencia a otros hospitales. Primero fue el Hospital de la Cruz Roja de San José y Santa Adela y a continuación el Hospital de la Beneficencia General.

Los recursos mínimos para implantar este servicio comprendían un modesto local donde colocar libros y revistas (unos 400 volúmenes); una pequeña subvención de 1.000 pesetas para aumentar la biblioteca y encuadernar algunas obras y la autorización necesaria para hacer la visita, fijación de horario. También parece que se elaboró un Reglamento y se establecieron unas reglas del servicio que debían cumplir los bibliotecarios encargados.

---

<sup>512</sup> La aparición de este tipo de bibliotecas data de finales del siglo XVIII en hospitales mentales. Con el desarrollo de estas instituciones se introdujeron actividades de ocio para los internos: bordado, trabajo en madera, sesiones musicales y la lectura. Ésta última se incluyó por sus virtudes terapéuticas y recreativas. Posteriormente, en Inglaterra y Gales, también se crearían bibliotecas de pacientes, en instituciones para tuberculosos. La Primera Guerra Mundial dará pie al establecimiento de bibliotecas de hospital permanentes para ayudar a los heridos. En nuestro entorno europeo, en Francia, se pueden encontrar ya a mediados de este siglo legislación sobre las bibliotecas de pacientes.

<sup>513</sup> TORRES SANTODOMINGO, Marta, La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, UCM, 2011, pp. 155-160



La selección de esos 400 volúmenes fue elaborada por Juana Capdevielle, directora de esta sección del Clínico y del Hospital de la Cruz Roja, agrupadas en cinco secciones: Literatura española; Literatura extranjera, Viajes, aventuras, geografía; Historia y Biografía; Divulgación y enseñanza.

La experiencia madrileña junto a la llevada a cabo en Cataluña bajo la dirección de Jordi Rubió fueron presentadas en los círculos profesionales más importantes de la época e incluso fueron objeto de comunicaciones.

Salvo experiencias aisladas, algunas creadas por la Junta de Intercambio y otras por iniciativa de los Centros Coordinadores de Bibliotecas, como la del Hospital Provincial de Oviedo<sup>514</sup> a comienzos de los 40. Iniciativa que fracasó, quizás por el temor arraigado en la época de que los libros constituían un agente de contagio peligroso de enfermedades, sobre todo, de la tuberculosis, lo que obligaba a adquirir estufas de desinfección. El Centro Coordinador de Soria en 1951 estableció en el Hospital Provincial una biblioteca con un lote inicial de 158 volúmenes de *literatura recreativa, sana y moral que confortara a los hospitalizados como un tónico o medicina del espíritu*, y el de Almería hizo lo mismo en el Hospital Provincial de Santa María Magdalena que se clausuró en julio de 1963,

Pero el intento más sólido correspondió al Hospital Provincial de Madrid<sup>515</sup>, en 1950, siendo nuevamente Lasso de la Vega, junto a la colaboración de los doctores González Bueno, Jiménez Díaz, López Ibor y Marañón, quienes restauraron este tipo de servicio que con el tiempo dejó de funcionar.

Desde el primer momento contó con un equipo personal, muchos de ellos miembros titulados en el Instituto Internacional de Boston<sup>516</sup> de Madrid. A Lasso junto a los doctores citados se debe la idea de intentar este nuevo ensayo, que tenía la intención de ampliarse y perfeccionarse con el tiempo a medida que los recursos lo posibilitaron. El servicio estuvo a cargo de la Agrupación “Amigas de los enfermos” que incluyeron en su programa benéfico y social la realización de la Biblioteca circulante en el Hospital Provincial de Madrid.

Se crea con la finalidad de remediar, en lo posible, los penosos días de hospitalización, procurando a los enfermos, a la vez que distracción formación, sobre todo para los de menor nivel cultural.

Esta interesante labor bibliotecaria comenzó a funcionar en 1950 con un lote inicial de 50 libros solicitado a la Junta por el doctor López Ibor, que fue rápida y progresivamente aumentando gracias a donativos hasta 250 volúmenes.

La experiencia se inició en la Sala de Mujeres de la Clínica de Psiquiatría, donde al principio, por desconocimiento se acercaban con recelo los enfermos a solicitar obras. Después se amplió el servicio al pabellón de los hombres por requerimiento de los doctores.

---

<sup>514</sup> MATO DÍAZ, A. “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada”, en: Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009.

<sup>515</sup> “Bibliotecas de hospitales en España. La del Hospital Provincial de Madrid”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, pp. 447-454

<sup>516</sup> El Instituto, siempre alerta a los vacíos en la educación española, organizó en 1928 los primeros cursos de biblioteconomía de Madrid. Estos cursos se impartirán durante 50 años

Como espacio vital, se concedió un pequeño armario situado en una de las habitaciones anejas a la clínica, que no tardó en transformarse en Biblioteca. En él se colocaron los fondos con arreglo a la clasificación decimal. Los volúmenes encuadernados se forraban de papel cristal, para que se conservaran pulcramente los libros. Poco a poco se fueron adquiriendo con sus propios recursos ediciones económicas de pequeño formato ya que el enfermo debía llevar el libro siempre consigo por no disponer un espacio cerrado donde guardarlo.

Se tenía que recurrir al servicio de préstamo, ya que los enfermos no podían salir de las salas donde estaban hospitalizados para acudir al local donde estaba ubicado el armario-biblioteca, por ello se adquirió un carrito con ruedas para circular con los libros. Los enfermos elegían la obra que deseaban leer y para controlar. Para facilitar el control de los préstamos se utilizaba un sistema de fichas donde se cruzaban los datos del lector con los del libro, fichas que luego servían para confeccionar las estadísticas.

En líneas generales los hombres leían más que las mujeres. Tenían además gustos más variados y en la elección de sus lecturas influía el grado y dirección de su cultura, así como las actividades de su vida y sus aficiones. Aparte de las obras de imaginación y recreo, también se demandaban otras de interés formativo de las respectivas profesiones como mecánica, electricidad, artes y oficios diversos, etc. Aunque en general se preferían las novelas de aventuras, biografías, obras de política contemporánea, narraciones cortas y variadas. Las revistas eran muy solicitadas, tanto por hombres como por mujeres. Estas solían pedir consejo sobre lo que debían leer, antes de leer. Eran aficionadas a las novelas, vidas de santos, revistas de modas, del hogar. Su cultura en general era más deficiente que la de los hombres. Muchas eran analfabetas, sobre todo las que procedían de medios rurales, y de entre ellas las de mayor edad. Como se aprecia, comparado con lo que se leía en una Biblioteca Pública normal las diferencias eran mínimas en los gustos lectores.

La clientela era muy variada y, como es lógico, se renovaba con bastante frecuencia. La mayor parte eran lectores que sólo utilizaban dos o tres libros, sin embargo había otros que leían hasta 20 y 30, ya que sus tratamientos eran más prolongados. También los había que aprovechaban el tiempo de reclusión para elevar su cultura. De los enfermos mentales se decía que eran muy puntillosos y susceptibles y por ello se procuraba ayudarles sin que se dieran cuenta.

La colección llegó a contabilizar los 900 volúmenes y las cifras de lectura: 712 lectores, 1339 lectoras. Libros leídos 3.659. Los más prestados obras generales 1.612 y literatura 1.443. El servicio funcionó únicamente en cuatro salas que podían albergar simultáneamente 217 enfermos aproximadamente.

El personal era voluntario en su totalidad, dedicando dos o tres horas semanales para dedicarlas a los enfermos. Este carácter dificultaba un poco una perfecta organización, pero en cambio ganaba en entusiasmo, ya que las personas que lo atendían lo hacían por verdadera vocación, teniendo una función educadora y orientadora<sup>517</sup>:

Las bibliotecarias de hospitales no son meras distribuidoras de libros, se trata de verdaderos consejeros y orientadores que deben sustituir la rutina de la máquina. La bibliotecaria de hospital tiene que tener imbuido un gran sentido educativo y servir de ejemplo a los pacientes para darles normas de orden, puntualidad, convivencia, respeto a sí y a los demás.

---

<sup>517</sup> "Bibliotecas de hospitales en España. La del Hospital Provincial de Madrid", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, pp. 452



El personal que se dedicaba a las tareas bibliotecarias eran diplomadas en una escuela de formación para “Asistentas sociales”, y tanto ellas como sus colaboradoras más directas cursaron estudios en el Instituto Internacional de Boston, adquiriendo conocimientos elementales de Biblioteconomía. Periódicamente celebraban reuniones para cambiar impresiones, comunicarse sus experiencias y elaborar planes que permitiesen mejorar su labor.

Los resultados en sus comienzos fueron excelentes obteniendo un enorme rendimiento con mínimo coste, pues dado el carácter de voluntariado del personal, el gasto en esta partida era cero. Con estos argumentos estas voluntarias bibliotecarias albergaban la esperanza de mejorar las condiciones del servicio<sup>518</sup>:

La Biblioteca es un lazo de unión de los enfermos con el exterior del que se han visto separados bruscamente. El tener libros, periódicos y revistas, les permite sobre todo éstas últimas estar en contacto con la vida, a la vez que es un medio del que nos valemos para averiguar sus preocupaciones, sus problemas, sus necesidades. Es muy halagüeño comprobar el agradecimiento, todos ansían que lleguen los martes y sábados –días destinados al préstamo– para obtener nuevos títulos que devorar durante los restantes días. Repartimos los libros entre una gran algarabía de preguntas, encargos, consultas, etc.

Tenemos la esperanza de que se nos conceda dentro del Hospital un local destinado exclusivamente a la Biblioteca, donde se puedan instalar estanterías abiertas, asequibles a los lectores. Así los enfermos podrían frecuentar más la biblioteca, e incluso podrían colaborar en su funcionamiento, colocar los libros, hacer fichas, llevar las estadísticas, distribuir los préstamos y recoger los leídos. Y sobre todo se podrían tener muchos más libros que los actuales, que aunque están bien seleccionados, son muy escasos para la población hospitalizada. Tenemos confianza no sólo en el Estado –esperanza en el próximo Centro Coordinador de Bibliotecas de Madrid<sup>519</sup>– sino también en los particulares y las asociaciones nos ayuden.

Con el tiempo este servicio dejó de funcionar y hasta finales de los 80 y principios de los 90 distintos organismos públicos (Ministerio de Cultura, INSALUD,...) y alguno privado (Fundación Germán Sánchez-Ruipérez) impulsarán la creación de bibliotecas para pacientes en los hospitales españoles.

#### **6.4.5. Lectura y bibliotecas en prisiones.**

Nuestras primeras bibliotecas penitenciarias arrancaron en 1879 con la entrega de 14 lotes de 214 volúmenes para instrucción y recreo de los penados. Se crearon en consonancia con el nuevo Derecho penal donde se reconocía que la instrucción debía ser el primer elemento de la reforma penal. Por ello los reglamentos de prisiones vincularon la biblioteca con la escuela, y, por consiguiente, los maestros se hicieron cargo de ellas, aunque serían los capellanes quienes seleccionaron los libros con criterios morales y religiosos, ya que gozaban de mayor autoridad política que los maestros.

---

<sup>518</sup> “Bibliotecas de hospitales en España. La del Hospital Provincial de Madrid”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, pp. 452-454

<sup>519</sup> En 1951 el Centro Coordinador de Bibliotecas de Madrid se le concede la aprobación pero hasta 1954 no comenzará a funcionar.

La actuación del franquismo en el campo de la lectura y las bibliotecas en las prisiones<sup>520</sup> se va a vender como una demostración del interés del Estado por la reconstrucción moral de la nueva España. La lectura mediatizada y encauzada hacia una finalidad educadora era el instrumento auxiliar más poderoso que podía utilizar el Estado en su lucha por la regeneración de los criminales. La asidua asistencia de los reclusos a las bibliotecas y salas de lectura de las prisiones debía formar parte de la rigurosa disciplina a que eran sometidos<sup>521</sup>.

Las bibliotecas de prisiones se organizaron como complemento de la obra total de regeneración. Por ello, su misión debía ser inculcar sanas lecturas y así desintoxicar de doctrinas marxistas y anarquistas, incluso de las inmorales novelas; además de cultivar el sentimiento religioso para conseguir el arrepentimiento y propósito de enmienda.

Aunque también hubo voces que pretendieron que la Biblioteca fuera un instrumento de formación y educación, más en consonancia con modernas concepciones de la cárcel que consideraban la pena de reclusión como un medio de mejoramiento social.

¿Qué debían leer los reclusos?<sup>522</sup>:

Junto a los libros religiosos han de figurar los que exalten el patriotismo: monografías históricas dedicadas a acontecimientos relevantes y decisivos y las grandes biografías ejemplarizadoras, pues avivan en los hombres, los anhelos de emulación y superación. Los libros profesionales de no gran envergadura y los opúsculos divulgadores deben formar el acopio más considerable de letra impresa en las bibliotecas de las prisiones para que aprendan materias elementales en provecho de su propia instrucción. Por último, considerar una noble preocupación en la regeneración penitenciaria: la de inclinar a los desventurados a la dicha de vivir el gozo y regocijo de la existencia, y para ello sí que tienen pasmosa eficacia los libros de imaginación que mueven el espíritu al amor de lo creado. Con su lectura, el delincuente sentirá ansias de vuelo de pronta redención.

Según el reglamento de 1948<sup>523</sup>, la biblioteca de la prisión debía ser seleccionada conforme a las normas de la Iglesia. De acuerdo a las mismas debían excluirse las siguientes lecturas: los textos de los enemigos de la Iglesia o influenciados por el paganismo o la superstición; las obras que estaban en contra de la libertad, de la inmunidad y de la jurisdicción eclesiásticas; los libros irreverentes o indiferentes con la religión; aquellos ejemplares que incluyeran ejemplos o ficciones que hiriesen o violasen los ritos eclesiásticos, las órdenes, estado, dignidad y persona de los religiosos; y principalmente, los que propagaran el llamado

---

<sup>520</sup> Ya que esta forma de extensión bibliotecaria ha sido abordada por Eduardo Ruiz Bautista en su tesis doctoral *Política cultural y propaganda en el primer franquismo (1939-1945)*, Alcalá de Henares, 2003, pp. 518-534 y más recientemente por Gutmaro Gómez, *La redención por las letras. La lectura en las prisiones de guerra*, en: *Historia de la edición en España (1939-1975)* / coord. por Jesús Antonio Martínez Martín, 2015, pp. 167-180 y Ana Martínez Rus, *La persecución del libro*, Gijón, Trea, 2014, pp. 194-198, me limitaré a esbozar las actuaciones del franquismo durante estos años.

<sup>521</sup> "Las bibliotecas de prisiones y su importancia social" por Esteban Calle Iturrino (*El Correo Español*. El pueblo Vasco 20 abril 1941). AGA Educación 31/6067

<sup>522</sup> "Las bibliotecas de prisiones y su importancia social" por Esteban Calle Iturrino (*El Correo Español*. El pueblo Vasco 20 abril 1941).

<sup>523</sup> Citado por A. Martínez Rus en *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*, p. 197

volteranismo o el desprecio o irrisión, o al menos la indiferencia, hacia los que se refería a la religión y a la pureza de las costumbres.<sup>524</sup>

Las condiciones generales que debía reunir una buena colección de libros para el servicio de prisiones según criterios técnico-profesionales<sup>525</sup> eran libros recreativos, prácticos e inspiradores de ideas y pensamientos generosos y elevados; debían ser alegres; debía incluirse un buen número de literatura optimista y juvenil, además de libros en idiomas extranjeros. *La proporción entre la literatura exploratoria, la recreativa, la curativa y la técnica profesional debía estar graduada y administrarse conforme a las necesidades de cada recluso.*

Se estipuló que través de la lectura las condenas se podían reducir. Concretamente se concedía la redención a los condenados que durante su estancia en prisión lograsen instrucción religiosa y cultural, aunque se excluyó de tal beneficio a los encausados por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Otras medidas adoptadas como instrumentos de propaganda escrita fueron la creación del semanario *Redención* y la editorial del mismo nombre, cuyos artífices provenían de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), en concreto, fue José Sánchez de Muniain su alma mater

El semanario *Redención*, sería el único periódico que podían leer los presos, costaba dos pesetas y se vendía por suscripción, con lo cual la propaganda le salía gratis al Estado. A cambio de colaborar en su redacción los presos obtenían beneficios como estar más cerca de la familia, tener acceso a más visitas, mejorar la comida y una progresiva reducción de la condena. La suscripción también se compensaba con la autorización de visitas.

Como apunta Ana Martínez Rus, con esta publicación se quería mostrar que en la España de Franco los presos aprendían a leer y escribir, y hasta hacer periódicos con el objetivo de maquillar la dura imagen de la represión a la vez que desmitificar la labor pedagógica y el proyecto cultura republicanos<sup>526</sup>

Dentro de la misma tónica se crea la editorial Redención, cuyo plan era publicar libros baratos (una peseta para el suscriptor) con el objeto de que el recluso español pudiera tener su biblioteca particular. Sus tiradas oscilaron entre los 25.000 y los 30.000 ejemplares. Se editaron dos colecciones, una elemental y de oficios y otra general dividida en cinco series: Apologética de tema religioso, Política y sociedad, Historia, Científica y Literaria<sup>527</sup>.

El libro en el sistema penitenciario de la nueva España, no es sólo un amigo, es, también, una medicina, un antitóxico, un factor decisivo en la terapéutica social. Con esta preocupación se han creado los talleres tipográficos de la prisión de Alcalá de Henares, destinados a producir libros especialmente escritos para los reclusos<sup>528</sup>.

---

<sup>524</sup> Citado por Ana Martínez (2014), p.197

<sup>525</sup> LASSO de la VEGA, J. Manual de biblioteconomía, Madrid, Mayfé, p. 649

<sup>526</sup> MARTÍNEZ RUS, A. La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951), Gijón, Trea, 2014

<sup>527</sup> GÓMEZ BRAVO, G. La redención por las letras. La lectura en las prisiones de posguerra. En: MARTÍNEZ MARTIN, J.A. (coord.) Historia de la edición en España (1939-1975) , Madrid, Marcial Pons 2015

<sup>528</sup> “Las bibliotecas de prisiones y su importancia social” por Esteban Calle Iturrino (El Correo Español. El pueblo Vasco 20 abril 1941). Artículo para concursar al premio sobre el mejor artículo dedicado a las bibliotecas de prisiones con motivo de la Fiesta del Libro de 1941

Según las memorias del Patronato de Redención Penas por el Trabajo, en 1942 las bibliotecas de prisiones contaban con un fondo revisado y censurado de 35.255 volúmenes, realizándose 143.017 lecturas. Dos años después, en 1944 los establecimientos penitenciarios acumulaban más de 50.000 volúmenes, también debidamente censurados y revisados, destacando por su dotación las prisiones de Barcelona, Burgos, Córdoba, Pamplona, Oviedo, Madrid y Valladolid. 173.019 lecturas.

Algunas bibliotecas de prisiones fueron dotadas con lotes procedentes de la Junta. Algunas de estas dotaciones bibliográficas han sido analizadas por Ruiz Bautista<sup>529</sup>, quién llega a la conclusión de que muchos eran libros editados antes de la guerra y adquiridos por las autoridades republicanas y su temática en nada demostraba intenciones de adoctrinamiento, sino más bien instructivas al ser mayoritarios (más del 50%) los libros de nociones de mecánica, electricidad, automoción, agricultura, albañilería, así como de salud e higiene. A continuación, con un 20%, estaba la literatura, sobre todo clásicos españoles.

Según las autoridades penitenciarias los libros más leídos eran el *Quijote*, *La Gitanilla*, *El sombrero de Tres picos*,... *Orientaciones de la cultura española* de Menéndez Pelayo. Lo que refleja la tendencia de los reclusos a desentenderse de las obras propagandísticas prefiriendo los clásicos españoles y universales. Según las estadísticas de préstamo de la prisión habilitada en Conde Peñalver, los temas más prestados habrían sido: Literatura, Geografía e Historia, Ciencias puras y aplicadas, y el título más solicitado, *Quo vadis?*

Las lecturas que las autoridades penitenciarias fomentaban entre los reclusos muchas veces no se realizaban libremente, sino forzadas por cualquiera de los muchos resortes coercitivos con que se dotó el propio sistema. Por ejemplo, las lecturas en común se establecieron obligatoriamente en todas las prisiones, forzando a los reclusos a asistir como oyentes a cambio de reducciones de condenas. En estas sesiones se priorizaban los libros de formación patriótica y religiosa y también grandes obras de la literatura castellana (*El Quijote*, *Poema del Cid*)

A través del análisis de las páginas de *Redención*, Gutmaro Gómez entresaca noticias relativas a las bibliotecas de las prisiones como que éstas recibían donaciones de Acción Católica y del Servicio de "Lecturas para el soldado", que sólo había libros de carácter instructivo y novelas de sana moral (Larriñaga, Bilbao) o que la Prisión de Torrijos poseía una colección con 1.500 ejemplares de todas las materias y una importante sección circulante de literatura.

Pero también tenemos noticias de bibliotecas de prisiones a través de las memorias de Centros Coordinadores de Bibliotecas, como la "Biblioteca Félix Aramburu" de la Prisión Provincial de Oviedo, inaugurada el Día del Libro de 1942 con dos mil volúmenes que *fueron devorados por los presos, en sólo ocho meses se realizaron 9.653 lecturas, muestra de la avidez lectora de los represaliados políticos*. Esta Biblioteca fue objeto de inspección por parte de la Junta, cuando ésta visitó todas las bibliotecas públicas de Asturias en 1944. Estas fueron las impresiones del inspector<sup>530</sup>:

"Por la tarde del mismo día, visité la Biblioteca de la Prisión provincial, en las afueras de Oviedo. Está instalada la Biblioteca en una sala de una de las alas del edificio, con buenas luces; su mobiliario es más modesto que el del Hospicio, pero está en buenas condiciones. Tampoco, naturalmente, esta Biblioteca es pública, siendo solo utilizada por el personal recluso. Está funcionando casi todo el día y está constantemente ocupada por lectores que olvidan en ella su

<sup>529</sup> RUIZ BAUTISTA, E. Política cultural y propaganda en el primer franquismo (1939-1945), TD, Alcalá de Henares, 2003, pp. 518-53

<sup>530</sup> "Visita de inspección a las Bibliotecas Populares de Asturias" (1944). AGA-Cultura 75/20152

condición de presos. En el momento de la visita los asientos estaban llenos. Hice algunas preguntas a distintos lectores sobre sus preferencias literarias, científicas o artísticas, sacando en conclusiones que las materias que más interesan a la población penal son: Historia, Ciencias sociales, Oficios y Literatura. Está la Biblioteca al cargo directo del Maestro de la Prisión D. José Santos González, a quién prometí el envío de un lote de libros selectos (...) Quedé muy bien impresionado de la eficacia de la Biblioteca entre el personal recluso”.

En la convocatoria de la Fiesta del Libro 1941 para premiar el mejor artículo periodístico, el tema escogido fue “Las bibliotecas de prisiones. Su importancia social”. El artículo premiado correspondió a Juan Manuel Vega, redactor-recluso de *Redención*, donde se aprecia el aparente éxito de conquistar las minorías selectas para la causa nacional:

“Para nosotros reclusos de Madrid hubo una fecha con rasgos indelebles, fue cuando una Comisión Femenina del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios se acercó a nosotros para traernos el libro. En la tribuna presidencial asistió el señor Miguel Artigas.

El preso lucha por vencer y superar la realidad que le cerca. En los estantes azules de la Biblioteca recién regalada cada uno de los volúmenes nos prometía un mundo liberado de ataduras y pesadumbres físicas. El libro en la prisión es siempre, ante todo, una ventana abierta a lo inefable y una evasión espiritual hacia las limpias regiones del ensueño poético.

La misión de nuestras bibliotecas es la de la redención del espíritu por la cultura. Rescate moral y social del individuo. Las bibliotecas de las prisiones –prolongadas en la sabia labor divulgadora de hechos e ideas nacionales de la Editorial Redención- son elemento imprescindible y de primer orden para lograr este fin.

Debe ser el libro el principal asidero para sacarnos a flote y para conducirnos al descubrimiento de la verdad. Nuestras bibliotecas además de constituir un resorte fundamental y de incalculable valor para la desintoxicación e integración espiritual, defienden al preso contra la soledad y la amargura, contra los pensamientos estériles y las depresiones morales. El tiempo vacío e inútil del preso se llena y se vigoriza con los beneficios de la lectura en común y con la meditación de las sugerencias que le han traído las páginas de los libros.

El Patronato para la Redención de Penas rechaza los métodos de la propaganda que tratan de sobornar los sentidos con colores vivos, gestos, etc., por el contrario hay que ganar las conciencias mediante la persuasión despojada de gritos histéricos y de ruidos sensacionalistas que atropellan y marean el entendimiento. De acuerdo con este postulado, las armas silenciosas de los libros serán elemento indispensable para ganar la gran batalla de la unión y de la hermandad ante el destino común de la patria”<sup>531</sup>

En las prisiones españolas, escribía Lasso de la Vega en 1952, existían bibliotecas cuidadosamente formadas, aunque sin otros propósitos que el de distraer e instruir al recluso. No se habían creado con intento de analizar la psicología del delincuente y de tratarle con las lecturas adecuadas para, reformado, devolverlo normal a la sociedad. Por ello, tampoco figura en estas prisiones ningún bibliotecario profesional especializado, ni al personal del Cuerpo de Prisiones se le ha dado ni se le exige estudios relacionados con esta especialidad de nuestra profesión<sup>532</sup>. Es evidente que en estas palabras escritas como profesional de las bibliotecas, se ignoraba la realidad de las prisiones españolas, más llenas de presos políticos y represaliados que de presos comunes.

Paralelamente a esta acción oficial los propios presos se proveyeron de libros de manera clandestina, circulando por los penales a través de redes y bibliotecas ambulantes como han puesto de manifiesto muchos reclusos en sus memorias.

---

<sup>531</sup> AGA-Educación 31/6067

<sup>532</sup> LASSO de la VEGA, J. Manual de biblioteconomía p. 649

#### 6.4.6. Las bibliotecas viajeras

Dentro de lo que en el ámbito de la biblioteconomía pública se denomina extensión bibliotecaria, hay que hablar sobre las llamadas bibliotecas viajeras, experiencia que se desarrolló a finales de los 40 y comienzos de los 50, y que constituye el precedente inmediato de los bibliobuses.

El servicio de bibliotecas viajeras<sup>533</sup> es una forma de hacer llegar el libro con regularidad a grandes áreas o sectores geográficos que por su alejamiento de los centros urbanos o por otras razones no pueden disponer de ellos. Suponen la transformación del antiguo concepto estático de la biblioteca en otro dinámico, aumentan la potencia difusora del libro e implican una economía, pues con menos volúmenes desarrollan un número de lecturas mayor, proporcionalmente, al de una Biblioteca fija.

Creadas por Melvil Dewey en 1892 en los Estados Unidos, en los comienzos de los 50 ya contaban con este servicio Inglaterra, Italia y Francia. Primeramente adoptó la forma de maletas que se enviaban a las poblaciones para después evolucionar hacia el bibliobús

La imposibilidad económica, así como la ineficacia –desde el punto de vista práctico y funcional- que supondría la creación de Bibliotecas Públicas en todos los Municipios Españoles, aconsejó llevar los libros a los pueblos más pequeños y apartados mediante la organización de un servicio nacional de bibliotecas viajeras.

Otra modalidad, más económica, fue la de enviar lotes periódicos de libros desglosados de sus propios fondos, pero esto suponía que la biblioteca debía de contar con un número considerable de volúmenes para no dejar desatendidos a sus usuarios y que sus fondos fueran variados, cosa que en la realidad bibliotecaria de 1951 no se cumplía ya que los lotes fundacionales enviados por la Junta eran bastante uniformes.

Precedentes en España, se habían dado en Cataluña en las llamadas bibliotecas filiales, ramificación de las Bibliotecas Populares, que consistían en lotes mensuales de libros que se intercambiaban entre bibliotecas. En 1939 Barcelona contaba con 16 bibliotecas filiales, y en 1945 entre las Bibliotecas Populares de Sitges, Sallent y Esparraguera se intercambiaban lotes circulantes de obras de actualidad o novedades editoriales. Otro antecedente fueron las bibliotecas circulantes organizadas por la Caja de Ahorros de Sabadell. En el curso 1941-42 – primero en que funcionó- se utilizó por 11 escuelas y 451 alumnos, siendo 1.158 los volúmenes prestados. Pero anterior a estas experiencias, despachadas en cuatro líneas y calificadas de “tímidos ensayos, intentos fracasados y proyectos no puestos en práctica”<sup>534</sup>, por el promotor de las bibliotecas viajeras, estuvo la labor de las Misiones Pedagógicas con la remisión de lotes a las escuelas.

En cuanto a las provincias que poseían Centro Coordinador de Bibliotecas, fue la de Soria<sup>535</sup> la primera que organiza un servicio de bibliotecas viajeras, y fue su director José Antonio Pérez-Rioja su mentor. Las especiales condiciones de esta provincia brindaron un campo de experimentación muy adecuado: por un lado, el nivel de instrucción primaria satisfactorio y porcentaje de analfabetismo mínimo, largos inviernos, el carácter de los sorianos (sobrios,

---

<sup>533</sup> PÉREZ-RIOJA, José Antonio. *Las bibliotecas viajeras*, pp. 20-44

<sup>534</sup> José Antonio Pérez-Rioja, director del Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria, promotor de este servicio quién nos ha dejado testimonio escrito de su experiencia y un manual sobre este tipo de servicios

<sup>535</sup> PÉREZ-RIOJA, J.A. “Las bibliotecas viajeras en Soria”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, año 1, n. 1, 1952, pp. 15-20

hogareños), por otro la reducida población diseminada en pequeños pueblos. Se comenzó en 1949 con 12, su éxito fue tal que en 1952 funcionaban 24 (seis de 100 volúmenes, doce de 60 y y otras seis de 50). Eran de dos clases: unas de tipo arqueta con capacidad para 50 volúmenes; las otras de tipo divisoria al centro con capacidad media para 100 volúmenes. En la parte interior de la tapa o puertas iban pegadas las listas-catálogos por materias, y dentro de cada una de éstas por orden alfabético de autores, de las obras que contenía, así como las normas e instrucciones para su petición y manejo; también se incluían talonarios de recibos de préstamo.

Importancia capital de este sistema y base de su éxito fue la acertada selección de los libros. “Han de ser elegidas obras amenas, instructivas, sanas en el orden moral, formativas en lo social y siempre adecuadas a los lectores a quienes se destinan”. Se optó por establecer cinco grupos amplios y flexibles de materias, con títulos diferentes dentro de la mayor variedad posible de autores. Los cinco grupos de materias fueron: obras infantiles y juveniles, manuales de ciencias, artes y oficios y de formación moral, religiosa y social; manuales y folletos de divulgación agrícola, ganadera y forestal; Literatura española e historia-geografía-viajes-biografía.

Un sencillo lector de cualquier pueblo de la altimeseta soriana puede hallar en estas pequeñas bibliotecas el compendio de Gramática, de Historia, de Moral; el manual de Contabilidad, de Carpintería o de cualquier oficio, junto a una comedia de los Quintero o de Benavente o una novela de Dickens o Palacio Valdés; un folleto sobre las plantas aromáticas y forestales, el ordeño, los abonos o la remolacha azucarera, al lado de una leyenda de Zorrilla o de Bécquer o las poesías completas de un Gabriel y Galán o un Antonio Machado.

El procedimiento era sencillo y eficaz: cuando se disponía en el depósito del Centro Coordinador de algunas bibliotecas viajeras se publicaba un aviso en el *Boletín Oficial de la Provincia* y en la prensa de la capital; también se utilizaba la emisora de radio local. Se informaba a los Ayuntamientos de que el servicio era gratuito. Y éstos cursaban una comunicación oficial al Centro Coordinador en demanda de una biblioteca, notificando la persona que se hacía cargo –solía ser el maestro-. Seguidamente el Centro Coordinador anunciaba la concesión –si estaba agotado se establecía un turno- y a continuación se enviaba por medio de ferrocarril o autobús de línea cuando el municipio estaba comunicado con la ciudad, y si no, el Ayuntamiento enviaba dos personas autorizadas a recogerlo.

El plazo de disfrute de cada biblioteca era de tres a cuatro meses, pudiéndose renovar. Cuando la biblioteca viajera llegaba al pueblo, el Ayuntamiento lo difundía a través de avisos en la parroquia, la escuela, los comercios o en el propio Ayuntamiento. Éste era el responsable de la devolución en buen estado, en caso de extravío o deterioro, el Ayuntamiento obligaba a los lectores a la reposición. Del servicio de préstamo se encargaban, casi siempre, los maestros.

Al ser Soria una provincia agrícola, las fechas de más solicitud estaban entre octubre y abril. Respecto a las preferencias de los lectores, cambiaba de unos pueblos a otros, pero como nota predominante las obras más solicitadas fueron las de Literatura, seguidas de las de divulgación agrícola y ganadera, viajes y biografías, juveniles e infantiles y manuales de formación moral y social y de ciencias.

En cuanto a las zonas, además de Soria capital y sus alrededores, las más lectoras fueron las periféricas de la parte noroeste que limitan con Burgos y de la parte norte y noreste que limita con Logroño y Zaragoza; en cambio, la zona meridional que limita con Guadalajara y Segovia no tuvo a penas municipios solicitantes, indudablemente por estar más alejados de la capital y tener peores infraestructuras de comunicación.

También se remitieron algunas bibliotecas viajeras con rigurosa periodicidad a la Prisión Provincial de Soria y al Hogar Parroquial de la Colegiata de San Pedro. Tuvieron bibliotecas viajeras, aparte de Soria, Guadalajara, Huelva, Madrid, Santander, Burgos, y, según el BOE de 1951 en este año se crean (o se pretendían crear) 15 en Burgos, 5 en Huelva, 3 en Madrid y 2 en Guadalajara.

Otra experiencia de biblioteca viajera o circulante partió de la Caja de Ahorros de Sabadell en el curso 1941-1942<sup>536</sup>. Como en todas las populares funcionaba en esta Biblioteca la sección infantil, pero dada la gran extensión de Sabadell, buena parte del público infantil no podía frecuentar asiduamente la Biblioteca. De ahí surgió esta idea de un tipo de Bibliotecas Escolares Circulantes graduadas con especializaciones, complementadas con aparatos de proyección, juegos dotados del servicio de préstamo a domicilio, para que el libro llegara a los hogares más humildes. Se formaron 12 lotes, 3 de carácter general para alumnos de grado elemental, medio y superior y 9 especializados por materias y en algunos casos por sexos. La sección de Literatura figuraba en todos los lotes por ser los cuentos y demás obras de imaginación de interés para todo el público infantil. Todos los lotes iban provistos de juegos diversos con objeto de proporcionar a los escolares esparcimiento en sus ratos de ocio. Cada lote iba debidamente acondicionado con un armario de sólida construcción y fácil transporte y provisto de un Catálogo de autores, otro de materias y uno especial de títulos para la sección de Literatura, el de Registros y el de Préstamo. Sobre cada armario-lote iba colocado un cuadrillo el que figuraba una frase para recordar al niño el amor y cuidado que debía poner en el trato con los libros. Los maestros que deseaban utilizar este servicio podían solicitarlo.

La Biblioteca permanecía en la Escuela durante 3 meses, y disfrutaba del servicio de préstamo a domicilio bajo la dirección del maestro. Por cada libro prestado se pagaba una cuota de cuota de 10 céntimos. Al finalizar el año escolar la cantidad recaudada se sorteaba entre las diversas escuelas que habían utilizado el servicio de Bibliotecas Escolares Circulantes.

Este es el resumen de su actividad:

Curso 1941-1942: 11 escuelas, 451 alumnos, 1.158 libros prestados y 121 pesetas recaudadas.

Curso 1942-1943: 35 escuelas, 937 alumnos; 2.470 préstamos y 259 pesetas recaudadas.

Curso 1943-1944, 38 escuelas, 832 alumnos, 2169 obras leídas y 220 pesetas recaudadas.

Curso 1944-1945, 39 escuelas, 794 alumnos, 2.827 obras leídas y 314 pesetas recaudadas.

---

<sup>536</sup> RIBAS. E. "La Biblioteca de la Caja de Ahorros de Sabadell. Bibliotecas escolares circulantes", *Biblioteconomía, boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 3, nº. 11, 1946, pp. 253-256



## **6.5. LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y RESTO DE BIBLIOTECAS DE TITULARIDAD PÚBLICA**

### **6.5.1. Bibliotecas escolares**

El desarrollo de las bibliotecas y su diversificación, junto a la aparición de nuevas corrientes pedagógicas, que promovían el espíritu de la investigación de los escolares con la utilización de fuentes de información, favorecieron el impulso de la Biblioteca escolar. Pero su situación y desarrollo fue muy dispar según los países, en función de si se le asignaron recursos, si se diferenció de la Biblioteca Pública o si se integró en el sistema bibliotecario o escolar. España adoptó el modelo de biblioteca escolar más tradicional centrando su función en el libro y la lectura, donde frecuentemente la Biblioteca escolar suplía a la pública.

La primera legislación estatal española con respecto a la creación de bibliotecas escolares corresponde al R.D. de 30 de abril de 1909, donde se habla de *la adquisición de libros con destino a las bibliotecas que se han de formar para la vulgarización de los conocimientos en Escuelas de primera enseñanza, círculos obreros, sociedades agrícolas, mercantiles,...* Posteriormente, en 1912 se crearán las Bibliotecas Escolares Circulantes, a cargo de las Inspecciones de Enseñanza Primaria.

Habrà que esperar a la década de los treinta y la proclamación de la II República para aspirar a que toda escuela nacional poseyese una biblioteca con el Decreto de 7 de agosto de 1931. Pero esta promesa no pudo ser cumplida, aunque entre 1931 y 1936 muchas escuelas sí se vieron beneficiadas por los lotes de libros del *Patronato de Misiones Pedagógicas*, lotes limitados en número, pero bien escogidos en su repertorio, que fueron núcleo de muchas bibliotecas que se ampliaron sobre esta base<sup>537</sup>.

Entre 1936 y 1952, al tratar el tema de la biblioteca escolar en España, hay que constatar dos hechos un tanto dispares. Por un lado, en los años finales del conflicto se legislará en sintonía con la más moderna biblioteconomía anglosajona y por otro, asistiremos a una depuración y posterior ideologización en la selección y adquisición de libros para su distribución en las escuelas.

A través de la Jefatura del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Educación Nacional, el bibliotecario Javier Lasso dejará su impronta tanto en las disposiciones legislativas sobre bibliotecas, como en textos técnicos que recogían la más avanzada biblioteconomía infantil y escolar<sup>538</sup>.

Para él, las bibliotecas debían integrarse en el ámbito de la enseñanza y convertirse en instrumentos de trabajo para los estudiantes. Al maestro correspondía explicar al niño las

---

<sup>537</sup> J.M. MORENO, «Las bibliotecas escolares a nivel de la enseñanza primaria», Actas y ponencias del II Congreso Nacional de Bibliotecas: (Gerona, 1966), Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1968, pp. 229-233

<sup>538</sup> En *La biblioteca y el niño*, editada en 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, se recogen dos conferencias impartidas por Lasso: la primera trata, sobre el concepto de biblioteca, las condiciones que debe reunir una biblioteca infantil, procedimientos para atraer al niño a la biblioteca, tareas que debe cumplir el bibliotecario. La segunda, se centra más en la biblioteca escolar, se refiere a las funciones del maestro, reflexiones sobre la lectura y el niño, el estudio de la literatura infantil.

ventajas de la biblioteca en el campo instructivo y en el recreativo y debía enseñarle cómo en la biblioteca pueden resolverse la mayoría de los problemas literarios y científicos y cómo el que aprende a utilizarla desde pequeño, de mayor puede acudir a ella para seguir estudiando y aprendiendo<sup>539</sup>. La ausencia de esta formación detectada en el alumnado que llegaba a la Universidad, quiere subsanarse con la orden de 23 de mayo de 1938. En ella se fijaban normas para que los alumnos de enseñanza media se adiestrasen en el manejo de las fuentes bibliográficas. En la misma línea, la Orden de 8 de octubre de 1938 establecía las bases de la relación entre la biblioteca y la escuela precisando las prácticas que deberían realizar tanto el maestro como el bibliotecario para dar a conocer al niño el uso de los libros de información general y de las bibliotecas.

En otras disposiciones se pretendía una mayor compenetración entre los organismos docentes y las bibliotecas de instituto y se legisló sobre el personal (órdenes de 8 y 24 de agosto y de 19 de octubre de 1938), abriendo la posibilidad de que los estudiantes colaborasen en su organización. La última orden, con fecha 6 de marzo de 1939, se recogían las normas por las que debían reglamentarse las bibliotecas de los institutos: fondos, presupuesto, adquisiciones, funciones del director y del bibliotecario del Instituto, inspección, servicio de préstamo.

¿Y qué se llevó a la práctica de toda esta normativa? A priori, y vista la evolución de las bibliotecas escolares en nuestro país, se puede decir que muy poca, aunque todavía no se ha investigado con documentación primaria la actividad de las mismas.

*Ante la labor nefasta por antinacional, atea, marxista y extranjerizante que había ejercido sobre los pueblos el Patronato de Misiones Pedagógicas, se crea una Comisión Reorganizadora del mismo que acabará formando el Patronato de Cultura Popular<sup>540</sup>, cuyo fin era llevar a todos los pueblos de España el espíritu del Glorioso Movimiento Nacional, haciéndoles sentir la unidad así como la disciplina y lealtad al Caudillo.* Presidido por el Delegado Nacional de Educación de FET y de las JONS, dependería del Ministerio de Educación Nacional.

A través de la memoria<sup>541</sup> de los trabajos realizados, desde octubre de 1940 a marzo de 1942, por la Sección de Bibliotecas del Patronato de Cultura Popular, sabemos que se entregaron 1.546 bibliotecas a escuelas primarias públicas y privadas, incluidas las del Protectorado español y francés en Marruecos y a las ciudades de Francia y Portugal donde España mantenía escuelas primarias. Por provincias Madrid recibió 114, Soria 101, Valencia 75 y Lérida 60. El criterio de adjudicación estuvo en función del número de lectores, seguido de las demandas, aunque éstas no pudieron ser atendidas todas por falta de medios.

La primera labor que realizó el Patronato fue el envío de una relación de libros “no aptos” por *nefastos, antipatrióticos y sectarios* para su expurgo y posterior envío a Madrid. Luego vino la selección y la adquisición, con gran escasez de medios económicos, y por último el envío de nuevas Bibliotecas a las escuelas desprovistas o la sustitución de los libros separados por funestos.

---

<sup>539</sup> J. LASSO de la VEGA, *La biblioteca y el niño*, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1938, p. 55

<sup>540</sup> Orden 19 de junio de 1939 y Orden 12 de julio 1940.

<sup>541</sup> PATRONATO DE CULTURA POPULAR. Sección de Bibliotecas, *Memoria de los trabajos realizados desde octubre de 1940 a marzo de 1942*, Madrid, 1942? y A.O.M., “Más de mil quinientas bibliotecas populares han sido repartidas por el Ministerio de Educación”, *Revista nacional de educación*, n. 25, 1943, pp. 75-78

Las obras que formaron estas bibliotecas procedían de las adquisiciones del propio Patronato, de las obras obtenidas por cambio con la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y por fondos procedentes del antiguo Patronato de Misiones Pedagógicas.

La Biblioteca escolar debía atender primero a los fines sobrenatural, familiar, histórico y profesional del hombre y después podían agregarse otros libros que *ilustraran al pequeño sobre la cultura de la Humanidad*. Los redactores de la citada memoria se vanagloriaban de que por primera vez desde la constitución de las Bibliotecas populares, el Ministerio de Educación enviara a las escuelas primarias un lote de libros religiosos para el niño y el maestro (catecismo, Evangelio, Liturgia, Historia de la Iglesia, devocionario popular, encíclicas sobre educación y familia). La orientación política de la selección se reflejaba en las obras representativas del Glorioso Alzamiento y las obras de espíritu católico y españolismo integraban la Sección de Historia. Otras materias que completaban las bibliotecas eran libros de viajes y descubrimientos, obras científicas, de orientación profesional, pasatiempos o las obras del cardenal Gomá.

Entre las nuevas adquisiciones no figuraban casi obras de autores extranjeros, porque los escolares debían conocer bien España en sus múltiples manifestaciones, aunque también se reconoce que la selección de autores es deficiente por estar agotados en el mercado.

El Patronato también ofrecía a los maestros bibliotecas con los libros necesarios para los círculos de orientación pedagógica, divididos en cinco secciones: religiosa, nacionalsindicalismo, histórica y geográfica, literaria y de pensamiento español.

Distinguían diferentes tipos de bibliotecas: las dirigidas a los maestros e inspectores; las complementarias (completan las antiguas de Misiones ya expurgadas); otras con libros femeninos que representan la orientación cristiana de la familia, la educación de los hijos, la organización del hogar; y luego según el número de volúmenes (80 o 120).

La legislación determinó que el modo de adquirir libros para formar una biblioteca escolar era a través del Patronato de Cultura Popular, con intervención de la inspección, proporcionando un lote base con cien ejemplares.

El Instituto San José de Calasanz en el seno del CSIC, siguió durante algunos años la labor del Patronato, repartiendo modestos lotes de libros, que unas veces quedaban como único fondo bibliográfico de la escuela y otras eran núcleo de otras bibliotecas que directores y maestros construían con gran esfuerzo personal.

Para asesorar a los maestros en la puesta en marcha de la biblioteca escolar, la inspectora de Primera Enseñanza Francisca Montilla, editó un folleto de orientación y divulgación pedagógica dedicado a la organización de la biblioteca escolar<sup>542</sup>, donde dice que se prescinde de utopías y aspiraciones irrealizables, en clara crítica al libro de Javier Lasso, aunque sí coincide con él en las funciones de la biblioteca escolar, aunque a la que se da mayor importancia es la de ser *instrumento del maestro para cultivar en los niños aficiones literarias que completen su formación cultural y depuren su gusto con la lectura de buenos autores*. Esa depuración que le viene impuesta al maestro, está determinada por los criterios de una selección ortodoxa e intransigente no sólo con el libro de texto. El bibliotecario ha de orientar, y por ello ha de evitar la perversión moral por la lectura de libros perniciosos y ese peligro hay que evitarlo alejando al niño de esos libros y haciéndoles experimentar aversión hacia ellos, hacerle consciente de los peligros a que se expone.

Incluso, aunque se fomente la afición de los cuentos en niños poco amigos del libro como recurso para engancharles al libro, se tenderá a que busquen con predilección obras de lectura

---

<sup>542</sup> F. MONTILLA, *Organización de la biblioteca escolar*, Madrid, 1942

provechosa, ya que en la llamada literatura infantil y juvenil abunda lo inútil y perjudicial. Se llama la atención del peligroso gusto de las niñas por las novelas y de los niños por los libros de aventuras. Al hacer la selección han de ocupar lugar preeminente los libros capaces de elevar el contenido religioso del niño y sus sentimientos patrióticos.

Posteriormente, en la Ley de Protección Escolar de 1944, se dice que el Ministerio prestará la asistencia en libros con destino a los escolares “necesitados” mediante la creación de Bibliotecas de Protección Escolar en directa relación con la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Diez años más tarde se crea el Servicio de Lectura Escolar a través del Decreto de 10 de junio de 1954, como un apoyo bibliotecario plenamente integrado en una Sección del Servicio Nacional de Lectura. Todas las bibliotecas dependientes del Servicio Nacional de Lectura crearían una Sección de Préstamo Escolar con los fondos propios en un plazo de tres meses a partir de la publicación de este Decreto. Igualmente las bibliotecas de los Centros de Enseñanza dependientes del Ministerio crearían una sección semejante. Estas secciones estarán integradas por libros de texto y de consulta. Estas bibliotecas dedicarían entre el 15 por 100 y el 20 por 100 de sus créditos para adquisición de libros para incrementar sus colecciones de préstamo. Al Servicio de Lectura Escolar no se le dotó con los medios necesarios para su funcionamiento, y la realidad de la mayoría de las escuelas, especialmente las rurales, era que carecían no sólo de biblioteca, sino de una indispensable colección de libros modernos y adecuados a su propia labor docente<sup>543</sup>.

Esta deficiencia se intentó paliar con las Bibliotecas de Iniciación Cultural (1955), lotes de libros que la Comisaría de Extensión Cultural prestaba a las escuelas de enseñanza primaria por correo. 9.000 centros se beneficiaron de estos lotes cuyo propósito era crear el hábito lector entre los más pequeños como de recuperarlo en los adultos. Durante sus doce años de existencia se enviaron unos diez millones de libros.

Pese a solicitarse desde la Comisión de Literatura Infantil y Juvenil del INLE una red nacional de bibliotecas escolares, apoyándose en el I Plan de Desarrollo (1964-1967), o recomendarse en el marco del II Congreso Nacional de Bibliotecas (1966), que todo centro educativo debía tener una biblioteca, el Estado continuó con una pacata política de donación de lotes bibliográficos, olvidándose una vez más de la biblioteca escolar en la Ley de Educación de 1970<sup>544</sup>.

Deficiencias de la Biblioteca escolar en este periodo fueron muchas y persistentes en el tiempo como apuntaron maestros o inspectores de educación<sup>545</sup>. Continuaron imperando criterios moralizantes e ideológicos en la selección de la colección; la falta de recursos fue una constante, que hubo de paliar recurriendo a las donaciones o cobrando el servicio de préstamo; los fondos bibliográficos eran tan escasos, que al ser leídos perdían interés enseguida. Mientras en unos casos, su buen funcionamiento dependía del entusiasmo del maestro, en otros, los centros se limitaban a recepcionar los lotes de libros y no se molestaban en organizarlos y ponerlos en circulación.

---

<sup>543</sup> J.A. PÉREZ-RIOJA, *La biblioteca en la escuela*, Madrid, 1961, p. 9

<sup>544</sup> J.A. CAMACHO ESPINO, *La biblioteca escolar en España: pasado, presente-- y un modelo para el futuro*, Madrid, Ediciones de la Torre, 2004, pp. 28-32

<sup>545</sup> R. ALSINA, «La biblioteca escolar» *Vida escolar*, n. 33, 1961, p. 33-34; J. NAVARO HIGUERA, «La biblioteca escolar en las pequeñas escuelas» *Vida escolar*, n. 113, 1969, p. 30-33 y J. GARCÍA PADRINO, «Experiencias y proyectos sobre la biblioteca en los centros de E.G.B.: ponencias presentadas al I Simposio Nacional de Literatura Infantil», *El Libro español*, n. 272, 1980, pp. 430-433

### 6.5.2. Resto de bibliotecas.

Para cerrar esta visión del panorama bibliotecario en la década de los 40, habría que hablar de las bibliotecas que estuvieron a cargo de los Cuerpos Facultativo, Ayudante y Auxiliar.

En primer lugar, la Biblioteca Nacional, tras el paréntesis de la guerra, su dirección vuelve de nuevo a Miguel Artigas, quién también dirigió los designios de la recién creada DGAB hasta que muere en 1947. Bajo la II República Artigas acometió varias reformas como la reorganización del salón de lectura, al que dotó con una importante colección de obras de consulta, así como la creación de la Sala General, destinada a estudiantes, obreros y lectores populares que, debido a la afluencia masiva de lectores, debió trasladarse en 1932 a una sala de mayor capacidad en la planta baja del edificio, con entrada directa desde el jardín. Esta medida no fue muy bien acogida entre aquellos que deseaban que la Biblioteca Nacional se convirtiera exclusivamente en un museo bibliográfico y una biblioteca científica para investigadores, pero Artigas consciente de las grandes deficiencias de nuestro sistema bibliotecario, y del madrileño en particular, decidió atender las demandas tanto de los estudiantes como de los aficionados a la lectura profesional y recreativa<sup>546</sup>.

Estas reformas se completaron con horarios más amplios, separación de lectores, tarjeta de lector, buzón de pedidos, impresión de índices y catálogos, adquisición de libros y canje de publicaciones y de fondos repetidos.

Pero la BNE al tener que solucionar problemas derivados de la carencia de bibliotecas públicas y universitarias en la capital, a la larga supuso un lastre para su buen funcionamiento. Además, las tres cuartas partes del edificio estaba ocupado por otras instituciones y desde que se construyó la Biblioteca se atendió más a la parte externa más espectacular que a la realidad de la función que debía cumplir. Pese a acomodar a los distintos lectores en las mencionadas salas, éstas funcionaron deficientemente porque la Biblioteca sufría el desorden que la rodeaba como recogía la prensa de la época<sup>547</sup>.

Desde mayo de 1930 (R.D. 15 de mayo de 1930) a la BNE se le dotó de un Patronato con el objeto de sacarla de su postración. Para Hipólito Escolar, supuso el reconocimiento de la importancia de la Biblioteca Nacional para la cultura nacional, al despolitizar su gobierno y confiárselo a los intelectuales más preparados y designando un director profesional. Tras la guerra la labor del Patronato<sup>548</sup> no fue muy brillante y se centró en la administración de los recursos económicos disponibles, en la convocatoria y resolución de los concursos bibliográficos, en la realización de algunas publicaciones, en la organización de exposiciones y en las propuestas de nombramiento del personal<sup>549</sup>. Salvo Agustín González Amezcua, el resto de miembros del Patronato se desentendieron de la Biblioteca, quizás porque la mayoría de cuestiones las resolvía Artigas desde la DGAB, y además no comprendieron la función de la

---

<sup>546</sup> N. IGLESIAS MARTÍN, *Venerada y poco dichosa biblioteca: nuestra Biblioteca Nacional cumple 300 años*, Gijón, Trea, 2012, pp. 93-97

<sup>547</sup> *Abc* (24-10-1931), *El Sol* (23-04-1932) citados por N. IGLESIAS MARTÍN, *Venerada y poco dichosa...*, *op. cit.*, p. 96

<sup>548</sup> H. ESCOLAR, *El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores*, Madrid, Pirámide, 1989, pp. 276-279

<sup>549</sup> Como anécdota uno de sus acuerdos (26-9-1941) fue no proponer el nombramiento de ninguna mujer casada y que las empleadas que contrajeran matrimonio deberían cesar o pedir el traslado a otro establecimiento.

Biblioteca que circunscribían únicamente al tema de la conservación y utilizaron el Patronato como un medio para tener mayor libertad de utilizar sus fondos respecto a otros investigadores. Tras morir Artigas se quiso relanzar el Patronato en 1948, pero éste no varió en sus funciones ni en sus mermados recursos económicos. Y tampoco hubo fortuna en el nombramiento de su nuevo presidente, Azorín, que se desentendió totalmente y dimitió por los pocos recursos económicos que le suponía el cargo.

Otra visión, muy diferente, es la que nos muestra el ministro de Educación, Ibáñez Martín, en 1946 en su discurso sobre la política del libro al clausurar la Feria del Libro en Barcelona al enumerar las actuaciones del Ministerio en la Biblioteca en los primeros años del Régimen:

“Los primeros trabajos realizados en nuestra más importante Biblioteca, al terminarse la Guerra de Liberación, se dirigieron a restablecer el orden en sus depósitos, perturbado por las arbitrarias medidas adoptadas por el Gobierno rojo, y a realizar un cuidadoso recuentos de sus fondos. El resultado de esta última labor fue muy satisfactorio, pues el nº de obras desaparecidas es insignificante y sin valor, ya que los lotes más valiosos sacados por los marxistas pudieron ser íntegramente en Ginebra y devueltos a su procedencia.

Durante estos años, 1939 a 1946, se han efectuado en el edificio importantes obras, que mejoran eficazmente la instalación de los libros en su espléndido depósito general; se ha reformado y ampliado la instalación de calefacción; se han arreglado las salas de Índices, Estampas y Catalogación, y se han hecho notables mejoras en la antigua Sala de Cervantes, convertida hoy en salón de exposiciones.

Anualmente, la Biblioteca Nacional celebra Concursos bibliográficos. Se ha establecido un perfecto servicio de préstamo, en el cual, tanto los estudiantes como los especialistas, pueden encontrar las obras más modernas, importantes y de mayor coste y utilizarlas en su domicilio; se ha establecido el funcionamiento de la “Sala General” en la planta baja para el gran público, mientras el servicio en la Sala de estudio se ha perfeccionado con útiles innovaciones, tales como reserva de libros y se ha creado una Sala especial destinada a núcleos selectos, llamada Sala de Investigadores, donde los lectores gozan de las máximas facilidades. Se ha comenzado la copia del fichero general de autores para ponerlo a disposición del público.

No obstante las dificultades producidas por la pasada guerra mundial, es muy notable el número de obras extranjeras ingresadas y el de revistas que se reciben, creciendo de modo notable el número de obras españolas, merced a los ejemplares procedentes del Depósito Legal y a las importantes adquisiciones efectuadas por la JIAL.”

Pero las obras que se acometieron no debieron ser suficientes porque nueve años después la misma Dirección General de Archivos y Bibliotecas publica un número extraordinario de su Boletín, especie de Libro Blanco con el que pretendía llamar la atención sobre la necesidad de una actualización para el primer centro bibliotecario. Ante el aumento considerable del volumen de estudio y lectura se reclamaba la necesidad de modernizar y mejorar los servicios y aumentar la capacidad y seguridad de los depósitos<sup>550</sup>:

*“Sin embargo, la Biblioteca Nacional necesita y se merece una utilización y un aprovechamiento que esté a tono, no sólo con lo que conserva, sino también con sus posibilidades de difusión cultural al ritmo de los tiempos. La Biblioteca Nacional, en cuya custodia y servicio han trabajado los hombres más preclaros de nuestra inteligencia, está reclamando la atención de todos los españoles para que puedan llevarse a cabo, dentro del sagrado recinto, aquellas reformas y adaptaciones que tan fecundísimo.*

---

<sup>550</sup> “Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas”, n. 27 (marzo-abr. 1955) p. 6-10

*En el ámbito de la reconstrucción no es posible que, mientras tantos centros e instituciones que subsisten y trabajan para mayor gloria de la Patria están siendo modernizados y puestos al día, nuestra Biblioteca Nacional sufra una paralización y un estancamiento de consecuencias irreparables, y que las generaciones venideras tendrían el derecho y hasta el deber de reprocharnos”.*

La sucesión de Artigas recayó en Luis Morales Oliver (1947-1957), quién a diferencia del anterior es nombrado por decreto y no por concurso de méritos entre los funcionarios del Cuerpo. Prestó especial atención a las exposiciones artísticas y bibliográficas y se dedicó con afán a dar conferencias. Tuvo que bregar con unos funcionarios que se consideraban todos iguales, y capear el enfrentamiento con algunos miembros del Patronato.

Durante su mandato se aprobó el Decreto de 2 de abril de 1954<sup>551</sup> por el que se daban Normas para el Gobierno y Funcionamiento de la Biblioteca Nacional, y pese a que entre los bibliotecarios se reclamaba que el director de la Biblioteca Nacional debía ser un facultativo, en el Decreto se deja la puerta abierta a personalidades del mundo de las letras españolas, sigue nombrándose por decreto y además se merman sus atribuciones al crearse tres departamentos como órganos de colaboración. Este Decreto también se hacía eco de la necesidad de reorganizar tanto los servicios técnicos como sus instalaciones.

En segundo lugar, hay que citar a las bibliotecas universitarias, que fueron desde fecha temprana punto de mira del nuevo gobierno como instrumentos para llevar a cabo la política de depuración de libros y bibliotecas. En la Orden de la Junta con fecha de 16 de septiembre de 1937 se decía que en cada Distrito Universitario se constituiría una Comisión depuradora que actuaría sobre todo tipo de centros que poseyesen biblioteca, una vez localizados los libros, folletos y revistas objeto de depuración, ordenarían su retirada para su posterior clasificación por la Comisión de Cultura.

El nuevo Régimen se dotó de su propia legislación universitaria, la Ley de junio de 1943 de Ordenación Universitaria, en la que se suprimían varios artículos del Decreto de 14 de enero 1932<sup>552</sup>, entre ellos el que decía que el director de la biblioteca era vocal nato en la junta de gobierno.

En dicha ley el servicio de biblioteca es citado en tres artículos:

Art. 74. La Biblioteca de cada Universidad, aunque sus fondos se custodien en lugares diversos y sus salas de lectura y estudio estén instaladas en diferentes edificios universitarios, formará una unidad con el nombre de Biblioteca de la Universidad y estará dotada de un catálogo general único, además de los parciales que se juzgue necesarios.

El Director inmediato de la Biblioteca será el Bibliotecario general, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional mediante concurso entre funcionarios del Cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, previo informe del Rector. En igual forma se procederá al nombramiento del personal técnico o auxiliar necesario. Realizados estos nombramientos, se

---

<sup>551</sup> BOE núm. 115, 25 abril 1954

<sup>552</sup> Este decreto sentaba las bases para subordinar las bibliotecas universitarias a las autoridades académicas, integrándolas en los órganos de Gobierno a través del Director, que pasaba a formar parte de la Junta de Gobierno, como vocal nato. Se planteaba la redacción de un Reglamento que regulase la vida bibliotecaria en cada universidad y los servicios, presupuestos y personal quedaban bajo la autoridad de las universidades. Ver tesis doctoral de M. Torres Santo Domingo, *La biblioteca de la Universidad de Madrid...op. cit.*, pp. 95-101

considerarán los designados como funcionarios al servicio de la Universidad, y, por tanto, sometidos a las órdenes reglamentarias del Rector y a la disciplina académica.

El Rector podrá proponer al Ministerio de Educación Nacional el cese del Director y personal técnico y auxiliar cuando lo juzgue conveniente, oída la Junta de gobierno.

Art. 75. Son obligaciones y derechos del Bibliotecario general y de todo el personal de la Biblioteca, siempre bajo las órdenes del Rector, la ejecución de las normas para el régimen interno de custodia, adquisición, catalogación y servicio de libros a los lectores, de acuerdo con los preceptos reglamentarios.

Art. 90. El Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional consignará, además, con independencia de las cantidades que sean necesarias para atender a los gastos de sueldos y gratificaciones de personal y las que puedan destinarse a construcción o adquisición de edificios universitarios nuevos o ampliaciones de los actuales y que no serán libradas para su ingreso en el Presupuesto universitario, según los preceptos generales, otras destinadas a los fines especiales siguientes: a) Bibliotecas, Museos, Archivos y Seminarios.

En 1949<sup>553</sup> había solo 13 bibliotecas universitarias; todas ellas organizadas y atendidas por personal facultativo del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Aparte de la ayuda económica que les asignaba la universidad, recibían del Estado una subvención de 289.000 pesetas (la Universidad de Madrid recibió 75.000 pesetas y la de Barcelona 40.000).

Se inauguró la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y la de la Universidad de La Laguna. Y se acometieron importantes obras de mejora en las instalaciones de Santiago, Salamanca, Zaragoza, Valladolid, Oviedo y Murcia

Dos problemas<sup>554</sup> aquejaron a las bibliotecas universitarias en este decenio según Amadeo Tortajada: uno de carácter técnico y otro de tipo administrativo. Respecto al técnico, estas bibliotecas, aunque bien organizadas, algunas estaban necesitadas de una gran modernización tanto en sus instalaciones como en sus fondos. En este sentido, las de Madrid, Salamanca, Valladolid, Barcelona, Santiago, Oviedo y alguna más, realizaron una labor digna. La de Madrid, gracias a la dirección que le imprimió Lasso de la Vega, tuvo sus ficheros al día; siguió el sistema diccionario, como método de clasificación, independientemente de la CDU y hasta los procedimientos técnico-administrativos, que reflejan su organización eran perfectos; pero quedaba mucho por hacer en otras, sobre todo en lo referente a fondos y a la información bibliográfica central de libros y revistas; pero dada la competencia de los bibliotecarios que dirigían estas bibliotecas y los trabajos que ya habían iniciado, se confiaba que con el tiempo estas deficiencias técnicas se resolverían.

Más difícil de resolver era el problema administrativo, es decir, la necesidad de lograr la perfecta identificación de la biblioteca con la propia universidad a la que se adscribía. Durante estos años se constata una verdadera falta de compenetración de la Universidad con su biblioteca. La biblioteca realmente no era percibida como parte de la Universidad, era como un cantón aparte, y los problemas que la afectaban no se veían como problemas de la misma universidad, ni por parte del claustro de profesores, ni del rector.

---

<sup>553</sup> A. TORTAJADA, *Las bibliotecas en España. Su movimiento y estado actual (decenio 1939-1949)* pp. 12-13

<sup>554</sup> A. TORTAJADA, *Las bibliotecas en España...op. cit.*



Por último, es obligado hablar de las bibliotecas del CSIC, la joya mimada del Régimen como lo demuestran la rapidez con que se creó o la seguridad presupuestaria de que disfrutó. Promovido por el ministro de educación Ibáñez Martín, el CSIC se crea como alternativa al mundo de la universidad, siendo un modelo de investigación separado de la docencia a la vez que un medio de promoción. La idea de su director, Albareda, no era hacer investigación de vanguardia y mandar estudiantes al exterior como la Junta de Ampliación de Estudios, de la que era teórico sucesor, sino crear una organización jerárquica que cubriese todo el espectro académico, creando institutos que abarcaban materias muy distintas, sometidas todas a la teología católica basada en el neoescolaticismo.

Constante preocupación del Consejo fue la organización y servicios de sus bibliotecas ya que la comunicación con el mundo científico era necesaria para mantener la investigación. Por ello en la misma ley que lo creó nació una Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico con la misión de organizar sus fondos históricos, bibliográficos y documentales.

Pero el número de sus Bibliotecas<sup>555</sup> –unas 20 en 1941- planteó al CSIC una serie de problemas tales como la coordinación de sus servicios; la centralización de los procesos bibliográficos como la catalogación de fondos de una manera técnica y uniforme, las adquisiciones de obras y revistas en el extranjero – problema de gran gravedad por la guerra-; el préstamo nacional y exterior, así como el intercambio de publicaciones. Problemas cuya solución acertada imponía la creación de una gran biblioteca central, que desarrollase los servicios de manera centraliza y coordinase y apoyase a las bibliotecas de seminario proporcionándoles fondos bibliográficos y servicios. Además debería tener un carácter de modernidad en cuanto a su contenido y a la técnica de su organización.

La dirección del proyecto se encarga a Amadeo Tortajada, bibliotecario del Instituto “San José de Calasanz” de Pedagogía, incluyendo los siguientes puntos: publicación de catálogos, organización de un cursillo de bibliotecarias, implantación del servicio bibliográfico, solución al problema de las adquisiciones de obras en el extranjero, catalogación y exposición de toda la bibliografía oficial española, intercambio de publicaciones en colaboración con la Junta de Adquisición de Libros y Cambio Internacional. La Biblioteca se inaugurará en octubre de 1946 en el nuevo edificio sede central del CSIC ocupando tres plantas, un depósito y varios departamentos de trabajo, algunos dotados con una lujosa equipación<sup>556</sup>. No se construye un edificio especial para la Biblioteca, pero en la zona que se le asigna se tiene en cuenta el futuro desarrollo en 20 años pudiendo albergar un millón de volúmenes.

En 1944 el CSIC contaba ya con 42 centros, y desde la dirección de los Institutos se provee a las bibliotecas de personal formado en la Sección de Bibliografía de la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigación; varios equipos catalogadores recorrían las bibliotecas más numerosas haciendo el inventario de sus fondos bibliográficos con arreglo a la moderna técnica biblioteconómica.

Las actividades de la Sección de Cambio Internacional desde el principio fueron muy activas, dentro de los límites que imponía el conflicto armado europeo, y en estos primeros años

---

<sup>555</sup> Memoria del CSIC 1940-1941, pp. 284-285

<sup>556</sup> “... la de Información, por ejemplo, posee unos ficheros de madera de roble, compuestos de gran zócalo, siete filas de cajones y unas molduras de remate con luz empotrada, que permite disponer de iluminación indirecta; el sistema de iluminación con la parte decorativa del fichero es original de esta Biblioteca; no la hemos visto en ninguna de las que hemos visitado en el extranjero” ( A. TORTAJADA, “La Biblioteca General del Consejo”, *Boletín de la Biblioteca General*, n.1-2, enero-junio 1949, p. 9)

estuvo muy condicionada por el signo político de los países. Así Alemania, Italia o la Francia de De Vichy facilitaron gratuitamente muchas publicaciones, así como su adquisición.

La necesidad de facilitar el intercambio de sus publicaciones y la adquisición en el extranjero de libros y revistas, hizo aconsejable la concesión a la Biblioteca General del beneficio de franquicia arancelaria, con exención de la previa licencia de importación y exportación, lo que permitió a las bibliotecas del CSIC el rápido desarrollo que reclamaban las tareas de investigación<sup>557</sup>.

## **6.6 .OTRAS FORMAS DE ACCEDER A LA LECTURA: BIBLIOTECAS CIRCULANTES DE PAGO Y PUESTOS CALLEJEROS**

Las bibliotecas circulantes de pago y los puestos callejeros de lectura fueron dos medios alternativos de acceder al libro que existieron y se utilizaron, probablemente con más asiduidad que las bibliotecas públicas por los españoles de esta época, y prueba de ello es la preocupación del Ministerio por estos establecimientos, solamente porque sus fondos escapaban a su control.

Legalmente quedaron reguladas en los arts. 37 y 38 del Decreto de 1947:

Art. 37. Todas las bibliotecas establecidas en territorio español que faciliten la lectura en sala pública o a domicilio, con cuota o sin ella, estarán obligadas a inscribirse en el Registro de Bibliotecas, que funcionará en la Dirección General de Bibliotecas y Archivos, y al cumplimiento de cuantas disposiciones se dicten en lo sucesivo.

Art. 38. ...para fundar bibliotecas de las comprendidas en el apartado anterior será necesaria la autorización del Ministerio de Educación Nacional, al que competen, por medio de sus órganos adecuados las funciones de inspección y vigilancia de las mismas.

Y, posteriormente, en la Orden de 15 de julio de 1950 donde se dispone una serie de medidas de depuración de las lecturas en las bibliotecas ajenas al control del Cuerpo de Facultativos. En el preámbulo de esta Orden se dice que existen en casi todas las capitales de provincia y en muchos pueblos puestos dedicados al préstamo, mediante pago o alquiler de novelas, sin que sus fondos hayan sido sometidos a selección alguna solvente y que en estos puestos se facilitan novelas inmorales y libros de contenido social peligroso, por ello el Ministerio dispone que los Gobernadores civiles informen acerca de su existencia y envíen al Patronato Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos las relaciones de los libros que tienen en existencia y se les encomienda la vigilancia y cumplimiento de los artículos 37 y 38 (art. 1º y 6º), quienes los revisarán y eliminarán de las listas lo que a su juicio sea nocivo moralmente (art. 2º). Las solicitudes de Registro de todas estas Bibliotecas, con una copia de sus catálogos, se enviarán a la Inspección General de Bibliotecas (art. 5º)

En el AGA<sup>558</sup>, dentro de la documentación adscrita a la Junta dirigida al Registro de Bibliotecas, se encuentran recogidas algunas solicitudes, pocas, hechas por particulares para abrir bibliotecas circulantes o librerías de alquiler en sus propios domicilios. Una procede de Madrid y las otras dos de Plasencia. La primera está formulada por una mujer casada – que por cierto,

---

<sup>557</sup> Memoria del CSIC 1942, p. 290

<sup>558</sup> AGA 25/19792

no hace constar la autorización marital- y presenta un catálogo de 585 obras junto con las condiciones de abono que han de regir la Biblioteca Circulante “Estampa”. La contestación de la Sección de Bibliotecas Municipales de la Junta de Adquisición y Distribución de Publicaciones con fecha de diciembre de 1950 y firmada por el mismo Bordonau, aún siendo favorable se le censuran algunos títulos, y es curioso el tono un tanto crítico respecto a esta función que se le ha encargado a la Junta:

“La censura de libros inventariados no es obra factible para una Sección, que no está especialmente dedicada a la revisión de novelas y literatura de evasión. Por lo tanto la calificación de las obras ha tenido que hacerse por los repertorios respetables y solventes que tiene a la mano, sin que ello quiera decir que la Sección está conforme en todos los casos con la calificación que la obra tiene en los repertorios (...) Señaladas van con signo rojo las obras que merecen censura desfavorable a tan respetables fuentes de información, pero hay muchas en las listas presentadas que no constan en aquellas ni el funcionamiento de la Sección ha tenido tiempo de leer, las cuales no obtienen puntos a favor ni puntos en contra a su lectura”

En la misma línea está la contestación, en este caso, del Inspector de Bibliotecas, Enrique Sánchez Reyes, a la solicitud hecha por una mujer soltera de 58 años de Plasencia en noviembre de 1951:

“Es difícilísimo, al menos, para el que suscribe, emitir un informe completo y bien documentado sobre esta literatura de cordel o de quiosco (...) En el cuaderno de D<sup>a</sup> Carmen López he señalado con lápiz rojo todos aquellos libros que –suponiendo quienes han de ser los lectores de la tal biblioteca de préstamo- debieran darse con más cautela y negarse a jóvenes aún no formados. Creo que es la única precaución que debe tomarse en el presente caso ya que el fondo de la biblioteca en su conjunto pertenece más bien a novelas de aventuras y policiacas o a la insulsa novelística color de rosa. No se trata pues de lecturas formativas pero tampoco de libros de pura e inocente recreación, pues muchas veces hasta las novelas rosa pueden ser deformadoras y desde luego mucho más las policiacas y de aventuras si no se tienen en cuenta la persona a quien se entregan.

El tercer expediente procede de un albañil padre de familia numerosa “que con el fin de poder ayudar a las múltiples necesidades por lo abultado de familia y no poder con su jornal hacer frente a estas obligaciones desea abrir al público una Biblioteca circulante en su domicilio para el alquiler de novelas y libros de lectura moral, amena y selecta”. Su solicitud es desestimada pues de la lista de casi 70 títulos que presenta se consideraron la mayoría no aptos. Y no aptos eran autores como: Kunt Hamsun, Dostovewski, Pierre Benoit o Pearl S. Buck, y títulos como *Cuerpos y almas*, *La montaña mágica*, incluso, *Nada* de Carmen Laforet.

Junto a estas solicitudes de particulares, hay alguna petición de entidades como casinos o instituciones culturales, pero ¿cuántas de estas bibliotecas ubicadas en domicilios particulares pudieron existir y no se registraron, y por tanto, escaparon al control de la censura?

La otra realidad de acceso al libro popular fueron los Puestos callejeros de lectura<sup>559</sup>. Y a estos, ¿quién los regulaba?, ¿los ayuntamientos les expedían alguna licencia<sup>560</sup> para ejercer su negocio? Y prueba de su éxito es este comentario hecho por una bibliotecaria:

---

<sup>559</sup> CUARTERO, Aurora (1952). El primer grado de cooperación: coordinación de los puestos callejeros para la lectura por cambio. En: *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, 1, n.2, pp. 21-24

<sup>560</sup> Sobre este aspecto, pregunté personalmente a la Directora del Archivo de Villa de Madrid, y me dijo que el Ayuntamiento no registraba estos establecimientos.

Felicitar a estos libreros populares. Nos han tomado la delantera ellos han sabido percibir, captar y estimular una clientela lectora, esqueleto de extensión suburbana de la lectura. Gracias a ellos y no a los bibliotecarios todo el mundo lee; buenos o mediocres libros, pero lee. Han sabido crear una clientela. El lector popular no lee más que lo que le apetece leer o no lee nada, pero no lee lo que tú le digas; si ha de proceder en la selección de lecturas lo hace de modo autodidacta, merced a la influencia de la lectura misma. Sirven estos puestos los libros que al lector le gustan.

Esta autora propugnaba utilizar por parte del Servicio Nacional de Lectura para desarrollar la política del libro, la infraestructura que habían creado estos establecimientos acogiendo en ellos unas vitrinas con recomendaciones de obras, exposiciones, carteles, slogans. “Si unos comerciantes han hecho una clientela ¿por qué no conservársela a ellos y aprovecharla nosotros para una política educadora?”

## 7. EL SERVICIO DE BIBLIOTECA

### 7.1. EL PERSONAL

Cuando se habla del personal bibliotecario son dos las realidades que debemos contemplar: la de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo y el Auxiliar, y los llamados Encargados de Bibliotecas. Los primeros estuvieron a cargo de las Bibliotecas Públicas dependientes del Estado y quedaron adscritos a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. El Cuerpo de Facultativos continuó rigiéndose por el Reglamento de 1932 y se mantuvo su misión de custodia y conservación de los fondos que el Estado les había encomendado, así como facilitar su consulta y aprovechamiento mediante la formación y publicación de inventarios, catálogos e índices y contribuir con trabajos de investigación al estudio, interpretación y crítica de dichos fondos. Igualmente seguían formando parte integrante de la labor docente del Estado, ayudando a completar las enseñanzas de las escuelas, institutos, universidades y demás centros docentes, así como colaborar en el desarrollo del estudio e investigación de la Historia nacional.

Organizativamente, a nivel estatal, se crearon dos entidades. La Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, creada en septiembre de 1939: órgano colegiado responsable de atender a la formación de las plantillas del Cuerpo, la carrera administrativa, el nombramiento de directores de establecimientos, la convocatoria de concursos, la dirección de publicaciones y la concesión de premios y pensiones. La Junta Central de Archivos, Bibliotecas y Museos de España, fue la otra institución, creada entre septiembre y octubre de 1939, como instrumento coordinador de los centros no encomendados al Cuerpo, cuyo objetivo era estudiar e informar sobre los problemas de instalación, conservación del patrimonio artístico, documental y bibliográfico. A nivel provincial la modificación en 1950 de la composición de los diferentes Patronatos para el Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos confirió más peso a los funcionarios del Cuerpo, constituidos a partir de ese momento en secretarios de los respectivos patronatos provinciales.

Este periodo oscila desde la más dura posguerra hasta un incipiente reconocimiento institucional y social de los archivos y bibliotecas<sup>561</sup>. Se reestructuró el Cuerpo facultativo, mermado por la guerra, el exilio y las depuraciones políticas; se buscaron soluciones

---

<sup>561</sup> TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*, pp. 157-178

alternativas que paliasen la falta generalizada de medios, y se pretendió establecer una mayor vinculación con la investigación, a través de la Universidad y el recién creado CSIC.

El Cuerpo se identificó con el ideal cultural del primer Franquismo reacio a todo influjo cultural exterior y será el custodio del patrimonio cultural del nuevo Estado. En un principio resurgirá asentado sobre el pasado, encerrado en sí mismo; siguiendo las pautas anteriores a la Guerra de conseguir la preeminencia profesional mediante la incorporación de nuevos centros.

Son años marcados por el aislamiento burocrático, no solo a todo lo exterior, sino también a lo interior, a otras realidades en las bibliotecas de nuestro país, y además, socialmente no existe un reconocimiento social a la labor del Cuerpo.

Con el final de la Guerra todos los miembros que habían sido leales al Gobierno republicano fueron depurados<sup>562</sup>. Unos fueron apartados del Cuerpo definitivamente, otros muchos fueron postergados, bien permaneciendo en sus puestos, bien siendo desplazados a destinos considerados como castigo, como los archivos administrativos pues allí difícilmente podrían desarrollar sus inquietudes intelectuales e influir en la cultura y en la educación popular.

También se produjeron bajas por excedencia voluntaria, o forzosa en el caso de los varones en edad militar. La guerra produjo numerosas vacantes y desde 1935 no se habían convocado oposiciones. La consecuencia inmediata fue que el Cuerpo tuvo que renovarse con nuevos miembros que demostrasen de alguna manera su afinidad con el Movimiento Nacional, y el sistema de acceso seguían siendo las oposiciones, éstas se convocaron en 1940, pero quedaron interrumpidas durante 10 años a causa de los maltrechos presupuestos generales del Estado que no daban para más y las bibliotecas no eran prioritarias, salvo para dirigir la lectura.

En 1944 se completa el Escalafón pero no se palia la falta de personal. En muchas provincias un único funcionario seguía siendo el encargado de atender el archivo de la Delegación de Hacienda, el de la Audiencia, el Histórico, la Biblioteca y el Registro Provincial de la Propiedad Intelectual. En marzo de 1945, al finalizar el periodo de reconstrucción, había 313 funcionarios de carrera divididos en 10 categorías, cuyo salario oscilaba entre las 21.000 y las 10.000 pesetas anuales. Durante los años de la posguerra se produce una primera delimitación de funcionarios entre los cuerpos Facultativo y Auxiliar. Los primeros estaban destinados a la organización de los centros y una vez terminada esta, correspondía al Cuerpo Auxiliar limitarse a mantenerlos en funcionamiento.

El Cuerpo Facultativo junto con el de Auxiliares no fue nunca lo bastante numeroso como para poder constituir una salida profesional exclusiva para una carrera universitaria. Por otra parte la tendencia conservacionista dominante centraba la formación de un bibliotecario en una sólida base de formación histórica y después una formación de postgrado en técnicas bibliotecarias, que no se integraba sistemáticamente en la Universidad, de hecho, la formación bibliotecaria en España hasta 1975 está absolutamente extramuros del sistema educativo normalizado.

A partir de 1952 se hará evidente un cambio en la mentalidad de los funcionarios del Cuerpo. Comenzarán a valorar tanto los aspectos técnicos de la profesión y los más relacionados con el

---

<sup>562</sup> Casos concretos de depuración de bibliotecarios están recogidos en el reciente libro de Ana MARTÍNEZ RUS *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*, Gijón, Trea, 2014, pp. 99-113

fomento de la lectura, como su función historiográfica tradicional. Este cambio tuvo que ver con el influjo de la Unesco, pues la admisión oficial del estado franquista en el concierto internacional también se logró por la puerta de la Cultura.

La otra realidad, la del personal adscrito a las bibliotecas municipales hay que relacionarla con al pobre concepto que nuestra sociedad ha tenido de la biblioteca como del bibliotecario, dando lugar a que cualquier persona alfabetizada bastaba para encargarse de una Biblioteca Pública Municipal.

De hecho, la Junta de Intercambio durante su etapa republicana no estableció requisito alguno para la designación del encargado. Se limitó a estimular débilmente a los Ayuntamientos para que designasen personas competentes, mediante el establecimiento de dos categorías de bibliotecas, siendo de primera “las que cuenten con una dirección técnica solvente”, lo cual les supondría un trato de preferencia en el incremento de sus fondos bibliográficos”, pero para que las bibliotecas obtuviesen tal calificación y el encargado mereciese el calificativo de solvente era preciso que éste se sometiera a las pruebas que determinase la Junta.

Fue lamentable que el ejemplo llevado a efecto por la Mancomunitat de Catalunya con su Escola de Bibliotecàries no tuviese reflejo en ninguna otra parte de España. Únicamente María Moliner tuvo en cuenta la necesidad de organizar un cursillo especial de preparación técnica para la formación del personal que había de encargarse de las bibliotecas provinciales (art. 2 Decreto 13 noviembre 1937).

Esta Escola de Bibliotecàries<sup>563</sup> formó parte del proyecto de Eugenio d’Ors de crear una red de bibliotecas populares por toda Cataluña. El perfil profesional, aunque hoy no sería políticamente correcto, debía ser femenino, por una cuestión de costes y por asegurar buen trato. También se argumentaba que la tarea educativa que debían tener las bibliotecas se ajustaba más a la idiosincrasia femenina. Asimismo, era una cuestión de estética, puesto que el personal femenino tenía un carácter atractivo, amable, de pulcritud. Debía tener una preparación especial que no fuera únicamente técnica, sino también de humanidades en general, de cultura superior. Y siempre se abogó por una formación permanente.

Para ingresar en la Escuela los requisitos eran tener cumplidos los 17 años y superar un examen de ingreso equivalente a los estudios de Bachillerato. Los estudios duraban tres años, y al finalizar el tercer curso, las alumnas debían pasar un examen de reválida que en 1920 quedó fijado en tres pruebas: conocimientos teóricos y prácticos sobre el servicio de bibliotecas, conocimientos sobre las materias culturales del plan de estudios y conocimientos de lenguas modernas. También en 1920 se llevó una reforma del plan de estudios que consistió en incrementar las horas dedicadas a las materias técnicas y el tercer curso se dedicó exclusivamente a las prácticas, que consistían en estancias en bibliotecas así como un trabajo práctico en el aula bajo la dirección de Jordi Rubió, director de la Biblioteca de Catalunya y de las Bibliotecas Populares.

A raíz del golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 la Escuela sufrió una crisis, en parte por la supresión de la Mancomunidad de la que dependía, quedando englobada dentro de la Escuela Superior para la Mujer. De 1925 a 1939 el contenido de las clases sufrió una degradación paralela a la de la Institución. Se incluyó la formación en archivos y se

---

<sup>563</sup> Ver: ESTIVILL RIUS, A. “Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005)”, *BiD*, nº16, 2006 y ESTIVILL RIUS, A. *L’Escuela de Bibliotecarias: 1915-1939*. Barcelona: Diputación de Barcelona, 1992

descatalanizaron los contenidos, y la vida en la Escuela no fue tan activa cultural y socialmente como antes, incluso se dejó de organizar la Reunión de Bibliotecarias.

Pese a todo, la buena aceptación laboral de las alumnas continuó y la mayor oferta de trabajo seguía proviniendo sobre todo de las bibliotecas populares, a las cuales se añadieron las creadas por Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y las cajas de Sabadell y de Mataró.

Con la caída de Primo de Rivera en 1930 la Escuela regresó a sus planteamientos iniciales. Así el nuevo plan de estudios entró en funcionamiento en octubre de 1930: se exigía para ingresar un mínimo de 16 años y recuperaba un riguroso examen de ingreso, mantenía la reválida de etapas anteriores, que a partir del curso 1934-35 incorporó la evaluación del trabajo final de carrera. Se catalanizaron los contenidos y se suprimieron las asignaturas de archivística. Estas eran las materias en las que se formaban las futuras bibliotecarias:

Primer curso: Historia de la civilización, Historia de Catalunya, Lenguas clásicas, Principios y desarrollo histórico de las ciencias, Historia del libro y nociones de paleografía, Historia del arte.

Segundo curso: Historia de la civilización, Literatura general, Literatura catalana, antigua y moderna, Técnica de bibliotecas, Bibliografía, selección de libros y libro infantil, Lenguas clásicas.

Tercer curso: Literatura española, antigua y moderna, Restauración de libros, Prácticas.

Hubo intentos de formalizar los estudios, pero ni se consiguió el rango universitario ni que la Universidad incluyera una sección dentro de la Facultad de Letras que fuera continuación de las enseñanzas de la Escuela.

El periodo comprendido entre 1930 y 1939, la Escuela vivió la mejor de sus etapas llegando a ser un centro docente de calidad y una institución madura y sólida. Recuperó una actividad académica muy intensa, con métodos pedagógicos activos. Desde 1930 volvió a colaborar en la organización de la Reunión de Bibliotecarias, se organizó un curso de especialización en Salas de lectura infantil y colaboró en la salvaguarda del patrimonio. Los trabajos de final de carrera de las alumnas fueron una fórmula excelente por analizar la realidad bibliotecaria del país, formular estados de la cuestión, analizar servicios, hacer trabajos bibliográficos, que fueron la base de futuras publicaciones. La Escuela, y sobre todo el seminario de Prácticas que dirigía Jordi Rubió, fue un laboratorio para ensayar proyectos que interesaban a las bibliotecas. De este seminario surgieron en 1938, los Círculos de Estudio, especializados en temas concretos. Por primera vez, las alumnas y las bibliotecarias tuvieron la oportunidad de disfrutar de becas y de ayudas en centros extranjeros, y las relaciones con el exterior serían intensas, sobre todo a raíz de la celebración en Madrid y en Barcelona del segundo congreso de la IFLA en 1935.

La Escuela funcionó ininterrumpidamente durante toda la guerra, a menudo en condiciones muy difíciles. La docencia se interrumpió el 23 de enero de 1939 permaneciendo cerrada hasta mayo de 1939. Aquel mes se retomaron las actividades con la organización de un cursillo que debía servir por convalidar las titulaciones de las alumnas graduadas durante el periodo republicano. El centro pasó a depender de la Diputación de Barcelona y la Escuela se denominó Escuela de Bibliotecarias en castellano.

Para la Escuela, la victoria franquista significó un descalabro más grande que el que había sufrido durante la dictadura anterior. Se repitieron los mismos esquemas: cese del profesorado, cambio de plan de estudios, castellanización absoluta. Esta larga etapa se caracterizó por la imposición de la ideología única, la mediocridad, la carencia de medios y el aislamiento

Acabada la guerra, la Biblioteca de Catalunya y la Central de Bibliotecas Populares retomaron la vida en el mismo recinto, pero estas instituciones también habían cambiado. Tras entregar la Biblioteca a Lasso de Vega, responsable de bibliotecas del nuevo gobierno, Jordi Rubió ya no volvió a ejercer nunca jamás la dirección de aquellas instituciones, siendo sustituido por Felipe Mateu y Llopis.

El programa de estudios para el curso 1939–40 quedó configurado de la manera siguiente:

Primer curso: Historia universal, Latín, Literatura general, Historia del arte, Historia del libro, Nociones de paleografía.

Segundo curso: Historia de España, Literatura española, Clasificación e historia de las ciencias, Latín y nociones de griego, Técnica de bibliotecas, Bibliografía.

Tercero curso: Técnica de bibliotecas, Restauración de libros, Prácticas.

Programa que fue completado con una conferencia semanal de religión y un cursillo de formación en los principios del Movimiento Nacional. Se empezó a exigir el título de bachillerato por acceder a la carrera y se limitaron a quince las plazas de nuevo acceso. Se mantuvo el examen de reválida, pero no el trabajo final, que volvió a ser un requerimiento más adelante. El 1943 se hicieron pequeños retoques en el plan de estudios, pero realmente se mantuvo con los mismos principios y contenidos hasta comienzo de los 70.

Pese a los retrocesos experimentados por la Escuela, fue la única institución que impartió una formación bibliotecaria técnica y moderna, permanente, conocedora de lo que se hacía fuera de España. A parte de reanudarse las Reuniones de Bibliotecarias, desde 1943 comenzó a funcionar la “Obra de perfeccionamiento profesional”, consistente en la reunión en el primer lunes de cada mes de cuantas bibliotecarias dependientes de la Diputación, de la Caja de Pensiones y de cuantas entidades quisieran adherirse. *Pensada más que para lograr una eficacia de actuación que ya tenían las bibliotecarias, para plantear ante los colegas de toda España los problemas de deontología, de selección, de colaboración y de actuación profesionales*<sup>564</sup>. Así, por ejemplo, en la reunión mantenida en el marco de la XXI Reunión de Bibliotecarias se dio cuenta de los viajes hechos a Holanda, Suecia, Noruega y a las bibliotecas inglesas.

La Dirección de las Bibliotecas Populares de Barcelona también consideró primordial atender a las necesidades materiales del personal de sus bibliotecas, planteando en 1940 la creación del Cuerpo Técnico Femenino de Bibliotecarias, sometido a un Reglamento que fijara su vida administrativa y regulara los derechos que correspondiera a sus miembros como funcionarias de la Diputación de Barcelona. Dicho Reglamento se aprobó en 1943. Las bibliotecarias dependientes de la Diputación eran 39 en 1940, cuatro años después ya sumaban 71.

A nivel estatal, a propuesta del ministro de Educación Ibáñez Martín, se quiso hacer un ensayo que emulara la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. El Decreto de 31 de mayo de 1944 (BOE 17 junio 1944) creaba en Madrid la Escuela de Estudios Auxiliares de la Investigación, dependiente del CSIC, para formar al personal técnico necesario para los trabajos de investigación que requerían la técnica bibliográfica, el conocimiento de la organización de bibliotecas, intercambio, préstamos, fotocopias, catalogación.

---

<sup>564</sup> *Biblioteconomía*, abril-junio, 1945



Si las bibliotecas populares y municipales catalanas contaban con un cuerpo técnico profesional, el resto de las bibliotecas municipales tuvo que enfrentarse a la escasez y falta de personal debidamente formado, seleccionado y retribuido.<sup>565</sup>

“...el problema de los Archivos y Bibliotecas municipales es muy complejo. En realidad está resuelto en nuestras grandes capitales y en otras cuidadosas de sus tesoros documentales y de su cultura, pero en las restantes, que constituyen una abrumadora mayoría, y en los pueblos, existe aquél dentro de una lamentable incompreensión o completo abandono”.

(...) es urgente, si se quiere hacer una obra de cultura positiva, cuyos beneficios son incalculables, crear bibliotecas como medio más seguro de desterrar la ignorancia con todo su triste cortejo de crímenes y estupideces, del ambiente rural y pueblerino español.

(...) al frente de tales bibliotecas deben estar bibliotecarios competentes y nada más que bibliotecarios. El confiar estos centros instructivos a los maestros, como desde 1869 hasta las órdenes de 7 de agosto de 1931 y 25 de abril de 1932 viene haciéndose, es, salvando todos los respetos, establecer una lamentable confusión de funciones. La del bibliotecario es complementaria, pero distinta. Éste debe ser sobre todo un guía de lectores; debe tener algo de psicólogo y no poco de consejero espiritual liberal y ecléctico; ha de actuar siempre como un propagandista de la lectura, y unas veces ha de ser un dirigente superior y otras un colaborador modesto. Es muy compleja y absorbente su función, y, por tanto es necesario que al frente de las bibliotecas figuren profesionales especializados y de vocación. Y esto ha de entenderse para todas las bibliotecas, pues no es admisible en buena teoría lo que dice el art. 6º del decreto de 13 de junio de 1932: “Se establecen dos categorías de Bibliotecas municipales; pertenecen a la primera categoría las que cuenten con una dirección técnica solvente, a juicio de la Junta, y a la segunda todas las demás”

Siguiendo con la tradición heredada, puesta de manifiesto en el texto anterior, la mayoría de estos establecimientos fueron gestionados por los maestros, cuya falta de preparación técnica<sup>566</sup> se intentó suplir mediante breves cursillos que sirvieron para concienciar sobre la responsabilidad de su misión a los participantes y ofrecerles unos elementales sobre las técnicas bibliotecarias. Otro procedimiento fue la docencia ejercida directa y personalmente, caso por caso, por algunos Directores de Centros Coordinadores, ya fuera teniendo a su lado en la Biblioteca Pública del Estado al aprendiz, antes de la inauguración de su biblioteca o pasándose días con él, en su pueblo, organizándola. Una tercera vía fueron las instrucciones escritas y los manuales de iniciación a la materia.

La preocupación por la formación de este personal se reflejaría también en la legislación desde fechas tan tempranas como 1938. Así, en el Decreto de 13 de octubre de 1938 que regulaba los Patronatos Provinciales de Archivos, Bibliotecas y Museos, entre sus funciones se incluía el “organizar cursillos de verano para bachilleres, maestros y sacerdotes que deseen adquirir el título de bibliotecario elemental, a tenor de las disposiciones que a ese fin se dicten”. Más tarde, en los Reglamentos de los Centros Coordinadores de Oviedo y Zaragoza también se regula este aspecto. En el de Oviedo se le dedica el último apartado titulado *Del encargado*<sup>567</sup>:

1º. Al frente de la Biblioteca habrá un Encargado que nombrará el CENTRO COORDINADOR, a propuesta del Ayuntamiento de.....pero este nombramiento no se extenderá en tanto que la

---

<sup>565</sup> BEJARANO ROBLES, Francisco. “El problema de los archivos y bibliotecas municipales”, *Boletín de Bibliotecas y Bibliografía*, 1934. - Vol. I. – pp.. 165-169.

<sup>566</sup> GARCÍA EJARQUE, Luis. *Las bibliotecas municipales en el contexto bibliotecario español*, pp. 395-418.

<sup>567</sup> Aparece en la *Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias*, año 1948, pp.84-90.

persona propuesta no haga prácticas elementales de Biblioteconomía en las Oficinas del CENTRO COORDINADOR.

Y en el de Zaragoza dentro de las obligaciones del Centro Coordinador, en el punto 5º se dice:

(...) que proporcionará al personal al servicio de la Biblioteca la adecuada preparación para el desempeño de su función, por medio de instrucciones y de celebración de cursillos anuales, siendo de su cuenta los gastos que los mismos ocasionen.

Igualmente, en la Memoria del año 1949 del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias entre sus propósitos para el futuro estaba el mejoramiento en la formación de los Encargados:

“Conseguir que las principales bibliotecas de la red y que son las que más movimiento de lectores tienen (las de las cuencas mineras) sean regidas por funcionarios profesionales. Crear un cuerpo de bibliotecarios de Bibliotecas locales, que obtengan la plaza por libre oposición y sean funcionarios de la Diputación Provincial. Además de atender a las Bibliotecas de las que sean titulares, ejercerían una función inspectora directa sobre bibliotecas vecinas, con lo que el Centro Coordinador tendría asegurado el buen funcionamiento de toda la red provincial. Entre tanto se propone celebrar reuniones anuales con los 22 encargados durante tres días para intercambiar puntos de vista entre sí y aclarar dudas con el personal del Centro Coordinador”.

Esta preocupación por la profesionalización por parte de los Centros Coordinadores se tradujo en la organización de varios cursillos de encargados de bibliotecas. En el verano de 1949 se celebra en Oviedo el primer cursillo de enseñanzas prácticas para los encargados de las Bibliotecas Públicas Municipales, dependientes del Servicio Nacional de Lectura, organizado por la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museo en colaboración con la Diputación Provincial de Oviedo bajo la dirección del Centro Coordinador. Y durante 1950 se desarrollaron dos cursos más “en los dos centros de más adelantada organización y de más perfecta instalación de servicios como son Zaragoza y Huelva, pensándose que se hagan más adelante en Burgos, Soria, Málaga, etc.”

En el curso de Huelva las materias impartidas versaron sobre el libro, la biblioteca y el lector; literatura; catalogación y clasificación y representación geométrica de los datos estadísticos del movimiento de lecturas en una biblioteca. Entre los 46 asistentes hubo 33 maestros, 4 encargados de bibliotecas, 1 teniente de infantería, 1 periodista, 1 auxiliar de bibliotecas, 2 licenciados en Filosofía y Letras archiveros, 3 ayudantes estudiantes y un director de la Biblioteca de la ONC.

El Patronato del Centro Coordinador de Zaragoza, consciente de que para su éxito había de contar con personal cualificado, decidió seleccionar a su personal mediante concursos de méritos y un examen de aptitudes completado con una posterior formación, que concretó en un cursillo de estructura más informal que el de Huelva, a base de conferencias formativas, haciendo especial hincapié en las funciones técnicas, administrativas y sociales del bibliotecario, además de prácticas y un recorrido por todos los servicios.

Pero ¿cómo se nombraban estos Encargados? En el Reglamento de 1952<sup>568</sup>, la dirección técnica recaía en el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y, por delegación de éste, en el Encargado de la Biblioteca Pública Municipal, empleo para el que debía preferirse, por este orden, a quien hubiera realizado un curso oficial de Biblioteconomía, a un Licenciado en Filosofía y Letras, a un maestro, a un bachiller o a persona de reconocida solvencia cultural. Muchos maestros optaron para complementar sus escasos recursos, aunque tampoco faltaron los altruistas. Generalmente fueron los maestros los que mejor resultado dieron, sobre todo

---

<sup>568</sup> GARCÍA EJARQUE, L. Historia de la lectura pública en España, pp. 291-293.

cuando recibieron una elemental formación en Biblioteconomía en cursillos organizados como los arriba mencionados.

El nombramiento provisional, por dos años, prorrogables por otros dos, del encargado correspondía hacerlo al Alcalde previo concurso de méritos o examen de aptitudes ante una Comisión presidida por aquél. Al cabo de este tiempo, siempre que su labor hubiera merecido informes favorables de la junta de biblioteca y de la dirección del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, el encargado de la biblioteca debía recibir del Ayuntamiento el nombramiento definitivo pero pocas veces se cumplió el reglamento y en menos ocasiones consiguió este personal ver reconocidos sus derechos laborales.

¿Cuál debía ser el perfil del bibliotecario popular? Pérez-Rioja lo expresaba así<sup>569</sup>:

“Ha de especializarse en la selección de libros, la atracción de los lectores, la psicología de estos, la lectura infantil, etc. Viene a ser un profesional tan especializado como el de una biblioteca de alta cultura. Con una diferencia: y es que el especializarse en una de éstas es más fácil para hombres de nuestra formación que el conseguirlo en bibliotecas de este otro tercer estadio de la cultura. Se trata de un nivel más bajo, pero más complejo. La biblioteca popular es un microcosmos donde interesa todo, aunque todo sea general o elemental; el bibliotecario debe orientar e informar sobre cualquier tema o materia, ha de poseer una especialización tan generalizada sobre las materias todas, los autores e incluso los títulos más diversos (...); ha de elevar, gradualmente, su nivel, interesándoles en lecturas de mayor jerarquía; ha de irradiar su acción hacia nuevos sectores de la población; ha de crear, atrayendo amorosamente a los niños y a los jóvenes, ha de ejercer, por lo tanto, un alto magisterio que tiene como finalidad la de modelar el sentido moral, el nivel cultural y la formación profesional de la colectividad”.

Respecto a la formación de los bibliotecarios a nivel universitario, Lasso de la Vega, afirmaba en su *Manual de Biblioteconomía* (1952) que en España se había descuidado:

Al desaparecer la Escuela Diplomática se incorporaron a la Universidad gran parte de las asignaturas que en ella se explicaban –Historia del libro, la Biblioteconomía y la Bibliografía-. Y aunque en un curso mal se podía enseñar materia tan amplia al menos servía para mostrar a los estudiantes el esquema de las materias para poder opositar al Cuerpo Facultativo. Como consecuencia de ello el Bibliotecario en España carece de una previa formación técnica. A esta falta de formación técnica especializada corresponde el vulgo dando el título de bibliotecario a un vocal de una junta de asociación de fines benéficos, deportivos, artísticos, políticos o de recreo.

También se retomó el asociacionismo profesional truncado tras la guerra, fundándose la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA) en 1950 que agrupaba a bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, así como a los funcionarios de ambos cuerpos: Facultativos y Auxiliares. En su I Congreso Nacional celebrado en Madrid en 1950, los profesionales instaban a la nueva Asociación que defendiera el título y luchara contra el intrusismo en lo nacional e internacional, logrando de los Ministerios de Educación y Trabajo la legislación pertinente.

En dicho Congreso, la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona presentó una ponencia relacionada con los Cuerpos del Estado<sup>570</sup>, en la que se expusieron algunas sugerencias de cambio, como que no fuera condición indispensable la posesión del título de Licenciado en Filosofía y Letras en cualquiera de sus secciones. Pues consideraban que podían ser más

---

<sup>569</sup> PÉREZ-RIOJA, J. A. El clima espiritual del bibliotecario, Madrid, 1954 pp. 19-20.

<sup>570</sup> “Ponencia presentada por la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona al Congreso de ANABA”, *Biblioteconomía*, abril-junio 1950, pp.

convenientes las incorporaciones de titulados en otras carreras universitarias, o en Escuelas especiales superiores, cuando el destino eran bibliotecas especializadas donde los conocimientos técnicos podían ser de gran utilidad.

También abogaban porque la formación del funcionario se realizara antes de que iniciara su vida profesional, aunque podía completarse después de haber aprobado las oposiciones. Unos cursillos formativos anteriores al comienzo del ejercicio profesional eran muy necesarios, en su opinión, dada la reducida atención que los planes de enseñanza universitaria concedían a las materias específicas del Cuerpo.

Respecto al ingreso en el Cuerpo Auxiliar, estimaban que era conveniente que fuese exclusivamente femenino, pues para los varones era escaso el estímulo económico que proporcionaba esta función profesional. Y nada más perjudicial, para el buen servicio, que las plantillas de personal poco remunerado en su trabajo. El personal femenino, aunque su función en nada era inferior a la de los varones, esta profesión reúne condiciones especiales incluso superiores a la de los mismos varones en muchos casos.

El Título exigido sería el de bachiller, aunque no se debiera permitir tomar parte en las oposiciones a quien antes no obtuviese un certificado de suficiencia en materias específicas relacionadas con las distintas secciones del Cuerpo. La enseñanza de éstas se haría en instituciones, tales como la Escuela de Auxiliares de Investigación del CSIC, la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona y las similares que se puedan crear en el futuro. Los ejercicios de oposición estarían divididos en las tres secciones del Cuerpo, y serían más bien de materias de tipo práctico, prefiriéndolos a los temas humanísticos o de cultura general.

Por último, creían muy necesario fomentar los contactos con el extranjero y que la formación en técnicas biblioteconómicas debía ser complementaria de una licenciatura o diplomatura para Bibliotecas de tipo técnico dada la especialidad de sus fondos bibliográficos.

## **7.2. INSTALACIONES**

Ya se ha visto qué tipos de bibliotecas públicas existían, el marco jurídico en el que se movieron y la concepción que se tenía de ellas, cuántas hubo y por dónde se distribuyeron y qué personal las atendía, falta darles una imagen: ¿cómo eran sus edificios e instalaciones?

La diferente funcionalidad, origen y trayectoria de las bibliotecas se va a traducir también en diferentes soluciones y problemas arquitectónicos. Así en relación a las Bibliotecas Públicas del Estado, como novedad, se reguló, por inspiración de Miguel Artigas, la creación de los Palacios Provinciales de biblioteca, archivo y museo, por medio del Decreto de 23 de septiembre de 1939, relativo a la Junta Central de Archivos, Bibliotecas y Museos y por Orden de 12 de febrero de 1941, al crearse una comisión ejecutiva de la misma que sin su aprobación no se podía realizar ninguna obra nueva o reforma.

Estos palacios estaban destinados a albergar la Biblioteca, el Museo y el Archivo Provincial<sup>571</sup>, y para que cumplieran con los fines culturales de la ciudad se les dotaba también con una sala de conferencias y salón de exposiciones. Su financiación llevaba una consignación básica del presupuesto extraordinario y el posible tributo de Diputaciones y Ayuntamientos, y según la cuantía, se le daba preferencia en el comienzo de las obras.

---

<sup>571</sup> ARTIGAS, Miguel "El Palacio Provincial de Biblioteca, Archivo y Museo", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, pp. 11-14.

Se aprobaron los proyectos de obras, según modelo del arquitecto Luis Moya, en: Murcia (1940), Vitoria (1941), Málaga (1941), Palma de Mallorca (Orden de 24 julio 1942, se inauguró en 1955), Segovia (1942), Cáceres (1943, se inaugura en 1954), Mahón (1948), Ávila (1946) y Teruel (se inaugura en 1953)<sup>572</sup>. Veamos la descripción del Palacio de Mahón tras su inauguración<sup>573</sup>:

Instalada en el primer piso dentro del nuevo Palacio de Archivo, Biblioteca y Museo, prototipo de una nueva concepción centralizadora de la cultura provincial, inaugurado el 17 de noviembre de 1949, consta de: salón de lectura, con un mostrador que le separa del depósito; dirección; depósito de libros, repartido en tres lugares: sala, galería y desván; un pequeño vestíbulo con los ficheros de materias y autores. La sala tiene cabida para cuarenta lectores en dieciocho mesas planas, ampliable casi al doble en caso de gran concurrencia. La sala de lectura está abierta todas las tardes salvo festivos y domingos.

O la que se hace de Segovia<sup>574</sup>:

Ubicada desde 1948 en plena calle principal en el edificio de la antigua cárcel del partido. El edificio fue cedido por el Ayuntamiento en 1942 para instalar el Archivo y la Biblioteca. Las obras se comenzaron en el año 1943 y duraron casi un lustro, hasta que a fines de 1947 fueron trasladados desde la antigua Biblioteca Pública que estaba en las dependencias de la Universidad Popular Segoviana a la actual que se inauguró el 2 de febrero de 1948. El piso principal estaba ocupado por las dependencias de la Biblioteca Pública y constaba de Sala de Lectura de 20 m de largo por 5 de ancho capaz para 48 lectores que repartidos en 6 mesas pueden consultar las obras durante todos los días laborales de 5 a 9. Despacho, depósito general y otro para fondo antiguo, una galería que circunda el patio del edificio y la antigua capilla de la cárcel.

Y como tercer ejemplo, aunque no esté dentro de la categoría de los Palacios provinciales, la remodelación que sufrió la Biblioteca Provincial de Burgos “Fray Francisco de Vitoria”, como muestra de la necesidad de reforma de la mayoría de los edificios dedicados a Biblioteca Pública Provincial:

Primero se establecen dos tipos de fondos: el popular y erudito; se abren los cerrados estantes, quedando a la vista los volúmenes, aumentando la asistencia, se construyen muebles modernos y apropiados, calefacción central, se reforma el sistema lumínico mejor distribuido con supresión de sombras y reflejos. Finalizada la reforma el edificio queda distribuido en 5 secciones con capacidad en total para 120 lectores: 1ª referencia, prensa e infantil. 20 puestos; 2ª sala general de lectura (sexo masculino). 44 puestos; 3ª sala especial y exclusiva para el sexo femenino. 24 puestos; 4ª de profesores, investigadores y eruditos; 5ª sección artística, para 14 lectores.

Por otro lado, el tema del local de las bibliotecas municipales, fue siempre competencia de los ayuntamientos, la misma Junta de Intercambio durante su etapa republicana<sup>575</sup> comenzó pidiendo a los Municipios el ofrecimiento de un local conveniente para la biblioteca, con independencia de todo otro servicio y, ante la imposibilidad de ir a inspeccionarlo previamente, exigía una “Certificación del Arquitecto, Aparejador o Maestro de obras municipal, con el visto bueno del Alcalde: a) Que el local destinado a la biblioteca es

<sup>572</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis. *Historia de la lectura pública en*

<sup>573</sup> MERINO SÁNCHEZ, Félix, “Memoria de la Biblioteca Pública de Mahón”, *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, 4ª ép., 57, 1951, pp. 171-173

<sup>574</sup> VILLALPANDO MARTÍNEZ, Manuela, “Archivo Histórico y Biblioteca Pública de Segovia”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, XIII, 1953, pp. 11-13

<sup>575</sup> GARCÍA-EJARQUE, Luis. *Las bibliotecas municipales en el contexto bibliotecario español*, p. 411

conveniente para su fin e independiente de todo otro servicio. A la certificación se acompañará un croquis a escala del local, indicando la orientación y la planta que ocupa. B) Ídem del mobiliario de que dispone para la biblioteca. Donde este no existía o no lo hubiere en la proporción necesaria, la Junta facilitaría croquis y dibujos, previa demanda, de muebles sencillos y adecuados para una instalación conveniente". Por su parte, la Oficina de Adquisiciones de libros siguió las mismas normas de la Junta. Más tarde, en los reglamentos o contratos que regulaban las relaciones entre los Centros Coordinadores y los Ayuntamientos a éstos se les obligaba a acondicionar el local, incluyendo un sistema de calefacción a base de radiadores (en el de Oviedo) o a incrementar sus instalaciones cuando el progresivo crecimiento de sus fondos bibliográficos lo requirieran (Zaragoza).

La mayoría las bibliotecas se instalaron en escuelas o colegios de enseñanza media, como la biblioteca municipal de Valencia de Don Juan, la de Burgo de Osma (dentro del Grupo Escolar pero con independencia de las clases), la de Morón de Almazán o la de Arévalo; en dependencias del edificio consistorial: Cistierna (León), Almazán, Ágreda, San Leonardo de Yagüe, Aracena (Huelva), Calañas (Huelva), Palomares del Río (Sevilla), Solana de los Barros (Badajoz); en edificios independientes: Avilés, Aroche y Ayamonte (Huelva, en planta baja local independiente), Municipal de San Sebastián (antiguo edificio de la Casa Consistorial) o en inmuebles de particulares: Alájar (Huelva), Épila (Zaragoza).

De lo anterior se deduce que estaban ubicadas en lugares céntricos, pues la escuela o el ayuntamiento se situaban en los centros de la población, generalmente en planta baja y solían tener reducidas dimensiones. Podemos hacernos una idea de sus espacios con los datos relativos a varias bibliotecas de Zaragoza en 1951<sup>576</sup>:

Épila: 53 m<sup>2</sup>, 24 puestos de lectura, 1.118 volúmenes.

Ejea de los Caballeros: 53 m<sup>2</sup>, 24 puestos, 1.200 volúmenes.

Daroca: 50 m<sup>2</sup>, capacidad 30 lectores.

Calatorao 82 m<sup>2</sup>, 30 puestos, 1.200 volúmenes.

Zuera: 60 m<sup>2</sup>. 32 puestos, 1.100 volúmenes.

Las bibliotecas municipales fueron un servicio muy desigual y esa desigualdad queda más que documentada en el tema de las instalaciones con estos dos ejemplos recogidos en la sección de noticias bibliotecarias de la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, una del año 1949 y la otra de 1950:

Inauguración de la Biblioteca Madrigal de las Altas Torres (Ávila), instalada con carácter provisional en un local contiguo a la secretaría del Concejo, de reducidas dimensiones por lo que en principio sólo se ofertará el servicio de préstamo. Los libros están colocados por materias. Se insta al alcalde que vea la forma más rápida posible de habilitar otro local de los que existen en la planta baja de la casa consistorial para que puedan colocarse mesas y sillas necesarias para los lectores, especialmente los jóvenes, acudan a la biblioteca con el fin de que puedan leer bajo la orientación del encargado de la misma (1950)

Biblioteca Municipal de Játiva (Valencia) creada en 1947 determinadas circunstancias de local y mobiliario, impidieron la inauguración oficial hasta bien entrado el siguiente año, y ello de manera un tanto oficiosa. Sólo en 1949 ha alcanzado su plena eficacia. Instalada en un

---

<sup>576</sup> XIMÉNEZ DE EMBÚN, José. *La organización bibliotecaria provincial zaragozana*, 1959 (Archivo Histórico y Biblioteca Pública de Segovia, 1953)

magnífico local proporcionado por el Ayuntamiento en amplio salón de lectura y dependencias adyacentes, dirigida por la licenciada en Filosofía y Letras Lidia Sarhou. A parte de la función propiamente bibliotecaria pretende ser un Centro Cultural expansivo y vital para su comarca. (1949)

Las tareas de creación de nuevas bibliotecas municipales, como vemos, encontró frecuentemente muchas dificultades por la carencia de locales en que instalar los nuevos centros. Los municipios algunas veces se encontraron imposibilitados de atender los deseos del vecindario por carecer de edificios adecuados para sus bibliotecas, y otras veces los edificios corporativos no tenían las condiciones requeridas para situarlas con un mínimo de autonomía en relación con los demás servicios municipales. Esta fue la razón que llevó al Ministerio a dictar una orden con fecha 24 de febrero 1951:

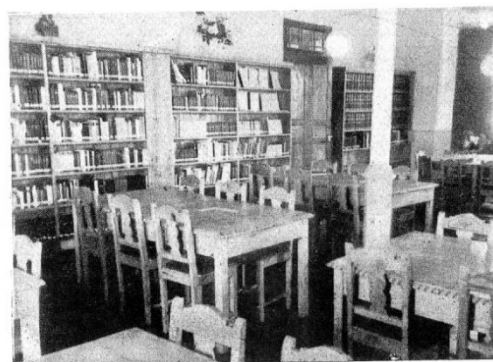
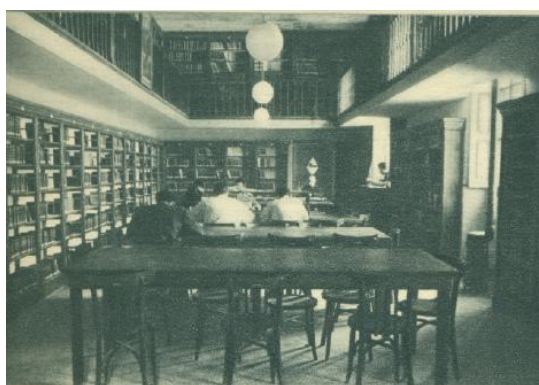
Ello ha movido al Ministerio a dictar esta orden, que estimamos trascendental a los efectos de difusión de nuevas bibliotecas y de crearlas en condiciones de alcanzar plena eficacia. En virtud de esta disposición, el Ministerio acuerda autorizar con carácter general, la instalación de las BPM en aquellas escuelas o grupos escolares cuya capacidad lo permita y siempre que su funcionamiento no entorpezca la buena marcha de los principales servicios de dichas escuelas. Con ello estimamos resuelto un importante problema, pues aparte de estar en locales modernos y eficientes, las bibliotecas podrán estar situadas cerca de los más fecundos de viveros lectores de mañana, como son los maestros y estudiantes, y complementar así la instrucción que el mundo juvenil recibe en aquéllos.

Por estos años la implantación de la ordenación de los fondos mediante la Clasificación Decimal Universal, trajo parejo poner a disposición de los lectores los libros en libre acceso, sustituyéndose los viejos armarios cerrados con llave por estanterías abiertas.

Hablar de biblioteca en estos años era sinónimo de local que ayuda a la concentración, al estudio y al trabajo intelectual, pero de forma tímida y progresiva vemos aparecer secciones infantiles decoradas *ad hoc*, y si atendemos a las estadísticas de lectura, la literatura y la prensa estaban a la cabeza, datos que más nos hablan de un centro de ocio que de estudio, donde poco a poco se iba incrementando la oferta de actividades culturales.







## 7. 3. PROCESOS TÉCNICOS

### 7.3.1. Selección y adquisición

A la hora de saber cómo se seleccionaban y adquirían los fondos de las bibliotecas es forzoso comenzar hablando de los procesos de depuración a que fueron sometidas en sus colecciones todas las bibliotecas.

El protocolo seguido en las depuraciones<sup>577</sup>, comprendía la incautación de los fondos, después venía el expurgo de los títulos, seguía la quema de las obras más peligrosas y por último se creaban unas secciones especiales con los libros menos peligrosos pero prohibidos a los lectores, llamados *infiernos*. Estos depósitos se mantuvieron a lo largo de toda la Dictadura y aparecían recogidos en el manual de Biblioteconomía más prestigioso de la época como una práctica habitual bibliotecaria más, que había que conocer<sup>578</sup>:

El infierno. En muchas bibliotecas se reserva un armario convenientemente cerrado para llevar a él las obras inmorales, las prohibidas por la Iglesia o por el estado y aquellas, en fin, que únicamente pueden servirse al público en casos excepcionales y con las debidas garantías. Otras bibliotecas mantienen estas obras intercaladas en la colección, cuando el depósito no es de libre acceso al público, y en sus lomerías figuran unas etiquetas de color rojo ordinariamente visibles que pregonan a los ordenanzas y auxiliares del servicio la prohibición de ofrecer tales volúmenes a los lectores sin una expresa autorización del jefe encargado de otorgarla.

Para saber qué se debía expurgar se elaboraron listas por las Comisiones Depuradoras de los Distritos Universitarios y las Juntas de Incautación de Bienes, donde predominaron criterios de fuerte contenido religioso.

Aunque la depuración de las bibliotecas<sup>579</sup> se planteó de forma estricta y totalitaria, no siempre fue tan rigurosa en la práctica, ya fuera por desidia de los encargados de realizarla ya por la connivencia de unos bibliotecarios poco propensos a la destrucción de libros y más partidarios de su conservación, aunque fuera restringida. Por ello muchas de las obras condenadas a la hoguera se almacenaron en la Sección Reservada, alejadas de la gran mayoría de los lectores, sólo accesibles a un pequeño número de elegidos<sup>580</sup>. Los libros retirados al *Infierno* se clasificaron en seis grupos: Ciencias sociales y de autores del pensamiento político de izquierdas; libros de temáticas novedosas como feminismo, eugenesia, religiones alternativas, homosexualidad y esoterismo; obras de ensayo y filosofía adscritos a la izquierda; autores realistas y naturalistas; novelas de corte erótico y/o folletinesco y algunos libros de literatura clásica española y europea.

---

<sup>577</sup> MARTÍNEZ RUS, Ana. La persecución del libro, Gijón, Trea, 2014, pp. 60-68

<sup>578</sup> LASSO de la VEGA, J. *Manual de biblioteconomía*, Madrid, Mayfe, pp. 108-109

<sup>579</sup> La depuración se encargó a unas Comisiones Depuradoras de los Distritos Universitarios y a las Juntas de Incautación de Bienes, las cuales debían confeccionar una lista con los libros, folletos, revistas y publicaciones con exposición de ideas disolventes, conceptos inmorales y propaganda de doctrina marxista.

<sup>580</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada", *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, pp. 87-90

Del análisis hecho del depósito de Oviedo<sup>581</sup> se llega a la conclusión que la depuración de libros no se realizó con la rigidez que pretendían las autoridades y tuvo mucho de improvisación. Por ejemplo, la novela realista y naturalista seguía en las estanterías de las bibliotecas reorganizadas por el Centro Coordinador de Asturias.

En la Biblioteca de Sitges tuvieron que retirar los libros de las estanterías de la sala de lectura que por la naturaleza de su autor, de su contenido o de la lengua, o porque representaban ideas contrarias a las ideas del régimen, según las Normas oficiales de la Diputación. Los libros que no fueron eliminados y que no era conveniente dejar a la vista del público pasaron al depósito. Estas depuraciones trajeron un trabajo adicional a los bibliotecarios que tuvieron que actualizar sus ficheros, dando de baja registros y reubicando los títulos marginados al depósito. Además esta biblioteca, después de la depuración, sufrió una visita de inspección del nuevo responsable de las Bibliotecas, en la que se constató la urgente necesidad de reemplazar las bajas, una segunda más del personal técnico de la Central de Bibliotecas con la misión de revisar nuevamente los libros que quedaban en la sala de lectura a fin de depurarlos más detenidamente, pues era una cuestión que exigía la máxima delicadeza. Así se consideró enviar al depósito las obras de Benedetto Croce, Madariaga, Corominas, Nicolau d'Olwer. Por último, se presentó un agente del servicio de información de la Diputación Provincial de Barcelona con la misión de interrogar al personal técnico y completar definitivamente la depuración.

Los procedimientos por los que las bibliotecas podían adquirir libros fueron fundamentalmente los lotes enviados por la Junta, éstos, si eran fundacionales ya venían seleccionados por la misma Junta<sup>582</sup>, pero también las bibliotecas podían hacer peticiones para su compra o les proporcionaba créditos. Por ejemplo, la Biblioteca de Cabra refleja en sus memorias que recibió de la Junta un crédito de 4.000 pesetas para invertir en adquisiciones de libros.

¿Qué opinión merecía a los bibliotecarios estos lotes preseleccionados? La bibliotecaria de Játiva afirmaba que con el lote enviado por la Junta se podía mejorar el gusto del lector sin violentar sus propias orientaciones. Con motivo de la inauguración de la Biblioteca de "Estudios Politécnicos Madre de Dios" dependiente del Centro Coordinador de Huelva se dice que la biblioteca enviada por la Junta, ha sido seleccionado su fondo inicial de entre la producción bibliográfica española más moderna, referente a ciencias puras, ciencias aplicadas, artes, oficios, sin olvidar una nutrida sección correspondiente a los libros formativos desde el punto de vista moral, religioso y patriótico<sup>583</sup>

Por ejemplo el lote remitido a la Biblioteca de Mieres en 1945 por la Junta era muy variado: incluía 1.200 volúmenes con algunos diccionarios y antologías, muchos libros técnicos de agricultura, electricidad, mecánica, química, textos de ciencias naturales, libros de historia y geografía, muy pocos libros de filosofía, religión y política, y dos grandes colecciones con las obras completas de Palacio Valdés y de Vázquez de Mella, por ser asturianos<sup>584</sup>.

---

<sup>581</sup> Ver el trabajo de L. Borque López *Bibliotecas, Archivos y Guerra Civil en Asturias*, Gijón: Trea, y el más reciente de Ana Martínez Rus

<sup>582</sup> Ver capítulo dedicado a la Junta donde se explican los criterios en la selección de libros y los anexos.

<sup>583</sup> Noticiario nacional, *Bibliografía Hispánica*, 1949, p. 155

<sup>584</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada". En: *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, p. 103

Pero también existe otro testimonio de la Biblioteca de Sitges, en donde se menciona que las primeras y escasas obras que comenzaron a nutrir la Biblioteca en aquellos primeros años fueron con preferencia, relativas a los hechos de la pasada guerra civil como *Relación histórica sobre Tánger y su incorporación al Estado Español* o un paquete enviado el 3 de junio de 1941 con libros sobre el Glorioso Movimiento y el Estado Nacionalista<sup>585</sup>.

En cuanto a las revistas, uno de los fondos más leídos en las bibliotecas, ya vimos los títulos que proporcionaba la Junta y las posibilidades de incluir variantes. Según el tipo de Biblioteca también se recibía la prensa local. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Soria recibía los periódicos de la provincia gratuitamente: *La Voz de Castilla*; *Campo y Afán* de Burgo de Osma y algunos de los diarios nacionales más importantes. También era conveniente tener publicaciones oficiales, como el BOE, el boletín de la provincia o de localidad, o el Índice legislativo Nacional en las de mayor rango como las Bibliotecas Provinciales.

La Biblioteca de Sitges recordaba que los primeros pasos en la recuperación de los fondos de la Biblioteca, fue la llegada de revistas que por orden de la Central enviaron diversas librerías de Barcelona. Estas publicaciones eran prácticamente nuevas, nacidas la mayoría durante la guerra en la zona nacional: “Metalurgia”, “Radio Cinema”, “Y. Revista para la mujer”, “Vértice”, “Domingo”, “Misión” y “Destino”, las cuales se distinguían por la mala calidad en la edición y en el papel.

En las Bibliotecas dependientes de la Diputación Provincial de Barcelona, como consecuencia de la II Guerra mundial, los consulados de los principales países beligerantes enviaron revistas de propaganda a las bibliotecas: la “*Illustrazione Italiana*”, “*Life*”, “*La Illustration Française*”, “*Stern*” y diversos donativos del consulado alemán. Estas revistas despertaron el interés de muchos lectores, que encontraron en estas publicaciones, a parte de una buena calidad técnica, una amplia oferta de noticias, frente a la tendenciosa oferta de la nacional. Cuando la Biblioteca Central en abril de 1944 dio de baja la suscripción a las revistas: la “*Illustrazione Italiana*”, “*La Illustration Française*”, “*Destino*”, “*Domingo*”, “*Misión*”, las estadísticas acusaron un fuerte descenso en la afluencia de lectores<sup>586</sup>.

Las entidades locales también tenían libertad para la adquisición de obras, aunque se les prevenía contra los agentes que ofrecían suscripciones de libros de lujo o ajenos al interés de los entes locales atribuyéndose exclusivas de edición o venta, o pretextando que eran portadores de cartas recomendatorias.

Otra recomendación de diferente signo era la que proponía el representante del Patronato de Ávila:

El criterio que sigue el Bibliotecario en la adquisición de libros que han de tener a su juicio estas tres condiciones: mérito literario, sentido patriótico y sana moral. Se excluyen siempre en nuestras peticiones las obras que no reúnen estos requisitos<sup>587</sup>

---

<sup>585</sup> JOU i ANDREU, D. La Biblioteca Popular a Sitges: 50 anys de la biblioteca de Santiago Rusiñol : 1936-1986, Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 1986

<sup>586</sup> JOU i ANDREU, David, La Biblioteca Popular a Sitges: 50 anys de la biblioteca de Santiago Rusiñol : 1936-1986, Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 1986

<sup>587</sup> Memoria 1948 del Patronato de Ávila. AGA Educación 31/6067

Antonio Palma<sup>588</sup>, director del Centro Coordinador de Huelva, comentaba la necesidad de acercarse más a un criterio de mayor justicia distributiva asignando a cada biblioteca un lote de libros igual al número de habitantes, y en función del tipo de biblioteca y sus destinatarios.

Así en las municipales debía abundar la literatura moral, instructiva y amena, las enciclopedias corrientes y revistas informativas; en las populares mantener la presencia de algunos libros en todos los grupos del sistema, pero con notable predominio de obras de divulgación que puedan ser entendidas por lectores que poseen a los sumo una aceptable instrucción primaria: libros de oficios y profesiones corrientes en la comarca, literatura amena, viajes, biografías, una extensa sección infantil y diarios además de las doce que recibían las demás bibliotecas. En las bibliotecas humanitarias debe haber libros en letras grande y con profusión de fotografías y estampas, debe predominar las narraciones que deben ser seleccionadas con un criterio de rigor en materia religiosa y moral y prescindir de obras que produzcan pesimismo o incitar a la sensualidad. En las industriales debe haber exclusivamente libros, folletos y revistas de su respectiva especialidad; en las veraniegas, obras de entretenimiento: bellas artes, turismo, literatura, historia, geografía y viajes, una sección infantil, y obras sobre el mar y la pesca en las playas.

Los anteriores se irán completando con lotes de ampliación, concedidos por la Junta a petición de la Junta Municipal de Bibliotecas y con informe del Centro Coordinador, y deben satisfacer la necesaria variedad y estar basados en las necesidades y características de la comarca, movimientos de lecturas, actividades culturales y de las desideratas que merezcan la pena.

Además de los lotes proporcionados por la Junta y las compras propias, las bibliotecas también se nutrieron de donaciones institucionales o de particulares en forma de libros o en metálico. Por ejemplo, la Biblioteca de Cabra entre 1938 y 1948 recibió varias revistas donadas por el Ayuntamiento: *Olivos*, *Xérez*, *Flechas y Pelayos*; *Pinocho*; *Almanaque de Flechas y Pelayos*; *Anales de la Universidad Hispalense*, *Blanco y Negro*; *Revista de Farmacia* o las obras completas del naturalista Buffon. También donó 75 pesetas con las que se compró la colección de cuentos de “Blanca Nieves” ilustrados a color.

El Gobernador Civil de Gerona en la Fiesta del Libro de 1949 donó a las bibliotecas sostenidas por la Diputación 15.000 pts. para la compra de libros, seleccionados por los propios lectores, adquiriéndose con preferencia aquellos de carácter técnico o profesional cuyo elevado coste haría difícil la adquisición individual. Este donativo se comenta que tuvo un reflejo en el aumento de lectores.

¿Por qué entre los libros seleccionados y adquiridos estaban ausentes la llamada “subliteratura de quiosco”, “la novela rosa”, y las novedades literarias? Ángel Mato<sup>589</sup> nos da la clave al trabajar con los catálogos y las memorias de las bibliotecas asturianas de estos primeros años.

Esta subliteratura, denostada y criticada, representada por autores tan populares como Marcial Lafuente Estefanía y José Mallorquí, era considerada como un género degradante por intelectuales e ideólogos de todo signo, pese a ello Ángel Mato constata que en las primeras memorias del Centro Coordinador de Asturias, algunas bibliotecas demandaron este tipo de

---

<sup>588</sup> PALMA CHAGUACEDA, A. Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Huelva. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950

<sup>589</sup> MATO DÍAZ, A. “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada, En: Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009

novelas como una manera de recuperar lectores y luego encauzarlos hacia lecturas de mayor valor literario, criterio que también defendieron anteriormente los ateneos obreros.

Respecto a las novedades literarias hay que esperar hasta el final de la década, para que aparezcan en las bibliotecas novedades literarias y escritores nuevos como Miguel Delibes, Cela o Carmen Laforet. La tremenda distancia temporal existente entre la publicación de un libro y su llegada a las bibliotecas se explicaba tanto por motivos económicos (escasez de fondos) como por dificultades logísticas, ya que la distribución editorial era muy lenta y las ediciones reducidas, destinadas al consumo directo en las librerías por parte de minorías de clase media urbana con capacidad económica y capacidad literaria para la valoración de las novedades literarias.

### **7.3.1. Catalogación, clasificación, ordenación**

Las tareas que se realizaban en la mayoría de las Bibliotecas Públicas comprendían: el registro, sellado, catalogación, clasificación y asignación de signaturas de todo el material bibliográfico que ingresaba en la Biblioteca. Como los libros eran caros y pocos, y solían someterse a un alto desgaste por el frecuente uso, se tenía que llevar también un registro de encuadernaciones. Por otro lado, toda biblioteca que tuviera una sección o colección circulante tenía que gestionar un sistema de préstamo que le permitiera controlar tanto a los lectores como a los libros que salían de la Biblioteca. Trabajos más propios de dirección eran la recogida de datos estadísticos y la preparación de memorias o la elaboración de folletos relacionados con la normativa de la Biblioteca. En menor medida, dado que la adquisición de libros por compra estaba muy limitada, tenían que realizar trámites relacionados con la gestión de desideratas y pedidos a librerías.

En las bibliotecas de mayor envergadura como la Central de Populares de Barcelona, la Biblioteca Nacional o las universitarias, los procesos técnicos se podían abordar en conjunto o separadamente. Es decir, clasificación, signatura y encabezamientos de materia por un lado, y por otro, la catalogación. Incluso se podía dividir la clasificación por disciplinas. Aunque en las Bibliotecas de Cataluña prefirieron el sistema por el cual cada catalogador tuviera asignado varios temas afines, y dentro de esos temas catalogaba y clasificaba, en parte por disponer de poco personal, y por ser menos monótono el trabajo.

Con el lote fundacional la Junta enviaba las cédulas correspondientes en dos ficheros, seguramente para facilitar la tarea de unos mayoritarios Encargados de Bibliotecas que apenas tenían formación bibliotecaria.

Son varios los catálogos que había que elaborar. Básicos eran el alfabético de autores y obras anónimas, el topográfico y el alfabético de materias. Al establecerse la utilización oficial de la Clasificación Decimal de Dewey modificada por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas en la Orden de 29 de julio de 1939, se generalizó también el catálogo sistemático.

El Catálogo inventario o topográfico, en el cual se colocaban las fichas por orden de materias, era exactamente igual al sistemático de materias, pero de uso exclusivo de los bibliotecarios que lo utilizaban para las revisiones de la sala y para saber el número de libros existentes.

En la misma Orden de 29 de julio de 1939 se implantó también el uso de la cédula de tamaño internacional 12,50 x 7,50 para la redacción de los catálogos, con lo que se favoreció la normalización a la hora de redactarlos, desapareciendo en los 80 con la llegada de la automatización.

Para la redacción del catálogo alfabético de autores y obras anónimas debían seguirse las *Instrucciones oficiales del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*

aprobadas por orden de 24 de enero de 1941. Si se quería que el catálogo fuese eficaz y respondiera a sus fines, era indispensable someter su redacción a unas reglas fijas. La importancia de la ficha destinada a describir las obras era cada día mayor, ya que se tendía a utilizar la ficha única para toda clase de catálogos. También se generalizó la práctica de imprimir la ficha y la posibilidad de adquirir dos, tres, cuatro o más ejemplares de las correspondientes a cada obra en determinados países. En España, por ejemplo, podían adquirirse en el INLE.<sup>590</sup>

De la importancia que tenían los catálogos en la organización del trabajo bibliotecario puede ser una muestra este formulario que las Bibliotecas Populares de Madrid enviaron a sus responsables para elaborar la memoria de 1950<sup>591</sup>.

Ficheros: a) El catálogo de Autores, ¿es consultado por los lectores?, ¿necesita reforma? ¿Está al día? ¿Tienen las papeletas a la vuelta la CDU para en caso de extravío de la de materias saber siempre a qué grupo corresponde? Comprobar si faltan referencias de coautores, seudónimos, etc. b) El de Materia. ¿Está completo? Se ha asegurado de que no faltan fichas. Existen obras sin clasificar. Qué problemas presenta al lector. El jefe de biblioteca debe conocer los grupos generales de la Clasificación decimal para solucionar las preguntas y consultas que puedan hacer los lectores. Respecto a las biografías dentro de su grupo se colocarán por biografiados. C) Topográfico. La Dirección estimará falta grave la falta de control perfecto de este catálogo y recuerda a los Jefes la necesidad absoluta de que exista una perfecta correspondencia entre los tres ficheros. ¿Existen lagunas por falta de libros, censura? Este catálogo debe estar debidamente vigilado y bajo la exclusiva responsabilidad del Jefe.

Aunque se implante oficialmente el uso de la Clasificación Decimal en julio de 1939, su introducción entre los bibliotecarios fue un proceso lento<sup>592</sup>. Comienza en 1896 con la primera mención en una revista técnica<sup>593</sup>, pero no será hasta 1920 cuando se introduzca en la práctica profesional de la mano de Jordi Rubió i Balaguer. Éste publica la "Classificació decimal de Brüsselles. Adaptació per a les Biblioteques Populares de la Mancomunitat de Catalunya" con el objetivo de que la utilizaran las alumnas de la Escuela Superior de Bibliotecarias de Barcelona, en la que Rubió era director y profesor de Biblioteconomía, adaptando el sistema a las necesidades de las Bibliotecas Populares.

En general, los bibliotecarios españoles mantuvieron una postura reacia respecto a la CDU, y eran pocos los que trataban el tema. Se implanta en las bibliotecas de Arquitectura e Ingenieros del Ejército, en el Jardín Botánico y en el Centro de Estudios Históricos. Pero no será hasta 1932 cuando se publique el primer manual en español acompañado de una exposición breve, completa y clarísima del sistema y sus tablas. Su autor, Luis Méndez Albarrán, bibliotecario del Centro de Estudios Extremeños. Siendo fácil su adquisición, esta obra sirvió en su momento, e incluso muchos años después, para introducir a los bibliotecarios en el manejo de la Clasificación Decimal.

---

<sup>590</sup> LASSO de la VEGA, J. *Manual de biblioteconomía*, Madrid, Mayfe, 1952, pp. 272-273.

<sup>591</sup> "Para conocer el estado de las Bibliotecas Populares (mayo 1950) la Dirección General quiere redactar una memoria en la que las bibliotecas expongan la labor realizada y problemas pendientes" Archivo de Educación

<sup>592</sup> FONSECA, I. "La CDU en España", *Boletín de la ANABAD*, tomo 28, nº 2, 1978, pp. 3-24

<sup>593</sup> CASTILLO QUIJADA, M. "Una gran adquisición para la bibliografía moderna. La clasificación decimal Dewey", *Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1896, año I, núm. 5-6, pp. 68-72

Por último, Javier Lasso de la Vega como Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas y Archivos, promovió que la Administración adoptara la CDU para clasificar los fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas del Estado. Tal decisión se incluyó en la Orden Ministerial del 29 de junio de 1939, en la que también se decía que la Jefatura de Bibliotecas cuidaría de que en el plazo de tres meses se tradujesen y adaptasen al castellano las tablas abreviadas del sistema decimal. Pero la traducción y adaptación de las mismas no apareció hasta 1942, publicada en San Sebastián y firmada por el mismo Javier Lasso de la Vega<sup>594</sup>. Y hasta que en 1953 no se publica la edición oficial abreviada, fue el manual más utilizado por los bibliotecarios españoles.

Otras disposiciones ayudaron a implantar oficialmente la CDU en España. En concreto, el Reglamento de las Bibliotecas Militares a través de la Orden ministerial de 23 de abril de 1941, en cuyo art. 20 se decía que aparte de formar un catálogo sistemático con la clasificación decimal, ésta también serviría como topográfico, es decir que los libros irían ordenados por CDU.

Desde su implantación oficial, los bibliotecarios españoles se mostraron reacios a escribir comentarios ni a favor ni en contra de la Clasificación, y hasta que no se celebró el *I Congreso Iberoamericano y Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual* en Madrid en 1952, la aplicación de la CDU no fue aceptada definitiva y corporativamente por los profesionales bibliotecarios.

Aurora Díaz-Plaja<sup>595</sup> en dos ocasiones defendió su uso, pues gracias a este sistema la Biblioteca Pública podía ofrecer en libre acceso a sus usuarios los libros, ordenados de manera sistemática, agrupados por materias, facilitando al lector la elección de las obras.

Otra de las ventajas de la Clasificación decimal desde el punto de vista práctico era que cada libro tenía su signatura que lo independiza dentro de su correspondiente materia. El sistema también era susceptible de subdivisiones infinitas, pudiéndose adaptar fácilmente a las nuevas ideas y a los nuevos descubrimientos. También era fácil de recordar. El único defecto como sistema de clasificación era el de encasillar todos los matices del saber humano en diez grupos.

El único gran inconveniente para aplicarse en una biblioteca para Aurora Díaz, era que no estuviera regida por una Bibliotecaria titular, pues era una clasificación excesivamente técnica para un profano.

En un segundo artículo, esta misma bibliotecaria intentó reunir en “Un ensayo de clasificación sencilla”, las ventajas del catálogo sistemático y del catálogo diccionario<sup>596</sup>, tomando de la decimal los grandes grupos lógicos de división de las ciencias y de la segunda la facilidad de consulta. Si el catálogo Diccionario era fácilmente consultable por el lector, ya que a todo el mundo le era familiar el sistema universalmente aplicado en diccionarios, enciclopedias, en cambio tenía el grave inconveniente de separar necesariamente bajo el imperativo del alfabeto el tronco de las ramas, la ciencia y sus derivados.

---

<sup>594</sup> LASSO de la VEGA, J. *La clasificación decimal*, San Sebastián, Editora Internacional, 1942

<sup>595</sup> DÍAZ-PLAJA, A. “Ensayo de una clasificación sencilla”, enero-marzo 1946 y DÍAZ-PLAJA, A. Defensa de la Clasificación decimal, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, julio-sept. 1945

<sup>596</sup> El catálogo diccionario era el resultante de la fusión del catálogo alfabético de autores y obras anónimas, alfabético de títulos y alfabético de materias en una sola secuencia alfabética.



Dado que los catálogos eran el único instrumento para saber qué había en una biblioteca y dónde, aparte de los catálogos básicos, y en función de las necesidades, la disponibilidad de personal y la imaginación, se podían organizar infinidad de variantes, como expresaba la bibliotecaria de la Biblioteca Popular de Manresa<sup>597</sup>:

Así acontece con el de títulos de novelas y obras de teatro, de artículos de revistas, de seudónimos, de temas de especial interés local, de guías de lectura y de tantos otros cuya utilidad práctica se ha comprobado. En una biblioteca caben tantos catálogos desde nuevos puntos de vista siempre que nuevas actividades vayan incrementando la vida de la Biblioteca. Para la redacción de catálogos no puede haber límite, porque los catálogos son una consecuencia y no una causa.

Entre las propuestas más innovadoras estuvo la de la Biblioteca Pública de Santa Cruz, especializada en público juvenil, donde a los catálogos usuales se añadieron dos nuevos con la finalidad de revalorizar el fondo. El catálogo de anécdotas ordenado por orden alfabético de personajes, en el que se entraba por el protagonista de la anécdota, y si eran dos se hacía una entrada por cada personaje. Y el Catálogo de grabados, éste venía a resolver la cantidad y diversidad de grabados que necesitaba el estudiante para realizar cualquier trabajo, sobre todo los más demandados eran grabados referentes a Ciencias, historia y Geografía, sobre todo de geografía humana.

Otra propuesta fue la redacción del catálogo de artículos de revista entre las Bibliotecas Populares<sup>598</sup>. Dado que no era una tarea nada fácil seleccionar artículos, porque algunos podían interesar a unas y a otros no ser de utilidad porque las necesidades no eran iguales, se decidió llevar esta iniciativa entre bibliotecas de intereses similares. En la Biblioteca Popular de San Pablo también se llevó a cabo este catálogo con el criterio de seleccionar los artículos más interesantes y los que podían llamar más la atención de los usuarios. Las revistas catalogadas fueron: *Ibérica* (ciencia); *Medina* (para la mujer); *Biblioteconomía*; *Comercio y Navegación*; *Juventud* (novelas y algún cuento)

En la Biblioteca de Granollers para el servicio de Biblioteca en estos años se mantenían nada menos que ocho catálogos: el catálogo general de autores, ordenado alfabéticamente; el Catálogo sistemático, ordenado según la clasificación decimal; el Catálogo alfabético de materias, comenzado en 1942 y sobre todo la sección de ciencias se procuraba que estuviera al actualizada por ser de gran utilidad al público; Catálogo de la Sección Infantil; Catálogo de la Sección juvenil; Catálogo de la Sección de Referencia, Catálogo de la Colección local; de obras anteriores a 1830 y Catálogo sumario de las bibliotecas particulares de Granollers<sup>599</sup>.

En algunas bibliotecas catalanas<sup>600</sup> se ofreció al lector una clasificación de las novelas por medio de nacionalidades y géneros, además de encabezamientos como Novelas cortas, Novelas ejemplares catalanas y Novelas ejemplares españolas. Dentro de las nacionalidades se

---

<sup>597</sup> Extracto de la directora de la B. Popular de Manresa Gloria Sancho “¿Cabe redactar nuevos catálogos desde nuevos puntos de vista?”, *Biblioteconomía*, pp.

<sup>598</sup> Reunión XII de Bibliotecarias (1945), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, octubre-dic. 1946

<sup>599</sup> La Biblioteca Popular “ Francisco Tarafa de la Excm. Diputación Provincial de Granollers”

<sup>600</sup> “Clasificación de novelas en el catálogo alfabético de Materias”, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, octubre-dic. 1949

subdividían por siglos a modo de orientación para el lector, aunque como toda clasificación a veces se dudaba en conceptuar una novela como psicológica, social, educativa o sentimental.

También la Biblioteca Pública de Soria, experimentó con clasificaciones que facilitarían la consulta de los fondos más demandados. La literatura se separó la española de las extranjeras y éstas entre sí, reuniéndose las obras de un mismo autor. Y cuando era posible, se tenían en cuenta la cronología y las subdivisiones por géneros. En la Historia, se deslindó la universal y de otros países de la española e hispanoamericana, formándose grupos independientes de Geografía, Viajes, Biografía y Heráldica<sup>601</sup>

En otras bibliotecas, como las de la capital, pocas florituras técnicas se podían experimentar cuando lo básico estaba por hacer, como muestra este informe escrito por Javier Lasso de la Vega, en calidad de responsable de la Biblioteca de Buenavista, dirigido al Director de las Populares de Madrid, José M<sup>a</sup> Castrillo en 1942<sup>602</sup>:

“Ya está terminada la primera labor de alfabetización de los ficheros de autor y topográfico y se ha iniciado el cotejo del inventario topográfico con el catálogo de autores del que hasta la fecha vamos sacando como consecuencia de ello la falta de algunas papeletas en el de autores. El catálogo de materias está sin sujeción a las Instrucciones del Cuerpo y las fichas tampoco responden al tamaño oficial. Te propongo que una vez terminada la revisión del catálogo de autores y el inventario, procedamos a la clasificación de los fondos de la Biblioteca con el sistema decimal, para ello me harían falta unas tablas, las que yo he traducido. A la vez se puede poner signatura decimal para ordenar los libros en la sala, con lo cual se podría prescindir del actual catálogo por materias y el topográfico. Luego se haría el catálogo diccionario aprovechando el de autores. Como hay mucha literatura adaptaría las marcas de Cutter a los apellidos españoles. Así quedaría perfecta la Biblioteca en cuanto a instrumentos de acceso al libro. Necesito las tablas de la CDU y las Reglas de Catalogación para el Catálogo Diccionario”.

## **7.4. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS**

### **7.4.1. Lectura en sala y préstamo a domicilio**

Para el régimen de las Salas de lectura de las Bibliotecas Públicas debían observarse las disposiciones del Reglamento para el régimen y servicio de las Biblioteca Públicas del Estado, aprobadas por R.D. de 18 de octubre de 1901, que pese a su antigüedad, se aplicaban todavía. Debían fijarse para que el lector conociese sus derechos y sus obligaciones. Dicho reglamento establecía, entre otras, las siguientes disposiciones: art. 142 Serán admitidas en las bibliotecas públicas cuantas personas lo deseen; pero sus jefes podrán excluir a los que por cualquier motivo puedan ser causa de alteración del buen orden del establecimiento.

Hasta que no se crearon las Bibliotecas Populares y se establece una sección circulante, tanto la lectura como la consulta se realizaban en las salas. A medida que el préstamo a domicilio se generaliza, se utilizarán éstas, fundamentalmente, para la consulta de obras de referencia como diccionarios, enciclopedias o repertorios legislativos, las publicaciones oficiales (BOE,

---

<sup>601</sup> Memoria 1947 Biblioteca Pública de Soria. AGA

<sup>602</sup> Archivo General de Educación

boletines provinciales y municipales) y sobre todo para la lectura de la prensa diaria y las revistas.

Con motivo de la inauguración de la Biblioteca Municipal de Madrigal de las Altas Torres<sup>603</sup>, el señor Tolsada hacía hincapié en que la Biblioteca para que cumpliera su verdadera función, había de tener el doble carácter de lectura en sala y préstamo a domicilio, y por ello pedía al alcalde que habilitara otro local en la planta baja del consistorio en el que pudieran colocarse las mesas y sillas para que los lectores acudieran, sobre todo los jóvenes, a la biblioteca con el fin de que pudiesen leer bajo la orientación del encargado de la misma.

En España las primeras bibliotecas que circularon libros en préstamo lo hacían en tan escaso número que no puede decirse que constituyesen un servicio regular, sistematizado, con vida propia e independiente de las demás funciones de la Biblioteca. Se realizaba, solamente entre personas conocidas, con las cuales no se creía necesario utilizar el empleo de un recibo u otro requisito equivalente. En otras se hacía uso de un cuaderno, en donde se iban anotando los libros prestados y el nombre de los prestatarios<sup>604</sup>.

En el mismo R.D. de 22 de noviembre de 1922 que establecía la creación de secciones populares, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, así como en las Bibliotecas Populares de Madrid, se establecía que debían tener fondos apropiados a su misión y una sección circulante.

A propuesta de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, se aprobó el Reglamento para el préstamo de libros en Bibliotecas Públicas, por Orden de 13 de diciembre de 1940, estableciéndose el préstamo directo al lector o entre bibliotecas. Se excluían de préstamo: los manuscritos, las enciclopedias, los libros de texto y los de mero pasatiempo. Sin embargo, a excepción de los manuscritos, el resto de documentos si la Dirección de la Biblioteca lo estimaba oportuno podían ser prestados en casos excepcionales. Con lo cual es imposible conocer la medida exacta en que se cumplía una norma tan restrictiva para los servicios de lectura pública<sup>605</sup>. Para disfrutar del préstamo directo era preciso una fianza suficiente en metálico o un aval de persona conocida y solvente que respondiera de los perjuicios que a la Biblioteca podía causar el avalado. Quedaban excluidos de este requisito los profesores de los centros oficiales de enseñanza, las autoridades, las academias e institutos culturales y las personas de reconocida solvencia de la localidad donde radicase la Biblioteca.

Cada Biblioteca podía fijar las horas destinadas al préstamo en función del personal de que dispusiera. No podían tenerse más de tres obras o cinco volúmenes. El plazo de préstamo era de 15 días, y de 8 para los números sueltos de las revistas. El lector estaba obligado a cuidar el libro y en caso de deterioro o pérdida a responder de su valor.

Para el préstamo de libros en muchas bibliotecas se estableció una tarifa para obtener el carné de préstamo. Por ejemplo en la Biblioteca del Barco de Ávila sin alterar el carácter gratuito del servicio, en Junta se acordó un impuesto municipal de 1 peseta a las solicitudes de lector circulante que habían de renovarse cada año. En otros casos, como en la Biblioteca de Olot se fijó una tarifa de 0,15 pesetas por cada obra prestada a los adultos y de 0,10 a los niños<sup>606</sup>, a

---

<sup>603</sup>Sección Legislación. Bibliotecas, 1950, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*

<sup>604</sup> LASSO de la VEGA, J. Manual de Biblioteconomía, Madrid, Mayfe, 1952

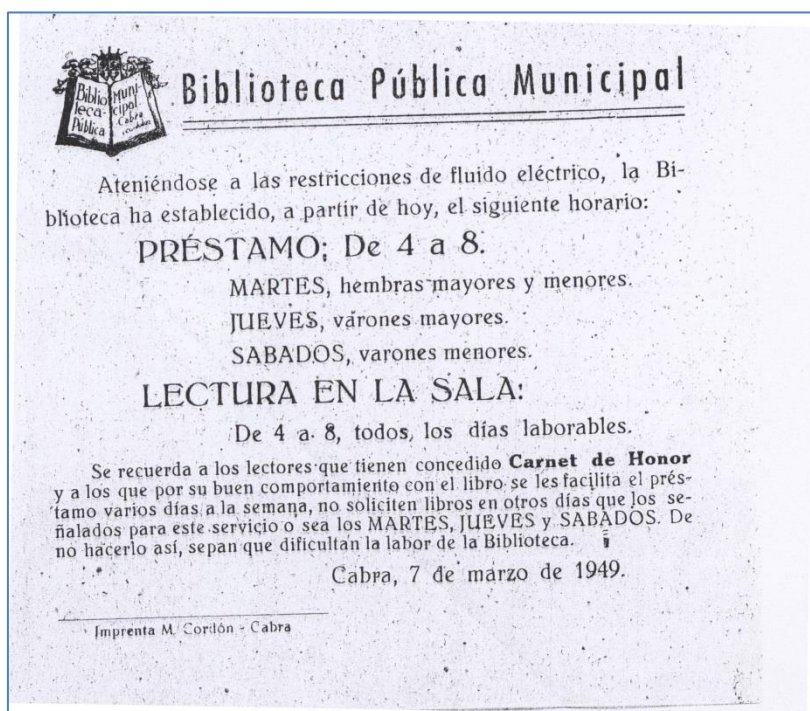
<sup>605</sup> Hasta 1972 no se establece con carácter general y obligatorio el servicio de préstamo de libros en todas las bibliotecas públicas (Decreto 3050/1971)

<sup>606</sup> Citado por Ana Martínez Rus en *La persecución del libro*, p. 64

excepción de los militares y religiosos que estaban exentos. Toda una manera de dificultar el acceso a los libros y a la lectura a las personas con menos recursos en unas circunstancias económicas muy duras, y para más agravio estaban exentos de pagar esa tarifa los militares y religiosos. Este gravamen económico reflejaba también un claro desprecio de las autoridades hacia las clases populares, a quienes consideraba incapaces de utilizar correctamente el servicio de préstamo y conservar los libros.

Para gestionar el servicio de préstamo en algunas bibliotecas se llevaba un sistema que comprendía un triple fichero: lectores, obras prestadas y fechas de vencimiento.

En la Biblioteca de Cabra<sup>607</sup>, desde su creación dispuso de un fichero, con fichas del libro y del lector con excelentes resultados, según su bibliotecario Juan Soca. La ficha del libro no se colocaba en el lugar del libro retirado, sino en el orden de numeración correspondiente en un fichero especial que comprendía todos los números del fondo disponible. Este sistema ofrecía la ventaja de que la ficha no podía perderse del estante, ni confundirse de lugar, facilitando también la estadística. También era habitual, el implantar un sistema de multas proporcionales a los días de retraso en la devolución.



<sup>607</sup> Memorias de la Biblioteca de Cabra- AGA-Educación 31/6067

**Instrucciones para el Servicio de Préstamo**

Para que la BIBLIOTECA pueda extender un Carnet a nombre de un menor (varón o hembra), precisa una autorización del Maestro o Padre del solicitante, lo que servirá de garantía. La BIBLIOTECA no está autorizada a prestar libros a personas desconocidas o insolventes. Los mayores, si no son conocidos, entregarán cinco pesetas, como garantía de las que se reintegrarán al devolver el libro.


**Nadie puede solicitar libros con Carnet de otra persona ni prestarlos.**

Todo el que solicite libros debe llevar una lista de quince o veinte de los que le interesen, porque siendo muchos los lectores, es lo más probable que no se disponga del mayor número de los anotados. No precisa título ni autor. Basta con indicar el número del Catálogo.

No es posible prestar libros a los enfermos. Cuando esto se compruebe, el lector perderá el Carnet.

La BIBLIOTECA concederá el premio de poder retirar libros, los **martes, jueves y sábados**, a los lectores que se comporten debidamente con el libro, devolviéndolo puntualmente y no deteriorándolo.

IMP. CORDÓN-CABRA

  
**BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  
DE CABRA**  
♦  
**SERVICIO DE PRÉSTAMO**

CARNET de identidad núm. \_\_\_\_\_

A FAVOR DE \_\_\_\_\_

Como no todo el que recibía libros en préstamo cumplía escrupulosamente sus deberes, y como era frecuente el extravío del carné, la Biblioteca poseía además, un fichero de lectores, independientemente de la ficha de lector del préstamo. En esta nueva ficha se reseñaba el nombre, apellidos y domicilio del beneficiario, número del carné y otros pormenores que orientasen sobre el comportamiento del lector. Asimismo cuidaba la Biblioteca de que los libros dados a préstamo no fueran a parar a manos de lectores que padezcan enfermedad contagiosa.

La aceptación y comportamiento de los lectores que utilizaban los servicios de préstamo ha quedado reflejado en algunas de las memorias redactadas por los responsables bibliotecarios.

En la memoria de la Biblioteca Pública de Soria de 1947<sup>608</sup>, J.A. Pérez Rioja reseñaba que se iba consiguiendo la regularización del préstamo domiciliario de libros, se incrementó de 10 a 16 los días de plazo y se implantó un sistema de multas proporcionales a los días de retraso en la devolución. Pero, según él en el temperamento español había un defecto a combatir: el considerar como propios los libros recibidos en préstamo, sin recordar que pertenecen a una Biblioteca y que hay personas que esperan su devolución para leerlos.

La Biblioteca de Mérida en 1948 constataba así el éxito del préstamo<sup>609</sup>:

El servicio de préstamos se ha desarrollado con tal éxito. En un principio se prestaban obras 3 veces por semana y dos horas cada vez, pero siendo insuficiente y reclamándolo el público hubo que hacerlo diario y a todas horas del día. Para el servicio se utiliza el modelo oficial y se han expedido 756 tarjetas de lector. El control de devoluciones se ha organizado con el libro registro correspondiente y ficheros con pestañas de los días del mes. A los morosos se les escribe una carta invitando a devolver las obras y se lleva una lista para retirarles la tarjeta en

<sup>608</sup> AGA-Educación 31/6067

<sup>609</sup> Mérida?

caso de reincidir. Por el reducido fondo de la biblioteca (3.175 volúmenes.) no se puede organizar una sección aparte de libros de préstamos y se utilizan para ello todos sus fondos, a excepción de algunos excluidos de préstamos.

Muy interesante es este otro testimonio sobre cómo evolucionó favorablemente la aceptación del préstamo entre la población de Játiva en solo apenas un año gracias a la implicación de su bibliotecaria<sup>610</sup>:

Por el préstamo a domicilio sentimos gran entusiasmo por ser este servicio estandarte a nuestro juicio de toda la eficiencia que puede rendir una biblioteca popular. Desde un principio tuvimos tanto interés en la implantación de este servicio que en 1948 las primeras mensualidades que cobró la bibliotecaria se invirtieron en la construcción del mostrador, mueble indispensable para establecer el préstamo. Asimismo fue donativo de la Encargada la impresión de cartulinas para carnets de préstamo.

El servicio se puso en marcha a la vez que se inauguró la Biblioteca en 1948, y en un principio fue fuente de toda clase de sinsabores porque el público era reacio a firmar los boletos, presentar la firma de dos garantizadores, respetar los plazos y era esquivo a la hora de responsabilizarse por el deterioro de un libro. En 1949 este servicio funciona con una sencillez y facilidad envidiables: los lectores se han habituado incluso a no sacar ningún libro sin forro que ellos mismos traen y su buen comportamiento permite elevar el nº de obras de préstamo a dos en una sola vez por lector. También admiten como necesarias las pequeñas sanciones que la biblioteca impone a los morosos e indisciplinados. Por ello nos felicitamos de haber mantenido este servicio a todo trance frente a la hostilidad y deseo de suprimirlo de las autoridades locales, porque el servicio era atendido por una persona. Pero una clara visión de lo mejor era resignarse a educar al público en él, antes que suprimirlo.

Tras un año de pugna constante para que la biblioteca se insertara en la población, lo típico hoy es el lector que todos los días se pasa por la Biblioteca aunque no tenga que leer nada y la participación del lector en todos los asuntos de la Biblioteca es característico en Játiva

O este otro de la Biblioteca de Alsasua (Navarra)<sup>611</sup>:

La mitad de las obras servidas al público son mediante el préstamo a domicilio (...) porque al tratarse de una población en la que la mayoría de sus habitantes trabajan en el ferrocarril, las fábricas y el campo, no disponen de tiempo para acudir a la Biblioteca. El ferrocarril tiene servicio permanente, lo tiene también algunas fábricas y en cuanto a los labradores, sus faenas duran todo el día. Para muchos lectores la solución está en llevarse un libro a su casa. La Biblioteca cuida con esmero de este servicio, procura que los libros sean tratados con cuidado; para ello dispone de cartulinas, en las que en tres textos diferentes, se consignan varias recomendaciones al lector para que éste maneje el libro con el esmero que se merece en bien de todos.

En la Biblioteca de Cabra (Córdoba)<sup>612</sup> desde su apertura, se quiso premiar en el servicio de préstamo la asiduidad y el comportamiento con el libro, dando al lector que lo merecía la facilidad de retirar dos o tres volúmenes. Asimismo fue criterio de la Biblioteca dar todo género de facilidades a estudiantes y lectores de materias de Filología, Ciencias Puras, Aplicadas e Históricas, no exigiéndoles plazo para su entrega. Por todos estos motivos la asistencia a la Sala fue decreciendo, en tanto aumentó considerablemente el préstamo.

---

<sup>610</sup> Memoria 1948 Biblioteca de Játiva AGA –Educación 31/6067

<sup>611</sup> Memoria Biblioteca de Alsasua 1948. AGA –Educación 31/6067

<sup>612</sup> Memorias Biblioteca de Cabra, AGA-Educación 31/6067

Tres modalidades de préstamo ofrecía la Biblioteca de Granollers. El préstamo a los lectores inscritos de la ciudad, completamente gratuito, si se trata de una solvencia moral o avalada por un comercio o entidad; los jóvenes tenían que traer la autorización de sus padres y el préstamo se hacía por quince días renovables, si otro lector no solicitaba la misma obra. El préstamo a los lectores de pueblos vecinos o transeúntes, mediante un depósito de 25 pesetas, que habilitaba para todo el tiempo que el lector quisiera utilizarlo y se le devolvía cuando lo solicitara. Por último, el préstamo entre las Bibliotecas Populares de la Diputación Provincial de Barcelona. Todos los lectores inscritos en el préstamo podían solicitar, con carácter gratuito, todos los libros que desearan de la Biblioteca Central a través de la de Granollers<sup>613</sup>.

En algunas bibliotecas pertenecientes a la Diputación provincial de Barcelona para paliar la falta de recursos que no permitían ofrecer novedades bibliográficas a todas las bibliotecas, se organizaron lotes circulantes de actualidades<sup>614</sup>. Durante 1945 circularon 68 títulos entre las Populares de Sallent, Sitges y Esparraguer. En Sitges la presencia del lote circulante despertó gran interés, aumentó la concurrencia a la sala y aumentó el préstamo, poniendo en valor libros similares existentes en la biblioteca que no habían sido descubiertos por los lectores. En Sallent se pidió que el lote permaneciera más tiempo en la Biblioteca, aunque hubo quejas respecto a los textos de literatura, pues estos no eran realmente de actualidad. En Esparraguera las preferencias fueron similares a las que normalmente se dan en la Biblioteca: novela, historia y geografía, explicadas en forma amena y las obras de tejidos. En cambio las materias de ciencias puras tuvieron poco éxito ya que el público que frecuentaba la biblioteca eran obreros y gente especializada en un oficio. Durante el tiempo que se tuvo el lote la Biblioteca estuvo más animada, pues las novedades atraen más lectores. Al año siguiente se repitió la experiencia en otras bibliotecas.

Los horarios de servicio de las Bibliotecas no eran muy amplios, mayoritariamente comprendían unas horas por la tarde, pero en cualquier caso trataban de ajustarse a la disponibilidad horaria de sus posibles lectores.

En la Biblioteca del Barco de Ávila se abría de 19 a 21 horas de la tarde todos los días excepto domingos y festivos. En la provincia de Huelva, la Biblioteca Pública Provincial abría todos los días laborables de 11 a 13 y de 18 a 21 y las municipales de 18 a 21. La Biblioteca Pública Municipal de Mérida ofrecía un horario más amplio: mañanas de 11 a 13, tardes de 5 a 9, y de abril a octubre de 6 a 10.

La Biblioteca Pública Municipal de Játiva lo hacía de 6 a 9'30 de la tarde a excepción de festivos, pero los jueves y sábados cerraba porque se reservaban para trabajos de organización de la biblioteca ya que durante las horas de lectura el escaso personal no podía dedicarse a tareas biblioteconómicas, pero en cambio se organizaban sesiones diurnas especiales los miércoles y viernes para los alumnos de Instituto y para el préstamo de libros a lectores de pueblos circundantes. En Burjasot (Valencia) la Biblioteca abría de 17'30 a 19 todos los días para niños y de 19 a 21 todos los días para adultos. Los días festivos de 12 a 14 para ambos sexos para informarse de la prensa.

---

<sup>613</sup> La Biblioteca Popular " Francisco Tarafa de la Excm. Diputación Provincial de Granollers"

<sup>614</sup> Reunión XXII de Bibliotecarias (1945), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, oct.-dic. 1946



En las bibliotecas asturianas, a veces se reorganizaba el servicio de préstamo a fin de obtener el máximo rendimiento, estableciendo un horario fijo vespertino en cada villa o ciudad y un horario especial matinal en los días de mercado de cada villa, con el objeto de posibilitar el préstamo a los vecinos de todo el concejo y un horario especial para los niños, destinado a evitar que su presencia masiva no entorpeciera el préstamo de adultos, fijando lotes de libros como premios para los lectores más asiduos a las bibliotecas<sup>615</sup>.

La otra variedad de préstamo que podían ofrecer las bibliotecas era el Préstamo interbibliotecario. La Orden de 29 de julio de 1939 reorganizaba el servicio público nacional de préstamo y circulación de libros y organizaba el Catálogo Central de Bibliotecas Públicas en la Biblioteca Nacional (Orden de 29 de julio de 1939). Se argumentaba que el servicio de libros a domicilio y la multiplicación de Bibliotecas públicas era correlativo deber de un Estado que imponía la obligación de leer. El Gobierno deseaba poner los medios para alcanzar ambos deberes cuya función realizarán las Bibliotecas públicas en ordenado concierto hasta organizar el servicio nacional de circulación de libros, que habrá de abarcar la Biblioteca Nacional, las universitarias, las provinciales y de institutos, centros docentes y municipales, etc. y de éstas fluirán en sentido inverso conforme a las necesidades. El libro no exceptuado de esta función se serviría en préstamo urbano e internacional al que lo demandara, ya se tratase de persona jurídica o individual conforme al Reglamento que se dicte. El libro circularía en paquetes a través del servicio de Correos con franquicia postal y certificados. En la BNE se organizará el Catálogo Central de Bibliotecas Públicas y la sección de consultas bibliográficas anexas a este servicio. España se adherirá a las convenciones internacionales sobre préstamo y circulación de libros en condiciones recíprocas.

No parece que la anterior Orden llegara a implantarse en la práctica porque apenas un año después se aprueba el *Reglamento de Préstamo de libros para Bibliotecas Públicas* (Orden de 13 de diciembre de 1940), que derogaba todas las disposiciones anteriores, estableciendo que todas las Bibliotecas del Estado estaban obligadas a concederse unas a otras el préstamo de sus fondos, salvo los manuscritos y libros raros, las obras de referencia, los libros de texto y los de mero pasatiempo.

Posteriormente, la Orden Ministerial de 12 de febrero de 1944, establecía un servicio de bibliotecas circulantes en cada uno de los distritos universitarios dependiente de la Junta de Intercambio y regulaba un sistema de préstamo de libros entre ésta, las de distrito universitario y las municipales. Suponía una innovación interesante pero una cosa era la teoría y otra la práctica. Esta biblioteca se inició pero no realizó la función para la que fue creada, puesto que nunca llegó a disponer del entramado que preveía la disposición que la estructuró<sup>616</sup>.

También la Junta recibió la misión de crear y mantener eficazmente la Biblioteca Central Circulante, con la que se trataba de crear un servicio de préstamo interbibliotecario, para aquellas bibliotecas que no contasen, en sus fondos con obras determinadas y que debido a su

---

<sup>615</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada, En: *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, p. 85-111

<sup>616</sup> FONSECA, Isabel. *La lectura pública en España... Op. cit.*, p. 19



elevado coste, no podían ser incluidas en las colecciones de aquéllas. Según el artículo publicado en *Documenta* dedicado al Servicio Nacional de Lectura (1952):

(...) esta biblioteca se encuentra en pleno funcionamiento, alcanzando en la actualidad un número total de 16.000 volúmenes, todos modernos, atractivos y de elevado precio.

Las Bibliotecas Populares de la Diputación de Barcelona tenían establecido desde su fundación el préstamo de libros de la Biblioteca Central. De esta manera el fondo, muchas veces limitado de las mismas, se veía aumentado considerablemente y los lectores de diferentes localidades podían consultar, sin necesidad de desplazarse, la materia especializada que les interesara o la edición determinada de los clásicos que necesitaban. Este servicio se realizaba a través de la Central de Bibliotecas Populares. El plazo era de un mes, como mínimo. Pero tenía el inconveniente de la lentitud, pues a veces se pedían libros que no estaban, o se estaban encuadernando o estaban prestados. Para subsanar en parte esta deficiencia se informó a las bibliotecas que no pidieran libros de pasatiempo, ni novela actual, a no ser que fuera novela extranjera en idioma original. El lote circulante de la Central comprendía exclusivamente: libros de actualidad política y social; premios literarios del año y principales novedades en novela; Libros de interés permanente; Nuevas técnicas y última palabra en libros de divulgación. En cambio las populares se especializaron, siendo a ellas a quién había que dirigir las peticiones en función de su especialidad. Sitges lo estaba en libros de arte y sobre hierros; la del Distrito IV en biografías; la Biblioteca de la Mujer en novelas, libros de labores femeninas y economía doméstica; Granollers y Manresa en libros de técnica y Bachillerato. Manresa además recibía los premios Nadal y Canet en obras de técnica de tejidos y libros religiosos.

No solo en las bibliotecas de la Diputación de Barcelona se estableció el préstamo entre sus bibliotecas, también los Centros Coordinadores lo implantaron entre las suyas como Oviedo, León, Soria o Zaragoza.

#### **7.4.2. Información bibliográfica y referencia.**

Por Orden de 17 de mayo de 1938 del Ministerio de Educación Nacional, se ordenaba crear en todas las bibliotecas españolas la sección de consulta o referencia. En esta sección debían figurar: las enciclopedias generales y especiales; bibliografías generales, nacionales y de determinadas materias; diccionarios de la lengua española y los de otras lenguas clásicas y modernas más comúnmente consultados; guías, almanaques, directorios, callejeros; anuarios; atlas geográficos más usuales; catálogos y bibliografías generales españoles y extranjeros; directorios y demás biografías de la actualidad; los catálogos de los editores y los nacionales del libro; tablas e índice decenales de las revistas<sup>617</sup>.

Dentro de este servicio, además de informar se traba de orientar a los lectores<sup>618</sup>, y era habitual la redacción de guías de lectura a partir de fondos de la Biblioteca. Podían ser completas sobre un tema o selectivas. Aparte de su utilidad como instrumentos de información y orientación a los lectores, podían servir de propaganda y dar a conocer la Biblioteca. En una misma guía era útil relacionar una materia con otras que le eran afines. Con motivo de un centenario o de algún hecho lejano se podía incluir una noticia histórica o biográfica, además al ser selectivas podían despertar el interés del público e incentivar la consulta del catálogo.

---

<sup>617</sup> LASSO de la VEGA, J. Manual de Biblioteconomía, p. 121

<sup>618</sup> Sobre la orientación en las lecturas ver capítulo VII. Lecturas y lectores

### 7.4.3. La Sección local

El poseer una buena colección local, era un servicio más propio de las llamadas Bibliotecas Provinciales y estaba unido a las disposiciones de Depósito Legal, que establecía el ingreso en estas bibliotecas de todo cuanto producían las prensas de la provincia y así poder contribuir a la formación de la Bibliografía general de España, y crear para el futuro un centro con bibliografía local de la que hasta ahora se carecía.

En la Biblioteca Pública de Soria se proyecta crear para 1947 una Sección soriana integrada por tres clases de obras: las de autores de la provincia, las que a ella se refieran desde cualquier punto de vista, y las impresas en la capital o la provincia. Se pretendía con ello crear un núcleo de obras útiles al investigador o al mero aficionado a los temas locales.

La colección local en la Biblioteca de Granollers<sup>619</sup> se instaló desde 1936 y se fue enriqueciendo poco a poco. Las obras de esta colección, además de estar incluidas en el catálogo, tenían un fichero aparte por autores y materias. Esta colección se dividía en tres apartados: prensa, obras de escritores granollerenses y obras impresas en Granollers. En esta sección no se prestaban los libros.

En el Reglamento de la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación Provincial de Navarra de 1950<sup>620</sup> se dedica un extenso artículo a este servicio, el 15º, en el que se preceptúa que las Bibliotecas Públicas organizarán una Sección local enumerando exhaustivamente todos los materiales objeto de ingreso en la Biblioteca por este procedimiento, todo un antecedente de la futura norma que regulará el Depósito legal a nivel nacional a partir de 1959<sup>621</sup>:

- a) Libros, fascículos y manuscritos referentes a la población o a la comarca.
- b) Dibujos, mapas, planos, grabados, etc. del mismo carácter
- c) Todos los libros, fascículos y hojas impresas en la población
- d) Obras escritas por autores hijos de la localidad (...) y los libros que traten sobre ellos.
- e) Todos los periódicos publicados en la localidad.
- f) Hojas religiosas, estampas, etc. que se refieran a santuarios de la población o comarca y a los patronos de aquélla.
- g) Fotografías de monumentos, personalidades,... de la población
- h) Programas, carteles, anuncios, bandos, invitaciones, manifiestos políticos referentes a la vida de la población y sus habitantes.
- i) Artículos de periódicos, revistas referentes a la localidad
- j) De todo el material que no sea posible obtener un ejemplar para la sección local, pero del que se tenga conocimiento, se colocará una cédula bibliográfica en el catálogo de la sección.

### 7.4.4. La Sección Infantil y Juvenil

Las primeras bibliotecas infantiles se crearon en Norteamérica en 1803, concretamente en Salisbury, a partir de ese año se fueron implantando en diferentes Estados de la Unión.

---

<sup>619</sup> La Biblioteca Popular “ Francisco Tarafa de la Excm. Diputación Provincial de Granollers”

<sup>620</sup> Reglamentos e instrucciones administrativas, Diputación Foral de Navarra, 1970

<sup>621</sup> Reglamentos e instrucciones administrativas, Diputación Foral de Navarra, 1970

Simultáneamente en las bibliotecas públicas fue apareciendo un rincón reservado a los niños, después una sala, un departamento y un local *ad hoc*. En 1876 se inicia el préstamo del libro infantil a domicilio, y, por último, entre 1890 y 1900 la Biblioteca Infantil adquiere carta de naturaleza en los Estados Unidos. Mientras tanto en Europa, esta sección dedicada al niño termina por implantarse pese a las reticencias de algunos.

Detrás de estas bibliotecas especializadas o secciones subyace el surgimiento de una literatura infantil específica en respuesta a la concepción de los niños como seres independientes y personales con psicología propia, con aptitudes y aficiones peculiares<sup>622</sup>. En ellas el niño debía encontrar el recreo espiritual, el ambiente y los medios propicios para el desenvolvimiento de sus facultades psíquicas<sup>623</sup>.

Todas las Bibliotecas Públicas debían tener una Sección Infantil porque eran y son el complemento necesario de la educación, la instrucción y del estudio. Son fines de la Biblioteca infantil preparar al niño a usar la Biblioteca del adulto con la misma facilidad que la suya y guiarle en sus lecturas, contribuyendo a su más perfecta formación.

La diferencia con la biblioteca escolar, es que ésta proporciona servicios de lectura para fines únicamente educativos y para perfeccionar y ampliar los conocimientos adquiridos en la escuela y ayudar en su tarea a la misma.

Es tan necesaria la Biblioteca al niño, como el niño a la Biblioteca. El niño aprende en la Biblioteca con libros adecuados a su edad, pasando paulatinamente de los cuentos de hadas y las aventuras de héroes a la Historia. Además la Biblioteca tiene un valor disciplinario y educativo que representa para un niño el saber guardar silencio y comportarse bien dentro del recinto. El niño es necesario a la Biblioteca porque es el adulto del mañana y futuro usuario de la Biblioteca. Por ello ésta ha de atraer, cuidar y cultivar al lector infantil.

Referencia a secciones infantiles en España existen desde los inicios de las primeras bibliotecas populares, el mismo RD de 22 de noviembre de 1922 que establecía su creación dice que siempre que el local lo permitiera habría una sala de niños en la que actuaría un maestro, sin perjuicio de las facultades atribuidas al bibliotecario. Concretamente en la Memoria de la Biblioteca Popular de Inclusa de 1916 se expresa la finalidad de la colección infantil y el deseo de implantarla<sup>624</sup>:

*Sucede con mucha frecuencia (por desgracia) que desde que abandona el colegio hasta que puede emprender una carrera o elegir un oficio atraviesa un período en el cual no lee, no obstante tener inclinación a ello. ¿Por qué sucede esto? Pues sencillamente porque no tiene ni sitio adecuado a su edad y circunstancias, ni libros a propósito. Esto es lo que nosotros queremos proporcionarles en mejores condiciones, pues en la actualidad encontramos muchas dificultades que nuestro buen deseo y nuestra buena voluntad no pueden evitar. Dificultades que poco a poco irán desapareciendo en beneficio de nuestros pequeños y asiduos lectores con la implantación que anhelamos.*

*Téngase presente que las primeras lecturas son las que forman y modelan inteligencias y espíritus y júzguese a donde podría llegar nuestra misión educadora, contando con una sección exclusivamente infantil, no solo literaria a modo de recreación o pasatiempo sino constituida también por obras docentes, heterogéneas y varias, si, como consecuencia de la diversidad de*

---

<sup>622</sup> Ariadna (Aurora Díaz-Plaja) "Bibliotecas Infantiles" *Solidaridad Nacional*, 14 mayo 1948

<sup>623</sup> Crisol Lectura de cada día: necesitamos bibliotecas infantiles". AGA-Educación 31/6067

<sup>624</sup> Archivo BNE

*instintos, aficiones y caminos a emprender. Y de paso que lográbamos un fin altamente loable, el de guiar a la niñez inexperta y expuesta a todo género de peligros, dándose cumplimiento al RD del Sr Alba hasta ahora incumplido en lo que a la Sección Infantil se refiere.*

Diecinueve años después, en otra Biblioteca Popular de Madrid, la de “José Acuña”, en un folleto divulgativo de la misma, aparece un breve párrafo sobre el uso que se hacía de esta sección<sup>625</sup>:

*A la sección infantil se le ha querido dar una disposición especial que recuerde en todo momento a los niños su hogar; alrededor de sus amplias mesas se congregan 20 chiquillos que se entregan a la lectura de obras propias para su esparcimiento e instrucción. No les falta el periódico semanal con profusión de monos y variedad de aventuras, tan predilectas de nuestros niños de hoy, su “Tesoro de la Juventud”, Verne, Pinocho,... Nos visitan sus padres con la satisfacción reflejada en su rostro, porque ven un lugar agradable y seguro donde sus hijos pasan el rato contentos e instruyéndose insensiblemente al deleitarse con las amenas y cultas lecturas que se les preparan*

Una iniciativa al margen de los cauces oficiales<sup>626</sup>, de Juana Quílez, Bibliotecaria de la Universidad de Madrid, patrocinada por la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España (ABBE), consistió en el establecimiento de bibliotecas infantiles en distintos Grupos Escolares. La primera de ellas se inauguró el 28 de junio de 1934 en el Grupo “Ortega y Munilla” de Cuatro Caminos; dotada de unos 300 volúmenes, se llegó a atender a un promedio de 90 a 100 niños de 3 a 14 años que acudían a leer o a oír las recitaciones de cuentos. El éxito fue tan extraordinario que “abriéndose la Biblioteca a las cuatro de la tarde forman cola a la puerta desde la una permaneciendo absolutamente llena todas las jornadas”.

El servicio se caracterizó por la diferenciación clara que se hacía con las bibliotecas escolares; porque se fraguó al margen de los cauces oficiales, a expensas de que, con posterioridad, pudiera ser reconocida su necesidad por la administración del Estado; por el voluntarismo de sus responsables que, fuertemente comprometidos, no dudaron en dedicar su tiempo libre a esta tarea y, por último, la introducción de importantes novedades biblioteconómicas inspiradas en bibliotecas norteamericanas como “La Hora del cuento” o la información bibliográfica para niños.

Y aunque para algunos, las bibliotecas infantiles eran consideradas como un lujo para la España de los años 40 y que debíamos contentarnos con resolver el problema de las bibliotecas de adultos, los profesionales señalaban la incongruencia de esta aseveración. Pues, ¿qué se conseguiría sembrando bibliotecas de adultos si no se cultivaba antes el hábito lector? Además la afición a los libros se creaba en la infancia, tarea que no es propia de la escuela primaria, pues ésta proporciona libros para instruir.<sup>627</sup>

Además, estas bibliotecas no sólo podían ser utilizadas por los pequeños lectores; también podían prestar servicios a los mayores, como maestros y todas las personas que cuidan niños. Los padres mismos podían encontrar en ellas una selección de libros para sus hijos. También suelen consultarlas los escritores e ilustradores de libros infantiles.

---

<sup>625</sup> Biblioteca Popular “José Acuña”, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1934, p. 8

<sup>626</sup> TORRES SANTO DOMINGO, M. La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, Tesis, UCM, 2011, pp. 188-192

<sup>627</sup> CASCALES, F. “De re Bibliothecaria: bibliotecas infantiles”, *La voz de Asturias*, 1948. AGA-Educación 31/6067

Las Bibliotecas Públicas una vez que se crean se debían dotar de salas diferenciadas para el público infantil, con mobiliario, horarios y libros específicos, seleccionados de acuerdo a su edad y psicología. Siempre dentro de las posibilidades de cada localidad. Según la teoría, debían instalarse cerca de las Escuelas o en algún lugar lo más céntrico posible y *que viniera de paso a los chiquillos en sus correrías*. Instaladas en lugares apropiados, no tenían por qué ser muy grandes, rodeadas de árboles y jardines, alegres y ventiladas, como prolongación de la sala de lectura y decoradas de forma sencilla para no distraer su atención<sup>628</sup>.

Los muebles no sólo debían ser unos centímetros más bajos que los destinados a los adultos, sino adaptados al público infantil. Por ejemplo las mesas debían ser redondas, taburetes-caballos, formando atril para el libro, permitirá al chico cabalgar leyendo....<sup>629</sup>

La Biblioteca infantil además de toda esta confortabilidad material de sillas y mesas adecuadas a su edad tenía que dar la sensación de hallarse en un hogar fabricado exclusivamente para los niños<sup>630</sup>.

En cuanto a la colección, ésta debía tener libros instructivos, formativos y religiosos; profanos de historia y de divulgación científica. Obras clásicas adaptadas; libros de referencia auxiliares de sus estudios: diccionarios, atlas, guías prácticas, etc. Libros recreativos de fantasía, aventuras; misionales, historias de animales, costumbres exóticas, ambientes imaginarios, etc. También algunos textos de poesía adecuados.

A la hora de seleccionar un cuento, estas eran las recomendaciones<sup>631</sup> que debía seguir el bibliotecario. Respecto al contenido tenía que ser ejemplar para el niño; que en su expresión el lenguaje no fuera ni ampuloso ni ramplón y respecto a las ilustraciones, éstas *debían primero cautivarle con colores vivos para luego pasar a la línea expresiva y delicada sin llegar a la caricatura grotesca*.

En relación a los cuentos fantásticos (hadas) la imaginación debía estimular a los niños, pero en los de aventuras había que exigirles a sus protagonistas un mínimo de verosimilitud y de ejemplaridad, dada la tendencia del niño a imitar a sus héroes. En las novelas policíacas había que evitar la truculencia del asunto y la descripción detallada del delito y dar relieve al triunfo de la justicia. En los libros misionales evitar las escenas de mártires realistas.

En definitiva, según los cánones de la sociedad española de los 40, había que poner en manos del niño libros que les gustasen, pero debían ser sanos, llenos de patrióticos ideales y de ejemplaridad estimulante... y de todo aquello que pudiese despertar su fantasía y engendrar un alto espíritu de ansias y aspiraciones.<sup>632</sup>

Ante el éxito alcanzado en la época por la prensa infantil y los tebeos<sup>633</sup> - “El guerrero del antifaz”, “El hombre enmascarado”, “Juan Centella”, “Roberto Alcázar y Pedrín” o los cuentos ilustrados con personajes de Walt Disney-, y pese a considerarse que eran de mala calidad y

---

<sup>628</sup> Crisol Lectura de cada día: necesitamos bibliotecas infantiles”. AGA-Educación 31/6067

<sup>629</sup> Ariadna (Aurora Díaz-Plaja) “Bibliotecas Infantiles” *Solidaridad Nacional*, 14 mayo 1948

<sup>630</sup> La Biblioteca Central. IV- Dirección de Bibliotecas Populares: La Biblioteca Juvenil de Santa Cruz (Solidaridad Nacional, 4 oct. 1942) de Aurora Díaz-Plaja

<sup>631</sup> Crisol. “Lectura de cada día: necesitamos bibliotecas infantiles”. AGA-Educación 31/6067

<sup>632</sup> MONTIEL, I. “Bibliotecas infantiles, su posible funcionamiento en las bibliotecas alcarreñas”, 1948. AGA-Educación 31/6067

<sup>633</sup> AYUDARTE, Antonio. “Bibliotecas infantiles”, *El faro*, Motril 3 de mayo 1948 AGA-Educación 31/6067

eran perjudiciales para los niños, se pensaba que toda esta pseudoliteratura debía ser aprovechada para atraer lectores a las bibliotecas populares, así se acostumbrarían a ir a la biblioteca y luego pasarían con un pequeño esfuerzo del bibliotecario a leer textos más serios<sup>634</sup>.

El personal que atendiera esta sección, preferentemente femenino por su sensibilidad y espíritu maternal, tenía la obligación de que los niños leyeran mucho, pero de una manera dirigida y sistemática, y debía tener una función activa como la del médico y del higienista y no pasiva como la del farmacéutico, idea del más puro pensamiento orteguiano que compartió Lasso de la Vega. Sus tareas primordiales eran escoger la buena literatura en todos sus sentidos: por su contenido, su estilo adecuado, su presentación y técnica editorial; graduarla según las edades y administrarla según los temperamentos; proporcionarla y dosificarla en los momentos oportunos. Y todo ello discretamente sin imponerse, haciendo que el niño eligiera por una simple sugerencia. Esto en relación a los libros recreativos. En los demás su misión era enseñarle a manejarlos y a despertar su interés.

Para cumplir este cometido, la bibliotecaria debía poseer un recto criterio moral, un gran entusiasmo por el libro y un profundo conocimiento de la psicología infantil. Este último podía obtenerlo con la observación directa del niño, de las preferencias que mostrara en sus lecturas y de los comentarios que éstas le sugirieran. En éste sentido eran útiles, la elaboración de cuestionarios impresos, en los que el niño podía expresar su opinión sobre sus preferencias lectoras.<sup>635</sup>

Aparte de estar separada la colección infantil de la de adultos o tener un catálogo también separado, el libro acceso a las estanterías se podía hacer más atractivo acompañando a los números de la CDU con dibujos alusivos a las materias que contenían los armarios para que los niños se familiaricen con la clasificación decimal, pues los lectores infantiles preferían ir directamente a los estantes y recrearse mirando las láminas de los libros, antes de escoger que consultar el catálogo.

Respecto al préstamo de la colección infantil hubo diferentes criterios según la experiencia de cada biblioteca. Así en la Biblioteca de Arenys de Munt, preferían no prestar libros para que frecuentaran la Biblioteca. En cambio, en la Biblioteca de Pineda el préstamo infantil lo tenían bastante restringido y sólo lo autorizaban como premio a los lectores más asiduos. *Es corriente que al principio del préstamo, llevados de la ilusión, lean un libro diario, luego establecimos que debían cambiarlo cada tres días y cuando lo devuelven les hacemos unas preguntas para ver si lo han leído.* En Granollers no se prestaba la colección infantil.

La orientación de las lecturas, siendo una tarea propia de bibliotecarios, en estos años de la dictadura va a estar fuertemente condicionada por los principios del nacionalcatolicismo. Así los recursos bibliográficos que se editaron para seleccionar y orientar las lecturas infantiles fueron realizados por el Gabinete de Lectura Santa Teresa de Jesús del Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica. Esta entidad publicó sus primeros ensayos de libros para la infancia en *Ecclesia* (1944, núm. 179-180) y en 1945 salió a la luz el *Catálogo crítico de libros para niños*, donde se reseñaban más de 900 obras infantiles distribuidas en cuatro partes por tramos de edad y con la calificación de los libros en recomendables, aceptables, tolerables e inconvenientes. Como apéndice al Catálogo, el Gabinete publicaba mensualmente la hoja

---

<sup>634</sup> FIGUEIRA, Julia, "Tengamos en cuenta al niño", *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas* nº 6, 1952, pp. 19-23

<sup>635</sup> Este tipo de cuestionarios sólo eran útiles a la bibliotecaria sino a los autores y editores especializados en literatura infantil y juvenil como se hacía en otros países.

titulada *Crisol de Libros* con el mismo plan que aquél, así como listas de impresos especialmente elegidos y clasificados para formar pequeñas bibliotecas infantiles y otras para orientar a los padres en sus compras de libros con motivo de las fiestas navideñas.

La elaboración de guías de lectura era el principal instrumento utilizado para la orientación. Para su selección y elaboración, los bibliotecarios debían conocer un poco la psicología infantil y tener en cuenta el gusto del niño.

La bibliotecaria de Pineda<sup>636</sup> de su experiencia en la Sección Infantil, comentaba que dirigir las lecturas a los pequeños no era difícil; generalmente eran dóciles y aceptaban las sugerencias que se les hacían. *Las guías de lectura dan buenos resultados, y cuando se hacen exclusivamente dedicados a ellos se sienten orgullosos de su atención y leen todos los libros indicados en ella o los hojean. En este punto son mejores que los adultos, que son una minoría los que consultan las guías.*

Otra experiencia de estímulo a la lectura, fue el establecimiento de la Cartilla de Honor<sup>637</sup> que hizo la Biblioteca de Cabra para los niños de 10 a 18 años. El lector al que se concedía esta Cartilla estaba obligado a anotar en ella los datos del libro que solicitaba para su consulta en la Sala o fuera de ella y la fecha en que lo retiraba. A parte la Dirección de la Biblioteca aconsejaba al lector textos que debía leer. A continuación se convocaba un concurso consistente en la exposición de un tema, elegido por la Biblioteca, en función de las materias preferidas del lector. Los premios podían ser libros escogidos por el lector o el derecho a adquirir en préstamos cuantos libros necesitase cualquier día.

La Biblioteca Infantil también ofertaba diferentes manifestaciones culturales que sirvieran de estímulo al niño para acudir a la biblioteca. Estas actividades podían ir desde exposiciones de dibujos infantiles, recitales poéticos, concursos de cuentos hasta la representación de adaptaciones dramáticas. Especial atención se daba al día de la Fiesta del Libro.<sup>638</sup>

Otras actividades que se organizaron fueron los llamados “Círculo de poesía”, donde los niños aprendían poesías escogidas por la bibliotecaria, explicaban el sentido de las mismas e interpretaban las poesías con dibujos, exposiciones con personajes de cuentos o representación de comedias escritas por los niños con motivo de la Navidad.<sup>639</sup>

Pero sin duda fue “La Hora del Cuento”, la actividad estrella de las secciones infantiles, utilizada como método ideal para atraer a nuevos lectores hacia la lectura, pues una vez finalizada la sesión, la Biblioteca ofrecía el aliciente de proporcionar más cuentos.

Juan Quílez en un artículo publicado en el primer número del Boletín de la ABBE, dedicado a las Bibliotecas Infantiles explicaba profusamente en qué consistía “La hora del cuento”<sup>640</sup>:

---

<sup>636</sup> “Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares”, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, nº. 39, 1954, pp. 2-19

<sup>637</sup> Memoria de la Biblioteca de Cabra. AGA-Educación 31/6067

<sup>638</sup> Ariadna (Aurora Díaz-Plaja) “Bibliotecas Infantiles” *Solidaridad Nacional*, 14 mayo 1948.

<sup>639</sup> Reunión XXIII de Bibliotecarias (1946), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, oct.-dic. 1946

<sup>640</sup> Citado por Marta Torres en “La biblioteca de la Universidad de Madrid”, pp. 189-192



“La hora del cuento, practicada con gran éxito en todas las Biblioteca infantiles extranjeras, consiste, como se sabe, en reunir un grupo de niños de entre los asistentes a la Biblioteca y relatarles un cuento, leyenda, etc. Muchas son las sugerencias que una bibliotecaria inteligente encontrará para cumplir el fin que se persigue con estos relatos, que es atraer la atención de los niños hacia los libros que los contienen, logrando escalonarla primero en el terreno de la fantasía para llegar después al de conocimientos prácticos, que en uno y otro caso los libros le proporcionarán. En primer lugar, podrá con muy poco coste y mucho éxito hacer que los mismos niños representen, sin hablar ellos, sino siguiendo su relato los personajes de los cuentos, viendo así los niños con gran interés las vicisitudes acompañan a la Bella Durmiente, por ejemplo, desde su bautizo, con el brillante cortejo de hadas, que derraman sobre ella los más esplendidos dones, hasta que el apuesto príncipe del vecino reino, llamado por el Destino a sacarla de su centenario letargo, cruza las espesas malezas que ocultaban el palacio y se acerca a su lecho, despertándola del maléfico sueño que por un siglo privó de vida a la princesa y a todo cuanto la rodeaba, para hacerla completamente feliz. Otras veces podrá dejar su relato en un pasaje interesante, mostrando a sus oyentes el libro que les brinda la continuación y fin de la historia que les interesó. Por último, podrán formarse, por iniciativa de las bibliotecarias, círculos de lectura en los cuales se reúnan varios niños aficionados a un mismo género de ellas: por ejemplo, lectores de aventuras, que en voz alta lean y comenten, y a veces puedan representar aquellas escenas, dando cada uno su opinión sobre quien le parece el más valiente, el más audaz, el más temerario, formándose así idea de los que es el valor, la audacia o la temeridad”

Ofertar una actividad como “La hora del cuento” no era una tarea fácil, ya que se necesitaba personal especializado, buscar buenos materiales y trabajar con ellos. He aquí algunos consejos que se daban desde la revista de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona para llevarla a cabo<sup>641</sup>:

En las historias seleccionadas prevalecerá el sentido de lo bello. El cuento será expuesto de una forma amena y ha de contener moralidad. En algunos casos, según la edad y la formación de los niños, se recurrirá a las adaptaciones. La Bibliotecaria antes de comenzar la actividad, ha de formarse el propósito de conocer a fondo la historia seleccionada, demostrar que está viviendo los acontecimientos para entusiasmar a los peques. Es indispensable recordar mentalmente los diálogos de los personajes centrales, usar el mismo lenguaje y soportar unos predeterminados ensayos. No se emplearán más de 30 minutos. Dos tipos de cuentos los de imaginación y los que son adaptación de los clásicos (Las mil y una noches; fábulas, grandes epopeyas como La Ilíada y la Odisea). Adoptar la “Hora del Cuento” es un método ideal para atraer a los pequeños lectores hacia la lectura, pero no es tarea fácil, pues hay que buscar nuevos materiales y estudiar de continuo aquellos cuentos donde los lectores puedan apreciar más la literatura.

En la Biblioteca Pública de Soria, para hacer más atractiva la Sala Infantil y que acudieran más niños, convencidos de que estos leían poco o mal, y que era necesario atraer y orientar al pequeño lector, y darle a conocer cuánto le ofrecía la biblioteca enseñándole a utilizar ésta, se quiso hacer algo más amplio y le llamaron “La hora infantil”<sup>642</sup> dando entrada a lecturas, narraciones o comentarios, de carácter geográfico, histórico, moral, es decir didáctico y formativo.

Esta variante de la “Hora del cuento”, se planteó como un complemento de la labor escolar que despertara la curiosidad de los niños. Se programaron sesiones mensuales, alternativamente para niños y niñas, donde se narraban o comentaban cuentos, leyendas,

---

<sup>641</sup> *Biblioteconomía*

<sup>642</sup> PÉREZ RIOJA, J.A. “La hora infantil”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas* nº 6, 1952,



biografías; se recitaban poesías, se resumían aspectos geográficos, históricos o fragmentos de obras morales, religiosas o científicas, dentro de un tono ameno y siempre en armonía con el sexo y la edad de los oyentes. Se sugirió a los maestros los temas propuestos y se aceptaron nuevas sugerencias por parte de los docentes. En las sesiones que coincidieron con la Navidad y la Fiesta del Libro se obsequiaron libros a los lectores más asiduos. Cada sesión se anunció en la prensa local. Los temas de las sesiones fueron muy variados: Kipling, Urbanidad, Cánticos de Navidad de Dickens, la vida de los esquimales en la tundra, el Duero soriano, cuentos del Padre Coloma, Vida de Santa Teresa, la Navidad, las aventuras de Pinocho, la vida de San Saturio anacoreta, la organización de las abejas, la fábula de Polifemo o una narración de Josefina Bolinaga. Se procuró que los temas tratados se basasen en libros existentes en la Sección Infantil.

Durante todo el franquismo las funciones de la biblioteca infantil también fueron asumidas por otras instituciones como el Frente Juventudes o la Acción Católica, como ya se vio en el capítulo IV, y de toda institución juvenil que tuviese un carácter educativo y cultural.<sup>643</sup>

Hubo una biblioteca infantil exclusivamente dedicada para menores organizada por personal formado en la Escuela de Bibliotecarias, la Biblioteca de Santa Cruz de Barcelona. Veamos como Aurora Díaz nos describe esta experiencia<sup>644</sup>:

Digna de atención especial una biblioteca que a los dos años de existencia cuenta con un historial considerable de labor intensa y fecunda, encaminada a fomentar la lectura entre los pequeños lectores. Fue inaugurada el 2 de oct. de 1940, en el mismo edificio de la Biblioteca Central. Abrióse al público con dos salas: una juvenil y otra infantil, pero pronto la aglomeración de lectores infantiles, obligó a habilitar una tercera sala —que sirve tb para exposiciones—, y en pleno verano, en que los pequeños lectores aprovechan las vacaciones escolares para ir a la Biblioteca, hay que utilizar también un patio interior, en el que se instalan provisionalmente mesas y sillas.

La Biblioteca Popular Juvenil de Santa Cruz es, ante todo, una biblioteca infantil propiamente dicha, ya que la sección juvenil, tanto por la cantidad de libros como por la de los lectores tiene poca importancia, si se compara con el movimiento estadístico de la sección infantil.

La sala juvenil, que posee sólo unos mil volúmenes, fue en un principio bastante frecuentada por estudiantes de bachillerato y de comercio; pero al inaugurarse la Biblioteca Pública de San Pablo, muchos de ellos pasaron a esa, más especializada en libros de texto, quedando el público de la Juvenil reducido a algunos jóvenes obreros empleados y dependientes de comercio, que sólo pueden acudir a la biblioteca al anochecer cuando salen de su trabajo. El promedio diario de lectores ha pasado de 20 en 1940 a 15 en 1941. Los libros más consultados son los de obras generales —enciclopedias, revistas encuadernadas—, las novelas, la historia y las biografías; tb se consultan bastante por los obreros especializados, la sección de ciencias aplicadas.

Las secciones infantiles, al inaugurarse y durante los primeros meses de su vida, se vieron asaltadas materialmente por todos los chiquillos del barrio, ávidos de conocer el nuevo mundo que se les ofrecía y del que en su mayoría, no tenían la menor idea. La aglomeración llegó a tal extremo, que fue necesario cerrar la puerta para dejar entrar solamente cuando salía un lector. Se llegó a formar una cola infantil ante la biblioteca, y era realmente impresionante ver aquellos niños, casi todos de modesta posición, esperar con mucha impaciencia su turno, entrar

---

<sup>643</sup> MONTIEL, I. “Bibliotecas infantiles, su posible funcionamiento en las bibliotecas alcarreñas”, 1948

<sup>644</sup> DÍAZ-PLAJA, Aurora. “La Biblioteca Central. IV- Dirección de Bibliotecas Populares: La Biblioteca Juvenil de Santa Cruz”, *Solidaridad Nacional*, 4 oct. 1942

con cierta emoción, lavarse las manos y tomar un libro del estante para sentarse luego y penetrar en el país mágico de la fantasía. Se llegaron a alcanzar 114 lectores diarios.

Con el paso del tiempo se regularizó la asistencia, y sólo los jueves, sábados y durante las vacaciones escolares se tenía que racionalizar la entrada.

Estadísticas: 1940: 6.895 lectores (4.547 niños, 2348 niñas); 8.000 libros leídos. 1941: 11.400 lectores (7.284 niños, 4.118 niñas); 14.815 libros leídos.

Los libros más leídos son los de imaginación: cuentos, novelas de aventuras (65% de los libros leídos); siguen las vidas de los grandes hombres, la literatura de nuestros clásicos adaptada a los niños, y el folclore con sus romances, juegos y canciones.

Pero las cifras por sí solas nunca pueden expresar el contenido espiritual de la vida de una biblioteca infantil. Hay que entrar en la sala cuando está llena de niños para darse una cuenta de la verdadera importancia social que tiene para Barcelona el que exista en un barrio obrero del centro de la ciudad un refugio moral para los niños que antes deambulaban por calles y plazas.

La Biblioteca infantil ofrece a sus pequeños no sólo la confortabilidad material de sillas y mesas adecuadas a su edad, de salas caldeadas en invierno y refrigeradas en verano, de jarros de flores en sus muebles de libros magníficos a su disposición, sino que les da también la sensación moral de hallarse en un hogar fabricado exclusivamente para ellos. Los lectores infantiles respetan su biblioteca, porque allí se sienten respetados en sus ideas, sentimientos, reacciones. Comentan los libros con sus compañeros y sus opiniones son escuchadas con atención por las bibliotecarias. Estas dedican todas sus actividades a organizar festivales infantiles en los que los lectores se sienten a la vez actores y espectadores.

(...) Esta es la obra realizada por la Biblioteca Infantil: haber infiltrado en sus lectores no sólo el amor a los libros y el respeto a la biblioteca, sino el placer de vivir en un mundo exclusivamente para ellos.

Pocas referencias hay de bibliotecas públicas o populares que dispusieran, además de la infantil, de una sección diferenciada para público juvenil. Las pocas experiencias que se llevaron a cabo también se circunscriben a Cataluña.

Así justificaba la Biblioteca de Granollers<sup>645</sup> su necesidad:

Esta sección es muy conveniente en una Biblioteca Popular, ya que así el lector joven no se encuentra desplazado, porque no sólo es entre libros infantiles los que tiene que escoger, sino otros más interesantes y de su agrado. Los libros de esta Sección pueden salir a préstamo.

Mientras que la Biblioteca de Llobregat<sup>646</sup> no creó su sección juvenil hasta transcurridos cinco años de actividad en que comenzó a contar con un grupo de lectores juveniles de ambos sexos:

“(…) que han aprendido a leer, saben lo que quieren y sienten gran interés por todo lo que a la Biblioteca se refiere. Estos eran los lectores infantiles de hace cinco años que han crecido, lo que nos demuestra que la Sección Infantil es la base de la Juvenil, y que ésta hemos de conquistarla y formarla nosotras mismas”

---

<sup>645</sup> LLORET SERRA, J. ¿Qué leen los lectores de Granollerenses?, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, julio-sept. 1945, pp. 126-127

<sup>646</sup> “Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares”, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, págs. 2-19

La colección de esta Sección debía comprender: libros de formación moral, religiosa, cívica: libros de vulgarización (manuales de tecnología, oficios, especialización, artes manuales); libros básicos (de gramática, idiomas, ciencias, deportes y Bellas Artes. Y sobre todo, un fondo abundante, competente y seleccionadísimo de Literatura e Historia, nacional y extranjera; sin olvidar la Filosofía de la Historia y un buen número de interesantes y aleccionadoras biografías); Libros de actualidad (viajes, política, técnicos,...). Y para conseguir la atracción de lectores se consideraban muy útiles tanto las novelas de aventuras como poder ofrecer *Lotes de estudio* integrados por libros fundamentales para el estudio del Bachillerato, Comercio, Escuela del Trabajo y principales oficios para facilitar los estudios a cualquier lector.

En Barcelona se creó una biblioteca exclusivamente adaptada para estudiantes de Enseñanza Media, la Biblioteca Pública San Pablo de Barcelona<sup>647</sup>, su actividad arranca en 1941, viéndose inmediatamente concurrida por el público, que aceptó con entusiasmo esta modalidad de Biblioteca:

Su organización técnica difiere en principio de las demás Bibliotecas Populares y Públicas. No se exige tarjeta de presentación para tener derecho de ingreso, únicamente la filiación personal de cada lector indicando sus actividades intelectuales o profesionales, La biblioteca concede a los lectores las máximas facilidades para que puedan desarrollar en un ambiente adecuado, del que suelen carecer en sus hogares, sus trabajos permitiéndoseles introducir en la sala sus propios materiales y libros de estudio, y a la vez solicitar los que tiene la Biblioteca. Por ello no tienen libre acceso a los libros y tienen que solicitarlos por medio del catálogo. Por ello se ha dado a éste gran flexibilidad y desdoblamiento. No existe el préstamo a domicilio, por tratarse de una Biblioteca compuesta en su mayor parte de obras de consulta. Las obras demandadas que no posee, las pide a la Biblioteca Central y cuando se trata de obras cuya materia puede interesar se solicita su adquisición mediante desiderata.

Su misión específica: cultivar y orientar las jóvenes inteligencias para ello ha de ejercer una labor de atracción entre los estudiantes, tratando de hacerles lo más agradable posible su permanencias. Inculcarles un sentido de disciplina y orden; incitarles en el manejo de los catálogos y consultas de enciclopedias y orientarles en la elección de los libros de consulta y demás materias.

Tras ocho años de trayectoria la Biblioteca jugaba un importante papel de enlace entre el Colegio, la Academia, al Instituto y el estudiante. Única en su género, de acuerdo con las necesidades de su público: estudiantes de Bachillerato, Comercio, Escuelas Técnicas y primer año de carrera, el fondo de la Biblioteca se vio en la necesidad de evolucionar progresivamente aumentando la cantidad y calidad de sus libros científicos, y aunque algo se había hecho, según las palabras de su responsable, la Biblioteca distaba mucho de ser lo que sus lectores demandan, pero intentaba informarles de todo y sobre todo dentro de sus posibilidades.

Debido al escaso número de Bibliotecas Públicas que poseía Barcelona ciudad, los lectores adultos no estudiosos que frecuentaban la Biblioteca Central acudían a esta Biblioteca Juvenil más que por sus libros, por la mayor libertad de acceso a ellos. Por ello la colección de novelas

---

<sup>647</sup> BORRELL. M. "Un nuevo aspecto técnico en el funcionamiento de una Biblioteca Popular", *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, julio-sept. 1945.

COT, N. "Ocho años en la Biblioteca Popular Juvenil de la Santa Cruz", En: "Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares", *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, pp. 2-19

se tuvo que dividir en dos secciones: para adultos y para jóvenes, y los menores de 14 años no eran admitidos en la Juvenil de Novelas. Sólo se les ofrecía obras de estudio. La Juvenil era para los de 14 a 17 años, aunque con excepciones. Esta división provocaba la atracción por el fruto prohibido, por ello se procuró que la Sección Juvenil estuviera provista de las novelas que más atraían a los muchachos: de aventuras, policiacas, humorísticas, blanca, rosa, y dentro de la histórica, títulos apropiados para su edad (*¿Quo vadis?*; *La Tabla redonda*; *Fabiola*, *Ben Hur*, las obras de Walter Scott, *Ivanhoe*, *Quintin Durward*, *Rob Roy*), pues la experiencia les había demostrado que había pocos lectores de estas edades que resistieran las novelas de Galdós, Pardo Bazán o Palacio Valdés.

¿Cómo eran sus lectores y qué demandaban?:

Nuestros lectores juveniles acuden en busca de información para sus trabajos y estudios, y de distracción en sus ratos de ocio. Por eso la Biblioteca está dividida en dos grupos: Obras de estudio y Obras recreativas. Los lectores de las materias de estudio los podemos dividir en dos grupos: estudiantes de 1º, 2º y 3º de Bachillerato o de cualquier Escuela Técnica Preparatoria y estudiantes de los últimos cursos. Estos últimos ellos mismos se resuelven sus dificultades. Sus consultas por lo general se remiten a ¿hay algo más sobre este tema? La dificultad radica en los estudiantes del primer grupo que en su mayoría no saben hacer nada sin consultar a la Bibliotecaria. Por lo general hay que buscarles la palabra que necesitan en la Enciclopedia. Además del libro que necesitan para su trabajo, el apartado que les conviene. Si consultan los Catálogos, iniciarles en el manejo ya que sus ideas sobre ellos son muy vagas. Estos estudiantes utilizan mucho la Enciclopedia Espasa, pero para ellos presenta un inconveniente: la excesiva extensión de sus artículos. Por ello necesitarían libros bien documentados pero menos extensos. Son indispensables también las biografías como las *Breves Biografías Íntimas* que publica la Editorial Molino.

Al igual que en la Sección Infantil la orientación al lector juvenil era una preocupación difícil de resolver. Para Nuria Cot, Bibliotecaria de la Popular Juvenil, era muy espinoso hacer una selección de libros convenientes para la juventud, porque al hacerlo se tropezaba con escollos de carácter moral, y además los libros venían seleccionados por la Dirección de Bibliotecas Populares. Otro problema delicado era la manera de influir en los lectores sobre la elección de novelas. Nunca había que decir esto no es para ti, era preferible engañarle con mañas<sup>648</sup>.

Para la bibliotecaria de Cardedeu a la hora de plantearse de qué manera debía orientarse al lector juvenil abogaba más que orientar por proporcionar la lectura apropiada para la edad mental de cada lector, y esa orientación no debía rebasar los límites del prudente consejo bibliográfico, de la guía. No había que imponer la lectura de libros que deben leerse, sin tener en cuenta los gustos, las inclinaciones, la psicología, la formación y la educación del público juvenil. En este sentido la misión de la Bibliotecaria era conocer al público a través de las escuelas a las que asistían, a su medio ambiente, o su religiosidad.

#### 7.4.5. Actividades

La realización u organización de actividades en el marco de la Biblioteca pública tiene su razón de ser porque son centros sociales y culturales. Las actividades se programaban con la intención de atraer a los lectores habituales y más especialmente a los esporádicos, siendo una manera de mostrar al público las ventajas que podía ofrecerle la Biblioteca.

---

<sup>648</sup> COT, Nuria. "Ocho años en la Biblioteca Popular Juvenil de la Santa Cruz", en: "Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares", *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, págs. 2-19

En las estadísticas de las Bibliotecas Municipales del año 1950 y 1952<sup>649</sup>, se indicaba las bibliotecas que organizaban actos culturales bajo diferentes epígrafes; exposición de pintura. conferencia , recital de poesía, Fiesta del Libro, concurso entre lectores, Hora del cuento, Reunión literaria de Amigos del Libro (Campo de Criptana); Exposición libro agrícola; concurso musical de los Mayos; concierto musical; concurso literario; curso; lecturas públicas; exposición escolar. En Torrelavega (clases de inglés; papirología, exposición pintura); Premios de lectores; concurso de belenes; excursiones artísticas; emisiones de radio (Carcagente).

Concretamente en el año 1950, de las 220 bibliotecas recogidas en la estadística, sólo en 22 se reseñaba que realizaban actos culturales, lo que no quiere decir que no los hiciesen el resto pues las bibliotecas de Oviedo no registran ninguna actividad cultural en cambio en sus memorias sí quedaban reflejadas.

Los años inmediatos al final de la guerra trajo una mayor participación de las bibliotecas en la Fiesta del Libro, y en cierto modo una mayor popularización de la misma, al no circunscribirse únicamente a ambientes académicos superiores. De hecho en torno a la Fiesta del Libro, las Bibliotecas Públicas programarían de manera constante numerosas actividades, que podían ir desde los concursos literarios, conferencias o el reparto de libros entre los lectores más destacados.

Por ejemplo en la Biblioteca de Cabra desde su creación se celebró ininterrumpidamente la Fiesta del Libro, con un concurso literario entre lectores, con temas apropiados a la edad y preparación de los concursantes, ofreciendo premios consistentes en libros elegidos por los premiados. También se repartía libros entre los más destacados lectores y que mejor se comportaban con el libro. Los temas de los premios literarios iban desde temas locales, Don Quijote a temas del más puro interés bibliotecario como “Impresiones del lector dentro de la Biblioteca”, “¿Qué trato debo dar al libro recibido a préstamo y qué goces espirituales me proporciona?”. Otras actividades eran: Impresiones de lectura, concurso de dibujos, conferencias, algunas de ellas impartidas por el mismo bibliotecario, Juan Soca, sobre temas muy de bibliotecario: “El obrero en la Biblioteca”, “La mujer en la Biblioteca” y “Estampas de la Biblioteca Pública Municipal”.

Uno de los actos organizados con motivo de la Fiesta del Libro en estos primeros años de la dictadura, y a iniciativa de Falange<sup>650</sup>, fueron los Concursos-Exposición de Bibliotecas Infantiles, en las que se exponían las bibliotecas personales que los menores habían conseguido reunir, cuyos objetivos eran, según las bases del concurso que organizó la Biblioteca de Manresa en 1941<sup>651</sup>, despertar el interés y amor por los libros, fomentar la selección de lecturas y familiarizarse con los libros, no sólo por sus títulos, sino también por el nombre de su autor; sus cualidades y defectos, además de que conocieran cómo se ordenan e inventarían los libros en una biblioteca así como los diferentes catálogos.

Percatados de que hay que comenzar por el niño, nuestra Asociación (ANABA) ha organizado esta Exposición de bibliotecas infantiles, en cuyo fondo late el propósito de la Comisión de depurar estas lecturas presentando una biblioteca modelo; acomodarlas a la psicología infantil según el sexo, la edad y el carácter; descubrir el vocabulario infantil para que el niño entienda

---

<sup>649</sup> AGA-Cultura 75/20069 y 75/20145

<sup>650</sup> El Departamento de Bibliotecas de la Regiduría Central de Cultura de la SF incluyó esta actividad como obligatoria dentro de las Normas que debían seguir las responsables de Bibliotecas.

<sup>651</sup> “La Fiesta del Libro en la Biblioteca Popular de Manresa en 1941”

plenamente las obras que lee y enriquezca su dominio del idioma a base de conocer el significado de las voces que por primera vez encuentre y fomentar el amor a Dios, a la biblioteca al libro y a la Patria<sup>652</sup>.

De todo el proceso que suponía organizar conferencias nos ha quedado documentado en la Biblioteca de Sitges. Entre 1939 y 1948 en esta biblioteca se programaron 39 conferencias repartidas desigualmente, en 1944 no se efectuó ninguna. Los títulos: “El arte de leer”, “La educación de la voluntad”, “La educación cívica, el buen hablar y el sentido de la ponderación”, “El arte y los artistas en Sitges”, “La fiesta mayor de Sitges”, “La mística de. Vida de San Juan de la Cruz”. Los ponentes: un maestro, un miembro de Acción Católica, un artista, un doctor, un catedrático de religión,... Las conferencias al ser impartidas por oradores locales y versar sobre temas locales atrajeron gran cantidad de público que luego visitaban la Biblioteca.

Las gestiones preparatorias para celebrar una conferencia implicaban obtener los correspondientes permisos de la Dirección de Bibliotecas por una parte, y por otra había que solicitar de la Jefatura Local de Prensa y Propaganda la autorización imprescindible para realizar el acto. Las conferencias eran presididas por las principales autoridades locales, y con frecuencia la prensa local le dedicaba un espacio. En una ocasión, concretamente en marzo de 1947, se le denegó la autorización de una serie de conferencias en lengua vernácula<sup>653</sup>

Especial habilidad para hacer de la Biblioteca un centro cultural activo la tuvo la bibliotecaria de Játiva, Lidia Sarthou, licenciada en Filosofía y Letras, que dirigió con gran eficacia, agilidad y vocación. Desarrolló una gran labor divulgadora de la cultura pública, mediante ciclos de conferencias, charlas por radio, guías de lectura y exposiciones, concursos, hora del cuento<sup>654</sup>.

Convencidos de que una de las claves del éxito de la misión bibliotecaria popular, es la reiteración y constancia, por ello hemos tendido a que en determinados días y horas el público encontrase una charla, una lectura comentada; exposición bibliográfica,.. El día elegido ha sido desde 1948 el viernes para los adultos y los lunes para los niños. Tb funcionó los domingos por la mañana una tertulia literaria estudiantil acompañada de exposiciones bibliográficas dominicales a cargo de la bibliotecaria y profesorado de la ciudad. La Hora del Cuento siempre exclusivamente a cargo de la bibliotecaria. Se realizó una encuesta entre los asistentes de todas estas actividades para conocer los que más gratamente recuerdan, resultando elegidos: por los mayores los cursillos sobre historia de Játiva y las sinopsis de obras cuyo argumento guarda una línea de transmisión literaria. Por los niños: los cuentos de Andersen, Heidi, los héroes de Rudyard Kipling y la historia de los dos Infantes de la Cerda prisioneros en el castillo de Játiva. Por los muchachos de la tertulia estudiantil: las lecturas comentadas de las Notas de Ortega y Gasset y Los Pueblos de Azorín.

De un modo también habitual se aprovecha en esta biblioteca toda fiesta local o general, visita turística para establecer conexiones entre ellas y el libro que fomenten en el público la devoción por el mismo y la divulgación. Por ejemplo la visita de los Taquígrafos valencianos llevó a realizar una Exposición sobre la Taquígrafía. Además como el inventor de la taquígrafía española nació en Játiva, la Biblioteca se une con la Unión taquígráfica para formar un Instituto Bibliográfico de Taquígrafía. Fiesta del Libro se organizó en colaboración con el Instituto. Exposición bibliográfica cervantina y los actos cervantinos para obreros, niños,..Concurso literario infantil con premios de libros. Otros actos. La Biblioteca organiza excursiones a lugares históricos y pintorescos de la ciudad. Para fomentar el conocimiento y el orgullo ciudadano por

---

<sup>652</sup> Palabras del Sr. Lasso de la Vega en el acto inaugural de Bibliotecas Infantiles / Boletín ANABA, 1951

<sup>653</sup> JOU i ANDREU, David, La Biblioteca Popular a Sitges, 1986

<sup>654</sup> Memoria Biblioteca Játiva. AGA Educación 31/6067

su riqueza arqueológica, tenemos una vitrina con exposición permanente de publicaciones sobre Játiva. Ciudad visitada por extranjeros y turistas españoles que se han habituado a pasar por la biblioteca a consultar las obras de esta sección. Se ha aumentado este fondo bibliográfico con títulos que sugieren a los turistas rutas turísticas que desde Játiva pueden emprender y otros conocimientos sobre la región valenciana. Emisiones radiofónicas los martes como una sección más de la Biblioteca. Cursos de bibliología. Hemos organizado 3 en 1948 destinados a cubrir los siguientes problemas: el de formar auxiliares entre los estudiantes para este Centro; el de difundir entre los lectores el hábito de la utilización de ficheros y catálogos y cubrir el papel de centro consultivo que otras bibliotecas de pueblos valencianos inmediatos transfieren a la de Játiva.

## 8. LECTURAS y LECTORES: un horizonte de investigación

La información estadística sobre lectores y lecturas está llena de obstáculos por la disparidad de fuentes y falta de criterio único, siendo muy poco fiables. Por ejemplo, dentro del apartado préstamos muchas veces no se discernía entre préstamos en sala y a domicilio. La diferencia por sexo y edad como se implantó por el decreto de la JIAL republicana no se contempla en todas las bibliotecas, aunque lo que sí observan todas ellas es la utilización de la clasificación decimal para conocer las materias más prestadas. Otra dificultad para el análisis está en que dentro del epígrafe “Obras generales”, muchas bibliotecas computaban las consultas a enciclopedias y diccionarios, el Boletín Oficial del Estado y de la provincia, más las peticiones de periódicos y revistas atrasados que en algunos catálogos figuraban en esta sección, y en algunas hasta los libros infantiles.

De las estadísticas existentes en el AGA sobre lecturas y lectores hay dos documentos con datos, únicamente, de bibliotecas públicas municipales correspondientes a los años 1950 y 1952, éste último manuscrito y poco legible.

No será hasta 1957, cuando a nivel nacional el SNL comenzará a recoger con periodicidad bianual datos de lectores por edad y sexo y materias. Por su parte el INE desde su creación en 1945 irá recopilando datos estadísticos según los formularios de 1933, pero hay que aclarar que sus recuentos<sup>655</sup> nos ofrecen datos de las bibliotecas ubicadas únicamente en las capitales de provincias, como cumplimentación de un parte trimestral, y solo el 25% de las bibliotecas correspondían a públicas estatales, provinciales y municipales, el 40% a Centros de Enseñanza y el resto a particulares. Y hay que tener en cuenta que la fidelidad y grado de veracidad de las cifras obtenidas eran reflejo del interés con que se respondía a los cuestionarios.

Por tanto, con anterioridad a 1960 los datos son escasamente fiables. Más certeras son los datos estadísticos de las memorias de algunas bibliotecas y de los Centros Coordinadores, así como de los registrados en el *Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales de Cataluña*. Por último de gran valor cualitativo son las apreciaciones de los bibliotecarios sobre sus lectores y lo que leían incluidas en las memorias y en los artículos profesionales recogidos mayoritariamente en la revista *Biblioteconomía* de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona.

El perfil de los lectores que acudían a las bibliotecas era variado estando en función de la localidad donde estuviese ubicada la Biblioteca. Por ejemplo en la Biblioteca de Cabra (Memoria de 1936) estás eran las estadísticas de lectores por profesiones. De un total de 330 varones: 56 estudiantes bachillerato; 53 jornaleros; 34 albañiles; 15 hortelanos. Mujeres 145: 58 amas de casa; 49 modistas, 15 estudiantes; 7 sirvientas y 7 empleadas. En 1938, excepcionalmente por motivos de la guerra en esta misma Biblioteca la primacía entre los lectores correspondió a las hembras. En 1948, los estudiantes de Bachillerato y de Universidad seguían siendo los más asiduos.

En las Bibliotecas asturianas está recogido que el público femenino se mostraba reticente al consumo de libros porque las bibliotecas no ofrecían las lecturas románticas deseadas y

---

<sup>655</sup> VALLE FERNÁNDEZ, R. del. “La estadística al servicio de las bibliotecas españolas”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, 1995, nº 37, pp. 12-17.



respecto a la diferenciación de la lectura por sexos se detectaba cierto retraimiento de las mujeres por razones de intimidad<sup>656</sup>.

A la Biblioteca Pública de San Sebastián acudían estudiantes, industriales y comerciantes, diversas profesiones liberales y obreros.

En Granollers, se detecta la presencia de un grupo numeroso de muchachos que asistían a las clases nocturnas de la Escuela de Trabajo, *ávidos consultores de los libros de Ciencias aplicadas o de especialización profesional*

Con motivo de la Fiesta del Libro aparte de premiar con pequeños premios en metálico a la Biblioteca, los bibliotecarios debían elegir a los mejores lectores.

Los criterios seguidos por el Bibliotecario para solicitar estos premios en Barco de Ávila fueron la asiduidad con que frecuentaban el centro, la buena conducta observada tanto en él como en el uso de los libros prestados, la buena calidad de las obras solicitadas y el provecho de ellos obtenido. El Bibliotecario proponía a los siguientes lectores:

Antonio Martínez Izquierdo de 18 con defecto físico en la mano derecha, se le prestaron en 1948 67 obras, la mayor parte de ciencias, lenguas, Hª y Gª. Hizo uso de los métodos de mecanografía y taquigrafía existentes en la Biblioteca. Hoy es escribiente de este Ayuntamiento gracias a los acontecimientos adquiridos y pese al defecto físico señalado.

Miguel Gómez Lucas de 17 años. Se le han prestado 58 obras, de ellas las mayoría de literatura española, novelas históricas y biografías. Se distingue por su corrección en el trato con el Sr. Bibliotecario, el esmero con que cuida los libros y la puntualidad en la devolución.

Antonio González Sánchez, modesto trabajador, lector de 69 obras de Gª, Hª, Viajes. Muy asiduo, correcto, puntual en la devolución.

En la Sección Infantil: José Chapinal Díaz Baz de 12 años ha leído 72 obras, todas ellas de de Gª, Hª, Biografías de conquistadores españoles. Pese a sus años no gusta de lecturas de cuentos, y siempre busca provecho al pedir un libro, que cuida muy bien. Gloria Díaz Ruiz y Carmen Sánchez Martín, de 12 años, han leído respectivamente 50 y 45 obras. Cuentos morales, pequeñas biografías de heroínas y vidas de santos fueron sus obras preferidas. Buen comportamiento en la Biblioteca y puntualidad en la devolución.

A la hora de elegir dos lectores para el premio, la bibliotecaria de Játiva comentaba que le resultó difícil elegir entre tantos lectores asiduos y participativos, proponiendo a un estudiante de séptimo, Justino Pérez, muchacho un poco mayor y de modestas posición social asiduo y que ha sido auxiliar de la biblioteca en sus periodos de más abrumador trabajo. El otro, Francisco Soro, carpintero, caso ejemplar del obrero manual que no deja de leer una obra cada 15 días y en cuyo registro de lecturas figuran las mejores obras literarias de la Biblioteca aunque de autores contemporáneos exclusivamente. Además ha construido varios muebles para la Biblioteca dejándolos a un precio económico y resignándose a cobrar cuando las circunstancias lo han permitido.

En Campo de Criptana los dos lectores que más destacaron durante 1948<sup>657</sup> por su actividad dentro de la Biblioteca fueron un maestro nacional que retiró en préstamo 43 obras, además de realizar numerosos consultas y lecturas en la misma Biblioteca. Un empleado y estudiante,

---

<sup>656</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada, En: *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009

<sup>657</sup> Memoria Biblioteca Campo de Criptana 1948. AGA 31/6067

que a diario tras salir de la oficina acudía a la Biblioteca a leer y estudiar aprobando varias asignaturas de Magisterio

En Cabra (Memoria de 1948), se cita al lector nº 506, que correspondía a un obrero, que llevaba retiradas 512 obras desde noviembre, de 1934.

Cómo se comportaban los lectores, y cómo evoluciona su percepción de la Biblioteca desde que se inauguraba en la localidad hasta integrarse en la vida cotidiana de la población, también se puede rastrear en las memorias a través de las impresiones de los bibliotecarios. Veamos algunos ejemplos tanto de lectores adultos como infantiles.

La bibliotecaria de Játiva tras dos años de experiencia desde que se inaugurara la biblioteca clasificó sus lectores en varias categorías: los que no faltaban ni una semana a renovar su obra de préstamo y a hojear en el salón las revistas semanales; en segundo lugar el lector de vacaciones, signo de simpática constancia que acudía cuando tenía vacaciones; luego estaba el lector que sacaba su carnet interesado por una sola obra, aunque era el menos frecuente, porque siendo la población pequeña siempre cabía el modo de invitarle a que volviese y engancharle con una nueva obra elegida un poco perspicazmente; el lector mero visitante que creía que la posesión del carnet le prestigiaba. Para recuperar lectores poco asiduos no había más que incluir revistas encuadernadas del año anterior en la sección circulante.

Este otro testimonio de la Biblioteca de Cabra que habiendo entrado en una fase de vida próspera ha asegurado sus lectores, eliminando a los curiosos de los que se nutría al principio y se felicitaba de que sus lectores se comportaban como hombres cultos, afanosos de mejorar su condición, ávidos de saber, respetuosos con el libro y con cuantas iniciativas y programas se les ofrecía.

Como ejemplos de comportamiento de los lectores infantiles, la Bibliotecaria de Pineda recoge así sus impresiones:

“Nosotros tenemos los que podríamos llamar un grupo de lectores infantiles selectos que suman unos 15 o 20. Estos niños leen y preguntan las palabras que desconocen, donde se encuentran los lugares geográficos descritos. Ocasión magnífica para enseñarles el manejo de diccionarios, atlas y otros libros de consulta. La otra inmensa masa infantil actúa como un rebaño. Acuden en avalanchas cuando están próximas la Fiesta del Libro, momento en que se premia a los lectores más asiduos del año. Estos niños en su mayor parte no leen, sólo miran libros y es una gran victoria hacer ingresar algunos lectores de este grupo al de los lectores verdaderos. Otra de las cosas que hacen aumentar el número de asiduos son las revistas infantiles; normalmente ponemos a su alcance los dos últimos números, pero en tiempos de enorme afluencia es necesario dejarles cuatro y hasta cinco, sobre todo de su revista preferida *Dumbo*<sup>658</sup>

O este otro de los lectores de la Biblioteca Infantil de la Santa Cruz<sup>659</sup>:

Nuestros lectores, que pertenecen, la mayoría, a familias obreras y de condición humilde, procedentes de todas las regiones de España, con no muy buenas condiciones de vida y con una asistencia irregular a la Escuela, les resulta difícil acostumbrarse al ambiente de la Biblioteca. Sin embargo, hay cursos durante los cuales trabajamos alegremente. Es asombrosa la facilidad que tienen para aprender lo que les interesa, y como uno de los fines que se proponen las Bibliotecas Infantiles es ayudar al pequeño lector a desarrollar sus aficiones naturales, es

---

<sup>658</sup> “Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares”, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, pp. 2-19

<sup>659</sup> “Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares”, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, pp. 2-19

precisamente en estas ocasiones cuando la Sala Infantil cumple plenamente con su misión primordial.

Lectores de la Biblioteca de la Sección Juvenil de Esplugas de Llobregat eran los mismos lectores de la Sección Infantil, que habían crecido, e incluso lectores traviesos en la infancia con los años se habían transformado:

“(…) en cambio hoy pertenecen a la Acción Católica, forman parte de una agrupación deportiva, o bien se desenvuelven perfectamente en su trabajo, y, como resultado y satisfacción para la Biblioteca, acuden a la misma en busca de libros de formación para desarrollar un tema de la Parroquia; solicitan un libro de su deporte favorito, o leen manuales de aplicación para su trabajo.”

La oferta de libros que los lectores podían leer en las bibliotecas públicas en esta primera década del franquismo estuvo condicionada por varios factores. Primero una caída de la producción editorial provocada por la carencia de materias primas (papel) así como por el estrangulamiento que supuso la economía autárquica; además muchos editores, técnicos y autores tuvieron que exiliarse. En segundo lugar, las bibliotecas fueron depuradas con lo cual muchas de ellas vieron muy mermado el ya de por sí escaso número de volúmenes que poseían. Y en tercer lugar, la gran mayoría de ellas recibieron lotes de libros preseleccionados por la Junta. Pero también es cierto que muchas bibliotecas incrementaron sus fondos con donativos privados e institucionales. Recordar que tanto la literatura de quiosco y tebeos como las novedades literarias estaban ausentes, aunque por motivos diferentes<sup>660</sup>.

Ni en las defectuosas estadísticas de la Junta, ni en las de los Centros Coordinadores se realizaban balances numéricos de las obras y de los autores más leídos, ya que sólo se elaboraban estadísticas de lecturas mensuales, pues era una tarea más de los responsables bibliotecarios el registro diario de lecturas, de las que sólo se pueden extraer los préstamos por meses y por secciones. La carencia de datos estadísticos globales, fiables y cíclicos impide realizar un análisis sociológico de las miles de lecturas practicadas, aunque se pueden deducir las preferencias lectoras utilizando referencias indirectas, como las esporádicas citas de autores más leídos, o recurriendo a las peticiones de libros por parte de los responsables bibliotecarios<sup>661</sup>.

Con algunas citas entresacadas de las memorias anuales se pueden tener una primera aproximación de los autores y materias más leídas.

En Cabra, en las memorias elaboradas entre 1937 y 1939, su bibliotecario Juan Soca, comenta que la inquietud de la guerra alejó de los libros de estudio a favor de los de aventuras, esparcimiento y emoción, solicitando una parte considerable de lectores novela histórica. Después de la Cruzada Nacional, interesa el tema de la Patria a través de sus comentaristas.

Durante 1948 en Barco de Ávila se aprecia que se lee más literatura española que extranjera, y son autores preferidos de ésta última: Dickens, y de la primera: Concha Espina, el Padre Coloma, Pereda, Valera, Pérez Galdós, Palacio Valdés. Predomina también la lectura de Historia y biografías. Honrando el centenario de Cervantes el Bibliotecario ha procurado aconsejar la lectura de sus obras inmortales. Al año siguiente en adultos predomina el gusto

---

<sup>660</sup> Ver supra Capítulo dedicado a los procesos técnicos: selección y adquisición

<sup>661</sup> MATO DÍAZ, A. “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada”, *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, pp. 90-110

por obras de literatura destacándose como autores más elegidos los mismos que en el año anterior. También gustaba la lectura de biografías.

La Biblioteca de Celanova (Orense) al poco de inaugurarse en sus primeros informes destaca el gran éxito de las revistas y la gran atracción que ejercen sobre los lectores. La realidad ha sobrepasado lo previsto ya que las horas destinadas a facilitar libros son de continuo movimiento por la gran cantidad de personas que afluye a las mismas<sup>662</sup>. Las obras más solicitadas, según su bibliotecario en 1948, son las de la Sección Infantil, traducciones de literatura inglesa y norteamericana y la española: Palacio Valdés, Fernández Flórez, Benavente, Pemán, Concha Espina, Pereda, Alarcón, así como los clásicos románticos: Cervantes, Quevedo, los místicos Zorrilla, Hartzenbusch,... Muchos lectores solicitaban obras de autores clásicos y modernos que no constaban en el lote enviado, con lo que se procurará atender la demanda por la Junta para el año próximo

También en la Biblioteca de San Adrián (Navarra)<sup>663</sup> las obras generales eran las más leídas, englobando las revistas y lectura infantil, seguidas por la literatura y las ciencias aplicadas. Respecto a la sección infantil se comenta que era insuficiente su colección para atender la demanda de los menores de ambos sexos cuyo número había crecido, por ello se llama la atención de la Junta para que aumente el fondo de la misma con nuevas adjudicaciones.

En la Biblioteca de Játiva lo más leído en 1949 fueron: los libros de cuentos infantiles (Salgari, Calleja); de Ortega *El sentido de la vida* y sus *Obras completas*; *La Sagrada Biblia* de ed. BAC; obras de pedagogía; gramática española y luego las francesa e inglesa; automovilismo, *Summa Artis*; novelística española (Coloma, Palacio Valdés, Galdós, Fernández Flórez), inglesa (Kipling, Mazo de la Roche, Bromfield) y biografías. Y en números absolutos por materias: literatura, obras generales e Historia y Geografía. El servicio de revistas uno de los mejor acogidos por los lectores y las revistas más solicitadas *Semana* y *Meridiano*.

En la Biblioteca Pública de San Sebastián: la Literatura era la sección que gozaba de más simpatía para el lector, aunque la tendencia era hacia las Obras generales, particularmente las revistas, luego le seguía la Historia con preferencia por las biografías y las ciencias puras y aplicadas. En último lugar la religión. Por idiomas: obras en español, francés, en latín y griego, en euskera, inglesas, alemanas e italianas.

La Biblioteca de Calella<sup>664</sup> receptora de uno de los lotes de actualidades comentaba así la aceptación entre sus lectores:

Las obras menos solicitadas fueron las técnicas o especializadas, las de temas marítimos y las novelas fueron menos requeridas que la anterior vez. Lo más demandado: guías e itinerarios de montaña; biografías, viajes. Títulos concretos: *El paisaje y los paisajistas españoles* (afición al arte de este pueblo); *La bomba atómica* de P. Puig; *El ocaso de los dioses nazis*, *La historia universal del cine* de Del Amo; *El carácter a través de la escritura*; *La guía de la costa Brava*; *Historia de Inglaterra* de Maurois y *Un mundo* de Wilkie.

---

<sup>662</sup> Noticiario nacional, *Bibliografía Hispánica*, 1949, p. 158

<sup>663</sup> Noticiario nacional, *Bibliografía Hispánica*, 1949, p. 164-166

<sup>664</sup> Ponencias presentadas a la XXIII Reunión de Bibliotecarias (diciembre de 1946), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, oct.-dic. 1946, p. 321

En la Biblioteca Pública de Soria (1947), las preferencias de los lectores que apreciaba su bibliotecario eran en proporción extraordinaria la literatura y dentro de ella la novela, sobre todo la novela inglesa más que la española. Comenta que algunos títulos de novelas son conocidísimas del público por haberse adaptado al cine, haciéndose más famosas en el celuloide que en forma impresa. Tienen tan demanda que algunos lectores han de esperar su turno. Le siguen las obras de ciencias puras y aplicadas, las ciencias sociales, Historia y Geografía; Bellas Artes, Obras generales, Filosofía, Lingüística y Religión.

En la Biblioteca de Granollers, el núcleo más importante de asistentes eran estudiantes para realizar consultas siendo muy solicitadas las secciones de Literatura y Ciencias Puras. Luego estaba el público infantil. Los libros de Ciencias aplicadas o de especialización profesional eran muy demandados por los estudiantes de la escuela nocturna. Para poder adquirir libros técnicos al servicio de los productores, dado que eran muy caros, la Biblioteca intentó obtener la colaboración de los organismos locales y de las fábricas y talleres. Ante la avalancha de préstamos que padecía la Biblioteca tuvo que restringir el préstamo a domicilio. Las preferencias de los lectores: Literatura; Obras generales; Biografías-Historia-Geografía; Ciencias puras; Filología; bellas artes; ciencias aplicadas; ciencias sociales; filosofía; religión.

En la Biblioteca de Alsasua, comentaba su bibliotecario que la lectura de obras de Ciencias aplicadas había ejercido notoria influencia en la instalación de gallineros, granjas apícolas; que los números de la CDU 4, 5 y 7 habían prestado un buen servicio a los estudiantes de Bachillerato, Magisterio y Comercio y que la literatura también había sido muy consultada.

Las lecturas en las Bibliotecas asturianas han sido estudiadas por Ángel Mato a través de la lectura de las memorias del Centro Coordinador de Oviedo y el análisis de los catálogos de las bibliotecas<sup>665</sup>. En la primera estadística del Centro de 1948 figuraba en primer lugar la sección de Literatura, fundamentalmente novela (58% títulos prestados y consultados), seguida de obras generales (13%), Historia y Geografía (11,2%) y Ciencias Aplicadas (5%).

Entre los escritores más leídos por los asturianos, Palacio Valdés estaba a la cabeza, seguido de narradores del realismo español como Pedro A. de Alarcón, Valera y Pereda, cuyas novelas seguían siendo leídas o releídas por los lectores/as asturianos. Un segundo grupo englobaba autores muy del gusto popular del primer tercio del XX: Galdós, Blasco Ibáñez (a pesar de que sus libros estaban poco representados y habían sido depurados) y Concha Espina, además de W. Fernández Flórez. Al final de la década aparecerán novedades como Cela y su *Familia de Pascual Duarte*, Carmen Laforet con *Nada*, Miguel Delibes con *La sombra del ciprés es alargada*.

Y los escritores extranjeros más solicitados fueron los grandes del realismo y del naturalismo europeos (Dickens, Balzac, Dostoievski, Tolstoi), junto a las novelas de aventuras de consumo juvenil (Zane Grey, Salgari, Verne, Kipling, Conrad, Curwood y Zweig) y los narradores más exitosos entre públicos muy variados como Bromfield (retrato de personajes femeninos frente a la adversidad), Somerset Maugham y sus obras de aventura y exotismo moderno; L. Wallace ( *Ben-Hur*), el maestro del género policíaco Conan Doyle (las aventuras de Sherlock Holmes) y su seguidor Oppenheim. Hugo Wast y su *Valle negro*, el húngaro Lajos Zilahy y Pierre Benoit.

---

<sup>665</sup> MATO DÍAZ, A. "El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada", *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009, pp. 90-110

Dentro de la novela romántica, la más demanda en los 40 fue la cinematográfica *Lo que el viento se llevó* de Margaret Mitchell. Otras escritoras británicas de éxito fueron Du Maurier autora de *Rebeca* y Elinor Glyn pionera en los bestsellers rosas. Entre el público infantil a parte de los ya citados, los cuentos del uruguayo Constancio Vigil, o las series de aventuras como *Tarzán* de Bourrougs y las colecciones de libros Juvenil cadete, Cuentos Calleja, con títulos variados de cuentos, narraciones cortas, libros de aventuras y biografías de personajes históricos, literarios y científicos, además de revistas especializadas en el público infantil: *Dumbo*, *Billiken* y *Marca*.

Aunque las Bibliotecas procuraban complacer a los lectores y adquirir las obras adecuadas a los gustos de ellos, siempre se buscaba encauzar a los lectores hacia la buena literatura sin caer en la chabacanería y el mal gusto, desterrando lo mediocre, labor que se hacía poco a poco, pero de modo continuado.

La falta de orientación de los lectores que atestiguaba la práctica diaria, llevaba a que los bibliotecarios o encargados de la Biblioteca instruyeran y orientaran en la selección de obras, dieran consejos sobre las lecturas, facilitaran obras de consulta que quizá el lector desconocía para el estudio de determinadas materia y además instruirle en el conocimiento y manejo de las fuentes de información<sup>666</sup>.

Aunque había bibliotecarios que daban por perdida esta tarea, como el de Barco de Ávila que afirmaba que ante la deficiente formación de sus lectores adultos que no encontraban más que obras serias, aun cuando de literatura se trataba, preferían buscar por otros medios los libros que no encontraron en la Biblioteca. Refiriéndose a las novelas de aventuras y policiacas.

Actitud muy diferente fue la de la Bibliotecaria de Játiva que ideó toda una serie de estrategias para que los lectores no sólo leyeran mediocres libros de literatura:

Al principio de 1948 el público utilizaba casi exclusivamente el grupo 8 y no en sus más selectos aspectos. La vitrina de "Libros que la Biblioteca aconseja", los periódicos murales con su exposición de libros abiertos por el párrafo más conveniente, las lecturas más comentadas, establecieron una especie de catálogo de pura incitación que pronto actualizaron mejores autores. Luego cuando se prestaron dos obras a domicilio indicábamos al lector que eligiese una y que nos dejase prestarle otra menos demandada y así fuimos divulgando entre obreros y estudiantes las magníficas obritas de Seix Barral Colección de Cuadernos de Estudio, Araluce. Tras esta primera llamada a su curiosidad los lectores han ido adentrándose por sí mismos en los grupos 9 y 6, luego 7 y 5 y ya hoy 3 y 4 que eran las materias que les resultaban más específicas, hoy son leídas con gusto. Nuestra Biblioteca abarca desde eruditos investigadores hasta simpáticos casos de artesanos y labradores que saben leer y no escribir<sup>667</sup>.

Esta misma bibliotecaria consideraba que una de las tareas que más la satisfacía era mejorar el gusto del lector pero sin violentar sus propias orientaciones. Mientras que para Consuelo Pastor, bibliotecaria de la Biblioteca de la Mujer de Barcelona, comentaba lo difícil que era orientar en sus lecturas a las personas que tienen ya el gusto formado, particularmente cuando se trata de obras fútiles y de poco valor. En ese caso era mejor darle los libros que prefieren o sino resignarse a que no vuelvan. Pero afortunadamente ésta no es más que una pequeña parte del público. También había lectores que prefieren obras instructivas o de algún valor literario, psicológico, moral. En cambio, las jovencitas poco instruidas, hijas de familias

---

<sup>666</sup> Ponencias presentadas a la XXIII Reunión de Bibliotecarias (diciembre de 1946), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, oct.-dic. 1946

<sup>667</sup> Memorias Biblioteca Játiva 1947-1948. AGA-Educación 31/6067

humildes y de escasa cultura, que no tenían ningún conocimiento de obras ni de autores, para estimularlas el gusto a la lectura y orientarlas se organizaron sesiones de lecturas comentadas y sesiones de lecturas dirigidas. Y para incentivar a lo que ya leían bien, la Biblioteca estableció un premio para la lectora que durante un año hiciera la mejor selección de obras<sup>668</sup>.

La Sección de obras generales fue la más utilizada porque permitía la consulta de la información oficial que por problemas de carencia de papel y de dificultades en la distribución, sólo allí estaban disponibles para todo el público solicitante. Algo similar pasaba con la prensa diaria y las revistas, de las que con frecuencia se consultaban números atrasados previa solicitud, a lo que se unían las demandas de acceder a las enciclopedias y diccionarios (de español y otros idiomas), un material del que se carecía en las viviendas, en las escuelas y, en ocasiones, hasta en los Institutos de Enseñanza Media.

En segundo lugar, no cabe duda que la literatura se llevaba el ranquin de lecturas y préstamos. A continuación las biografías y las obras de historia; después las ciencias aplicadas y las ciencias puras. Más no se puede generalizar porque no conocemos más que los casos de las bibliotecas pertenecientes a Centros Coordinadores, las Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y de las bibliotecas que presentaban sus memorias para obtener algún premio.

---

<sup>668</sup> Ponencias presentadas a la XXIII Reunión de Bibliotecarias (diciembre de 1946), *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, oct.-dic. 1946

## 9. CONCLUSIONES

La primera conclusión que se extrae al analizar la política del libro durante la primera década del franquismo es que estuvo conformada por varios componentes, pero que a la hora de su planificación y ejecución por parte de sus gestores se hizo de manera descoordinada y separada sin tener en cuenta una concepción global del libro que comprendiera tanto su faceta económica como la educativa y cultural. La política del libro se ejerció a través de múltiples organismos entrando a veces en conflicto de competencias, como ocurrió entre el INLE y el Sindicato del Papel.

Además la política del libro tuvo diferentes adscripciones ministeriales, y así mientras el Ministerio de Educación Nacional gestionó la política bibliotecaria y la política del libro escolar, implantando bajo su control un modelo cultural de fuerte raíz católica, en cambio la Delegación Nacional de Propaganda difundió una propaganda con acento falangista. Solamente entre 1945 y 1951, la política del libro se planificó y ejecutó a través de un único ministerio, el de Educación Nacional, a partir de esa fecha el INLE junto a la actividad censora y propagandística pasarían al Ministerio de Información y Turismo hasta el final de la dictadura.

Otras políticas del libro, complementarias a la ejercida por el Estado, y amparadas por éste, fueron practicadas por dos organizaciones que sustentaron el régimen: Falange y Acción Católica de España. Las dos utilizaron el libro y la lectura para adoctrinar, hacer apostolado o proselitismo a la vez que para formar dirigentes y mandos, y ambas utilizaron los mismos instrumentos: la censura, la actividad editorial y la organización de bibliotecas, desplegando su actividad por toda la geografía española utilizando sus entramados organizativos.

El libro como actividad económico-empresarial se vio perjudicada por la política autárquica e intervencionista en numerosos aspectos. La apuesta por el esparto y las plantas nacionales para fabricar papel sin tener en cuenta sus costes no resolvió la falta de papel ni su alto precio; el control sobre las divisas perjudicó seriamente las exportaciones de libros; la racionalización del suministro del papel mediante el sistema de cupos se mostró más perjudicial que eficaz; sus reformas tributarias gravaron los procesos productivos encareciendo los costes de producción de las empresas, y por último, el régimen no favoreció a las industrias de bienes de consumo como era la industria del libro.

Si se tomaron medidas de tipo económico para favorecer a la industria del libro, éstas no provinieron del Estado, sino que partieron del INLE, quién se hizo eco de los problemas de este sector a través de la Asamblea del Libro de 1944 y la posterior Ley de Protección del Libro de 1946, que recordemos fue una iniciativa de los procuradores.

Si las bibliotecas del franquismo pretendieron ser un medio de adoctrinamiento en consonancia con los regímenes totalitarios, al finalizar esta investigación tengo que matizar y decir que el adoctrinamiento se hizo a través de la escuela y los textos escolares, en las cárceles, a través de los órganos de propaganda del estado, y de organizaciones como la Falange, más que a través de las bibliotecas públicas.

Fueron la escuela y los libros de texto los medios fundamentales a través de los cuales los españoles recibieron los valores sociales y los principios políticos del nuevo régimen. A la escuela iban la mayoría, a las bibliotecas sólo acudían unos pocos.



El régimen franquista fue un régimen totalitario y como tal practicó una política del libro similar a la de la Alemania nazi<sup>669</sup> o la de la Italia fascista. La censura nazi, por ejemplo, al igual que la franquista englobó todas las fases de la creación, publicación, y propagación de información e ideas. Se censuró a los autores, se controló la industria de la publicación y se supervisó el mercado editorial.

Los dirigentes nazis entendieron que para sus propósitos el libro era relativamente inefectivo. Como medio cultural, el libro tenía el inconveniente de que su influencia era lenta e indirecta, y además, la naturaleza del acto de la lectura anima al pensamiento y la reflexión, actividades indeseables a los ojos de los nacionalsocialistas. Por tener un impacto más directo y por evocar una respuesta inmediata, la palabra hablada tenía mucho más peso. La radio y las películas fueron los medios de interés más que el libro. Pese a estas premisas, Goebbels reconoció oficialmente que el libro podía tener una extensa influencia a tener en cuenta.

Alemania transformó una institución cultural como la biblioteca pública en una institución política cuya principal razón de ser era influir en el lector para que fuese un alemán mejor según los estándares nacional socialistas. En este sentido si hay alguna similitud es con las bibliotecas de Falange, más que con las que creaba la Junta.

Diferencias de la política bibliotecaria franquista con la nacional socialista se pueden citar varias. Los alemanes ejercieron un mayor control sobre las bibliotecas y los bibliotecarios y se orientó y reforzó el servicio a los jóvenes adultos. También se acometió un ambicioso plan de creación de bibliotecas pero con el único objetivo de expandir la presencia del estado en las áreas rurales y ofrecer una alternativa a las bibliotecas católicas que eran las que ofrecían la mayoría de los servicios bibliotecarios en las zonas rurales. De las 9.494 bibliotecas que había en 1934 se pasó a 1.3236 en 1940, aunque también hay que decir que muchas de ellas no llegaban ni a los 200 volúmenes, y tras finalizar la guerra desaparecieron muchas de ellas.

Respecto a las colecciones, al igual que el franquismo se depuraron y eliminaron los libros no deseados, pero mientras en Alemania sí fueron sustituidos por otros que inculcaran y reforzaran los valores del nuevo régimen, incluso se crearon secciones separadas para las obras nacional socialistas para realzar su importancia y aumentar su préstamo, en España en cambio, ya vimos que en los lotes que seleccionaba la Junta la presencia de este tipo de libros pro régimen eran mínima.

En la Italia fascista la lectura pública<sup>670</sup> también se entendió como instrumento de aculturación y como agente de socialización de la ideología a todos los niveles. Teóricamente las bibliotecas públicas y escolares fueron sometidas al mensaje fascista, pero su ejecución fue bastante deficitaria degenerado en un tinglado propagandístico dispensador de ayudas selectivas y prebendas a editoriales, libros y opúsculos que celebraban al Imperio, al Duce, las conquistas sociales y económicas del fascismo. Sí compartió con el franquismo el concepto jerárquico de la cultura, distinguiendo entre alta cultura y cultura de las masas. Y al igual que Alemania, la institución bibliotecaria popular ocupó un segundo plano frente a otros medios como la radio o el cine.

---

<sup>669</sup> STIEG, Margaret F., *Public libraries in Nazi Germany*, Tuscaloosa ; London, University of Alabama Press, cop. 1992

<sup>670</sup> LAZZARI, G., *Libri e popolo. Politica della biblioteca pubblica in Italia dal 1861 ad oggi*. Liquori, Napoli, 1985. BETRI, M.L. *Leggere, obbedire, combattere: la biblioteche popolari durante il fascism*, Milano, 1991

Si hablamos de adoctrinamiento en relación a la lectura, sus mayores logros hay que ponerlos en relación con la influencia de la Iglesia en el control y orientación de las lecturas. Se sacraliza la Fiesta del Libro a partir de 1938, en la inauguración de las bibliotecas siempre estaban presentes las autoridades religiosas administrando la consiguiente bendición, y hasta la misma DGAB en 1950 entró en trámites con la Junta Técnica Nacional de AC para que ésta, previo pago, le hiciese los informes de orientación bibliográfica según sus criterios, no solo sobre las nuevas adquisiciones sino también sobre los fondos literarios que ya poseían las BPM<sup>671</sup>. Para seleccionar libros infantiles los bibliotecarios tendrán como referencia la guía elaborada por el Gabinete de Lectura Santa Teresa. Los mismos criterios morales religiosos católicos los incorpora la SF en la selección de obras para sus bibliotecas y las bibliotecas de prisiones debían ser seleccionadas conforme a las normas de la Iglesia según su reglamento de 1948. Entre los lotes de revistas que seleccionaba la JIAL, la revista *Ecclesia* estaba en el grupo de las obligatorias.

El nuevo régimen no tuvo dificultades para establecer una organización y un sistema bibliotecarios ya que el modelo organizativo estaba consolidado y no se vinculó con las opciones políticas de la España republicana.

Pero ¿qué hubo de continuidad y ruptura con la política bibliotecaria republicana? Hubo continuidades legislativas, organizativas, de personal y geográficas. Entre las primeras hay que citar la vigencia de tres disposiciones: el Decreto 19 de mayo de 1932 sobre la estructura y misión del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que modernizó sus funciones, el Decreto 13 junio 1932 sobre creación de bibliotecas municipales que se mantuvo vigente hasta 1952 y la Orden ministerial de 15 de marzo de 1934 estableciendo el servicio estadístico de las Bibliotecas públicas. De las tres, el decreto de junio de 1932 es el que más trascendencia tuvo, pues el hecho de que el ayuntamiento no tuviese obligación alguna de ofrecer a sus administrados un servicio de lectura pública y, sin embargo, hubiese de partir de él la iniciativa de solicitar del Estado su creación, hizo imposible cualquier tipo de planificación.

A nivel organizativo, se restableció la Junta de Adquisiciones con las mismas funciones de adjudicación de lotes fundacionales, aumentándose progresivamente el número de volúmenes; respecto al personal que se encargaba de las bibliotecas municipales, siguió sin profesionalizarse denominándoseles “Encargados” y no bibliotecarios, y en su mayoría siguieron siendo los maestros quienes atendían este servicio.

Por último, a nivel espacial se hereda la geografía bibliotecaria, es decir, se restauran o se crean más bibliotecas en las mismas provincias, manteniéndose los mismos grandes vacíos en el sur de Castilla la Mancha (Cuenca, Albacete, Ciudad Real), el norte de Andalucía (Jaén, Córdoba, Sevilla), Orense, Zamora o Salamanca, y donde se crearon más bibliotecas, muchas de ellas destruidas, la mayoría se vuelven a crear o restaurar, como ocurrió en las provincias de Asturias y Teruel.

Entre las rupturas, no se mantuvo ni las inspecciones de la Junta ni se elaboraron estadísticas de manera sistemática a nivel estatal hasta 1947, ambos elementos imprescindibles para conocer las necesidades, y después tomar decisiones y soluciones con el objeto de mejorar.

Las políticas no se hacen con palabras, sino con presupuestos. Mientras los responsables en materia de cultura hacían declaraciones a favor de realizar una política del libro ensalzando sus logros y sus virtudes espirituales, el Estado asignaba más recursos a los servicios de propaganda, a la censura o la adquisición de libros con destino al exterior para lavar su

---

<sup>671</sup> AGA-Cultura. 75/20073

imagen, que en crear bibliotecas con buenas instalaciones y colecciones actualizadas en los municipios.

¿Hubo una política bibliotecaria? La política bibliotecaria implica establecer una organización permanente que llevase a cabo el establecimiento racional y planificado de tales servicios. Si por política se entiende la intervención del Estado de acuerdo con unos valores y condiciones sociopolíticas, sí la hubo. Pero poco se podía planificar desde el Estado, pues era el Ayuntamiento el que decidía si quería biblioteca o no. Hay que tener en cuenta, además, que España entonces soportaba una dictadura y que las autoridades locales no eran elegidas ni revocables por la comunidad sino puestos e impuestos desde arriba. Con lo que el mayor o menor rendimiento de la Biblioteca Pública dependía no de la comunidad sino del capricho de una persona que respondía ante quien lo había puesto y le iba a pedir fidelidad.

En cambio, a nivel de los Centros Provinciales, éstos sí tuvieron más campo de acción, aunque muy condicionado financieramente por el Estado, ya que éste último cubría dos terceras partes de sus presupuestos.

Sí hay que reconocer que se pusieron las bases del Servicio Nacional de Lectura como un sistema bibliotecario, aunque imperfecto, en el que se interrelacionaron cuatro elementos: el Servicio Nacional de Lectura, los Centros Provinciales Coordinadores, Bibliotecas Públicas del Estado y Bibliotecas Públicas Municipales (Ayuntamientos), cuya máxima virtud consistió en lograr una cooperación, descentralización y prolongación en el tiempo, con una amplia participación de los poderes locales (municipios y provincias). Pero también hay que indicar que no se planteó la elaboración de una deseable Ley de bibliotecas, exponente de que las bibliotecas públicas son una prioridad nacional, creando bibliotecas en aquellas poblaciones donde no las hay y estableciendo un servicio mínimo aceptable, y aunque en 1952 en una publicación oficial del Ministerio de Información y Turismo<sup>672</sup> se cita como algo inminente, durante todo el franquismo no se llegó a promulgar, aunque sí se legisló dos veces sobre el libro (Ley de Protección del Libro de 1941 y Ley del Libro de 1975), no se incluyeron ni la lectura pública ni las bibliotecas.

En el citado artículo, que aparece sin firma, probablemente escrito por el bibliotecario J.A. Pérez Rioja, se dice que antes de nuestra guerra de liberación era pretencioso hablar de política bibliotecaria, salvo las experiencias de Cataluña y Asturias, y que la verdadera política bibliotecaria española concebida como un servicio público estaba en sus inicios con la puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Lectura y como guinda afirmaba que en España no se había desarrollado antes una política bibliotecaria porque la sociedad no había demandado este servicio a sus gobernantes. Que planteamientos tan diferentes a los que presidieron la política republicana.

Para finalizar dos reflexiones: la primera que el servicio de biblioteca, a nivel territorial, fue un servicio desigual, ya que no hubo una verdadera política bibliotecaria a nivel estatal como se ha podido comprobar a lo largo de la investigación, y en segundo lugar que las conclusiones que se puedan extraer de lo expuesto en materia de práctica profesional no pueden ser extrapolables a todo el territorio, puesto que la mayoría de la documentación consultada procede de las bibliotecas catalanas gestionadas y servidas por personal formado en las técnicas bibliotecarias; de las memorias de los primeros Centros Coordinadores más comprometidos en ofrecer un buen servicio bibliotecario y, por último, de las bibliotecas, que en palabras del siglo XXI fueron premiadas o aspiraban a serlo por sus buenas prácticas. En sentido, esta tesis quiere ser una invitación a futuros estudios a nivel local que nos permitan

---

<sup>672</sup>“El Servicio Nacional del Libro”, *Documenta*, núm. 112, 1952, pp. 2-14

conocer la actividad bibliotecaria, una vez que se ha dibujado el marco jurídico-administrativo a nivel estatal.

## 10. BIBLIOGRAFÍA

**A. de S.** "El mercado internacional del papel y los precios", *Bibliografía Hispánica*, 1942, nº 1, pp. 9-14

**A. de S.** "La prima a la exportación del libro español", *Bibliografía Hispánica* n. 8, 1943, pp. 3-10

**A. de S.** "Los papeles de esparto nacionales y al industria editorial", *Bibliografía hispánica*, núm. 1, 1943, pp. 21-30

**ABELLÁN, Manuel L. y OSKAM, J.** "Función social de la censura eclesiástica: la crítica de libros en la revista *Ecclesia* (1944-1951)", *JILS/CIEL*, 1 (1989), pp. 63-118

**"Actuación de las secciones infantiles y juveniles de las Bibliotecas Populares"**, *Biblioteconomía: boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona*, año 11, Nº. 39, 1954, págs. 2-19

**AINAUD DE LASARTE, J.M.** Los cincuenta años del Día del Libro, Barcelona, Gremio de Editores, 1976

**ALCOBA, A.** Auge y ocaso del Frente de Juventudes, Madrid, San Martín, 2002

**ALSINA, R.** "La biblioteca escolar", *Vida escolar*, n. 33, 1961, p. 33-34

**ALTED VIGIL, A.,** Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española, Madrid : Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1984.

**ALTED VIGIL, A.** De una historia de la cultura a una historia socio-cultural de la España contemporánea, en: RÉMOND, René, Hacer la historia del siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.

**ANDRÉS DE BLAS, J.** "El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras consideraciones", *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, nº 12, 1999, pp. 281-302

**ANDRÉS DE BLAS, J.** "Censura y represión", *Represura*, núm. 3 (2007) <http://www.represura.es>

**ANDRÉS de BLAS, J.** "La Delegación de Estado para Prensa y Propaganda y la censura de libros", revista digital *Represura*, núm. 2 (2007) <http://www.represura.es>

**ANDRÉS, Gabriel.** La batalla del libro en el primer franquismo. Política del libro, censura y traducciones italianas, Madrid, Huerga & Fierro, 2012

**Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales**, Barcelona: Diputación Provincial

**A.O.M.,** "Más de mil quinientas bibliotecas populares han sido repartidas por el Ministerio de Educación", *Revista nacional de educación*, n. 25, 1943.

**ARTIGAS Miguel** El Palacio Provincial de Biblioteca, Archivo y Museo [Publicación periódica]// Revista de Bibliografía Nacional, 1940, pp. 11-14.

**AYUDARTE, Antonio.** "Bibliotecas infantiles", *El faro*, Motril 3 de mayo 1948

**AZAOLA, J.M.** de "Una grave crisis de nuestros mercados exteriores", *El libro español*, nº. 60, 1962, págs. 335-340.

**BALLESTEROS FERNÁNDEZ Ángel** Competencias de las distintas administraciones públicas en materia bibliotecaria, en: I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local, Valencia, Generalitat Valenciana.

**BARCIELA, C.** Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer Franquismo, 1939-1959, Barcelona, Crítica, 2003

**BARCIELA, C.** La España de Franco (1939-1975). Economía. Madrid, Síntesis, 2005

**BEJARANO ROBLES, F.** El problema de los archivos y bibliotecas provinciales y municipales, Boletín de Bibliotecas y Bibliografía. - 1934. - Vol. I. - pp. 165-169.

**BENEYTO, Juan,** Planteamiento del régimen jurídico de Prensa y Propaganda, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1944

**BENZO, M.** "Las tres etapas de la Acción Católica", *Ecclesia*, 1964, pp. 185.

**BERGADÁ GIRONA, L.** *Las celulosas como materia prima, especialmente en la industria del papel* (1940), pp. 549-557

**BERMEJO SÁNCHEZ, B.** "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945)", *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, Nº 4, 1991, págs. 73-96

**BERNAL MARTÍNEZ, I.** "Libros, bibliotecas y propaganda nazi en el primer franquismo: las exposiciones del libro alemán", *Hispana nova*, núm. 7 (2007).

**BETRI, M.L** Leggere, obbedire, combattere: la biblioteche popolari durante il fascismo, Milano, 1991

**Biblioteca Popular "José Acuña"**, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1934

**"Bibliotecas de hospitales en España. La del Hospital Provincial de Madrid"**, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1951, pp. 447-454

**"Bibliotecas en Guinea Española"**, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. - 1951. - 4ª ép., LVII. - pp. 141-143.

**BIELZA de ORY, V.** *Los focos españoles de producción papelera en el pasado: factores de localización.*-- Madrid: Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Española, 1973

**BORQUE LÓPEZ, L.** Bibliotecas, archivos y guerra civil en Asturias, Gijón: Trea, 1997

**BORRÁS PRIM, R."** La política cultural" en *El nuevo estado español 1936-1963*, pp. 609-626

**CABELLO LAPIEDRA, X.** "Indicaciones para fomentar y desarrollar la afición al libro y su producción en España". *Bibliografía General Española e Hispanoamericana*, año III, núm. 2, febr. 1928, pp. 32

**CAL MARTÍNEZ, R.** "Apuntes sobre la actividad de la Dirección General de Propaganda del Franquismo (1945-1951)", *Historia y comunicación social*, Nº 4, 1999, 15-34

**CALLE ITURRINO, E.** Las bibliotecas de prisiones y su importancia social", *El Correo Español. El pueblo Vasco* 20 abril 1941

**CALVO B. y SALABARRÍA R.** "Juan Vicéns, inspector de bibliotecas públicas municipales (1933-1936)" , *Educación y Biblioteca*, 2009, nº 169, pp.. 37-134.

**CAMACHO ESPINO, J.A.** *La biblioteca escolar en España: pasado, presente-- y un modelo para el futuro*, Madrid, Ediciones de la Torre, 2004, pp. 28-32

**CANES GARRIDO, F.** “Los libros de texto de la sección femenina de FET de las JONS”, en *La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal: XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación*, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013, pp. 597-610

**CARABIAS ÁLVARO, M.** *Imágenes de una metáfora circunstancial: la mujer falangista como mujer moderna: (Y. revista para la mujer, 1938-1940)*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003.

**CASCALES, F.** “De re Bibliothecaria: bibliotecas infantiles”, *La voz de Asturias*, 1948

**CENDÁN PAZOS, F.** “Cien años de iniciativas editoriales y librerías en España (1900-2000)”. *De Libros*, nº 13, mayo 2000, p. 44-51

**CENDÁN PAZOS, F.** “Urge la revisión y puesta al día de la Ley de Protección al Libro Español”, *El libro español*, nº. 84, 1964, pp. 565-568

**CENDÁN PAZOS, F.**, *La Feria Nacional del Libro: apuntes para su historia*, Madrid, INLE, 1960

**CENDÁN PAZOS, F.**, *Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933-1986)*, 1987

**CENDÁN PAZOS, F.**, *La Fiesta del libro en España: crónica y miscelánea*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1989

**Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y Biblioteca Pública de la Ciudad de Zaragoza: memoria (octubre 1948-marzo 1950)**, Zaragoza, Librería General, 1951

**Conclusiones aprobadas por la Asamblea del Libro Español celebrada en Madrid del 31 de mayo al 9 de junio de 1944**, Madrid: INLE, 1944

**COT, Nuria.** “Ocho años en la Biblioteca Popular Juvenil de la Santa Cruz”, *Biblioteconomía*

**CRISOL.** “Lectura de cada día: necesitamos bibliotecas infantiles”

“**Cristianización de los medios de comunicación**”, *Ecclesia*, julio 1951

**CUARTERO, A.** El primer grado de cooperación: coordinación de los puestos callejeros para la lectura, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, 1952, año 1, vol. 2. - p. 21-24

**DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L.**, *Imperio de papel*, Madrid, CSIC, 1992, pp. 419-462

**DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. y FIGUEROA, M.** “Los compromisos internacionales de España en materia de cultura”, *Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos)*, nº. 4, 2008

**DEXEUS M.** “Diez años de historia del libro y las bibliotecas en España: 1983-93”, *Boletín de ANABAD*. - 1994. - pp. 149-160.

**DÍAZ BELLO, M.**, “En busca del obrero”, en Miguel Ángel Ruiz Carnicer (coord.), Carmen Frías Corredor (coord.), *Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España*, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, pp. 241-254

**DÍAZ PLAJA, A.** *Bibliotecas populares: la cultura del obrero [Libro]*. - Madrid : [s.n.], 1944.

**DÍAZ-PLAJA, A.** “La Biblioteca Central. IV- Dirección de Bibliotecas Populares: La Biblioteca Juvenil de Santa Cruz”, *Solidaridad Nacional*, 4 oct. 1942

**DÍAZ-PLAJA, A.** “Bibliotecas Infantiles” *Solidaridad Nacional*, 14 mayo 1948.

**DIEGO PÉREZ, C.** “Los libros escolares de lectura extensiva y literaria”. En: *Historia ilustrada del libro escolar en España*, Madrid, FGSR, 1997, pp. 225-238

**Disposiciones normativas de la C.I.P.L.E., Madrid, 1957**

**“El Servicio Nacional del Libro”,** *Documenta*, núm. 112, 1952, pp. 2-14

**ENCISO VIANA, E.** ¡Muchachas!, Madrid, Studium, [1962], pp. 102-104.

**ESCARTÍN CELAYA, P.** Apuntes para la historia de la Acción Católica en España, pp. 4-7.  
[http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=481](http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=481)

**ESCOLAR SOBRINO, H.** El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores [Libro]. - Salamanca : Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

**ESCOLAR SOBRINO H.** La cultura durante la guerra civil española, Madrid,: Alhambra, 1987.

**Estadística de la producción y comercio del libro español. Años 1946-1957**, Madrid, INLE, 1958)

**ESTÉVEZ, M.** “Las clases productoras leen con gran interés las obras de José Antonio: ingente labor de la Sección de Cultura de Educación y Descanso “ 194?,

**ESTIVILL RIUS, A.** “Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005)”, *BiD*, nº16, 2006

**ESTIVILL RIUS, A.** L’Escuela de Bibliotecarias: 1915-1939. Barcelona: Diputación de Barcelona, 1992

**“Estudio sobre el esparto papeler”,** *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, 1942, nº 1, pp. 12-15

**“Exposición del libro español de agricultura”,** *Bibliografía hispánica*, nº 1, mayo-junio, 1942, p.15

**FERNÁNDEZ PRADO E.** La política cultural ¿qué es y para qué sirve , Gijón, Trea, 1991.

**FIGUEIRA, J.,** “Tengamos en cuenta al niño”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas* nº 6, 1952, pp. 19-23

**FONSECA RUIZ, I.** “La lectura pública en España. Pasado, presente y deseable futuro”, *Boletín de ANABA*. - abril-junio de 1977. - 2 : Vol. XXVII. - pp. 3-27.

**FONSECA RUIZ, I.** “La CDU en España”, *Boletín de la ANABAD*, tomo 28, nº 2, 1978, pp. 3-24

**Franco y la cultura: labor del estado español (1939-1947)**, Madrid, Oficina de Información Española, 1947.

**Frente de Juventudes. Delegación Provincial (Barcelona). Servicio de Bibliotecas.** Anuario 1939, 1940 y 1941

**GANDÍA, I.** La doctrina de la Iglesia acerca de la lectura de libros: conferencia pronunciada en la XII Semana de Educación Nacional. *Atenas*, marzo 1944, pp. 73-83

**GARCÍA FERNÁNDEZ Javier** Las bibliotecas y su regulación en la historia de España (1711-1985), en: MUÑOZ MACHADO S. Comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio), Madrid, Iustel, 2008

**GARCÍA MARTÍNEZ, A. T.,** Sistemas bibliotecarios: análisis conceptual y estructural, Gijón : Trea, 2006.

**GARCÍA-EJARQUE L.** Historia de la lectura pública en España , Gijón , Trea, 2000

**GARCÍA-EJARQUE L.** Las bibliotecas municipales en el contexto bibliotecario español, En: I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local. - Valencia : Generalitat Valenciana.

**GARCÍA PADRINO, J.** «Experiencias y proyectos sobre la biblioteca en los centros de E.G.B.: ponencias presentadas al I Simposio Nacional de Literatura Infantil», *El Libro español*, n. 272, 1980, pp. 430-433

**GARCÍA VÁZQUEZ, I.** Estudio de una institución del franquismo: fuentes y metodología para el Frente de Juventudes, TFM, Universidad de Valladolid, 2011

**GAY de MONTELLA, R.** Autarquía: nuevas orientaciones de la economía, 1940

**GERVILLA CASTILLO, E.** “La escuela del nacional-catolicismo: ideología y educación religiosa”, Granada, Impredisur, 1990

**GILI ROIG G.** Bosquejo de una política del libro, Barcelona, Gustavo Gili, 1944

**GIRÓN GARCÍA A.** Las bibliotecas populares de Madrid: ensayo para una planificación de la lectura pública en Madrid capital: memoria, Madrid, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1982.

**GÓMEZ BRAVO, G.** La redención por las letras. La lectura en las prisiones de posguerra. En: MARTÍNEZ MARTIN, J.A. (dir.) Historia de la edición en España (1939-1975), Madrid, Marcial Pons 2015

**GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A. y SAORÍN, T.** La información y las bibliotecas en la cultura de masas [Libro]. - Valencia : Generalitat, 2001.

**GONZÁLEZ CALLEJA, E.** La España de Primo de Rivera: la modernización autoritaria (1923-1930), Madrid, Alianza, 2005

**GONZÁLEZ GARCÉS Miguel** Teoría bibliotecaria: misión de la biblioteca pública provincial, En: Primera Reunión bibliotecaria de la zona noroeste (Santiago de Compostela 1954), 1954

**GUSTAVINO GALLENT G.** Archivos y bibliotecas en el Protectorado de Marruecos, Tetuán : [s.n.], 1952.

**GUTIÉRREZ POCH, M.,** “Control de mercado y concentración empresarial: La Papelera Española, 1902-1936”, *Revista de Historia Industrial*, nº 10, 1996, pp. 183-199

**HERRERO SUÁREZ, H.** Un yugo para los flecha: educación no formal y adoctrinamiento infantil en "Flechas y Pelayos", Lleida, Milenio, 2007

**HUIDROBO Y VIÑAS C.** Concepto y misión de las bibliotecas populares: (divagaciones experimentales de un bibliotecario sentimental), Madrid, 1945.

**HUIDROBO Y VIÑAS C.** “Las bibliotecas populares de Madrid”, *Boletín de Bibliotecas y Bibliografía*. Tomo II, Julio-septiembre 1935.

**IBÁÑEZ MARTÍN J.** Diez años de servicio a la cultura española: 1939-1949, Madrid : Magisterio Español, 1950.

**IBÁÑEZ MARTÍN J.** El sentido político de la cultura en la hora presente: discurso pronunciado..., Madrid : [s.n.], 1942.

**IBÁÑEZ MARTÍN J.,** La política del libro español, Madrid, 1946.

**IBÁÑEZ, E.** No parar hasta conquistar: propaganda y política cultural falangista: el grupo de Escorial, Gijón: Trea, 2011

### III CONGRESO NACIONAL DE ARTES GRAFICAS - BARCELONA 1950

**IGLESIAS MARTÍN, N.** Venerada y poco dichosa biblioteca: nuestra Biblioteca Nacional cumple 300 años, Gijón, Trea, 2012

**JOU i ANDREU, D.** La Biblioteca Popular a Sitges: 50 anys de la biblioteca de Santiago Rusiñol : 1936-1986, Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 1986



**JUNTA DE INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS.**

Catálogo de la Biblioteca Central Circulante, Madrid, 1946

**“La Biblioteca Popular “Francisco Tarafa” de la Excma. Diputación Provincial de Granollers”, 194?**

**“La Feria Nacional del Libro”,** *Bibliografía Hispánica*, núm. 5, mayo 1944, pp. 312-322.

**“La Feria Nacional del Libro”,** *Bibliografía Hispánica*, núm. 6, junio 1944, pp. 417-425

**“La Feria Nacional del Libro, 1945”.** *Bibliografía Hispánica*, núm. 5, mayo 1945, pp. 285-295

**“La Feria Nacional del Libro”,** *Bibliografía hispánica*, 1949, núm. ,p. 4

**“ La Fiesta del Libro en Pamplona: 23 de abril de 1939**, Pamplona

**“La Papelera Española y Guipúzcoa: desarrollo de una industria hacia la autarquía”,** *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1942, nº 2, pp. 6-7

**“Labor de la Sección Femenina en 1940”,** *Y. Revista para la mujer*, febrero 1940

**Las bibliotecas públicas del Estado**, Madrid : Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1991.

**LARRAZ, F.** Una historia transatlántica del libro: relaciones editoriales entre España y América Latina (1936-1950), Gijón, Trea, 2010

**LASSO de la VEGA, J.** La biblioteca y el niño, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1938.

**LASSO de la VEGA, J.** La clasificación decimal, San Sebastián, Editora Internacional, 1942.

**LASSO de la VEGA J.** “Política bibliotecaria”, *Boletín de Bibliotecas y Bibliografía*. - julio-septiembre de 1934. - 1. - pp. 9-16.

**LASSO de la VEGA, J.** *Manual de biblioteconomía*, Madrid, Mayfe, 1952

**LASSO de la VEGA, J.** Patronato de Lecturas para el Marino: memorias redactadas por Don Javier Lasso de la Vega y Jiménez-Placer y Don José González Hontoria, Madrid, 1945

**LAZZARI, G.,** Libri e popolo. Politica della biblioteca pubblica in Italia dal 1861 ad oggi. Liguori, Napoli, 1985

**INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO**, Libro de actas de la Asamblea del Libro Español celebrada en Madrid del 31 de Mayo al 7 de Junio de 1944, Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1945

**“Libros, libros y...¡¡libros!!”,** *Y. Revista para la mujer*, 1940

**LÓPEZ de AGUILERA I.** Cultura y ciudad: manual de política cultural municipal, Gijón, Trea, 2000.

**MANFREDI CANO, D.** El Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, Publicaciones Españolas, 1963.

**MANGADA, A.** “Pasado y futuro del comercio del libro”, *El Libro Español*, junio 1964, p. 240

Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública 1949 [En línea]. -  
<http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani49.pdf>

**MÁRQUEZ CRUZ, G.** “Sociología de la biblioteca pública en España en el proceso de modernización: de los orígenes de la organización bibliotecaria a la burocratización de la lectura (1808-1939)”, *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*. - diciembre de 1988. - nº 4 (12-13). – pp.. 23-55.

**MARTÍNEZ CUESTA, F.J. ALFONSO SÁNCHEZ, J.M.:** “Tardes de enseñanza y parroquia: el adoctrinamiento de las niñas en la España franquista a través de las revistas “Bazar” y “Tin Tan” (1947-1957)”, *El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia*, 4 (2013) pp. 227-253.

**MARTÍNEZ GONZÁLEZ J.,** Sistemas de bibliotecas públicas en España y sus órganos de gestión , *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*. - 1988. - nº 4 (12-13). - pp. 77-103.

**MARTÍNEZ MARTÍN J. A.** Historia de la cultura e historia de la lectura en la historiografía , *Ayer*. - 2003. - Vol.582. - pp.. 284-294.

**MARTÍNEZ MARTÍN J. A.(dir.)** Historia de la edición en España. 1836-1936, Madrid , Marcial Pons, 2001.

**MARTÍNEZ MARTÍN Jesús A.(dir.)** Historia de la edición en España. 1936-1975. - Madrid : Marcial Pons, 2015

**MARTÍNEZ MARTÍN, J. A.** Historia socio-cultural: el tiempo de la historia de la cultura , Jerónimo Zurita. - 2007. - Vol. 82. - pp.. 237-252.

**MARTÍNEZ MARTÍN J. A. , MARTÍNEZ RUS, A. Y SÁNCHEZ, R.** Los patronos del libro: las asociaciones corporativas de editores y libreros , Gijón, Trea, 2004

**MARTÍNEZ MONTALVO E.** Investigación y producción científica en documentación: la obra de Javier Lasso de la Vega [Libro]. - Madrid : Fragua, 2000.

**MARTÍNEZ RUS, A.** “Expolios, hogueras, infiernos. La represión del libro (1936-1951)”, revista digital *Represura*, núm. 8 (2013) <http://www.represura.es>

**MARTÍNEZ RUS, A.** La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951), Gijón, Trea, 2014

**MARTÍNEZ RUS, A.** La política del libro durante la Segunda República: socialización de la lectura , Gijón : Trea, 2003.

**MARTÍNEZ RUS, A.** *La represión cultural: libros destruidos, bibliotecas depuradas y lecturas vigiladas* en AROSTEGUI, J. (coord.), Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2011

**MARTÍNEZ RUS, A.** Las bibliotecas y la lectura: de la biblioteca popular a la biblioteca pública, en: 1936**MARTÍNEZ MARTÍN J. A.** (coord.) , Historia de la edición en España: 1836-1936, Madrid, Marcial Pons, 2001.

**MARTÍNEZ VALLVEY, F.** “Doctrina de la Acción Católica sobre la prensa”, en Gerardo PASTOR RAMOS (coord.): Retos de la sociedad de la información estudios de comunicación en honor de María Teresa Aubach Guiu, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1997, pp. 575-586

**MATAS PASTOR, J.J.** “La prensa no diaria de Acción Católica en la diócesis de Mallorca (1936-1975)”, en Juan Antonio García Galindo, Juan Francisco Gutiérrez Lozano, María Inmaculada Sánchez Alarcón (coord.): La comunicación social durante el franquismo, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 2002, pp. 7001-708

**MATO DÍAZ, A.** “A la cultura por la lectura: las bibliotecas populares”, *AABADOM*, enero-jun. 2004, pp. 34-36

**MATO DÍAZ, A.** “El Centro Coordinador de Bibliotecas: la lectura controlada, En: *Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias: exposición Día del Libro 2009*, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo, 2009

**MATO DÍAZ, A.** “La tradición lectora en España: las bibliotecas populares en Asturias”, *CEE Participación Educativa*, nº extraordinario, 2010, pp. 49-66

**MEANL GABAS, A.** “La producción pastera y papelera en 1951”, *Boletín del Sindicato*, marzo 1952, p. 23

**Memoria de las actividades de la Dirección General de Propaganda**, Madrid: Publicaciones Españolas, 1947

**Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias**, Madrid, Dirección General de Archivos Bibliotecas y Museos.

**MERINO SÁNCHEZ, F.** Memoria de la Biblioteca Pública de Mahón [Publicación periódica] // Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. - 1951. - Vol. 4ª ép. 57. - págs. 171-173.

**“Metropolitanos a los periodistas y escritores católicos”**, en Documentos colectivos del Episcopado español. 1870-1974, Madrid, BAC, 1974, p. 255

**MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A.** *El fracaso de la industrialización autárquica*, En: BARCIELA, C. Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, Barcelona, Crítica, 2003

**MOLERO PINTADO, A.** “Tres momentos clave en la historia del libro escolar: de la dictadura primorriverista a los primeros años del franquismo”. En: CASTIILEJO CAMBRA, E. Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de historia del franquismo, Madrid, UNED, 2008

**MONTERO GARCÍA, F.:** “La ACE en el Franquismo. Una visión de conjunto”, *XX Siglos*, vol. 12, nº 49 (2001), pp. 25-39.

**MONTIEL, I.** “Bibliotecas infantiles, su posible funcionamiento en las bibliotecas alcarreñas”, 1948

**MONTILLA, F.** *Organización de la biblioteca escolar*, Madrid, 1942

**MORENO, J.M.** «Las bibliotecas escolares a nivel de la enseñanza primaria» *Actas y ponencias del II Congreso Nacional de Bibliotecas: (Gerona, 1966)*, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1968

**NAHARRO, F.** “Las publicaciones oficiales. Editora nacional”, en Martínez Martín, J.A. (dir.) *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 219-229

**NAVARO HIGUERA, J.** «La biblioteca escolar en las pequeñas escuelas» *Vida escolar*, n. 113, 1969

**NIÑO MÁ, I.** “El Gabinete de Lectura Santa Teresa de Jesús al servicio de los niños”, *El libro español*, noviembre 1959, pp. 595-598

**Normas relacionadas con el Departamento de Bibliotecas de la Regiduría Central de Cultura**, Madrid [Sección Femenina], 1956

**Nuestra labor realizada por el Sindicato desde su fundación**, *Boletín del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes gráficas*, 1942

**NÚÑEZ CEPEDA, M.** Memoria anual del patronato de Archivos de Navarra, 1940

**ORTEGA Y GASSET, J.,** Misión del bibliotecario, en: Obras completas de José Ortega y Gasser. - Madrid : Alianza, 1983

**PALAU, A.** “Una empresa de gran trascendencia social. El servicio de lecturas para el marino”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, nº 20, junio 1954, pp. 21-24

**PALMA CHAGUACEDA Antonio** Memoria del Centro Coordinador de Bibliotecas de Huelva [Libro]. - Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950.

**PATRONATO DE CULTURA POPULAR. Sección de Bibliotecas**, Memoria de los trabajos realizados desde octubre de 1940 a marzo de 1942, Madrid, 1942

**PEMARTÍN, J.** Ley de protección del libro español : aprobado en Cortes el día 12 de diciembre de 1946 y discurso pronunciado en exposición y defensa de la misma Ley por D. Julián Pemartín, director del Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, 1946

**PEMARTÍN, J.** “Misión y voluntad del INLE”. *Bibliografía Hispánica*, marzo-abril 1942, n.2

**PÉREZ-RIOJA J.A.** Clima espiritual del bibliotecario [Sección del libro]. - Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1954.

**PÉREZ-RIOJA J.A.** El Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria [Publicación periódica] // Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - 1953. - año2 : Vol. 2. - págs. 13-20.

**PÉREZ-RIOJA, J. A.,** La biblioteca en la escuela, Madrid, 1961.

**PÉREZ-RIOJA J. A.** Las bibliotecas viajeras en Soria , *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*. - 1952. - año 1 : Vol.1. - págs. 15-20

**PÉREZ-RIOJA J. A.** Memoria del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Soria. 1949 , [s.l.], Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950.

**PÉREZ-RIOJA J. A.** Moción informativa sobre Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952.

**PÉREZ-RIOJA J. A.** Penetración social del concepto "biblioteca", Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1954.

**PRAT SEDEÑO J.** "La lectura en el contexto de la historia socio-cultural. Métodos y fuentes", *Documentación de las Ciencias de la Información*. - 2003. - 26. - pp. 155-163.

**PRIMO de RIVERA, P.** Recuerdos de una vida [en línea]  
<http://www.maalla.es/Libros/Recuerdos%20de%20una%20Vida.pdf>

**PRIETO ÁLVAREZ-VALDÉS , C.,** Aproximación a la historia del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias , en: I Congreso de Bibliografía Asturiana. - 1989.

**PRIETO de PEDRO J.,** El sistema español de bibliotecas, en: MUÑOZ MACHADO Santiago , Comentarios a la Ley del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio), Madrid, Iustel, 2008

**"Proposición de Ley"** , *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, núm. 145 y 154, 1946

**PUELLES BENÍTEZ, M.** "La política del libro escolar en España (1813-1939). En: Historia ilustrada del libro escolar en España: del Antiguo Régimen a la Segunda República". Madrid: F.G.S.R, 1997

**RABAZAS ROMERO, T. y RAMOS ZAMORA, S.** "La construcción del género en el franquismo y los discursos educativos de la Sección Femenina", *Encounters on Education*, vol. 7 (2006), pp. 43-70.

**Reglamento de la Feria Nacional del Libro (1944) (28 d mayo-6 de junio).** Madrid, INLE, 1944

**Reglamentos e instrucciones administrativas,** Diputación Foral de Navarra, 1970

**"Reunión de directores de Centros Coordinadores de Bibliotecas"**, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*. - 1952. - 1 : Vol. año 1. - pp. 12-14.

**RIBAS. E.** "La Biblioteca de la Caja de Ahorros de Sabadell. Bibliotecas escolares circulantes", *Biblioteconomía*, Nº 11, 1946, pp. 253-256.

**RICO BOQUETE, E.** "Autarquía e industria de la celulosa en España en el periodo 1939-1956", en: LANERO TÁBOAS, D.; FREIRE, D. (coords.) *Agriculturas e innovación tecnológica en la Península Ibérica: Portugal y España en perspectiva comparada (1946 – 1986)*, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2011 , pp. 167-190.

**RIDRUEJO, D.** Casi unas memorias, Barcelona: Península, 2007

**RINCÓN, F.** "Mujeres azules en la Sección Femenina", *Métodos de información*, (1), 2010, pp. 59-81

**RODRIGO ECHALECU, A. M.** “La política bibliotecaria de posguerra: 1939-1951”, en: Martínez Martín, J.A. (dir.) *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 143-166

**RODRIGO ECHALECU, A. M.** “Las bibliotecas públicas durante el primer franquismo: entre la continuidad y la ruptura”, TFM, UCM, Madrid, 2009.

**RODRIGO ECHALECU, A. M.** “Los organismos del libro y el corporativismo editorial. El Instituto Nacional del Libro Español”, en Martínez Martín, J.A. (dir.) *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 97-119

**RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, R.,** *Las bibliotecas y la lectura en Asturias: una aproximación histórica*, I Congreso de Bibliografía Asturiana, 1989.

**ROMERO DE TERREROS CASTILLA, J. M. y JEVENOIS ARCILLONA, P. de,** *La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1946-1996*, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1996

**RUIZ BAUTISTA, E.** “La Editora Nacional (1941-1945)”, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, nº 13, 2005, págs. 99-120.

**RUIZ BAUTISTA E.,** *Política cultural y propaganda en el primer franquismo (1939-1945)*, Alcalá de Henares, 2003

**RUIZ BAUTISTA E.** *Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo (1939-1945)*, Gijón : Trea, 2005

**RUIZ BAUTISTA, E.** (coord.), *Tiempos de censura*, Gijón, Trea, 2008

**RUIZ CABRIADA A.,** *Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*, Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958.

**RUIZ CARNICER, M.A.** “La cultura del poder. Propaganda en la alta manera” en: GRACIA, J. y RUIZ CARNICER, M.A. *La España de Franco (1939-1975): cultura y vida cotidiana*, Madrid, Síntesis, 2004

**SÁNCHEZ GARCÍA, R.** “El autor en España, 1900-1936”, Madrid, Fundamentos, 2008, pp. 132-150

**SANIGER MARTÍNEZ, N.** Los Centros Coordinadores de Bibliotecas y el sistema bibliotecario andaluz, *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.*, dic. 1997, nº 49, pp. 59-64.

**SANTOS ALCOCER** “Hacia la autarquía nacional en la fabricación de papel”, <sup>1</sup> *Boletín del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas*, nº

**SARRIÁ RUEDA, A.** “Bibliotecas Públicas en España”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.* - enero-marzo de 1956. - Vol. XXXVI, pp.. 176-182.

**Sección Femenina de F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.,** *Labor realizada en 1950*, Madrid, 1951

**SERNA J. y PONS, A.** *La historia cultural: autores, obras, lugares*, Tres Cantos, Akal, 2005

**SEVILLANO CALERO, F.** Propaganda y dirigismo cultural en los inicios del Nuevo Estado, *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, nº. 1, 2002

**SINTÉS OBRADOR, F.** “23 de abril de 1952 Fiesta del Libro en la Biblioteca Nacional. Discurso del Director General de Archivos y Bibliotecas”, *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*, año 1, n. 2, 1952, p. 9-10.

**SCOTTO di LUZIO, A.,** *L' appropriazione imperfetta: editori, biblioteche e libri per ragazzi durante il fascismo*, Bologna, Il Mulino, 1996

**SOTO ARRANZ, R.**, Historia del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de León, León, Instituto Leonés de Cultura, 1986.

**STIEG, Margaret F.** Public libraries in Nazi Germany, Tuscaloosa ; London, University of Alabama Press, cop. 1992

**TIANA FERRER, A.** "El libro escolar como instrumento didáctico". En: *Historia ilustrada del libro escolar en España*. T.II, pp. 150-155

**TOLSADA, F.** Las Bibliotecas Populares y Casas de Cultura de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. - 1951. - Vol. LVII. - págs. 133-140.

**TOLSADA, F.** Mapa bibliotecario del Servicio Nacional de Lectura, Madrid , Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1950.

**TORREBLANCA LÓPEZ A.** El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1858-2008), Madrid , Ministerio de Cultura, 2009.

**TORRES SANTO DOMINGO, M.** La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, Tesi, UCM, 2011

**TORRES SANTO DOMINGO, M.** "Biblioteca Histórica: Archivo BUC. Fondo Lasso de la Vega (1939-1942): guía provisional (septiembre 2011)", *Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca Histórica*; nº 16, 11.

**TORTAJADA A.** "Las bibliotecas en España: su movimiento y estado actual (1939-1949)", *Revista de Bibliografía Nacional*. - 1950. - 40. - pp. 11-14.

**VALLE FERNÁNDEZ, R.** La estadística al servicio de las bibliotecas española [Publicación periódica] // Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - 1955. - 37. - págs. 12-17.

**VELARDE FUENTES, J.** "Consideraciones sobre algunas actividades monopolísticas en el mercado papelerero español", *Revista de Economía Política*, nº 14, sept.-dic. 1955, pp. 29-125

**VELASCO MURVIERO, C.** El pensamiento autárquico español como directriz de la política económica (1936-1951). Madrid, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pp. 157-169

**VERDERA, F.** Algunas claves para estudiar la revista *Ecclesia* entre 1941 y 1954, *Anuario de historia de la Iglesia*, nº. 10, 2001, pp. 95-100

**VILLALPANDO MARTÍNEZ M."** Archivo Histórico y Biblioteca Pública de Segovia", *Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas*. - 1953. - Vol. XIII. - págs. 11-13.

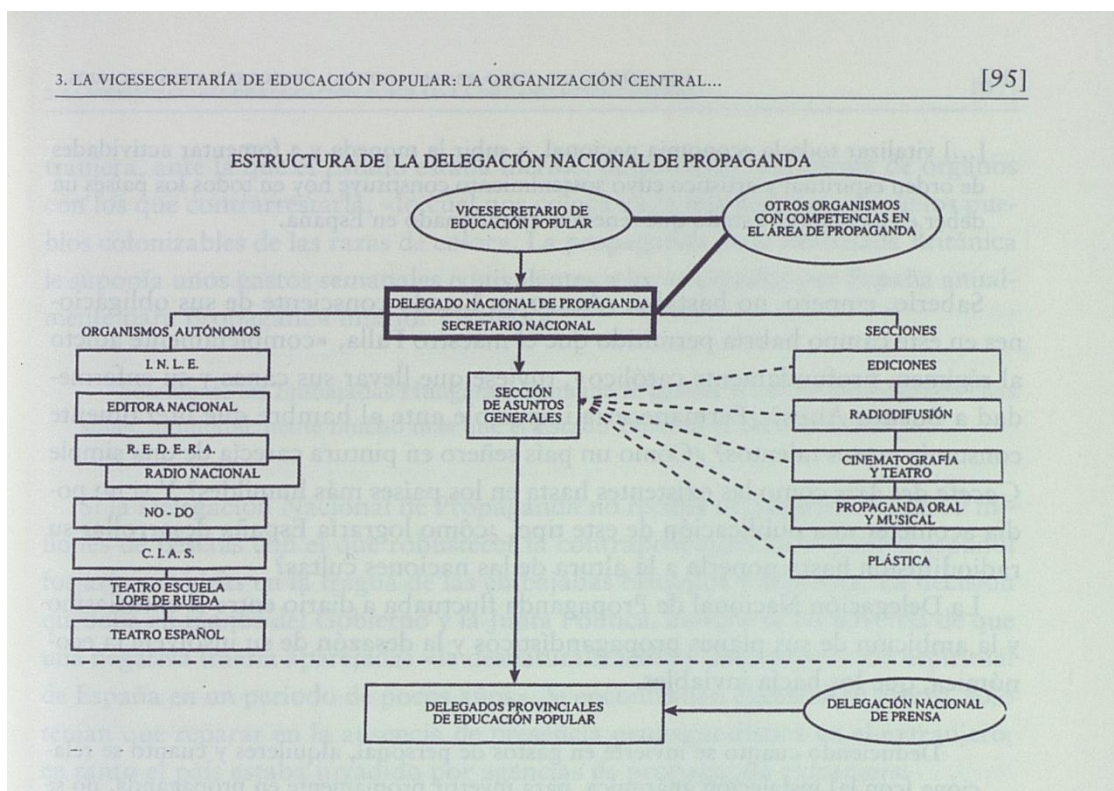
**VIÑA, A.** Las bibliotecas de Barcelona, Barcelona, Gremio de Editores y Libreros, 1951.

**VIÑAO FRAGO, A.** A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-1885) , en: Clases populares, cultura, educación: siglo XIX y XX/ aut. GUREÑA, J.L. y TIANA FERRER, A. (dirs.), Madrid, Casa de Velázquez, 1990.

**XIMÉNEZ EMBUN Y CANTÍN, L.** *La organización bibliotecaria provincial zaragozana*, Zaragoza, Librería General, 1959, pp. 149-155

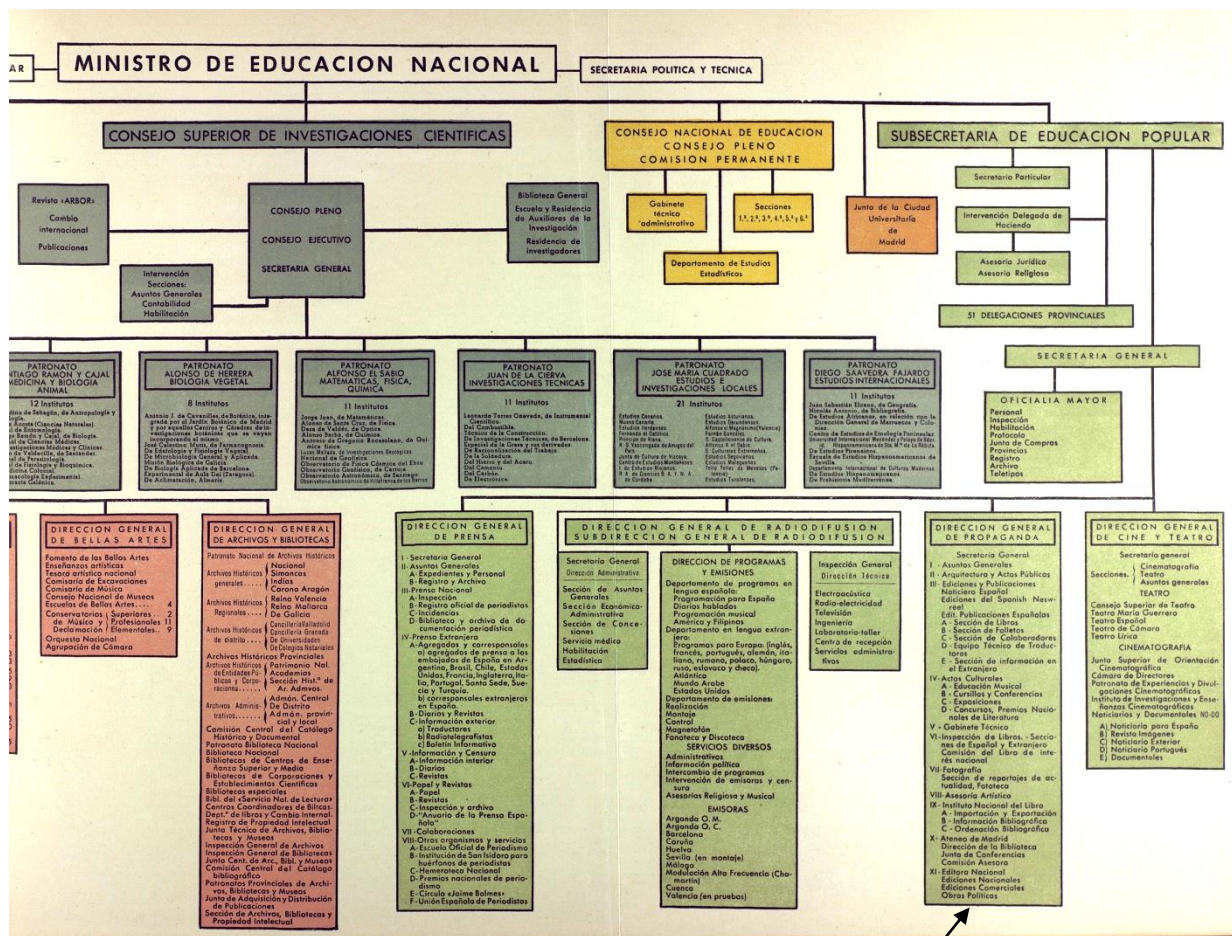
## 11. ANEXOS

### 1. Organigramas de la Delegación Nacional de Propaganda en 1941 y 1945



Elaborado por B. Bermejo Sánchez "La Vicesecretaría de Educación Popular", p. 77 y recogido por Ruiz Bautista en "Los señores del libro", p. 95.

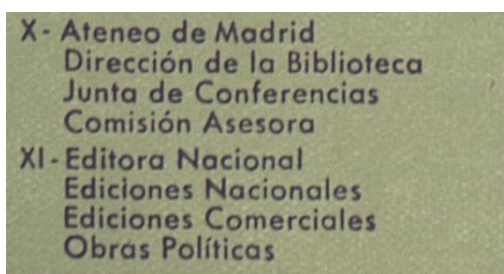
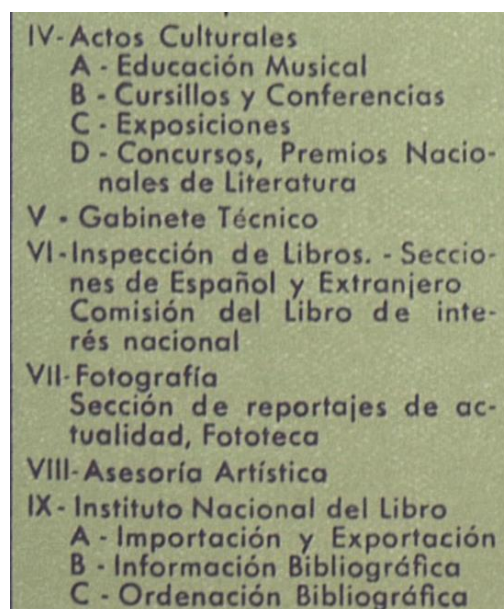
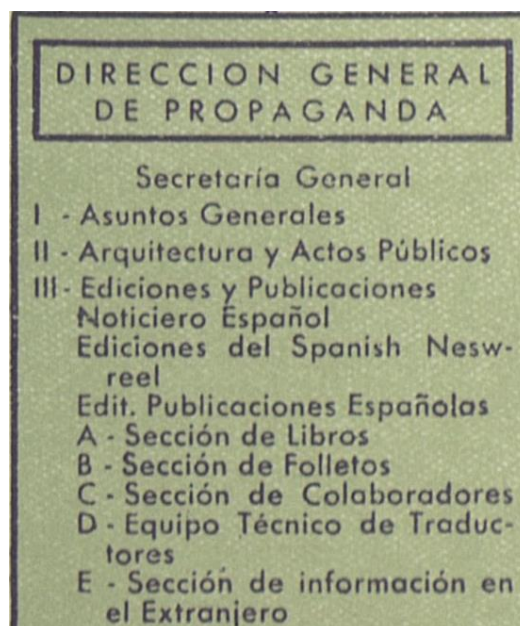




Organigrama del Ministerio de Educación en 1945 con la nueva Subsecretaría de Educación Popular.

Fuente: J. Ibáñez Martín, "Diez años de servicios a la cultura española, 1939-1949", 1950.





Se puede observar comparando ambos organigramas la pérdida de competencias de la Dirección General de Propaganda.

## 2. Lote de libros para adultos seleccionados por la JIAL

CENTRAL DE BIBLIOTECAS POPULARES

359

### LOTE DE LA J.I.A.L.

#### RELACIÓN DE LOS LIBROS QUE FORMAN EL LOTE DE LA BIBLIOTECA DE ADULTOS

##### 0. Obras generales :

CONWAY : *Buzón de preguntas.*  
*Diccionario Enciclopédico abreviado.* Tres vols.  
LASSO DE LA VEGA. — *Reglas para la formación y redacción de los catálogos y diccionarios.*

##### 1. Filosofía :

BALMES : *El criterio.*

##### 2. Religión :

LUÍS DE LEÓN : *De los nombres de Cristo.* Tres vols.  
PAPINI : *Historia de Cristo.*  
URBEL : *Itinerario litúrgico.*

##### 3. Ciencias sociales. Folklore :

BELLÓN : *Régimen de arrendamientos rústicos.*  
IBÁÑEZ DE IBERO : *Historia de la marina de guerra.*  
D'IVORI : *Vestidos típicos de España.*  
PARIS : *El Estado y la economía.*  
PRIMO DE RIVERA : *Antología.* (Breviarios del pensamiento español.)  
VÁZQUEZ DE MELLA : *Antología.* (Breviarios del pensamiento español.)

##### 4. Filología :

Academia Española : *Gramática de la lengua.*  
ASÍN : *Historia de la lengua española.*  
MIRANDA PODADERA : *Curso de redacción.*  
MIRANDA PODADERA : *Gramática.*

##### 5. Ciencias puras :

ALVARADO : *Curso de Historia natural.*  
BALTZER : *Álgebra.*  
BALTZER : *Aritmética universal.*  
BALTZER : *Geometría.*  
CASTELFRANCHI : *Física moderna.*  
ESTALELLA : *Física.*  
FABRE : *La vida de los insectos.*  
GARCÍA MERCET : *Los parásitos de los insectos perjudiciales.*  
GRAETZ : *La electricidad y sus aplicaciones.*  
POHL : *Electricidad.*

##### 6. Ciencias aplicadas :

AROUSE : *Tierra de motos.*  
BRUNET : *Enfermedades de los vinos.*

BUCHHEISTER : *Recetario de droguería.*  
 CAILLAS : *Enfermedades de las abejas.*  
 CASTELLÓ : *Catecismo del avicultor.*  
 DARBY : *El libro del mecánico práctico.*  
 GRACÓN : *Las erupciones de la piel.*  
 ROSSELL : *Alimentación de los animales.*  
 LLOVET : *Las industrias de la leche.*  
 MIRABET : *Conducciones de agua.*  
 NAGORE : *Agricultura.*  
 NAGORE : *El trigo y su selección.*  
 NÁJERA : *Simulación de la enfermedad.*  
 PRADOS : *Dolor de cabeza.*  
 PRIEGO : *Olivicultura.*  
 SUÑER : *La salud del niño.*

7. Bellas Artes :

CAMPS : *Arquitectura califal.*

8. Literatura :

BAROJA : *Las inquietudes de Shanti-Andia.* →  
*Calila y Dimna.*  
 CERVANTES : *La Galatea.* Tres vols.  
 DELLY : *Entre dos almas.*  
 DELLY : *Esclava o reina.*  
 ESPRONCEDA : *Poesías y el estudiante de Salamanca.*  
 FERNÁNDEZ FLÓREZ : *El secreto de Barba Azul.*  
 GARCÍA GUTIÉRREZ : *Venganza catalana.*  
 GRACIÁN : *El héroe.*  
 GOETHE : *Hermann.*  
 GÓNGORA : *Dolor y esplendor de España.*  
 HARTZEMBUSCH : *Los amantes de Teruel.*  
 HURTADO : *Palencia. Antología de la literatura española.*  
*Libros de caballerías.*  
 LOMBA Y PEDRAJA : *Teatro anterior a Lope de Vega.*  
 (LOTI, Pseud.) VIAUD : *Divagaciones de un desterrado.*  
 MACHADO : *Poesías.*  
 MARLITT : *Isabel la de los cabellos de oro.*  
 MARQUERIE : *Don Laureano y sus seis aventuras.*  
 MIRÓ : *Las cerezas del cementerio.*  
 PFLAND : *Literatura española de la Edad de Oro.*  
 RUIZ DE ALARCÓN : *La verdad sospechosa.*  
*Teatro romántico.*  
 VEGA, LOPE DE : *Pastores de Belén.* Dos vols.

9. Geografía. Historia. Biografía :

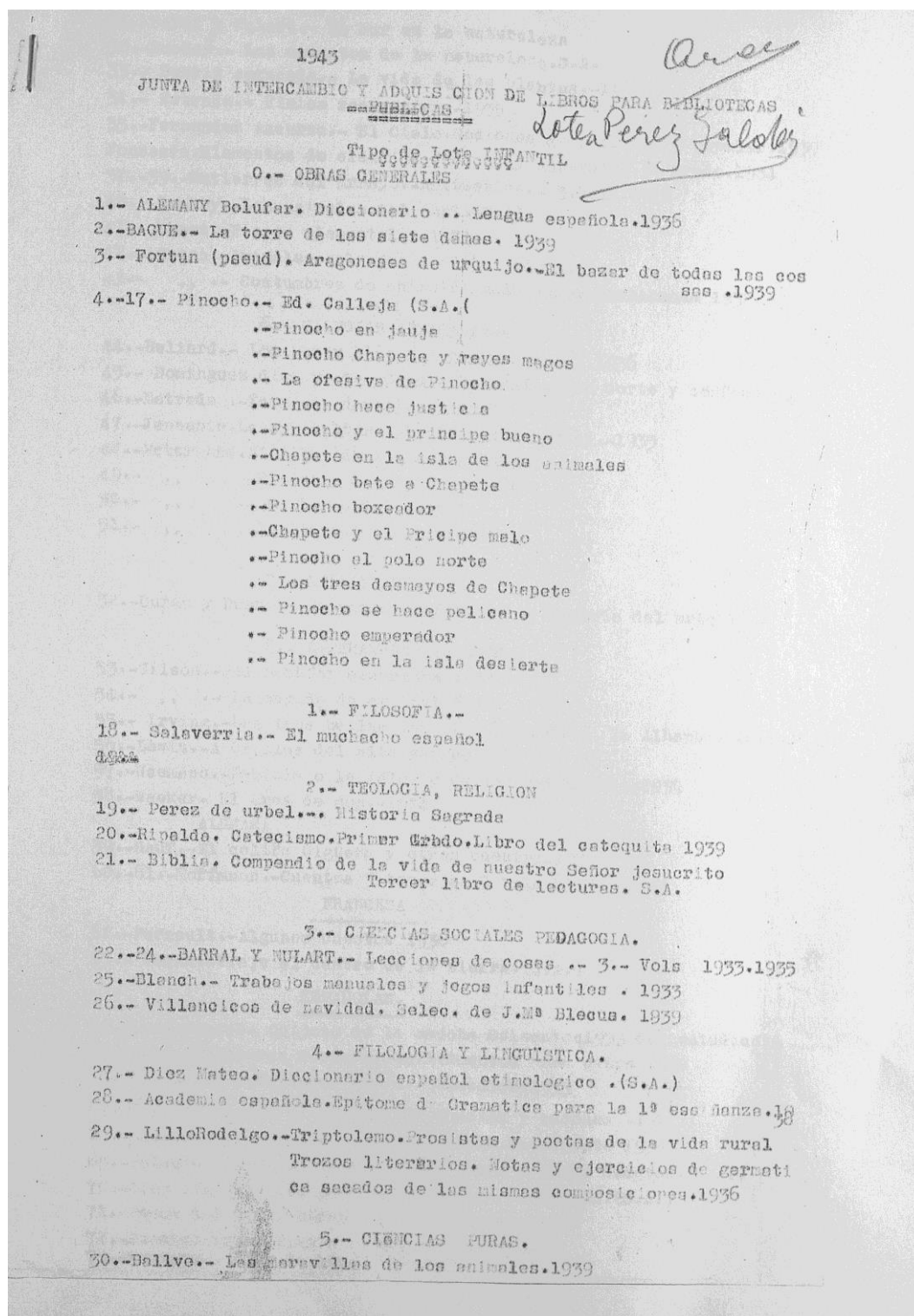
AGUADO : *Curso de Historia.* Tres vols.  
 ARTIGAS : *Vida y obra de Menéndez y Pelayo.*  
 ARRARÁS : *Franco.*  
 BANCIELLA : *Rutas de Imperio.*  
 CARDENAL : *La historia en mapas.*

CENTRAL DE BIBLIOTECAS POPULARES

361

CONTRERAS : *Orígenes del Imperio.*  
COSSÍO : *Manolo.*  
FERRANDIS : *Historia general de la cultura.*  
GARCÍA VILLADA : *El destino de España.*  
GONZÁLEZ PALENCIA : *La España del siglo de oro.*  
GONZÁLEZ PALENCIA : *Guía de la España Imperial.*  
*Historiadores de los siglos XVI y XVII.*  
LUMMIS : *Los exploradores españoles del siglo XVI.*  
MELO : *Guerras de Cataluña.* Dos vols.  
MENÉNDEZ PIDAL : *Idea imperial de Carlos V.*  
PEMÁN : *Cisneros.*  
PEREYRA : *Breve Historia de América.*  
PÉREZ BUSTAMANTE : *Historia Universal.*  
PÉREZ BUSTAMANTE : *Historia de España.*  
SARDINHA : *La alianza peninsular.*  
VALLVÉ : *Barcelona.*  
WALSH : *Isabel de España.*  
YELA UTRILLA : *Historia de la civilización española.*

## 2. Lote de libros infantil seleccionados por la JIAL





- 31.-Beral y Mulart.- El mar en la naturaleza
- 32.-Bucley.- Los encantos de la naturaleza.S.A.
- 33.- Dantin cereceda.- La vida de las plantas.-1936
- 34.- Estrada.- Fisica recreativa.-1935
- 35.-Fernandez Ascarza.- El Cielo.Nociones de Astronomia popular.1939
- Fonseere.Elementos de ciencias fisicas y naturales.3º grado.1934
- 37.-39.-Gutierrez del Arroyo.-Aritmetica.- 3.Vols.1916
- 40.- Lambry.-Los animales tal cual.-S.A}
- 41.- Manet.-Fisica elemental.- 1934
- 42.- Seton.-Animales salvajes en libertad. S.A)
- 43.- , , -- Costumbres de animales salvajes en libertad. 1932

#### 6.- CIENCIAS APLICADAS.-

- 44.-Beliard.- Las maravillas del cuerpo humano.1936
- 45.- Dominguez diaz De la Cuesta.Dacra.Tratado corte y confeccion.1934
- 46.-Estrada .-Economia domestica. 1935
- 47.-Jennepin.La agricultura al alcance de todos.-1935
- 48.-Peterham.El libro de los alimentos
- 49.- , , --El libro de los transportes
- 50.- , , -- El libro del vestido
- 51.- , , --El libro de la vivienda

#### 7.- BELLAS ARTES.

- 52.-Duran y Duran.- Resunmen grafico de la historia del arte 1937

#### 8.- LITERATURA (INGLESA)

- 53.-Gilson.- El nenifar escarlata.1932
- 54.- , , -- La pagoda de cristal.(S.A.)
- 55.- Irving.-Las tres bellas infantas.Leyenda de la Alhambra.(S.A.)
- 56.-Lewis.-A Orillas del alto yangce.1935
- 57.-Wsemann.-Fabiola o la Iglesia de las catacumbas.1939
- 58.-Waeker. El arca de noe.-1934

#### ALEMANA

- 59.-Hauf.-El califa Cigüena y otros cuentos.1939
- 60.-61.-Hoffmann.-Cuentos 9 tomos en 2 vols.1922.y 1940

#### FRANCESA

- 62.-Perrault.-Algunos cuentos 1936
- 63.- Verne.-Viaje al centro de la tierra.(S.A.)

#### ESPAÑOLAS.

- 64.-CervantesD. Quijote de la mancha Seleccion1933 del estudiante
- 65.-ColomaLecturas recreativas.V.Cuentos para niños 1940
- 66.-Fabulas y cuentos en verso. Seleccion.1933
- 67.-Gabinia.- Gopal el peñobraham.Cuentos y escenas .1937
- 68.-Novela.La picaresca.Seleccion.B.Estudiante 1935
- 69.-Palacio Valdes.El pajarito en la nieve y otros cuentos.(S.A.)
- 70.-Cien Las mejores poesias.Seleccion M. Pelayo.(S.A.)
- 71.-Poema del Cid y otras gestas heroicas.-1923
- 72.-Sanchez Tena. Tintin Peluchin. Cuento.1932
- 73.-Testore.- Flor de loto. Narracion india.1939

